

FACULTAD DE DERECHO

Escuela Académico Profesional de Derecho

Tesis

**El derecho de defensa del imputado en los
casos de conclusión anticipada en el Módulo
de Justicia de Paucarpata, Arequipa,
2019-2020**

Daniela Magda Carrillo Rivera

Para optar el Título Profesional de Abogada

Arequipa, 2023

Repositorio Institucional Continental
Tesis digital



Esta obra está bajo una Licencia "Creative Commons Atribución 4.0 Internacional" .

INFORME DE CONFORMIDAD DE ORIGINALIDAD DE TESIS

A : Dra. Eliana Mory Arciniega
Decano de la Facultad de Derecho

DE : Dr. Roseleyev Ramos Reymundo
Asesor de tesis

ASUNTO : Remito resultado de evaluación de originalidad de tesis

FECHA : 6 de Julio de 2023

Con sumo agrado me dirijo a vuestro despacho para saludarlo y en vista de haber sido designado asesor de la tesis titulada: "EL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO EN LOS CASOS DE CONCLUSIÓN ANTICIPADA EN EL MÓDULO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA, AREQUIPA. 2019-2020 ", perteneciente al/la/los/las estudiante(s) Daniela Magda Carrillo Rivera, de la E.A.P. de Derecho; se procedió con la carga del documento a la plataforma "Turnitin" y se realizó la verificación completa de las coincidencias resaltadas por el software dando por resultado 20 % de similitud (informe adjunto) sin encontrarse hallazgos relacionados a plagio. Se utilizaron los siguientes filtros:

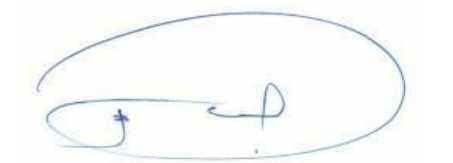
- Filtro de exclusión de bibliografía SI ☒ NO ☐
- Filtro de exclusión de grupos de palabras menores SI ☒ NO ☐
(Nº de palabras excluidas: 12)
- Exclusión de fuente por trabajo anterior del mismo estudiante SI ☐ NO ☒

En consecuencia, se determina que la tesis constituye un documento original al presentar similitud de otros autores (citas) por debajo del porcentaje establecido por la Universidad.

Recae toda responsabilidad del contenido de la tesis sobre el autor y asesor, en concordancia a los principios de legalidad, presunción de veracidad y simplicidad, expresados en el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI y en la Directiva 003-2016-R/UC.

Esperando la atención a la presente, me despido sin otro particular y sea propicia la ocasión para renovar las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,



Asesor de tesis


DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD

Yo, Daniela Magda Carrillo Rivera, identificado(a) con Documento Nacional de Identidad No. 70477292, de la E.A.P. de Derecho de la Facultad de Derecho la Universidad Continental, declaro bajo juramento lo siguiente:

1. La tesis titulada: "EL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO EN LOS CASOS DE CONCLUSIÓN ANTICIPADA EN EL MÓDULO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA, AREQUIPA, 2019-2020", es de mi autoría, la misma que presento para optar el Título Profesional de Abogado.
2. La tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, para la cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas, por lo que no atenta contra derechos de terceros.
3. La tesis es original e inédita, y no ha sido realizado, desarrollado o publicado, parcial ni totalmente, por terceras personas naturales o jurídicas. No incurre en autoplagio; es decir, no fue publicado ni presentado de manera previa para conseguir algún grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados son reales, pues no son falsos, duplicados, ni copiados, por consiguiente, constituyen un aporte significativo para la realidad estudiada.

De identificarse fraude, falsificación de datos, plagio, información sin cita de autores, uso ilegal de información ajena, asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a las acciones legales pertinentes.

06 de julio del 2023.



Daniela Magda Carrillo Rivera

DNI. No. 70477292

Cc.
Facultad
Oficina de Grados y Títulos
Interesado(a)

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%

INDICE DE SIMILITUD

20%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

9%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net	Fuente de Internet	5%
2	repositorio.uancv.edu.pe	Fuente de Internet	2%
3	idoc.pub	Fuente de Internet	2%
4	repositorio.ucv.edu.pe	Fuente de Internet	1%
5	repositorio.usmp.edu.pe	Fuente de Internet	1%
6	qdoc.tips	Fuente de Internet	1%
7	repositorio.utp.edu.pe	Fuente de Internet	<1%
8	www.repositorio.unasam.edu.pe	Fuente de Internet	<1%
9	repositorio.uladech.edu.pe	Fuente de Internet	<1%

10	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	<1 %
11	repositorio.unfv.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
12	Submitted to Universidad Continental Trabajo del estudiante	<1 %
13	repositorio.ucp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
14	Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote Trabajo del estudiante	<1 %
15	repositorio.upsjb.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
16	repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
17	Submitted to Universidad Católica de Santa María Trabajo del estudiante	<1 %
18	repositorio.upp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
19	dspace.unitru.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
20	www.researchgate.net Fuente de Internet	<1 %

21	repositorio.upao.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
22	moam.info Fuente de Internet	<1 %
23	dspace.uniandes.edu.ec Fuente de Internet	<1 %
24	repositorio.unjbg.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
25	www.powershow.com Fuente de Internet	<1 %
26	repositorio.udch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
27	es.scribd.com Fuente de Internet	<1 %
28	Submitted to Universidad Alas Peruanas Trabajo del estudiante	<1 %
29	repositorio.uncp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
30	Submitted to Universidad Católica San Pablo Trabajo del estudiante	<1 %
31	revistas.pj.gob.pe Fuente de Internet	<1 %
32	repositorio.unac.edu.pe Fuente de Internet	<1 %

33	www.slideshare.net Fuente de Internet	<1 %
34	repositorio.unsch.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
35	revistas.unasam.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
36	Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru Trabajo del estudiante	<1 %
37	www.ceif.galeon.com Fuente de Internet	<1 %
38	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	<1 %
39	npr.org Fuente de Internet	<1 %
40	repositorio.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
41	repositorio.uap.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
42	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 33 (2017)", Brill, 2018 Publicación	<1 %
43	Submitted to Universidad Tecnologica del Peru	<1 %

44

Submitted to Universidad de San Martín de Porres

Trabajo del estudiante

<1 %

45

www.scribd.com

Fuente de Internet

<1 %

46

cybertesis.unmsm.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

47

www.dspace.uce.edu.ec

Fuente de Internet

<1 %

48

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 31 (2015)", Brill, 2017

Publicación

<1 %

49

repositorio.ulc.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

50

www.publicacoesacademicas.uniceub.br

Fuente de Internet

<1 %

51

repositorio.urp.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

52

creativecommons.org

Fuente de Internet

<1 %

53

repositorio.udh.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

54

Fuente de Internet

<1 %

55

www.refworld.org.es

Fuente de Internet

<1 %

56

Submitted to Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga

Trabajo del estudiante

<1 %

57

Submitted to Universidad Nacional de Trujillo

Trabajo del estudiante

<1 %

58

doctorajuliasaenz.com

Fuente de Internet

<1 %

59

repository.usta.edu.co

Fuente de Internet

<1 %

60

www.dateas.com

Fuente de Internet

<1 %

61

anconconsultores.wixsite.com

Fuente de Internet

<1 %

62

jalayo.blogspot.com

Fuente de Internet

<1 %

63

Submitted to Universidad Nacional Santiago
Antunez de Mayolo

Trabajo del estudiante

<1 %

64

repositorio.continental.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

65	repositorio.uss.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
66	tesis.ucsm.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
67	Submitted to usmp Trabajo del estudiante	<1 %
68	www.repositorio.upla.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
69	Submitted to Universidad Catolica de Trujillo Trabajo del estudiante	<1 %
70	doku.pub Fuente de Internet	<1 %
71	lpderecho.pe Fuente de Internet	<1 %
72	repositorio.unc.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
73	www.hrw.org Fuente de Internet	<1 %
74	repositorio.unp.edu.pe Fuente de Internet	<1 %
75	www.acceso.uct.cl Fuente de Internet	<1 %

Excluir citas

Apagado

Excluir coincidencias < 12 words

Excluir bibliografía

Activo



FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL

DE DERECHO

TESIS

**EL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO EN LOS CASOS DE
CONCLUSIÓN ANTICIPADA EN EL MÓDULO DE JUSTICIA DE
PAUCARPATA, AREQUIPA, 2019-2020**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

ABOGADA

PRESENTADA POR

BACH. DANIELA MAGDA CARRILLO RIVERA

AREQUIPA, PERÚ

2023

Asesor

Dr. Roseleyev Ramos Reymundo

Dedicatoria

Dedico este trabajo a una de las personas más importantes de mi vida, Teresa López Chávez, mi ángel que prevalece en mi corazón, por sus consejos que me han ayudado en mi vida y crecimiento, se lo orgullosa que estas, y sé que me acompañas en cada paso del camino.

Agradecimientos

Primero quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones concedidas a lo largo de estos años y permitirme concluir un sueño más.

A mis padres Oscar y Danitza, quienes han sido mi guía y el camino para poder llegar a este punto de mi carrera, por su ejemplo, dedicación y palabras de aliento, pues nunca se rindieron para que yo tampoco lo haga aun cuando todo se complicaba, y por enseñarme a valorar los resultados de un gran esfuerzo.

A mis hermanas, que siempre me han mostrado un amor profundo e inquebrantable a lo largo mi vida.

Y a todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el desarrollo de esta tesis, que definitivamente no hubiese podido ser realidad sin ustedes, gracias.

Índice

Asesor.....	2
Dedicatoria	3
Agradecimientos	4
Índice.....	5
Índice de figuras	9
Abreviaturas	11
Resumen.....	12
Abstract	13
Introducción.....	14
Capítulo I.....	17
Planteamiento del Estudio	17
1.1. Planteamiento del Problema	17
1.2. Formulación del Problema	19
1.2.1. Problema general	19
1.2.2. Problemas específicos	19
1.3. Objetivos	20
1.3.1. Objetivo general	20
1.3.2. Objetivos específicos	20
1.4. Justificación de la Investigación.....	20
1.4.1. Justificación teórica	20
1.4.2. Justificación práctica.....	21
1.4.3. Justificación metodológica.....	21
1.4.4. Justificación de relevancia social	21
1.5. Importancia.....	22
1.6. Limitaciones de la investigación	22
Capítulo II.....	24
Marco teórico.....	24
2.1. Antecedentes de la Investigación.....	24
2.1.1. Antecedentes internacionales	24
2.1.2. Antecedentes nacionales	25
2.2. Bases Teóricas Conceptuales	28
2.2.1. Derecho de defensa.....	28
2.2.1.5. El contenido del derecho de defensa	36
2.2.1.5.1. Derecho a contar con un abogado defensor	36

2.2.1.5.2.	Derecho de contradicción	37
2.2.1.5.3.	Derecho al plazo razonable para la preparación	38
2.2.1.5.4.	La imputación necesaria	38
2.2.1.6.	El derecho de defensa en relación con las partes procesales	39
2.2.1.6.1.	El imputado	39
2.2.1.6.2.	El abogado defensor	40
2.2.1.6.3.	La víctima en el nuevo sistema procesal penal	40
2.2.1.7.	El Estado frente a la garantía del derecho a la defensa	41
2.2.1.8.	Formas de control del derecho a la defensa	42
2.2.2.	Conclusión anticipada	44
2.2.3.	La conclusión anticipada en relación con el derecho de defensa	50
2.3.	Definición de Términos Básicos	52
2.3.1.	Principio de igualdad de armas	52
2.3.2.	Derecho de defensa	52
2.3.3.	Proceso penal	53
2.3.4.	Conclusión anticipada	53
Capítulo III	55
Metodología	55
3.1.	Tipo de Investigación	55
3.1.1.	Según el enfoque de la investigación	55
3.1.2.	Según el propósito intrínseco de la investigación	55
3.1.3.	Según el propósito extrínseco de la investigación	55
3.1.4.	Según su aproximación a las fuentes de información	56
3.1.5.	Según el método de investigación	56
3.2.	Muestra	56
3.2.2.	Criterios de inclusión y exclusión de la muestra	58
3.3.	Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	58
3.3.1.	Técnicas de recolección de datos	58
3.3.2.	Instrumentos de recolección de datos	59
3.3.3.	Proceso de recolección de datos	59
3.4.	Procesamiento para el análisis de datos	60
3.5.	Aspectos Éticos	60
3.5.1.	Integridad científica	60
3.5.2.	Conflicto de intereses	60
3.5.3.	Mala conducta científica	61

3.5.4. Plagio y auto plagio	61
3.5.5. Comité de ética en investigación	61
Capítulo IV	62
Resultados y Discusión	62
4.1. Categorías de análisis	62
4.2. Resultados	66
4.2.1. Resultado de entrevistas	66
4.2.3. Resultado de análisis de casos	102
4.3. Discusión de Resultados	129
Conclusiones	134
Recomendaciones	136
Referencias	138
ANEXO 1	144
ANEXO 2	147
ANEXO 3	149
ANEXO 4	151
ANEXO 5	152
ANEXO 6	154
ANEXO 7	159
ANEXO 8	180

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Lista de expedientes</i>	57
Tabla 2. <i>Muestra de entrevistas</i>	57
Tabla 3. <i>Identificación de las categorías</i>	63
Tabla 4. <i>Sistema de categorías del objetivo general</i>	64
Tabla 5. <i>Sistema de categorías del objetivo específico 1</i>	64
Tabla 6. <i>Sistema de categorías del objetivo específico 2</i>	65
Tabla 7. <i>Triangulación de resultados</i>	94
Tabla 8. <i>Cuadro comparativo de casos</i>	127

Índice de figuras

Figura 1. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado A.</i>	68
Figura 2. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado B.</i>	70
Figura 3. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado C.</i>	73
Figura 4. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado D.</i>	76
Figura 5. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado E.</i>	78
Figura 6. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado F.</i>	81
Figura 7. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado G.</i>	83
Figura 8. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado H.</i>	86
Figura 9. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado I.</i>	87
Figura 10. <i>Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado J.</i>	92
Figura 11. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 09197-2019-0-0401-JR-PE-01</i>	102
Figura 12. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 09396-2019-0-0401-JR-PE-02</i>	105
Figura 13. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 04470-2020-0-0401-JR-PE-02</i>	107
Figura 14. <i>Red de codificación de categorías del expediente 10518-2019-0-0401-JR-PE-01</i>	109
Figura 15. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 04459-2019-41-0401-JR-PE-01</i>	111

Figura 16. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 00472-2020-21-0401-JR-PE-01</i>	114
Figura 17. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 07602-2019-30-0401-JR-PE-01</i>	117
Figura 18. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 07479-2019-65-0401-JR-PE-01</i>	120
Figura 19. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 04338-2019-29-0401-JR-PE-01</i>	123
Figura 20. <i>Red de codificación de categorías del Expediente 06202-2019-33-0401-JR-PE-01</i>	125

Abreviaturas

CONST.:	Constitución
CP:	Código Penal
CPC:	Código Procesal Civil
CPE:	Constitución Política del Estado
CPP:	Código de Procedimientos Penales
CSJN:	Corte Suprema de Justicia de la Nación.
DL:	Decreto Ley.
D. LEG:	Decreto Legislativo
DS:	Decreto Supremo
DUDH:	Declaración Universal de Derechos Humanos
LOMP:	Ley Orgánica del Ministerio Público
LOPJ:	Ley Orgánica del Poder Judicial
NCPP:	Nuevo Código Procesal Penal
PJ:	Poder Judicial
TC:	Tribunal Constitucional

Resumen

La intención de este estudio es investigar si el derecho de defensa del imputado ejercido por el abogado de libre nombramiento se garantiza en los casos de conclusión anticipada de los debates orales. La investigación tiene un enfoque cualitativo, con el propósito intrínseco descriptivo y el propósito extrínseco puro o teórico, con una muestra relacionada con los criterios de inclusión y exclusión, dirigiendo el análisis a expedientes completos del módulo de justicia de Paucarpata entre el periodo del 2019 y 2020, en los que se solicitó una conclusión anticipada. Se observó que existían procesos judiciales conexos con el derecho a la defensa vulnerada, a su vez se entrevistaron a diez expertos en derecho penal entre jueces, fiscales y abogados, quienes manifestaron información notable para el objeto principal de la investigación. A partir de las entrevistas se elaboró una categorización de información mediante el *software* Atlas Ti y se trianguló la información resultante. Se concluyó que el derecho de defensa del imputado ejercido por el abogado de libre elección no se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa, la defensa tiene que ser efectiva, por lo que se desarrollar una oposición antítesis, respuesta o contradicción eficaz a la acción penal, por lo que existe la posibilidad que el magistrado subrogue al abogado privado, y puede solicitar que lo siga un abogado de oficio. Sin embargo, por la misma carga procesal que a veces estos tienen, también se ven vulnerados los derechos del imputado; ya que la presencia de abogado no se puede reducir designación formal, correspondiéndole al juez adoptar medidas extremas para tener un proceso penal con una defensa real y efectiva.

Palabras claves: derecho de defensa, conclusión anticipada, defensa privada, defensa material, aceptación de cargos, justicia negociada, violación de la defensa, acuerdo en juicio oral.

Abstract

The intention of this study is to investigate whether the defendant's right to defense exercised by the freely appointed lawyer is guaranteed in cases of early conclusion of oral debates. The research has a qualitative approach, with the intrinsic descriptive purpose and the pure or theoretical extrinsic purpose, with a sample related to the inclusion and exclusion criteria, directing the analysis to complete files of the Paucarpata justice module between the period of 2019 and 2020, in which an early conclusion was requested. It was observed that there were judicial processes related to the violated right to defense, in turn ten experts in criminal law were interviewed including judges, prosecutors and lawyers, who expressed notable information for the main purpose of the investigation. From the interviews, a categorization of information was developed using the Atlas Ti software and the resulting information was triangulated. It was concluded that the defendant's right to defense exercised by the lawyer of free choice is not guaranteed in cases of early conclusion in the justice module of Paucarpata Arequipa, the defense has to be effective, so an antithesis opposition is developed, effective response or contradiction to the criminal action, so there is the possibility that the magistrate subrogates the private lawyer, and can request that a public defender follow him. However, due to the same procedural burden that they sometimes have, the rights of the accused are also violated; Since the presence of a lawyer cannot be reduced by formal designation, it is up to the judge to adopt extreme measures to have a criminal process with a real and effective defense.

Keywords: right of defense, early conclusion, private defense, material defense, acceptance of charges, negotiated justice, violation of the defense, agreement in oral proceedings.

Introducción

El propósito de este estudio es determinar si el derecho de defensa del imputado, por el abogado de libre elección, se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa; pues, desde que entró en vigor la nueva ley procesal penal, se han identificado ciertas figuras jurídicas. Como el caso de la conclusión anticipada, a la que muchos la llaman acuerdo premial, pes dicha figura se puede aplicar como acto preliminar, que da inicio al juicio oral, partiendo por la elaboración de solicitud que hace el imputado de manera conjunta con su abogado privado, sobre la base de un acuerdo que se tiene con el Ministerio Público; sin embargo, muchas veces estos acuerdos que se toman se ven mermados, por diversos factores, tanto internos como externos. Es así que mediante este trabajo de investigación se dará a conocer la problemática vigente y se comprobará si resulta necesario poder modificar, derogar o promulgar leyes que puedan brindar una tutela jurisdiccional efectiva.

Además de que, como requisito, debiera concurrir una aceptación de cargos por parte del imputado, requiriendo que esa aceptación del imputado esté en corroboración de otros elementos que permitan establecer que el imputado ha realizado el delito. Por lo que es de importancia la verificación suficiente de elementos de convicción sobre la responsabilidad, que vaya de manera independiente a la sola aceptación que hace el imputado. Procurando de esta manera evitar la aceptación de cargos, evitando aceptaciones que puedan dar una autoincriminación y no existiendo base suficiente para la imposición de una sentencia condenatoria, debemos precisar que el derecho de defensa, más allá de ser un principio, parte no solo por un debido proceso hacia el imputado, sino este implica la adecuada preparación del abogado defensor, con el fin, de garantizar un

adecuado procedimiento procesal, con los objetivos y desenlaces que, para los cuales fue creado.

Así, en un trabajo titulado “Inconstitucionalidad de las restricciones de las formas de conclusión anticipadas y recursos alternas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, se estableció que las formas de conclusión anticipadas y los recursos alternas de solución de conflictos para que las partes solucionen sus controversias antes o dentro del juicio oral es violatoria de los derechos humanos de acceso a la justicia, de paralelismo de las partes y del debido proceso legal. Y, como precedentes nacionales, encontramos la tesis con el título “La defensa ineficaz y su represión en los actos procesales del proceso penal en el distrito judicial de Lima, periodo 2015-2018”, que llegó a la conclusión que se demostró que la intervención defectuosa del abogado defensor provoca un estado de indefensión y quebranta absolutamente la eficacia de los actos procesales en el proceso penal.

Por tanto, a investigación presenta un enfoque cualitativo, con el propósito intrínseco descriptivo y propósito extrínseco pura o teórica, muestra fuentes de investigación bibliográfica y documental, lo que permitió obtener información de autores que tuvieron puntos de vista respecto al tema de investigación, incluye una teoría fundamentada.

Las limitaciones planteadas en la investigación son, principalmente, el acceso a los módulos justicia, ya que los accesos eran limitados y todavía se hacía trabajo remoto, lo que implicaba el retraso en la investigación como la recolección de expedientes y las entrevistas, por la disponibilidad de cada juez o fiscal, y también el tiempo reducido que se tenía para desarrollar la presente investigación.

Por último, el presente trabajo investigativo está dividido en cuatro capítulos: en el capítulo I, el planteamiento del estudio, se indica el planteamiento del problema, seguidamente los objetivos de investigación, la justificación de la investigación, la importancia y las limitaciones de la investigación. Seguidamente en el capítulo II, se encuentra el marco teórico, los antecedentes internacionales y nacionales de la investigación, las bases teóricas conceptuales, así como la definición de términos básicos.

Mientras que en el capítulo III, se encuentra la metodología de investigación que se empleó para el presente trabajo, como el tipo de investigación y el enfoque de la investigación. Finalmente, en el capítulo IV, se encuentran los resultados y la discusión, como las categorías de análisis, los resultados de las entrevistas como de los casos analizados, las conclusiones que arriban a que el derecho de defensa del imputado ejercido por el abogado de libre elección no se garantiza en los casos de conclusión anticipada, también las referencias y finalmente los anexos.

Capítulo I

Planteamiento del Estudio

1.1. Planteamiento del Problema

En décadas recientes la labor que desempeña el abogado defensor en cualquier etapa del proceso es de suma importancia, por lo que se debe velar por su desarrollo eficaz dentro del proceso, por lo tanto, la protección técnica ineficaz equivale a una infracción del derecho a la protección siendo este una garantía constitucional.

Moreno nos menciona que “es un derecho fundamental el derecho a la defensa, reconocido en la constitución política del Perú y en documentos de derechos humanos y tiene que ser garantizado en todos los procesos judiciales” (Moreno, 2010, p. 17).

En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de ciudadanos dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, se descubrió que esta ley era un reflejo interno de los derechos para un procedimiento legal apropiado, que es “una colección de requisitos que deben seguirse materia procesal para que los ciudadanos puedan hacer valer apropiadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptados por autoridad pública cualquiera, judicial, legislativa o administrativa que pueda influir en ellos” (Corte Interamericana De Derechos Humanos, 2014).

Ulloa (2020) establece que el ejercicio adecuado del derecho a la defensa está en manos del comportamiento del abogado, si se hace correctamente, por supuesto que el derecho de defensa de su cliente está protegido, aunque no se gane el caso. Por el contrario, ya sea que el abogado sea negligente o no, nuestro control de la ley durante todo el proceso puede, en última instancia, dañar los intereses del cliente.

El imputado tiene el derecho de usar todos los medios e instrumentos que sean necesarios para ejercer una defensa eficaz, por lo que este puede asignar a un abogado de su libre elección para su defensa dentro el proceso, pero se desconoce que este abogado de libre elección pueda ejercer una defensa eficaz, y más aún para acogerse a una conclusión anticipada.

Por lo que en la casación N.º 864-2016-Del Santa, en el fundamento 5.14, se establece que la indefensión surge no solo cuando las partes se ven privadas de manera injustificada o desmedida de su capacidad para proteger sus derechos o cuando una de las partes ocupa una posición dominante sobre la otra; sino también cuando el demandado cuente con una defensa ineficaz, lo que demuestra la falta de un abogado con los conocimientos jurídicos necesarios en el caso en la etapa correspondiente.

Para Murillo (2020), desafortunadamente, las actividades de los abogados defensores no siempre son las más adecuadas, confiables y activas, en algunos casos, el abogado, con su actuación, pone al imputado en absoluta vulnerabilidad, y vulnera consecuentemente algunos de sus derechos fundamentales, el cual es constitucional y compone una garantía para el imputado de un juicio penal legítimo: el derecho a la tutela técnica efectiva.

Por tanto, considerando que se tiene una incertidumbre respecto a una defensa eficaz por parte del abogado defensor, no se puede acreditar que acogerse a una alternativa de solución rápida como la conclusión anticipada sea la más idónea para el imputado.

Galloso (2017) considera que “el uso de la conclusión anticipada es el representante más particular de la llamada justicia penal contractual, en consonancia con los acaecimientos doctrinarias y legislativas nuevos del proceso penal moderno” (p. 74).

Además, concluye que “la conclusión anticipada se basó en el convocado derecho transaccional penal, que busca evitar juicios innecesarios y sentencias anticipadas por consenso o acuerdo” (Galloso, 2017, p. 16).

Es así que, observando el problema que tiene nuestra realidad, se requiere analizar el desempeño del abogado defensor para lograr una defensa eficaz que garantice un debido proceso en específico en los casos de conclusión anticipada.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema general

¿De qué manera se ejerce el derecho de defensa del imputado por el abogado de libre elección, en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020)?

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Por qué en los casos de conclusión anticipada de juicio oral, el ejercicio profesional del abogado genera la indefensión del imputado, en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020)?
- ¿Cuáles son las fuentes doctrinarias y normativas para resolver los casos de conclusión anticipada relativos al derecho de defensa, según sentencias dictadas en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020)?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

- Determinar si el derecho de defensa del imputado por el abogado de libre elección, se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar si en los casos de conclusión anticipada de juicio oral, el ejercicio profesional del abogado genera la indefensión del imputado, en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).
- Analizar las fuentes doctrinarias y normativas para resolver los casos de conclusión anticipada relativos al derecho de defensa, según sentencias dictadas en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).

1.4. Justificación de la Investigación

1.4.1. Justificación teórica

La justificación teórica de la presente investigación se centra en analizar la figura jurídica de la intervención deficiente de los abogados defensores privados y de su incidencia en los casos de conclusión anticipada para poder dar así una modificación, derogación o promulgación de leyes o sanciones para abogados que incurran en una mala praxis al solicitar una conclusión anticipada que no corresponda.

1.4.2. Justificación práctica

La presente investigación sobre la participación deficiente por parte del abogado en los casos de conclusión anticipada causa un perjuicio a las partes; razón por la que esta investigación pretende dar una sanción o acción inmediata dentro del proceso, sin perjuicio de una evaluación preliminar de si la acción u omisión del defensor público fue una negligencia injustificable o una falta manifiesta de ejecución o si pudo tener un impacto decisivo en los intereses del acusado en la actuación de la defensa. Por tanto, desde este punto de vista, es totalmente posible y necesario desarrollar esta investigación.

1.4.3. Justificación metodológica

La presente investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo, ya que describe la realidad del fenómeno del derecho de defensa en los casos de conclusión anticipada, con el tipo de investigación explicativa; por lo que pretende dar un entendimiento de la razón de por qué y cómo se da la violación al derecho de defensa en los casos de conclusión anticipada. Esto buscando la utilización de los conocimientos adquiridos para poder modificar, derogar o promulgar leyes para una brindar una tutela jurisdiccional efectiva, con un diseño no experimental-longitudinal, ya que no se modifica la realidad basándose fundamentalmente en la observación del problema en su ambiente natural dentro de un determinado tiempo.

1.4.4. Justificación de relevancia social

La presente investigación contribuye a la sociedad en asegurar un debido proceso en los casos de conclusión anticipada mediante una buena asistencia de un abogado defensor, estableciendo parámetros para brindar un derecho de defensa eficaz y no

generar la indefensión del imputado, ya que los abogados procuran soluciones rápidas como la conclusión anticipada que abrevian el proceso.

1.5. Importancia

Nuestra legislación peruana cuenta con una amplia normativa respecto al derecho de defensa y otras que aseguran un debido proceso, pero, a pesar que se aseguran los derechos fundamentales de la persona, no se puede asegurar una debida defensa por parte del abogado particular para su patrocinado.

Por tanto, es importante realizar esta investigación para demostrar que no existe la seguridad de acogerse a una conclusión anticipada y esta sea la más idónea para el imputado, con una defensa ineficaz que no tenga la experticia, conocimiento y solo pretenda dar una solución rápida pero no eficiente dentro del proceso, debido a que no existen parámetros o cánones que permitan apreciar si un abogado es bueno o malo para poder brindar una defensa eficaz dentro de un proceso.

A través de esto, se pretende establecer un cambio de seguridad a los derechos del imputado, para que así los operadores de justicia al momento de llevar procesos con soluciones alternativas puedan hacer el control, también para las personas que al momento de ser procesados tenga la seguridad que la vía alternativa que están eligiendo es la más idónea para su proceso llevado por la defensa particular.

1.6. Limitaciones de la investigación

La presente investigación tuvo como primera limitaciones el acceso a los módulos justicia, teniendo en cuenta que pasábamos por una emergencia sanitaria (COVID 19), por lo que los accesos era limitado y todavía se hacía trabajo remoto, teniendo en cuenta

que algunos jueces y fiscales por su seguridad no accedían el ingreso de personas que no laboraban en su institución, lo que generaba retraso en la investigación como la recolección de expedientes y las entrevistas, por la disponibilidad de cada juez o fiscal.

También se tuvo como limitación el tiempo que se necesita para desarrollar este proyecto, ya que existen labores cotidianas que quitan tiempo para el perfeccionamiento de la presente investigación, teniendo en cuenta que también se tenía un tiempo reducido para la elaboración del proyecto, que se pudo superar con una organización, elaborando un plan que adapte una planificación semanal y mensual de mis objetivos, entre labores cotidianas y la finalización del proyecto.

Capítulo II

Marco teórico

2.1. Antecedentes de la Investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales

Benitez (2017), en la tesis para optar el grado académico de magíster en derecho con área terminal en justicia constitucional en la Ciudad de México, en la universidad Autónoma del Estado de México, con el título de investigación “Inconstitucionalidad de la restricciones de las soluciones alternas y formas de conclusión anticipadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, tuvo objetivo principal el examinar el objeto de estudio que versara en el derecho público, las cuales son los siguientes: derecho constitucional, derechos humanos y derecho procesal penal. Se tuvo como métodos y técnicas método deductivo e inductivo, analítico, sistemático, hipotético y exegético, se llegó a la conclusión de que las restricciones legales, para que las partes solucionen sus controversias antes o dentro del juicio oral, es violatoria de los derechos humanos de acceso a la justicia, de paralelismo de las partes y del debido proceso legal. En ese sentido, se evidencia que los derechos humanos no son garantizados y no se poseería la seguridad jurídica en cuanto a consumir un proceso penal previamente del dictado de la sentencia.

Por su parte, Quintero (2013), en su tesis para optar el grado académico de magíster en derecho penal en la ciudad de Colombia en la Universidad Nacional de Colombia, con el título “La justicia penal negociada en Estados Unidos y Colombia, estudio confrontado desde una perspectiva de cultura jurídica”, estableció como objetivo fundamental la exploración y progreso de instrumentos metodológicos y teóricos que admitan representar de modo profundo las relaciones que construye a los cambios que

crea el nuevo procedimiento penal. Tuvo un tipo de investigación conceptualista, con una población de estudio una institución procesal penal. Se llegó a la conclusión de que el ambiente hermenéutico colombiano generó una transformación de la figura procesal y como resultado la alteración profunda de su funcionamiento adecuado. Aportó que la eficacia de una aceptación anticipada de culpabilidad debe ser fundada, libre, debidamente informada y sustentada, con base fáctica que manifieste que la acusación se ajusta a los hechos reales.

A su vez, Chancosa (2016), en su tesis para optar el título profesional de abogada en la ciudad de Ecuador en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, con el título “El rol del defensor público penal, en la defensa técnica de conformidad con la legislación ecuatoriana”, estableció como objetivo general el obtener una táctica jurídica que acceda optimiza el rol del defensor penal en la defensa técnica, en los delitos de acción pública, con un método inductivo de investigación, con una población de 20 jueces en función judicial, 30 funcionarios judiciales, 140 abogados, 10 defensores públicos y 200 ciudadanía en general. Se llegó a la conclusión de que los defensores públicos no respetan los derechos y preceptos constitucionales del procesado, al no concebir una representación íntegra en la audiencia, escaseando de ética y de valores profesionales. Por tanto, cualquier persona asignada para defender al acusado debe en todo momento tomar precauciones para garantizar que su juicio tenga una justicia razonable en cuanto a lo que es ético y lo que es la ley reglamentaria.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Guanilo (2020), en su tesis para optar el título profesional de derecho en la ciudad de Lima en la Universidad César Vallejo, con el título “La defensa pública y su ineficacia participativa en los procesos penales en la 2° sala penal liquidadora permanente del

Callao”, propone como objetivo establecer de qué manera la defensa pública se involucra en la ineficacia participativa en los procesos penales en la 2° Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao. Tuvo un tipo de investigación de un enfoque cualitativo de nivel básica, y se llegó a la conclusión de que la intervención de la defensa pública se arriba ineficaz por diversos factores que escapan de su vocación de servicio. Por ello, se afirma que sí existe una ineficacia participativa en los procesos penales de la defensa, tal situación coloca en estado de indefensión a todo procesado al cual no se le da la garantía de una adecuada tutela.

Mientras que Capuñay (2019), en su tesis para optar el grado académico de magíster en derecho penal, en la ciudad de Lima en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con el título “La institución de la conclusión anticipada del proceso y sus efectos en la sanción penal en el código penal peruano”, planteó como objetivo determinar si la conclusión anticipada del procesado incide en la sanción penal que se le imputa en el marco de la legislación peruana. Realizó una investigación aplicada, con proporción a la población se conformó por 11 jueces penales, 7 fiscales penales y 18 fiscales provincial, un total de 36 operadores de justicia. Se concluye que la conclusión anticipada es una forma favorable de terminar una controversia de índole judicial en el ámbito penal a favor del inculpado, de la víctima y del Estado. Por tanto, se evidencia que, no solo se debe considerar la culminación rápida del proceso, sino también su efectividad y satisfacción, especialmente para las víctimas ya perjudicadas por el delito.

Por su parte, Ulloa (2020), en su tesis para optar el grado académico de magíster en Derecho en ciencias Penales, en la ciudad de Lima en la Universidad San Martín de Porres, con el título “La defensa ineficaz y su represión en los actos procesales del proceso penal en el distrito judicial de Lima, periodo 2015-2018”, planteó como objetivo general

determinar de qué modo la intervención deficiente del abogado defensor de oficio, transgrede en la eficacia de los actos procesales en el proceso penal. Tuvo un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), con una población de 180 fiscales adjuntos y provinciales, 40 jueces penales y 20,000 abogados del distrito judicial de Lima. Se demostró que la intervención deficiente del abogado defensor de oficio provoca un estado de indefensión, quebranta negativamente en la eficacia de los actos procesales en el proceso penal. Por lo tanto, concurre que la actuación del abogado defensor es buscar los debidos procedimientos judiciales, así como preparar la estrategia jurídica a adecuada para la defensa de los imputados frente a los procedimientos.

A su vez, De la Cruz, N. en su tesis para optar el título profesional de abogado en la ciudad de Huancayo en la Universidad Peruana Los Andes, con el título “Actuación de la defensa técnica necesaria en las audiencias de control de acusación”, planteó como objetivo establecer de qué modo el ejercicio de la defensa técnica necesaria incide en la protección del derecho de defensa del procesado en la etapa intermedia en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pasco 2015. Tuvo como método de investigación método inductivo-deductivo, con una población de 40 actas de control de acusación con la mediación de la defensa técnica. Se llegó a la conclusión de que la defensa técnica despliega una defensa deficiente, restringiéndose exclusivamente a ejercer una labor puramente formal en las audiencias de control de acusación, que contribuye negativamente en la protección del derecho de defensa del procesado. Por ello, se afirma que la inadecuada asesoría técnica al imputado vulnera el derecho de defensa del acusado porque los abogados defensores privados y públicos no hacen el trabajo adecuado para proteger los derechos sustantivos y procesales de sus patrocinados.

A su turno, Cayra (2017), en su tesis para optar el título profesional de abogado en la ciudad de Puno en la Universidad Nacional del Altiplano, con el título “Restricción del ejercicio del derecho de defensa material del acusado en el juicio oral en el distrito judicial de Puno”, planteó como objetivo principal el establecer si es posible el ejercicio de la autodefensa por el propio acusado o encausado en el juicio oral, sin que este sea un profesional en el derecho, en los delitos con pena privativa de libertad no mayor a cuatro años. Tuvo un enfoque cualitativo de investigación, teniendo como población al 5 % de operadores del derecho acusados o encausados, abogados, jueces y fiscales a nivel del Distrito Judicial de Puno. Se concluye que se viola el libre ejercicio del derecho de defensa material, que no se les admite una autodefensa, y que, al no contar con los recursos económicos, estos son obligados a contar con abogados de oficio al llevarse a cabo el juicio oral. Por tanto, se sostiene que en Perú no se respeta el derecho a la defensa del imputado, a pesar de que es una garantía protegida por el derecho internacional, que el respectivo derecho fundamental se ve vulnerado con el libre ejercicio del derecho de defensa material.

2.2. Bases Teóricas Conceptuales

2.2.1. Derecho de defensa

2.2.1.1. Derecho de defensa en la legislación peruana

El artículo 139.14 de la Constitución vigente de 1993 reglamenta claramente el derecho a la defensa y establece lo siguiente:

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un

defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

Otras expresiones de este derecho están igualmente reconocidas en forma de principios relativos al derecho a la defensa en materia penal:

El principio de no ser penado sin proceso judicial (artículo 139.10), principio de no ser condenado en ausencia (artículo 139.12) y se reitera a principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las razones o causas de su detención (Constitución, 1993, artículo 139.15).

Asimismo, al reconocerse el derecho humano a la seguridad y a la libertad se garantiza lo siguiente:

Nadie puede ser incomunicado, sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y por el tiempo y en forma previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, por escrito y sin dilación, el lugar donde se halla la persona detenida (Constitución, 1993, artículo 2.24.g).

Además, en la jurisprudencia y la doctrina se suelen utilizar diferentes términos para calificar este derecho: a ser oído, a la defensa material, a la defensa técnica, a la defensa efectiva, a no ser puesto en estado de indefensión, a la igualdad de derechos sobre las armas, todas estas frases en realidad se refieren a diferentes aspectos de los derechos a la defensa, por lo que juntas intentan asegurar un derecho (Díaz, 2021).

El Tribunal Constitucional ha determinado que es derecho procesal fundamental el derecho de defensa, por lo tanto, está dentro del ámbito del debido proceso y, sin la garantía del debido proceso no puede ser considerado un derecho garantizado. Por ello,

como derecho fundamental, entendido como el principio de interdicción para toda legítima defensa, no puede ser defendida y como principio contradicción procesal que puedan afectar la situación jurídica de cualquiera de las partes, en el procedimiento o en el proceso, en el caso de un tercero con un interés legítimo (Expediente N° 5085-2006-PA/TC, 2007).

El derecho a la defensa incluye la obligación de ser oído, asesorado por un abogado elegido por la o los imputados o, en su defecto, utilizar un abogado de oficio. Este derecho engloba la capacidad de hacer valer y demostrar los derechos o intereses de una persona, sin que pueda permitirse la resolución judicial, salvo que se presente una incomparecencia voluntaria, tácita o expresa o implícito o por negligencia de parte, la intervención del abogado no es una práctica común compone una simple formalidad su ausencia en juicio implica una falta o infracción grave que resultó en la nulidad e ineficacia de los actos procesales realizados sin su presencia (Mesia, 2005).

Por tanto, el derecho penal es visto como un medio de control social, que se entiende con el conjunto de patrones símbolos sociales, culturales y comportamientos sociales a través de los cuales dichos símbolos se determinan y se hacen cumplir, para ellos se trata de vencer las tensiones sociales: grupales o individuales (Hurtado Pozo, 1987).

Para Bacigalupo (2005), el derecho a la defensa se identifica al menos por mantener la seguridad ciudadana, vinculando la restauración del Estado con determinadas normas jurídicas y principios de justicia, haciéndola comprensible en todo caso. Asimismo, argumenta que el Estado de derecho es una representación de agilizar la vida estatal al mismo tiempo que accede que el Estado cumpla efectivamente con sus deberes y, por otro lado, la acción puede calcularse a través de la certeza de derecho.

También, mediante resolución de 17 de setiembre del 2017, analizando las garantías procesales de defensa, 5.1 durante la consideración del punto que la defensa técnica es un derecho instrumental relacionado con la defensa procesal, siendo un derecho fundamental e imprescindible siendo necesario en el debido proceso. (Casación 864-2016 de Santa, 2016).

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el considerando preliminar 5.2, indica que el derecho a la protección tiene dos etapas: i) es un derecho subjetivo, irrenunciable e inalienable, es expresión de la libertad humana; y (ii) constituir una garantía procesal constitucional que impida el uso arbitrario o desproporcionado de la acusación penal al asegurar que la persona investigada tenga la alternativa de objetar y contra argumentar durante el proceso en igualdad de condiciones, para proteger sus intereses y derechos, utilizando recursos lícitos, pruebas necesarias para su defensa. (Casación 864-2016 de Santa, 2016).

2.2.1.2. La legítima defensa en el proceso judicial

De Toledo y Huerta (1986) sostienen que tenemos que comprender la legítima defensa como “la respuesta precisa para impedir agresiones ilegales y reales contra uno mismo o contra un tercero” (p. 244).

La legítima defensa justifica la conducta típica de quien ante una agresión ilegítima defiende sus derechos o los derechos de un tercero, si la defensa se hace frente a actos de agresión organizados por un agresor responsable, responsable de las consecuencias de la defensa, la acción debe recaer sobre el agresor (García, 2008).

Además, explica que la legítima defensa implica dos actos de formación: está el acto de formación de la agresión, y el acto de formación de la defensa. Este último acto

de formación es un *actio duplex bilateral* en la medida en que logre ser visto como un acto de influencia sobre el agresor; pero sobre todo acción para proteger intereses de penalmente relevantes. Si bien la defensa es un ataque a una persona, el defensor no tiene la obligación de reconocer al agresor como ciudadano, ya que su agresión ilícita ha tenido como resultado la negación de las relaciones de mutuo reconocimiento como ciudadanos (García, 2008).

Según Expediente N.º 1655-91, el derecho penal y la legítima defensa se basan en el principio de que a nadie se puede obligar a tolerar la injusticia, por lo que el ordenamiento jurídico contiene no solo prohibiciones, sino también reglas que permiten la acción. Principios prohibidos por la ley, pero están permitidos por buenas razones y por lo tanto no son punibles; es decir, existen razones reconocidas en el ordenamiento jurídico que impiden la injusticia y legalizan plenamente las conductas típicas; si es un acto real o ilegal, es decir, no contra el ordenamiento porque la ley lo admite, no es delito, y no lo puedes hacer en defensa propia porque no es delito. (Expediente N.º 1655-91, 2000).

2.2.1.3. Dimensiones del derecho de defensa

A. Defensa material

El derecho a la defensa debe ser visto como la primera expresión del derecho a la legítima defensa. En el proceso penal el imputado es titular de un derecho fundamental y por tanto no puede ser privado de la capacidad de idear una estrategia de defensa que estime conveniente llevar a cabo, incluida la capacidad de actuar en juicio (Moreno, 2020).

También, se considera que, el derecho a la legítima defensa, incluida la intervención personal e inmediata del acusado en el juicio mediante la adopción de medidas procesales para proteger la libertad del acusado: evitar la condena o minimizar las posibles sanciones penales. (Moreno Catena, 2020, pág. 22).

A su vez, San Martín (2014) menciona que la protección material y técnica forma parte del derecho de defensa; la defensa material incluye el derecho del acusado a defenderse a sí mismo; como también impugnar, negar, permanecer en silencio o allanarse a la petición punitiva del Ministerio Público.

Por su parte, Jauchen (2021) marca que la defensa material es planteada por el mismo acusado; reside en expresiones de defensa que ha prestado en diversas declaraciones en la causa penal: en la instrucción, en el careo, en el juicio, en el proceso oral o en la última sentencia.

Mientras que el Tribunal Constitucional decide que “el derecho a la defensa material es el derecho del imputado a defenderse” (Expediente 1323-2002-HC/TC, 2002).

B. Defensa formal o técnica

Carocca (1998) nos indica que es “una defensa por parte de un abogado que realiza la función jurídica técnica de defender a un cliente en causas penales con el fin de promover la protección de sus derechos” (p. 492).

Para Montero (2019), la defensa técnica considerado un derecho fundamental, piedra angular del sistema judicial, y está íntimamente relacionada con las contradicciones y el principio de igualdad de armas, esto incluye las acciones realizadas por los abogados para brindar asesoramiento técnico sobre los derechos u obligaciones

de los acusados, para examinar la legalidad del proceso judicial, para controlar estrictamente la presentación de objeciones y pruebas en su contra, y para formular críticamente argumentos y pruebas objeciones desde una doble perspectiva, práctica de hechos y derecho o recurrir a las resoluciones judiciales.

La importancia de la defensa técnica radica en un caso penal que ha encaminado a que la defensa, a diferencia de la acusación, se considere una parte procesal (otra parte del proceso) y consta de dos sujetos: el imputado y el abogado son dos componentes del parte procesal formado por ambos órganos (Cuèllar & Montealegre, 2013).

En consecuencia, para San Martín, “el derecho de defensa técnica es un requisito para la otorgar la validez a las actuaciones de las partes en diversos tipos de procesos judiciales” (San Martín, 2014, p 287).

2.2.1.4. Garantías procesales genéricas

A. Tutela procesal efectiva

Castillo (2013) menciona que tiene como objetivo garantizar la iniciación y terminación de los procesos a través del acceso a la justicia y la ejecución de las decisiones, agregó, el tener acceso a los órganos que administran justicia de manera institucionalizada es una expresión de tutela judicial.

Por su parte, Landa (2012) considera que no es suficiente con que la voluntad de un imputado sean atendidas por las autoridades judiciales, debe hacerse a través de una serie de mínimas garantías que no se limitan a los derechos fundamentales, sino que engloba a los derechos fundamentales, fundados en la dignidad humana (artículo 3 de la Constitución) o derechos necesarios para lograr el objeto del proceso.

Mientras que Salazar (2004) marca que la tutela de los derechos es derecho exclusivo del demandado, por sí o por medio de su abogado, emplear los derechos que le confieren la constitución política del Perú y la ley para subsanar las deficiencias mediante petición al juez de la investigación preparatoria, con el objetivo de solicitar medidas de reparación o protección por omisiones u acciones que confinen injustificadamente sus derechos o enfrenten denuncias ilícitas, desde las diligencias iniciales de la investigación hasta el final de la investigación preparatoria.

B. Debido proceso

En el recurso de casación en el considerando preliminar 24.1 se menciona que el debido proceso tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales establecidos en la constitución política del Perú, otorgando a cualquier persona la oportunidad de acudir a la justicia para la protección en la ley de los derechos fundamentales de una persona de tal modo que exista una razonable oportunidad y suficiente para ser oído, para disfrutar del derecho a defender, a presentar pruebas y obtener una sentencia que resuelva el caso en un tribunal de justicia con los plazo prescrito por la ley procesal (Casación N° 1772-2010, 2011).

En la Sala Civil Transitoria, en el considerando segundo del 2011, se establece que el derecho a determinar formalmente el debido proceso requiere que todos los intervinientes en el proceso observen estrictamente las normas, principios y garantías que rigen el procedimiento, como forma de proteger los derechos subjetivos y prevenir las prácticas de los derechos absolutos de la defensa de las partes en el caso. Desde la dimensión material, se puede percibir cuando las decisiones judiciales se toman conforme a los principios de proporcionalidad y racionalidad. (Casación N° 178-2009 , 2011).

A su vez, Carocca (1998) sostiene que la garantía del debido proceso es una fórmula expresiva porque vincula la forma pura del procedimiento a las condiciones del estado de derecho para asegurar que los ciudadanos sean juzgados con justicia sin violar sus derechos fundamentales.

Por su parte, Jauche (2021) considera que, para las garantías constitucionales alcancen su fin en el proceso penal, no basta solo con tener una defensa necesaria y obligatoria; la defensa debe ser efectiva, lo que significa aportar un contraargumento (respuestas, objeciones o refutaciones) a la conducta delictiva o pretensiones penales.

2.2.1.5. El contenido del derecho de defensa

2.2.1.5.1. Derecho a contar con un abogado defensor

Carocca (1998) considera que asegurar que “los imputados que cuenten con un abogado defensor técnico durante el proceso cuando lo necesiten, tienen garantizar el derecho a un abogado defensor designado por el Tribunal” (p. 371).

También que, “si una persona pasiva en un caso penal no hace uso del derecho a nombrar un abogado para su representación, y el juez está obligado a designar a la persona responsable de la defensa técnica del acusado de acuerdo con sus poderes” (Carocca, 1998, p. 371).

Por lo que Carrió (2000) menciona que el abogado defensor público es el abogado defensor técnico del imputado en el proceso penal, esta persona realiza las funciones y deberes como abogado de confianza (designado por el imputado); la única diferencia entre ellos el origen del nombramiento del abogado defensor.

Asimismo, la base de la defensa formal es la importancia de los derechos fundamentales vulnerados por el proceso penal de una determinada persona, lo que hizo de la defensa técnica un requisito de legalidad. Si el acusado no designa abogado, el Estado designa un abogado designado por el tribunal, ya que garantizar el derecho de defensa del acusado es una condición necesaria para la correcta o justa conducción del proceso penal (Carrió, 2000, p. 183).

Por su parte, para Carocca (1998), la defensa ejercida por un defensor público no te garantiza esta garantía, considerando que no es garantizado con cualquier tipo de defensa; esta debe ser efectiva. La defensa de los principios de contradicción e igualdad exige que el Estado proporcione a los imputados una protección técnica real y adecuada en el proceso penal.

2.2.1.5.2. Derecho de contradicción

Según Quiroz (s.f.), “esto significa que las partes intervinientes en el proceso penal pueden permitir efectivamente al proceso penal para hacer corresponder sus pretensiones en el proceso penal, el cual debe regirse plenamente por las garantías del proceso penal” (p. 27).

También que la mediación del abogado defensor en el juicio penal es muy importante, pues, por consejo del abogado, el imputado tiene que hacer valer todos sus derechos, y así enfrentarse al derecho del poder del Estado, plasmado en el mecanismo judicial de enjuiciamiento, esta es una clara expresión del principio de contradicción que hemos esbozado gradualmente (Quiróz, s.f.).

Para San Martín, “los abogados deben ser considerados parte en los procedimientos por dos razones principales” (San Martín, 2014, p. 201):

- El imputado tiene el derecho a un recurso efectivo durante todo el proceso.
- Según los principios básicos del proceso penal, se entiende que el sujeto del acto de la prueba debe intervenir sobre la base de la igualdad y de acuerdo con el principio de contradicción.

2.2.1.5.3. Derecho al plazo razonable para la preparación

El derecho al debido proceso considerado en el artículo 139, inciso 3) de la Constitución política del Perú, el derecho al tiempo “razonable” para que el acusado prepare u organice una defensa o, eventualmente, para contratar un abogado, para formular o preparar una defensa de manera adecuada y efectiva, debe transcurrir un tiempo razonable entre la citación notificada y el consentimiento de la persona citada para presentar una denuncia en la etapa pre jurisdiccional, que permita una preparación adecuada de defensa para las imputaciones de los cargos en contra, y teniendo en cuenta también la distancia si las circunstancias así lo requieran (Exp. N.º 1268-2001-HC/TC, 2002).

2.2.1.5.4. La imputación necesaria

Gonzales sostiene que el acusado en el proceso penal debe tener conocimiento pleno de las acusaciones en su contra antes de ejercitar su derecho a la defensa. Así, este derecho es una obligación de informar de las circunstancias que se le pueden imputar, ya que no puede ejercerse el derecho de defensa sin conocer la naturaleza de la acusación. (González, 2019).

La Convención Americana de Derechos Humanos requiere que la información de los cargos sea “detallada y previa”, esto quiere decir que el demandado debe tenerlo antes de la hora del proceso donde debe defender su defensa y tener tiempo suficiente para

hacerlo, esta garantía mínima está íntimamente relacionada con el derecho al tiempo adecuado para formular una defensa de modo que “antes” se convierta en suficiente.

Por otra parte, conviene recordar que para el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles se solicita comunicación “sin demora”, “lo cual ha sido explicado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo ha interpretado en otras palabras, la información sobre los cargos debe darse “después de que el cargo haya sido formulado por la autoridad competente” y ambas condiciones deben cumplirse.

2.2.1.6. El derecho de defensa en relación con las partes procesales

2.2.1.6.1. El imputado

Según Burgos, puede decirse que el imputado es aquel contra quien se ha iniciado una causa penal, desde el momento en que se le imputa el delito al culpable, se le aplica tal procedimiento hasta la decisión final del poder judicial, ya que su responsabilidad también le dio la calidad de “citado” en la etapa preliminar, “investigado” cuando el fiscal decidió formalizar la investigación preparatoria, “acusado” cuando el fiscal presenta su requerimiento de acusación, iniciándose así la fase intermedia del proceso, y “sentenciado” cuando el Tribunal de Juicio Oral lo encuentra responsable del delito que es objeto de juicio (Burgos, 2022, p. 162).

Por su parte, Claria sostiene que, “la palabra más antigua es reo, que significa el verbo culpable; otros lo llaman inculpado, pero este término, además de ser engañosa, da el concepto de reo de la palabra puesto en culpa” (Claria, 1998, p. 264).

Mientras que según Burgos (2022), el término “acusado” es más correcto como definición específica y clara de su estatus legal, pero el atributo “culpable” puede

considerarse como tal solo cuando la fiscalía ha presentado formalmente una acusación formal en la fase intermedia, por lo tanto la calificación de “imputado” es la indicación más precisa para ejercitar sus derechos a partir del primer caso de ejecución en su contra, “la imputación se produce cuando se identifica a un posible partícipe o autor de un delito” (Burgos, 2022, p. 163).

2.2.1.6.2. El abogado defensor

Burgos sostiene que la intervención de un abogado defensor cuando sea propuesto por el imputado o propuesto por una autoridad competente (defensor público), debe injerirse como garante de un debido proceso o cualquier procedimiento legal que requiera defender los intereses de la persona que patrocina, está presente cuando él y el demandado en una audiencia hacen una defensa técnica contra la los fundamentos del Ministerio Público o del actor civil. Si es necesario, simboliza en procedimientos específicos donde la presencia del acusado no es necesaria, en la etapa intermedia como la audiencia preliminar, la interposición de algún recurso impugnatorio, o la solicitud de trámites conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial (Burgos, 2022).

2.2.1.6.3. La víctima en el nuevo sistema procesal penal

Para Maier (2016) conviene advertir, también, que es importante señalar que la víctima no plantea específicamente un problema ni en el derecho procesal penal ni en el derecho penal material, exclusivamente ya que se trata de un problema del sistema penal en su totalidad. A fin de llevar a cabo las actuaciones que ocupan el derecho penal y, finalmente, los medios para lograr estos fines y efectuar esas actuaciones que pone a su disposición el derecho procesal penal. La cuestión es que en algunos casos se aborda desde el punto de vista del derecho penal y en otros desde el punto de vista derecho

procesal penal, lo mejor es no pasar por alto los elementos regulados por otra rama del derecho, es decir, partimos de lo que sugiere el título: es un problema político-criminal general, cuya solución debe ser brindada por el sistema en su conjunto.

2.2.1.7. El Estado frente a la garantía del derecho a la defensa

Valderrama (2014) menciona que la Constitución Política del Perú le otorga el estatus de un derecho fundamental, al derecho al debido proceso, que está íntimamente relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional. En ese sentido, tal como mencionamos en párrafos anteriores, el numeral 14 del artículo 139 reglamenta de manera general el derecho del justiciable a la defensa.

Por ello, no es suficiente que la defensa sea necesaria y obligatoria que garantice que la constitución política del Perú realice su propósito en los procesos penales, la defensa debe ser efectiva, lo que simboliza dar objeción, respuesta, refutación o contradicción a un delito o a una pretensión de represión (Jauche, 2021).

Así, Cafferata (2000) puntualiza que se tiene que tener en cuenta que la figura presente de un abogado a menudo no basta para garantizar la igualdad de armas en los procesos penales, ya que solo proporciona “posibilidad formal de igualdad”. La proporción de las partes requiere “la actuación eficaz y diligente de un abogado defensor profesional” (Cafferata, 2000, p. 164). La falta de una defensa efectiva se considera una “renuncia al derecho implícito de defensa” (Cafferata, 2000, p. 164), que requiere el reemplazo de los abogados y da como resultado la nulidad de los actos procesales realizados sin defensa.

Para, Jauche (2021) considera que no es suficiente con darle al imputado la oportunidad de nombrar un abogado defensor, sino que en un juicio penal debe realizar una defensa eficaz: “La defensa debe ser muy minuciosa con las pruebas justificables de refutación y los motivos de la acusación, tanto de hecho como de derecho” (Jauche, 2021, p. 154).

Asimismo, Carrió (2000) considera el hecho de que “el cliente tenga un abogado en asuntos penales no cumple con el requisito de asistencia legal válida y requiere que el abogado brinde asesoramiento legal válido” (p. 313).

Por su parte, Moreno (2010) sustenta que “el derecho fundamental a la presencia de abogado no tiene que reducirse a una mera instrucción formal, sino que exige a los jueces la adopción de medidas extraordinarias para que en el proceso penal la defensa sea eficaz y eficiente” (p. 10).

Mientras que Juche (2021) nos menciona que “la defensa técnica eficaz requiere que no se efectué ninguna acción en el proceso penal que pueda afectar el estado legal del acusado sin la mediación de un abogado defensor” (p. 154).

2.2.1.8. Formas de control del derecho a la defensa

A. Irrenunciabilidad del derecho a la defensa

Como se ha señalado anteriormente, la tutela procesal compone un derecho fundamental y, por tanto, tiene categoría de garantía y, por ello, se considera irrenunciable, intransferible e innegociable.

El constitucionalista Nogueira (2003) declara que “los derechos fundamentales no pueden ser arrebatados porque son fundamentales para la dignidad humana ningún hombre puede rechazarlos” (p. 3).

Mientras que el alemán Roxin (2000) confirma que los abogados son los garantes de los derechos humanos básicos en los procesos penales como la presunción de inocencia, la defensa técnica es necesaria en consideración que la capacitación del imputado no se encuentra al nivel de atender la demanda de defensa por incompetencia legal y técnica de conocimiento o por sus circunstancias personales.

En opinión de Ramos (2001), la complicación de la normativa genera la obligatoriedad de la defensa técnica en los procesos penales, para no vulnerar la libertad de elección de abogado, la defensa pública la llevan a cabo los abogados defensores desde el principio, cuando una determinada persona es imputada o detenida por causa judicial, teniendo el abogado la obligación de asistir hasta que este haga uso de su libre elección.

A su vez, Binder (2000) considera que “la defensa del derecho bilateral, demuestra la consideración a la dignidad humana y demostrando el ejercicio lícito del poder penal del Estado, el acusado está obligado a defenderse con asistencia jurídica, por lo tanto, es irrenunciable la defensa técnica” (p. 155).

Por su parte, Cafferata (2000) considera que, “el requisito de la igualdad de las partes en los juicios penales se fundamenta en la equivalencia de conocimientos jurídicos entre el fiscal que es el Ministerio público y el acusado, para lo cual se requiere la mediación de un abogado defensor, asimismo es irrenunciable” (p. 114).

Para Carocca (1998), el “no tener una defensa de debido proceso significa que el acusado no puede renunciar a ella, ya que no puede pedir al juez penal que admita su indefensión en el marco de un proceso penal” (p. 21).

B. La nulidad procesal por violación de la garantía del derecho a la defensa

El aseguramiento de las garantías procesales requiere que los actos técnicos de defensa en forma imperativa tengan una necesidad sustancial, obligación, exigibilidad y objeción a la pretensión penal o pretensión compulsiva. “Toda defensa que no se aplique dentro de estos parámetros vulnera la orden judicial en cuestión y con ella el propio proceso legal, que en este caso deja sin efecto el juicio” (Jauche, 2021, pp. 154-155).

Asimismo, Jauche (2021) considera que, “la ausencia de un abogado que no defienda efectivamente a un imputado determina la nulidad absoluta y general de una acción penal como consecuencia de una transgresión de la garantía constitucional del derecho a la debida defensa” (pp. 154-155).

Bernal y Montealegre (2013) menciona que un proceso penal por transgresión del derecho a la defensa puede ser nula si se demuestra que los abogados actuaron con negligencia al hacer valer una defensa inadecuada. Bajo este estándar, la nulidad se manifiesta no por una defensa inadecuada, sino por falta de defensa.

2.2.2. Conclusión anticipada

La conclusión anticipada en el juicio oral posee una premisa que el acusado acepta los hechos presentados por la fiscalía sin perjuicio de su posible impugnación del veredicto y la sentencia. Sin embargo, no quita que pueda debatir la dimensión de la pena

y la cuantía de reparación civil requerida, por lo que este marco procesal se genera para agilizar y simplificar el proceso, con el apoyo en los elementos de convicción brindados durante el proceso pueden ameritar una discusión más limitada (Recurso de nulidad N° 186-2006-Piura, 2006).

Sostiene Sánchez (2009) que la conformidad es una expresión de los principios dispositivo en el proceso penal, por lo cual el imputado declara libre y unilateralmente, que es responsable de las actuaciones que lo imputan, y comisión el delito, aceptando la ejecución, este es uno de los mecanismos para abreviar o simplificar el proceso prescrito por el Código Procesal Penal de 2004, poniendo fin al juicio oral y al proceso penal en caso que el imputado se declare culpable, acepte la pena y la reparación civil establecida por el Ministerio Público, el efecto inmediato fue la ausencia de argumentos en contra y una sentencia dentro de las siguientes 48 horas.

Según Ferrajoli (2005), este sistema se define como un acto procesal que tiene por objeto la terminación inmediata del juicio y la suspensión del juicio verbal para que el juicio pueda celebrarse en tiempo oportuno, previo al consentimiento del imputado y el acuerdo de las partes generando una conformidad absoluta. Los juicios orales se concentran en una o más sesiones y se enmarcan según los principios de publicidad, inmediación, oralidad, concentración y contradicción, como los de igualdad, aportación de parte y acusatorio. El Tribunal Constitucional califica esto como un acuerdo entre la fiscalía y el imputado, admitiendo la culpabilidad de los cargos formulados, permitiéndole al imputado reducir la pena.

2.2.2.1. Naturaleza jurídica de conclusión anticipada.

Al respecto Sánchez (2006) refiere que “se trata de un procedimiento sumario en el que la autoridad judicial debe aportar lo pertinente a la secuencia de apertura o ha recibido la declaración instructiva del imputado” (p. 994).

En el debate oral la conclusión anticipada, establecida en el artículo 5 de la Ley N.º 28122, se reconoce que el imputado confirma plenamente o, en todo caso, acepte los hechos de que el acusado es objeto de la acusación, respecto a la cantidad y calidad de la pena o el monto de la reparación civil establecida por el fiscal puede ser cuestionada, y sin encajar circunstancias no previstas en la acusación que soliciten actividad probatoria concreta.

En otras palabras, Velásquez (2009), “la ley está diseñada para disminuir el número de juicios que actualmente se encuentran en manos de los tribunales penales y jueces de nuestro país” (p. 943).

También, Villavicencio (2018) sostiene que la conclusión anticipada del juicio oral se halla reglamentada en el artículo 372º del Código Procesal Penal 2004 y esto ocurre en debate pública, poco después de que el juez informara al acusado de sus derechos y le preguntara si se declaró culpable o participó en el delito objeto de la acusación, se declara responsable de la reparación civil. El imputado, antes de aceptar parte o la totalidad de la acusación, podrá consultar al abogado defensor para que este le asesore en los asuntos importantes de la causa. Así, si se declara inocente, el juicio continúa, pero si admite su culpabilidad, el juez declarará la conclusión del juicio.

2.2.2.2. Ámbito de aplicación y oportunidad de la conclusión anticipada

Para Velásquez (2009), es cierto que nada en este acto alude a la decisión judicial de la pena, pero téngase muy en cuenta su contenido y alcance, concretamente el contenido del artículo específicamente de su artículo 5, permite darnos cuenta que producida la conformidad del acusado, es decir, admitiéndose culpable o cómplice, para enjuiciar y en última instancia emitir la sentencia, el juez debe dictar sentencia, y aquí surgen las siguientes cuestiones.

- a) La conformidad y la aceptación de la pena precisado por el fiscal.
- b) El alcance vinculante de la aprobación del acusado con relación a la determinación de la pena.
- c) La configuración jurídica de las circunstancias para la determinación judicial de la pena y sus condiciones.
- d) Los límites de la medición de la pena dentro del marco penal.
- e) La medición de la pena cuando se produce la aprobación del acusado.
- f) La confesión en la aprobación a efectos de la determinación de la pena (Velásquez, 2009, p. 205).

2.2.2.3. Objeto de la conclusión anticipada

En caso el acusado admite la culpabilidad por un delito, pero no está de acuerdo con la pena o reparación civil, el juez localizará el argumento solo a determinar la pena y/o de la reparación civil (art. 372. 3 del CPP).

Para Taboada (2019), la disposición de conclusión anticipada es consistente con el énfasis del nuevo código en la velocidad y la negociación entre las partes. Básicamente, el objetivo del modelo nuevo procesal penal en el Perú es garantizar que solo aquellos juicios en los que las partes (acusados y fiscales) están en discordancia en todo o en parte (acusados y fiscales) sean conferidos oralmente, según la teoría del caso, y por lo tanto debe ser objeto de una intensa controversia a fin de establecer la verdad de las pretensiones en contrario y llegar a una decisión sobre la prueba de hecho en la conducta de adjudicación.

2.2.2.4. Aplicación de conclusión anticipada

El juez penal que presida la audiencia inicia el debate oral con la fórmula adecuada con base en el informe; se identifica al imputado, se anuncia su situación (acusado procesado en libertad o detenido), el delito cometido contra él y el nombre de la víctima. Luego sigue el momento de los alegatos iniciales de las partes. Al finalizar, el juez le da a conocer sobre sus derechos en juicio al acusado. La respuesta que otorgue, luego de consultar con su abogado, podría tener distintas consecuencias (Ibarra, 2008, p. 26):

- Rechazo de los hechos atribuidos en la acusación. Lo que establecerá la continuación del juicio con la fase probatoria (Ibarra, 2008, p. 26).
- Admisión de la responsabilidad y aceptación de la pena y reparación civil conforme a la acusación (sin conferencia con el fiscal). Ante esta conformidad simple el juez dará por concluido el juicio y dictará su sentencia, en la misma sesión o en la siguiente (Ibarra, 2008, p. 26).

- Acuerdo sobre pena y reparación civil. Antes de responder a la pregunta planteada, el acusado puede requerir reunirse con el fiscal para convenir la pena y reparación civil a imputarse. El resultado del acuerdo se hace de conocimiento del juez, quien declarará concluido el proceso y dictará su sentencia, como se indicó (Ibarra, 2008, p. 26).
- Aceptación de la participación delictiva, pero desacuerdo sobre la pena o la reparación civil (con o sin conversaciones con el fiscal). Entonces, anticipado traslado a las partes del proceso, el juez delimitará el posterior desarrollo del juicio, actuándose solamente las pruebas pertinentes para determinar la pena o la reparación civil. No concluye el juicio, hay una conformidad parcial (Ibarra, 2008, p. 26).
- Fracaso de la conclusión anticipada por desacuerdo total. La norma no es tan clara respecto de la suerte de la audiencia cuando no se llegue a ningún acuerdo entre el fiscal y el acusado, aunque lo que sugiere ella es la continuación del juicio por el mismo juez (Ibarra, 2008, p. 26).

2.2.2.5. Control judicial de conformidad.

El control judicial tiene que ser estricto por la renuncia que el acusado efectúa sobre sus derechos (Burgos, 2022), se renuncia a lo siguiente:

i) Un juicio público. Muchos autores defienden el abandono del principio de presunción de inocencia cuando se da por concluido el juicio, sin embargo, dicha conclusión no es aceptable en nuestra legislación. El juez no puede decidir si el acusado quiere ser declarado culpable. Consecuentemente, este deseo debe ser cumplido, se debe comprobar el cumplimiento (Burgos, 2022)

Por ello, mantiene sus garantías y principios, como la consistencia procesal, el principio de acusación, la prohibición de reformas a peor y la favorabilidad de las partes. Estos principios han sido reafirmados en la Casación 1511-2017, si la sentencia es revocada, y el juez agrava el tipo de delito propuesto en el acuerdo, entonces aumenta la pena y la pena, sin carácter funcional alguno (Casación N.º 1511-2017, 2020).

ii) A contradecir. El derecho de oposición es renunciable y por tanto no es obligatorio (es incluso estratégico. Si quiero, me opongo; si no, lo apruebo) (Burgos, 2022).

iii) A la actuación probatoria. La renuncia a la actuación probatoria tiene correspondencia con la convención probatoria. Reafirmo que la prueba demuestra lo que pretendía demostrar (Burgos, 2022)

2.2.3. La conclusión anticipada en relación con el derecho de defensa

En la conclusión anticipada se viola tanto el derecho a la defensa como el principio constitucional de garantías judiciales. El imputado no puede ejercer su propia acción de prueba para esclarecer y responder de los cargos que se le imputan, porque la norma que se interpreta otorga indebido valor de impugnación a la investigación preliminar, evitando que todos los factores que de ella se derivan sean objeto de una acción judicial para determinar su verdadero valor probatorio (Díaz, 2004, pp. 4-11).

Asimismo, se vulnera el principio de presunción de inocencia al efectuarse un proceso ágil, expeditivo y corto diseñado exprofesamente para sentenciar al procesado, al margen de que la pena sea severa o leve, no considerar que uno de los fines del proceso penal es el establecimiento de hechos para establecer o desvirtuar el delito o la

responsabilidad penal del imputado, y no el solo acto de emitir sentencias condenatorias per se (Díaz, 2004, pp. 4-11).

La Ley N.º 28122 ha sido validada, posiblemente para acelerar algunos procesos. Sin embargo, por las omisiones descritas, una violación de los derechos de defensa (Constitución, artículo 139, inciso 14) y el principio del debido proceso (Constitución, artículo 139, inc. 3), por transgredir la presunción de inocencia de todo procesado (Constitución, artículo 2, inciso 24, ap. e) y por su carácter discriminatorio (Constitución, artículo 2, inciso 2), al ser este un tipo de delito que tiende a involucrar a personas de recursos económicos escasos, va en contra del texto de la constitución política del Perú, por lo que creemos que debe ser abolido o declarado inconstitucional (Díaz, 2004, pp. 4-11).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, “interpretando los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para reconocer a una defensa válida es parte de las garantías de defensa en casos penales” (Reinaldo Figueroa Planchart vs. República Bolivariana de Venezuela, 2000).

En la sentencia del 30 de mayo de 1999, caso Castillo Petruzzi y otros vs. Estado Peruano”, en el fundamento 141, la Corte IDH establece sobre las partes durante un proceso penal tienen derecho a una adecuada defensa, por lo que, compone un estado de indefensión prohibido por el pacto de San José de Costa Rica llamada también Convención Americana sobre Derechos Humanos, una actuación o presencia de un defensor puramente formal.

2.3. Definición de Términos Básicos

2.3.1. Principio de igualdad de armas

“El principio de igualdad de las partes se considera cumplido si tanto el acusador como el imputado en el caso procesal poseen de los medios de defensa y ataque e iguales posibilidades de acusación, prueba y refutación” (Gimeno, 2020, p. 78).

2.3.2. Derecho de defensa

El derecho a la defensa procesal es una garantía fundamental de un juicio justo e incluye una serie de derechos, entre los cuales creemos que todo ciudadano a tiene derecho a ser acudido por un abogado de su elección o, por un abogado oficio, al obtener una defensa técnica como resultado de ser citado o detenido por las autoridades. Una posición de fianza en este campo significa que el acusado debe estar asistido por un abogado defensor que sea el más adecuado para conducir bien un proceso (Peña, 2014, p. 22).

2.3.2.1. Defensa material

San Martín (2014) considera que “al igual que la protección técnica, la protección material también forma parte del derecho de defensa. Una defensa incluye esencialmente el derecho del acusado a defenderse; impugnar el cargo, negar, permanecer en silencio o allanándose a la pretensión punitiva del Ministerio Público” (p. 425).

2.3.2.2. Defensa técnica

“La defensa técnica es un servicio fundamental que en ocasiones se proporciona incluso a pesar de la voluntad o decisión del imputado, ya que perfecciona su capacidad para afrontar con eficacia e igualdad el proceso penal” (San Martín, 2014, p. 426).

2.3.3. Proceso penal

Franco (2009) considera “al proceso penal como el medio de control social, que accede al estado lograr ciertos objetivos al imponer una norma jurídica a los individuos” (p. 19).

Mientras que Barrios (2002) considera que “el proceso penal posee un carácter complejo: la protección del inocente, el juicio del culpable, la formalidad del procedimiento y la estabilidad jurídica de la pena” (p. 63).

2.3.3.1. Principio del derecho procesal penal

“El principio del derecho procesal recae en los operadores del ordenamiento jurídico que deben respetar una serie de derechos, garantías, principios y libertades en beneficio de las personas involucradas” (Salas, 2011, p. 97).

2.3.4. Conclusión anticipada

“El principio de consenso durante el proceso penal establece que las partes tengan la potestad de acordar la forma procesal en que se trasladará la causa penal, o incluso sobre el contenido real y jurídicamente penal de una causa” (Del Río, 2008, pp. 180-181).

Sánchez (2006) precisa que la conclusión anticipada es el proceso que se introduce como mecanismo de simplificación procesal, se ha incorporado recientemente a los códigos procesales, cuyo objeto es impedir la continuidad del proceso judicial, establecer un acuerdo entre fiscal e imputado sobre la aceptación de culpabilidad en tribunal, la primera tarifa y por lo tanto podría recibir una reducción de penalización de 1/7 parte.

2.3.4.1. Justicia penal negociada

Ugaz & Robles (2016) sostienen que las negociaciones de justicia penal se consideran tradicionalmente como un mecanismo mediante el cual las partes acuerdan la naturaleza de una disputa penal, y se ha demostrado que la justicia penal se centra en la justicia negociada como el término más amplio de la justicia restaurativa, una oportunidad para reintegrar a los delincuentes a la sociedad y satisfacer las necesidades de las víctimas.

Ugaz & Robles (2016) también establecen que esta “justicia penal negociada fue construida como una herramienta para solucionar los conflictos que surgen en la sociedad, retomando así el concepto de resolución final de los conflictos sociales, restauración de la paz social perturbada por las violaciones de las normas” (pp. 10-24).

Asimismo, Ugaz & Robles (2016) consideran que el proceso de negociación en el que es necesario analizarlo porque ambas partes involucradas en el conflicto, incluidos los perpetradores y las víctimas, superan el conflicto con comprensión, permiten prevenir daños concretos y facilitan el papel del mediador como garante de los acuerdos celebrados entre las partes.

Capítulo III

Metodología

3.1. Tipo de Investigación

3.1.1. Según el enfoque de la investigación

La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que buscó comprender el problema en su texto real mediante el uso a dos instrumentos, el primero con la técnica de recolección de datos donde se efectuó el análisis de resoluciones judiciales sobre conclusión anticipada, y el segundo con una guía de entrevista realizada a jueces, fiscales y abogados especialistas en derecho pena, del módulo de justicia de Paucarpata.

3.1.2. Según el propósito intrínseco de la investigación

La presente investigación tuvo el propósito descriptivo, puesto que se describió cómo en los casos de conclusión anticipada no se garantiza el derecho de defensa, mediante dos instrumentos de recolección de datos, como el análisis de 10 resoluciones judiciales y una entrevista a 4 jueces, 4 fiscales y 2 abogados especializados en el área penal.

3.1.3. Según el propósito extrínseco de la investigación

Esta investigación tuvo un propósito de investigación pura o teórica, ya que probó dar un nuevo conocimiento de la razón por qué y cómo se da la violación al derecho de defensa en los casos de conclusión anticipada buscando la aplicación de los conocimientos adquiridos para poder modificar, derogar o promulgar leyes para brindar una tutela jurisdiccional efectiva.

3.1.4. Según su aproximación a las fuentes de información

La presente investigación presentó fuentes de investigación bibliográfica y documental, lo que permitió obtener información de autores que tuvieron puntos de vista respecto al tema de investigación, que nos ayudó a construir un nuevo conocimiento y una posible alternativa de solución al problema encontrado.

3.1.5. Según el método de investigación

Incluye una teoría fundamentada porque, siendo un método cualitativo, permite una mejor comprensión de la experiencia humana subjetiva, en el caso la experiencia de cualquier experto en materia penal, ya sea un juez fiscal y abogado. Asimismo, la presente investigación tiene nivel básico, porque se utilizaron dos categorías de estudio (el derecho de defensa y la conclusión anticipada).

3.2. Muestra

Como muestra para la presente investigación se efectuó el análisis de expedientes completos del módulo de justicia de Paucarpata de 2019-2020 en los que se solicitó una conclusión anticipada, en las que se observó si existe un debido proceso en correlación con el derecho de defensa, también entrevistas que se ejecutaron a especialistas en derecho penal, que brindaron información relevante para llegar así al objetivo principal de la investigación.

a) La muestra comprendió 10 expedientes del módulo de justicia de Paucarpata de los años 2019 y 2020, que son de conclusión anticipada los que se detallaran a continuación:

Tabla 1*Lista de expedientes*

Lugar	Muestra
Arequipa-Paucarpata	• Exp. 09197-2019-0-0401-JR-PE-01
	• Exp. 09396-2019-0-0401-JR-PE-02
	• Exp. 04470-2020-0-0401-JR-PE-02
	• Exp. 10518-2019-0-0401-JR-PE-01
	• Exp. 04459-2019-41-0401-JR-PE-01
	• Exp. 00472-2020-21-0401-JR-PE-01
	• Exp. 07602-2019-30-0401-JR-PE-01
	• Exp. 07479-2019-65-0401-JR-PE-01
	• Exp. 04338-2019-29-0401-JR-PE-01
	• Exp. 06202-2019-33-0401-JR-PE-01

b) Para la aplicación de las entrevistas, la muestra se dirigió a especialistas en derecho penal entre jueces, fiscales y abogados litigantes que hayan participado en procesos de conclusión anticipada en la ciudad de Arequipa.

Tabla 2*Muestra de entrevistas*

Lugar	Muestra
Arequipa	• Cuatro (4) jueces
	• Cuatro (4) fiscales
	• Dos (2) abogados litigantes

3.2.2. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra

3.2.2.1. Criterios de inclusión

Se consideraron para la muestra de esta investigación:

- Profesionales especialistas en derecho penal.
- Abogados litigantes que han participado en procesos de conclusión anticipada.
- Expedientes judiciales de conclusión anticipada del módulo de justicia de Paucarpata.

3.2.2.2. Criterios de exclusión

No se consideraron como muestra de esta investigación:

- Profesionales especializados en ramas como derecho civil, laboral, ambiental entre otros.
- Estudiantes de derecho.
- Expedientes judiciales de otros módulos de justicia.

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

3.3.1. Técnicas de recolección de datos

Para la técnica de recolección de datos que se empleó para el desarrollo de la investigación fue la entrevista semiestructurada, la cual se aplicó a profesionales especializados en derecho penal. También se hizo un análisis de expedientes judiciales del módulo de justicia de Paucarpata sobre la aplicación de la conclusión anticipada, que fueron señalados en la muestra.

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos para la recolección de datos son los siguientes:

- Guía de entrevista, que se realizó a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal, seleccionados previamente.
- Análisis documental de 10 expedientes judiciales del módulo de justicia de Paucarpata de casos de conclusión anticipada.

3.3.3. Proceso de recolección de datos

Ya fijados los métodos de recopilación de datos, fue preciso recopilar la información para medirlas, por lo que se contó con la colaboración de colegas fiscales y jueces quienes cooperaron con responder con la entrevista sobre conclusión anticipada que se planteó.

- El fichaje, se efectuó especialmente para el análisis individual de información, fue obtenido de sentencias judiciales, obras, artículos y sistematización de análisis de información.
- La guía de entrevista semiestructurada se empleó mediante un cuestionario de preguntas semiestructuradas, el cual fue validado por 02 expertos maestros en derecho penal, permitiendo conseguir información valiosa de una muestra dirigida a nuestra unidad de análisis, organizar una entrevista implica:

A. Coordinar, planear, controlar y dirigir su aplicación

B. Determinar con muestras las unidades de análisis a entrevistar

C. Determinar la estrategia a seguir para seleccionar las utilidades de análisis

D. Ordenar el material de la entrevista

3.4. Procesamiento para el análisis de datos

Considerando que el enfoque es cualitativo, se obtuvo resultados de dos instrumentos, uno de descripciones de los resultados de la entrevista a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal del módulo de justicia de Paucarpata, y el otro de los resultados de la ficha de revisión documental donde se analizaron 10 expedientes completos del módulo de justicia de Paucarpata de 2019-2020, con un tipo de investigación descriptiva, lo que nos brindó información relevante y permitió que podamos llegar hasta una óptica necesarias y llegar a una conclusión general que nos pueda permitir dar una alternativa de solución.

El tratamiento de los datos conseguidos de los análisis de expedientes y las entrevistas se procesaron en el *software* ATLAS.TI 9.

3.5. Aspectos Éticos

3.5.1. Integridad científica

En la presente investigación se usaron de forma correcta los métodos de investigación, que establecen la forma en la que se desplegara la investigación, para que la información presentada en este trabajo se pueda verificarse y repetirse.

3.5.2. Conflicto de intereses

En la presente investigación no existen beneficios propios ni para terceros, que influyan en la objetividad de la investigación.

3.5.3. Mala conducta científica

Para la presente investigación no se distorsionó ningún resultado que favorezca de alguna manera al trabajo.

3.5.4. Plagio y auto plagio

En la presente investigación no se cometió plagio ni auto plagio, ya que toda idea que no sea de mi autoría fue citada con su respetivo autor conforme lo establece la norma APA, seguida con su referencia bibliográfica.

3.5.5. Comité de ética en investigación

La presente investigación paso por un Comité de Ética, que revisó y aprobó el protocolo de estudio que se efectuó, para la realización de esta investigación.

Capítulo IV

Resultados y Discusión

4.1. Categorías de análisis

Romero (2005) sobre categoría de análisis sostiene lo siguiente:

La categorización involucra establecer concepciones a niveles más abstractos, y las categorías tienen poder conceptual debido a su facultad para congregar subcategorías o grupos conceptuales. En el momento que el investigador comienza a congrega conceptos, comienza también las posibles relaciones entre conceptos de un mismo fenómeno (pp. 1-7).

Esta misma autora argumenta lo siguiente: “Las categorías son significaciones procedentes de datos que representan un fenómeno. Los fenómenos son ideas analíticas conexas que surgen de nuestros datos” (Romero, 2005, p. 3).

Ahora bien, dentro de cada categoría habrá que delimitar tipos específicos o subcategorías. Las palabras o expresiones generales que rodean una categoría contienen otras denominadas subcategorías, que se convierten en conceptos que la complementan y especifican, es decir, especifican la categoría. En el trabajo de campo se pueden visualizar subcategorías y desarrollar con más detalle el fenómeno en estudio (Romero, 2005).

Asimismo, como se puede apreciar en la presente investigación, la cual comprende 10 entrevistas realizadas a especialistas, establecidas en la tabla 2, así como el análisis de 10 expedientes del módulo de justicia de Paucarpata de los años 2019 y 2020 señaladas en la tabla 1, los que se acogieron a la conclusión anticipada, siendo las fuentes de información de acuerdo con las categorías 1, 2, y 3, los cuales dan origen a un

hecho los cuales son denominados fuentes, siendo la ley, la jurisprudencia, la costumbre, doctrina, fundamental para el derecho y para el presente análisis investigativo.

Tabla 3

Identificación de las categorías

Categorías de análisis	
Categoría 1	Información del módulo de justicia de Paucarpata entre los años 2019-2020, en los casos de conclusión anticipada relativos a garantizar el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado
Categoría 2	Evaluación de la indefensión del imputado o agraviado en los casos del módulo de justicia de Paucarpata generado por la existencia de ineficacia del abogado.
Categoría 3	Comprensión de las fuentes doctrinarias y normativas citadas por el módulo de justicia de Paucarpata para los casos de conclusión anticipada durante el 2019 y 2020, que garanticen un derecho de defensa eficaz.

Tabla 4*Sistema de categorías del objetivo general*

Objetivo general	Categoría	Descripción operacional	Subcategorías	Ítem
Determinar si el derecho de defensa del imputado por el abogado de libre elección, se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).	Información del módulo de justicia de Paucarpata entre los años 2019-2020, en los casos de conclusión anticipada relativos a garantizar el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado.	Conjunto de datos que evidencian la eficacia del derecho de defensa por parte del abogado defensor.	Defensa eficaz	1
			Indefensión del	2
			imputado	3
				4

Tabla 5*Sistema de categorías del objetivo específico 1*

Objetivo específico	Categoría	Descripción operacional	Subcategorías	Ítem
Determinar si en los casos de conclusión anticipada de juicio oral, el ejercicio profesional del abogado genera la indefensión del imputado, en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).	Evaluación de la indefensión del imputado o agraviado en los casos del módulo de justicia de Paucarpata generado por la existencia de ineficacia del abogado.	Conjunto de parámetros que midan la eficacia de la defensa por parte del abogado defensor.	Control del	5
			derecho de defensa	6

Tabla 6*Sistema de categorías del objetivo específico 2*

Objetivo específico	Categoría	Descripción operacional	Subcategorías	Ítem
Analizar las fuentes doctrinarias y normativas para resolver los casos de conclusión anticipada relativos al derecho de defensa, según sentencias dictadas en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).	Comprensión de las fuentes doctrinarias y normativas citadas por el módulo de justicia de Paucarpata para los casos de conclusión anticipada durante el 2019 y 2020, que garanticen un derecho de defensa eficaz.	Se considera el recojo de las fuentes citadas por los magistrados que garantizan un derecho de defensa eficaz.	Acuerdo propuesto	7
			Debido proceso	8

Resultados

Como se puede ver en las tablas 4, 5, y 6, están de acuerdo con el objetivo general, y los objetivos específicos, en los que se denota de acuerdo con las sentencias, los casos de conclusión anticipada, siendo la defensa eficaz del imputado, parte de los sujetos procesales fundamentales; en la cual, está el acusado particular, el juez, la defensa del imputado. Así también, entre los derechos que tiene la persona se encuentra el derecho a la legítima defensa y a la asistencia jurídica en el proceso penal, esta asistencia deberá ser brindada por un abogado preparado en derecho, el cual le asesore, en todos los procesos, la defensa del imputado debe ser un profesional abogado, es quien brinda la defensa, y lo realiza de acuerdo con el procedimiento penal, siendo este abogado, quien brinda la defensa técnica, desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia, y en caso de inasistencia es posible la suspensión.

El abogado defensor es un sujeto fundamental, que es parte procesal parcializada en favor de su defendido, cuyo accionar está enmarcado en la constitución política del Perú, en el cumplimiento de las leyes, guardando acciones éticas frente a la otra parte.

4.2. Resultados

4.2.1. Resultado de entrevistas

En el presente trabajo, la información conseguida es fruto de las entrevistas efectuadas a cuatro fiscales, cuatro jueces, y dos abogados, los cuales colaboraron en responder las preguntas que se les hizo de acuerdo con el instrumento que se anexó en el presente trabajo, en donde los señores magistrados realizan su trabajo, que han participado en procesos de conclusión anticipada; de la misma forma hemos realizado el análisis de expedientes, un total de 10 casos investigados y sentenciados, llevados por el

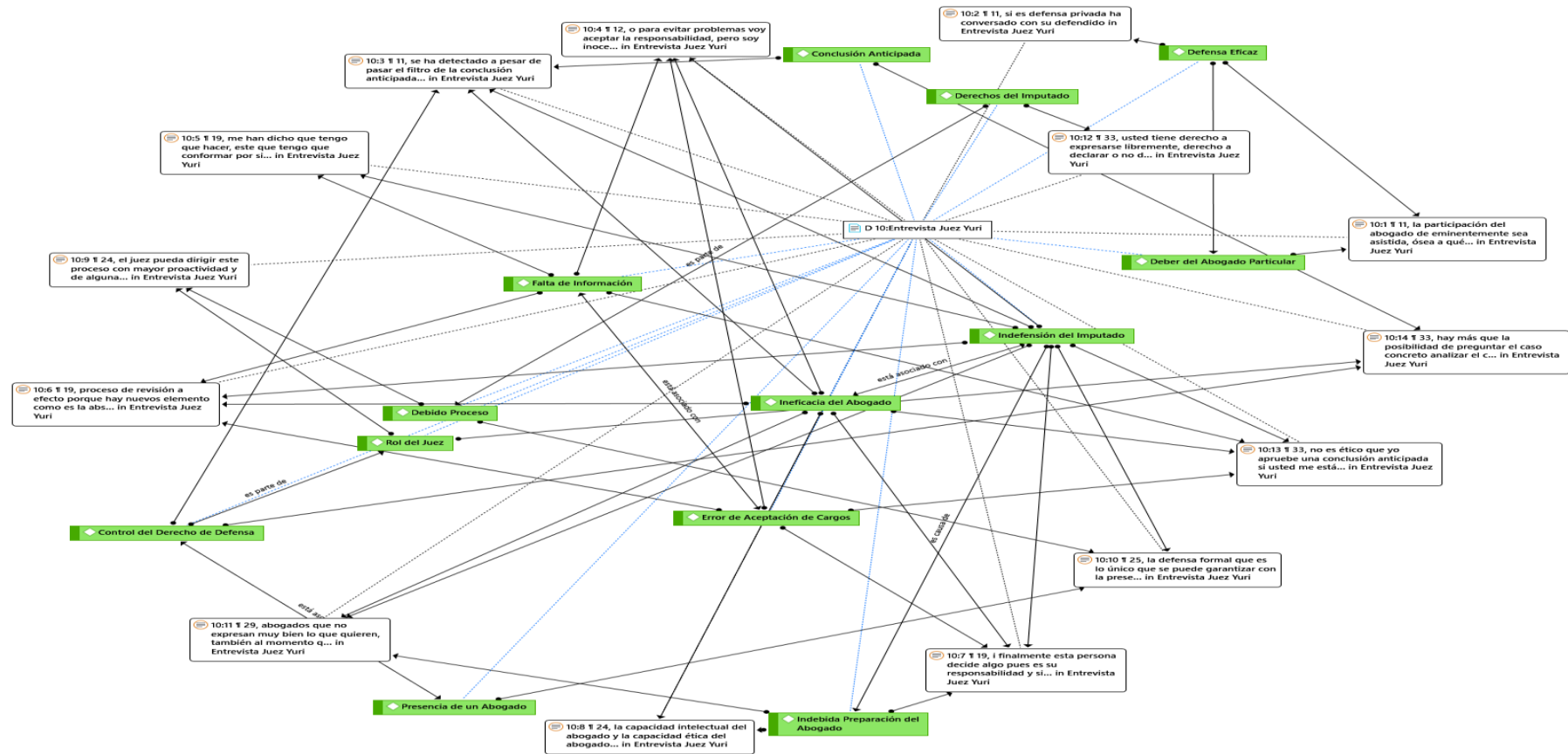
módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa, los que fueron codificados y procesados mediante el programa *software* Atlas Ti 9.

Por ende, para la recolección de información se empleó un instrumento elaborado anticipadamente, con 08 preguntas referidos a los objetivos de la investigación. Las entrevistas se realizaron en el mes de julio del 2022; anticipadamente, se pactó con cada entrevistado la hora y fecha respectivamente (previa coordinación, a través de WhatsApp). Así mismo, acorde al contexto actual que estamos pasando por el covid-19, las entrevistas se efectuaron a través de medios virtuales, en este caso por videollamada en Google Zoom, las cuales fueron grabadas y posteriormente transcrita.

Por último, para la compilación de información de las sentencias se empleó la guía de análisis de contenido, que de la misma forma se ha codificado con el apoyo del programa Atlas. Ti 9.

Figura 1

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado A.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

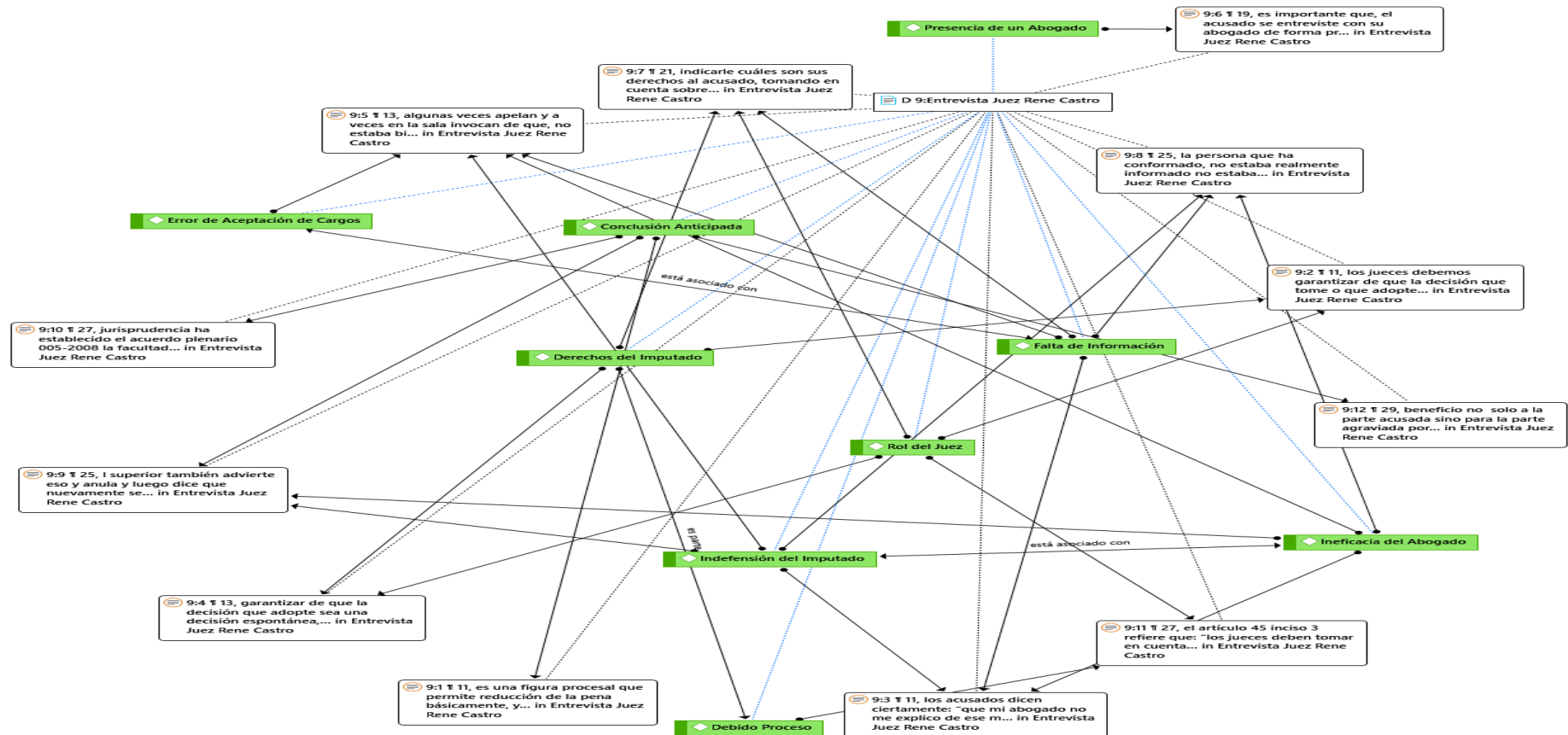
En la figura 1, se puede inferir lo siguiente: que la capacidad intelectual del abogado y la aplicación de la ética de parte del juez, como se puede apreciar en esta entrevista realizada y de acuerdo con los resultados de la red de codificación, se determina que no existe un compromiso personal de ser parcial en el juzgamiento, en relación con los estándares de la aplicación de la ética profesional para ambas partes, lo cual supone un ejercicio de la profesión con honestidad. En donde tiene que haber un juzgamiento de acuerdo con el cumplimiento del rol, como es la conclusión anticipada. De la misma forma, otro punto donde se puede denotar la defensa privada, es cuando se conversa con el defendido, como es el caso de los derechos del imputado, el cual tiene derecho a expresarse libremente, derecho a declarar o no, y en el debido proceso.

Así mismo, indica que la única manera de garantizar el derecho de defensa formal es con la presencia del abogado, pues así sí se garantiza el proceso por parte del control del juez, además cuando no hay juicio es imposible saber si la persona está siendo asesorada adecuadamente y en el derecho generalmente no podemos utilizar los conceptos del bien o mal. También se puede denotar el rol del juez, el cual puede dirigir el proceso con mayor proactividad, y en el caso de ineficacia del abogado, existe la posibilidad de realizar preguntas en concreto y con análisis. Por otro lado, la indebida preparación del abogado es parte de su responsabilidad, así como su capacidad intelectual y capacidad ética del abogado.

Por último, el entrevistado menciona que muchas personas aceptan la responsabilidad, más allá, de ser culpables o no, esto con el fin de no tener más problemas como ellos lo mencionan, aunque muchos siguen indicando que son inocentes.

Figura 2

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado B.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 2, se puede observar que el juez entrevistado manifiesta de la conclusión anticipada lo siguiente: es una figura procesal que permite la reducción de la pena básicamente y asegura un resultado menos drástico al imputado. Los jueces deben garantizar que la decisión que se tome o que adopte, sobre todo el acusado, sea una decisión libre y voluntaria; para lo cual, siempre se le pregunta insistentemente más de una oportunidad si la decisión de acogerse o adoptar esta alternativa de la conclusión anticipada es de forma libre y voluntaria.

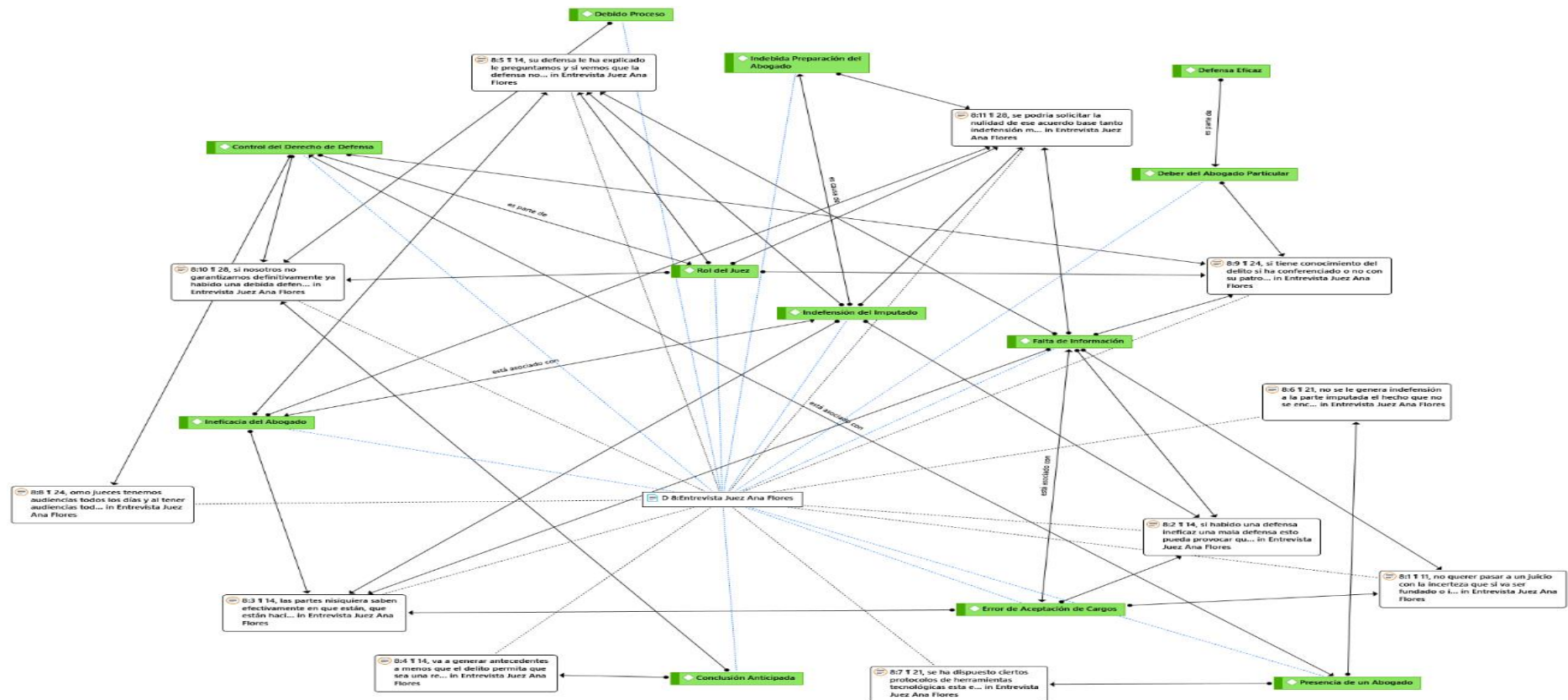
De la misma forma, podemos ver que se hace la observación, de que en muchos casos los acusados sostienen ciertamente: “que mi abogado no me explicó de ese modo, en todo caso pido que se me dé un espacio de tiempo para conversar nuevamente”. De este modo lo que se busca es garantizar que se adopte una decisión espontánea, y no porque alguien lo haya obligado o coaccionando. Pues por la máxima de la experiencia, en algunas ocasiones apelan y a veces en la sala invocan de que no estaban bien informados, de que no les han entendido, no les ha explicado bien su abogado. Y, por tanto, la decisión que adoptó no era la adecuada, por ello, es importante que el acusado se entreviste con su abogado de forma presencial o física; así mismo, el entrevistado manifiesta que se debe indicar cuáles son sus derechos al acusado, tomando en cuenta sobre todo el grado de instrucción que tiene esta persona.

Ahora bien, el juez superior también puede advertir eso y lo anula; y, luego sostiene que nuevamente se instaure o se instale la audiencia de prisión, entonces en algunas situaciones cierto excepcionalmente, escapa el control. Por último, el beneficio no solo es para la parte acusada sino para la parte agraviada porque, la mayor parte de los

casos que realizo el entrevistado en los procesos de conclusión anticipada siempre se valora el pago de la reparación civil.

Figura 3

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado C.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

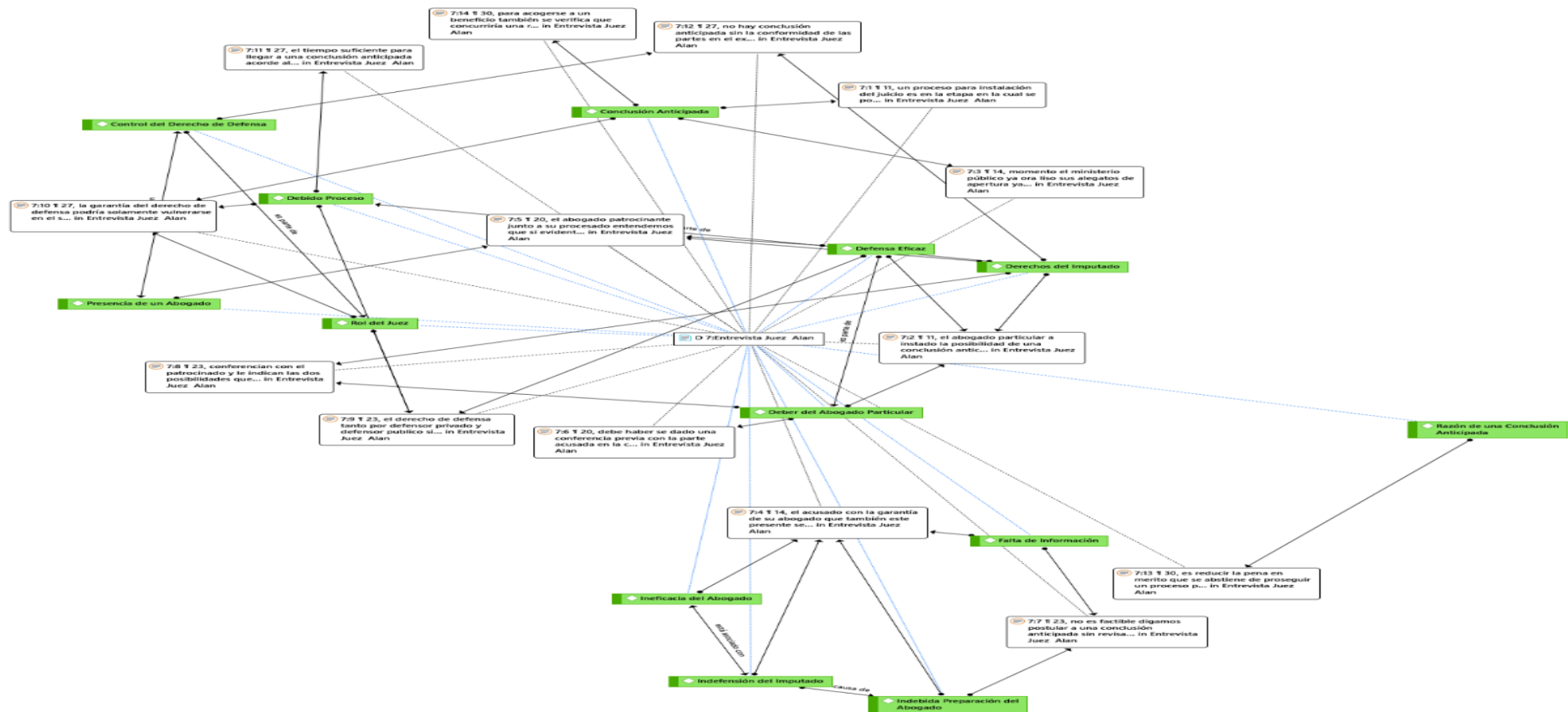
Interpretación

En la figura 3, se desprende que se debe verificar que en los casos exista evidencia delictiva, porque en muchos de estos casos se llega por no querer pasar a un juicio con la incerteza de si va ser fundado o infundado o lo van a absolver o lo van declarar culpable, ya que el entrevistado argumenta que, si ha habido una defensa ineficaz o una mala defensa, esto puede provocar que la parte incluso termine aceptando hechos que no le corresponde. Como se puede interpretar algunas veces las partes ni siquiera saben efectivamente en que están o que están haciendo una audiencia y no saben efectivamente en dónde es que se encuentran y solamente cuando la defensa sostiene que diga que sí, entonces sostienen sí de forma repetitiva. En esa línea de ideas, existen situaciones donde a la defensa se le pregunta y observa que esta no le ha explicado o no le ha dicho claramente cuáles serían las consecuencias de la responsabilidad al acusado, incluso se podría solicitar que se le subrogue la defensa y nombrar una defensa del Estado. Sin embargo, el entrevistado postula que no se le genera indefensión a la parte imputada el hecho que su abogado no se encuentre presente en las audiencias específicamente, amparándose a ciertos protocolos de herramientas tecnológicas que el Ministerio Público aprobó en el 2020 y el Protocolo del Poder Judicial que se aprobó en el 2020. Con estos protocolos se permite seguir cierto lineamiento que no va a provocar una indefensión a la parte imputada. Además, el entrevistado como juez tiene el rol de consultar al abogado defensor ¿si tiene conocimiento del delito? ¿si ha conferenciado o no con su patrocinado? Y, si no ha conferenciado se le da un tiempo para que lo haga o si no se reprograma la audiencia, así se garantiza definitivamente que haya una debida defensa, una debida tutela de cada uno de los derechos. Por el contrario, si no se dan estas pautas, lo que va a generar es indefensión a la parte y que provocaría ello que en algún momento este acuerdo pueda ser incluso deducido por nulidad se podría solicitar la nulidad de ese acuerdo, ya sea por

indefensión o mala defensa o que no se le ha explicado claramente cuáles eran sus derechos entonces si tenemos que verificar efectivamente esta garantía.

Figura 4

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado D.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

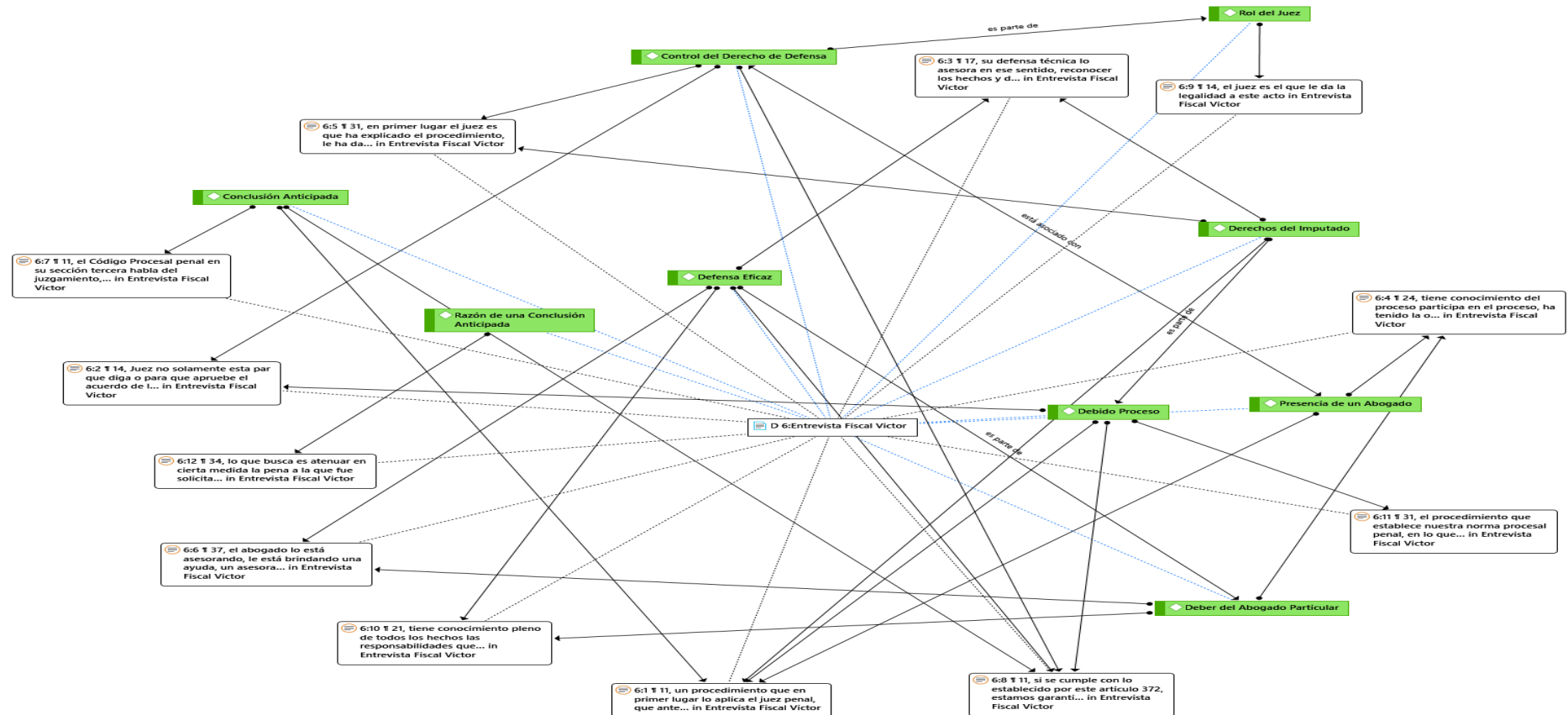
En la figura 4, se puede interpretar que el juez, en un proceso para la instalación del juicio, cede el uso de la palabra para que se postule justamente la conclusión anticipada, por ello, se ha de suponer que el abogado particular ha instado la posibilidad de una conclusión anticipada, es que ya anteriormente ha dialogado con su patrocinado para esta posibilidad. Entendemos también que lo ha instruido de los beneficios que otorga la ley y también de las consecuencias que corresponde a una conclusión anticipada y a una admisión de culpabilidad y reparación civil, se entiende que, para ese momento el Ministerio Público ya oralizó sus alegatos de apertura, ya hay una interacción propiamente dicha en un juicio oral, por ello, el acusado con la garantía de su abogado que también este presente se le hace esta consulta si conoce los hechos narrados por el Ministerio Público previa consulta con su abogado se le da un tiempo consulte con su abogado.

Ahora bien, es necesaria la asistencia física del abogado defensor, pues el abogado patrocinante juntó a su procesado entendemos que si evidentemente habría una garantía un poco más estrecha, puesto que puede dialogar directamente con la persona con su doctor, puede conferenciar individualmente. Cabe resaltar que no es factible digamos postular a una conclusión anticipada sin revisar un adecuado estudio del legajo que acompaña el expediente.

De igual forma, la garantía del derecho de defensa podría solamente vulnerarse en el sentido de hacer esta postulación de conclusión anticipada de forma apresurada, por ello es que los jueces y el propio abogado y el fiscal, verifican si faltan detalles para afinar una conclusión anticipada, no hay conclusión anticipada sin la conformidad de las partes en el extremo civil y el extremo penal.

Figura 5

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado E.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 5, señala que partamos por el Código Procesal Penal que en su sección tercera trata del juzgamiento, dentro de esa sección, está el título tercero que es el desarrollo del juicio y específicamente nos vamos al artículo 372, un procedimiento que en primer lugar lo aplica el juez penal, que ante la pregunta que le hace al acusado, en ese momento de la instalación del juicio oral, si es que considera que los cargos que imputa el Ministerio Público, los ha cometido o no y le pide inclusive que antes de contestar deba conferenciar con su abogado defensor. Si se cumple con lo establecido por este artículo 372, se garantiza plena y netamente el derecho de defensa tanto del acusado como de la parte agraviada.

El entrevistado, que es fiscal, indica que el juez no solamente está para que diga o para que apruebe el acuerdo de las partes, si no él es el que verifica si ese acuerdo está, tanto en cuanto a la magnitud de la pena como la reparación civil, es proporcional, es razonable y es legal. Por ello, la defensa técnica debe asesorar en ese sentido, reconocer los hechos y de igual manera, ello implicaría que ellos pudieran negociar.

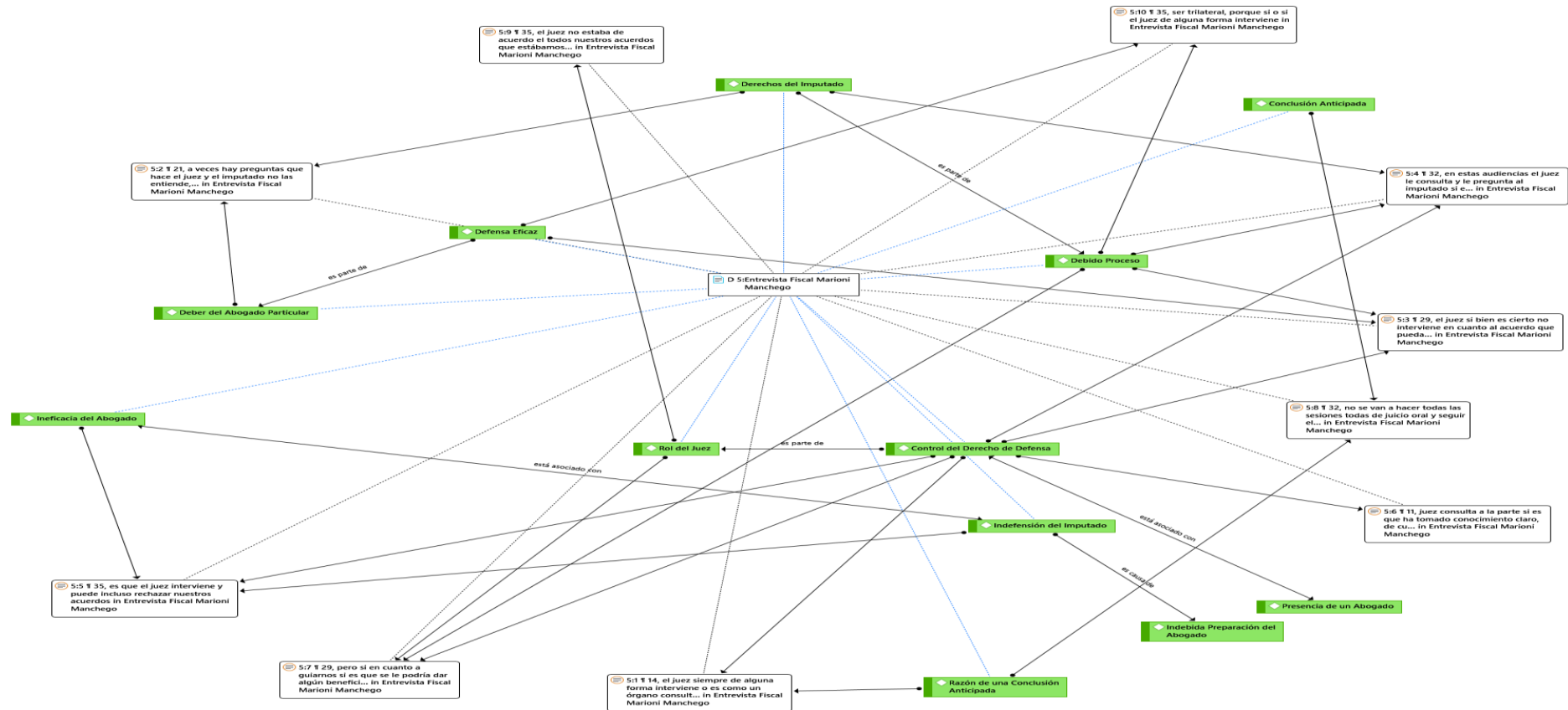
De la misma forma, el abogado defensor tiene conocimiento del proceso, participa en el proceso, y ha tenido la oportunidad de ofrecer medios probatorios, el derecho de defensa está garantizado desde un inicio, se sigue el procedimiento que establece nuestra norma procesal penal, en lo que es el juzgamiento propiamente dicho, viendo todos esos pasos estamos garantizando el derecho a la defensa de las partes.

Esta figura de la conclusión anticipada lo que busca es atenuar en cierta medida la pena a la que fue solicitada por el Ministerio Público en su acusación, el código lo reconoce y lo establece, y a través de la aplicación de este modelo procesal penal, el

abogado que está asesorando, le brinda una ayuda, un asesoramiento para que pueda tener una sentencia más benigna, no ventajosa, porque una sentencia es un mal precedente, es un antecedente, pero una sentencia más benigna.

Figura 6

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado F.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

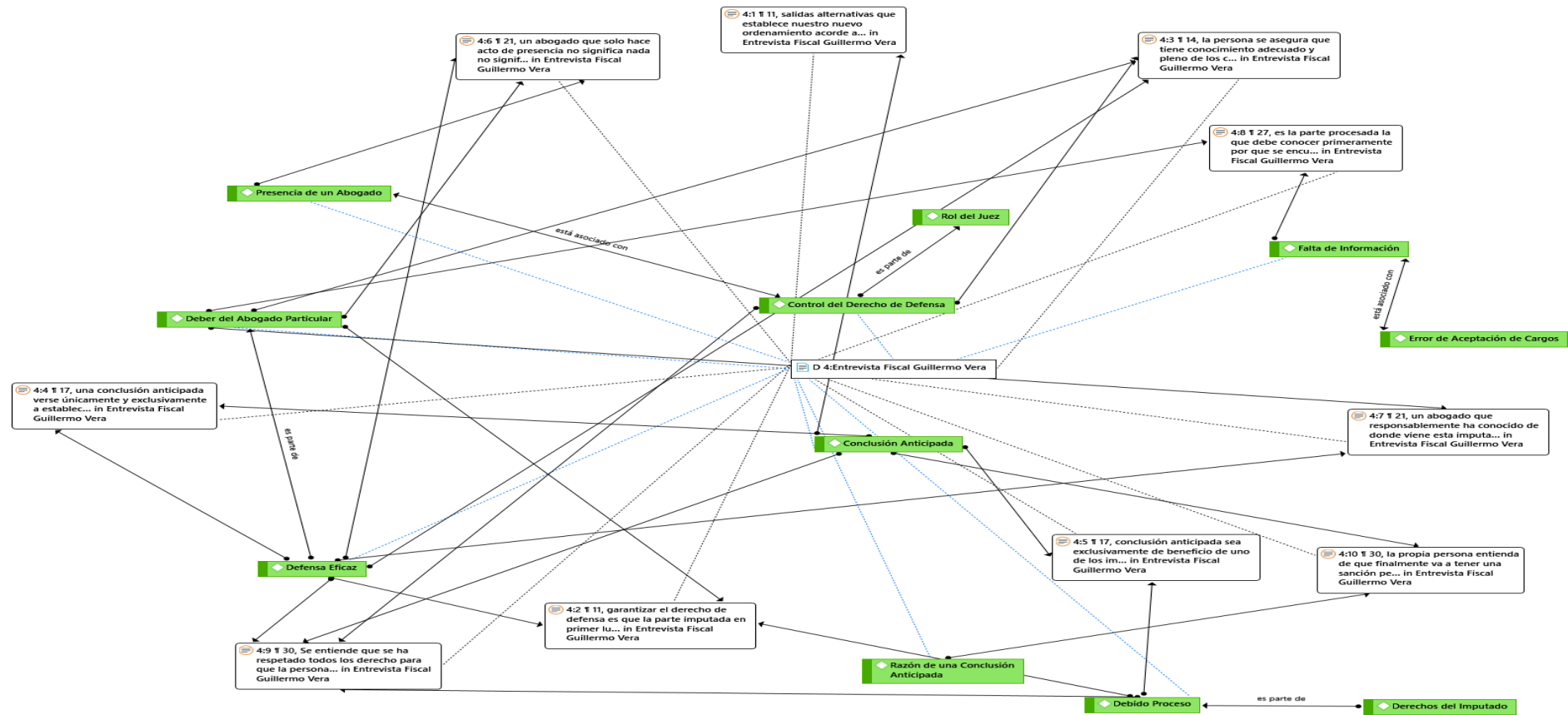
En la figura 6, podemos consolidar lo siguiente del entrevistado: el juez consulta a la parte si es que ha tomado conocimiento claro de cuáles son los hechos que se le está imputando a su patrocinado, y es que lo que se busca es que tenga conocimiento pleno de dichos hechos. Por ello, el juez siempre de alguna forma interviene o es como un órgano consultor en cuanto a aquellos descuentos que da el Ministerio Público, pues se supone que por conclusión anticipada se realiza el séptimo en cuanto a la reducción de la pena.

A veces hay preguntas que hace el juez y el imputado no las entiende, entonces el abogado tiene que explicarle de una forma más pausada a su patrocinado, el juez si bien es cierto no interviene en cuanto al acuerdo que pueda llegar el Ministerio Público con el imputado, pero sí es como un consultor en ciertas circunstancias, puesto que cada juez tiene su propio criterio. De igual forma, en cuanto a guiarnos, se le podría dar algún beneficio adicional o si es que queda ahí noma el descuento respecto al séptimo de la conclusión nada más, es que en las conclusiones anticipadas se da este beneficio del descuento del séptimo.

En este tipo de audiencias, el juez le consulta y le pregunta al imputado si es que él acepta los actos que se le estén atribuyendo el Ministerio Público y si él lo acepta es que recién podemos pasar a la conclusión anticipada. Sin embargo, existen casos donde, el juez no acepta estos acuerdos que se están tratando de plantear con la parte investigada y el plantea su disconformidad, y es que el juez interviene y puede incluso rechazar los acuerdos.

Figura 7

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado G.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

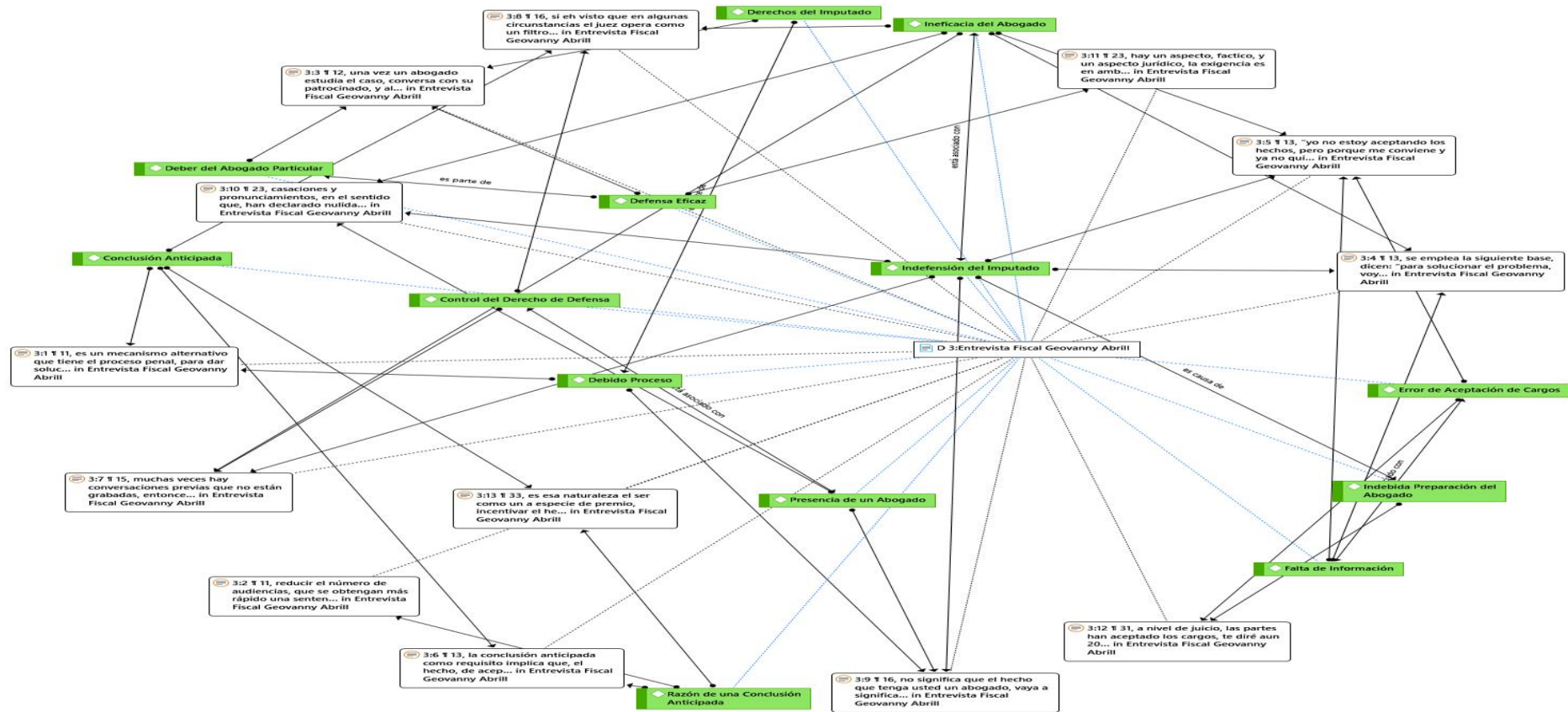
Interpretación

En nuestra figura 7, de acuerdo con la entrevista efectuada, se puede apreciar que las salidas alternativas que establece nuestro nuevo ordenamiento acorde a la naturaleza de esta institución es la de garantizar el derecho de defensa. Y es que la parte imputada en primer lugar debe verificar que haya habido un emplazamiento válido desde un inicio de las investigaciones ya sea a través de una notificación válida y a la vez también ya sea haciéndole conocer tanto los alcances de la denuncia que se ha presentado la imputación que se maneja en su contra y el avance respectivo de la diligencia, llámese en los actos de investigación. Una vez que la persona asegura tener conocimiento adecuado y pleno de los cargos, recién se pasa a una etapa de negociación donde la naturaleza de la sanción lo que busca es acercar lo más posible la consecuencia de un suceso delictivo a establecer la responsabilidad de una persona. Todo ello, con una conclusión anticipada, es por eso, que se sostiene que esta figura solo debe verse únicamente y exclusivamente para establecer la responsabilidad individual de la persona que se acoge a una salida alternativa propiamente dicha. La conclusión anticipada puede ser exclusivamente de beneficio de uno de los imputados, y no compromete al resto de los procesados; y, que no sea para generar impunidad puede ser vista acorde a los aspectos que contempla nuestro Código Procesal Penal, pero si conllevaría a una conclusión anticipada válida. Respecto al abogado, que solo hace acto de presencia, no significa nada; un abogado tiene que estar comprometido con su participación activa no solo a la audiencia, sino que debe de conocer los antecedentes que vienen de su caso. Un abogado que responsablemente ha conocido de donde viene esta imputación cuáles son los elementos que se tienen y qué conoce a su patrocinado y si conoce las cualidades personales, además si puede asegurar un derecho de defensa.

El fin de la conclusión anticipada es que la persona entienda de qué finalmente va a tener una sanción, pero acogándose a este beneficio premial de disminución de la pena lo que en realidad independientemente respecto a sus derechos considerar una rebaja para poder alcanzar una solución al conflicto.

Figura 8

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado H.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En nuestra figura 8, de acuerdo con la entrevista efectuada, se puede denotar sobre la conclusión anticipada es un mecanismo alternativo que tiene el proceso penal, para dar solución al mismo, en el cual, evidentemente al haber una aceptación de los cargos, hay una recompensa hacia lo que viene a ser la parte imputada; en ese sentido, se genera una reducción en lo que viene a ser la pena, esto genera pues, un beneficio tanto al imputado como al sistema, pues reduce el número de audiencias; ya que se obtiene más rápido una sentencia y no se emplea todo el aparato judicial.

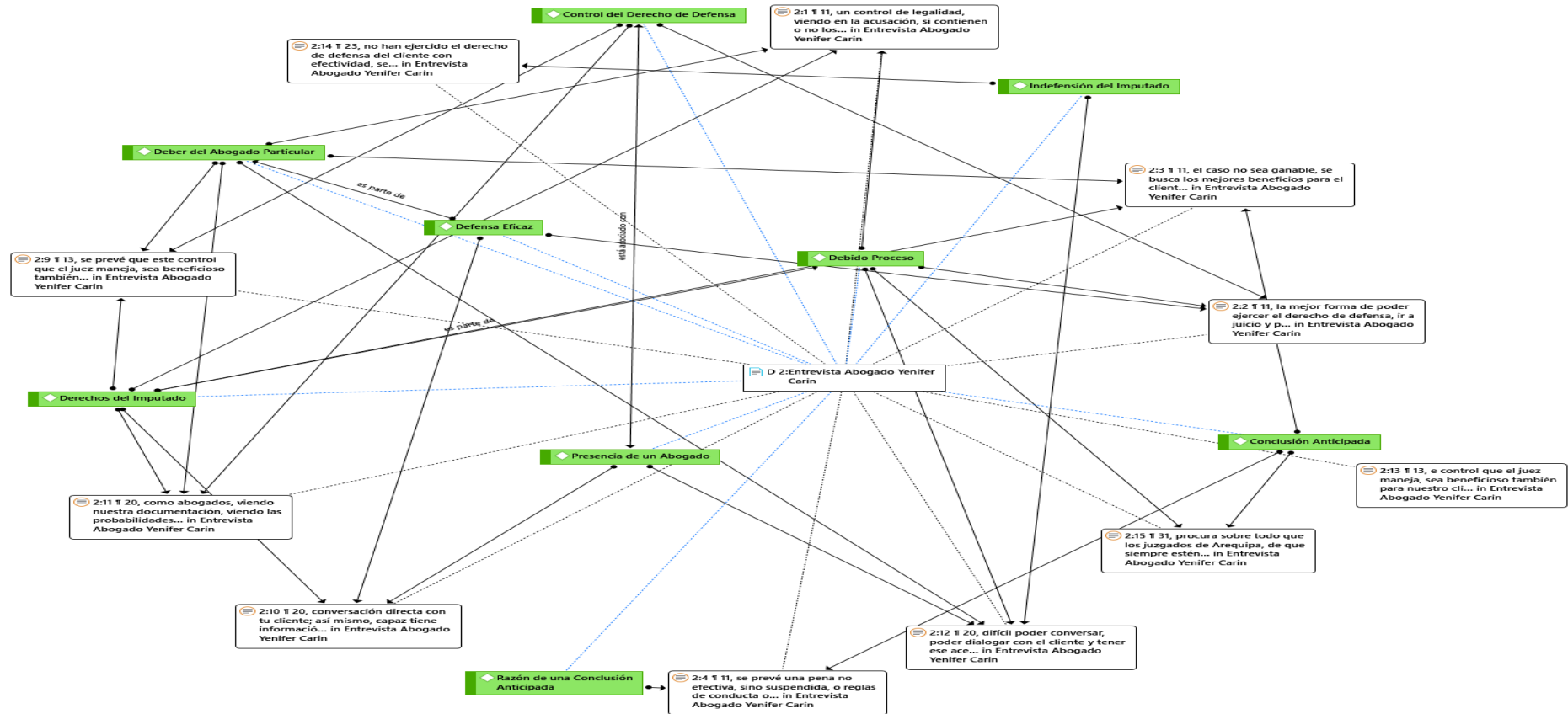
Una vez el abogado estudia el caso, conversa con su patrocinado, y al conversar con este, le va a dar ese margen de opciones o alternativas, que podría tener. En muchas ocasiones se emplea la siguiente base, sostienen: “para solucionar el problema, voy a aceptar los cargos”, “yo no estoy aceptando los hechos, pero porque me conviene y ya no quiero continuar con esto, bueno, voy a aceptar”, la conclusión anticipada como requisito implica que, el hecho, de aceptación de cargos y estar arrepentido del actuar.

En algunas circunstancias, el juez opera como un filtro más, de lo que viene a ser una conclusión anticipada, la cual tiene una directa correspondencia con el derecho de defensa, no significa que el hecho que tenga un abogado, vaya a significar que se está ejerciendo válidamente el derecho de defensa, existen diversas casaciones y pronunciamientos, en el sentido que, han declarado nulidades de sentencia ¿Por qué?, porque el abogado no se encontraba preparado, pues hay un aspecto, factico, y un aspecto jurídico, la exigencia es en ambos niveles entre el hecho, como el derecho para la defensa técnica.

Ahora bien, se puede decir que, la conclusión anticipada tiene la naturaleza de ser como una especie de premio, ya que incentiva el hecho que las personas puedan aceptar los cargos.

Figura 9

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado I.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 9, se puede deducir que la entrevistada asegura que el derecho de defensa, tiene que pasar por un control de legalidad, viendo en la acusación, si contienen o no los elementos requeridos en la acusación. Trátese de fundamentos de narración de hechos y que estos hechos encuadren al tipo penal o calificación jurídica en este caso. Sin embargo, la mejor forma de poder ejercer el derecho de defensa, es ir a juicio y poder probar la inocencia de nuestro cliente, pero si el caso no sea ganable, se busca los mejores beneficios para el cliente, a la cual se les consulta y el mismo cliente nos indica la situación y la veracidad. Es ahí donde se le informa en qué caso y cómo podría desembocar su proceso, se busca una pena no efectiva, sino suspendida, o reglas de conducta o una conversión de pena, por último, se prevé que este control que el juez maneja, sea beneficioso también para nuestro cliente.

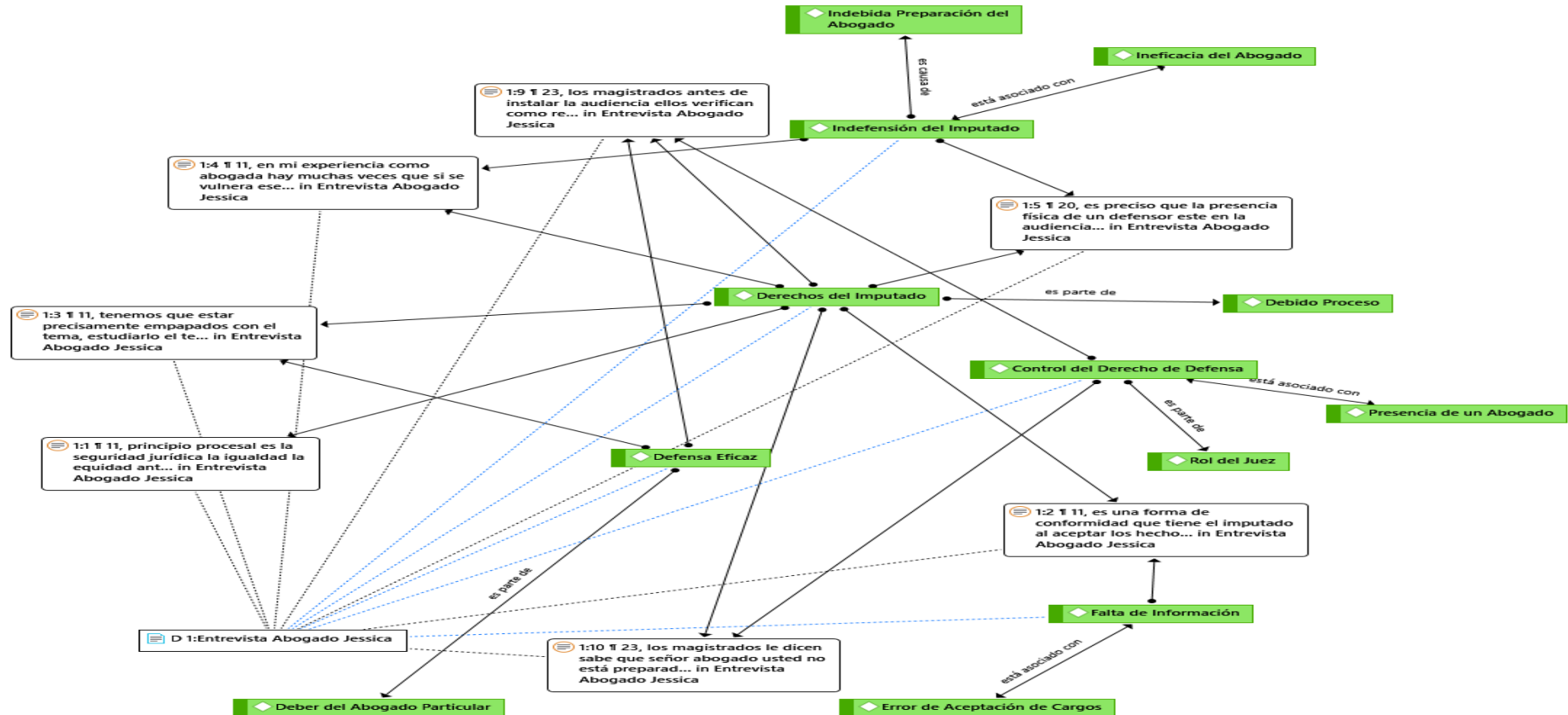
Por tanto, es necesario manifestar el contacto físico y directo con el cliente; así mismo, se debe de ser capaz de tener información, que puede nutrir y puede considerar a la hora de realizar una conclusión o no, ahora bien, como abogados, viendo nuestra documentación, viendo las probabilidades del caso, se debe de ser honesto con el cliente.

La pandemia y la virtualidad dificultó el poder conversar, poder dialogar con el cliente y tener ese acercamiento; ¿por qué?, a veces están detenidos y no se podía contactar y si nos contactamos, nos contactamos vía virtual, pero en este medio, también está el juez, está el Ministerio Público, está el asistente especialista legal y no se puede, porque capaz tiene otra información y requiere hablar más cosas, y como abogados no se pueden dar mayores detalles.

Existen algunos abogados defensores que, no han ejercido el derecho de defensa del cliente con efectividad, se entiende por la carga procesal, que ellos mantienen, pero esa situación, sí transgrede el derecho de defensa de las personas en un proceso ya judicializado.

Figura 10

Red de codificación de categorías de la entrevista realizada al entrevistado J.



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 10 se advierte que uno de los principios procesales es la seguridad jurídica, la igualdad, la equidad ante la ley, la seguridad de dar la garantía de que los derechos procesales no se invaliden; por ello, la conclusión anticipada es una manera de aprobación que tiene el imputado al aceptar los hechos, de acuerdo con ello hay veces en que este derecho no se especifica o no se realiza en la audiencia. En consecuencia, todo abogado tiene que estar precisamente empapado con el tema, estudiarlo; en la máxima experiencia como abogada, hay muchas veces que si se vulnera ese derecho.

Por ello, es precisa la presencia física del defensor en el juicio, porque muchas veces cuando se tiene un caso o se tiene una defensa, no sabemos si el imputado sabe sus derechos, por eso, es importante que el abogado esté presente para instruir e indicarle que es lo que tiene que hacer a su patrocinado.

Cuando el abogado defensor hace denotar que no está capacitado, los magistrados le sostienen: sabe que, señor abogado, usted no está preparado para ejercer esta defensa, por ello, lo vamos a excluir de este proceso; y lo auxilian con un abogado de oficio.

Tabla 7
Triangulación de resultados

Ítem	1	2	3	4	5	6	7	8
Entrevistado A	Se ha detectado a pesar de pasar el filtro de la conclusión anticipada a pesar de este control aparente por unas expresiones de los acusados se ha denotado de que podría haber la posibilidad de ser inocente y que para evitar problemas aceptara la responsabilidad, pero es inocente y eso no existe en la conclusión anticipada.	Garantizar el derecho de defensa desde el punto de vista formal en cualquier caso porque ahí está el abogado defensor desde el punto de vista material complicado.	Completamente independiente no se vulnera sus derechos porque en principio las reglas y por eso es que existe la judicatura, las reglas son para casos genérico, para casos comunes, para casos estándar.	La capacidad intelectual del abogado y la capacidad ética del abogado puede ser que el abogado no quiera ir a un juicio no tenga tiempo no lo revisa bien, no tiene la experticia para saber si se va absolver o no.	Hay abogados que no expresan muy bien lo que quieren, y al momento que se acogen a la conclusión anticipada o sostienen términos que no son adecuados entonces uno ya tiene cuidado si ocurre eso y ay penas fuertes o hay una posibilidad de que la persona sea perjudicado se subroga al abogado.	No es ético que yo apruebe una conclusión anticipada si usted me está diciendo que usted va hacer eso porque ya no quiere más problemas va a aceptar una culpa que no tiene.	Es un beneficio que implica una disminución de la pena simplemente que no necesariamente es hasta un séptimo podría ser un octavo un noveno un décimo es hasta un séptimo y esto se estableció en un acuerdo plenario.	Tenemos el sistema de derecho continental según las palabras del propio San Martín quien se le atribuye la creación del Código Procesal Penal.
Entrevistado B	Los jueces debemos garantizar de que la decisión que tome o que adopte, sobre	Garantizar de que la decisión que adopte sea una decisión espontánea,	El fiscal negocia con la parte que está acogiéndose a la conclusión anticipada a condición de	Es importante que, el acusado se entreviste con su abogado de forma presencial o física	Indicarle cuáles son sus derechos al acusado, tomando en cuenta sobre todo el grado de	La persona que ha conformado, no estaba realmente informada no	La jurisprudencia ha establecido el Acuerdo Plenario N.º 005-2008 la facultad los jueces para que podamos	El beneficio no solo es a la parte acusada sino para la parte agraviada porque, la

	<p>todo el acusado, sea una decisión libre y voluntaria, para lo cual, siempre le preguntamos insistentemente más de una oportunidad si, la decisión de acogerse o adoptar esta alternativa de la conclusión anticipada es de forma libre y voluntaria.</p>	<p>no porque alguien lo haya obligado o coaccionando, ya que algunas veces apelan y en la sala invocan de que, no estaba bien informado, de que no le había entendido, no le explicado su abogado y por tanto la decisión que adoptó no era la adecuada.</p>	<p>que, le sirva como testigo para los otros acusados, entonces de alguna forma esta situación ya es una desventaja digamos, y luego de ser sentenciado con una conclusión anticipada, pasa a ser testigo.</p>	<p>instrucción que tiene esta persona.</p>	<p>estaba seguro y este opta por apelar. El superior también advierte eso y anula y luego sostiene que nuevamente se instaure o se instale la audiencia de prisión, entonces en algunas situaciones cierto excepcionalmente si digamos escapa el control</p>	<p>rebajar un séptimo por la conclusión anticipada. En casi todos los casos existen o se aplican otros parámetros de reducción, como la confesión sincera, la posición de proporcionalidad y otros para disminuir la pena</p>	<p>mayor parte de los casos que eh conocido en los procesos de conclusión anticipada siempre valoramos el pago de la reparación civil.</p>	
Entrevistado C	<p>Tenemos que verificar definitivamente que concurra que en el presente delito si éxito evidencia delictiva porque muchos de estos casos llegamos por no querer</p>	<p>Si habido una defensa ineficaz una mala defensa esto pueda provocar que la parte incluso termine aceptando hechos que no</p>	<p>Su defensa le ha explicado le preguntamos y si vemos que la defensa no le ha explicado no le ha dicho claramente cuáles serían las consecuencias de la</p>	<p>Se ha dispuesto ciertos protocolos de herramientas tecnológicas está el protocolo del Ministerio Público que se aprobó en el 2020 y el protocolo del</p>	<p>Nosotros como jueces tenemos audiencias todos los días y al tener audiencias todos los días podemos verificar también el propio trabajo del defensor, vamos a ver que</p>	<p>Si nosotros no garantizamos definitivamente ya habido una debida tutela de cada uno de los derechos, lo que vamos a</p>	<p>Tenemos que considerar este beneficio si únicamente lo tenemos exclusivamente como conclusión anticipada si no existen otras circunstancias o</p>	<p>Estamos acogiendo una postura mas al sistema australiano, pero si hay algunos sistemas procesales que también hemos recabado del</p>

	<p>pasar a un juicio con la incerteza que si va ser fundado o infundado lo van absolver lo van declarar culpable</p>	<p>le corresponde. Las partes ni siquiera saben en que están, que están haciendo y no saben efectivamente y solamente cuando la defensa sostiene que diga que si y entonces sostienen si de forma repetitiva.</p>	<p>responsabilidad ahí si incluso podríamos solicitar que se le subrogue la defensa y nombrar una defensa del estado</p>	<p>poder judicial del 2020 protocolo nos permite seguir cierto lineamiento que no van a provocar una indefensión a la parte imputada.</p>	<p>algún tipo de defensor</p>	<p>generar es indefensión a la parte y que provocaría ello que en algún momento este acuerdo pueda ser incluso deducido por nulidad</p>	<p>genéricas, en fin tenemos que ver el caso en concreto</p>	<p>sistema norteamericano</p>
Entrevistado D	<p>El abogado particular a instado la posibilidad de una conclusión anticipada es que ya anteriormente ha dialogado con su patrocinado para esta posibilidad, entendemos también que lo ha instruido de los beneficios</p>	<p>Momento el Ministerio Público ya ora liso sus alegatos de apertura ya hay una interacción propiamente dicha en un juicio oral. El acusado con la garantía de su abogado que</p>	<p>No es que se vulnere la investigación, porque la investigación, hay investigación en estado preliminar incluso investigación preparatoria la etapa de juicio oral ya no hay una</p>	<p>El abogado patrocinante junto a su procesado entendemos que si evidentemente habría una garantía un poco más estrecha puesto que puede dialogar directamente con la persona con su doctor puede</p>	<p>No es factible digamos postular a una conclusión anticipada sin revisar un adecuado estudio del legajo que acompaña el expediente. El derecho de defensa tanto por defensor privado y defensor publico si es que a pedio de las partes lo</p>	<p>La garantía del derecho de defensa podría solamente vulnerarse en el sentido de hacer esta postulación de conclusión anticipada de forma apresurado por ello es que nosotros</p>	<p>Es reducir la pena en merito que se abstiene de proseguir un proceso penal que constituiría un desgaste de tiempo, dinero, costo del proceso que involucraría un gasto para las partes y para el propio estado</p>	<p>Si se ajustan forman parte del sistema procesal e incluso hay en cada etapa hay una salida alternativa por ejemplo en la etapa fiscal existe el principio de oportunidad</p>

	que otorga la ley y también de las consecuencias que corresponde a una conclusión anticipada y a una aceptación de hechos y reparación civil.	también este presente se le hace esta consulta si conoce los hechos narrados por el Ministerio Público previa consulta con su abogado se le da un tiempo consulte con su abogado	investigación porque ya se ha hecho una acotación de parte del fiscal.	conferenciar individualmente	requieren necesario para el estudio más idóneo del caso.	como jueces y el propio abogado y el fiscal vemos que si faltan detalles para afinar una conclusión anticipada.		
Entrevistado E	Un procedimiento que en primer lugar lo aplica el juez penal, que ante la pregunta que le hace al acusado, en ese momento de la instalación del juicio oral, si es que considera que los cargos que imputa el Ministerio Público, los ha cometido o no y	El Juez no solamente este par que diga o para que apruebe el acuerdo de las partes, si no él es el que verifica si ese acuerdo tanto en relación a la pena como la reparación civil, es proporcional, es razonable y es legal,	Su defensa técnica lo asesora en ese sentido, reconocer los hechos y de igual manera ello implicaría que ellos pudieran negociar.	Tiene conocimiento pleno de todos los hechos las responsabilidades que pudo haber incurrido su patrocinado y ante el planteamiento de la acusación fiscal, por parte del Ministerio Público, está en total capacidad de orientarlo al acusado y poder	Garantizar el derecho de defensa por parte del acusado, porque estamos hablando también de otros dos supuestos, el investigado, nunca se hizo parte en la investigación, pero llegado el momento cuando se le convoca al juicio oral, se presenta, y no tiene los medios	El procedimiento que establece nuestra norma procesal penal, en lo que es el juzgamiento propiamente dicho, viendo todos esos pasos estamos garantizando el derecho a la defensa de las partes.	Lo que busca es atenuar en cierta medida la pena a la que fue solicitada por el Ministerio Público en su acusación, el código lo reconoce y lo establece, y a través de la aplicación de este modelo procesal penal.	El abogado lo está asesorando, le está brindando una ayuda, un asesoramiento para que pueda tener una sentencia más benigna, no ventajosa, porque una sentencia es un mal precedente, es un antecedente, pero una

	le pide inclusive que antes de contestar deba conferenciar con su abogado defensor.	entonces para mi particularmente el juez es el que le da la legalidad a este acto.		asesorarlo, aconsejarle que reconozca los hechos.	económicos el juzgado por ley, por obligación, le asigna un defensor público			sentencia más benigna.
Entrevistado F	El juez consulta a la parte si es que ha tomado conocimiento claro, de cuáles son los hechos que se le está imputando a su patrocinado, es que se busca es que tenga conocimiento pleno de dichos hechos.	El juez siempre de alguna forma interviene o es como un órgano consultor en cuanto a aquellos descuentos que damos, se supone que por conclusión anticipada se realiza el séptimo en cuanto a la disminución de la pena.	Es un beneficio al cual se está acogiendo y esta decisión no podría ser vinculante con el proceso de los otros investigados en cuanto que ellos quieran irse a juicio oral digamos, pero también la fiscalía puede pedir que dicho imputado sea ingresado en los siguientes procesos como testigo.	A veces hay preguntas que hace el juez y el imputado no las entiende, entonces el abogado tiene que explicarle de una forma más pausada	Un defensor de oficio, es defensa necesaria para el imputado, todas las audiencias que hemos tenido es que el juez verifique que al defensor de oficio se le haya notificado con el requerimiento de acusación, con todos los actuados para que así él pueda tener conocimiento y pueda plantear su estrategia.	El juez si bien es cierto no interviene en cuanto al acuerdo que pueda llegar el Ministerio Público con el imputado, pero si es como que un consultor en ciertas circunstancias puesto que cada juez tiene su propio criterio.	No se van a hacer todas las sesiones de juicio oral y seguir el proceso hasta el pronunciamiento de la sentencia, es que en las conclusiones anticipadas se da este beneficio del descuento del séptimo.	Si o si el juez de alguna forma interviene, incluso, tuve un juicio en donde bueno el juez no estaba de acuerdo el todo nuestro acuerdo que estábamos tratando de plantear con la parte investigada y el planteo su disconformidad .
Entrevista do G	La conclusión anticipada obedece a lo que es el grupo de salidas	La persona se asegura que tiene conocimiento adecuado y	Una conclusión anticipada verse únicamente y exclusivamente a establecer la	Un abogado que solo hace acto de presencia no significa nada no significa defensa	Un abogado que responsablemente ha conocido de donde viene esta imputación cuales	Es la parte procesada la que debe conocer primeramente	La propia persona entienda de que finalmente va a tener una sanción, pero acogíendose	Nuestro modelo no ha seguido la tendencia y las características de lo que fue el

	alternativas que establece nuestro nuevo ordenamiento acorde a la naturaleza de esta institución de este nuevo modelo procesal penal que asegura fundamentalmente las garantías dentro de ellas contar con un abogado defensor y gozar del resto de garantías.	pleno de los cargos y recién pasamos a una etapa de negociación donde la naturaleza de la sanción lo que busca es acercar lo más posible la consecuencia de un suceso delictivo a establecer la responsabilidad de una persona.	responsabilidad individual de la persona que se acoge a esta figura o a esta salida alternativa.	un abogado tiene que estar comprometido con su participación activa no solo a la audiencia si no hacia conocer los antecedentes que vienen de un caso.	son los elementos que se tienen y que conoce a su patrocinado y conoce las cualidades personales si puede asegurar un derecho de defensa.	por que se encuentra presente en un proceso cuales son los alcances de una imputación en su contra que medios probatorios se tienen.	a este beneficio premial de disminución de la pena lo que se está haciendo en realidad independientemente respecto a sus derechos considerar una rebaja para poder alcanzar una solución al conflicto.	modelo anterior donde se ordenaba la requisitoria de una persona para asegurar su participación no solo en la etapa de juzgamiento sino en la etapa de investigación.
Entrevistado H	Es un mecanismo alternativo que tiene el proceso penal, para dar solución al mismo, en el cual, evidentemente al haber una aceptación de los cargos, hay una recompensa hacia lo que	Muchas veces hay conversaciones previas que no están grabadas, entonces ahí, sí se puede advertir esta situación, el hecho de que ya, bueno, voy a aceptar los cargos	Desde mi punto de vista no, el llevar todos a juicio, muchas veces hace que pueda haber contradicciones o que una persona asuma los cargos, la otra no, y pues bueno eso genera una contradicción en	Casaciones y pronunciamientos, en el sentido que, han declarado nulidades de sentencia ¿Por qué?, porque el abogado no se encontraba preparado. Hay un aspecto, factico, y un aspecto jurídico,	No en todos los casos, la defensa técnica va preparada, porque se entiende que; pues bueno, ellos deben de manejar un volumen grande de procesos, entonces, creo yo, de que no en todos los casos se han preparado.	A nivel de juicio, las partes han aceptado los cargos, te diré aun 20 por ciento que he escuchado, esos procesos, en los cuales la defensa técnica y el imputado, aceptan los	Es esa naturaleza el ser como una especie de premio, incentivar el hecho que las personas puedan aceptar los cargos.	El propio sistema, situación que no se da a nivel de lo que viene a ser Perú; entonces, yo creo que, el comparar con lo que viene a ser otro país es complicado.

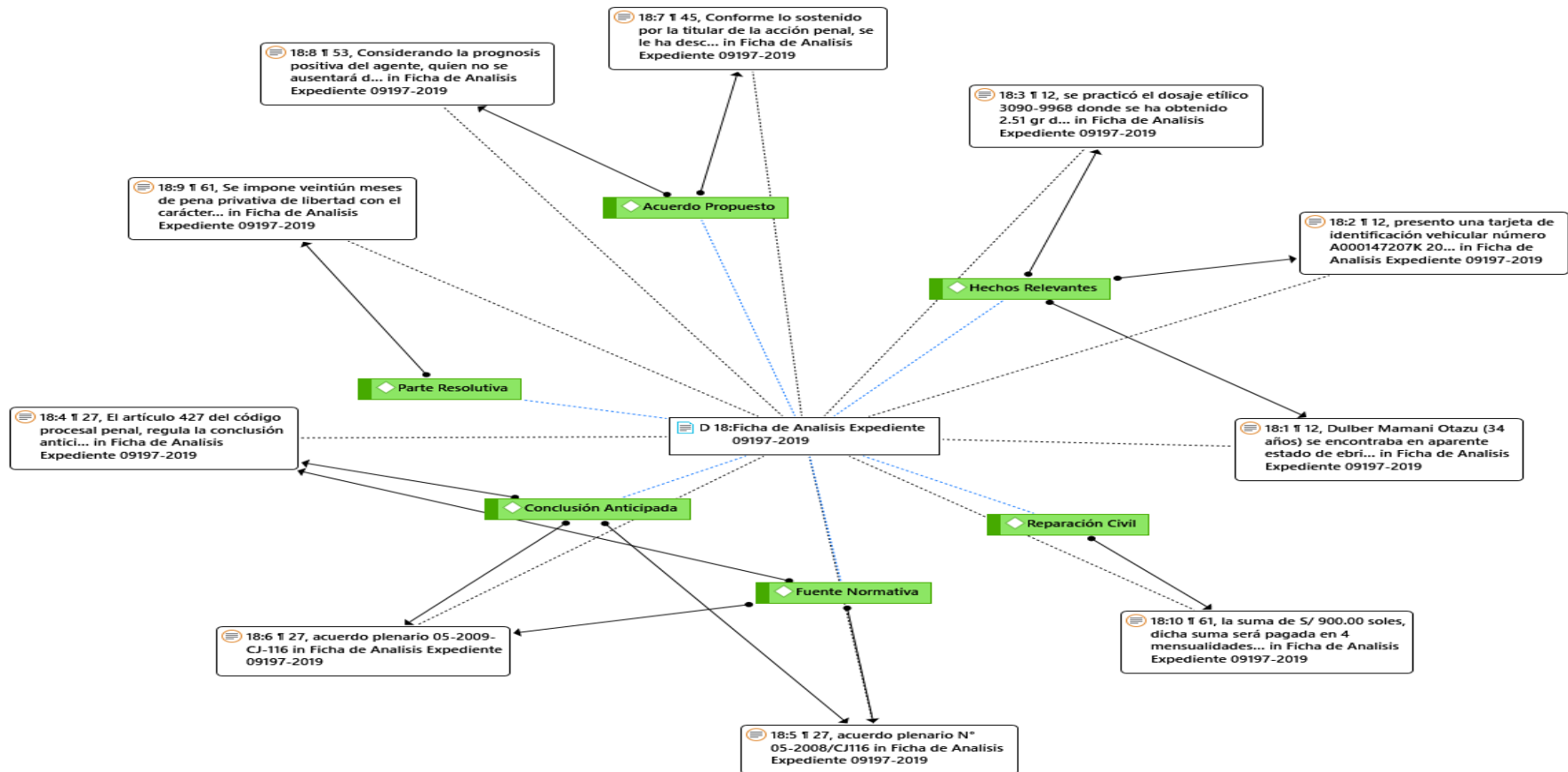
	viene a ser la parte imputada; en ese sentido, se genera una reducción en lo que viene a ser la pena, esto genera pues, un beneficio tanto al imputado como al sistema.	porque me conviene.	los pronunciamientos.	la exigencia es en ambos niveles entre el hecho, como el derecho para la defensa técnica.		cargos, pero sin la debida preparación.		
Entrevistado I	Un control de legalidad, viendo en la acusación, si contienen o no los elementos requeridos en la acusación, de, fundamentos de narración de hechos; y, que estos hechos encuadren al tipo penal o calificación jurídica en este caso, si es una defensa exitosa en un juicio oral, porque es la mejor forma de	Se prevé que este control que el juez maneja, sea beneficioso también para nuestro cliente, si he visto en otros casos que, se acogen a una conclusión anticipada y el juez tiene otro criterio, se prevé una pena con fiscalía, pero al final, le dan otro sentido o mayor	No importa si es que los otros imputados están en contra o a favor o es beneficioso para ellos también.	Si es necesario, porque tenías esa conversación directa con tu cliente; así mismo, capaz tiene información, que te puede nutrir y puedes considerar, a la hora de realizar una conclusión o no.	No han ejercido el derecho de defensa del cliente con efectividad, se entiende por la carga procesal, que ellos mantienen, pero esa situación, sí vulnera el derecho de defensa de la persona ya judicializado, inclusive en un juicio oral avanzado inclusive.	La jurisprudencia, los desarrollos y requisitos para una conclusión anticipada, pero se sigue teniendo algunos vacíos, pero es subsanable y como indico también, los magistrados sobre todo en los juzgados que mencionas se tiene alguna predisposición	Las nuevas tendencias, y aumento de casos inclusive, se nos ha regido ciertos delitos, que podemos acceder a una conclusión anticipada, se sabe que algunos delitos ya no son convertibles, en ese sentido de acceder a ellos, pero si se, mi opinión es que si se ha creado esta figura para poder acogernos y ser beneficiarios.	Procura sobre todo que los juzgados de Arequipa, de que siempre estén presentes los principios de proporcionalidad, legalidad, presunción de inocencia, y sobre todo esta intermediación ante el juez y partes.

	poder ejercer el derecho de defensa, ir a juicio y poder probar la inocencia de nuestro cliente.	punibilidad inclusive.				n a poder subsanar en juicio oral.		
Entrevistado J	Es una forma de conformidad que tiene el imputado al aceptar los hechos de cuerdo a ello hay veces en que este derecho no se especifica o no se realiza en la audiencia.	Tengamos preciso que son los principios procesales básicamente el principio procesal es la seguridad jurídica la igualdad ante la ley la seguridad de dar la garantía a que nuestros fundamentos nuestros derechos procesales.	No considero que se transgreda el derecho de defensa, de acuerdo con ello porque si bien es cierto estamos en una conclusión total y una conclusión parcial, en la conclusión total indica que todos deben aceptar el cargo.	Es preciso que la presencia física de un defensor este en la audiencia instalada porque muchas veces nosotros cuando agárranos un caso agarramos una defensa no sabemos si el imputado sabe cuáles son sus derechos.	Los magistrados le sostiene sabe que señor abogado usted no está preparado para ejercer esta defensa lo cual lo vamos a excluir de este proceso, inmediatamente ahí en la audiencia excluyen al abogado del proceso y acuerdan hablan los magistrados se comunican los magistrados inmediatamente ponen un abogado de oficio.	Cuando se realiza la conclusión anticipada solamente es la aprobación de los hechos mas no es la aceptación de los medios probatorios, literalmente en la conclusión anticipada hay algunas veces que confunden.	Lo considero como un plus, un plus dentro del proceso porque este beneficio no todas las personas se acogen a este beneficio hay delitos que no pueden acoger a la conclusión anticipada como favorecimiento a prostitución, drogas, terrorismo y etc.	No se ajusta ya que los juicios son distintos en Estados Unidos tanto en Colombia tienen esa instauración de juicio, que quien decide no es el juez, que decide es una pluralidad de personas.

4.2.3.Resultado de análisis de casos

Figura 11

Red de codificación de categorías del Expediente 09197-2019-0-0401-JR-PE-01



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 11 del análisis efectuado al expediente N.º 09197-2019, el imputado, el Sr. Dulber Mamani Otazu, estaba en estado de ebriedad presentando una tarjeta de identificación vehicular número A000147207K 2017-2019, un certificado técnico vehicular N.º C-2019125-279Y 2757, vencido el 28 de agosto del 2019; y, al practicarse el dosaje etílico 3090-9968, obtuvo 2.51 gr de alcohol en la sangre. Lo que conlleva a la imputación de tipo penal de conducción en estado de ebriedad, establecido en el primer párrafo del artículo 274 del código penal. Para lo cual este se acogió al artículo 427 del Código Procesal Penal, el cual reglamenta la conclusión anticipada del juicio.

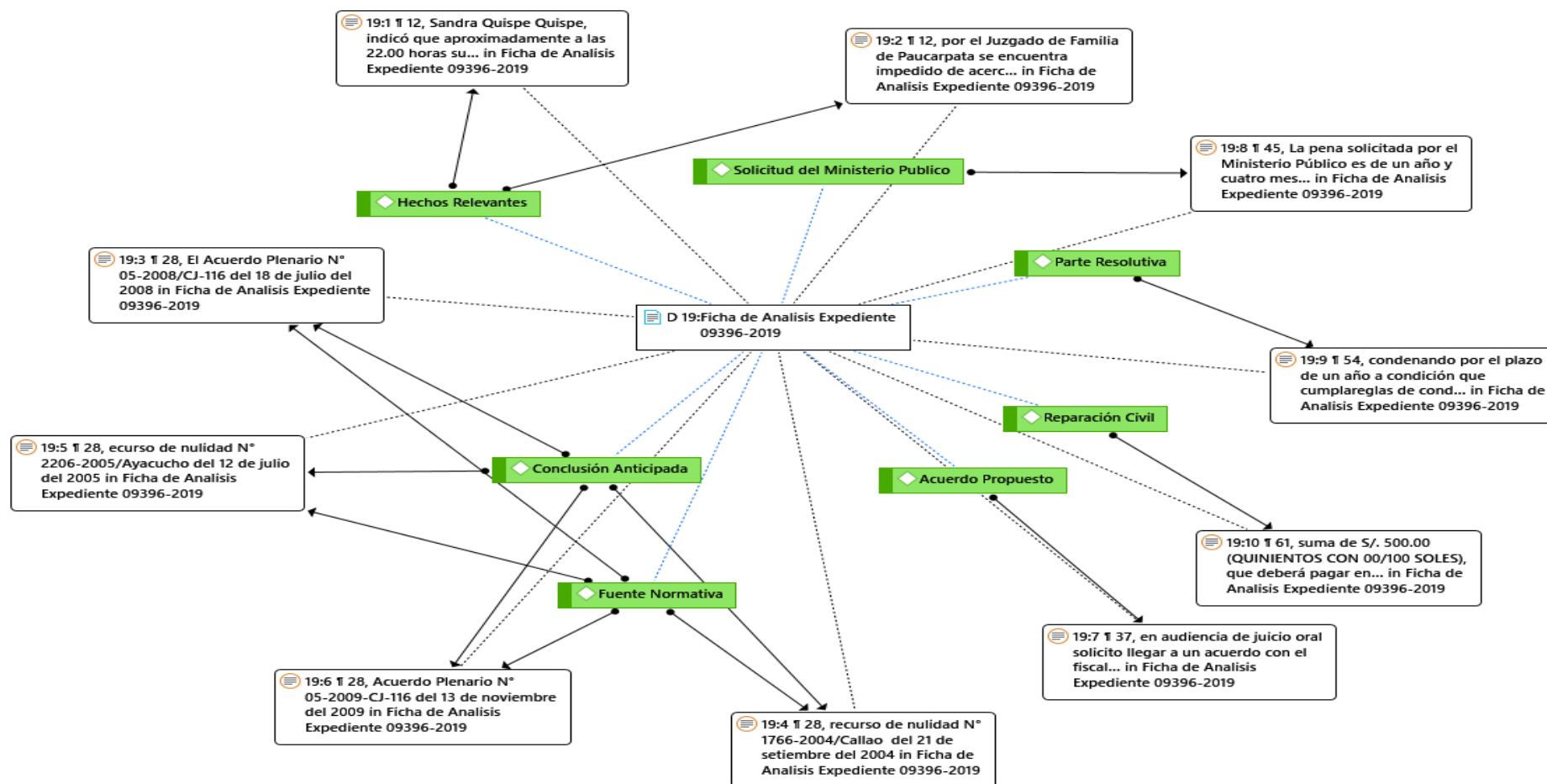
Ahora bien, en el artículo 427 del Código Procesal Penal reglamenta la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido tocada precedentemente en sentencia vinculante, tales como los siguientes: el Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ116 y el Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116 que enmarca a la terminación anticipada, nos brinda las bases sobre el control de proporcionalidad y legalidad que conciernen a la conclusión anticipada. Del análisis del expediente y conforme lo sostiene la titular de la acción penal, se le descontó 1/7 por la reducción conveniente a la conclusión anticipada al imputado, cabe indicar que, en la presente expediente y sentencia de conclusión anticipada, no existe las fuentes doctrinales que fundamentan la decisión sobre esta institución jurídica premial.

Así mismo, siguiendo la revisión de los hechos relevantes, se consideró la prognosis positiva del agente, quien no se ausentará del lugar de su residencia, quien informará y justificará sus actividades cada mes ante el juzgado de ejecución por veintiún meses, además se le establece veintiún meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, la cual se establecen el artículo 52 del código penal se convierte a 90 noventa

jornadas de prestación de servicios comunitarios y S/ 900.00 soles, dicha suma será dividida en 4 mensualidades consecutivas.

Figura 12

Red de codificación de categorías del Expediente 09396-2019-0-0401-JR-PE-02



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 12, del análisis efectuado al Expediente N.º 09396-2019, la demandante Sandra Quispe Quispe, indicó que, aproximadamente a las 22:00 horas, su exconviviente Mijael Willy Rivera Vargas se apersonó a su domicilio con el fin de ser agredida física y psicológicamente, insultándola mediante palabras soeces y calificativos denigrantes, quien se encuentra imposibilitado de aproximarse a la víctima o a su domicilio a una distancia no menos menor de 200 metros, todo ello bajo advertencia de ser denunciado por desobediencia a la autoridad.

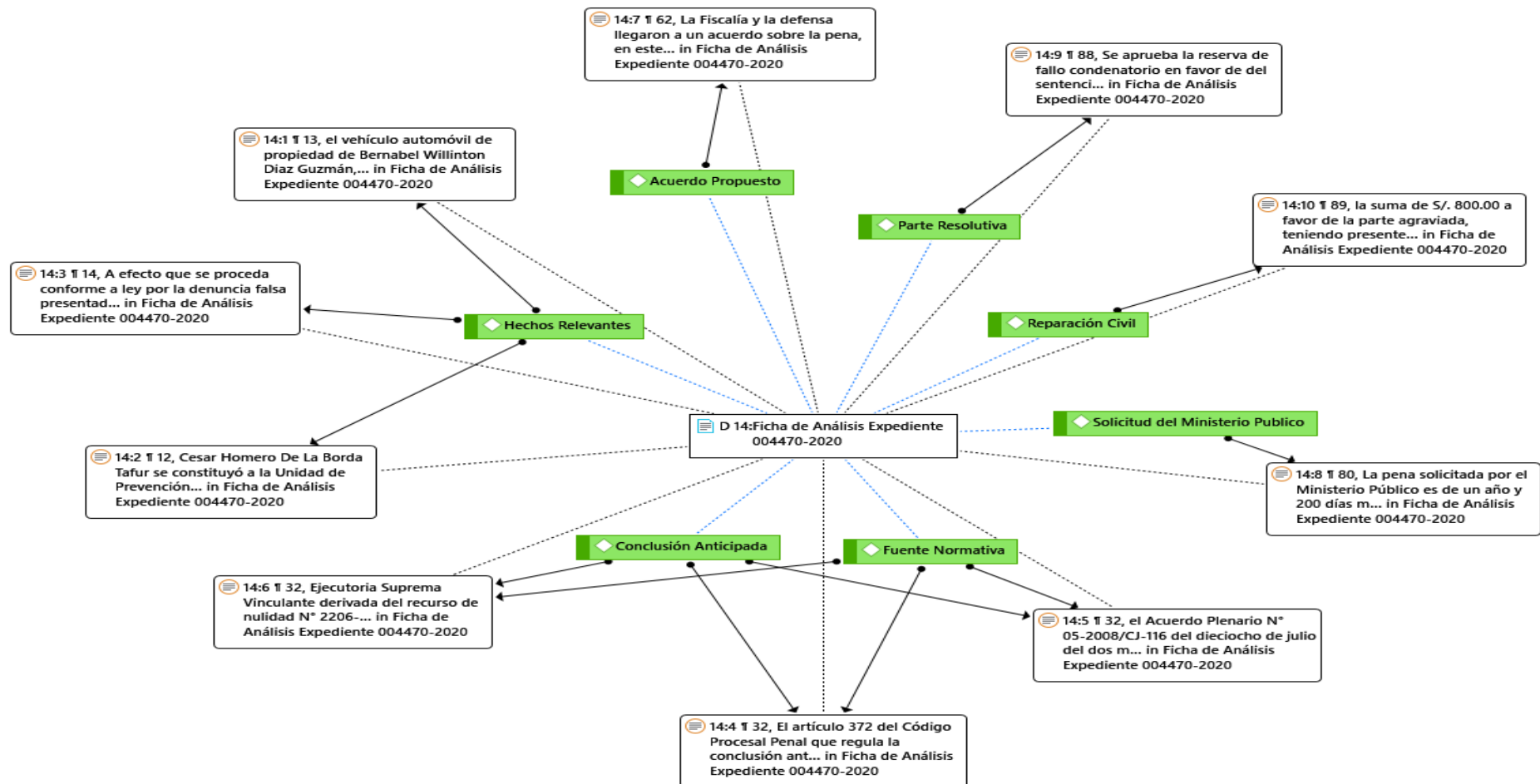
El Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ-116, la ejecutoria suprema vinculante procedente del Recurso de Nulidad N.º 1766-2004/Callao, y la ejecutoria suprema derivada de Recurso de Nulidad N.º 2206-2005/Ayacucho, y recientemente por el Acuerdo Plenario N.º 05-2009-CJ-116: la que nos refiere sobre la “conformidad premiada”, que se presenta cuando el acusado o el abogado solicita adelantadamente entrevistarse con el fiscal para poder llegar a un acuerdo sobre la pena, como el expediente materia de análisis.

Del expediente materia de análisis, se puede observar que no existe fundamentación doctrinaria sobre el tema y menos un análisis relevante sobre esta institución jurídica; sin embargo, en audiencia de juicio oral se solicitó llegar a un pacto con el fiscal en cuanto a pena y la reparación civil, acogiéndose al principio de oportunidad.

Por ello, se le impuso la pena, solicitada por el Ministerio Público, de un año y cuatro meses, condenado por el plazo de un año a condición que cumpla reglas de conducta y S/. 500.00 soles, que deberá pagar en tres cuotas.

Figura 13

Red de codificación de categorías del Expediente 004470-2020-0-0401-JR-PE-02



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 13, del análisis efectuado al Expediente N.º 004470-2020, el demandante el Sr. César Homero De La Borda Tafur, se constituyó a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículo (UPROVE), denunciando haber sido víctima de hurto del automóvil de placa de rodaje V9D-442, pero el vehículo automóvil de propiedad de Bernabel Willinton Diaz Guzmán nunca fue sustraído, ahora bien, la autoridad solicita proceda conforme a ley por la denuncia falsa presentada por el ahora imputado.

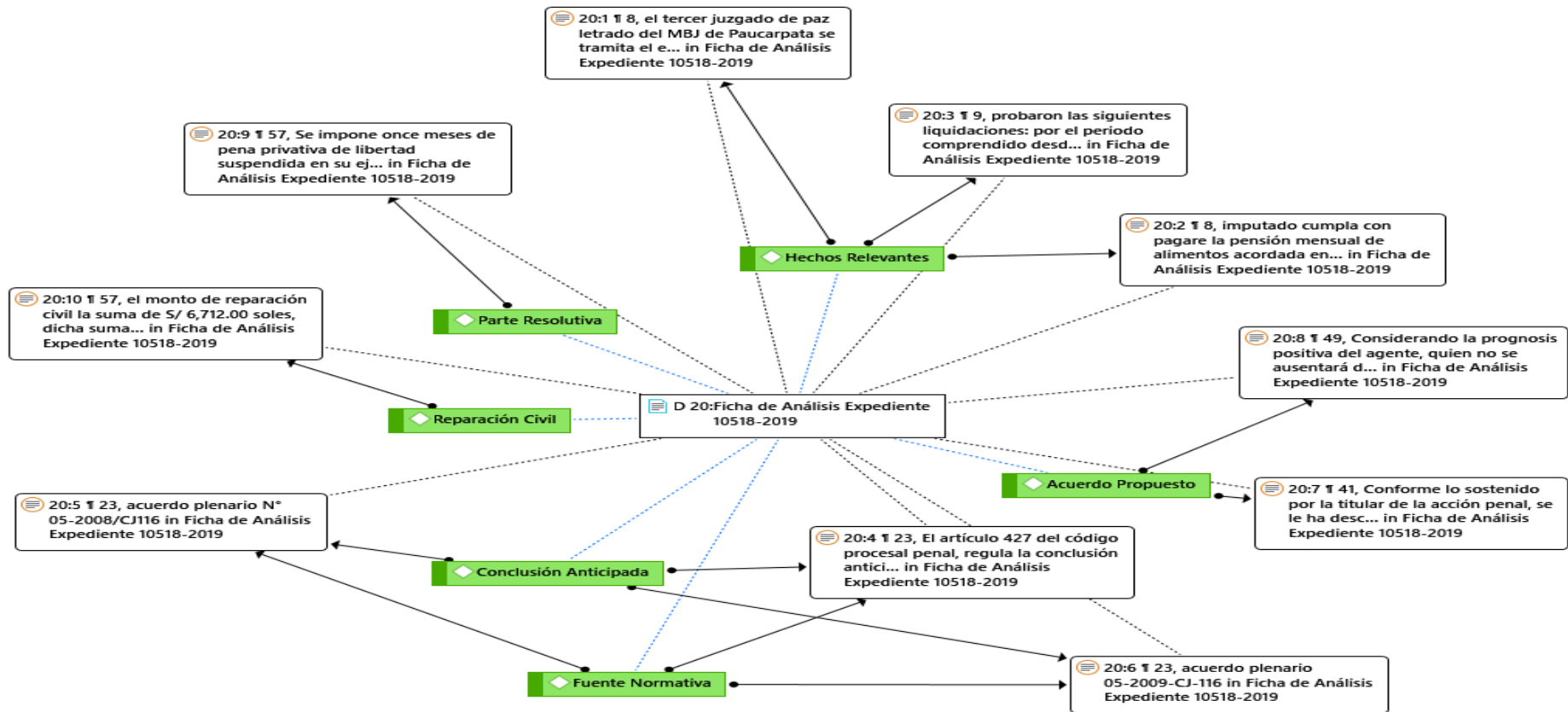
El artículo 372 del Código Procesal Penal que reglamenta la conclusión anticipada del juicio institución que ha sido mencionado anteriormente en sentencias vinculantes, como el Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ-116, así como la ejecutoria suprema vinculante, procedente del Recurso de Nulidad N.º 2206-2005/Ayacucho, del doce de julio del dos mil cinco se exhibe cuando el acusado o través de su abogado requiere adelantadamente entrevistarse con el fiscal para llegar a un pacto sobre la pena.

La fiscalía y la defensa llego a un pacto sobre la pena, en este caso han sugerido la reserva del fallo condenatorio por el plazo de nueve meses, de la misma forma la pena solicitada por el Ministerio Público es de un año y 200 días multa y una reparación de S/. 1,000.00.

Se aprueba la reserva de fallo condenatorio en favor del sentenciado por el plazo de nueve meses en cuyo propósito el juzgado se abstiene de dictar la pena concreta en dicho plazo, sujeto a la observancia y S/. 800.00 soles en beneficio de la parte agraviada, teniendo presente que ya existe un pago de S/ 250.00 soles, el saldo será pagado en dos cuotas.

Figura 14

Red de codificación de categorías del expediente 10518-2019-0-0401-JR-PE-01



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 14, del análisis efectuado al Expediente N.º 10518-2019 seguido en contra de Jesús Valentín López Erolito, el tercer juzgado de paz letrado del MBJ de Paucarpata tramita el expediente de ejecución de actas de conciliación N.º 0196-2010-00412JPFC-03, la que indica que el imputado cumpla con pagar la pensión mensual de alimentos pactada en Acta de Conciliación N.º 33-2009, donde se aprobaron las siguientes liquidaciones: por el tiempo comprendido desde el 01 de julio del 2013 al 30 de abril del 2016, donde se adeuda la suma de S/ 7,212.22 soles.

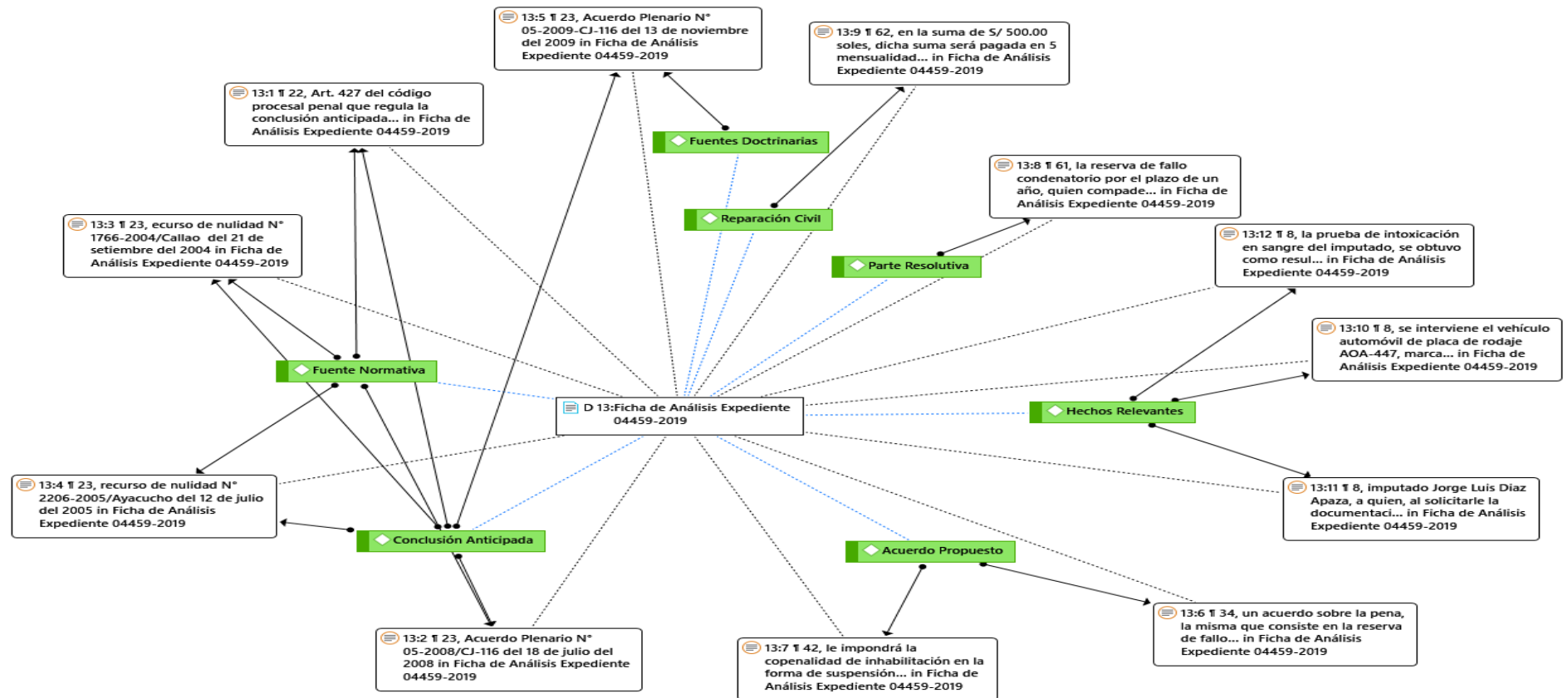
El artículo 427 del Código Procesal Penal reglamenta la conclusión anticipada del juicio, que ha sido tocado precedentemente en sentencia vinculante, tales como el Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ116 y el Acuerdo Plenario N.º 05-2009-CJ-116 que, siendo esta referida a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de proporcionalidad y legalidad corresponden a la conclusión anticipada.

Conforme al análisis del presente expediente y lo mantenido por la titular de la acción penal, se le ha disminuido 1/7 por la premialidad proporcionada por la conclusión anticipada; de la misma forma, considerando la prognosis positiva del agente, quien no se ausentará del lugar de su residencia, informará y justificará sus actividades cada sesenta días ante el juzgado de ejecución por un año y seis meses, se llegó al acuerdo de la conclusión anticipada.

Por último, se impone once meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de doce meses y ciento ochenta días, y el monto de reparación civil la suma de S/ 6,712.00, dicha suma será pagada en 17 mensualidades consecutivas.

Figura 15

Red de codificación de categorías del Expediente 04459-2019-41-0401-JR-PE-01



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 15, del análisis efectuado al Expediente N.º 04459-2019, se interviene el vehículo automóvil de placa de rodaje AOA-447, modelo Cherry QQ, que circulaba con las luces apagadas, que es del conductor el imputado Jorge Luis Diaz Apaza, a quien, al solicitarle la documentación correspondiente, el mismo presentaba visibles síntomas de ebriedad (aliento alcohólico), y luego de realizada la prueba de dosaje etílico en la sangre del imputado, se obtuvo como resultado positivo 2.17 g/l, acorde al certificado de Dosaje Etílico N50030-0015531 (B-014654).

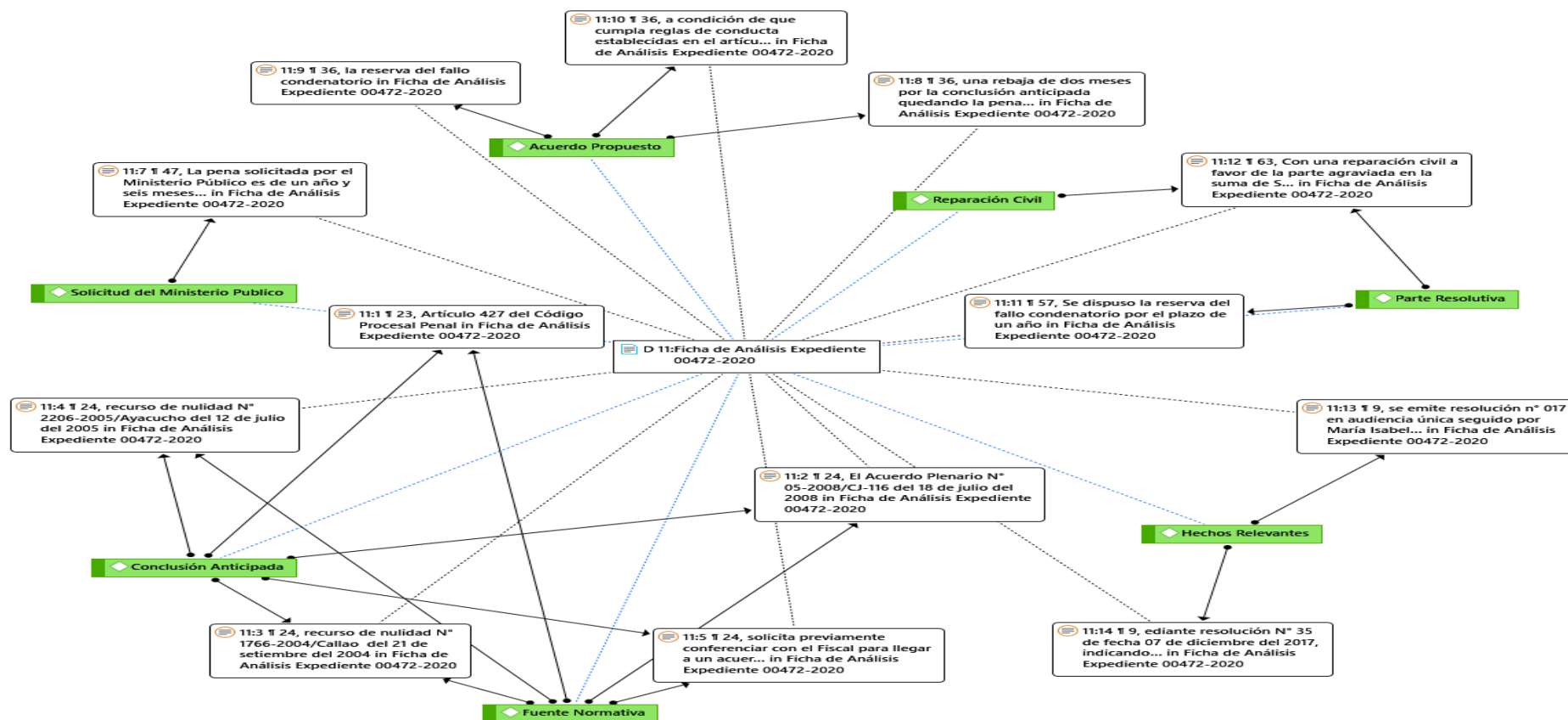
El art. 427 del Código Procesal Penal reglamenta la conclusión anticipada del juicio, así como el Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ-116I, la ejecutoria suprema vinculante derivada de Recurso de Nulidad N.º 1766-2004/Callao y la ejecutoria suprema vinculante derivada de Recurso de Nulidad N.º 2206-2005/Ayacucho, y, recientemente, por el Acuerdo Plenario N.º 05-2009-CJ-116: la “conformidad premiada”, se considera cuando el acusado o mediante su abogado pide anticipadamente entrevistarse con el fiscal para llegar a un pacto sobre la pena; lo que impone una doble garantía, que involucra una renuncia voluntaria a la actuación de pruebas en juicio público, instituyendo un acto de disposición del propio proceso, pactando en la expedición de una sentencia condenatoria en su contra.

Se llegó a un acuerdo sobre la pena, la misma que consiste en la reserva de fallo condenatorio por el plazo de doce meses que estarán condicionadas y se le imputará la copenalidad de inhabilitación en la modalidad de suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo de once meses.

Por tanto, se le imputa, la reserva de fallo condenatorio por el plazo de doce meses, quien compadecerá cada 02 meses y como monto de la reparación civil la suma de S/ 500.00, dicha suma será pagada en 5 mensualidades consecutivas.

Figura 16

Red de codificación de categorías del Expediente 00472-2020-21-0401-JR-PE-01



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 16, del análisis efectuado al Expediente N.º 04459-2020, se emite la Resolución N.º 017 en audiencia única seguida por María Isabel Gallegos Vega en contra de Emerson Ordoñez Arias y se tiene el acuerdo conciliatorio entre las partes, en el que abonaría S/. 325.00 soles por pensiones en beneficio de su hija, posteriormente bajo apercibimiento decretado mediante Resolución N.º 35 de fecha 07 de diciembre del 2017, se indica que este cumpla con pagar S/. 15,283.93 soles.

El Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ-116, la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 1766-2004/Callao y la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 2206-2005/Ayacucho, y, recientemente, por el Acuerdo Plenario N.º 05-2009-CJ-116: la “conformidad premiada”, se efectúa cuando el acusado, por sí o mediante su abogado pide anticipadamente entrevistarse con el fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena.

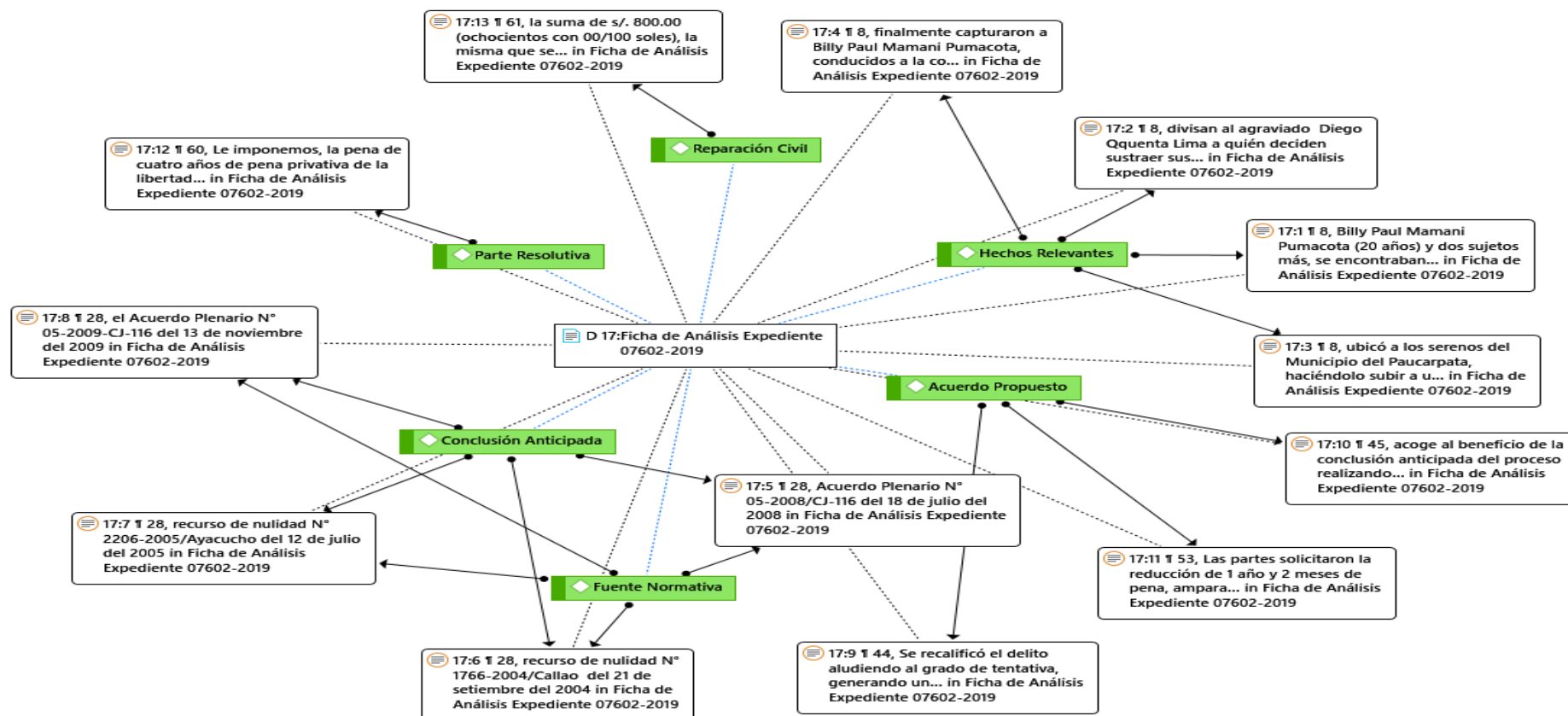
Se acordó la reserva del fallo condenatorio, para esto a partir de la pena solicitada se consideró una rebaja de dos meses por la conclusión anticipada y queda la pena en 12 meses y 120 días, el periodo de reserva sería por el plazo de doce meses a condición de que cumpla reglas de conducta establecidas en el artículo 64.

De la misma forma se da una reparación civil en beneficio de la parte agraviada de S/ 1,000.00 sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias devengadas que ascienden al monto total de S/. 15,283.93, precisando que respecto de estos montos van a ser cancelados de la siguiente forma: los S/.1,000.00 que corresponde a la reparación civil propiamente dicha van a ser cancelados por el sentenciado el día lunes 22 de noviembre del 2021, y teniéndose en cuenta que se ha consignado por la defensa el depósito judicial

efectuado el día de la fecha 19 de noviembre del 2021 que ha sido presentado al Juzgado y respecto del cual tienen conocimiento las partes por el monto de S/. 5,000.00, es que se tiene un saldo adeudado a la fecha de S/. 10.283.93 correspondientes a las pensiones alimenticias devengadas que van a ser canceladas mediante el pago de ocho cuotas mensuales de S/. 1,285.50 cada una de ellas que van a ser canceladas a partir del 20 de diciembre del 2021 la primera cuota y así sucesivamente las siguientes cuotas serán abonadas los días 20 de los meses subsiguientes hasta completar el pago total de las ocho cuotas que se ha pactado.

Figura 17

Red de codificación de categorías del Expediente 07602-2019-30-0401-JR-PE-01



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 17, del análisis efectuado al Expediente N.º 07602-2019, de Billy Paul Mamani Pumacota (20 años) y dos sujetos más, que se encontraban tomando licor, por inmediaciones de la Av. Miguel Grau-Paucarpata, y al estallar una gresca uno de los sujetos resultó herido, por lo que corren de este lugar, y al no tener dinero, divisan al agraviado Diego Qquenta Lima a quién deciden sustraer sus pertenencias; mientras que la persona de Billy Paul Mamani Pumacota le rebuscaba los bolsillos, del bolsillo de su pantalón le sustrajo S/ 130.00 soles, dinero del trabajo del día, le arrancaron el morral de color azul, donde tenía la suma de S/40.00 soles, mientras seguía siendo sujetado y es cuando el agraviado reacciona y se escapa, mientras que los tres sujetos se quedaron en el lugar, el agraviado corrió una cuadra, donde ubicó a los serenos del Municipio del Paucarpata, y suben a una camioneta, y emprenden la búsqueda de los tres sujetos.

El presente expediente cuenta con fuentes doctrinarias como Víctor Prado Saldarriaga, quien menciona que, en el derecho penal comparado, la coexistencia de una justificación para suavizar o aumentar la pena conduce a un examen nominal, pero siempre privado, de la medida de pena estimada o del porcentaje de pena, en la legislación del Perú solo se apunta a una reducción razonable y discrecional de la penalidad conminada para el delito, pero que siempre corresponderá emplear por debajo de su extremo inicial y cuyo límite final, la sentencia específica será determinada por el tribunal en las circunstancias particulares con base en la proporción apropiada del caso.”.

De la misma forma, Claus Roxin quien propone una “Tercera Vía” dentro del derecho penal, se refiere a la compensación voluntaria por el daño causado por el delincuente, en este caso mostrando que el beneficio para la víctima a menudo supera la sanción o multa, negando efectivamente la compensación al acusado.

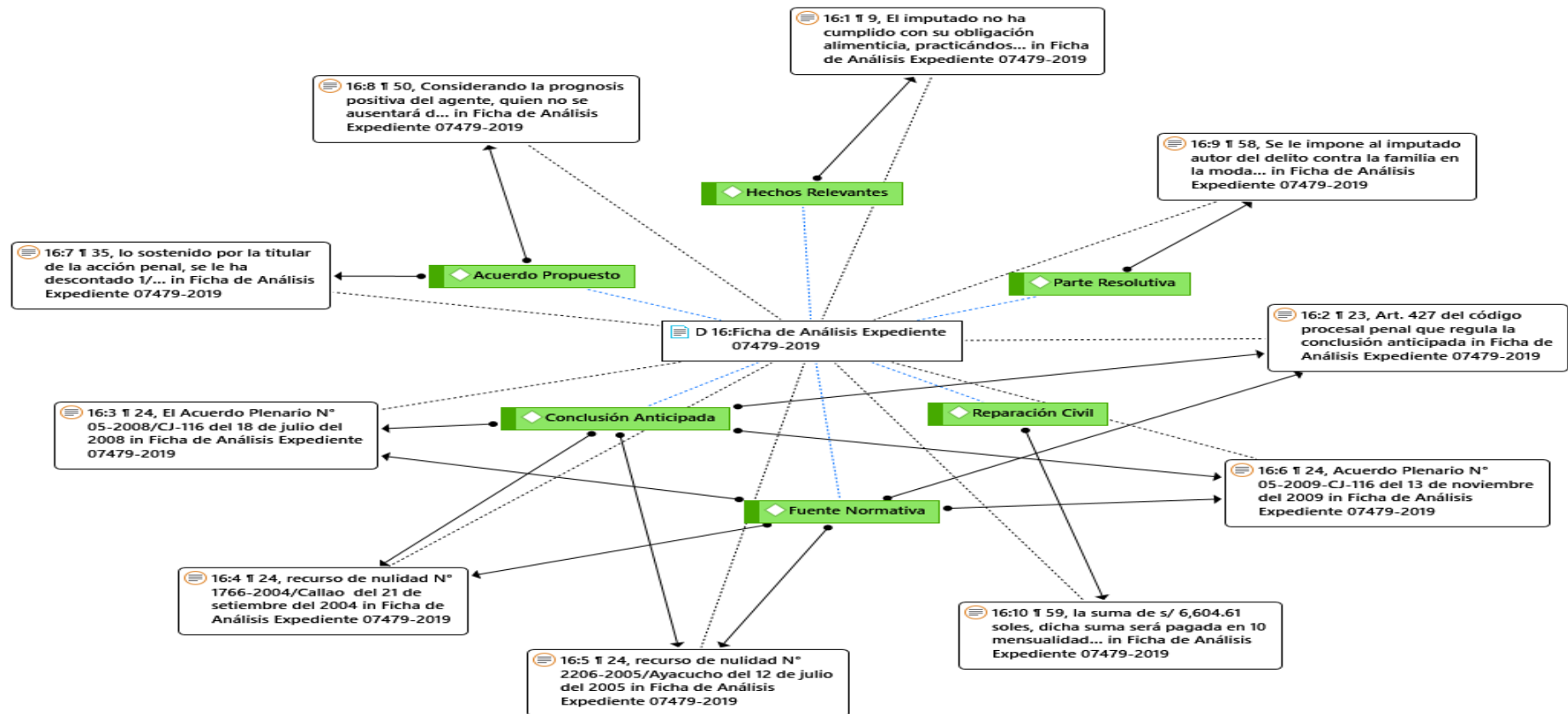
Por otro lado, el Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ-116, la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 1766-2004/Callao y la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 2206-2005/Ayacucho y, recientemente, por el Acuerdo Plenario N.º 05-2009-CJ-116: la “conformidad premiada”, se presenta cuando el acusado, por sí o mediante su abogado, pide anticipadamente entrevistarse con el fiscal para arribar a un acuerdo sobre la pena.

Así también, se hace alusión al principio de proporcionalidad, pues se solicitó la reducción de catorce meses adicionales, dado que el acusado al momento de los hechos se encontraba en estado de ebriedad, conforme lo señala el Dictamen Pericial 2019-002016159 con 0.95 gramos de alcohol por litro de sangre.

El resultado final fue la interposición de la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, la que se pactó en 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, para lo cual deberá comunicarse al área de medio libre del INPE, así como el monto de la reparación civil de 800.00 soles.

Figura 18

Red de codificación de categorías del Expediente 07479-2019-65-0401-JR-PE-01



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 18, del análisis efectuó al Expediente N.º 07602-2019, se aprecia la sentencia N.º 466-2016-FC-2JFP, donde declara fundada la demanda de tenencia interpuesta por Hilda Huarahuara Mamani, en beneficio de sus dos menores hijos; de la misma forma, dispone que demandado Alan Elvis Paxi Quispe cumpla con una pensión mensual de S/ 300.00 para cada uno de los menores. Sin embargo, el imputado no ha cumplido con su obligación alimenticia, ejerciendo la liquidación de pensiones devengadas respectivo desde el 01 de agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018, donde se adeuda la suma de S/ 6,004.61 soles, establecida en la Resolución N.º 30-2018, del 30 de julio del 2018.

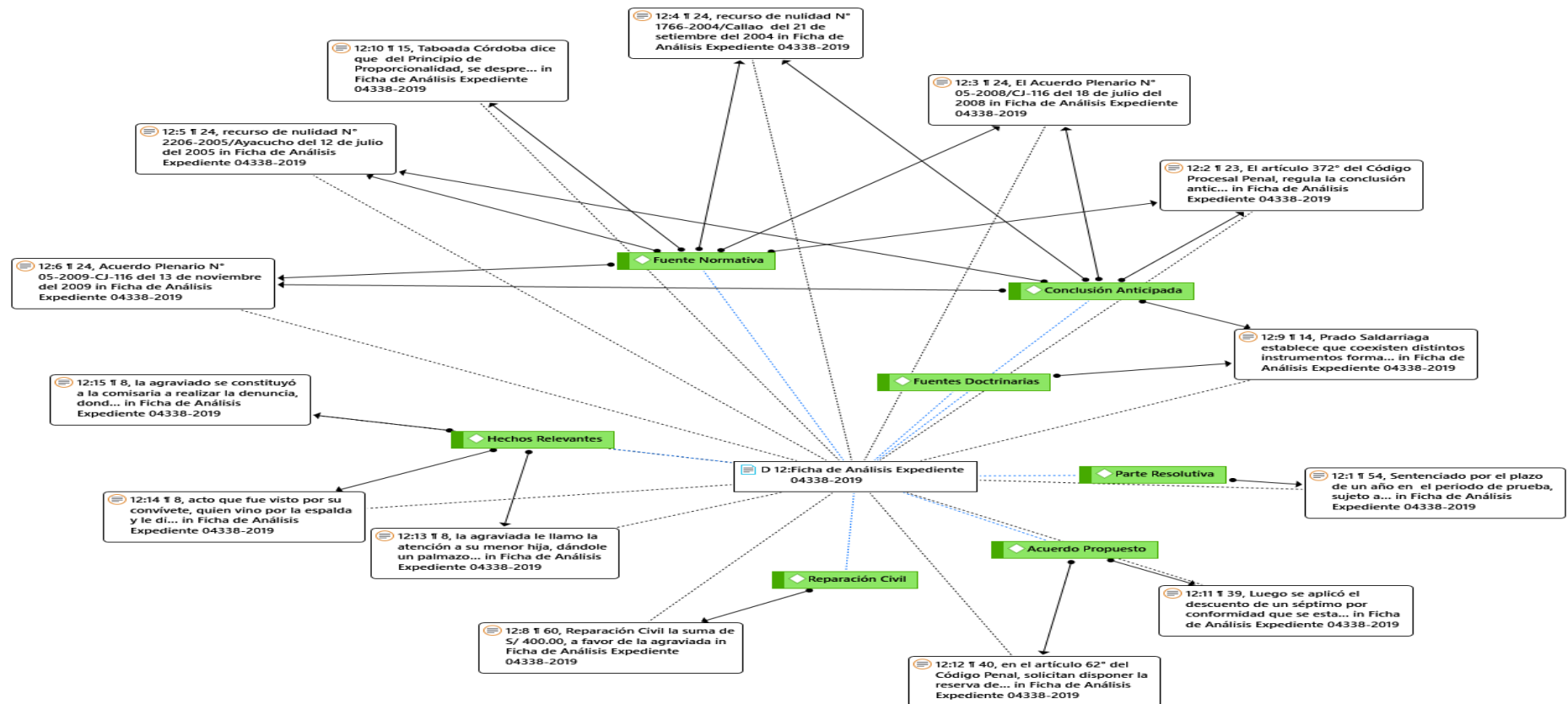
Ahora bien, dentro de sus fuentes doctrinales, hace una citación, aunque no establece el autor; sin embargo, se indica el principio de proporcionalidad, que requiere al juzgador comprobar que la pena tenga relación de correspondencia con el injusto cometido por el agente, por cuanto esta toma los criterios de importancia del rango del bien jurídico protegido, impacto social, grado de lesión del mismo y los diferentes medios de comisión del hecho.

Una vez más, los presentes expedientes nos hacen referencia al Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ-116, la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 1766-2004/Callao y la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 2206-2005/Ayacucho, y, recientemente, por el Acuerdo Plenario N.º 05-2009-CJ-116: la “conformidad premiada”, se muestra cuando el acusado o mediante su abogado pide adelantadamente entrevistarse con el fiscal para llegar a un pacto sobre la pena. El juez le imputa al acusado el delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar, a diez meses y quince días de pena privativa de libertad suspendida

en su ejecución por 12 meses, que estará condicionado al acatamiento de reglas de conducta y el monto de reparación civil de s/ 6,604.61 soles, dicha suma será pagada en 10 mensualidades consecutivas.

Figura 19

Red de codificación de categorías del Expediente 04338-2019-29-0401-JR-PE-01



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

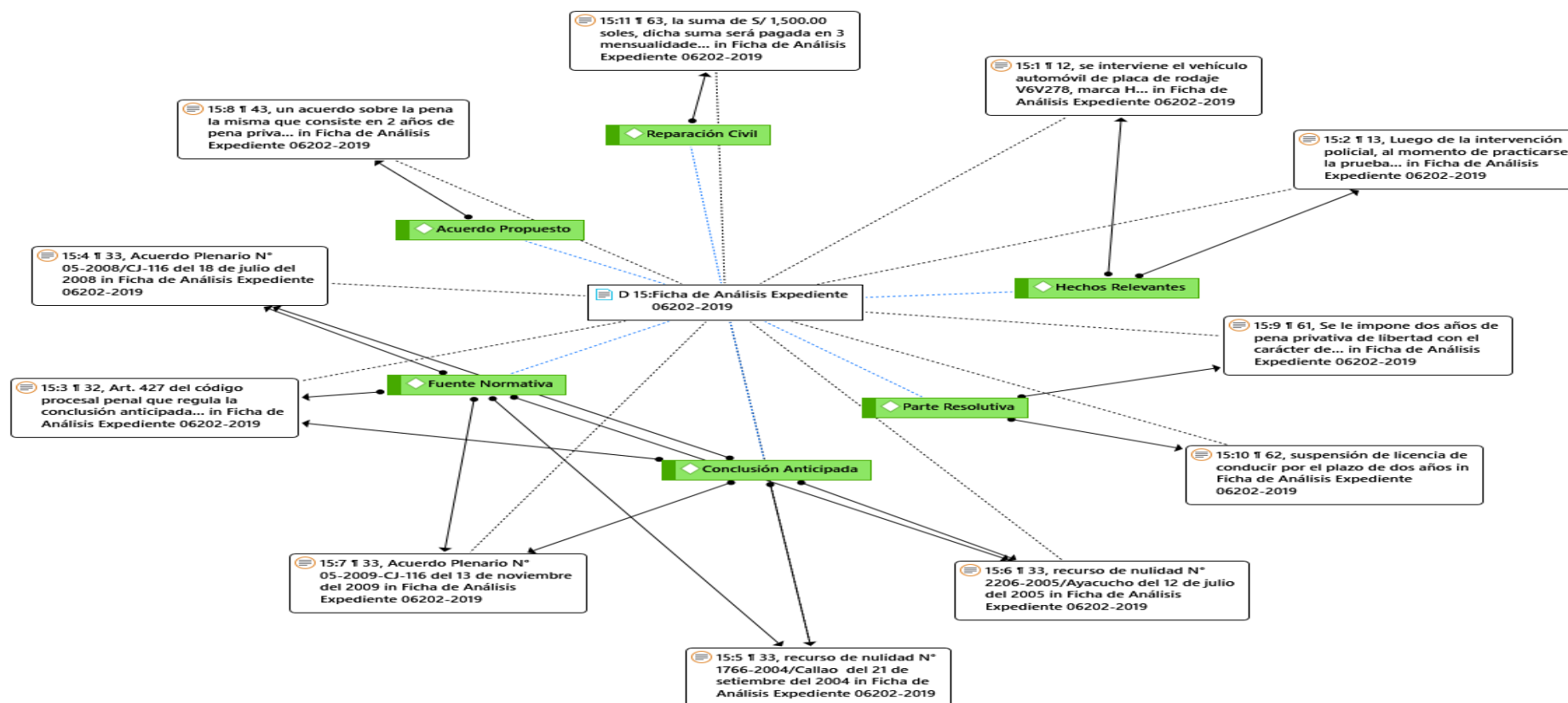
En la figura 19, del análisis efectuado al Expediente N.º 04338-2019, la agraviada le llamó la atención a su menor hija, dándole un palmazo en su manito y en su trasero, momentos en que se puso a llorar dicha menor y le salió sangre de la nariz, acto que fue visto por su conviviente, quien vino por la espalda y le dio golpes de puño en la cabeza, rostro y en otras partes del cuerpo, no dándole oportunidad a la denunciante de defenderse, posteriormente, esta cogió la ropa de sus hijos y se retiró de la casa, la agraviada se constituyó a la comisaría a realizar la denuncia.

La doctrina relevante del expediente nos indica que, para Prado Saldarriaga, la coexistencia de diferentes instrumentos formales, cuyo efecto común es impedir la ejecución efectiva de penas de prisión más cortas o incluso medias. De la misma forma, para Taboada Córdoba el principio de proporcionalidad, las sanciones excesivas o innecesarias, ya sean penas, salvaguardias o consecuencias colaterales, son siempre un abuso de derecho y una limitación o negación arbitraria, por lo que los legisladores deben, en general, establecer límites claros y las dificultades que se pueden tolerar.

A consecuencia del análisis, se pudo desprender objetivamente que, el imputado fue sentenciado por el plazo de doce meses en el periodo de prueba, sometido a observancia de reglas de conducta: a) prohibición de abandonar el lugar de su residencia sin previa autorización del juez, b) comparecerá al local del juzgado de ejecución en manera obligatoria y personal el primer día hábil de cada dos meses, para justificar e informar sus actividades, y c) concepto de reparación civil de S/ 400.00, en beneficio de la agraviada, monto que se va a cancelar en tres cuotas, la primera cuota de S/ 200.00 a ser cancelada a fine del mes de junio, la segunda cuota por S/ 100.00 a ser cancelada a fines el mes de julio y la última cuota de S/ 100.00.

Figura 20

Red de codificación de categorías del Expediente 06202-2019-33-0401-JR-PE-01



Fuente: Análisis del programa Atlas.ti 9

Interpretación

En la figura 20, del análisis efectuado al Expediente N.º 06202-2019, se puede conocer que se interviene el vehículo de placa de rodaje V6V278, marca Hyuanday, conducido por el imputado Jaime Quispe Callachi, a quien, al solicitarle la documentación correspondiente, el mismo presentaba visibles síntomas de ebriedad (aliento alcohólico). Luego de la intervención policial, al momento de practicarse la prueba de intoxicación en sangre del imputado, se obtuvo como resultado 1.50 g/l, conforme al certificado de Dosaje Etílico N90030-0005867 (B-004925).

Por ello, la fuente doctrinal hace referencia al principio de proporcionalidad, que se solicita al juez que examine si la sanción es proporcional a la conducta ilícita del agente, ya que se fundamenta en la extensión de los bienes jurídicos protegidos, la magnitud del daño, el impacto social y la trascendencia de las diversas actuaciones de comisión del hecho, entre otros.

Configurándose así lo establecido en el art. 274, conducción en estado de ebriedad. Sumado a ello, nos vuelve a hacer referencia al Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ-116, la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 1766-2004/Callao y la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 2206-2005/Ayacucho, y, últimamente, por el Acuerdo Plenario N.º 05-2009-CJ-116: la “conformidad premiada”, se muestra cuando el acusado o mediante su abogado, pide anticipadamente entrevistarse con el fiscal para obtener un pacto sobre la pena.

Del presente expediente se aprecia que el defensor de los imputados informa a la fiscalía que han llegado a un acuerdo para fijar la pena, la misma que consiste en veinticuatro meses de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, la cual

acorde al artículo 52 del Código Penal se convierte a 104 Jornadas de prestación de servicio comunitario. Así también, las partes convinieron el monto de la reparación civil a favor de la víctima en S/.1,500.00, el cual será cancelado de la siguiente forma: en el término de veinticuatro horas a partir de la fecha deberá cancelar la suma de S/.500.00, el último día hábil del mes de diciembre de 2020 la suma de S/.500.00 y el último día hábil de enero del 2021 la suma de S/.500.00.

Tabla 8

Cuadro comparativo de casos

Expediente	Delito	Parte resolutive
Exp. 09197-2019-0-0401-JR-PE-01	Conducción en estado de ebriedad.	Se impone veintiún meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, la cual acorde al artículo 52 del código penal se convierte a 90 noventa jornadas de prestación de servicios comunitarios. La copenalidad de inhabilitación de forma de suspensión para conducir vehículos motorizados por el tiempo de veinticuatro meses y correspondiendo el monto de reparación civil de S/ 900.00, dicha suma deberá ser pagada en 4 mensualidades consecutiva.
Exp. 09396-2019-0-0401-JR-PE-02	Desobediencia a la autoridad	Se declaro a Mijair Willy Rivera culpable, siendo condenando por doce meses sujeto a que efectúe reglas de conducta, con el pago de una reparación Civil de S/. 500.00 que corresponderá pagar en tres cuotas: dos cuotas de S/. 150.00 soles y una última de S/. 200.00 soles, los días 08 de julio, 08 de agosto y 08 de septiembre de 2021.
	Denuncia calumniosa	Se aprueba la reserva de fallo condenatorio en favor del sentenciado por el periodo de nueve meses por

Exp. 04470- 2020-0-0401- JR-PE-02		consecuencia el juzgado se inhibió de imponer la pena concreta en dicho plazo, sometido a la observancia y reparación civil S/. 800.00 en beneficio de la parte agraviada, teniendo presente que ya existe un pago de S/, 250,00 soles, el saldo será pagado en dos cuotas: la primera por la suma de S/, 300,00 soles y la segunda de S/, 250,00 soles que será pagada hasta el último día hábil del mes de septiembre del presente año.
Exp. 10518- 2019-0-0401- JR-PE-01	Omisión a la asistencia familiar	Se impone once meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo doce meses y ciento ochenta días, y con el monto de reparación civil de S/ 6,712.00, dicha suma será pagada en 17 mensualidades consecutivas.
Exp. 04459- 2019-41- 0401-JR-PE- 01	Conducción en estado de ebriedad.	Se le imputa, la reserva de fallo condenatorio por el plazo de doce meses, quien compadecerá cada 02 meses, como monto de la reparación civil de S/ 500.00, dicha suma será pagada en 5 mensualidades consecutivas.
Exp. 00472- 2020-21- 0401-JR-PE- 01	Omisión a la asistencia familiar	Se imputa la reserva del fallo condenatorio por el periodo de doce meses, a sujeto a que desempeñe reglas de conducta, y una reparación civil en favor de la agraviada de S/ 1,000.00 sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias que ascienden al monto total de S/. 15,283.93 soles.
Exp. 07602- 2019-30- 0401-JR-PE- 01	Robo agravado	Se imputa, la pena de cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, la que convertimos a 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, para lo cual deberá comunicarse al área de medio libre del INPE, con expreso apremio que, ante el incumplimiento de las jornadas o abandono injustificado de una sola de las jornadas, se procederá a invalidar la conversión de la pena y se dispondrá la prisión del sentenciado en el

		establecimiento penitenciario que determine el INPE, con el pago de reparación civil de s/. 800.00, la misma que se encuentra cancelada mediante cupón judicial N.º 2020010901141
Exp. 07479- 2019-65- 0401-JR-PE- 01	Omisión a la asistencia familiar	Se le impone a diez meses y quince días de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de doce meses, que estará sujeto a obediencia de reglas de conducta, con el monto de reparación civil de s/ 6,604.61, dicha suma será pagada en 10 mensualidades consecutivas.
Exp. 04338- 2019-29- 0401-JR-PE- 01	Agresiones en contra de las mujer o integrantes del grupo familiar.	Se le imputa la pena de un año en el periodo de prueba, a condición de observancia de reglas de conducta, y con el monto de Reparación Civil la suma de S/ 400.00, en beneficio de la agraviada.
Exp. 06202- 2019-33- 0401-JR-PE- 01	Conducción en estado de ebriedad.	Se le impone veinticuatro meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años, de reparación civil de S/ 1,500.00 soles, dicha suma tendrá que ser pagada en 3 mensualidades consecutivas.

4.3. Discusión de Resultados

Las conclusiones resultan del análisis de los objetivos propuestos, los cuales estuvieron agrupados, conforme a las categorías de análisis, y estas están divididas en subcategorías. Las categorías se han separado, para el desarrollo del marco teórico como para la formulación de las interrogantes en las entrevistas y el análisis efectuado de los casos judiciales sobre conclusión anticipada. Acorde a lo señalado, se realizaron diez

entrevistas; de los cuales las respuestas expresadas por los cuatro fiscales, cuatro jueces y dos abogados, que han formado parte de un proceso de terminación anticipada fueron plasmadas para obtener resultados. Asimismo, se denota en las entrevistas que, respecto a los cuatro jueces han tenido posturas similares, en cuanto a la presencialidad del abogado litigante para llevar adelante esta institución jurídica. Es así que uno de ellos advierte sobre la participación del abogado, que esta tiene que ser eminentemente asistida; aunque se presume que, teniendo una defensa privada, tendría que existir defensa eficaz, esta se concreta con las consultas que se hacen en el juicio oral. Por ello, todo parte desde que el defensor y el demandado han conferenciado; ahora bien, uno de ellos recalca lo siguiente: “para el perfeccionamiento de esta figura debe existir la voluntad y el acuerdo de ambas partes. En ese sentido, nos indican que los jueces deben garantizar de que la decisión que tome o que adopte, sobre todo el acusado, sea una decisión libre y voluntaria”; para lo cual, siempre se le pregunta insistentemente más de una oportunidad, si la decisión de acogerse o adoptar esta alternativa de la conclusión anticipada es de forma libre y voluntaria, los otros dos jueces concuerdan sobre este punto, si el abogado particular a instado la posibilidad de una conclusión anticipada, es que ya anteriormente ha dialogado con su patrocinado para esta posibilidad, entendemos también que lo ha instruido de los beneficios que otorga la ley y también de las consecuencias que corresponde a una conclusión anticipada y a una aceptación de hechos y reparación civil.

En ese mismo sentido, los jueces concuerdan que; sí, existe en ciertos casos ineficacia por parte de los abogados privados, y que estos buscan la conclusión anticipada, como un remedio inmediato para no seguir con el caso. Por ello, uno de los jueces señala que muchas veces los acusados aceptan la responsabilidad, pero exclaman ser inocente, incluso en algunas ocasiones los abogados no expresan muy bien lo que quieren; también, al momento que se acogen a la conclusión anticipada sostienen o expresan términos que

no son adecuados, entonces hay una posibilidad de que la persona sea perjudicada, y que se reemplace al abogado. Otro de los entrevistados sostiene que, algunas veces los imputados apelan; así mismo, estos expresan: “que no estaban bien informados”; “de que no habían entendido”; “no les ha explicado su abogado y por tanto la decisión que adoptó no era la adecuada”; ahora bien. Por su parte otro entrevistado asegura que, el superior también puede advertir esta situación, en cuyo caso esta en su potestad anular y mandar a que nuevamente se instaure o se instale la audiencia de prisión. Por ende, cabe resaltar que existen coincidencias en los entrevistados: en el punto que; si existiera una defensa ineficaz o una mala defensa, esto puede provocar que la parte termine aceptando hechos que no le corresponden; en consecuencia, uno de los jueces señala, en ese mismo sentido, que si la defensa no le ha explicado o no le ha dicho claramente cuáles serían las consecuencias de la responsabilidad; ahí sí, incluso podríamos solicitar que se le subroge la defensa y nombrar una defensa del estado.

De la misma forma, y siguiendo con la correlación de las preguntas de las entrevistas realizadas, se puede notar la postura conjunta de los cuatro fiscales, en cuanto a la pregunta que se le realiza al acusado, en el momento de la instalación del juicio oral, si es que acepta los cargos que le impone el Ministerio Público, estos muchas veces lo aceptan; por ello, el juez siempre de alguna forma interviene, es como un órgano consultor. Al respecto uno de los entrevistados refirió que, un abogado que solo hace acto de presencia no significa nada, no significa defensa, un abogado tiene que estar comprometido con su participación activa, no solo a la audiencia, si no ah conocer los antecedentes que vienen de un caso; para poder entender mejor el caso. Y en esa misma línea de ideas, otro de los fiscales entrevistados manifestó: “un abogado que responsablemente ha conocido de dónde viene la imputación; cuáles son los elementos que se tienen, que conoce a su patrocinado y conoce las cualidades personales, sí puede

asegurar un derecho de defensa”. Con ello, se puede asegurar el derecho de defensa y la eficacia jurídica de la defensa, además que permite reducir el número de audiencias, obteniendo más rápido una sentencia y que no se emplee todo el aparato judicial. Por el contrario, algunos fiscales consideran el hecho de que, así se tenga un abogado, esto no significa que se ejerza válidamente el derecho de defensa, más aún cuando existen casaciones y pronunciamientos; en el sentido que, se han declarado nulidades de sentencias, porque el abogado no se encontraba preparado.

En cuanto a la entrevista a los dos abogados particulares, que han llevado adelante estos casos de conclusión anticipada, se puede asegurar que ambos están de acuerdo en que sí debe existir necesariamente una audiencia previa con su patrocinado, que es ineludible el hecho de estar presentes, porque es la mejor forma de poder ejercer el derecho de defensa, aproximándose al juicio y poder probar así la inocencia del cliente. Asimismo, ambos coinciden en que, en algunos casos, refiriéndose a los abogados de oficio, estos no han ejercido el derecho de defensa del cliente con efectividad, se entiende por la carga procesal, que ellos mantienen, pero esa situación, sí vulnera el derecho de defensa de las personas en un proceso ya judicializado; por ello, exhortan a estar empapados con el tema, así como manifiesta una entrevistada, en su experiencia como abogada ha visto muchas veces que, sí se vulnera ese derecho de defensa.

En tanto, de los expedientes analizados, los casos identificados fueron referentes a diversos delitos como, conducción en estado de ebriedad; desobediencia a la autoridad; denuncia calumniosa; omisión a la asistencia familiar; robo agravado; agresiones en contra de las mujer o integrantes del grupo familiar. Por lo que, del análisis realizado se puede advertir una serie de problemas, que se encuentran conexos con la carencia doctrinaria en los casos descritos, la inexistencia de fundamentadas bases doctrinales y

teóricas, que no se toman como referencia para la concertación de una conclusión anticipada, un vacío doctrinal preocupante, seguido por aparentemente plantillas en cuanto a las sentencias, todas revestidas por un mismo tenor, sin un análisis individual de los casos. Es por ello que todos los expedientes siguen la misma estructura, citando el artículo 427 del Código Procesal Penal, la misma que reglamenta la conclusión anticipada del juicio, así como el Acuerdo Plenario N.º 05-2008/CJ-116 del 18 de julio del 2008, la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 1766-2004/Callao del 21 de setiembre del 2004 y la ejecutoria suprema vinculante procedente de Recurso de Nulidad N.º 2206-2005/Ayacucho del 12 de julio del 2005, y, por último, recientemente, por el Acuerdo Plenario N.º 05-2009-CJ-116 del 13 de noviembre del 2009: referidas a la “conformidad premiada”, provocada cuando el imputado por sí mismo o mediante sus abogados hubiera solicitado previamente entrevistarse con el fiscal para llegar a un acuerdo de sentencia; el doble vínculo es importante, lo que significa que dar testimonio en audiencia pública es un acto de decidir el proceso en sí y aceptar su condena.

También, se hace citaciones a la potestad que tiene en Ministerio Público, en dividir la pena en tercios, conforme lo establece el artículo 45º-A, inciso 2º apartado a) del Código Penal, en el caso en concreto, la pena debe establecerse en el tercio inferior de la pena, que se instaura entre un año y un año ocho meses, pues muchas veces el acusado carece de antecedentes penales; sin embargo, los mismos expedientes nos hacen referencia que los sentenciados entran a un periodo de prueba, sujetos a la observancia de reglas de conducta: a) prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez, b) comparecerá al local del juzgado, c) no cometerá nuevo delito doloso de la misma naturaleza, d) reparar los daños ocasionados por el delito con el pago de la reparación civil.

Conclusiones

1. Se determinó que el derecho de defensa del imputado ejercido por el abogado de libre elección, no se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa, ya que la defensa tiene que ser efectiva, lo que significa desarrollar una oposición antítesis, respuesta o contradicción eficaz a la acción penal, por lo que existe la posibilidad de que el magistrado subroge al abogado privado, y puede solicitar que lo siga un abogado de oficio; sin embargo, por la misma carga procesal que a veces estos tienen, también se ven vulnerados los derechos del imputado; ya que la asistencia de abogado no se puede reducir a una mera designación formal, entendiendo que le correspondería al juez adoptar medidas extremas para que en el proceso penal la defensa sea real y efectiva.
2. Se determinó que en los casos de conclusión anticipada de juicio oral, el ejercicio profesional del abogado genera la indefensión del imputado, debido a que las partes suscriben un acuerdo respecto a la naturaleza del hecho, la pena y reparación civil a imponerse, por lo que el imputado en muchas ocasiones desconoce sobre las consecuencias de estos acuerdos, simplemente por librarse del problema a lo que suma la no comunicación del abogado defensor, por lo que muchas veces se llega a apelar este acuerdo por el mismo imputado, por ello, al momento del dictamen de la sentencia, el juez debe estar convencido de quien va obtener la decisión, asistiéndole el derecho de justicia y razón, debe valorar las pruebas confirmadas en el juicio e imponer sus interpretaciones, argumentos y razones, con toda honradez, con imparcialidad judicial, en mérito al debido proceso.

3. Se estableció que las fuentes doctrinarias y normativas para resolver los casos de conclusión anticipada, relativos al derecho de defensa, son muy escasos en los expedientes, ya que solo siguen plantillas de unos cuantos artículos, no se lleva el análisis de cada caso, no existen citaciones de autores o pronunciamientos respecto a esta figura jurídica premial; sin embargo, se puede apreciar también la existencias de un acuerdo plenario en la aplicación de conclusión anticipada con el nuevo Código Procesal Penal, aplicándose de manera igual para cualquier tipo de hecho o de procedimiento, siendo aplicada de manera amplia, como para un delito de robo agravado, para un delito de omisión de asistencia familiar, para violencia en contra de las mujer o integrantes del grupo familiar, en el sentido de afectar física, psicológica que sufre la mujer, para la evasión de las obligaciones alimentarias, siendo de necesidad dar atención especial a estos casos.

Recomendaciones

1. Se recomienda que los magistrados, al realizar el control de los casos de conclusión anticipada y denoten una defensa ineficaz, por parte del abogado de libre elección, estos puedan advertir una sanción por el colegio de abogados. De la misma forma, se exhorta a los colegios de abogados a ser más rigurosos con estos casos, donde el abogado defensor genera una indefensión a su patrocinado y sus acciones no van acorde al Código de Ética del abogado, pilar fundamental, pues perjudica el proceso. Por ello, dicho abogado debería tener una inhabilitación temporal. Asimismo, se sugiere evaluar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y capacidad técnica, para lo cual también se recomienda desarrollar medidas de control a través de protocolos que aseguren la eficacia de la defensa técnica en materia penal y que el Ministerio Público introduzca mecanismos que permita que los acusados soliciten una evaluación de su nivel de protección.
2. Se propone que los módulos de justicia de Arequipa hagan una revisión exhaustiva en los casos de conclusión anticipada, con el fin de verificar una debida defensa por parte del abogado defensor particular en los que se presumirán que pudo tener una mejor solución. Esto para que sirvan como antecedentes para la realización de un mejor control por los magistrados, fiscales y abogados.
3. Se recomienda que el colegio de abogados continúe realizando talleres de nuevas técnicas de litigación oral para defensores privados y defensores públicos. Por lo tanto, es importante manejar estas herramientas en relación con la defensa efectiva del imputado y para el cumplimiento de lo normado en el Código de Ética del abogado.
4. Se recomienda también que se puedan examinar los parámetros que establecen una defensa eficaz por la Corte Interamericana en el caso Ruano Torres vs. El

Salvador en el numeral 166, para el abogado defensor, y con ello se pueda ampliar las fuentes doctrinarias, que justifiquen una defensa eficaz.

Referencias

- Bacigalupo, E. (2005). *Derecho penal y estado social de derecho*. Jurídica de Chile.
- Barrios, D. (2002). *Teoría del proceso*. B de F.
- Benitez, R. (2017). *Inconstitucionalidad de la limitación de las soluciones alternas y formas de conclusión anticipadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales*. Tesis para optar el grado de maestro en derecho con área terminal en justicia constitucional.
[https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/66955/TESIS %20Rogerio %20 %20](https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/66955/TESIS_%20Rogerio%20%20)
- Bernal, J., & Montealegre Lynett, E. (2013). *El proceso penal T.I: Fundamentos constitucionales y teoría general*. Universidad del Externado de Colombia.
- Binder, A. (2000). *El incumplimiento de las formas procesales*. Ad Hoc.
- Burgos, J. (28 de enero de 2022). La conclusión anticipada en el proceso penal. *lpderecho.pe*. <https://lpderecho.pe/conclusion-anticipada-proceso-penal-2/>
- Cafferata, J. (2000). *Proceso penal y derechos humanos*. Centro de Estudios Legales y Sociales/Editores del Puerto.
- Capuñay, F. (2019). *La institución de la conclusión anticipada del proceso y sus efectos en la sanción penal en el Código Penal peruano*. Tesis para optar el grado de magíster, doctor en maestro en derecho penal
[http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4406/CAPU %c3 %91AY %20PISFIL %20FELIX %20- %20MAESTRIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4406/CAPU%91AY%20PISFIL%20FELIX%20MAESTRIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Carocca, A. (1998). *Garantía constitucional de la defensa procesal*. J.M. Bosch Editor.
- Carrió, A. (2000). *Garantías constitucionales en el proceso penal*. 4ta Edición. Hammurabi.
- Casación N.º 1511-2017 (10 noviembre 2020. Corte Suprema de Justicia de la República.
- Casación N.º 1772-2010 (20 junio 2011). Sala Civil Transitoria (Lima).
- Casación N.º 178-2009 (17 enero 2011). Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Transitoria
- Casación N.º 864-2016 de Santa (8 julio 2016). Corte Suprema de Justicia de la República.
- Castillo, L. (2013). *Debido proceso y tutela jurisdiccional la Constitución comentada: análisis artículo por artículo (vol. III)*. Gaceta Jurídica.

- Cayra, R. (2017). *Restricción del ejercicio del derecho de defensa material del acusado en el juicio oral en el distrito judicial de Puno*. Tesis para optar el grado de abogado.
[http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/7199/Cayra_Sua %c3 %b1a_Richard_Nilton.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/7199/Cayra_Sua_%c3%b1a_Richard_Nilton.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Chancosa, E. (2016). *El rol del defensor público penal, en la defensa técnica de conformidad con la legislación ecuatoriana*. Tesis para optar el grado de abogada de los Tribunales de la República.
<https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/4324/1/TUIAB050-2016.pdf>
- Claria, J. (1998). *Derecho procesal penal*. Rubinzal-Culzoni Editores.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (28 agosto 2014). *Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana*.
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf
- De La Cruz, N. (2017). *Actuación de la Defensa Técnica necesaria en las audiencias de Control de Acusación*. Tesis para optar el grado de maestro en derecho y ciencias políticas con mención en ciencias penales.
https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/564/T037_44764186_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Del Río, C. (2008). *El principio del consenso de las partes en el proceso penal y enjuiciamiento jurisdiccional: Aclaraciones conceptuales necesarias*. Editorial Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Díaz, J. C. (2021). *Derechos de justicia. Debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva*. Palestra.
- Díaz, J. (2004). *¿Conclusión anticipada o festinación de la instrucción penal?*
<http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/CLP/contenidos.dll/Tomos218-241-Ajuridica/451747/457868/457873/457874>
- Expediente N.º 1268-2001-HC/TC (15 abril 2002). Tribunal Constitucional.
- Expediente N.º 1323-2002-HC/TC (9 julio 2002. Tribunal Constitucional.
- Expediente N.º 1655-91 (17 setiembre 2000). Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín.
- Expediente N.º 5085-2006-PA/TC (13 de abril de 2007). Tribunal Constitucional
<https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/05085-2006-AA.html>
- Ferrajoli, L. (2005). *Derecho y razón, teoría del garantismo*. Trotta.
- Franco, E. (2009). La cosa juzgada y el principio *nom bis in idem* en el derecho procesal penal. *Revista Jurídica Online*. https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/09/26_6_la_cosa_juzgada_.pdf

- Galloso, A. (2017). *Analisi de la conclusión anticipada del proceso a propósito de la confesión sincera o juicio de conformidad*. Tesis para optar el grado de abogado. https://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/3503/1/rep_maest.dere_a_lejandro.galloso_an_%c3%81lisis.conclusi_%c3%93n.anticipada.proceso.prop_%c3%93sito.confesi_%c3%93n.sincera.juicio.conformidad.pdf
- García, P. (2008). *Lecciones de derecho penal*. Grijley.
- Gimeno, V. (2020). *Derecho procesal penal*. Editorial Civitas.
- González, A. (2019). *La vulneración del derecho a la defensa en el procedimiento directo*. Tesis para optar el grado de magíster en derecho. <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/7067>
- Guanilo Ramirez, J. (2020). *La defensa pública y su ineficacia participativa en los procesos penales en la 2° Sala Penal Liquidadora Permanente del Callao*. Tesis para optar el grado de abogado https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/57872/Guanilo_RJ_C-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Huerta, E., & De Toledo, S. (1986). *Derecho penal. Parte general. Teoría jurídica del Delito*. Rafael Catellanos.
- Hurtado, J. (1987). *Manual de derecho penal*. EDDILI. Segunda Edición.
- Ibarra, C. (2008). *¿Cuál es la relevancia del principio del consenso en la conclusión anticipada del juicio oral?* Editorial Gaceta Jurídica. <http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/CLP/contenidos.dll/Tomos218-241-Ajuridica/451747/452993/453005/453050>.
- Jauche, E. (2021). *Derechos del imputado*. Rubinzal-Culzoni Editores.
- Landa, C. (2012). *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia*. Tesis para optar el grado de doctor en derecho constitucional http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/37/El_%20derecho%20al%20debido%20proceso%20en%20la%20jurisprudencia.pdf?sequence=4
- Landa, C. (2012). *El derecho al debido proceso en la jurisprudencia: corte suprema de justicia de la república del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Academia de la Magistratura.
- Maier, J. (2016). La víctima y el sistema penal. *Revista Jueces para la Democracia*, 12(27), 31-51. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2528762>
- Mesia, C. (2005). *Exegesis del Código Procesal Constitucional*. Gaceta Jurídica (segunda edición).
- Montero, J. (2019). *Derecho jurisdiccional: III Proceso Penal*. José María Bosch Editor.

- Moreno, V. (2020). *Sobre el derecho de defensa: cuestiones generales. Teoría y derecho. pensamiento jurídico el derecho de defensa.* 8, 16-38. <https://ojs.tirant.com/index.php/teoria-y-derecho/article/view/230/226>
- Moreno, V. (2010). Derecho de defensa, teoría de derecho. En *Defensa a la defensa y abogacía en México.* UNAM. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3878/7.pdf>
- Murillo, E. (1 de agosto de 2020). *¿Qué es defensa ineficaz?* <https://defensapenal.com.pe/que-es-defensa-ineficaz/>
- Nogueira, H. (2003). Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: Doctrina y jurisprudencia. *Ius et Praxis*, 9(1), 403-466. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122003000100020>
- Peña, A. (2014). *Derecho procesal penal, sistema acusatorio teoría del caso técnica de litigación oral.* Rodhas S.A.C.
- Quintero, C. (2013). *La justicia penal negociada en Estados Unidos y Colombia, estudio comparado desde una perspectiva de cultura jurídica.* Tesis para optar el grado de magíster en derecho. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/75315/6699871.2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Quiróz, C. (s.f.). El principio de contradicción en el proceso penal peruano. *Revista Jurídica de Cajamarca*, 15. [https://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista10/contradiccion.htm#:~:text=Principio %20de %20Contradici %C3 %B3n %3A %20implica %20que,las %20garant %C3 %ADas %20del %20debido %20proceso.](https://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista10/contradiccion.htm#:~:text=Principio%20de%20Contradici%C3%B3n%3A%20implica%20que,las%20garant%C3%ADas%20del%20debido%20proceso.)
- Ramos, F. (2001). *El Proceso Penal. Lectura Constitucional.* J.M. Bosch.
- Recurso de Nulidad N.º 186-2006-Piura (26 de septiembre, 2006). Corte Suprema de Justicia.
- Reinaldo Figueroa Planchart vs. República Bolivariana de Venezuela, Caso N.º 11.298 (13 abril d 2000).
- Romero, C. (11 junio 2005). La Categorización un aspecto crucial de la Investigación Cualitativa. *Revista de Investigaciones Cesmag* 11(11), 113-118. [chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgclclefindmkaj/https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/Investigacion %20I/Material/37_Romero_Categorizaci %C3 %B3n_Inv_cualitativa.pdf](chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgclclefindmkaj/https://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/Investigacion%20I/Material/37_Romero_Categorizaci%C3%B3n_Inv_cualitativa.pdf)
- Roxin, C. (2000). *Derecho procesal penal.* Editores del Puerto S.R.L.
- Salas, C. (2011). *El proceso penal común.* Gaceta Penal y Procesal Penal.

- Salazar, R. (2004). *La tutela de derechos y sus modalidades en el Nuevo Sistema Procesal Penal Peruano*. Gaceta Penal & Procesal Penal.
- San Martín, C. (2014). *Derecho procesal penal. 3ra edición, vol. I*. Editora Jurídica Grijley.
- Sánchez, P. (2006). *Introducción al nuevo proceso penal*. Idemsa.
- Sánchez, P. (2009). *El nuevo proceso penal*. Idemsa.
- Taboada, G. (2019). *El proceso especial de terminación anticipada en el nuevo Código Procesal Penal*. Lima.
- Ugaz, F., & Robles, W. (2016). La estrategia fiscal en la negociación penal y los mecanismos de simplificación procesal del Código Procesal Penal del 2004. *Revista Derecho y Cambio Social*, 8. http://www.derechoycambiosocial.com/revista045/LA ESTRATEGIA_FISCAL.pdf
- Ulloa, J. (2020). *La defensa ineficaz y su represión en los actos procesales del proceso en el distrito judicial de Lima periodo 2015-2018*. Tesis para optar el grado de abogado. https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/6068/ulloa_gjr.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Valderrama, L. (2014). *El contenido esencial del derecho de defensa conforme al Tribunal del Servicio Civil*. Actualidad Jurídica. <http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/CLP/contenidos.dll/Tomos218-241-Ajuridica/451747/1567373/1567374/1567377/1571631/1568041>
- Velásquez, P. (2009). *Criterios para determinar la pena en el procedimiento de conclusión anticipada del juicio oral*. Gaeta Penal & Procesal Penal. <http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/CLP/contenidos.dll/Tomos218-241-Ajuridica/451747/452185/452196/452250>
- Villavicencio, F. (2 agosto 2018). *Proceso de conclusión anticipada que culmina con la reserva del fallo condenatorio*. http://www.vmrfirma.com/pdf/publicacion_uno.pdf

ANEXOS

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título preliminar: “El derecho de defensa del imputado en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa, 2019-2020”	
Problemas de la investigación	Objetivos de la investigación
Problema general <ul style="list-style-type: none"> • ¿De qué manera se ejerce el derecho de defensa del imputado por el abogado de libre elección, en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020)? 	Objetivo general <ul style="list-style-type: none"> • Determinar si el derecho de defensa del imputado por el abogado de libre elección, se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).
Problemas específicos <ul style="list-style-type: none"> • ¿Por qué en los casos de conclusión anticipada de juicio oral, el ejercicio profesional del abogado genera la indefensión del imputado, en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020)? • ¿Cuáles son las fuentes doctrinarias y normativas para resolver los casos de conclusión anticipada relativos al derecho de defensa, según sentencias dictadas en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020)? 	Objetivo específico <ul style="list-style-type: none"> • Determinar si en los casos de conclusión anticipada de juicio oral, el ejercicio profesional del abogado genera la indefensión del imputado, en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020). • Analizar las fuentes doctrinarias y normativas para resolver los casos de conclusión anticipada relativos al derecho de defensa, según sentencias dictadas en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).

Diseño metodológico

Caso seleccionado criterios de selección	Fuentes (sujetos y/o documentos)	Técnicas de recolección de datos	Instrumentos de recolección de datos
<ul style="list-style-type: none"> Expedientes judiciales del módulo de justicia de Paucarpata en casos de conclusión anticipada. Especialistas en derecho penal, seleccionados previamente, del módulo de justicia de Paucarpata. 	<p>Expedientes judiciales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Exp. 09197-2019-0-0401-JR-PE-01 Exp. 09396-2019-0-0401-JR-PE-02 Exp. 04470-2020-0-0401-JR-PE-02 Exp. 10518-2019-0-0401-JR-PE-01 Exp. 04459-2019-41-0401-JR-PE-01 Exp. 00472-2020-21-0401-JR-PE-01 Exp. 07602-2019-30-0401-JR-PE-01 Exp. 07479-2019-65-0401-JR-PE-01 Exp. 04338-2019-29-0401-JR-PE-01 Exp. 06202-2019-33-0401-JR-PE-01 <p>Guía de entrevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04 jueces 04 fiscales 02 abogados especialistas en derecho penal 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis documental Guía de antevista 	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de 10 expedientes completos del módulo de justicia de Paucarpata del año 2019-2020 de conclusión anticipada Entrevista a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal, seleccionados previamente, del módulo de justicia de Paucarpata

Objetivos	Categorías preliminares	Subcategorías preliminares
Objetivo general <ul style="list-style-type: none"> • Determinar si el derecho de defensa del imputado por el abogado de libre elección, se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020). 		
Objetivo específico <ul style="list-style-type: none"> • Determinar si en los casos de conclusión anticipada de juicio oral, el ejercicio profesional del abogado genera la indefensión del imputado, en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020). • Analizar las fuentes doctrinarias y normativas para resolver los casos de conclusión anticipada relativos al derecho de defensa, según sentencias dictadas en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020). 		
Bibliografía de sustento para la justificación y delimitación del problema <ul style="list-style-type: none"> • Landa, C. (2012). El derecho al debido proceso en la jurisprudencia: corte suprema de justicia de la república del Perú, tribunal constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos • Mesias, C. (2005). Exegesis del Código Procesal Constitucional, Editorial Gaceta Jurídica (segunda edición). • Moreno, V. (2010). Sobre el derecho de defensa, teoría derecha revista de pensamiento jurídico el derecho de defensa. • Peña, A. (2014). Derecho procesal penal. Sistema acusatorio teoría del caso técnica de litigación oral. • Quinteros, C. (2013) La justicia penal negociada en Estados Unidos y Colombia, estudio comparado desde una perspectiva de Cultura Jurídica. Colombia. 		
Bibliografía de sustento usada para el diseño metodológico <ul style="list-style-type: none"> • Guía para realización de trabajos de investigación, Fondo editorial (Rios Cataño, Mory Arciniega, & Mandujano Gonzales, s.f.) • Metodología de la investigación. Sexta edición (Hernández Sampieri, 2014)). https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGpFWQrkrhdkzqZHkQLgPdMCKfB?projector=1&messagePartId=0.11 		

ANEXO 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semiestructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe

Nombre del participante Firma del participante

ANEXO 3

GUÍA DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

“El derecho de defensa del imputado en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa, 2019-2020”

I. Datos generales

- Nombres del profesional entrevistado:
- Profesión:
- Cargo que ocupa:

II. Guía de preguntas

Objetivo general: Determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa (2019-2020).

1. Con la experiencia laboral que posee ¿Cuál fue la forma más adecuada y eficaz en la que se ejerció el derecho de defensa para dar por cumplido la garantía procesal de defensa en los casos de conclusión anticipada del módulo de justicia de Paucarpata?
2. ¿El Juez que controla el acuerdo provisional, tomando en cuenta los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad para emitir una sentencia condenatoria anticipada, prevé que se garantizó el derecho de defensa?
3. En los procesos por pluralidad de hechos punibles o de imputados, se requiere el acuerdo de todos los imputados y por todos los cargos que se incrimine a cada uno, sin embargo, el Juez podrá aprobar acuerdos parciales si la falta de acuerdo se refiere a delitos conexos y en relación con los otros imputados, ¿Se podría considerar que exista un perjuicio a la investigación o que se vulnere el derecho de defensa de los otros imputados?

Primer Objetivo Específico: Analizar la existencia de ineficacia del abogado en los casos de conclusión anticipada que genera la indefensión del imputado o agraviado, en el módulo de justicia de Paucarpata, Arequipa.

4. Conforme a los casos que usted ha desarrollado ¿La presencia física de un abogado defensor en los casos de conclusión anticipada otorga el cumplimiento de la garantía constitucional de defensa?
5. Cuando se designa un abogado de oficio en los casos de conclusión anticipada ¿Se procura que la defensa sea real y efectiva en el proceso de conclusión anticipada?

Segundo Objetivo Específico: Demostrar porque al inicio del juicio oral y después de que el titular de la acción penal exponga su acusación, se acogen al beneficio de la conclusión anticipada, configure la inexistencia de un debido proceso por parte de la defensa técnica del imputado e agraviado, en el módulo de justicia de Paucarpata.

6. En las audiencias por casos de conclusión en las que ha participado ¿Se relaciona la aplicación de la garantía procesal del derecho a la defensa durante la conclusión anticipada, a partir del análisis de la actuación de los abogados y magistrados en audiencia de conformidad?
7. Cuando el imputado se acoge a la conclusión anticipada es beneficiado con la reducción de la pena de una sexta este beneficio es adicional ¿Cómo se considera este beneficio?
8. La tendencia a la utilización en los sistemas procesales acusatorios de las fórmulas de soluciones rápidas y eficaces, importados del sistema criminal norteamericano ¿Se ajusta a nuestra legislación peruana?

ANEXO 4
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

Ficha de análisis documental		Código:
Expediente	Fecha	
Hechos relevantes		
Fuentes doctrinarias		
Fuentes normativas		
Razón esencial de la decisión		
Otras motivaciones relevantes		
Parte resolutive		

ANEXO 5
OFICIO DE COMITÉ DE ÉTICA DE APROBACIÓN

Huancayo, 15 de junio de 2022

OFICIO N° 136-2022-CE-FD-UC

Señor(a):

DANIELA MAGDA CARRILLO RIVERA

Presente-

EXP. 136-2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez manifestarle que el estudio de investigación titulado: **“EL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPUTADO EN LOS CASOS DE CONCLUSIÓN ANTICIPADA EN EL MÓDULO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA, AREQUIPA, 2019-2020”** ha sido **APROBADO** por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Derecho, bajo las siguientes condiciones:

- El Comité de Ética puede en cualquier momento de la ejecución del trabajo solicitar información y confirmar el cumplimiento de las normas éticas.
- El Comité puede solicitar el informe final para revisión final.

Aprovechamos la oportunidad para renovar los sentimientos de nuestra consideración y estima personal.

Atte,



Claudia Rios Cataño
Comité de Ética en Investigación
Facultad de Derecho
Presidenta
Universidad Continental

ANEXO 6
FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTO

Arequipa, 04 de Julio 2022

OFICIO Nro. 001-DMCR-2022

SEÑOR:

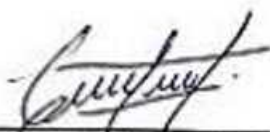
Dr. FREDDY APAZA NOBLEGA

ASUNTO: SOLICITO VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Tengo el alto honor de dirigirme a su digna persona, para manifestar que, en cumplimiento con las normas y exigencias metodológicas de los trabajos de investigación, los instrumentos elaborados para recoger información antes de ser aplicados primero deben ser validado por los expertos, en tal sentido conocedora de su amplia experiencia como experto de los trabajos de investigación solicito que tenga a bien validar el instrumento que a continuación adjunto.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente



Daniela Magda Carrillo Rivera
DNI 70477292

Adjunto:

1. Matriz de consistencia.
2. Consentimiento informado.
3. Instrumento de investigación.
4. Ficha de validez de contenido.

FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO

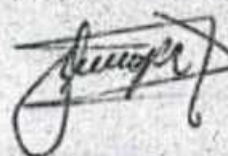
Nombre de Instrumento: Guía de entrevistas semiestructurada

Dirigido a: Jueces Fiscales y Abogados litigantes que hayan participado en procesos de conclusión anticipada en la ciudad de Arequipa.

Criterios		Valoración		Observación
		Si	No	
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje claro y apropiado	X		
2. OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables	X		
3. PERTINENCIA	Adecuado al avance de la ciencia pedagógica	X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica	X		
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad	X		
6. ADECUACIÓN	Adecuado para valorar el constructo o variable a medir	X		
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos científicos	X		
8. COHERENCIA	Entre las definiciones, dimensiones e indicadores	X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la medición	X		
10. SIGNIFICATIVIDAD	Es útil y adecuado para la investigación	X		

- Procede su aplicación (X)
- No procede su aplicación ()

Nombre y apellidos	FREDDY APARA NOBLEGA
Título profesional / Especialidad	ABOGADO / MAGISTER EN DERECHO PENAL
e-mail	fapara05@gmail.com
Fecha de validación (días, mes y año):	06 julio 2022



Firma

Arequipa, 04 de Julio 2022

OFICIO Nro. 002-DMCR-2022

SEÑOR:

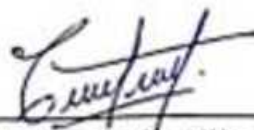
Dra. ROMINA AZUCENA VELÁSQUEZ BOLÍVAR

ASUNTO: SOLICITO VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Tengo el alto honor de dirigirme a su digna persona, para manifestar que, en cumplimiento con las normas y exigencias metodológicas de los trabajos de investigación, los instrumentos elaborados para recoger información antes de ser aplicados primero deben ser validado por los expertos, en tal sentido conocedora de su amplia experiencia como experto de los trabajos de investigación solicito que tenga a bien validar el instrumento que a continuación adjunto.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente



Daniela Magda Carrillo Rivera
DNI 70477292

Adjunto:

1. Matriz de consistencia.
2. Consentimiento informado.
3. Instrumento de investigación.
4. Ficha de validez de contenido.

FICHA DE VALIDEZ DE CONTENIDO

Nombre de Instrumento: Guía de entrevistas semiestructurada

Dirigido a: Jueces Fiscales y Abogados litigantes que hayan participado en procesos de conclusión anticipada en la ciudad de Arequipa.

Criterios		Valoración		Observación
		Si	No	
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje claro y apropiado	✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables	✗		
3. PERTINENCIA	Adecuado al avance de la ciencia pedagógica	✗		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica	✗		
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad	✗		
6. ADECUACIÓN	Adecuado para valorar el constructo o variable a medir	✗		
7. CONSISTENCIA	Basado en aspectos teóricos científicos	✗		
8. COHERENCIA	Entre las definiciones, dimensiones e indicadores	✗		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la medición	✗		
10. SIGNIFICATIVIDAD	Es útil y adecuado para la investigación	✗		

- Procede su aplicación (✗)
- No procede su aplicación ()

Nombre y apellidos	Romina Azucena Velásquez Bolívar
Título profesional / Especialidad	Abogado / Magister en Derecho Civil
e-mail	romivel@gmail.com
Fecha de validación (días, mes y año):	07 de Julio de 2022



Firma

ANEXO 7
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS ENTREVISTADOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

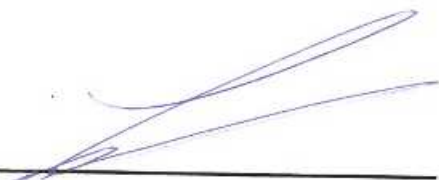
Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe



Nombre del participante


Firma del participante
Yuri Raymundo Zegarra Calderón
JUEZ
Tercer Juzgado Penal Unipersonal
Corte Superior de Justicia de Arequipa

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe

RENE MARIO CASTRO FIGUEROA
JUEZ ESPECIALIZADO PENAL

Nombre del participante



Firma del participante

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe

ANA LIZBETH SILORES GUTIERREZ

Nombre del participante


Firma del participante

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:


Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe

Alan Gerber Castro Choque

Nombre del participante


ALAN GERBER CASTRO CHOQUE
JUEZ
Primer Juzgado Especializado Penal Unipersonal
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata
Corte Superior de Justicia de Arequipa

Firma del participante

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

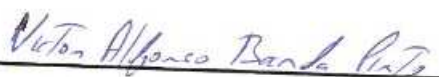
Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe



Nombre del participante


Firma del participante

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe

Mariony Manchego Parillo.
Nombre del participante


Firma del participante.....
MARIONY MANCHEGO PARILLO
Fiscal Adjunta Provincial
1ra Fiscalía Prov. Penal Corp. Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe



Nombre del participante



Firma del participante

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe


Nombre del participante


Firma del participante
GEORGINA ALONSO ABRIL ARANIBAR
Fiscal Adjunto Provincial
1ra Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe

Lenifer Carin Almanza Ccorahua

Nombre del participante


CAA 8 11110

Firma del participante

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

Lo estamos invitando a participar en un estudio científico con fines de realizar una tesis la cual será para obtener el título profesional, la investigación busca determinar si el derecho de defensa por parte del abogado particular del agraviado e imputado se garantiza en los casos de conclusión anticipada en el módulo de justicia de Paucarpata Arequipa para ello se entrevistará a 04 jueces, 04 fiscales y 02 abogados especialistas en derecho penal y así poder analizar las causas del problema; este es un estudio que será desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental.

El análisis del objetivo general y objetivos específicos se realizará a través de preguntas que usted responderá con la mayor honestidad, usted podrá tomar el tiempo que sea necesario para responder, también puede parar con la entrevista en el momento que lo necesite.

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:

1. Se aplicará una entrevista semi-estructurada.
2. La entrevista tendrá una duración máxima de veinte (20) minutos y quedará registrada en audio.
3. Las respuestas otorgadas serán transcritas para su posterior análisis.

Riesgos:

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud o su trabajo.

Beneficios:

Con el presente trabajo, no habrá beneficios económicos y de ninguna otra índole; sin embargo, si permitirá al entrevistado informarse respecto a los criterios que utilizan para determinar la cuantificación del daño moral.

Costos y compensación

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole.

Confidencialidad:

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participaron en este estudio.

Derechos del participante:

Si decide participar en el estudio, puede retirarse de este en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin que ello ocasiona ningún perjuicio para usted.

Contacto del investigador:

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con:

970 077049 Daniela Magda Carrillo Rivera

Email: 70477292@continental.edu.pe

Jessica Freia Bolívar Condorchoa

Nombre del participante


Jessica Bolívar Condorchoa
ABOGADA
C.A.A. 12761

Firma del participante

ANEXO 8
EXPEDIENTES ANALIZADOS



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DISTRITO FISCAL
3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

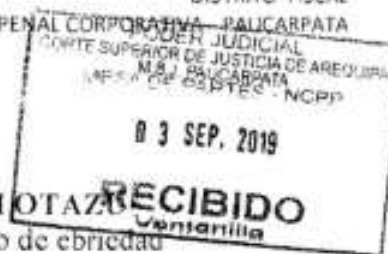
Expediente :

Carpeta Fiscal N°: CASO TURNO

Imputado : DULBER MAMANI OTAZU

Materia : Conducción en Estado de ebriedad

Agraviado : LA SOCIEDAD



Requerimiento N° 01-2019-3D-1FPFPCP.

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE
PAUCARPATA - FLAGRANCIA.

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, señalando domicilio procesal, en Calle Alberto Laveau S/N, Urb. Guardia Civil, Mz. O, III Etapa, Paucarpata, Casilla Electrónica: 33477; ante Ud. me presento y expongo:

REQUERIMIENTO FISCAL:

Señor de lo establecido en el inciso 4 del Art. 446 y siguientes del Código Procesal Penal, Octavo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, **REQUIERE EL PROCESO INMEDIATO** de la presente causa, en torno a la intervención procesal en contra de **DULBER MAMANI OTAZU**, por la comisión del delito **Contra la Seguridad Pública**, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad, previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de la **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes.

II.- DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL INVESTIGADO

Nombres y apellidos : **DULBER MAMANI OTAZU (34)**
DNI N° : 43201322
Fecha de Nacimiento : 24 de Junio de 1985
Sexo : Masculino
Estado civil : Casado
Lugar de nacimiento : Puno - San Román - Cabanillas
Profesión u ocupación : Obrero



Nombre de los padres : Valentino y Teodocia
Domicilio real : AA.HH Alto Paucarpata Mz. C, Lote 02, distrito de Paucarpata, Arequipa.
Domicilio Procesal : Av. Independencia N° 927-933, Cercado - Arequipa.

PARTE AGRAVIADA

La **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes Arequipa, con domicilio en Av. Kennedy S/N, Paucarpata, Arequipa.

III.- CARGOS IMPUTADOS

Según se tiene del acta de Intervención Policial, en el distrito de Paucarpata, siendo las 18:45 horas del día 01 de Setiembre del 2019, la tripulación de la móvil PL-21163, en circunstancias que realizaba patrullaje motorizado por el AA.HH Santa María II, a la altura de la Mz. B, transaba de noreste a sureste, realizando maniobras temerarias e invadiendo el carril contrario, el vehículo de placa de rodaje D1H-438, marca Kia, modelo Picanto, color verde, el cual era conducido por la persona de Dulber Mamani Otazu, el mismo que se encontraba en aparente estado de ebriedad, al solicitarle la documentación respectiva, presentó una (01) tarjeta de identificación vehicular N° A0001472207, (01) AFOCAT con N° 0002217-2019, un (01) certificado de Inspección Técnica Vehicular de N° C-2019-125-169-002157 (vencido el 25/08/2019), no presentando ningún otro documento, siendo que al indicarle para constituírse a la Comisaría Campo Marte, éste indicó no tener la llave de contacto de su vehículo y que tendría conocidos de alto mando en la Policía, posteriormente dijo que arreglemos y quedemos en un acuerdo para que se retire, personal policial al ingresar al vehículo intervenido, no encontró la llave de contacto, motivo por el cual, solicitaron apoyo de la grúa de placa de rodaje D0E-728, para trasladar al vehículo a la Comisaría PNP Campo Marte, así como también al intervenido para ponerlo a disposición de la sección correspondiente.

Que, al haberse practicado el Dosaje Etílico N° 0030-0009968, a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU (34)**, con fecha 01 de Setiembre del 2019, a horas 21:04, se ha obtenido como resultado para la ingesta de licor, 2.51 g/l de alcohol por litro de sangre, sobrepasando de este modo el límite permitido.

Con lo cual se imputa a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU (34)**, la comisión del delito **Contra la Seguridad Pública**, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad,



previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de la **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes, al haber manejado en estado de ebriedad el vehículo de placa de rodaje DIH-438.

Es de mencionar según el reporte de Casos según persona natural, sistema fiscal SGF, da cuenta que la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, con DNI 43201322, registra los casos 501-2009-2156, el cual se encuentra con Sentencia; 505-2010-2143, se encuentra con Archivo; el caso 505-2013-2160, el cual se encuentra con Sentencia y el Caso N° 505-2016-2625, el cual también se encuentra con Sentencia.

Finalmente se tiene además el Oficio N° 54194-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, remitido por el Coordinador del Registro Judicial de Arequipa, en donde ponen de conocimiento que la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, identificado con DNI 43201322, **SI REGISTRA antecedentes penales**, por el delito de Hurto Agravado, sentenciado a 01 año y 08 meses de pena privativa de libertad suspendida por el mismo lapso; además **SI REGISTRA antecedentes judiciales**, por delito de Hurto Agravado.

IV. TIPIFICACIÓN

El tipo penal con el que encuentran correspondencia los hechos imputados es el **Contra la Seguridad Pública**, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad, previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de la **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes, como "El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36 inciso 7)"

V. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Resultan elementos de prueba que vinculan a, con los hechos investigados los siguientes:

1. Acta de Intervención Policial, en el distrito de Paucarpata, en el distrito de Paucarpata, siendo las 18:45 horas del día 01 de Setiembre del 2019, la tripulación de la móvil PI.-21163, en circunstancias que realizaba patrullaje motorizado por el AA.HH Santa María II, a la altura de la Mz. B, transitaba de noreste a sureste, realizando maniobras temerarias e invadiendo el carril contrario, el vehículo de placa de rodaje DIH-438, marca Kia, modelo Picanto, color verde grass, el cual era conducido por la persona de Dulber Mamani Otazu, el mismo que se encontraba en aparente estado de ebriedad,



al solicitarle la documentación respectiva, presentó una (01) tarjeta de identificación vehicular N° A0001472207, (01) AFOCAT con N° 0002217-2019, un (01) certificado de Inspección Técnica Vehicular de N° C-2019-125-169-002157 (vencido el 25/08/2019), no presentando ningún otro documento, siendo que al indicarle para constituirnos a la Comisaría Campo Marte, éste indicó no tener la llave de contacto de su vehículo y que tendría conocidos de alto mando en la Policía, posteriormente dijo que arreglemos y quedemos en un acuerdo para que se retire, personal policial al ingresar al vehículo intervenido, no encontró la llave de contacto, motivo por el cual, solicitaron apoyo de la grúa de placa de rodaje D0E-728, para trasladar al vehículo a la Comisaría PNP Campo Marte, así como también al intervenido para ponerlo a disposición de la sección correspondiente.

2. Dosaje Etílico con registro N° 0030-0009968, practicado a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU (34)**, con fecha 01 de Setiembre del 2019, a horas 21:04, se ha obtenido como resultado para la ingesta de licor, 2.51 g/l de alcohol por litro de sangre.

Reporte de Casos según persona natural, sistema fiscal SGF, dando cuenta que la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, con DNI N° 43201322, registra los casos 505-2009-2156; 505-2010-2143; 505-2013-2160; 505-2016-2625, por los delitos contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad.

Consulta en Línea al Sistema de Licencias de Conducir, en donde informan que el estado de la licencia de conducir de la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, es **CANCELADA**.

5. **Papeleta de Infracción N° 662657**, impuesta a Guino Armando Vita Mamani, por la infracción M-02.
6. **Papeleta de Infracción N° 662658**, impuesta a Guino Armando Vita Mamani, por la infracción M-03.
7. **Declaración de DULBER MAMANI OTAZU**, de fecha 02 de Setiembre del 2019, en donde señala: "Que desde las 12:00 horas del día por el que se le pregunta se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, en una cancha de fútbol en Nueva Alborada, consumiendo cerveza, entre dos personas más, ingiriendo alrededor de dos cajas aproximadamente entre todos, ello hasta las 18:00 horas, siendo que a esa hora decide retirarse a su domicilio, abordando para tal fin aborda el vehículo de placa de rodaje D1H-438, el cual le fue prestado por su amigo Gustavo Alanguia Pérez, en esas circunstancias se encontraba acompañado por un amigo, siendo que en el trayecto a su domicilio es intervenido por personal policial conduciendo en estado de ebriedad, no recordando con precisión la intervención, siendo que inicialmente fue trasladado a la comisaría, para luego tomar conocimiento de que el vehículo también fue trasladado posteriormente, siendo que contaba con documentos relativos al



vehículo es decir Tarjeta de Propiedad, SOAT, Revisión Técnica, siendo que no contaba con licencia de conducir al estar suspendida, debido a haber sido intervenido en anterior oportunidad por el mismo delito... Que sí ha sido investigado anteriormente, siendo ésta la quinta vez que lo intervienen por el mismo delito, siendo que en dos oportunidades, ya se llegó a una sentencia en su contra, ello en el año 2013 y en el año 2016... Que tiene su licencia de conducir actualmente se encuentra suspendida indefinidamente, por haber cometido el mismo delito en anterior oportunidad, ello desde el año 2016."

VI.- FUNDAMENTOS DEL PROCESO INMEDIATO

Conforme se tiene de lo anteriormente expresado, en la presente causa concurren los presupuestos a efecto de instar un **PROCESO INMEDIATO**, habida cuenta que, se evidencian los siguientes presupuestos establecido en el inciso 4 del Art. 446 y siguientes del Código Procesal Penal:

Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código."

Asimismo, como lo tiene indicado el Acuerdo Plenario N° 06-2010-CJ-116 de fecha 16 de noviembre de 2010, según el artículo el artículo 447° numeral 1° del Código Procesal Penal, el Fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato en dos momentos: i) luego de culminar las diligencias preliminares; y, ii) antes de los treinta días de Formalizada la Investigación Preparatoria. En base al primer supuesto, se estará ante un Proceso Inmediato incoado sin Formalización de la Investigación Preparatoria; de ahí –señala el Acuerdo– que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de Formalización de Investigación Preparatoria. A lo que además, se de agregar lo contemplado en el Acuerdo Plenario 2-2016-/CJ-116, referido al Proceso Penal Inmediato Reformado. Legitimación y alcances.

VII.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Señor Juez, amparamos nuestra pretensión en los artículos 446 y siguientes del Código Procesal Penal.

VIII.- PRUEBAS:



Los medios de investigación contenidos en la Carpeta Fiscal.

POR TANTO:

A usted señor Juez, solicito se sirva dar el trámite que corresponde al presente requerimiento, incoándose el **PROCESO INMEDIATO** de la presente causa, seguida en contra de **DULBER MAMANI OTAZU**, por la comisión del delito **Contra la Seguridad Pública**, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad, previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de la **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes.

PRIMER OTROSI DIGO:

Se adjunta los actuados correspondientes a fojas ().

SEGUNDO OTROSI DIGO: Requerimientos adicionales:

Requerimiento de medida coercitiva: Para efectos de la medida de coerción personal a fijarse en esta investigación, se debe tener presente que en el caso de autos, a la fecha se dan los presupuestos de comparecencia simple.

TERCER OTOSÍ DIGO: Se pone a disposición a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, en calidad de detenido.

Arequipa, 03 de Setiembre del 2019.

LUIS GUILLERMO VERA OVIED,
Fiscal Provincial
1ra Fiscalía Prov. Penal Corporativa Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa



"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DISTRITO FISCAL
3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

CASO SGF	: 504-2018-
EXP.	: 9197-2019
IMPUTADO	: DULBER MAMANI OTAZU
DELITO	: PELIGRO COMÚN
AGRAVIADO	: EL ESTADO
SUMILLA	: Acusación.

SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA-
PAUCARPATA:

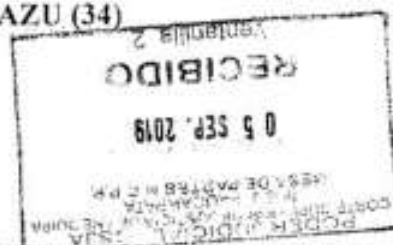
LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, señalando domicilio procesal, en Calle Alberto Laveau S/N, Urb. Guardia Civil, Mz.O, III Etapa. Paucarpata, Casilla Electrónica: 33477; ante Ud. me presento y expongo:

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN

Con la autoridad que nos confiere el artículo 159, numerales 1 y 5 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, luego de realizada la incoación de proceso inmediato, conforme aparece en la presente carpeta fiscal, este Despacho en aplicación del artículo 447, numeral 6 del NCPP, Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata - Tercer Despacho, **FORMULA REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN** en contra de en contra de **DULBER MAMANI OTAZU**, por la comisión del delito **Contra la Seguridad Pública**, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad, previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de la **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

1. DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL INVESTIGADO

Nombres y apellidos : **DULBER MAMANI OTAZU (34)**
DNI N° : 43201322
Fecha de Nacimiento : 24 de Junio de 1985





Sexo : Masculino
Estado civil : Casado
Lugar de nacimiento : Puno – San Román - Cabanillas
Profesión u ocupación : Obrero
Nombre de los padres : Valentino y Teodocia
Domicilio real : AA.HH Alto Paucarpata Mz. C, Lote 02, distrito de Paucarpata, Arequipa.
Domicilio Procesal : Av. Independencia N° 927-933, Cercado – Arequipa.

II. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO DATOS DEL AGRAVIADO:

SOCIEDAD, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Arequipa, con domicilio en Av. Kennedy S/N, Paucarpata, Arequipa.

EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE SE IMPUTA.- Este despacho ha logrado advertir como hechos que deberán ser materia de acusación:

Se tiene del acta de Intervención Policial, en el distrito de Paucarpata, siendo las 18:45 horas del día 01 de Setiembre del 2019, la tripulación de la móvil PL-21163, en circunstancias que realizaba patrullaje motorizado por el AA.HH Santa María II, a la altura de la Mz. B, transitaba de noreste a sureste, realizando maniobras temerarias e invadiendo el carril contrario, el vehículo de placa de rodaje D1H-438, marca Kia, modelo Picanto, color verde grass, el cual era conducido por la persona de Dulber Mamani Otazu, el mismo que se encontraba en aparente estado de ebriedad, al solicitarle la documentación respectiva, presentó una (01) tarjeta de identificación vehicular N° A0001472207, (01) AFOCAT con N° 0002217-2019, un (01) certificado de Inspección Técnica Vehicular de N° C-2019-125-169-002157 (vencido el 25/08/2019), no presentando ningún otro documento, siendo que al indicarle para constituirmos a la Comisaría Campo Marte, éste indicó no tener la llave de contacto de su vehículo y que tendría conocidos de alto mando en la Policía, posteriormente dijo que arreglemos y quedemos en un acuerdo para que se retire, personal policial al ingresar al vehículo intervenido, no encontró la llave de contacto, motivo por el cual, solicitaron apoyo de la grúa de placa de rodaje D0E-728, para trasladar al vehículo a la Comisaría PNP Campo Marte, así como también al intervenido para ponerlo a disposición de la sección correspondiente.

Que, al haberse practicado el Dosaje Etílico N° 0030-0009968, a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU (34)**, con fecha 01 de Setiembre del 2019, a horas 21:04, se ha obtenido



como resultado para la ingesta de licor, 2.51 g/l de alcohol por litro de sangre, sobrepasando de este modo el límite permitido.

Con lo cual se imputa a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU (34)**, la comisión del delito **Contra la Seguridad Pública**, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad, previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de la **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes, al haber manejado en estado de ebriedad el vehículo de placa de rodaje DIH-438.

Es de mencionar según el reporte de Casos según persona natural, sistema fiscal SGF, da cuenta que la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, con DNI 43201322, registra los casos 501-2009-2156, el cual se encuentra con Sentencia; 505-2010-2143, se encuentra con Archivo; el caso 505-2013-2160, el cual se encuentra con Sentencia y el Caso N° 505-2016-2625, el cual también se encuentra con Sentencia.

Asimismo se tiene además el Oficio N° 54194-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, remitido por el Procurador del Registro Judicial de Arequipa, en donde ponen de conocimiento que la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, identificado con DNI 43201322, **SI REGISTRA antecedentes penales**, por el delito de Hurto Agravado, sentenciado a 01 año y 08 meses de privación de libertad suspendida por el mismo lapso; además **SI REGISTRA antecedentes judiciales**, por delito de Hurto Agravado.

ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO ACUSATORIO:

1. Acta de Intervención Policial, en el distrito de Paucarpata, en el distrito de Paucarpata, siendo las 18:45 horas del día 01 de Setiembre del 2019, la tripulación de la móvil PL-21163, en circunstancias que realizaba patrullaje motorizado por el AA.HH Santa María II, a la altura de la Mz. B, transitaba de noreste a sureste, realizando maniobras temerarias e invadiendo el carril contrario, el vehículo de placa de rodaje DIH-438, marca Kia, modelo Picanto, color verde grass, el cual era conducido por la persona de Dulber Mamani Otazu, el mismo que se encontraba en aparente estado de ebriedad, al solicitarle la documentación respectiva, presentó una (01) tarjeta de identificación vehicular N° A0001472207, (01) AFOCAT con N° 0002217-2019, un (01) certificado de Inspección Técnica Vehicular de N° C-2019-125-169-002157 (vencido el 25/08/2019), no presentando ningún otro documento, siendo que al indicarle para constituirnos a la Comisaria Campo Marte, éste indicó no tener la llave de contacto de su vehículo y que tendría conocidos de alto mando en la Policía, posteriormente dijo que arreglemos y quedemos en un acuerdo para que se retire, personal policial al ingresar al vehículo intervenido, no encontró la llave de contacto, motivo por el cual, solicitaron apoyo de la grúa de placa de rodaje D0E-728, para trasladar al vehículo a



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DISTRITO FISCAL

3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

la Comisaria PNP Campo Marte, así como también al intervenido para ponerlo a disposición de la sección correspondiente.

2. Dosaje Etílico con registro N° 0030-0009968, practicado a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU (34)**, con fecha 01 de Setiembre del 2019, a horas 21:04, se ha obtenido como resultado para la ingesta de licor, 2.51 g/l de alcohol por litro de sangre.
3. **Reporte de Casos según persona natural, sistema fiscal SGF**, dando cuenta que la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, con DNI N° 43201322, registra los casos 501-2009-2156; 505-2010-2143; 505-2013-2160; 505-2016-2625, por los delitos Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad.
4. **Consulta en Línea al Sistema de Licencias de Conducir**, en donde informan que el estado de la licencia de conducir de la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, es **CANCELADA**.

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDA
Fiscal Provincial
1ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa Paucarpata

Papeleta de Infracción N° 662657, impuesta a **DULBER MAMANI OTAZU**, por infracción M-02.

Papeleta de Infracción N° 662658, impuesta a **DULBER MAMANI OTAZU**, por infracción M-03.

Declaración de DULBER MAMANI OTAZU, de fecha 02 de Setiembre del 2019, en donde señala: "Que desde las 12:00 horas del día por el que se le pregunta se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, en una cancha de fútbol en Nueva Alborada, consumiendo cerveza, entre dos personas más, ingiriendo alrededor de dos cajas aproximadamente entre todos, ello hasta las 18:00 horas, siendo que a esa hora decide retirarse a su domicilio, abordando para tal fin aborda el vehículo de placa de rodaje QIH-438, el cual le fue prestado por su amigo Gustavo Alanguia Pérez, en esas circunstancias se encontraba acompañado por un amigo, siendo que en el trayecto a su domicilio es intervenido por personal policial conduciendo en estado de ebriedad, no recordando con precisión la intervención, siendo que inicialmente fue trasladado a la comisaría, para luego tomar conocimiento de que el vehículo también fue trasladado posteriormente, siendo que contaba con documentos relativos al vehículo es decir Tarjeta de Propiedad, SOAT, Revisión Técnica, siendo que no contaba con licencia de conducir al estar suspendida, debido a haber sido intervenido en anterior oportunidad por el mismo delito... Que sí ha sido investigado anteriormente, siendo ésta la quinta vez que lo intervienen por el mismo delito, siendo que en dos oportunidades, ya se llegó a una sentencia en su contra, ello en el año 2013 y en el año 2016... Que tiene su licencia de conducir actualmente se encuentra suspendida indefinidamente, por haber cometido el mismo delito en anterior oportunidad, ello desde el año 2016."



V. GRADO DE PARTICIPACION:

Se acusa a **ROY HIPÓLITO ROJAS LAZO**, como AUTOR de la presunta comisión del delito **Contra la Seguridad Pública**, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad, previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de la **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como "El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36 inciso 7)".

V. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL:

Se tiene la circunstancia atenuante privilegiada de Tentativa, previsto en el primer párrafo artículo 185, además ha de tenerse presente que para la perpetración del delito materia de investigación preparatoria han concurrido una circunstancia atenuante genérica de tentativa (no tiene antecedentes) y una agravante genérica (aprovechando el modo, "el acusado dejó las lunas abiertas de su vehículo").

VI. SOLICITUD PRINCIPAL DE TIPIFICACION, PENA, REPARACION CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS:

VI.1. Tipificación:

Por los fundamentos expuestos este Despacho acusa a **DULBER MAMANI OTAZU**, como AUTOR, por la comisión del delito **Contra la Seguridad Pública**, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad, previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, en agravio de la **SOCIEDAD**, representado por el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

VI.2 Pena Solicitada:

En un Estado Constitucional y Social de Derecho, los poderes públicos actúan según normas preestablecidas y a su vez, los ciudadanos reconocen que el ordenamiento jurídico es necesario y bueno; en ese sentido, este Ministerio Público al solicitar la pena a imponerse al acusado tiene en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de las penas; es decir que la sanción penal sea justa y equilibrada al restablecimiento del orden social, que el acusado ha quebrantado.



Dado que el delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad, previsto en el artículo 274, primer párrafo, del Código Penal, establece una pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación; haciendo una prognosis de pena y aplicando los artículos 45 y 46 del Código Penal, modificados por la Ley N° 30076, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de Agosto del año 2013, se tiene lo siguiente:

Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena

El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta:

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad.

b. Su cultura y sus costumbres.

c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad."

Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación. Verificadas las circunstancias de atenuación y agravación establecidas en el Código Penal, se tiene que concurren las siguientes:

Circunstancias de agravación de la pena:

El acusado cuenta con antecedentes penales por Conducir en Estado de Ebriedad, y bajo estas circunstancias conduce su vehículo sin licencia de conducir, haciendo más nocivas las consecuencias del ilícito.

En consecuencia, aplicando el artículo 45°-A del Código Penal, modificados por la Ley N° 30076, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Agosto del año 2013, tenemos lo siguiente:

Dividimos en tres partes el espacio punitivo de determinación de la pena a partir de la pena prevista en la ley para el delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad (**no menor de seis meses ni mayor de dos años**).

6 MESES

1 AÑO

1 AÑO Y 6 MESES

2 AÑOS



TERCIO INFERIOR

TERCIO INTERMEDIO

TERCIO SUPERIOR



Al concurrir una circunstancia agravante, la pena concreta se determina en el tercio superior, según lo establecido en el artículo 45°-A, numeral 2, literal a) del Código Penal. En consecuencia resulta proporcional fijar la pena en **2 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, así como el pago de S/ 1245.00 soles, que abonará el acusado, por concepto de Reparación Civil a favor de la parte agraviada.

VI.3 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD:

Considerando el **principio de proporcionalidad** referido al equilibrio cuantitativo y cualitativo entre el (o los) delito (s) cometido (s) por el agente y la pena que le corresponde, y teniendo en cuenta los fundamentos antes expuestos,

Este Ministerio Público, solicita que se imponga al acusado **DULBER MAMANI OTAZU, 2 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**.

VI.4 MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Ahora bien, la determinación del monto indemnizatorio que deberá pagar el acusado, cuya responsabilidad penal se propondrá, responde a criterios objetivos, racionales y ponderables. Estimándose que independientemente del hecho del grado de afectación de los bienes jurídicos en el presente caso, es factible una obligación indemnizatoria ascendente a la suma de S/ 1245.00 soles, **A FAVOR DEL AGRAVIADO**.

VII. RELACION DE MEDIOS DE PRUEBAS OFRECIDOS PARA SU ACTUACION EN LA AUDIENCIA:

Declaraciones de testigos:

1. Declaración del **S3 PNP RAFAEL GUTIERREZ PERREZ**, el mismo que declarará respecto del Acta de Intervención Policial y el Acta de Registro Personal, de fecha 29 de Setiembre del 2018, el mismo que deberá ser notificado a través del Área de personal de la IX Región Policial.
2. Declaración de la Médico **JOHANNA PATRICIA CABANA PEREZ**, la misma que declarará respecto del Certificado Médico Legal N° 24567-L-D, de fecha 01 de Setiembre del 201, realizado a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, la que deberá ser notificada en la División Médico Legal de Arequipa, en la dirección laboral sito en Av. Daniel Alcides Carrión s/n, Cercado de Arequipa.
3. Declaración de la **CAP. S PNP MABEL DALILA HINOSTROZA APAZA**, la misma que declarará respecto del Informe Pericial de Dosaje N° 0030-0009968, practicado a la persona de **DULBER MAMANI OTAZU (34)**, con fecha 01 de Setiembre del 2019, a horas 21:04, se ha obtenido como resultado para la ingesta de licor, 2.51 g/l de alcohol por litro de sangre, la que deberá ser notificada a través del Área de personal de la IX Región Policial.



B.- Prueba Documental:

1. Copia de la Tarjeta de identificación vehicular, respecto del vehículo de placa de rodaje D1H-438, marca Kia, modelo Picanto, color verde grass.
2. Consulta Vigentes Requisitorias personas, realizado a **DULBER MAMANI OTAZU**, donde no se encontraron registros.
3. Copia del Certificado de Inspección Técnica Vehicular, del vehículo de placa de rodaje D1H-438.
4. **Papeleta de Infracción N° 662657**, impuesta a **DULBER MAMANI OTAZU**, por la infracción M-02.
5. **Papeleta de Infracción N° 662658**, impuesta a **DULBER MAMANI OTAZU**, por la infracción M-03.
6. Oficio N° 54194-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, remitido por el Coordinador del Registro Judicial de Arequipa, en donde ponen de conocimiento que la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, identificado con DNI 43201322, **SI REGISTRA antecedentes penales**, por el delito de Hurto Agravado, sentenciado a 01 año y 08 meses de pena privativa de libertad suspendida por el mismo lapso; además **SI REGISTRA antecedentes judiciales**, por delito de Hurto Agravado.
7. **Reporte de Casos según persona natural, sistema fiscal SGF**, dando cuenta que la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, con DNI N° 43201322, registra los casos 501-2009-2156; 505-2010-2143; 505-2013-2160; 505-2016-2625, por los delitos Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Conducción en Estado de ebriedad..

VIII. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL:

Se hace conocer que sobre el acusado pesa la medida de restrictiva de la libertad de Comparecencia Simple dictada de conformidad con el artículo 291 de Código Procesal Penal.

OTROSI DIGO: De conformidad con lo establecido en el artículo 351.3, requiero se me permita modificar, aclarar o integrar la presente acusación en lo que no sea sustancial.

Arequipa, 04 de Setiembre del 2019.

Fiscal responsable: Luis Guillermo Vera Oviedo.

Casilla Electrónica: 33477.

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra Fiscalía Prov. Penal Corporativa Paucarpa
Distrito Fiscal de Arequipa

Expediente: 9344-2019

Especialista: Dra. Betzabe Figueroa

Cuaderno: Principal

Escrito: 01

Sumilla: Absuelve traslado de Acusación

**SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE PAUCARPATA. -**

DULBER MAMANI OTAZU, en el proceso que se sigue en mi contra por la presunta comisión del delito Contra la seguridad pública en la modalidad de **CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD**, en agravio de la **SOCIEDAD** representada por el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; representado por el defensor público Rubén Hilazaca Morga, a usted con el debido respeto me presento y digo:

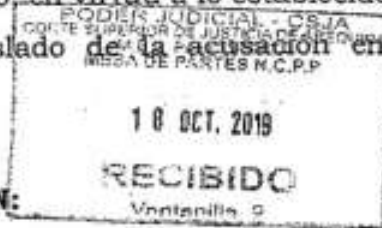
Me apersono señalando como domicilio procesal la Avenida Independencia No. 927-933 del Cercado de Arequipa, y con Casilla Electrónica No. **34319**; asimismo, en virtud a lo establecido en el Art. 350 del NCPP, procedo a absolver el traslado de la acusación en mérito a los siguientes fundamentos:

I.- OBSERVACIONES A LA ACUSACION:

**1.-RESPECTO A LA IMPUTACIÓN FÁCTICA Y OBSERVACIONES FORMALES
A LA ACUSACION:**

Respecto a los hechos imputados y elementos de convicción, la Defensa no se pronuncia por no haber conferenciado hasta el momento con el imputado.

2.-RESPECTO A LA TIPIFICACIÓN, PENA Y REPARACIÓN CIVIL:



No se objeta la Tipificación Jurídica de los hechos. La defensa se reserva la observación de la pretensión punitiva y la reparación civil para ser debatidas en Juicio Oral de ser el caso, por no haber conferenciado con el imputado hasta el momento.

3.-RESPECTO A LOS MEDIOS DE PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO:

Respecto de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público no tenemos observaciones por cuanto aún no se ha conferenciado con el imputado, reservándonos el derecho a observarlos en la audiencia correspondiente.

4.- RESPECTO A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEFENSA:

Se reserva ofrecerlos por no haber conferenciado con el imputado y desconocer la existencia de medios de prueba, sin embargo, al amparo del Principio de Comunidad de Prueba, proponemos los mismos medios de prueba del Ministerio Público.

POR LO EXPUESTO:

Pido a Ud. Señor Juez, pido tener por absuelto el traslado del Requerimiento de Acusación.

Arequipa, 17 de octubre del 2019.

OTROSI. -La defensa se reserva el derecho de instar una salida alternativa del proceso.



Abg. RUBEN HILAZACA MORGÁ
R.D. C.A.A. N° 5123
DEFENSOR PÚBLICO
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

1º JUZ. INVESTIGACION PREP. - Sede MBJ Paucarpata

EXPEDIENTE : 09197-2019-0-0401-JR-PE-01

JUEZ : BENAVIDES DEL CARPIO JUAN CARLOS ENRIQUE

ESPECIALISTA : DIAZ CACERES MARIA ESTRELLITA

MINISTERIO PUBLICO : 1RA FPPC PAUCARPATA LUIS GUILLERMO VERA

OVIDO CASO TURNO ,

IMPUTADO : MAMANI OTAZU, DULBER

DELITO : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O

DROGADICCIÓN.

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD ,

Resolución Nro. 03

Arequipa, ocho de noviembre

Del dos mil diecinueve.

DE OFICIO: Conforme se aprecia de autos se tiene que el Ministerio Público desde la fecha en que se realizó la audiencia de incoación de proceso inmediato, cuatro de septiembre del año en curso, a la fecha no ha cumplido con formular su acusación como ha sido ordenado, por lo que, **Se Dispone:** **REQUERIR** al Ministerio Público a fin de que cumpla con formular acusación como corresponde dentro del plazo de veinticuatro horas de notificado, bajo apercibimiento de comunicarse al órgano de control interno del Ministerio Público en caso de incumplimiento. Autorizando el especialista que suscribe por disposición del Magistrado que conoce el presente proceso y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122 del Código procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos.

1º JUZ. INVESTIGACION PREP. - Sede MBJ Paucarpata

EXPEDIENTE : 09197-2019-0-0401-JR-PE-01

JUEZ : BENAVIDES DEL CARPIO JUAN CARLOS ENRIQUE

ESPECIALISTA : DIAZ CACERES MARIA ESTRELLITA

MINISTERIO PUBLICO : 1RA FPPC PAUCARPATA LUIS GUILLERMO VERA

OVIDO CASO TURNO ,

IMPUTADO : MAMANI OTAZU, DULBER

DELITO : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O

DROGADICCIÓN.

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD ,

Resolución Nro 01

Arequipa, tres de septiembre

Del dos mil diecinueve.

Estando al escrito presentado por el señor representante del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto por el decreto Legislativo N° 1194, **Se Dispone:** **1) SEÑALAR** fecha para la realización de la audiencia única de **incoación de proceso inmediato** en contra de **DULBER MAMANI OTAZU** donde se debatirán los fundamentos del requerimiento fiscal para el día **cuatro de septiembre del año en curso a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos** la misma que se llevará a cabo en la sala de audiencias N° 01 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, con la presencia obligatoria del representante del Ministerio Público y abogado defensor del imputado, bajo apercibimiento de imponerle una multa de 1 URP en caso de inasistencia. **2) DISPONIENDO** la custodia temporal de **Dulber Mamani Otazu** en la carceleta del Poder Judicial por personal de la policía judicial. Autorizando al Especialista Judicial que suscribe por disposición del Magistrado que conoce el presente proceso y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos.

2º JUZ. PENAL UNIPERSONAL - SEDE MBJ PAUCARPATA

EXPEDIENTE : 09197-2019-22-0401-JR-PE-01

JUEZ : BELLIDO DAVILA PERCY

ESPECIALISTA : LUNA CALCINA DAYSI JEANNETH

MINISTERIO PUBLICO : 1RA FPPC PAUCARPATA LUIS GUILLERMO VERA

OVIDEO CASO TURNO ,

IMPUTADO : MAMANI OTAZU, DULBER

DELITO : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O

DROGADICCIÓN,

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD ,

RESOLUCIÓN NRO. 01-2020

Arequipa, trece de marzo del dos mil veinte

Con intervención del señor Juez Percy Bellido Dávila y conforme al estado del proceso; se programa fecha para **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO DE PROCESO INMEDIATO, el día VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE A LAS OCHO HORAS en la sala de audiencias N° 02 del Segundo Juzgado Penal Unipersonal del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata**, debiéndose de notificar a las partes procesales conforme a ley, siendo que en caso de inconcurrencia de alguna parte procesal se dictará los siguientes apercibimientos: **a)** En caso de inconcurrencia del acusado de declarársele contumaz, disponerse el archivo provisional del proceso y girarse las órdenes de captura respectivas; **b)** En caso de inconcurrencia del Fiscal bajo apercibimiento de ponerse en conocimiento del Órgano de Control que lo supervisa; y **c)** En caso de inconcurrencia de su abogado defensor **Dr. GABRIELA APAZA** de designarse nuevo defensor público, de informar al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados de ser el caso, sin perjuicio que el acusado designe abogado de su preferencia, sujetándose su defensa a la etapa en la que se encuentra el proceso. De otro lado, para dicha audiencia las partes deberán concurrir con los todos los órganos de prueba para agotar la misma. **Autorizando el Especialista de Causas que suscribe por disposición del Magistrado que conoce el presente proceso y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de Autos.**

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA



Resolución N°04

En la ciudad de Arequipa, siendo los veintiocho días de diciembre del año dos mil veinte, la señora magistrada **Judy Jenny Rodríguez García**, a cargo del Segundo Juzgado Unipersonal de Paucarpata, luego de realizar el juicio oral, público, contradictorio en audiencia única de proceso inmediato, ha emitido la siguiente:

SENTENCIA Nro. 412- 2020

I. PARTE EXPOSITIVA

VISTOS Y OÍDOS :

Primero.- Identificación de Proceso

Se trata de la causa signada como expediente número **9197-2019**, seguido a **DULBER MAMANI OTAZU**, por el delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, en agravio de la **Sociedad** representada por la procuraduría pública del **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**.

Segundo.- Identificación del Acusado

Se juzga a **DULVER MAMANI OTAZU** con DNI 43201322, con domicilio en Alto Paucarpata Mz-C,Lt-02, distrito de Paucarpata Arequipa, nacido el 24/01/1985, natural de Puno, hijo de Valentino y Teodocia, casado.

Tercero.- Identificación de la Agravada

Se ha considerado a la **Sociedad** representada por la procuraduría pública del **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**.

Cuarto.- Delimitación de la Imputación

El Ministerio Público, como titular de acción penal pública y por ende encargado de establecer la tesis fáctica materia de proceso, en el marco de la requisitoria escrita y oralizada en audiencia en su respectivo alegato oral, ha efectuado la siguiente imputación al acusado.

4.1. Hechos Imputados:

En el distrito de Paucarpata siendo las 18.45 horas del día 01 de septiembre del 2019 la tripulación policial de la móvil PN-2163 en circunstancias que realizaba patrullaje motorizado en Asentamiento Humano Santa María II, a la altura de la manzana B, transitaba de norte este a sur este en un vehículo haciendo maniobras temerarias invadiendo el carril contrario el vehículo de placa de rodaje DIH438-marca Kia, modelo Picanto color verde el cual era conducido por la persona de **DULBER MAMANI OTAZU**, el mismo que se encontraba en aparente estado de ebriedad al solicitarle la documentación respectiva presentó una tarjeta de identificación vehicular número A0001472207K 2217-2019, un certificado técnico vehicular N°C-2019125-279Y 2757 vencido el 28 de agosto del 2019, no presentó ningún otro documento siendo que al indicarle para constituirse a la comisaría de Campo Marte esté indicó no tener la llave de contacto del vehículo que tenía conocimiento de un alto mando de la policía, posteriormente dijo que arreglemos y lleguemos a un acuerdo para que se retire el personal policial al ingresar al vehículo intervenido no encontró la llave de contacto, motivo por el cual solicitaron apoyo a la grúa de placa de rodaje E0B728 para trasladar el vehículo a la comisaría de Campo Marte, así como también al intervenido para ponerlo a la sección correspondiente y a la vez se practicó el dosaje etílico 3090-9968 al imputado con fecha 01 de septiembre del 2019 a horas 21.04 se ha obtenido 2.51 gr de alcohol por litro en la sangre sobrepasando de este modo el límite permitido.

4.2. Calificación Jurídica

Los hechos expuestos han sido tipificados por el representante del Ministerio Público como delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal.

4.3. Pretensión Penal

El Ministerio Público solicitó se imponga al acusado **dos años** de pena privativa de la libertad, por ser una persona habitual e inhabilitación en la modalidad de suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo de dos años.

4.4. Pretensión Civil

El Ministerio Público ha solicitado por concepto de reparación civil la suma de S/. 1,245.00 soles a favor de la parte agraviada.

4.5. Defensa Técnica y Autodefensa del Acusado

Reconociendo la responsabilidad penal en los hechos materia de imputación, así como la pretensión civil, se acogió a la conclusión anticipada.

Quinto.- Del Acuerdo Propuesto:

5.1. El Ministerio Público y la defensa del procesado hicieron conocer a este Despacho que habían llegado a un acuerdo sobre la pena, la misma que consiste en **VEINTIUN MESES de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la cual conforme al artículo 52° del Código Penal se convierte a (90) NOVENTA jornadas de prestación de servicios comunitarios**, la cual será cumplida conforme lo establezca la Oficina del Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario para cuyo efecto se remitirá el oficio correspondiente, asimismo, ante el incumplimiento de una sola de las jornadas y ante el apercibimiento previo se le revocará la conversión impuesta y deberá de cumplir la pena privativa de libertad efectiva que corresponda en ese momento. Asimismo, la copenalidad de inhabilitación en forma de suspensión de la licencia de conducir cualquier tipo de vehículo motorizado por el plazo de **dos años**.

5.2. Asimismo, las partes convinieron el monto de la reparación civil a favor de la parte agraviada en **S/.900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES)** la cual ha precisado el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con la defensa para pagar de manera fraccionada la misma a través de cuatro pagos mensuales de S/.225.00 soles cada uno, que se efectuaran el último día hábil de los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2021, ello mediante depósitos judiciales a nombre del Banco de la Nación, debiendo el sentenciado hacer llegar los comprobantes de pago al Juzgado para su endose y cobro respectivo.

Sexto.- Itinerario Procesal

En mérito al auto de citación a juicio se citó a los sujetos procesales a juicio oral. Se llevó el juzgamiento con la presencia del acusado **DULBER MAMANI OTAZU**. Instalada la audiencia, se escuchó el alegato de apertura del Ministerio Público y siendo que al tomar la palabra la defensa técnica del imputado, señaló abstenerse de tal exposición manifestando la intención de dicha parte procesal de acogerse a la conclusión anticipada. Así, al inicio del juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos, al preguntársele si admitía ser partícipe en calidad de autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; éste, previa consulta con su defensa técnica, aceptó los hechos objeto de acusación fiscal, así como su responsabilidad penal, también aceptó la responsabilidad civil. Ante ello, se declaró la conclusión anticipada del juicio, se procedió a consultar a las partes respecto de algún acuerdo sobre la pena y reparación civil, siendo que los mismos acordaron todos los extremos de la pena y la reparación civil. Siendo ello así, el estado de la causa es el de expedirse sentencia la cual, en efecto, se emite el día de la fecha.

II. PARTE CONSIDERATIVA

Primero.- De la Conclusión Anticipada

El artículo 427° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencia vinculantes, tales como: el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008/CJ116 y el Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116 que, si bien este último está referido a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de legalidad y proporcionalidad atañen a la conclusión anticipada. No obstante, la presencia del juzgador no es pasiva, para efectos de la homologación de la "conformidad" ya que, existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

Segundo.- Ley Penal Aplicable

2.1. Conforme a la acusación, es aplicable el tipo penal de **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal.

2.2. El texto normativo de tal numeral, prevé:

"Artículo 274.- conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad.

El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en porción mayor de 0.5 gramos-litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuenta y dos jornadas a ciento cuatro jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 7.

2.3. Para la configuración del ilícito, conforme a los hechos materia de imputación en el presente caso, y que han sido oralizados por la titular de la acción penal, se requiere que el agente haya conducido un vehículo motorizado en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en porción mayor de 0.5 gramos-litro.

Tercero.- Juicio de Subsunción

3.1. La conducta del acusado se adecua objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito antes referido tal como han sido expuestos los cargos por el Ministerio Público -los cuales son inmodificables- por cuanto se ha demostrado que **DULBER MAMANI OTAZU** estuvo conduciendo en estado de ebriedad el vehículo automóvil de placa de rodaje DIH438-marca Kia, modelo Picanto, color verde, el mismo que se encontraba en aparente estado de ebriedad y al practicársele el dosaje etílico 3090-9968, con fecha 01 de septiembre del 2019 a horas 21.04, se ha obtenido 2.51 gr de alcohol por litro en la sangre sobrepasando de este modo el límite permitido. Ello así se tiene del reconocimiento efectuado de manera expresa, libre y voluntaria por el acusado, en audiencia y previa consulta con su defensa técnica, al aceptar la responsabilidad de los hechos materia de imputación, ello conforme a la naturaleza de la conformidad en juicio.

3.2. No se ha alegado ni probado causa que justifique el actuar típico del acusado o que excluya su culpabilidad.

3.3. Por ello concurren todos los elementos del tipo, los mismos que han sido realizados con conocimiento y voluntad conforme se desprende de los hechos acreditados en autos, concurriendo además el elemento subjetivo, conforme al reconocimiento efectuado por el acusado.

3.4. En consecuencia, la conducta del encausado deviene en típica, antijurídica y culpable.

Cuarto.- Individualización de la Pena

4.1. El principio de Proporcionalidad, es aquel principio que exige al juzgador verificar que la pena guarde una relación de correspondencia con el injusto cometido por el agente, se encuentra reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, el que debe ser entendido como la correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar; por tanto constituye un límite al *IUS PUNIENDI*, en tanto exige un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación legal. Esto significaría que el principio de proporcionalidad debe guardar relación conforme a la culpabilidad, pero no siempre de acuerdo al injusto la culpabilidad puede coincidir con la misma, por cuanto esta puede resultar mayor a la culpabilidad concreta; entiéndase que los criterios para establecer la proporcionalidad deben atender aquellos vinculados al injusto, importancia del rango del bien jurídico protegido, grado de lesión del mismo, impacto social y los diferentes medios de comisión del hecho, entre otros aspectos, así, el juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad. En el caso que nos ocupa, se evidencia que el actuar del acusado **DULBER MAMANI OTAZU**, es una conducta gravosa en relación al bien jurídico protegido a través de la conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, referido a la parte agravada, actividad ilícita que constituye un hecho reprochable.

4.2. La Fiscalía ha acordado con la defensa del acusado VEINTIUN MESES de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la cual conforme al artículo 52° del Código Penal se convierte a (90) NOVENTA jornadas de prestación de servicios comunitarios, la cual será cumplida conforme lo establezca la Oficina del Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario para cuyo efecto se emitirá el oficio correspondiente, asimismo, ante el incumplimiento de una sola de las jornadas de prestación de servicios que se le ha impuesto se le revocará la conversión de pena y deberá de cumplir el sentenciado la pena privativa de libertad efectiva que corresponda con el descuento respectivo de realizarse el mismo y la copenalidad de inhabilitación en forma de suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años en relación a la conducción de cualquier tipo de vehículo motorizado. Para lo cual, se procede a realizar la determinación judicial de la pena, en base a los siguientes parámetros.

4.3. Para el caso de autos, se toma en cuenta los criterios fundadores de la pena establecidos en el artículo 45°, 45°-A y 46 modificados e incorporados al Código Penal por la Ley N° 30076.

4.4. Se procede a verificar criterios previstos en el artículo 45°-A señalado: **a) Espacio punitivo de determinación de pena básica:** El delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, prevé una pena no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuenta y dos jornadas a ciento cuatro jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 7, en tal sentido corresponde hacer el análisis de la pena. **b) Determinación de pena concreta:** presenta circunstancia agravante calificada (habitual), no se advierte la existencia de circunstancias atenuantes genéricas por lo que la pena se ubicará en dos años, quantum al que, conforme a lo sostenido por la titular de la acción penal, se le ha descontado 1/7 por la premialidad correspondiente a la conclusión anticipada, quedando la pena en veintiún meses de pena privativa de libertad, la cual conforme al artículo 52 del Código Penal se convierte a noventa jornadas de servicios comunitarios. También corresponde imponer la pena de inhabilitación, por el plazo de dos años, en la forma de suspensión de la licencia para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado de conformidad a lo establecido en el artículo 36.7 del Código Penal, estando a que la fiscalía sostiene que el acusado es agente habitual en la comisión de este tipo de delito, estimando el juzgado que tales acuerdos deben ser aprobados, considerando la prognosis positiva del agente, además se ha comprometido a cancelar la reparación civil;

y, del análisis de los antecedentes, teniéndose en cuenta las condiciones personales del actor, así como las circunstancias del evento delictivo en el que ha participado, la naturaleza del mismo, y merituándose finalmente lo previsto en el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008-CJ/116.

Quinto.- Determinación de la Reparación Civil

5.1. El objeto civil se rige por los artículos 11° y 12° del Código Procesal Penal y 93° al 101° del Código Penal, precepto éste último que nos remite a las disposiciones correspondientes del Código Civil.

5.2. En el caso que nos ocupa se tiene que las partes han fijado la Reparación Civil a favor de la parte agraviada en el monto de **S/.900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES)** la cual ha precisado el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con la defensa para pagar de manera fraccionada la misma a través de cuatro pagos mensuales de S/.225.00 soles cada uno que se efectuarán el último día hábil de los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2021, ello mediante depósitos judiciales en el Banco de la Nación debiendo el sentenciado hacer llegar los comprobantes de pago al Juzgado de Ejecución, para su endose y cobro respectivo. Siendo que el monto establecido por tal concepto resulta razonable, estando a los extremos anotados y que el mismo no ha sido materia de controversia, debe ser aprobado.

Sexto.- Pronunciamiento sobre las costas

El artículo 497.5° del Código Procesal Penal establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz; siendo que, en el presente caso, al haber concluido el proceso por "conformidad", no procede la imposición de costas.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones administrando justicia a nombre del pueblo de quien emana dicha facultad;

FALLO:

Primero.- APROBANDO mediante la presente sentencia de conformidad, los acuerdos arribados entre el acusado debidamente asesorado por su defensa de elección y el Ministerio Público, durante el juicio oral, en consecuencia;

Segundo.- DECLARO a DULBER MAMANI OTAZU, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, como **AUTOR** del delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, delito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, en agravio de **la Sociedad representada** por el Estado a través de la procuraduría pública del **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**.

Tercero.- LE IMPONGO VEINTIUN MESES de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la cual conforme al artículo 52° del Código Penal se convierte a **(90) NOVENTA jornadas de prestación de servicios comunitarios**, la cual será cumplida conforme lo establezca la Oficina del Medio Libre del instituto nacional penitenciario para cuyo efecto se remitirá el oficio correspondiente, asimismo, ante el incumplimiento de una sola de las jornadas y ante el apercibimiento previo se le revocará la conversión impuesta y deberá de cumplir la pena privativa de libertad efectiva que corresponda en ese momento.

Cuarto.- LE IMPONGO la copenalidad de inhabilitación en forma de suspensión de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado por el plazo de **dos años**.

Quinto.- FIJO el monto de la **REPARACIÓN CIVIL** a favor de la parte agraviada en **S/.900.00 (NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES)** la cual ha precisado el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con la defensa para pagar de manera fraccionada la misma a través de cuatro pagos mensuales de S/.225.00 soles cada uno, que se efectuarán el último día hábil de los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2021, ello mediante depósitos judiciales en el Banco de la Nación, debiendo el sentenciado hacer llegar los comprobantes de pago al Juzgado de Ejecución para su endose y cobro respectivo.

Sexto.- DISPONGO que no corresponde fijar el pago de costas en el presente proceso.

Séptimo.- MANDO que consentida o ejecutoriada la presente, se cursen las comunicaciones correspondientes para su inmediato y estricto cumplimiento y registro; por esta mi sentencia, así me pronuncio, mando y firmo en audiencia pública de la fecha. **Regístrese y Comuníquese. -**



CASO FISCAL NRO. 504-2019-161

DISPOSICION 01-2019-3D-1FPPC-MP-AR

Arequipa, veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve

DADO CUENTA:

Estando a la excesiva carga procesal que soporta este despacho se procede en la fecha a dar trámite al Oficio NRO.5636-2018-NOVMACREPOL-REGPOL-AQP/DIVPOS-COM-CIUDAD MI TRABAJO "A"-SEINCRI, por la presunta comisión del delito CONTRA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en la modalidad de DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD en contra de MIJAR RIVERA VARGAS, en agravio de MONICA QUISPE QUISPE, y;

ATENDIENDO A:

PRIMERO: HECHOS INVESTIGADOS

Que conforme al acta de denuncia verbal a fs. 02, se desprende que el día 10 de noviembre del 2018 a las 22:00 horas aproximadamente, la denunciante refiere que escucho ruidos a las afueras de su domicilio y al salir vio a su ex conviviente Axel Willy Rivera Vargas en su portón y se encontraba en estado de ebriedad, quien amenazo de muerte con un desarmador a la denunciante. Por otro lado, refiere que la denunciante cuenta con medidas de protección dictados a su favor en el Exp. N° 28622-2018-JR-FT-01, que Ordeno "b) El impedimento de todo tipo de acoso por parte del denunciado, así como el impedimento de acercarse a la denunciante como a su domicilio y mucho menos en estado de ebriedad (...)"

SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE LA DISPOSICIÓN

El artículo 330 del Código Procesal Penal establece que inc. 1. "El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria", asimismo, el inciso 2 del referido artículo establece que "Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata formalizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente, que asimismo el artículo 334 inciso 2 del Código Procesal Penal establece que "El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación...", en el presente caso estando a la naturaleza del ilícito e información que se requiere obtener resulta necesario fijar un plazo distinto al señalado en el artículo 334 inc.2 primera parte del cuerpo normativo acotado.

Por estas consideraciones, el Ministerio Público, a través, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata Distrito Fiscal de Arequipa,

DISPONE:

PRIMERO: SE EFECTUEN DILIGENCIAS PRELIMINARES POR SESENTA DIAS EN SEDE FISCAL contra MIJAR RIVERA VARGAS, por la comisión del delito **CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA** en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, en agravio de **MONICA QUISPE QUISPE**, en consecuencia se lleven a cabo las siguientes diligencias en sede Fiscal:

1. Se reciba la declaración de MONICA QUISPE QUISPE, a fin de que se ratifique en su denuncia y brinde mayor información sobre los hechos materia de

Fiscal Responsable: Luis Guillermo Vera Oviedo

Calle Teniente Alcantara s/n-Urb. Guardia Civil



investigación, el cual deberá apersonarse el día 13 de mayo de 2019 a horas 10.50 en este despacho fiscal sito en Calle Teniente Alcántara S/N (segundo piso), Urb. Guardia Civil III Etapa, Paucarpata.

2. Se reciba la declaración de AXEL WILLY RIVERA VARGAS, a fin de que realice los descargos respectivos sobre los hechos denunciados en su contra, el cual deberá apersonarse en presencia obligatoria de su abogado el día 13 de mayo de 2019 a horas 11.10 en este despacho fiscal sito en Calle Teniente Alcántara S/N (segundo piso), Urb. Guardia Civil III Etapa, Paucarpata.
3. Se solicite al 1º Juzgado de Familia Paucarpata-Sede Paucarpata, remita copias Certificadas de todo el Expediente 10113-2018-0-0412.-JR-FT-01 seguido por violencia familiar en agravio de Mónica Sandra Quispe Quispe, contra Mijair Willy Rivera Vargas.
4. La presente disposición deberá notificarse a los sujetos procesales, tal como lo dispone el inciso 1 del artículo 127º del Código Procesal Penal. Registrándose y Notificándose donde corresponda.-


.....
DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

Expediente: 9396-2019

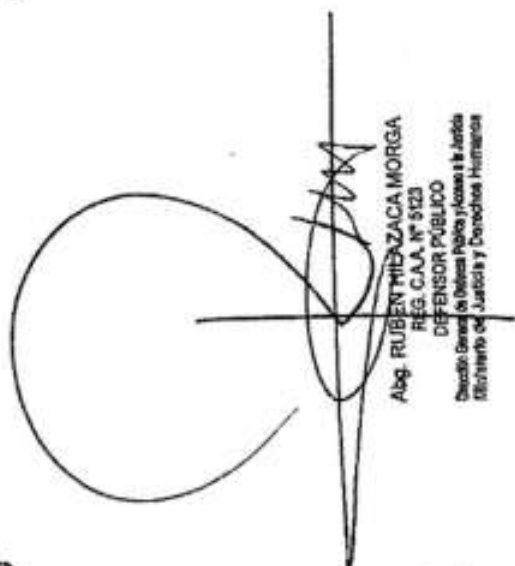
Especialista: Dra. Patricia Gallegos

Cuaderno: Principal

Escrito: 01

Sumilla: Absuelve traslado de Acusación

**SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
DE PAUCARPATA. -**


Abg. RUBÉN HILAZACA MORGÁ
REG. C.A.A. N° 9123
DEFENSOR PÚBLICO
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, en el proceso que se sigue en mi contra por la presunta comisión del delito Contra la Administración de Justicia en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, en agravio de **EL ESTADO** representado por el **Procurador Público del Poder Judicial**; representado por el defensor público Rubén Hilazaca Morga, a usted con el debido respeto me presento y digo:

Me apersono señalando como domicilio procesal la Avenida Independencia No. 927-933 del Cercado de Arequipa, y con Casilla Electrónica No. **34319**; asimismo, en virtud a lo establecido en el Art. 350 del NCPP, procedo a absolver el traslado de la acusación en mérito a los siguientes fundamentos:

I.- OBSERVACIONES A LA ACUSACION:

18 OCT, 2019

RECIBIDO

**1.-RESPECTO A LA IMPUTACIÓN FÁCTICA Y OBSERVACIONES FORMALES
A LA ACUSACION:**

Respecto a los hechos imputados y elementos de convicción, la Defensa no se pronuncia por no haber conferenciado hasta el momento con el imputado.

2.-RESPECTO A LA TIPIFICACIÓN, PENA Y REPARACIÓN CIVIL:

PODER JUDICIAL - CSJA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
M.B.J. PAUCARPATA
MESA DE PARTES N.C.P.P.

No se objeta la Tipificación Jurídica de los hechos. La defensa se reserva la observación de la pretensión punitiva y la reparación civil para ser debatidas en Juicio Oral de ser el caso, por no haber conferenciado con el imputado hasta el momento.

3.-RESPECTO A LOS MEDIOS DE PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO:

Respecto de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público no tenemos observaciones por cuanto aún no se ha conferenciado con el imputado, reservándonos el derecho a observarlos en la audiencia correspondiente.


4.- RESPECTO A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA DEFENSA:

Se reserva ofrecerlos por no haber conferenciado con el imputado y desconocer la existencia de medios de prueba, sin embargo, al amparo del Principio de Comunidad de Prueba, proponemos los mismos medios de prueba del Ministerio Público.

POR LO EXPUESTO:

Pido a Ud. Señor Juez, pido tener por absuelto el traslado del Requerimiento de Acusación.

Arequipa, 17 de octubre del 2019.


Abg. ROSEN EL AZACA MORGÁ
REG. C.O.A. N° 5123
DEFENSOR PÚBLICO
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Procuraduría Pública

PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
M.B.J. PAUCARPATA
MESA DE PARTES NGPP
15 OCT. 2019

Expediente N° 09396-2019-00001-PE-02
Especialista: Patricia Galleas
SUMILLA: **APERSONAMIENTO Y**
CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL.

**SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL DE INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA - SEDE PAUCARPATA - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE AREQUIPA.-**

PATRICIA GISELLE OVERSLUIJS RAZZETO, Procuradora Pública
Adjunta encargada de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial,
identificado con D.N.I. N° 06171033, natural de Lima, abogada,
designada mediante Resolución Suprema N° 065-2011-JUS, de fecha 25
de marzo 2011, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de
marzo del 2011; refiriéndome al proceso seguido contra **MIJAIR WILLY
RIVERA VARGAS** por la presunta comisión del delito de **RESISTENCIA
O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, en agravio del **ESTADO -
PODER JUDICIAL**, a usted atentamente digo:

En nombre y representación del Estado - Poder Judicial, tal como lo
establece el Art. 47° de la Constitución Política, en concordancia con el art.
22.1 del Decreto Legislativo N° 1068 - Decreto Legislativo que crea el Sistema de
Defensa Jurídica del Estado - así como el art. 36° de su Reglamento (Decreto
Supremo N° 017-2008-JUS), recurro ante su Despacho atendiendo a la calidad
de director de la investigación que posee su judicatura y de conformidad con lo
dispuesto en el **artículo 61° y siguientes del Decreto Legislativo N° 957,**
Código Procesal Penal, se sirva admitir mi **APERSONAMIENTO AL PROCESO**,
señalando domicilio procesal en el inmueble ubicado sito en **Avenida Petit
Thouars N° 3943- San Isidro - Lima**, a fin que se me notifique bajo cargo y en
forma oportuna todas las Resoluciones y/o actuaciones a dictarse con
posterioridad, tal como lo dispone la parte in fine del art. 37° del Decreto
Supremo N° 017-2008-JUS.

1.- PETITORIO:

El Poder Judicial resulta agraviado en esta litis y en mi condición de Procurador
Público del Poder Judicial, recurro a vuestro Despacho en nombre y



representación del Estado-Poder Judicial, en tiempo oportuno me **CONSTITUYO EN ACTOR CIVIL** en esta acción penal que se ha iniciado contra **MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS** por la presunta comisión del delito de **RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, para lo cual se deberá tener presente mi domicilio procesal señalado; en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho que expongo:

2.- GENERALES DE LEY Y DOMICILIO PROCESAL:

PATRICIA GISELLE OVERSLUIJS RAZZETO, Procuradora Pública Adjunta encargada de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, identificada con DNI N° 06171033, natural de Lima, abogada, designada mediante Resolución Suprema N° 065-2011-JUS, de fecha 25 de marzo 2011, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 26 de marzo del 2011. **ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO - PODER JUDICIAL**, en esta investigación por el delito de **RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD** en agravio de mi representado, señalando domicilio procesal en **Avenida Petit Thouars N° 3943- San Isidro - Lima**.

3. NOMBRE DEL IMPUTADO:

MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, persona que viene siendo investigada por el presunto delito **RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD** en agravio del Poder Judicial que represento.

4. RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL DELITO Y JUSTIFICACIÓN DE NUESTRA PRETENSIÓN:

4.1. Los fundamentos de mi pretensión, se sustentan en la calidad de agraviado que posee mi patrocinado, el Poder Judicial en el caso del delito de **RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD** seguido contra **MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS**, en razón a que con su actuar delictivo han lesionado a mi representado ocasionándole grave perjuicio.

4.2. Respecto al delito de **RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD** establecido en el artículo 368° primer párrafo del Código Penal "*El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención (...)*". Siendo la administración de justicia el bien jurídico tutelado en el aspecto proteger el correcto desarrollo de la administración pública, procurando evitar que los ciudadanos entorpezcan la función ejecutiva de una orden emanada de la administración pública —funcionario público dotado de poder de gobierno o mandato sobre los miembros de la sociedad—. Es así que la



administración pública impone su fuerza coactiva racional frente a los ciudadanos obligados a cumplir un mandato, por encontrarse dentro de una sociedad jurídicamente organizada. Pues, si acaso las decisiones-órdenes de la administración pública no llegasen a materializarse o ejecutarse debido a la contraria voluntad de los administrados, el orden jurídico público se convertiría en un caos, produciéndose el desgobierno.

4.3. Salinas Siccha refiere que el bien jurídico tutelado es la correcta y normal administración pública. No obstante, el objeto específico de protección penal es la efectividad de las actividades funcionales, es decir, el cumplimiento de las órdenes impartidas por un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones normales. Rojas Vargas señala que El bien jurídico protegido general es la correcta y normal administración pública. El objeto específico de la tutela penal busca garantizar penalmente la eficacia que deben poseer los mandatos de autoridad que emanen de funcionario público en ejercicio de sus atribuciones.

4.4. De los hechos expuestos, se imputa a **Mijair Willy Rivera Vargas**, que el día 19 de diciembre de 2018, a las 22:00 horas aproximadamente, se apersonó al domicilio de su ex conviviente Mónica Sandra Quispe Quispe, a pesar que mediante medidas de protección dictadas en 14 de noviembre de 2016, se le prohibió acercarse a menos de 200 metros de la antes mencionada, por lo que, solicitó apoyo policial, quienes encontraron en el domicilio al investigado.

4.5. Por otro lado, teniendo presente la etapa del proceso en donde nos encontramos, resultaría inoficioso pronunciarnos sobre hechos probados o no probados, pues ello se determinaría en la etapa procesal correspondiente; ya que por ahora, es el Ministerio Público quien tiene el deber de acopiar el material de investigación correspondiente que servirá para sustentar su teoría del caso posteriormente ante el Juez correspondiente. En ese sentido, nos queda señalar que por la forma como se han realizado los hechos que se vienen investigando, es el Poder Judicial quien resulta parte agraviada; por lo que, de encontrarse responsabilidad penal en el investigado, se deberá fijar un monto correspondiente a la Reparación Civil a favor del Poder Judicial, por lo tanto esto justifica nuestro pedido de Constitución en Actor Civil.

4.6. La presente solicitud se efectúa a fin de adquirir la personería jurídica necesaria para promover en la secuela procesal, los recursos e incidentes necesarios sobre cuestiones que pudiesen afectar nuestros derechos legítimos,



1º JUZ. PENAL UNIPERSONAL - SEDE MBI PAUCARPATA

EXPEDIENTE : 09396-2019-42-0401-JR-PE-02

JUEZ : QUIROZ CORNEJO ROSS MARY

ESPECIALISTA : LUNA CALCINA DAYSI JEANNETH

MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA PPCP GUILLERMO VERA CARP FISCAL 2019161,

IMPUTADO : RIVERA VARGAS, MIJAI WILLY

DELITO : CUANDO SE DESOBEDECE O RESISTE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN DICTADA ... VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O CONTRA INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA ...

AGRAVIADO : PROCURADOR PUBLICO PODER JUDICIAL,

AUTO DE CITACIÓN A JUICIO, FORMACIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES PARA LA PRUEBA Y PARA EL DEBATE

RESOLUCIÓN NRO. 01-2020

Arequipa, trece de marzo del dos mil veinte

Estando a la fecha proporcionado por el coordinador.

I.- PARTE EXPOSITIVA

VISTOS: Las actuaciones remitidas por el Juzgado de Investigación Preparatoria de **Paucarpata**, seguido en contra de **MIJAI WILLY RIVERA VARGAS**

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 355 y 359 del NCPP, debe citarse a juicio dentro del plazo legal.

SEGUNDO.- El Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República establece que, por interpretación sistemática y teleológica de las normas del Código Procesal Penal, corresponde al Juzgado Penal Unipersonal o Colegiado, citar a los testigos y peritos para su comparecencia al Juicio Oral; es así, que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa, ha venido citando a todos los referidos órganos de prueba, a la misma hora de inicio del Juicio Oral, ello al no contar con mayor información o criterio para establecer el orden de su participación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que corresponde a los sujetos procesales precisar el momento de la participación del órgano de prueba que ha ofrecido, en armonía a su estrategia de defensa o incriminación, según corresponda, conforme lo establece el artículo 375°, numeral 2, del Código Procesal Penal, que señala: "2. El Juez Penal, escuchando a las partes, decidirá el orden en que deben actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de los medios de prueba". Luego, la práctica Judicial (Principio de la Realidad), nos presenta en los casos concretos que todos los órganos de prueba asisten a la misma hora a las audiencias de juicio oral señaladas en los procesos, exigiendo su participación en dicho momento por cuanto muchos de ellos son servidores o funcionarios públicos (policías, peritos del Ministerio Público, peritos de la DIVINCRI, etc.) lo cual implica la pérdida de horas hombre en

perjuicio de la administración pública dado que, por colaborar con la administración de justicia, dejan de lado otras actividades tan igual de importantes para cada uno o asisten con un permiso de tiempo limitado de sus centros laborales, generando reclamos y protestas, y ante la imposibilidad de atenderlos, se ven obligados a ausentarse de las audiencias, sin poder prestar su declaración y en muchas ocasiones ya no vuelven a presentarse y no se cuenta con éstas declaraciones en el juicio, pese a la aplicación de los apremios establecidos en las normas procesales; todo ello, genera incidencias en las audiencias que en varias oportunidades se ven frustradas por dicha causa. Asimismo, se tiene que en la mayoría de los casos, las partes procesales, en audiencia de juicio oral llegan a convenciones probatorias, prescindiendo la participación de órganos de prueba que ya fueron citados, deviniendo en innecesaria su asistencia, lo que igualmente genera malestar e incomodidad en éstos. El Juzgado, debe velar por la eficiencia y eficacia de la etapa de juzgamiento, aplicando los principios del juicio (artículo 356° del Código Procesal Penal), que son el de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria, que solo se logra con la debida participación de los órganos de prueba aportados por las partes procesales; asimismo, se debe garantizar los principios de continuidad del juzgamiento y de concentración de los actos del juicio; los mismos que están por encima de la interpretación sistemática y teleológica efectuada en el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116, cuyo sustento finalmente es solo identificar a quien corresponde citar a testigos y peritos según la interpretación de normas, sustento que no es de recibo por este Juzgado, debiendo considerarse además que desde la vigencia del referido acuerdo plenario, la mayoría de los órganos de prueba vienen a juicio sin ninguna preparación, contestando a la mayoría de las preguntas que no recuerdan, siendo muchas veces inútil su declaración, lo cual refuerza la necesidad de que la citación a los órganos de prueba la hagan las partes, para que tengan la oportunidad de preparar a los mismos en forma adecuada; lo que no impide que sólo de manera excepcional y por motivos justificados se realizará la citación de la prueba personal por el Poder Judicial a pedido de parte. Fundamentos por los que este Juzgado se desvincula de los principios jurisprudenciales establecidos en éste Acuerdo Plenario, al amparo de lo previsto por el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de aplicación extensiva a los Acuerdos Plenarios; y, efectuando una interpretación teleológica, a los fines del juicio oral, del artículo 355°, numeral 5, del Código Procesal Penal. Por lo que debe requerirse al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, citar a sus testigos y peritos ofrecidos como órganos de prueba, debiendo presentarlos en juicio oral, en el orden y momento que interese a sus estrategias y acorde a sus pretensiones.

TERCERO.- El acusado **MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS**, se encuentra con medida de comparecencia simple.

CUARTO.- Corresponde observar lo dispuesto en el artículo 136° del CPP, "el Juez ordenará formar el respectivo expediente judicial...". Este expediente judicial debe formarse exclusivamente con los actuados, actos procesales de incoación del proceso y resoluciones jurisdiccionales, señalados en dicho dispositivo normativo. En ese sentido debe formarse el **Expediente Judicial**,

que comprende: el Expediente Judicial para la Prueba, formado con los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, así como los medios de prueba admitidos en la audiencia de juicio, además, donde se incorporará las actas, informes y declaraciones previas, vinculados con el órgano de prueba previamente admitidos (incluyendo las notificaciones efectuadas, a nivel fiscal); y, el Expediente Judicial para el Debate, formado, además del requerimiento acusatorio, con el auto de enjuiciamiento, el auto de citación a juicio oral, las actas de registro de audiencias, las resoluciones escritas dictadas en el desarrollo del juicio y la sentencia, así como sus respectivas notificaciones, citaciones y comunicaciones. Todo ello, conforme a lo previsto por el Artículo 87°, numeral 2, literales a) y b) del Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, aprobado por R.A. 014-2017-CE-PJ.

QUINTO.- Por lo que, a efecto de formar el expediente judicial; se dispone, requerir al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, según corresponda, para que dentro del plazo de 5 días, remitan la prueba admitida en el auto de Enjuiciamiento, y una vez formado el mismo, póngase a disposición de las partes por el plazo de 5 días. De otro lado, debe devolverse al Ministerio Público, todos los demás cuadernos que no sean útiles para la formación del expediente judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 137°, numeral 3 del Código Procesal Penal, debiendo quedar en custodia del Especialista de Causas solo el Expediente Judicial, según lo previsto por el artículo 23°, numeral 6, concordado con el artículo 87°, numeral 2, del indicado Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, aprobado por R.A. 014-2017-CE-PJ. En mérito a todo ello, se hace necesario fijar como fecha de juicio un plazo razonable para no perjudicar el derecho de defensa de los sujetos procesales, y, en consideración a la existencia de otros juicios orales programados.

III. - PARTE RESOLUTIVA

PRIMERO.- CITAR A JUICIO a:

- | | |
|-------------|---|
| a) Acusado | : MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS |
| b) Agravado | : Estado- Procurador Publico del Poder Judicial- ACTOR CIVIL |
| c) Testigos | : Rodrigo Albert Rodriguez Álvarez
Mónica Sandra Quispe Quispe |

SEGUNDO.- SEÑALAR para la audiencia de **JUICIO ORAL**, el día **ONCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS HORAS en la SALA DE AUDIENCIAS N° TRES** del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, ubicado en Esquina Calle Teniente Alcántara con Av. Alberto Laveau, Urb. Guardia Civil, tercera etapa, Distrito de Paucarpata – Módulo Penal, debiendo el auxiliar de justicia cumplir con efectuar las notificaciones oportunamente y conforme a lo establecido en la normatividad procesal penal vigente.

TERCERO.- ORDENAR el emplazamiento para concurrir a la audiencia de juicio, a todas las personas señaladas en el primer punto de la parte

resolutiva, bajo los siguientes apercibimientos: i) Para los acusados, ser declarados contumaces, girarse órdenes de captura en su contra y disponerse el archivo provisional de la causa. ii) Para los testigos y/o peritos, de ser conducidos compulsivamente por la fuerza pública en caso de inasistencia. iii) Para el representante del Ministerio Público, poner en conocimiento del órgano de Control Interno correspondiente su inasistencia.

CUARTO.-DISPONEMOS DESVINCULARNOS de los principios jurisprudenciales establecidos en el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República, al amparo de lo previsto por el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de aplicación extensiva a los Acuerdos Plenarios. Por lo que **SE REQUIERE al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, citar a sus testigos y peritos admitidos como órganos de prueba, debiendo dar cuenta en audiencia del cumplimiento de las citaciones**, para efectivizar los apercibimientos prevenidos, de ser el caso. Se precisa que la citación de los testigos y peritos deberá reservarse para una siguiente oportunidad.

QUINTO.- CITAR: al Abogado Defensor Público **Dr. Ruben Hilazaca Morga**, defensa del acusado, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de designarse nuevo defensor público, de informar al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados de ser el caso, sin perjuicio que el acusado designe abogado de su preferencia, sujetándose su defensa a la etapa en la que se encuentra el proceso.

Precisar, que la citación a testigos y peritos, deberá ser reservada para siguiente oportunidad.

SEXTO.- FORMAR el Expediente Judicial, conforme a lo desarrollado en el cuarto considerando.

SÉPTIMO: PONER el citado Expediente Judicial, una vez formado, en secretaría, a disposición del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días, para los fines previstos en el artículo 137 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal. **REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE.**



CASO SGF : 504-2018-2392
IMPUTADO : YOULARRY JIMENEZ HUANCA
DELITO : DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD
AGRAVIADO : EL ESTADO
SUMILLA : Acusación Directa.

**SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL
MÓDULO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA:**

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, señalando domicilio procesal, en Calle Alberto Laveau S/N, Urb. Guardia Civil, Mz.O, III Etapa. Paucarpata, Casilla Electrónica: 33477; ante Ud. me presento y expongo:

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA

Con la autoridad que nos confiere el artículo 159, numerales 1 y 5 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, luego de realizadas las investigaciones preliminares que aparecen en la presente carpeta fiscal, este Despacho en aplicación del artículo 336, numeral 4 del NCPP, considera que la diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención de los imputados en su comisión, formulando directamente acusación, por lo que este Ministerio, Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa – Quinto Despacho de Investigación, FORMULA REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA en los actuados en torno a la denuncia: en contra de denuncia interpuesta en contra de MIJAIW WILLY RIVERA VARGAS, por la presunta comisión del delito **CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA** en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, previsto en el artículo 368° del Código Penal, en agravio de **ESTADO PERUANO** representado por el **PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL**

I. DATOS PERSONALES DE LAS PARTES

De los datos de identidad del imputado **MIJAIW WILLY RIVERA VARGAS**, DNI N° 29667343, de 42 años de edad, nacido en 06 de junio de 1976, nombre de los padres Benito

Calle Alberto Laveu s/n. Urb. Guardia Civil, 3ra Etapa, Mz. "O" S/N -

Paucarpata - Segundo Piso

www.fiscalia.gob.pe



y Martha, con domicilio real en Urb. Salaverry, Av. Salaverry No. 800, distrito de Socabaya, Arequipa y domicilio procesal Av. Calle Colón No. 211, Oficina 114, Arequipa.

La parte agraviada, el **ESTADO PERUANO** representado por el **PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL**, representado por la Procuraduría del Ministerio del Interior, con domicilio legal en Jirón Bolognesi 125, 3er. Piso, distrito de Miraflores, Lima, Lima.

II. EXPOSICIÓN DE HECHOS QUE SE IMPUTA.-

Conforme el Acta de Audiencia de fecha catorce de noviembre del 2016, en el Expediente Nro. 13803-2016, seguido ante el Primer Juzgado de Familia de Paucarpata, se dictaron medidas de protección a favor de MONICA SANDRA QUISPE QUISPE, por parte de MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, en presencia de ambas partes, se resuelve: "b)... la parte demandada (MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS) se encuentra impedido de acercarse a la parte agraviada o a su domicilio a una distancia no menor de 200 metros..., ello bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad;..."

Se tiene el Acta de recepción de denuncia policial, de fecha 19 de diciembre del 2018, a horas 22:23, aprox., personal policial de la Comisaría de Ciudad Mi Trabajo, se constituyeron a la dirección sito en Pampas Viejas B-2, distrito de Socabaya, lugar en el cual se entrevistan con la persona de MONICA SANDRA QUISPE QUISPE, quién refiere que a horas 22:00, aprox., de la fecha, su ex conviviente MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, se aproximó a su domicilio con la finalidad de agredirla física y psicológicamente, insultándola con palabras soeces y calificativos denigrantes. Refiere la denunciante que cuentas con medidas de protección; en el lugar se entrevistan con la persona de MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, el mismo que refiere que "en ningún momento la agredió física, ni psicológicamente y el motivo de su presencia en el domicilio fue porque su menor hijo se encontraba en la calle", indicando que "no tiene conocimiento sobre las medidas de protección".

Resulta de la Resolución Nro. 01 de fecha 21 de diciembre del 2018, en el Expediente Nro. 16508-2018, seguido ante el Octavo Juzgado de Familia Sub Especialidad Violencia Familiar de Arequipa, por los hechos expuestos en el párrafo anterior;..., se dispone: "Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda conforme a sus atribuciones, y respecto del incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en lo expedientes... 13803-2016...".

Siendo así, se presenta cargos en contra de MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, por la presunta comisión del delito **CONTRA LA ADMINISTRACION PÚBLICA** en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD** en agravio de **ESTADO PERUANO**, siendo la **IMPUTACIÓN PRECISA**: "Que MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, con fecha de fecha 19 de diciembre del 2018, a horas 22:23, aprox., cuando personal policial de la Comisaría de Ciudad Mi Trabajo, se constituyeron a la dirección sito



en Pampas Viejas B-2, distrito de Socabaya, lugar en el cual se entrevistan con la persona de MONICA SANDRA QUISPE QUISPE, quién refiere que a horas 22:00, aprox., de la fecha, su ex conviviente MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS, se aproximó a su domicilio con la finalidad de agredirla física y psicológicamente, insultándola con palabras soeces y calificativos denigrantes, no obstante tener conocimiento pleno, ha desobedecido la orden impartida por el Juez del Primer Juzgado de Familia de Paucarpata, resolvió: Conforme el Acta de Audiencia de fecha catorce de noviembre del 2016, en el Expediente Nro. 13803-2016: : "b)... la parte demandada (MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS) se encuentra impedido de acercarse a la parte agraviada o a su domicilio a una distancia no menor de 200 metros..., ello bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad;...".

III. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO ACUSATORIO:

- A) Acta de Audiencia de fecha catorce de noviembre del 2016, en el Expediente Nro. 13803-2016, seguido ante el Primer Juzgado de Familia de Paucarpata, se dictaron medidas de protección a favor de MONICA SANDRA QUISPE QUISPE, por parte de MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS, en presencia de ambas partes, se resuelve: "b)... la parte demandada (MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS) se encuentra impedido de acercarse a la parte agraviada o a su domicilio a una distancia no menor de 200 metros..., ello bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad;...";...
- B) Resolución Nro. 01 de fecha 21 de diciembre del 2018, en el Expediente Nro. 16508-2018, seguido ante el Octavo Juzgado de Familia Sub Especialidad Violencia Familiar de Arequipa, por los hechos expuestos en el párrafo anterior;..., se dispone: "Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda conforme a sus atribuciones, y respecto del incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en lo expedientes... 13803-2016....".
- C) Declaración de MONICA SANDRA QUISPE QUISPE, de fecha 19 de diciembre del 2018, indicó: "que, el día de hoy a las 19:30, aprox., cuando me encontraba en el estadio melgar haciendo compras mi ex conviviente me estuvo llamando a mi número de celular, la primera llamada no le contesté y me dijo me puedes pasar el número de celular de mi hijo, para hablar con él, y yo le dije que no tenía celular mi hijo, porque él se llevó su celular, le dije que para qué quería su teléfono celular si no se preocupaba por él, ni sabe de las actividades de mi hijo y él me dijo que te mantenga pues tu primer marido, así como yo he mantenido he mantenido a su hija, ahora que él te mantenga, puta de mierda, eres una tramposa, por qué yo tengo que darte, pídele a él y le corté la llamada telefónica, y me seguía llamando, y apagué el celular, me fui a mi casa y me eche a descansar, y a eso de las 22:00 horas, aprox., escuché ruido en la calle y al salir vi a mi ex conviviente, en el portón y estaba borracho y yo le dije que por qué tenía que derrumbar la pared y el me dijo esta es mi casa, a ti que mierda te importa puta, te voy a quitar la casa, acá vives con tu otro marido, y alzó una bloqueta y me la quiso tirar, yo le dije que tienes animal de mierda, toda la vida me paras pegando, estás acostumbrado a meterme la mano,



mátame pues de una vez, todavía eres sinvergüenza que tu mujer actual me está llamando, y en ese momento mi hijo Axel salió y le dijo a mi ex conviviente, qué te pasa papá, cómo le vas a tirar eso a mi mamá, y él dejó la bloqueta, y yo le dije a mi hijo que se entre a dentro y trajera mi celular, y mi hijo se entró a la casa y él llamó a la comisaría."

- D) Acta de recepción de denuncia policial, de fecha 19 de diciembre del 2018, a horas 22:23, aprox., personal policial de la Comisaría de Ciudad Mi Trabajo, se constituyeron a la dirección sito en Pampas Viejas B-2, distrito de Socabaya, lugar en el cual se entrevistan con la persona de MONICA SANDRA QUISPE QUISPE, quién refiere que a horas 22:00, aprox., de la fecha, su ex conviviente MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, se aproximó a su domicilio con la finalidad de agredirla física y psicológicamente, insultándola con palabras soeces y calificativos denigrantes. Refiere la denunciante que cuentas con medidas de protección; en el lugar se entrevistan con la persona de MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, el mismo que refiere que "en ningún momento la agredió física, ni psicológicamente y el motivo de su presencia en el domicilio fue porque su menor hijo se encontraba en la calle", indicando que "no tiene conocimiento sobre las medidas de protección".
- E) La declaración de MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS: de fecha 20 de diciembre del 2018, indicó: "se acoge a su derecho a guardar silencio".
- F) Oficio No. 40127-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, fecha 20 de diciembre del 2018, dando cuenta que la persona de MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, no antecedentes penales, ni judiciales.

IV. GRADO DE PARTICIPACION:

Se acusa a MIJAI R WILLY RIVERA VARGAS, AUTOR por la presunta comisión del delito **CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA** en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD** en agravio de **ESTADO PERUANO** representado por el **PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL**, el Código Penal vigente en su artículo 368° tipifica el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad prescribiendo *"El que desobedece o resiste la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años"*. La desobediencia y resistencia a la autoridad consiste en desobedecer o resistir la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones; por lo tanto para que se consuma dicha acción típica basta el incumplimiento de la orden u omitir su realización siempre y cuando ésta se encuentra dentro del marco de la ley. La desobediencia y resistencia a la autoridad es un delito doloso de omisión, el cual tiene tres requisitos que han de existir a) una obligación o deber de actuación en el sujeto activo, b) el no cumplimiento de dicho deber u obligación y c) la posibilidad de haberla cumplido.

V. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL:



No se tiene las circunstancias atenuantes privilegiadas o gravantes calificadas que invocar.

VI. SOLICITUD PRINCIPAL DE TIPIFICACION, PENA, REPARACION CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS:

VI.1. Tipificación:

Por los fundamentos expuestos este Despacho acusa a MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS, por la presunta comisión del delito **CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA** en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, previsto en el artículo 368º del Código Penal, en agravio de **ESTADO PERUANO** representado por el **PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL**.

VI.2 Pena Solicitada:

En un Estado Constitucional y Social de Derecho, los poderes públicos actúan según normas preestablecidas y a su vez, los ciudadanos reconocen que el ordenamiento jurídico es necesario y bueno; en ese sentido, este Ministerio Público al solicitar la pena a imponerse al acusado tiene en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de las penas; es decir que la sanción penal sea justa y equilibrada al restablecimiento del orden social, que el acusado ha quebrantado.

Dado que el delito **CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA** en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, previsto en el artículo 368º del Código Penal, establece una pena privativa de libertad *no menor de seis meses ni mayor de dos años*, se tiene lo siguiente:

Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena

El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta:

- a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad.*
- b. Su cultura y sus costumbres.*
- c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad."*



Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación. Verificadas las circunstancias de atenuación y agravación establecidas en el Código Penal, se tiene que concurren las siguientes:

- **Circunstancias de atenuación de la pena:**

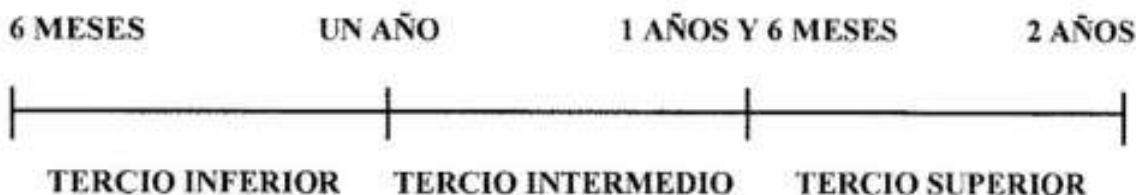
El acusado no cuenta con antecedentes penales.

- **Circunstancias de agravación de la pena:**

El acusado ha aprovechado una circunstancia de modo, tiempo y lugar para perpetrar el suceso, que dificultan la defensa de la ofendida.

En consecuencia, aplicando el artículo 45°-A del Código Penal, modificados por la Ley N° 30076, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de agosto del año 2013, tenemos lo siguiente:

Dividimos en tres partes el espacio punitivo de determinación de la pena a partir de la pena prevista en la ley para el delito **CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA** en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD (no menor de 6 meses ni mayor de 2 años)**.



Al concurrir una circunstancia atenuante y una circunstancia agravante, la pena concreta se determina en el tercio intermedio, según lo establecido en el artículo 45°-A, numeral 2, literal c) del Código Penal, siendo que además se debe tener en cuenta carencia de antecedentes penales y de otro lado el acusado ha aprovechado una circunstancia de modo, tiempo y lugar para perpetrar el suceso, que dificultan la defensa de la ofendida a la pena a solicitar. En consecuencia resulta proporcional fijar la pena en **1 AÑO 4 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, así como el pago de **(S/ 500.00 QUINIENTOS SOLES)**, que abonará el acusado, por concepto de Reparación Civil a favor de la parte agraviada.

VI.3 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD:

Considerando el **principio de proporcionalidad** referido al equilibrio cuantitativo y cualitativo entre el (o los) delito (s) cometido (s) por el agente y la pena que le corresponde, y teniendo en cuenta los fundamentos antes expuestos.



Este Ministerio Público, solicita que se imponga al acusado **MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS**, **1 AÑO 4 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**.

VI.4 MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Ahora bien, la determinación del monto indemnizatorio que deberá pagar el acusado, cuya responsabilidad penal se propondrá, responde a criterios objetivos, racionales y ponderables. Estimándose que independientemente del hecho del grado de afectación de los bienes jurídicos en el presente caso, es factible una obligación indemnizatoria ascendente a la suma de **S/ 500.00 QUINIENTOS SOLES, A FAVOR DEL AGRAVIADO**.

VII. RELACION DE MEDIOS DE PRUEBAS OFRECIDOS PARA SU ACTUACION EN LA AUDIENCIA:

A.- Declaraciones de testigos y peritos:

- A) Declaración del efectivo PNP Rodrigo Albert Rodríguez Álvarez, referente al Acta de recepción de denuncia policial, de fecha 19 de diciembre del 2018, a horas 22:23, deberá ser notificada a través del área de personal de la IX Región Policial.
- B) La declaración de MONICA SANDRA QUISPE QUISPE, sobre los hechos suscitados con fecha 19 de diciembre del 2018, será notificada en su domicilio real ubicado en Sor Ana de los Ángeles, Mzna A, Lte 15, distrito de Socabaya.

B.- Prueba Documental:

- A) Acta de Audiencia de fecha catorce de noviembre del 2016, en el Expediente Nro. 13803-2016, seguido ante el Primer Juzgado de Familia de Paucarpata, se dictaron medidas de protección a favor de MONICA SANDRA QUISPE QUISPE, por parte de MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS, en presencia de ambas partes, se resuelve: "b)... la parte demandada (MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS) se encuentra impedido de acercarse a la parte agraviada o a su domicilio a una distancia no menor de 200 metros..., ello bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad;...";...
- B) Resolución Nro. 01 de fecha 21 de diciembre del 2018, en el Expediente Nro. 16508-2018, seguido ante el Octavo Juzgado de Familia Sub Especialidad Violencia Familiar de Arequipa, por los hechos expuestos en el párrafo anterior;..., se dispone: "Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda conforme a sus atribuciones, y respecto del incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en lo expedientes... 13803-2016....".
- C) Oficio No. 40127-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, fecha 20 de diciembre del 2018, dando cuenta que la persona de MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS, no antecedentes penales, ni judiciales.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

VIII. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL:

Se hace conocer que sobre el acusado pesa la medida de restrictiva de la libertad de Comparecencia Simple dictada de conformidad con el artículo 291 de Código Procesal Penal.

OTROSI DIGO: De conformidad con lo establecido en el artículo 351.3, requiero se me permita modificar, aclarar o integrar la presente acusación en lo que no sea sustancial.

Arequipa, 13 de Agosto del 2019.

Fiscal responsable: Luis Guillermo Vera Oviedo.

Casilla Electrónica: 33477.

2° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA -SEDE PAUCARPATA

EXPEDIENTE : 09396-2019-0-0401-JR-PE-02

JUEZ : VERA TORRES MANFRED HONORIO

ESPECIALISTA : GALLEGOS PINTO PATRICIA BERTHY NU

MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA PPCP GUILLERMO VERA CARP FISCAL 2019161 ,

IMPUTADO : RIVERA VARGAS, MIJAIR WILLY

DELITO : CUANDO SE DESOBEDECE O RESISTE UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN

DICTADA ... VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O CONTRA INTEGRANTES DEL GRUPO

FAMILIAR SERÁ REPRIMIDO CON PENA PRIVATIVA ...

AGRAVIADO : PROCURADOR PUBLICO PODER JUDICIAL ,

RESOLUCIÓN N° 01-2019

Arequipa, dieciséis de setiembre
del año dos mil diecinueve.-

VISTOS: Dado cuenta el Requerimiento de Acusación Directa remitido por el Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata; y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que, el artículo trescientos treinta y seis numeral cuarto del Código Procesal Penal establece que: *"El Fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación"*. **SEGUNDO:** El representante del Ministerio Público ha remitido al órgano jurisdiccional su requerimiento de Acusación Directa, pues considera que lo actuado durante las diligencias preliminares son suficientes para determinar la realidad del delito y la participación del imputado, en los seguidos en contra de **MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS** por la presunta comisión del delito **CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA** en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD** en agravio de **EL ESTADO** representado por el Procurador Público del Poder Judicial. **TERCERO:** Por lo que, conforme al artículo trescientos cincuenta del Código Procesal Penal, corresponde otorgar a los demás sujetos procesales el plazo perentorio de diez días hábiles, para que puedan: **a)** Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección; **b)** Deducir excepciones y otros medios de defensa (...); **c)** Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada (...); **d)** Pedir el sobreseimiento; **e)** Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad; **f)** Ofrecer pruebas para el juicio (...); **g)** Objetar la reparación civil (...); y **h)** Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio". **CUARTO:** Asimismo, para efectos de lo señalado en el artículo trescientos cincuenta y uno, numeral uno del Código Procesal Penal, respecto a la realización de la Audiencia Preliminar, en la que se señala que *"(...)Para la instalación de la Audiencia es obligatoria la presencia del fiscal y el defensor del acusado (...)"*, siendo así, es necesario que el acusado cuente con un abogado defensor, por lo que se le designará un abogado de oficio para que ejerza su defensa en el presente proceso, **QUINTO:** Por otro lado, en cuanto a la

constitución en Actor Civil por parte de la agraviada, al haberse formulado acusación directa en contra **MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS** estos podrán, si lo cree por conveniente, constituirse en Actor Civil dentro del plazo dado en el artículo trescientos cincuenta del Código Procesal Penal, esto es diez días hábiles de haber sido notificado con la presente resolución, y cumplir conforme a lo dispuesto por el artículo ciento uno del mismo cuerpo normativo, fundamentos por los que: **SE DISPONE: 1) CORRER TRASLADO** de la Acusación Fiscal Directa a los demás sujetos procesales **por el plazo perentorio de diez días hábiles**, a efecto de que hagan valer por escrito sus derechos conforme a la normatividad mencionada líneas arriba. **2) NOMBRAR** como abogado defensor de Oficio al Abogado del Ministerio de Justicia **RUBEN HILAZACA MORGA** quien deberá ejercer la defensa del acusado **MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS**; sin perjuicio de que el acusado designe abogado de su preferencia y, asimismo sujetar su defensa a la etapa en la que se encuentra el proceso. **3) OFICIAR** a la Oficina de Registro Distrital de Condenas con fines de inscripción. **4) SE FIJA FECHA** para la realización de la **AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN** la misma que se llevará a cabo el día **ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS** en la Sala de Audiencias del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, fecha en la que deberán estar presentes todas las partes procesales, **bajo apercibimiento** del Ministerio Público de hacerse de conocimiento de su órgano de control interno y del abogado defensor del imputado de imponérsele una multa equivalente a una URP y de ser reemplazado por el Defensor Público nombrado en la causa, quien deberá estar presente en dicho acto, **bajo apercibimiento** en caso de inasistencia de hacerse de conocimiento del Ministerio de Justicia,; debiendo las partes de tener en cuenta que conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 351º del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo Nro. 1307, que establece que la **audiencia es de carácter inaplazable. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. AL OTROSI:** Téngase presente.-.

1º JUZ. PENAL UNIPERSONAL - SEDE MBI PAUCARPATA

EXPEDIENTE : 09396-2019-42-0401-JR-PE-02

JUEZ : QUIROZ CORNEJO ROSS MARY

ESPECIALISTA : LUNA CALCINA DAYSI JEANNETH

MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA PPCP GUILLERMO VERA CARP FISCAL
2019161 ,

IMPUTADO : RIVERA VARGAS, MIJAIR WILLY

DELITO : CUANDO SE DESOBEDECE O RESISTE UNA MEDIDA DE
PROTECCIÓN DICTADA ... VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES O CONTRA
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR SERÁ REPRIMIDO CON PENA
PRIVATIVA ...

AGRAVIADO : PROCURADOR PUBLICO PODER JUDICIAL ,

**AUTO DE CITACIÓN A JUICIO, FORMACIÓN DE EXPEDIENTES
JUDICIALES PARA LA PRUEBA Y PARA EL DEBATE**

RESOLUCIÓN NRO. 01-2020

Arequipa, trece de marzo del dos mil veinte

Estando a la fecha proporcionado por el coordinador.

I.- PARTE EXPOSITIVA

VISTOS: Las actuaciones remitidas por el Juzgado de Investigación
Preparatoria de **Paucarpata**, seguido en contra de **MIJAIR WILLY RIVERA
VARGAS**

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 355 y 359 del NCPP,
debe citarse a juicio dentro del plazo legal.

SEGUNDO.- El Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 de la Corte Suprema de
Justicia de la República establece que, por interpretación sistemática y
teleológica de las normas del Código Procesal Penal, corresponde al Juzgado
Penal Unipersonal o Colegiado, citar a los testigos y peritos para su
comparecencia al Juicio Oral; es así, que el Segundo Juzgado Penal
Unipersonal de Arequipa, ha venido citando a todos los referidos órganos de
prueba, a la misma hora de inicio del Juicio Oral, ello al no contar con mayor
información o criterio para establecer el orden de su participación. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que corresponde a los sujetos procesales
precisar el momento de la participación del órgano de prueba que ha ofrecido,
en armonía a su estrategia de defensa o incriminación, según corresponda,
conforme lo establece el artículo 375°, numeral 2, del Código Procesal Penal,
que señala: "2. El Juez Penal, escuchando a las partes, decidirá el orden en
que deben actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de
los medios de prueba". Luego, la práctica Judicial (Principio de la Realidad),
nos presenta en los casos concretos que todos los órganos de prueba asisten a
la misma hora a las audiencias de juicio oral señaladas en los procesos,
exigiendo su participación en dicho momento por cuanto muchos de ellos son
servidores o funcionarios públicos (policías, peritos del Ministerio Público,
peritos de la DIVINCRI, etc.) lo cual implica la pérdida de horas hombre en

perjuicio de la administración pública dado que, por colaborar con la administración de justicia, dejan de lado otras actividades tan igual de importantes para cada uno o asisten con un permiso de tiempo limitado de sus centros laborales, generando reclamos y protestas, y ante la imposibilidad de atenderlos, se ven obligados a ausentarse de las audiencias, sin poder prestar su declaración y en muchas ocasiones ya no vuelven a presentarse y no se cuenta con éstas declaraciones en el juicio, pese a la aplicación de los apremios establecidos en las normas procesales; todo ello, genera incidencias en las audiencias que en varias oportunidades se ven frustradas por dicha causa. Asimismo, se tiene que en la mayoría de los casos, las partes procesales, en audiencia de juicio oral llegan a convenciones probatorias, prescindiendo la participación de órganos de prueba que ya fueron citados, deviniendo en innecesaria su asistencia, lo que igualmente genera malestar e incomodidad en éstos. El Juzgado, debe velar por la eficiencia y eficacia de la etapa de juzgamiento, aplicando los principios del juicio (artículo 356° del Código Procesal Penal), que son el de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria, que solo se logra con la debida participación de los órganos de prueba aportados por las partes procesales; asimismo, se debe garantizar los principios de continuidad del juzgamiento y de concentración de los actos del juicio; los mismos que están por encima de la interpretación sistemática y teleológica efectuada en el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116, cuyo sustento finalmente es solo identificar a quien corresponde citar a testigos y peritos según la interpretación de normas, sustento que no es de recibo por este Juzgado, debiendo considerarse además que desde la vigencia del referido acuerdo plenario, la mayoría de los órganos de prueba vienen a juicio sin ninguna preparación, contestando a la mayoría de las preguntas que no recuerdan, siendo muchas veces inútil su declaración, lo cual refuerza la necesidad de que la citación a los órganos de prueba la hagan las partes, para que tengan la oportunidad de preparar a los mismos en forma adecuada; lo que no impide que sólo de manera excepcional y por motivos justificados se realizará la citación de la prueba personal por el Poder Judicial a pedido de parte. Fundamentos por los que este Juzgado se desvincula de los principios jurisprudenciales establecidos en éste Acuerdo Plenario, al amparo de lo previsto por el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de aplicación extensiva a los Acuerdos Plenarios; y, efectuando una interpretación teleológica, a los fines del juicio oral, del artículo 355°, numeral 5, del Código Procesal Penal. Por lo que debe requerirse al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, citar a sus testigos y peritos ofrecidos como órganos de prueba, debiendo presentarlos en juicio oral, en el orden y momento que interese a sus estrategias y acorde a sus pretensiones.

TERCERO.- El acusado **MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS**, se encuentra con medida de comparecencia simple.

CUARTO.- Corresponde observar lo dispuesto en el artículo 136° del CPP, "el Juez ordenará formar el respectivo expediente judicial...". Este expediente judicial debe formarse exclusivamente con los actuados, actos procesales de incoación del proceso y resoluciones jurisdiccionales, señalados en dicho dispositivo normativo. En ese sentido debe formarse el **Expediente Judicial**,

que comprende: el **Expediente Judicial para la Prueba**, formado con los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, así como los medios de prueba admitidos en la audiencia de juicio, además, donde se incorporará las actas, informes y declaraciones previas, vinculados con el órgano de prueba previamente admitidos (incluyendo las notificaciones efectuadas, a nivel fiscal); y, el **Expediente Judicial para el Debate**, formado, además del requerimiento acusatorio, con el auto de enjuiciamiento, el auto de citación a juicio oral, las actas de registro de audiencias, las resoluciones escritas dictadas en el desarrollo del juicio y la sentencia, así como sus respectivas notificaciones, citaciones y comunicaciones. Todo ello, conforme a lo previsto por el Artículo 87°, numeral 2, literales a) y b) del Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, aprobado por R.A. 014-2017-CE-PJ.

QUINTO.- Por lo que, a efecto de formar el expediente judicial; se dispone, requerir al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, según corresponda, para que dentro del plazo de 5 días, remitan la prueba admitida en el auto de Enjuiciamiento, y una vez formado el mismo, póngase a disposición de las partes por el plazo de 5 días. De otro lado, debe devolverse al Ministerio Público, todos los demás cuadernos que no sean útiles para la formación del expediente judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 137°, numeral 3 del Código Procesal Penal, debiendo quedar en custodia del Especialista de Causas solo el Expediente Judicial, según lo previsto por el artículo 23°, numeral 6, concordado con el artículo 87°, numeral 2, del indicado Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, aprobado por R.A. 014-2017-CE-PJ. En mérito a todo ello, se hace necesario fijar como fecha de juicio un plazo razonable para no perjudicar el derecho de defensa de los sujetos procesales, y, en consideración a la existencia de otros juicios orales programados.

III.- PARTE RESOLUTIVA

PRIMERO.- CITAR A JUICIO a:

- | | |
|--------------|---|
| a) Acusado | : MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS |
| b) Agraviado | : Estado- Procurador Publico del Poder Judicial- ACTOR CIVIL |
| c) Testigos | : Rodrigo Albert Rodríguez Álvarez
Mónica Sandra Quispe Quispe |

SEGUNDO.- SEÑALAR para la audiencia de **JUICIO ORAL**, el día **ONCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS HORAS en la SALA DE AUDIENCIAS N° TRES** del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, ubicado en Esquina Calle Teniente Alcántara con Av. Alberto Laveau, Urb. Guardia Civil, tercera etapa, Distrito de Paucarpata – Módulo Penal, debiendo el auxiliar de justicia cumplir con efectuar las notificaciones oportunamente y conforme a lo establecido en la normatividad procesal penal vigente.

TERCERO.- ORDENAR el emplazamiento para concurrir a la audiencia de juicio, a todas las personas señaladas en el primer punto de la parte

resolutiva, bajo los siguientes apercibimientos: i) Para los acusados, ser declarados contumaces, girarse órdenes de captura en su contra y disponerse el archivo provisional de la causa. ii) Para los testigos y/o peritos, de ser conducidos compulsivamente por la fuerza pública en caso de inasistencia. iii) Para el representante del Ministerio Público, poner en conocimiento del órgano de Control Interno correspondiente su inasistencia.

CUARTO.-DISPONEMOS DESVINCULARNOS de los principios jurisprudenciales establecidos en el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República, al amparo de lo previsto por el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de aplicación extensiva a los Acuerdos Plenarios. Por lo que **SE REQUIERE al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, citar a sus testigos y peritos admitidos como órganos de prueba, debiendo dar cuenta en audiencia del cumplimiento de las citaciones**, para efectivizar los apercibimientos prevenidos, de ser el caso. Se precisa que la citación de los testigos y peritos deberá reservarse para una siguiente oportunidad.

QUINTO.- CITAR: al Abogado Defensor Público **Dr. Ruben Hilazaca Morga**, defensa del acusado, bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia de designarse nuevo defensor público, de informar al Ministerio de Justicia y al Colegio de Abogados de ser el caso, sin perjuicio que el acusado designe abogado de su preferencia; sujetándose su defensa a la etapa en la que se encuentra el proceso.

Precisar, que la citación a testigos y peritos, deberá ser reservada para siguiente oportunidad.

SEXTO.- FORMAR el Expediente Judicial, conforme a lo desarrollado en el cuarto considerando.

SÉPTIMO: PONER el citado Expediente Judicial, una vez formado, en secretaría, a disposición del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días, para los fines previstos en el artículo 137 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal. **REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE.**



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

"Año de la Universalización de la Salud"



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Arequipa, 13 de marzo del 2020

Oficio N° 9396-2019-0 -0401-JR-PE-01-DJLC

SEÑOR:

**FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LA PRIMERA FISCALÍA CORPORATIVA
DE PAUCARPATA**

Presente.-

ATENCIÓN: DR. Luis Guillermo Vera-Carpeta 2019-161

Por especial encargo del Sr. Juez, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de **DEVOLVER** en fojas () el expediente **N°9396-2019-0** seguido en contra de **MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS**

Ello conforme al dispuesto en el artículo 137 °, numeral 3 del Código Procesal Penal y a la resolución N° 2-2017 emitida en el Expediente Judicial para el debate.

Se acompaña:

✓ Expediente N° 9396-2019-69 a fojas ()

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
MODULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PAUCARPATA
PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL



1° JUZ. PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA

EXPEDIENTE : 09396-2019-42-0401-JR-PE-02
JUEZ : QUIROZ CORNEJO ROSS MARY
ESPECIALISTA : LUNA CALCINA DAYSI JEANNETH
MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA PPCP GUILLERMO VERA CARP FISCAL 2019161
IMPUTADO : RIVERA VARGAS, MIJAI WILLY
DELITO : DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
AGRAVIADO : PROCURADOR PUBLICO PODER JUDICIAL

Resolución N° 05

En la ciudad de Arequipa, a los ocho días del mes de junio del año dos mil veintiuno, el Primer Juzgado Penal Unipersonal del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, a cargo de la Magistrada **Ross Mary Quiroz Cornejo**, luego de haber dirigido y valorado el juicio oral y público; seguido en contra de **MIJAI WILLY RIVERA VARGAS** por el delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, ilícito previsto en el artículo 368 del Código Penal, en agravio del **ESTADO** representado por el Procurador Público del Poder Judicial, ejerciendo la potestad de administrar justicia, ha pronunciado en nombre del pueblo, la siguiente:

SENTENCIA N° 112-2021

I. PARTE EXPOSITIVA

VISTOS Y OÍDOS

Primero.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Es la causa signada como expediente número 9396-209, seguida en contra de Mijair Willy Rivera Vargas por el delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, ilícito previsto en el artículo 368 del Código Penal, en agravio del ESTADO representado por el Procurador Público del Poder Judicial.

Segundo.- IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO

Se juzga a: **MIJAI WILLY RIVERA VARGAS**, con documento nacional de identidad número 29667343; fecha de nacimiento: seis de junio de mil novecientos setenta y seis; lugar de nacimiento: distrito, provincia y departamento de Arequipa; con grado de instrucción: secundaria completa; estado civil: soltero; nombre de los padres: Benito y Martha; con domicilio real: Urbanización Salaverry 800, distrito, provincia y departamento de Arequipa.

2.1. ITINERARIO PROCESAL:

2.1.1. Por el mérito del auto de citación a juicio, se citó a los sujetos procesales a juicio oral. Instalada la audiencia y con la concurrencia de las partes se dio inicio al juicio.

2.1.2. Se escuchó los alegatos de apertura del Ministerio Público, y defensa técnica del acusado.

2.1.3. Al inicio del juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos, y al preguntársele si admitían ser partícipe en calidad de autor, del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; éste, previa consulta con su abogado defensor, **acepto los hechos** objeto de la acusación fiscal, así mismo **acepto la responsabilidad penal, en calidad de autor, y la responsabilidad civil.**

2.1.4. Se declaró la **conclusión anticipada del juicio**, se procedió a consultar a las partes respecto de algún acuerdo sobre pena y reparación civil, siendo que los mismos acordaron todos los extremos de la pena y la reparación civil.

Tercero.- DELIMITACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

En el marco de la requisitoria escrita, la representante del Ministerio Público presentó en juicio oral sus respectivos alegatos en los términos siguientes:

3.1. Hechos imputados:

Conforme el Acta de Audiencia de fecha catorce de noviembre del 2016, en el Expediente Nro. 13803-2016, seguido ante el Primer Juzgado de Familia de Paucarpata, se dictaron medidas de protección a favor de Mónica Sandra Quispe Quispe, por parte de Mijair Willy Rivera Vargas, en presencia de ambas partes, se resuelve: "b)... la parte demandada (Mijair Willy Rivera Vargas) se encuentra impedido de acercarse a la parte agraviada o a su domicilio a una distancia no menor de 200 metros....ello bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad;..."

Se tiene el Acta de recepción de denuncia policial, de fecha 19 de diciembre del 2018, a horas 22:23, aprox., personal policial de la Comisaría de Ciudad Mi Trabajo, se constituyeron a la dirección sito en Pampas Viejas B-2, distrito de Socabaya, lugar en el cual se entrevistan con la persona de Monica Sandra Quispe Quispe, quién refiere que a horas 22:00, aprox., de la fecha, su ex conviviente Mijael Willy Rivera Vargas, se aproximó a su domicilio con la finalidad de agredirla física y psicológicamente, insultándola con palabras soeces y calificativos denigrantes. Refiere la denunciante que cuentas con medidas de protección: en el lugar se entrevistan con la persona de Mijair Willy Rivera Vargas, el mismo que refiere que "en ningún momento la agredió física, ni psicológicamente y el motivo de su presencia en el domicilio que su menor hijo se encontraba en la calle", indicando que "no tiene conocimiento sobre las medidas de protección.

Resulta de la Resolución Nro. 01 de fecha 21 de diciembre del 2018, en el Expediente Nro. 16508-2018y\seguido ante el Octavo Juzgado de Familia Sub Especialidad Violencia Familiar de Arequipa, por los hechos expuestos en el párrafo anterior: ..., se dispone: "Que se REMITAN los actuados a la Fiscalía Penal correspondiente para que proceda conforme a sus atribuciones, y respecto del incumplimiento de las medidas de protección dispuestas en lo expedientes... 13803-2016."

3.2. Calificación Jurídica: Los hechos expuestos han sido tipificados por el Ministerio Público, como delito de Contra la Administración Pública, en la modalidad de Desobediencia a la Autoridad, ilícito previsto en el artículo 368 del Código Penal.

3.3. Pretensión Punitiva: El Ministerio Público, solicita se imponga al acusado UN AÑO Y CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD.

3.4. Pretensión Civil: El Ministerio Público solicita por concepto de reparación civil la suma de S/. 500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES).

3.5. Defensa técnica del acusado: Se acoge a la Conclusión Anticipada.

3.6. Autodefensa del acusado: Reconoce los hechos y se acoge a la **Conclusión Anticipada.**

CUARTO.- DEL ACUERDO PROPUESTO

4.1. El Ministerio Público y la defensa del acusado, hicieron conocer a este despacho que habían llegado a un acuerdo sobre la pena, acuerdo que consiste en **RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO POR EL PLAZO DE UN AÑO**, a condición de que cumpla las siguientes reglas de conducta:

4.1.1. Prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado de ejecución.

4.1.2. Deberá comparecer al juzgado de ejecución de Paucarpata el primer día hábil de cada dos meses, a fin de informar y justificar sus actividades.

4.1.3. Reparar el daño ocasionado pagando el íntegro de la reparación civil.

4.1.4. Someterse a un tratamiento psicológico para control de impulsos en el establecimiento de salud que cree conveniente, dando a conocer sobre el inicio y la culminación de dicho tratamiento.

4.1.5. No volver a cometer nuevo delito doloso de similar naturaleza.

4.2. Acordaron, en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta se revocará la pena de manera progresiva y, de llegar al extremo más gravoso se dará lectura al fallo condenatorio y se le impondrá UN AÑO Y DOS MESE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON CARÁCTER DE EFECTIVA.

4.3. Acordaron, por concepto de reparación civil la suma de S/. 500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), que deberá pagar en tres cuotas: dos cuotas de S/. 150.00 soles y una última de S/. 200.00 soles, los días 08 de julio, 08 de agosto y 08 de septiembre de 2021 mediante depósito judicial ante el Banco de la Nación, cuyo Boucher deberá ser ingresado al expediente judicial.

II.- PARTE CONSIDERATIVA.

QUINTO.- NORMATIVIDAD APLICABLE

5.1. El artículo 372° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencias vinculantes, tales como: el **Acuerdo Plenario No. 05-2008/CJ-116**; y el **Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116**, que si bien, este último está referido a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de legalidad y proporcionalidad atañen a la conclusión anticipada.

5.2. No obstante, la presencia del Juzgador, no es pasiva, para efectos de la homologación de la "conformidad"; ya que, existe cierto margen de valoración que el Juez debe ejercer soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

SEXTO.-CALIFICACIÓN JURÍDICA

6.1. Conforme a la acusación, es aplicable el artículo 368° del Código Penal., el mismo que prevé:

Artículo. 368. Resistencia o desobediencia a la autoridad

El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años.

6.2. La imputación es por delito consumado.

SEPTIMO. - JUICIO DE SUBSUNCIÓN

7.1. La conducta del acusado se adecua, objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito antes referido.

7.2. Los hechos atribuidos al acusado son que Que Mijair Willy Rivera Vargas, con fecha de fecha 19 de diciembre del 2018, a horas 22:23, aprox., cuando personal policial de la Comisaría de Ciudad Mi Trabajo, se constituyeron a la dirección sito en Pampas Viejas B-2, distrito de Socabaya, lugar en el cual se entrevistan con la persona de Monica Sandra Quispe Quispe, quién refiere que a horas 22:00, aprox., de la fecha, su ex conviviente Mijair Willy Rivera Vargas, se aproximó a su domicilio con la finalidad de agredirla física y psicológicamente, insultándola con palabras soeces y calificativos denigrantes, no obstante tener conocimiento pleno, ha desobedecido la orden impartida por el Juez del Primer Juzgado de Familia de Paucarpata, resolvió: Conforme el Acta de Audiencia de fecha catorce de noviembre del 2016. en el Expediente Nro. 13803-2016: : "b)... la parte demandada (Mijair Willy Rivera Vargas) se encuentra impedido de acercarse a la parte agraviada o a su domicilio a una distancia no menor de 200 metros.... ello bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia a la autoridad.

7.3. No se ha alegado, ni se ha probado causa que justifique el actuar típico del acusado, y tampoco se ha probado causa que justifique su conducta o que excluya su culpabilidad.

7.4. Por ello concurren todos los elementos del tipo penal, el mismo que ha sido realizado con conocimiento y voluntad conforme se desprende de los hechos acreditados en autos, concurriendo el aspecto subjetivo del tipo penal.

7.5. En consecuencia, la conducta del inculpado deviene en típica, antijurídica y culpable.

OCTAVO.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA:

8.1. La pena básica que corresponde al delito es no menor de seis meses ni mayor de dos años de pena privativa de libertad, la pena solicita por el Ministerio Público es de un año y cuatro meses habiéndose el descuento por conclusión anticipada la pena concreta será un año y dos meses, conforme al acuerdo arribado entre el Ministerio Público y el acusado; siendo ello así la pena acordada aparenta ser razonable, por lo que debe aprobarse.

8.2. De conformidad con el artículo 62° del Código Pena, El juez puede disponer la reserva del fallo condenatorio siempre que, de las circunstancias individuales, verificables al momento de la expedición de la sentencia, pueda colegir que el agente no cometerá nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del sentenciado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación. La reserva es dispuesta en los siguientes casos: 1. Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con multa; 2. Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres; 3. Cuando la pena a imponerse no supere los dos años de inhabilitación. El plazo de reserva del fallo condenatorio es de uno a tres años, contado desde que la decisión adquiere calidad de cosa juzgada. Al cumplirse los presupuestos en el caso concreto para la aplicación de reserva de fallo se dispone la reserva de fallo condenatorio por el plazo de un año.

8.3. Es de precisar que, al no haber actividad probatoria, ni haber intervenido el Juez en valoración probatoria alguna para la determinación de la pena, pues hay conformidad entre las partes; corresponde que sean estas mismas partes las que señalen la pena a imponerse en caso de incumplimiento de reglas de conducta.

NOVENO.- FIJACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL-

9.1. El objeto civil se rige por los artículos 11° y 12° del Código Procesal Penal; y 93° al 101° del Código Penal, este último precepto remite, en lo pertinente, a las disposiciones del Código Civil.

9.2. Este aspecto no ha sido materia de controversia; por lo que cabe aprobarse el acuerdo entre la defensa del acusado y el actor civil. La cantidad dineraria acordada, es razonable a las circunstancias del evento delictual del caso concreto, por lo que cabe aceptarse el monto fijado por las partes.

DECIMO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS COSTAS

10.1. El artículo 497.5° del Código Procesal Penal, establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz.

10.2. En el presente caso, al haber concluido el proceso por "conformidad"; no procede la imposición de costas.

III.- PARTE RESOLUTIVA:

Por estas razones, administrando justicia a nombre del Pueblo, de quien emana dicha facultad, **FALLO:**

PRIMERO: APRUEBO los acuerdos de la pena y reparación civil arribados entre el Ministerio Público, el acusado y su defensa técnica.

SEGUNDO: DECLARO a MIJAIR WILLY RIVERA VARGAS cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de esta sentencia, **AUTOR** del delito de Contra la Administración Pública, en la modalidad de **DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD**, ilícito previsto en el artículo 368° del Código Penal, en agravio del **ESTADO**, representado por el Procurador Público del Poder Judicial; y, como tal absteniendome de dictar la parte condenatoria de esta sentencia, **DISPONGO la RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO POR EL PLAZO DE UN AÑO**, a condición de que cumpla las siguientes reglas de conducta: **a)** Prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juzgado de ejecución. **b)** Deberá comparecer al juzgado de ejecución de Paucarpata el primer día hábil de cada dos meses, a fin de informar y justificar sus actividades. **c)** Reparar el daño ocasionado pagando el íntegro de la reparación civil. **d)** Someterse a un tratamiento psicológico para control de impulsos en el establecimiento de salud que cree conveniente, dando a conocer sobre el inicio y la culminación de dicho tratamiento. **e)** No volver a cometer nuevo delito doloso de similar naturaleza.

Asimismo, en caso que incumpla cualquiera de estas reglas de conducta se revocará la pena de manera progresiva y, de llegar al extremo más gravoso se dará lectura al fallo condenatorio y se le impondrá **UN AÑO Y DOS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON CARÁCTER DE EFECTIVA**.

TERCERO: FIJO el monto de la **REPARACIÓN CIVIL** en suma de **S/. 500.00** (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), que deberá pagar en tres cuotas: dos cuotas de S/. 150.00 soles y una última de S/. 200.00 soles, los días 08 de julio, 08 de agosto y 08 de septiembre de 2021 mediante depósito judicial ante el Banco de la Nación, cuyo Boucher deberá ser ingresado al expediente judicial.

CUARTO: DISPONGO que no corresponde fijar las costas y mando que consentida o ejecutoriada sea la presente se inscriba en Registro Especial de Condenas, por esta mi sentencia así la pronuncio mando y firmo en audiencia pública de la fecha.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Caso SGF : 1506014504-2019-4411-0

Fiscal Adjunta responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez

DISPOSICIÓN DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE FISCAL N°01

Arequipa, doce de noviembre del dos mil diecinueve

DADO CUENTA: En la fecha, los actuados de la carpeta fiscal N°1506014504-2019-4411-0, instaurada en torno a la presunta comisión del delito de CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA - CONTRA LA FUNCION JURISDICCIONAL en su modalidad de DENUNCIA CALUMNIOSA, en contra de CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR, en agravio del ESTADO, representado por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de Poder Judicial y otro; y

ATENDIENDO:

PRIMERO: NORMATIVIDAD PROCESAL PENAL APLICABLE VIGENTE:

El Nuevo Código Procesal Penal - Decreto Legislativo N° 957, establece en su artículo VII del Título Preliminar, que: "La Ley Procesal Penal es de *aplicación inmediata*, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal". De modo que la presente ley procesal al encontrarse vigente y que regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e investigación preparatoria, resulta aplicable para efectos de la calificación de la presente denuncia, conforme a lo normado en el artículo 334° y 335° del Código acotado.

SEGUNDO: HECHOS INVESTIGADOS:

De los antecedentes se tiene que, que mediante Disposición Fiscal N°02 de fecha doce de abril del año dos mil diecinueve, este Despacho Fiscal dispuso entre otros, la remisión de copias certificadas de los actuados de la investigación caso SGF 1506014503-2018-11304-0, tramitada por la comisión del delito de Hurto, en agravio de Cesar Homero de la Borda Tafur y Bernabel Willinton Diaz Guzman, toda vez, que el primero nombrado al momento de constituirse a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE), procedió a denunciar un hecho que nunca se suscitó al haber señalado que "con fecha 03 de octubre del 2018 a las 18:00 horas, cuando dejo estacionado en la Av. Industrial a 30 metros del Grifo Santa Ines, del distrito de Paucarpata, mientras cotizaba repuestos para maquinaria al retornar después de media hora fue víctima de hurto del vehículo de placa de rodaje V9D-442, marca Kia, Modelo Rio y que tiene sospecha que la persona de Pedro Moisés Huerta Fernández, habría cometido el hecho, ya que hace tres días del hecho y al finalizar el contrato de dicho vehículo indico que se le había perdido la llave de contacto de dicho vehículo"; hecho que sin embargo, nunca se suscitó ya que "Cesar Homero de la Borda Tafur ante la desaparición de Pedro Moisés Huerta Fernández, y al estar inubicable y la presión del dueño del vehículo, quien le solicitaba la devolución de su vehículo y con la esperanza de poder lograr recuperar el vehículo es que se vio obligado a formular una denuncia por hurto...". Evidenciando indicios razonables que la persona de Cesar Homero de la Borda Tafur se encuentra incurso en el delito de Denuncia Calumniosa, ello al haber puesto en conocimiento de la autoridad una denuncia a sabiendas que no se ha cometido, y que ha dado inicio a que se realice una investigación preliminar con participación del Ministerio Público.

TERCERO: ADECUACIÓN DEL TIPO PENAL

Que, teniendo en cuenta los hechos denunciados, se advierte que estos se circunscribirán al delito de **Contra la Administración de Justicia - Delito Contra la Función Jurisdiccional en su modalidad de Denuncia Calumniosa**, previsto en el Art. 402° del Código Penal que señala:

"El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa".

BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
1ra. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata

Artículo 23° del Código Penal (autoría y participación), prescribe: **"El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción".**

En el presente caso, estando a la forma y circunstancias en que se han suscitado los hechos es procedente continuar con la investigación preliminar a fin de reunir los elementos indispensables que permitan acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito precisado, a fin de ejercitar la acción penal correspondiente, la misma que deberá estar bajo la conducción de este despacho conforme lo prevé el Artículo 1 y 9° de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

CUARTO: DEL PRESUPUESTO DE IMPUTACIÓN PARA EL MINISTERIO PÚBLICO

Le corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función; ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, de conformidad al artículo 159° numerales 4) y 5) de la Constitución Política del Estado de 1993, en concordancia con lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, "El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio". "El Ministerio Público está obligado de actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, lo que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional"; lo que se establecería que el Ministerio Público conduce la investigación preparatoria, persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso al imputado preparar su defensa. Así mismo, tiene por finalidad "determinar si la conducta inculpada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado"; por lo que su ejercicio está condicionado al cumplimiento previo de requisitos mínimos, tal como lo preceptúa el numeral 1) del artículo 321° del Código Procesal Penal.

QUINTO: PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

El artículo 330° numeral 2) del Código Procesal Penal establece: "Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente", asimismo el artículo 334 numeral 2) del mismo cuerpo normativo preceptúa que: **"El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3°, es de setenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante, ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto, según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación (...)"**. En el presente caso deberá obtenerse la declaración de Pedro Moises Huerta Fernández; del investigado con la asistencia de su abogado defensor, se recabe los antecedentes penales y judiciales que pudiera registrar el investigado y demás diligencias que resulten necesarias; motivo por el cual el plazo a utilizar en la presente investigación será de 60 días.

En consecuencia, estando a los fundamentos antes esgrimidos y de conformidad con lo prescrito en el artículo 159° numeral 4) y 5) de la Constitución Política del Perú; artículo 23° del Código Penal; los artículos IV del Título Preliminar, 60°, 61°, 64°, 65°, 321° numeral 1), 330° y 334° numeral 2) del Código Procesal Penal; y los artículos 1° y 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, este Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata,

SE DISPONE:

PRIMERO: DAR INICIO A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE FISCAL, por el plazo de **SESENTA (60) DÍAS**, en la investigación seguida contra **CESAR HOMERO DE LA BORDA** **IAFUR** por la presunta comisión del delito **CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA – CONTRA LA FUNCION JURISDICCIONAL** en su modalidad de **DENUNCIA CALUMNIOSA**, en agravio del **ESTADO**, representado por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de Poder Judicial y **PEDRO MOISES HUERTA FERNÁNDEZ**, debiendo actuarse las siguientes diligencias:


- 1) Se CITE a **PEDRO MOISES HUERTA FERNÁNDEZ**, a efecto que rinda su declaración respecto a los hechos, el mismo que deberá precisar el perjuicio causado a su persona con relación a los hechos

BLANCA SI SANA TERRORA GUTIERREZ
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
Instituto de la Magistratura
Ministerio Público
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata

señalados por el investigado, ante este Despacho Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, sito en la calle Teniente Alcántara s/n, Urb. Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, Arequipa, quien deberá concurrir el día **18 DE DICIEMBRE DEL 2019 a las 12:00 horas (mediodía)**.

- 2) **RECABESE** la declaración del investigado **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR** el día **18 DE DICIEMBRE DEL 2019 a las 15:30 horas (tarde)**, a fin de que presente su descargo respecto a la imputación formulada en su contra, **oportunidad en la que deberá concurrir de manera obligatoria con su abogado defensor**, debiendo apersonarse a este despacho fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, sito en la calle Teniente Alcántara s/n, Urb. Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, Arequipa, con dicho fin.
- 3) **SE RECABE** los posibles antecedentes judiciales y penales que pudiera registrar el investigado **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**.
- 4) **SE ACTÚE** cuanta diligencia sea necesaria para el pleno esclarecimiento del hecho denunciado y concluida las diligencias proceder conforme corresponda.

SEGUNDO: Notifiquese conforme corresponda a las partes. **Y Oficiese.** Autoriza la suscrita por licencia del señor Fiscal Provincial Titular.-


 BLANCA SUSANA TEODORA GUTIERREZ
 Fiscal Adjunta Provincial
 1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
 Distrito Fiscal de Arequipa



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Caso SGF : 1506014504-2019-4411-0
Imputado : Cesar Homero de la Borda Tafur
Delito : Denuncia Calumniosa
Agravado : EL ESTADO - PODER JUDICIAL

EXPEDIENTE :

SUMILLA : ACUSACION FISCAL DIRECTA
Fiscal Adjunta responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez

**SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - SEDE MBI
PAUCARPATA**

BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ, Fiscal Adjunta Provincial encargada del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, ante usted me presento y expongo;

I. REQUERIMIENTO:

Que, al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los Arts. 60°, 336° numeral 4) y 349° del Código Procesal Penal, formulo **REQUERIMIENTO de ACUSACION FISCAL DIRECTA** contra de **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, como presunto autor del delito **CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - CONTRA LA FUNCION JURISDICCIONAL** en su modalidad de **DENUNCIA CALUMNIOSA**, previsto en el artículo 402° primer párrafo del Código Penal, en agravio de **EL ESTADO - PODER JUDICIAL**, en los términos siguientes:

II. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:

NOMBRE Y APELLIDOS	: CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	: 40743989
FECHA DE NACIMIENTO	: 05/07/1978
EDAD	: 41 años de edad.
LUGAR DE NACIMIENTO	: Arequipa, Arequipa, Arequipa
NOMBRE DEL PADRE	: Felipe
NOMBRE DE LA MADRE	: Lucila
SEXO	: masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN	: Superior
ESTADO CIVIL	: conviviente (sotillo)
OCCUPACIÓN	: micro empresario
TELEFONO	: 916198036
DOMICILIO REAL	: Urb. Tahuaycani Mz. I, lote 3, distrito de Sachaca, Arequipa, Arequipa.
DOMICILIO PROCESAL	: no señalo
ABOGADO DEFENSOR	: no ha designado

III. DATOS DE LA PARTE AGRAVIADA:

EL ESTADO - PODER JUDICIAL, representada por el Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, quien tiene como **domicilio legal** en Av. Petit Thouars N°3943 - San Isidro, Lima, Lima.

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS AL ACUSADO:

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:

- Con fecha 04 de octubre del 2018, a las 15:00 horas, el ahora imputado **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR** se constituyó a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de

Vehículos (UPROVE) denunciando haber sido víctima de hurto del automóvil de placa de rodaje V9D-442, marca Kia, modelo Rio, de propiedad de Bernabel Willinton Diaz Guzman, en circunstancias que el día 03 de octubre del 2018 a las 18:00 horas aproximadamente, dejó estacionado en la Av. Industrial a 30 metros del Grifo Santa Ines (carril subida) del distrito de Paucarpata, mientras cotizaba repuestos para maquinaria y al retornar después de media hora se dio con la sorpresa que dicho vehículo no se encontraba en el mismo lugar donde lo dejó estacionado; que no denunció al momento del hecho por cuanto requería apersonarse con el propietario y que *tiene sospecha de la persona de Pedro Moisés Huerta Fernández*, ya que hace tres días del hecho al finalizar el contrato de alquiler indicó que se le había perdido la llave del contacto de dicho vehículo y que al momento de recoger el vehículo lo amenazó que algo le iba a suceder.

- Así, se dio inicio a la investigación, caso SGF 1506014503-2018-11304-0, tramitada ante esta Fiscalía por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en su modalidad de Hurto Agravado, en agravio Bernabel Willinton Diaz Guzmán.

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES:

- Que, al efectuarse la investigaciones del caso en la referida carpeta fiscal, se ha logrado establecer que el *vehículo automóvil de placa de rodaje V9D-442, marca Kia, modelo Rio, de propiedad de Bernabel Willinton Diaz Guzman, nunca fue sustraído y que la denuncia realizada por el ahora imputado fue falsa*, toda vez, que con fecha 25 de enero del 2019, Cesar Homero de la Borda Tafur al momento de rendir su ampliación de declaración con presencia de su abogada defensora señaló *"ante la desaparición de Pedro Moises Huerta Fernández, y estar inubicable ya que no vivía en Piedra Santa y la presión del dueño del vehículo, quien me solicitaba la devolución de su vehículo de placa V9D-442, y con la esperanza de poder recuperar el vehículo es que me vi obligado a formular una denuncia por hurto, pensado que era la única forma de poder lograr la captura del vehículo para su recuperación, ya que este señor tiene denuncias por estafas y apropiación ilícita de vehículos y del cual tenía pleno conocimiento Bernabel Willinton Diaz Guzman, propietario del vehículo, yendo a la DIVINCRI para constatar todas sus denuncias y quien procedió lo acompañó hacer la denuncia con la finalidad de poder ubicar y recuperar el vehículo..."*, denunciando así dicho imputado a la autoridad policial un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido.

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:

- Por lo que, mediante Disposición Fiscal N°02 de fecha 12 de abril del 2019, este Despacho Fiscal además de declarar *"que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria por los hechos denunciados contra Pedro Moisés Huerta Fernández, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en su modalidad de Hurto Agravado, en agravio de Cesar Homero De La Borda Tafur y Bernabel Willinton Diaz Guzmán"*, dispone extraerse copias certificadas a efecto que se proceda conforme a ley por la denuncia falsa presentada por el ahora imputado, ello al haber puesto en conocimiento de la autoridad una denuncia a sabiendas que no se ha cometido y que ha dado inicio a que se realice una investigación preliminar con participación del Ministerio Público.

IMPUTACION CONCRETA:

En estos extremos, se atribuye al imputado **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial una denuncia falsa por un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido, toda vez, que el día 03 de octubre del 2018 a las 18:00 horas, dicho imputado se constituyó a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) denunciando haber sido víctima de hurto del automóvil de placa de rodaje V9D-442, marca Kia, modelo Rio, de propiedad de Bernabel Willinton Diaz Guzman, cuando lo dejó estacionado en la Av. Industrial a 30 metros del Grifo Santa Ines (carril subida) del distrito de Paucarpata, mientras cotizaba repuestos para maquinaria, sindicando como presunto sospechoso a Pedro Moisés Huerta Fernández, el cual dio inicio a la investigación caso SGF 1506014503-2018-11304-0, tramitada ante esta Fiscalía por la comisión del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de Hurto Agravado, acto que sin embargo nunca se produjo.

V. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Este Despacho cuenta con los siguientes elementos de convicción que revelan la comisión del

BLANCA SUSANA YERREIRA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
1ra. Fiscalía Provincial de Paucarpata
Distrito Fiscal de Paucarpata

delito imputado y vinculan a las imputadas con los hechos:

5.1. Copias certificadas de la carpeta fiscal N°503-2018-11304-0, que contiene los actuados de la denunciada presentada por Cesar Homero de la Borda Tafur por el delito de hurto agravado, entre ellos:

a) Acta de Denuncia Verbal de fs. 05, donde se describen los hechos denunciados por Cesar Homero de la Borda Tafur por el delito de Hurto de vehículo automóvil de placa de rodaje V9D-442, marca Kia, modelo Rio, de propiedad de Bernabel Willinton Diaz Guzman.

b) Acta de Inspección Técnico Policial a fs. 09, elaborado por el PNP Enrique L. Minaya Mendoza, mediante el cual se informa que en el lugar de los hechos denunciados Av. Industrial vía doble carril, se realizó la Inspección Técnico Policial, constatando que en la lugar existen diversos establecimientos de venta de repuestos, talleres y otros; además que no se pudo ver cámaras de video instaladas en la vía pública, ni establecimientos comerciales, en tal sentido, no se pudo establecer si el vehículo de placa de rodaje V9D-442, fue dejado en el lugar que indicó el denunciante.

c) Manifestación de CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR de fs. 11/13, donde señala que *"el día 03 de octubre 2018, siendo aprox. las 18:00 horas me dirigí a la Av. Industrial altura del grifo Santa Inés del Distrito de Paucarpata con la finalidad de cotizar unos repuestos, dejando estacionado el vehículo en la Av. en mención y al retornar después de media hora me di con la sorpresa que el vehículo no se encontraba en el mismo lugar donde lo deje estacionado, por lo que de inmediato proseguí a la búsqueda por diferentes lugares y también pregunte a las diferentes personas del lugar quienes no me dieron respuestas alguna, ante el hecho me comuniqué con el propietario del bien quien recién me indico para hacer la denuncia correspondiente por hurto del vehículo" además refirió que "sospecho de una persona Pedro Moises Huerta Fernandez porque hace tres días me llamo de un teléfono público para comunicarme que la llave del vehículo lo había perdido y no podía abrir la puerta a lo cual le dije donde se encontraba y me respondió en Cerro Colorado a tres cuadras de la plaza y al llegar al lugar lo encuentre a esta persona, parado al costado del vehículo y me dijo que lo había extraviado la llave de contacto, ante este hecho me comuniqué con el propietario del vehículo, quien me facilito el duplicado de la llave y es en ese momento que decidí finalizar el contrato debido a sus impagos y al descuido que tenía la unidad, por lo que, dicha persona me emenaza diciendome ya sabes lo que te va a pasar, lo cual hice caso omiso y procedí a retirarme llevándome el vehículo hacia mi domicilio, es por ello que coincidentemente y relacionando el tema que había perdido la llave así como la amenaza que sufrí sospecho directamente de esta persona ya que no puedo sindicar en forma directa porque en el momento del hecho no pude ver".*

d) Declaración de BERNABEL WILLINTON DIAZ GUZMAN de fs. 14/15, donde señala que *"(... cuento con contrato de alquiler de arrendamiento vehicular de mi vehículo que hice con la persona de Cesar de la Borda Tafur, el cual firmaron el 16 de mayo del 2018... tome conocimiento del hurto de mi vehículo porque se apersono el Sr. Cesar de la Borda Tafur, a quien yo le alquilo mi vehículo, indicandome que se lo habrían hurtado cuando lo dejo estacionado en la Av. Industrial (Paucarpata) cerca al grifo Santa Inés... cuando le pregunte al Sr. Cesar de la Borda Tafur donde estaba mi vehículo, recién me entere que el alquilaba mi automotor a otra persona, de lo cual nunca me comunico de ello..."*

e) INFORME POLICIAL N°60-2019-DIRINDRI-JEFDRDIC-DIVINCRI-A-DEPINCRI-SECPIRV de fs. 31/35, elaborado por la unidad de Prevención e Investigación de Robos de Vehículos con fecha 08 de febrero del 2019, donde se describen los hechos materia de la presente investigación y se hace constar las diligencias practicadas con relación a la denuncia formulada por Cesar Homero de la Borda Tafur, precisandose asimismo en el punto G), que ante los hechos declarados por Mario Gonzales Aucaylle, el ahora imputado Cesar de la Borda Tafur indico que formulo una denuncia por hurto del vehículo de placa de rodaje V9D-442 ante la presión del propietario del vehículo que le devuelva el bien y porque había tomado conocimiento que Pedro Moises Huerta Fernandez tenía varias denuncias, viendose por ello obligado a formular la denuncia para recuperar el vehículo.

f) Declaración de BERNABEL WILLINTON DIAZ GUZMAN de fs. 36/37 quien indica que *"Cesar Homero de la Borda Tafur realizó denuncia por el robo de mi vehículo, he estado averiguando por mi cuenta y he tomado conocimiento que Cesar Homero de la Borda Tafur, ha*

BLANCA SUSANA TERROBA GUTIÉRREZ
Fiscal Adjunta Provincial
Trib. Fiscalía Prov. Paucarpata, de Paucarpata
Distrito Fiscal de Paucarpata

alquilado mi vehículo a Pedro Moises Huerta Fernandez, que tiene varias denuncias por apropiación ilícita de vehículos y que este a su vez lo ha empeñado como prenda de un préstamo de \$5,000 dólares americanos a una persona que apellido Gonzales y vive en Miraflores, lo tiene guardado... he ido el domicilio de Pedro Moises Huerta Fernandez, ubicado en la Av. Arequipa, en reiteradas veces, pero solo en dos oportunidades nos hemos visto y este se ha escapado, asimismo quiero indicar que he tomado conocimiento que es un estafador y tiene varias denuncias..."

g) Copia de Contrato Privado de Arrendamiento Vehicular de fs. 39, donde consta que el día 16 de mayo del 2018, Willy Diaz Guzman da en arrendamiento a Cesar Homero de la Borda Tafur el automovil de marca KIA, modelo RIO, año 2018, color Blanco con número de placa de rodaje V9D-442.

h) Acta de Recepción de Vehículo de fs. 41, en la cual consta que el 22 de Enero de 2019 se hizo presente al persona de Mario Gonzales Auccaylle poniendo a disposición el vehículo automòvil, marca kia, modelo rio, año 2018, color blanco, con nro. De serie 3KPA241AAJE092179, motor Nro. G4LCHE739016, de placa de rodaje Nro. V9D-442, vehículo que se encuentra en posesión en razón que la persona de *Pedro Moises Huerta Fernandez*, lo dejo en garantía de prestamo de la cantidad de S/18,000.00 soles desde el día 01 de julio del año 2018 y que ha tomado conocimiento que el mencionado vehículo se encuentra con requisitoria por Hurto, desde el mes de Octubre del año 2018.

i) Declaración de MARIO GONZALES AUCCAYLLE de fs. 44/46, donde señala "que a Pedro Moises Huerta le presté la cantidad de S/. 10,000 soles y que el día 13 de junio de 2018 le dejó en garantía el vehículo auto Yaris, color blanco, de placa de rodaje V7Q-696, y que el día 26 de junio de 2018 decidió ir a SUNARP donde se enteró que este vehículo presentaba una anotación por una deuda por eso decidió comunicarse con Pedro, quién no le contestaba las llamadas por lo que el 01 de julio de 2018 decidio ir a su domicilio ubicado en la Urb. Piedra Santa II etapa Mz. T lote 4 Yanahuara, donde una vecina le indica que diariamente viene a buscar a Pedro por deudas, por lo que el día antes mencionado a las 17:30 se encuentra con Pedro y le increpa el incumplimiento de los pagos del prestamo, que esta consignado en los recibos celebrados, a lo cual Pedro Huertas le dice que si no le gusta el automovil que le dejo debido a los problemas judiciales le puede dar otro, por lo que, en ese momento formula él un nuevo documento de entrega de vehículo de prenda por deuda consignando la placa V9D-442 y en caso de incumplimiento se realizaría la transferencia vehicular, posteriormente recibió una llamada de Pedro, quien le indicó que le entregaría la cantidad de S/2,000.00 soles para que le entregue el vehículo con placa de rodaje V9D-442 porque estaba con orden de captura por robo, a lo cual el declarante no accedió, además refirió que "yo tengo este vehículo desde el 01 de julio de 2018 a la fecha (22 de enero del 2019) y no me explico porque existe una denuncia por robo de vehículo el día 04 de octubre del 2018 ya que estaba en mi poder, ante este hecho decido poner voluntariamente a disposición el vehículo en mención, para que las autoridades investiguen el caso".

j) Copia de Entrega de Vehículo Prenda por Deuda de fs. 52, en el cual se observa "Entrego como garantía mi vehículo KIA marca modelo RIO año 2018 al Sr. Mario Gonzales Auccaylla ... el mismo que sera entregdo en perfectas condiciones en un Km. 2,700 km. Como prenda V9D-442, la garantía sera devuelta el día de mañana 02-07-2018 a las 18:00 horas de haber algún incumplimiento esta unidad pasará hacer transferida notarilamente a precio mercado. Yo Pedro Fernandez con DNI 02447440 me comprometo a cumplir lo Escrito anteriormente como respinsable de este acuerdo, Arequipa 01 de Julio 2018" y al final del documnto de observa una firma y debajo "DNI 02447440".

k) Manuscrito de fs. 53, donde se describe "Auto Garantía. Mediante la presente dejo como garantía auto kia Rio de placa de rodaje V9D-442 color blanco 2018, este a su vez sera entregado el día 07 de Agosto 2018, la garantía es por el monto de dinero prestado en soles S/. 26,550.00 (veintiseis mil quinientos cincuenta nuevos soles). De no cumplir la fecha indicada se hara la transferencia a nombre del Sr. Mario Gonzales (Prestamista) a la cantidad adeudada. Arequipa: 01 de Agosto 2018", al final de dicho documento se observa dos firmas, en la parte superior de la firma de la izquierda se observa "Pedro Huerta F. 02447440" y en la parte superior de la firma de la derecha se observa "Mario Gonzales A. DNI 29250309".

l) Declaración de Cesar Homero de la Borda Tafur de fs. 55/57, en la cual refiere que "ante la desaparición de Pedro Moises Huerta Fernãnde, y el inubicable ya que no vivia en Piedra

BLANCA SUSANA FERRERA GUERRA

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Tra. Fiscal Prov. Penal Com. de Pazariapata

Santa y la presión del dueño del vehículo quien me solicitaba la devolución de su vehículo de placa V9D-442, y con la esperanza de poder recuperar el vehículo es que me vi obligado a formular una denuncia por hurto, pensando que era la única forma de poder lograr la captura del vehículo para su recuperación ya que este señor tiene denuncias por estafas y apropiación ilícita..."

5.2. Oficio N°62104-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, emitido por el Coordinador Registro Judicial Arequipa, donde se informa que la persona de Cesar Homero de la Borda Tafur, SI registra antecedentes penales.

VI.- GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO:

El artículo 23° del Código Penal, califica como **autor** al que realiza por si (autoría directa) o por medio de otro (autoría mediata) el hecho punible, mientras que el título de coautor, quienes lo cometan conjuntamente.

En el presente caso, se incrimina al acusado **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, el hecho de haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial una denuncia falsa por un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido, toda vez, que el día 03 de octubre del 2018 a las 18:00 horas, dicho imputado se constituyó a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (UPROVE) denunciando haber sido víctima de hurto del automóvil de placa de rodaje V9D-442, marca Kia, modelo Rio, de propiedad de Bernabel Willinton Diaz Guzman, cuando lo dejo estacionado en la Av. Industrial a 30 metros del Grifo Santa Ines (carril subida) del distrito de Paucarpata, mientras cotizaba repuestos para maquinaria, sindicando como presunto sospechoso a Pedro Moisés Huerta Fernández, el cual dió inicio a la investigación caso SGF 1506014503-2018-11304-0, tramitada ante esta Fiscalía por la comisión del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de Hurto Agravado, acto que sin embargo nunca se produjo.

En tal sentido corresponde al mismo el título de **AUTOR** del delito **DENUNCIA CALUMNIOSA**, por cuanto la **incriminación revela un dominio del curso de los acontecimientos para lograr su finalidad.**

VII. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD:

Conforme lo sostiene el autor Víctor Prado Saldarriaga, las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuricidad del hecho); o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente). Por tanto la función principal de las circunstancias no es otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido.

En el caso, no concurre ningún elemento negativo del tipo (error de tipo, consentimiento, exculpación social, causa de justificación, legítima defensa, error de prohibición, graves alteraciones en la conciencia, percepción, etc.), que excluya, justifique o evite el reproche de la comisión perpetrado por las imputadas.

VIII.- SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACIÓN, PENA, REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS.

8. 1.- TIPIFICACION

El hecho que se atribuye al acusado, es el delito Contra la Función Jurisdiccional en su modalidad de **DENUNCIA CALUMNIOSA**, previsto en el Art. 402° primer párrafo del Código Penal, que señala:

"El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

BLANCA SESMA TERROBA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Fiscalía Provincial de Arequipa

Cuando la simulación o adulteración directa o indirecta de pruebas o indicios sea efectuada por miembros de la Policía Nacional u otro funcionario o servidor público encargado de la prevención del delito, y que puedan servir de sustento para un proceso penal por tráfico ilícito de drogas, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa."

8.2. CUANTIA DE LA PENA

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los Principios de Lesividad y Proporcionalidad previstas en los artículos IV y VIII respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito; esto es, la naturaleza dolosa del hecho y el daño que ocasionó la conducta delictuosa del acusado a la parte agraviada; además que la sanción penal debe estar acorde no sólo con la culpabilidad del agente, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito imputado.

Asimismo, el Acuerdo Plenario N°1-2008/CJ-116 de las Salas Permanentes de la Corte Suprema de la República, en su fundamento número 7) se precisa *"que el Juez tiene un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar la pena, en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (Art. II, IV, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal), bajo estricta observancia del deber de motivación, y teniendo en cuenta las circunstancias contenidas en los artículos 46, 46-A, 46-B y 46-C del Código Penal"*.

Conforme lo sostiene la doctrina nacional y lo ha establecido la Corte Suprema en diversas sentencias relevantes, debe identificarse **primero la pena básica**, que en el presente caso está determinado por el mínimo y el máximo de la pena conminada para el delito Contra la Función Jurisdiccional en su modalidad de DENUNCIA CALUMNIOSA, previsto en el Art. 402° primer párrafo del Código Penal y que es materia de la acusación, lo cual es **NO MAYOR DE TRES AÑOS Y CON CIENTO OCHENTA A TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS-MULTA**.

Luego se debe identificar **la pena concreta** que deberá hacerse dentro de los límites prefijados en la pena básica, y el máximo considerándose según su naturaleza: las circunstancias comunes o genéricas reguladas principalmente en el Artículo 46° del Código Penal y circunstancias especiales reguladas en la parte especial y en conexión funcional con determinados delitos; y según su efectividad: **circunstancias atenuantes, que señalan un menor desvalor de la conducta ilícita o un menor reproche de culpabilidad**; y circunstancias agravantes, que contienen un mayor reproche de culpabilidad sobre su autor.

Para valorar las circunstancias genéricas prescritas en el Artículo 45° del Código Penal, se debe tener en cuenta:

a) **Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente:** De los antecedentes no se ha determinado que el acusado haya sufrido o sufra de alguna presunta carencia social.

b) **Su cultura y sus costumbres:** Conforme a los datos registrados el acusado cuenta con estudios superiores, lo que no le implica el desconocimiento de las normas sociales, ni mucho menos un desconocimiento mínimo de las reglas sociales y jurídicas en el desarrollo de sus actividades.

c) **Los intereses de la víctima de su familia o de las personas que de ella dependen:** El comportamiento del acusado, dado su grado de cultura y consecuentemente el conocimiento de lo injusto, se han causado un daño y perjuicio, sin siquiera advertirse de parte del mismo la intención de reparar de manera espontánea el daño ocasionado.

La Ley N° 30076, ha incorporado el artículo 45-A, donde se detalla sobre la individualización de la pena, y en el numeral 2° establece: **"toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena."**

Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad.

BLANCA SUSANA VERAORA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
1ra Fiscalía Provincial
Calle 10 de Agosto 1000
Distrito de Miraflores
Lima, Perú

El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas:

1. **Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes.**
2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas:
 - a) **Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurren únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior.**
 - b) Cuando concurren circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio.
 - c) Cuando concurren únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior.
3. Cuando concurren circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera:
 - a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior;
 - b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior; y
 - c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito.

Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

1.- Constituyen *circunstancias de atenuación*, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible las siguientes: a) La carencia de antecedentes penales; b) ..."

2.- Constituyen *circunstancias agravantes*, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; b) ..."

En el presente caso no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes por lo que, corresponde efectuar la petición de la imposición de la pena, dentro del margen del tercio inferior, conforme a lo prescrito en el inciso a) del numeral 2 del artículo 45-A del Código Penal; y encontrándose la conducta del acusado dentro del primer párrafo del artículo 402° del Código Penal, se procede al desarrollo de la individualización de la pena de manera gráfica:

DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA - CONTRA LA FUNCION JURISDICCIONAL en su modalidad de DENUNCIA CALUMNIOSA, Artículo 402° primer párrafo del Código Penal La pena es: "no mayor de tres años"		
Pena mínima (dos días)	↔	Pena máxima (tres años)
02 año – 01 año (Tercio Inferior)	01 año – 02 años (Tercio Intermedio)	02 años – 03 años (Tercio Superior)

La **PENA QUE SE PROPONE IMPONER** al acusado **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, es de **01 AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, así como **200 DIAS MULTA** a favor del **ESTADO**; debiéndose indicar que la pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

IX. EL MONTO DE LA REPARACION CIVIL, LOS BIENES EMBARGADOS O INCAUTADOS AL ACUSADO, O TERCERO CIVIL, QUE GARANTIZAN SU PAGO Y LA PERSONA A QUIEN CORRESPONDA PERCIBIRLO

En mérito a lo señalado en los fundamentos del Acuerdo Plenario N°05/2011-CJ/116, y estando al presente requerimiento debe precisarse al respecto:

RELACIONA CON: CAS. TERCERA CATEGORIA
 Escalafón Judicial - Promoción
 Tm. Fiscalía Ppx Penal Corp. de Pucallpa
 Distrito Fiscal de Arequipa

SL 1550.00

En el derecho penal las conductas sancionadas se encuentran plenamente tipificadas por la ley; y conforme al artículo 11° del Código Procesal Penal, que establece que el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito, siempre y cuando el perjudicado no se haya constituido en actor civil; de autos se tiene que la parte agraviada ESTADO – PODER JUDICIAL, representado por su Procurador Público, hasta este momento no se han constituido en actor civil, por lo cual se encuentra legitimado este Despacho Fiscal para ejercer la acción civil, y conforme a lo señalado en el fundamento 15) del Acuerdo Plenario antes referido se tiene que, "si bien se está frente a una pretensión de índole resarcitoria, la Ley procesal exige que el perjudicado - que ejerce su derecho de acción civil- precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Con esta medida la norma procesal persigue dar solución a un problema sumamente grave en nuestro ordenamiento judicial pues con el transcurrir del tiempo la práctica tribunalicia revela que los montos dinerarios que se establecen por concepto de reparación civil en sede penal son relativamente menores y no guardan relación ni proporción con el hecho que forma parte del objeto procesal". Y considerando lo previsto por el Art. 93° del C.P., donde se señala que la reparación civil comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. **La indemnización de los daños y perjuicios.**

Asimismo, por daño debe entenderse la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la expresión. Una concepción meramente formal de los derechos subjetivos. No nos permite comprender el problema de los derechos en su esencia social, y tampoco nos permitirá entender que *la responsabilidad civil, antes que todo, es un sistema de solución de conflictos sociales, de conflictos o problemas entre individuos que se desenvuelven en un determinado ambiente social, en un momento histórico y político determinado.*

Ahora bien, respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que el mismo puede ser de dos categorías: **a) Daño patrimonial:** i) Daño emergente.- Pérdida patrimonial efectivamente sufrida; ii) Lucro cesante.- Ganancia frustrada o dejada de percibir. **b) Daño extrapatrimonial:** i) Daño moral; Daño a la persona.- Existe en la doctrina moderna una tendencia cada vez más fuerte a hablar únicamente del daño a la persona, dado lo gaseoso y relativo del concepto del daño moral. Evidentemente, ambas categorías del daño patrimonial y extrapatrimonial están referidas tanto a la responsabilidad civil contractual como extracontractual.

En el caso concreto se aprecia que el daño causado a la parte agraviada es de carácter extrapatrimonial, *porque se ha afectado la administración de justicia.* Asimismo es imputable al acusado, el hecho que con su conducta ha ocasionado un **daño moral**, lo que resulta ser reprochable con una indemnización por los perjuicios ocasionados a la parte agraviada, más que de la realidad económica, debiendo tenerse que dicho monto deberá ser de S/1,000.00 soles, esto de manera racional y proporcional.

Por tales consideraciones, este Despacho Fiscal solicita que:

El acusado **Cesar Homero de la Borda Tafur**, abone por concepto de **REPARACION CIVIL** suma de **S/1,000.00 (MIL SOLES)** a favor de la agraviada, Poder Judicial representado por su Procurador Público.

SOLICITUD ALTERNATIVA DE TIPIFICACIÓN:

Ninguna.

XI. RELACION DE BIENES QUE GARANTIZAN LA REPARACION CIVIL

En autos no obra oficio alguno que informe que el acusado cuente con bienes muebles y/o inmuebles inscritos a su favor.

XII. LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS PARA SU ACTUACION EN AUDIENCIA

a) Prueba Testimonial y Examen de Peritos:

BLANCA INES TESSERA CUTIÑEZ
Fiscal Adjunto Provincial
Procuraduría General del Poder Judicial
Distrito Fiscal de Arequipa

Nº	Condición	Nombre y Apellido	Domicilio	Extremos de la declaración – utilidad y pertinencia
1	Testigo	S PNP WILDER GOMEZ MENDOZA	Domicilio Laboral: XI Región Policial de Arequipa	FINALIDAD: Testificar sobre la recepción de la denuncia verbal presentada por Cesar Homero de la Borda Tafur con fecha 04 de octubre del 2018, con relación al hurto del vehículo de placa de rodaje V9D-442, así como de las diligencias realizadas a nivel policial con motivo de la denuncia falsa y del informe policial elaborado al respecto. UTILIDAD: probará el actuar doloso del imputado al denunciar un hecho falso que nunca se produjo y con el cual se dio inicio a diligencias preliminares. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
2	Testigo	SOPNP ENRIQUE MINAYA MENDOZA	Domicilio laboral: XI Región Policial de Arequipa	Aporte probatorio: Testificará sobre los hechos antecedentes, corroborará el inicio de las diligencias preliminares con la diligencia de inspección técnico policial realizada con motivo de la denuncia falsa presentada por el imputado. Dicha prueba es <i>pertinente</i> , por que sustenta el hecho relacionado directamente con el objeto del proceso; es <i>conducente</i> , porque este medio probatorio no se encuentra prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho; y es <i>útil</i> porque contribuye a conocer lo que es objeto de prueba, lo que también coadyuvará a descubrir la verdad, alcanzar probabilidad o certeza, debe ser admitido ya que creara convicción del juzgador.
3	Testigo	BERNABEL WILLINTO N DIAZ GUZMAN	Domicilio real: PPJJ, Villa El Sol Mz. F, lote 10, Alto Selva Alegre, Arequipa.	Aporte probatorio: Declarará sobre los hechos antecedentes que son materia de acusación, así como de la noticia dada por el imputado de haber sido víctima de hurto del vehículo de su propiedad y que posteriormente se enteró que tal acto no ha sucedido. Dicha prueba es <i>pertinente</i> , por que sustenta el hecho relacionado directamente con el objeto del proceso; es <i>conducente</i> , porque este medio probatorio no se encuentra prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho; y es <i>útil</i> porque contribuye a conocer lo que es objeto de prueba, lo que también coadyuvará a descubrir la verdad, alcanzar probabilidad o certeza, debe ser admitido ya que creara convicción del juzgador.
4	Testigo	MARIO GONZALES AUCCAYLL E	Domicilio real: Prolongación Goyeneche Mz. A, lote 1, Miraflores, Arequipa.	Aporte probatorio: Declarará sobre los hechos que son materia de acusación, corroborando la falsedad de la denuncia presentada por el ahora imputado, toda vez, que a la fecha de la denuncia dicha persona tenía en su poder el vehículo del cual refirió haber sido víctima de hurto y al haberse enterado de la orden de captura del vehículo puso a disposición de la policía el mismo. Dicha prueba es <i>pertinente</i> , por que sustenta el hecho relacionado directamente con el objeto del proceso; es <i>conducente</i> , porque este medio probatorio no se encuentra prohibido en determinada vía procedimental o prohibido para verificar un determinado hecho; y es <i>útil</i> porque contribuye a conocer lo que es objeto de prueba, lo que también coadyuvará a descubrir la verdad, alcanzar probabilidad o certeza, debe ser admitido ya que creara convicción del juzgador.

BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Promotoría
Fiscalía Penal (Corp. de Paucapata)
Dentro Pisos de Arequipa

b) Prueba Documental:

Número	Descripción	Utilidad, Pertinencia
1	Copia certificada de la carpeta fiscal N°503-2018-11304-0, que contiene los actuados de la denunciada presentada por Cesar Homero de la Borda Tafur por el delito de hurto agravado, entre ellos: a) Acta de Recepción de Denuncia Verbal de fecha 04 de octubre del 2018. b) Acta de Recepción de Vehículo de fecha 22 de enero de 2019. c) Disposiciones Fiscales N°01 y 02.	Es útil ya que con dichas documentales, se acreditará el actuar doloso del acusado, quien procedió a denunciar el hurto del vehículo automóvil, marca kia, modelo rio, año 2018, color blanco, de placa de rodaje N°V9D-442, el cual se encontraba en posesión de Mario Gonzales Auccaylle con motivo de un préstamo, acto que resultó ser falso y que ha dado merito a que se realice una investigación preliminar con participación del Ministerio Público. Es pertinente porque tiene relación con el hecho que es materia de acusación. Es conducente porque resulta idónea, no se encuentra prohibida por ley y la parte imputada no ha cuestionado la misma.

c) Prueba material:

No se cuenta.

XII. MEDIDAS DE COERCION SUBSISTENTES DICTADAS DURANTE LA INVESTIGACION PREPARATORIA.-

Que, teniendo en cuenta lo previsto por el Art. 286° del C.P.P. y lo hechos materia de la presente acusación, al no darse los presupuestos que exige el Art. 268° del C.P.P., este Despacho Fiscal solicita se dicte mandato de COMPARECENCIA SIMPLE al acusado CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR.

POR LO EXPUESTO:

A usted señor Juez, solicito tener por formulado el presente requerimiento de Acusación Directa con arreglo a ley, debiendo darle el trámite que corresponda.

Primer Otrosí: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado:

- **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, identificado con DNI 40742998, quien tiene fijado su **domicilio real** en Urb. Tahuaycani Mz. 1, lote 3, distrito de Sachaca, Arequipa, Arequipa; con teléfono celular 916198036. NO ha señalado domicilio procesal ni ha designado abogado defensor.

Debiendo en este extremo el Juzgado proceder conforme a lo previsto por el Art. 80° del C.P.P., nombrar y designar un Abogado Defensor Público para la defensa del imputado.

Agraviado:

- **EL ESTADO – PODER JUDICIAL**, representada por el Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, quien tiene como **domicilio legal** en Av. Petit Thouars N°3943 – San Isidro, Lima, Lima.

Segundo Otrosí: Solicito al Juzgado, se tenga en cuenta, que se cumple con anexar los elementos de convicción.

/bstg

Arequipa, 07 de febrero del 2020.


BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

1º JUZ. PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA
EXPEDIENTE : 04470-2020-11-0401-JR-PE-02
JUEZ : MARQUEZ VALENCIA DE LOAIZA JESSICA
ZULEIKA
ESPECIALISTA : RICHARD TALAVERA SALAS
MINISTERIO PUBLICO : PRIMERA FISCALIA DE PAUCARPATA ,
IMPUTADO : DE LA BORDA TAFUR, CESAR HOMERO
DELITO : DENUNCIA CALUMNIOSA.
AGRAVIADO : EL PODER JUDIAL

Resolución N° 04

En la ciudad de Arequipa a los veintitrés días de julio del año dos mil veintiuno, el Primer Juzgado Penal Unipersonal Penal del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, a cargo de la Señora Juez *Jessica Zuleika Marquez Valencia De Loaiza*; luego de haber dirigido y valorado el juicio oral y público; seguido en contra de **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, por el delito Contra la Administración de Justicia contra la función jurisdiccional en su modalidad de **DENUNCIA CALUMNIOSA** previsto en el artículo 402 primer párrafo del Código Penal, en agravio del **ESTADO** representado por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial; ejerciendo la potestad de administrar justicia a nombre del pueblo, se emite la siguiente:

SENTENCIA N° - 2021

I.- PARTE EXPOSITIVA:

Primero.- Identificación del Proceso:

La audiencia se ha desarrollado ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal, en el proceso número **4470-2020-11-0401-JR-PE-01**, seguido en contra de **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, por delito Contra la Administración de Justicia contra la función jurisdiccional en su modalidad de Denuncia Calumniosa previsto en el artículo 402 primer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado representado por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial.

Segundo.- Identificación del Acusado:

Se juzga a:

CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR, peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad Nro. 40743989, fecha de nacimiento: cinco de julio de mil novecientos setenta y ocho; lugar de nacimiento: distrito, provincia y departamento de Arequipa; estado civil: soltero; grado de instrucción: Superior 3er año; nombre de los padres: Felipe y Lucila; con domicilio real en: Urbanización Tahuaycani I-3, distrito de Sachaca, provincia y departamento de Arequipa.

Tercero.- Pretensión del Ministerio Público:

En el marco de la requisitoria escrita, el representante del Ministerio Público presentó en juicio oral sus respectivos alegatos en los términos siguientes:

3.1. Enunciación de los Hechos y Circunstancias Objeto de la Acusación:

Circunstancias precedentes

Con fecha 04 de octubre del 2018, a las 15:00 horas, el ahora imputado Cesar Homero De La Borda Tafur se constituyó a la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículo (UPROVE), denunciando haber sido víctima de hurto del automóvil de placa de rodaje V9D-442, marca Kia, modelo Rio, de propiedad de Bernabel Willinton Diaz Guzmán, en circunstancias que el día 03 de octubre del 2018, a las 18:00 horas aproximadamente, dejó estacionado en el Av. Industrial a 30 metros del Grifo Santa Inés (carril subida) del distrito de Paucarpata , mientras cotizaba repuestos para maquinaria y al retornar después de media hora se dio con la sorpresa que dicho vehículo no se encontraba en el mismo lugar donde lo dejo estacionado; que no denunció al momento del hecho por cuanto requería apersonarse con el propietario y que tiene sospecha de la persona de Pedro Moisés Huerta Fernández, ya que hace tres días del hecho al finalizar el contrato de alquiler indicó, que se le había perdido la llave del contacto de dicho vehículo y que al momento de recoger el vehículo amenazó que algo le iba a suceder. Así, se dio inicio a la investigación, caso SGF 1506014503-2018-11304-0, tramitada ante esta Fiscalía por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en su modalidad de Hurto Agravado, en agravio de Bernabel Willinton Diaz Guzmán.

Circunstancias concomitantes

Que, al efectuarse la investigación del caso en la referida carpeta fiscal, se ha logrado establecer que el vehículo automóvil móvil de placa de rodaje V9D-442, marca Kia, modelo Rio, de propiedad de Bernabel Willinton Diaz Guzmán, nunca fue sustraído y que la denuncia realizada por el ahora imputado fue falsa, toda vez, que con fecha 25 de enero del 2019, Cesar Homero De La Borda Tafur al momento de rendir su ampliación de declaración con presencia de su abogada defensora señaló “ante la desaparición de Pedro Moisés Huerta Fernández, y estar inubicable ya que no vivía en Piedra Santa y la presión del dueño del vehículo, quien me solicitaba la devolución de su vehículo de placa V9D-442, y con la esperanza de poder recuperar el vehículo es que me vi obligado a formular una denuncia por hurto, pensando que era la única forma de poder lograr la captura del vehículo para su recuperación, ya que este señor tiene denuncias por estafas y apropiación ilícita de vehículos y del cual tenía pleno conocimiento Bernabel Willinton Diaz Guzmán, propietario del vehículo, yendo a la DIVINCRI para constatar todas sus denuncias y quien procedió lo acompañó hacer la denuncia con la finalidad de poder ubicar y recuperar el vehículo ...”, denunciando así dicho imputado a la autoridad policial un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido.

Circunstancias posteriores

Por lo que, mediante Disposición Fiscal N° 02 de fecha 12 de abril del 2019, este Despacho Fiscal además de declarar “que no procede formalizar y continúan con la investigación preparatoria por lo hechos denunciados contra Pedro Moisés Huerta

Fernández, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio en su modalidad de Hurto Agravado, en agravio de Cesar Homero De La Borda Tafur y Bernabel Willinton Diaz Guzmán”, se dispone extraerse copias certificadas a efecto que se proceda conforme a ley por la denuncia falsa presentada por el ahora imputado, ello al haber puesto en conocimiento de la autoridad una denuncia a sabiendas que no se ha cometido y que ha dado inicio a que se realice una investigación preliminar con participación del Ministerio Público.

3.2. Calificación Jurídico Penal: La Fiscalía considera que los hechos descritos materia de acusación se encuadran en el tipo penal de delito Contra la Administración de Justicia contra la función jurisdiccional en su modalidad de **DENUNCIA CALUMNIOSA** previsto en el artículo 402 primer párrafo del Código Penal, delito a título de Autor.

3.3. Pretensión Penal: El Ministerio Público ha solicitado que se imponga al imputado **UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y DOSCIENTOS DÍAS MULTA**.

3.4. Pretensión Civil: El Ministerio Público ha solicitado el pago de una **REPARACIÓN CIVIL** por la suma de S/. 1,000.00 (**MIL CON 00/100 SOLES**).

Cuarto. - Posición de la Defensa del Acusado:

En la audiencia de ley, **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, ha señalado que acepta los cargos imputados y la reparación civil.

Quinto.- Itinerario del Proceso:

Al inicio del juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos, y al preguntársele si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, previa consulta con su abogado defensor, respondió en sentido positivo, y se declaró confeso en su totalidad de los cargos que le imputa el Ministerio Público. Suspendida la sesión por breves minutos, para que la defensa del acusado y el Fiscal puedan llegar a un acuerdo, en cuanto a la pena y la reparación civil, el acuerdo se materializó.

II.- PARTE CONSIDERATIVA:

Primero.- Alcances de la Conclusión Anticipada:

El artículo 372° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencias vinculantes, tales como: el *Acuerdo Plenario No. 05-2008/CJ-116* del dieciocho de julio del dos mil ocho; la *Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 1766-2004/Callao* del veintiuno de setiembre del dos mil cuatro; y, la *Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 2206-2005/Ayacucho*, del doce de julio del dos mil cinco. La institución de la “conformidad” se presenta cuando el acusado, por si, o a través de su abogado solicita previamente conferenciar con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena, lo que importa una doble garantía, que implica una renuncia a la actuación de pruebas en juicio público, constituyendo un acto de disposición del propio procesado, conviniendo en la expedición de una sentencia condenatoria en su contra.

Segundo.- Posición del Acusado:

El acusado, en audiencia, al expresar su "conformidad", consultó con su abogado defensor y ha actuado con plena libertad voluntad y racionalidad, sin limitaciones de sus capacidades intelectivas, e informado de sus derechos por el Juzgado y su defensa, de la acusación que acepta, deviniendo con su reconocimiento en una declaración judicial de culpabilidad, con la consiguiente imposición de una sanción penal y reparación civil, por lo que, este Juzgado no puede mencionar, interpretar y valorar actos de investigación o de prueba pre constituida alguna, desde que el acusado con su "conformidad", renunció expresamente a su derecho a la presunción de inocencia, como a la exigencia de prueba de cargo de la acusación y a un juicio contradictorio; por lo que, los fundamentos de hecho o juicio histórico de la sentencia, no se forman como resultado de valoración de la prueba, sino que le vienen impuestos al Juzgado por la acusación y la defensa, a través de un acto de allanamiento de esta última, que son vinculantes al Juzgado y a las partes; por lo que, en este orden de ideas, el Juzgado no puede agregar ni reducir los hechos o circunstancias que han sido imputados por la Fiscal, y aceptados por el acusado y su abogado defensor, en audiencia; ya que, ello implicaría revisar y valorar actos de aportación de hechos, que son excluidos por la propia naturaleza de la "conformidad procesal".

Tercero.- Actuación del Juzgador:

No obstante, la presencia del Juzgador, no es pasiva, para efectos de la homologación de la "conformidad"; ya que, existe cierto margen de valoración que el Juez debe ejercer soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación -vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico (vinculatio facti)-, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

Cuarto.- Calificación Jurídica:

4.1. RESPECTO DEL DELITO DE DENUNCIA CALUMNIOSA

Conforme a la acusación fiscal, al acusado se le imputa, el delito de Denuncia Calumniosa previsto en el artículo 402 primer párrafo del Código Penal, que prevé:

Artículo 402.- Denuncia Calumniosa.

El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

4.2. COMPONENTES TÍPICOS DE CONFIGURACIÓN

4.1.1. Bien jurídico: El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, por cuanto conviene impedir que todo el aparato estatal encargado de la persecución del delito, sea activado ante un hecho delictivo ficticio, simulado o armado.

4.1.2 Sujeto Activo: El sujeto activo o autor puede ser cualquier persona.

4.1.3. Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo o víctima del delito siempre será el Estado, ya que es el titular del bien jurídico.

4.1.4. La conducta típica: Se configura cuando el agente denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas que no se ha cometido. Denunciar implica poner en conocimiento de la autoridad la comisión de un hecho punible, y ello se materializa en una denuncia, esto es, en una noticia verbal o escrita que se da a la autoridad competente, de haberse cometido alguna falta o delito. La finalidad de la denuncia es que la autoridad practique la investigación pertinente para demostrar la veracidad de la imputación.

4.1.5. Tipicidad subjetiva. Se trata de un delito netamente doloso, no cabe la comisión por culpa.

Quinto.- Proceso de Subsunción:

5.1. Juicio de tipicidad: La conducta del acusado se adecua, objetiva y subjetivamente en el tipo penal antes referidos; por cuanto tal como han sido expuestos los cargos por el Ministerio Público, son que el acusado Cesar Homero De La Borda Tafur al momento de rendir su ampliación de declaración con presencia de su abogada defensora señaló "ante la desaparición de Pedro Moisés Huerta Fernández, y estar inubicable ya que no vivía en Piedra Santa y la presión del dueño del vehículo, quien me solicitaba la devolución de su vehículo de placa V9D-442, y con la esperanza de poder recuperar el vehículo es que me vi obligado a formular una denuncia por hurto, pensando que era la única forma de poder lograr la captura del vehículo para su recuperación, ya que este señor tiene denuncias por estafas y apropiación ilícita de vehículos y del cual tenía pleno conocimiento Bernabel Willington Diaz Guzmán, propietario del vehículo, yendo a la DIVINCRI para constatar todas sus denuncias y quien procedió lo acompañó hacer la denuncia con la finalidad de poder ubicar y recuperar el vehículo ...", denunciando así dicho imputado a la autoridad policial un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido; teniéndose en cuenta para ello el reconocimiento efectuado de manera expresa, libre y voluntaria por el acusado, en audiencia, al aceptar la responsabilidad de los hechos materia de imputación; acreditándose la comisión del presente delito y la responsabilidad penal del acusado.

5.2. Juicio de antijuridicidad y culpabilidad, no se ha alegado, causa que justifique el actuar típico del acusado y tampoco se ha señalado causa que excluya su culpabilidad.

SEXTO.- Determinación de la Pena:

a) La Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo sobre la pena, en este caso han propuesto la reserva del fallo condenatorio por el plazo de **NUEVE MESES** siendo que el procesado deberá observar las siguientes reglas de conducta:

- a) Prohibición de ausentarse del lugar de su residencia y de variar de domicilio son previa autorización del juzgado.
- b) Deberá comparecer al Juzgado de ejecución en forma personal y obligatoria, el primer día hábil de cada dos meses, a fin de informar y justificar sus actividades, el mismo que podrá realizar de manera remota estando a los aplicativos que ha

autorizado la Corte Superior de Justicia de Arequipa para realizarlo de manera virtual.

c) No cometer nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza.

d) Reparar el daño ocasionado con el pago íntegro de la reparación civil.

Acordaron en caso incumpla cualquiera de las reglas de conducta descritas previo requerimiento se procederá a revocar la reserva de fallo impuesta, caso en el cual se le impondrá al procesado **ONCE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA** en la forma prevista en el artículo 65 del Código Penal, disponiendo su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine el INPE así como el pago de **DOSCIENTOS DIAS MULTA** el que asciende a la suma de S/. 800.00 soles.

b) Para el caso de autos, se toma en cuenta, conforme a los fundamentos de acuerdo de pena, se ha cumplido con disminuir el séptimo de la pena, conforme así lo señala el Acuerdo Plenario N° 05-2008, que trata la figura de la Conclusión Anticipada de Juicio, adicionalmente, se ha tomado en cuenta criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo a las calidades personales del acusado, por lo que la pena concreta se ubica en **ONCE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, y la copenalidad de doscientos días multa que calculado conforme al ingreso mensual del acusado asciende a la suma de S/800.00 (ochocientos con 00/100 soles) la misma que debe ser aprobada por la juzgadora; máxime que no se ha sustentado que existan elementos especiales de agravación de pena conforme a la modificatorias de los artículos 45° y 46° del Código Penal, conforme a la Ley N°30076, publicada el 16 agosto de 2013, la cual será impuesta en caso de incumpla con las reglas de conducta del régimen del periodo de prueba.

c) *Respecto a la aplicación de la Reserva de Fallo:* El artículo 62° del Código Penal, habilita al juzgador la facultad de disponer la reserva del fallo condenatorio, para lo cual se debe cumplir los requisitos que establece dicha norma, así como lo establecido mediante Jurisprudencia Vinculante de la Corte Suprema de la Justicia de la República en el Recurso de Nulidad N° 3332-2004-Junin de fecha 27 de mayo del 2005, en su considerando Quinto ha establecido que: *“En relación a la aplicación de la reserva de fallo regulada en los artículos 62 a 67 del Código Penal, es importante precisar que: a) Es una medida alternativa a la pena privativa de libertad de uso facultativo para el Juez que se caracteriza fundamentalmente por reservar la imposición de la condena y el señalamiento de la pena concreta para el sentenciado culpable; b) Que, en consecuencia tal medida consisten en declarar en la sentencia la culpabilidad del procesado, pero sin emitir la consiguiente condena y pena. Estos últimos extremos se reservan y se condicionan su extinción o pronunciamiento a la culminación exitosa o no de un periodo de prueba, dentro del cual el sentenciado se abstendrá de cometer nuevo delito y cumplir la reglas de conducta que le señale el Juez; c) Que la reserva de fallo procede cuando concurren estos presupuestos: i) Que, el delito esté sancionado con pena conminada no superior a tres años de pena privativa de libertad o con multa; o con prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres que no exceden a noventa jornadas semanales; ii) Que, el Juez en atención a las circunstancias del hecho y la personalidad del agente, emita un pronóstico favorable sobre la conducta futura del imputado; iii) Es de señalar que la reserva de fallo condenatorio también es aplicable en caso de penas conjuntas o*

alternativas, siempre que tales sanciones se adecuen a los marcos cualitativos y cuantitativos mencionados”, por lo que se realizará el análisis respectivo dentro de dicho contexto para verificar el cumplimiento de los presupuestos de la aplicación de reserva de fallo condenatorio:

i)Respecto al primer requisito que, el delito esté sancionado con pena conminada no superior a tres años de pena privativa de libertad: Que, en el presente caso el delito imputado es el delito de *Denuncia Calumniosa*, previsto en el artículo 402° del Código Penal, *está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años y con 180 a 365 días multa;* cumpliéndose con el requisito exigido en el artículo 62°, primer párrafo, inciso 01 del Código Penal.

ii)Respecto al segundo requisito, que, el Juez en atención a las circunstancias del hecho y la personalidad del agente, emita un pronóstico favorable sobre la conducta futura del imputado: Se tiene en cuenta en el presente caso que el acusado es una persona carente de antecedentes penales, lo cual ha sido sustentado por el Ministerio Público, asimismo se ha establecido un cronograma para el pago de la reparación civil; empero, debe tenerse presente que el mismo ha reconocido su ilícito proceder; máxime si se tiene en cuenta que para efectos de graduación de pena, es menester precisar la función preventiva, protectora y resocializadora de la pena, y en virtud del principio de proporcionalidad y racionalidad de la pena, conforme a lo dispuesto en los numerales VII, IX y X del Título preliminar del Código Penal, por lo que atendiendo a dichas circunstancias y el ánimo de enmienda del procesado frente a los hechos, y las condiciones descritas, lo cual hace inferir a la Juzgadora un pronóstico favorable de la conducta del mismo, para su resocialización con el cumplimiento de reglas de conducta.

*iii) Todas esas razones, conllevan a convenir que corresponde disponer la Reserva del Fallo Condenatorio por el plazo de **ONCE MESES** como manera de posibilitar con el cumplimiento de las reglas de conducta la rehabilitación del procesado; pues la reserva del fallo condenatorio deberá supeditarse al cumplimiento de reglas de conducta, precisándose que en caso de incumplimiento de cualquiera de ellas hará efectiva la pena acordada de **ONCE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.***

SETIMO. -Fijación de la Reparación Civil:

Para fijar la reparación civil se tiene en cuenta lo prescrito por el artículo 92 del Código Penal, en el sentido que todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así, que en aquellos casos en los que la conducta del agente produce un daño, como en este caso el detrimento del estado de la salud del agraviado; se debe regir el principio del daño causado, por cuya razón la reparación civil debe de alguna manera tender a compensar dicho agravio, fijándose prudencialmente de acuerdo a la magnitud del mismo. Así como estando a lo establecido en el Acuerdo Plenario N° 06-2006/CJ-116 de fecha 13 de Octubre del 2006 en el sentido que: *“el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede ocasionar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales”,* así como lo establecido en el artículo 93° y 101° del Código Penal. La defensa y la Fiscalía, han acordado por concepto de reparación civil

la suma de S/. 800.00 (OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) a favor de la parte agraviada, teniendo presente que ya existe un pago de S/. 250.00 soles, el saldo será pagado en dos cuotas la primera por la suma de S/. 300.00 soles hacer pagada hasta el último día hábil del mes de agosto y la segunda de S/. 250.00 soles que será pagada hasta el último día hábil del mes de septiembre del presente año.

OCTAVO.- Fundamentación de las Costas:

El artículo 497.5° del Código Procesal Penal, establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz. En el presente caso, al haber concluido el proceso por "conformidad"; no procede la imposición de costas.

III.- PARTE RESOLUTIVA.-

PRIMERO: APRUEBO mediante la presente sentencia de conformidad, los acuerdos celebrados entre el acusado, debidamente asesorado por su defensa (de elección o defensa pública) y el Ministerio Público durante el juicio oral; en consecuencia:

SEGUNDO.- DECLARO: a **CESAR HOMERO DE LA BORDA TAFUR**, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, como **AUTOR** del delito Contra la Administración de Justicia contra la función jurisdiccional en su modalidad de **DENUNCIA CALUMNIOSA** previsto en el artículo 402 primer párrafo del Código Penal, en agravio del **ESTADO**, representado por el Procurador Público del Poder Judicial encargado de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial.

TERCERO: SE APRUEBA LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO en favor de del sentenciado por el plazo de **NUEVE MESES** en cuya virtud el juzgado se abstiene de dictar la pena concreta en dicho plazo, sujeto a la observancia de las siguientes reglas de conducta: **A)** Prohibición de ausentarse del lugar de su residencia y de variar de domicilio son previa autorización del juzgado. **B)** Deberá comparecer al Juzgado de ejecución en forma personal y obligatoria, el primer día hábil de cada dos meses, a fin de informar y justificar sus actividades, el mismo que podrá realizar de manera remota estando a los aplicativos que ha autorizado la Corte Superior de Justicia de Arequipa para realizarlo de manera virtual. **C)** No cometer nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza. **D)** Reparar el daño ocasionado con el pago íntegro de la reparación civil.

Precisar que en caso incumpla cualquiera de las reglas de conducta descritas, previo requerimiento se procederá a revocar la reserva de fallo impuesta, caso en el cual se le impondrá al procesado **ONCE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA** en la forma prevista en el artículo 65° del Código Penal, disponiendo su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, así como el pago de **DOSCIENTOS DIAS MULTA** el que asciende a la suma de S/. 800.00 soles.

TERCERO: FIJO: Por concepto de reparación civil la suma de S/. 800.00 (OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) a favor de la parte agraviada, teniendo presente que ya existe un pago de S/. 250.00 soles, el saldo será pagado en dos cuotas: la primera por la suma de S/. 300.00 soles a hacer pagada hasta el último día hábil del

mes de agosto y la segunda de S/. 250.00 soles que será pagada hasta el último día hábil del mes de septiembre del presente año.

CUARTO.- DISPONE: Que, no corresponde fijar costas por tratarse de un procedimiento de conformidad.

QUINTO: MANDO: La suspensión de su inscripción en el Registro Judicial.

ORDENO: Se curse la nota de atención al registro especial a cargo del Poder Judicial para la anotación respectiva, como lo establece el artículo 63º, segundo párrafo del Código Penal.

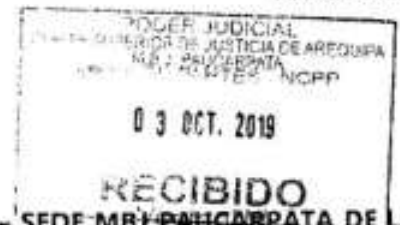
Y, por esta sentencia, así la pronuncio, mando y firmo en audiencia pública.
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Caso N° : 1506014504-2019-3012-0
Fiscal Responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez
(Casilla Electrónica N°96017)



SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – SEDE MB-PAUCARPATA DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio
procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa,
Paucarpata, con **casilla electrónica N° 96017**, ante Ud. respetuosamente digo:

1. REQUERIMIENTO:

Al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido
en los arts. 446° literal 4) y 336° literal 2 del Código Procesal Penal, **FORMULO REQUERIMIENTO DE
PROCESO INMEDIATO** contra:

JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO, por el delito **Contra la Familia - Omisión de la Asistencia Familiar**,
en la modalidad de **Incumplimiento de Obligación Alimentaria**, en agravio de **MILEYNNE
CONCEPCIÓN LÓPEZ QUISPE** debidamente representada por su madre **Paulusia Trinidad Quispe
Gutiérrez**, en los siguientes términos:

2. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO

NOMBRE Y APELLIDOS	: JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	: 41928957
FECHA DE NACIMIENTO	: 12/06/1983
EDAD	: 36 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO	: Morococha – Yauli - Junín
NOMBRE DEL PADRE	: Gregorio
NOMBRE DE LA MADRE	: Leonarda
ESTATURA	: 1.68 m
SEXO	: Masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN	: Secundaria completa
ESTADO CIVIL	: Soltero
OCUPACIÓN	: Se desconoce
DOMICILIO REAL	: Calle Amazonas N° 305 Urb. Jorge Chávez distrito de Paucarpata
TELEFONO	: 973501357
DOMICILIO PROCESAL	: Cooperativa Guardia Civil O-12 Of. A distrito de Paucarpata
ABOGADO DEFENSOR	: Yurisam Milagros Parada Cochón

3. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE AGRAVIADA:

- **MILEYNNE CONCEPCIÓN LÓPEZ QUISPE** debidamente representada por su madre **Paulusia
Trinidad Quispe Gutiérrez** con DNI 43013485, con **domicilio real** en Urb. Miguel Grau Mz. 52 Lt. 9
Zona B distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa.

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
Tercer Despacho
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

4. DE LOS PRESUPUESTOS DEL PROCESO INMEDIATO:

4.1. Teniendo en cuenta que el proceso inmediato es un proceso especial, que busca la simplificación y celeridad en la sustanciación del procesos penales, por medio del cual de la fase de diligencias preliminares se pasa directamente al juicio oral, suprimiendo las etapas de investigación preparatoria y la etapa intermedia de un proceso común, el mismo que procede en los supuestos de flagrancia delictiva, confesión sincera del imputado; cuando los elementos de convicción recabados en el curso de las diligencias preliminares evidencien la materialización del ilícito penal y la participación del imputado, así como en la comisión de los Delitos de Omisión de Asistencia Familiar y del Delito de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, conforme lo establece el artículo 446° del Código Procesal Penal.

4.2. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que, en el presente caso, se investiga la comisión del Delito de Omisión de Asistencia Familiar, delito respecto del cual el inciso 4) del artículo 446° del Código Procesal Penal, establece *"4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de Omisión de Asistencia Familiar y los de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción"*, y estando a la imperatividad de la norma, corresponde en el caso en autos incoar el presente proceso inmediato.

5. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN.

- Se tiene de los actuados, que por ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del MBJ de Paucarpata se tramita el **expediente de Ejecución de Acta de Conciliación N° 00196-2010-0-0412-JP-FC-03**, seguido por **PAULUSIA TRINIDAD QUISPE GUTIÉRREZ**, en contra de **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**.

Que, mediante Resolución N° 05 de fecha 26 de julio del 2010, se dispuso llevar adelante la ejecución hasta que el ahora imputado Jesús Valentín López Erolito cumpla con pagar la pensión mensual de alimentos acordada en el Acta de Conciliación N° 33-2009 celebrada ante el Centro de Conciliación Futuro de la Justicia de fecha 19 de noviembre del 2009, fijada en la suma de S/. 150.00 Soles mensuales a favor de su menor hija Mileynne Concepción López Quispe.

Pero es el caso, que el imputado no ha cumplido con tal obligación, de tal forma que se practicó la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al periodo comprendido desde el **01 de junio del 2013 al 30 de abril del 2016**, adeudando la suma de **S/. 7212.22 soles** (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N° 47, de fecha 08 de agosto del 2016.

Hecho que conllevó que posteriormente dicha liquidación fuera APROBADA mediante Resolución N° 48 de fecha 25 de julio del 2017 y REQUERIDO al imputado para su pago en el plazo de tres días bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones en caso de incumplimiento, mediante Resolución N° 50, de fecha 11 de junio del 2018, la misma que le fue notificada al ahora imputado en su domicilio real el 19 de junio del 2018, mediante notificación N° 48517-2018-JP-FC.

Que, ante el incumplimiento del imputado, el Tercer Juzgado de Paz Letrado del MBJ de Paucarpata mediante Resolución N° 51 de fecha 17 de octubre del 2018, hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas a este Ministerio Público.

Por lo que, el imputado **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**, en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de **S/. 7212.22 soles**, por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de su menor hija.

6. TIPO PENAL.

Que, conforme a las circunstancias en que se ha suscitado los hechos atribuido al imputado, se encuadra en el tipo penal previsto contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en su modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, **tipificado en el primer párrafo Artículo 149° del Código Penal, el mismo que prescribe.**

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal General
Trib. Fiscal de Paz Letrado de Paucarpata
Distrito de Paucarpata

"El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial."

6.1. Grado de participación.

El imputado **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**, responderá en el presente caso conforme a los hechos ocurridos como Autor⁽¹⁾.

7. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito y vinculan al imputado como responsable del delito:

1. Actuados en copias certificadas del expediente judicial N° 00196-2010-0-0412-JP-FC-03, sobre alimentos, seguido por Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez en contra de Jesús Valentín López Erolito, tramitado ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado MBI de Paucarpata, entre ellos:

a) Resolución N° 05 de fecha 26 de julio del 2010, por la cual se dispuso llevar adelante la ejecución hasta que el ahora imputado Jesús Valentín López Erolito cumpla con pagar la pensión mensual de alimentos acordada en el Acta de Conciliación N° 33-2009 celebrada ante el Centro de Conciliación Futuro de la Justicia de fecha 19 de noviembre del 2009, fijada en la suma de S/. 150.00 Soles mensuales a favor de su menor hija Mileynne Concepción López Quispe.

b) Liquidación de pensiones alimenticias devengadas, correspondiente al periodo comprendido del **01 de junio del 2013 al 30 de abril del 2016**, por la suma de **S/. 7212.22 soles** (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N° 47, de fecha 08 de agosto del 2016.

d) Resolución N° 48, de fecha 25 de julio del 2017, en la cual el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, APRUEBA la liquidación de pensiones devengadas por el monto de **S/. 7212.22 soles**, que deberán ser pagadas por el ahora imputado en el plazo de tres días.

e) Resolución N° 50, de fecha 11 de junio del 2018, se le requirió al ahora imputado para que cumpla con pagar el monto de **S/. 7212.22 soles** en el plazo de tres días bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.

f) Cédula de notificación N° 48518-2018-JP-FC efectuada en el domicilio procesal del imputado con la Resolución N° 50, con fecha 18 de junio del 2018.

g) Cédula de notificación N° 48517-2018-JP-FC efectuada en el domicilio real del imputado con la Resolución N° 50, con fecha 19 de junio del 2018.

h) Resolución N° 51, de fecha 17 de octubre del 2018, que resuelve hacer efectivo el apercibimiento decretado mediante Resolución N° 50, remitiendo copias certificadas a este Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

2. Oficio N° 53609-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ emitido por el Coordinador del Registro Judicial Arequipa, donde se informa que el imputado **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO** registra antecedentes penales en el expediente 6758-2016 por incumplimiento de obligación alimentaria de fecha 16/05/2017 con pena de 10 meses PPL suspendida por un año.

⁽¹⁾ Art. 23 del C.P. "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción"

8. MEDIDA DE COERCION PROCESAL

Atendiendo al presente requerimiento, se requiere asimismo la **COMPARECENCIA SIMPLE** del imputado **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**, conforme a lo establecido en el numeral 2) del Artículo 286° del Código Procesal Penal, por no concurrir uno los presupuestos materiales previstos en el Artículo 268° del acotado código adjetivo, que es la sanción a imponerse no es superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señor Juez, proceder a emitir la resolución que corresponda de conformidad al Art. 447° del Código Procesal Penal.

PRIMER OTROSI: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**, tiene como **domicilio real en:** Calle Amazonas N° 305 Urb. Jorge Chávez distrito de Paucarpata. Con domicilio procesal en Cooperativa Guardia Civil O-12 Of. A distrito de Paucarpata.

Debiendo en este extremo el Juzgado proceder conforme a lo previsto por el Art. 80° del C.P.P., nombrar y designar un Abogado Defensor Público para la defensa del imputado.

Agraviado:

- **MILEYNNE CONCEPCIÓN LÓPEZ QUISPE** debidamente representada por su madre **Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez con DNI 43013485**, con **domicilio real** en Urb. Miguel Grau Mz. 52 Lt. 9 Zona B distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa.

SEGUNDO OTROSI: Se adjunta el original de los elementos de convicción, así como ejemplares del presente requerimiento, para su notificación a todos los sujetos procesales distintos al Ministerio Público.
/bstg

Arequipa, 26 de setiembre del 2019.


DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**

34
DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Caso N° : 1506014504-2019-3012-0
Expediente N° : 10518-2019-0-0401-JR-PE-01
Imputado : Jesús Valentín López Erolito
Delito : Omisión a la Asistencia Familiar
Sumilla : ACUSACION FISCAL
Fiscal Responsable : Blanca Susana Terroba Gutiérrez
(casilla electrónica N°96017)



SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL MBI PAUCARPATA:

BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ, Fiscal Provincial (F) Encargada del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, en el caso seguido contra Jesús Valentín López Erolito, por el delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de la menor Mileynne Concepción López Quispe, ante Ud. respetuosamente digo:

I. REQUERIMIENTO:

En mérito a lo dispuesto por su Juzgado en la Audiencia de Control de Aplicación de Incoación del Proceso inmediato realizado con fecha 06 de noviembre del 2019, y al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los arts. 60º, 447º literal 6 y 349º del Código Procesal Penal, formulo **REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL** contra **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**, por el delito Contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de **INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA**, en agravio de la menor **MILEYNNNE CONCEPCIÓN LÓPEZ QUISPE** debidamente representada por su madre **PAULUSIA TRINIDAD QUISPE GUTIERREZ**, en los términos siguientes:

II. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:

NOMBRE Y APELLIDOS : JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 41928957
FECHA DE NACIMIENTO : 12/06/1983
EDAD : 36 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO : Morococha, Yauli, Junín
NOMBRE DEL PADRE : Gregorio
NOMBRE DE LA MADRE : Leonarda
ESTATURA : 1.68 m
GRADO DE INSTRUCCIÓN : Secundaria Completa
ESTADO CIVIL : casado
OCCUPACIÓN : confección de calzado
DOMICILIO REAL : Calle Amazonas N° 305 Urb. Jorge Chávez distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa.
TELEFONO : 973501357
DOMICILIO PROCESAL : Cooperativa Guardia Civil O-12 Of. A, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa.
ABOGADO DEFENSOR : Yurisam Milagros Parada Cochón
CASILLA ELECTRONICA : 35618

III. DATOS DE LA PARTE AGRAVIADA:

BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

- Menor Mileynne Concepción López Quispe representada por su madre PAULUSIA TRINIDAD QUISPE GUTIÉRREZ, con domicilio real en Av. El Sol con Pasaje Melgar Mz. 52, Lote 9, Zona B, Comité 12-A, Pueblo Joven Miguel Grau, Paucarpata. Quien NO SE HA CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL.

IV.- DESCRIPCIÓN DEL HECHO ATRIBUIDO AL ACUSADO:

Hecho Punible	Imputación Necesaria
Delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento De Obligación Alimentaria	<p>Este Ministerio imputa al ciudadano JESUS VALENTIN LOPEZ EROLITO, la comisión del delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria; y en ese sentido los actos que efectuó el imputado para la comisión del ilícito, ocurrieron según el siguiente detalle:</p> <p>Circunstancias Precedentes Se tiene de los actuados, que por ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado del MBI de Paucarpata se tramita el expediente de Ejecución de Acta de Conciliación N° 0196-2010-0-0412-JP-FC-03, seguido por Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez, en contra de Jesús Valentín López Erolito.</p> <p>Que, mediante Resolución N°05 de fecha 26 de julio del 2010, se dispuso llevar adelante la ejecución hasta que el ahora imputado Jesús Valentín López Erolito cumpla con pagar la pensión mensual de alimentos acordada en el Acta de Conciliación N° 33-2009 celebrada ante el Centro de Conciliación Futuro de la Justicia de fecha 19 de noviembre del 2009.</p> <p>Circunstancias Concomitantes Pero es el caso, que el imputado no ha cumplido con tal obligación, de tal forma que se practicó la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al período comprendido desde el 01 de junio del 2013 al 30 de abril del 2016, adeudando la suma de S/. 7,212.22 soles (Incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N° 47, de fecha 08 de agosto del 2016.</p> <p>Hecho que conllevó que posteriormente dicha liquidación fuera APROBADA mediante Resolución N° 48 de fecha 25 de julio del 2017 y REQUERIDO al imputado para su pago en el plazo de tres días bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones en caso de incumplimiento, mediante Resolución N° 50, de fecha 11 de junio del 2018, la misma que le fue notificada al ahora imputado en su domicilio real, el 19 de junio del 2018, mediante notificación N° 48517-2018-JP-FC.</p> <p>Circunstancias Posteriores Que, ante el incumplimiento del imputado, el Tercer Juzgado de Paz Letrado del MBI de Paucarpata mediante Resolución N°51 de fecha 17 de octubre del 2018, hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas a este Ministerio Público.</p> <p>Por lo que, el acusado JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO, en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de S/.7,212.22 soles, por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de su menor hija.</p>

IV. ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito y vinculan al imputado como responsable del delito:

BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
Tm. Fiscalía Provincial de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

1. Actuados en copias certificadas del expediente judicial N°00196-2010-0-0412-JP-FC-03, sobre ejecución de acta de conciliación, seguido por Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez, en contra de Jesús Valentín López Erolito, tramitado ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado MBI de Paucarpata, entre ellos:

a) Resolución N° 05 de fecha 26 de julio del 2010, por la cual se dispuso llevar adelante la ejecución hasta que el ahora imputado Jesús Valentín López Erolito cumpla con pagar la pensión mensual de alimentos acordada en el Acta de Conciliación N° 33-2009 celebrada ante el Centro de Conciliación Futuro de la Justicia de fecha 19 de noviembre del 2009.

b) Liquidación de pensiones alimenticias devengadas, correspondiente al periodo comprendido del 01 de junio del 2013 al 30 de abril del 2016, por la suma de S/. 7,212.22 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N° 47, de fecha 08 de agosto del 2016.

d) Resolución N° 48, de fecha 25 de julio del 2017, en la cual el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, APRUEBA la liquidación de pensiones devengadas por el monto de S/. 7,212.22 soles, que deberán ser pagadas por el ahora imputado en el plazo de tres días.

e) Resolución N° 50, de fecha 11 de junio del 2018, se le requirió al ahora imputado para que cumpla con pagar el monto de S/. 7,212.22 soles, en el plazo de tres días bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones.

f) Cédula de notificación N° 48518-2018-JP-FC efectuada en el domicilio procesal del imputado con la Resolución N° 50, con fecha 18 de junio del 2018.

g) Cédula de notificación N° 48517-2018-JP-FC efectuada en el domicilio real del imputado con la Resolución N° 50, con fecha 19 de junio del 2018.

h) Resolución N° 51, de fecha 17 de octubre del 2018, que resuelve hacer efectivo el apercibimiento decretado mediante Resolución N° 50, remitiendo copias certificadas a este Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

2. Oficio N° 53609-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ emitido por el Coordinador del Registro Judicial Arequipa, donde se informa que el imputado JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO registra antecedentes penales en el expediente 6758-2016 por incumplimiento de obligación alimentaria de fecha 16/05/2017 con pena de 10 meses PPL suspendida por un año.

V. PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO:

Señala el artículo 23º del Código Penal: "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción."

De lo expuesto, queda claro que el **acusado JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**, ha incurrido en el delito **Contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar**, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación alimentaria, en su condición de **AUTOR**, al haber omitido con su obligación de cancelar el monto de **S/. 7,212.22 soles** por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de sus hijas.

VI. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD:

Conforme lo sostiene el autor Víctor Prado Saldarriaga, las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuricidad del hecho); o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente). Por tanto la


BLANDINA SUSANA TERROBA GUTIÉRREZ
Fiscal Adjunta Provincial
1ra Fiscalía Pto. Penal Corp. de Paucarpata
Centro Judicial Arequipa

función principal de las circunstancias no es otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido.

En el caso, no concurre ningún elemento negativo del tipo (error de tipo, consentimiento, adecuación social, causa de justificación, legítima defensa, error de prohibición, graves alteraciones en la conciencia, percepción, etc.), que excluya, justifique o evite el reproche de la acción perpetrado por el imputado.

VII. TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y CUANTÍA DE LA PENA:

a) Tipificación de los hechos

Conforme se ha detallado en la presente, se imputa al acusado **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**, ser el autor del delito de incumplimiento de Obligación Alimentaria, en agravio de su hija Mileynne Concepción López Quispe debidamente representada por su madre Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez.

Omisión de prestación de alimentos

Artículo 149º.- "El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. (...) "

Que, el comportamiento en el delito de incumplimiento de Obligación Alimentaria, previsto en el primer párrafo del artículo 149º del Código Penal, **consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida por una resolución judicial; es decir, basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el tipo, teniendo en consideración que el bien jurídico protegido es la familia y especialmente los deberes de tipo asistencial, como obligación de los padres con sus descendientes.**

b) Determinación de la Pena

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previsto en los artículos cuarto y octavo respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito.

b) Determinación de la Pena

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previstas en los artículos cuarto y octavo respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito, en tanto que la conducta del acusado al omitir asistir a su menor hijo, pone en peligro no solo la integridad física de su persona sino a toda la comunidad que hace uso de la vía pública.

Que, a efectos de la determinación de la pena temporal, es decir, para aquella que tiene una duración mínima de dos días y una máxima de 35 años, corresponde desarrollarla en base a etapas o fases normadas en el Artículo 45-Aº del Código Penal; así, en la primera etapa se definen los límites de la **pena básica**, la cual se encuentra establecida en la ley para el delito; y en la segunda etapa se debe identificar la **pena concreta**, para ello se tiene en cuenta el espacio y límite prefijado por la pena básica, marco que se divide en tres tercios y luego en base a las circunstancias legales presentes es que se determina la pena concreta dentro de uno de los tercios establecidos.

Que, conforme a lo señalado por el artículo 46º del Código, se establece las **circunstancias de atenuación y agravación**:

- 1.- Constituyen *circunstancias de atenuación*, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible las siguientes: "a) La **carencia de antecedentes penales**; ..."
- 2.- Constituyen *circunstancias agravantes*, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: "a) Ejecutar la conducta punible

sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad;...”

Siendo así, y advirtiéndose en el presente caso que no concurren circunstancias atenuantes o agravantes, **corresponde efectuar la petición de la imposición de la pena y se ubica dentro del margen del tercio inferior, conforme a lo prescrito en el inciso a) del numeral 2 del artículo 45-A del Código Penal**; encontrándose la conducta del acusado **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**, dentro del primer párrafo del artículo 149º del Código Penal, se procede al desarrollo de la individualización de la pena de manera gráfica:

DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA		
La pena es: "no mayor de tres años"		
Pena mínima Pena máxima (02 días) (03 años)		
2 días – 01 año (Tercio inferior)	01 año – 2 años (Tercio Intermedio)	02 años – 03 años (Tercio Superior)

De lo expuesto, la pena que se propone a imponerse al **imputado JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO** es de **UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**.

La pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

VIII. MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Que, de conformidad con lo prescrito por el Artículo 92º del Código Penal, todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así, que en aquellos casos en los que la conducta del agente produce un daño, debe regir el principio del daño causado, es decir, tener en cuenta la repercusión de la conducta incriminada en la víctima, por cuya razón la reparación civil debe de alguna manera tender a compensar y resarcir dicho agravio, fijándose prudencialmente de acuerdo a la magnitud del mismo,

Que, conforme lo señala el Artículo 11 del Código Procesal Penal: "El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso."

En tal sentido, y conforme se verifica de los antecedentes, la parte agraviada no se ha constituido en **ACTOR CIVIL**, motivo por el cual esta Fiscalía se encuentra legitimada para solicitar la reparación del daño; teniendo en cuenta el estado del presente proceso, para determinar la reparación civil, el Ministerio Público considera: **1) Monto adeudado en el caso de la parte agraviada: S/. 7,212.22 soles; 2) Periodo adeudado: desde el 01 de junio del 2013 al 30 de abril del 2016; 3) Número de víctimas: 01; 4) Bien jurídico protegido: deberes alimentarios; 5) Grado de ejecución del delito: consumado; 6) Reparación del daño causado: el imputado no ha cumplido con abonar suma alguna del monto de la liquidación de alimentos devengados, no habiendo efectuado por ello la reparación del daño causado, que resultaría ser más, **el daño moral**.**

En consecuencia, este Ministerio Público solicita una reparación civil de **S/.500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)**, que el acusado **JESUS VALENTIN LOPEZ EROLITO** deberá abonar a favor de su menor hija **Mileyenne Concepción López Quispe**, sin perjuicio del pago total de la liquidación de pensiones devengadas que ascienden a la suma de **S/. 7,212.22 soles, ASCENDIENDO en total el pago de reparación civil de S/.7,712.22 soles.**

BLANCA SUZANA TERRERO GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
1ra. Fiscalía Penal Corp. de Puno
Departamento de Puno

La pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

IX. SOLICITUD ALTERNATIVA DE TIPIFICACIÓN:

Ninguna.

X. RELACION DE BIENES QUE GARANTIZAN LA REPARACION CIVIL

En autos obra el oficio N°3600-2019-Z.R.-N°XII-UREG/PUBLICIDAD/GBS remitido por la Zona Registral N°XII Sede Arequipa, donde se informa respecto a los bienes muebles que registra el imputado **JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO**; teniendo registrado un bien inmueble ubicado en pueblo Joven Ciudad Blanca Mz. W, Lote 4, Zona B Paucarpata, Arequipa, partida registral N°P06124046.

XI. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

a) Prueba Documental:

PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA DE LA RESOLUCIÓN N° 05 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2010.
Información que proporciona	Por el cual se dispone llevar adelante la ejecución hasta que el ahora imputado Jesús Valentín López Erolito cumpla con pagar la pensión mensual de alimentos acordada en el Acta de Conciliación N° 33-2009 celebrada ante el Centro de Conciliación Futuro de la Justicia de fecha 19 de noviembre del 2009. UTILIDAD: Probará la existencia de una orden judicial. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADA Y RESOLUCIÓN N°47 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2016.
Información que proporciona	Por el cual se acredita el período y monto total de la deuda por concepto de alimentos, ascendente a la suma de S/. 7,212.22 soles, y por el que se pone en conocimiento de las partes dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas. UTILIDAD: Demostrará el monto adeudado. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN N°48 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2017.
Información que proporciona	Por el cual se acredita la aprobación de la liquidación de pensiones de alimentos por la suma de S/. 7,212.22 soles. UTILIDAD: Probará la aprobación de la liquidación de pensiones devengadas sobre el monto adeudado. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN N°50 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2018.
Información que proporciona	Con el cual se acredita el requerimiento al imputado a fin de que en plazo de tres días cumpla con pagar por concepto de alimentos la suma adeudada de S/. 7,212.22 soles; bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas a la Fiscalía Provincial Penal de Turno y se proceda conforme a sus atribuciones. UTILIDAD: Probará el requerimiento efectuado al imputado sobre el monto adeudado de pensiones devengadas alimenticias.

BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ
Fiscal Adjunta Provincial
Fiscalía Provincial Penal de Turno
Fiscalía Provincial Penal de Arequipa

		PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL		CEDULA DE NOTIFICACIÓN N° 48517-2018-JP-FC DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2018.
Información que proporciona		Por el cual se acredita que el imputado tuvo conocimiento del requerimiento efectuado mediante Resolución N°50, al haber sido debidamente notificado. UTILIDAD: Acreditará que el imputado tenía conocimiento del requerimiento que se le hacía. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL		COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION N°51 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2018.
Información que proporciona		Por el cual se dispone la remisión de copias al Ministerio Público ante el incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias requeridas al imputado. UTILIDAD: Acreditará el actual dolo del imputado en el hecho que se le atribuye. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL		Oficio N° 53609-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ REMITIDO POR EL COORDINADOR DEL REGISTRO JUDICIAL DE AREQUIPA
Información que proporciona		Por el cual se informa que el acusado JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO, SI registra antecedentes penales, por el mismo delito de Omisión a la Asistencia Familiar. UTILIDAD: Para efectos de la imposición de la pena. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.

XII. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL:

Contra del imputado JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO, se ha dictado medida de Comparecencia Simple.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señor Juez, acceder al presente requerimiento y conferir el trámite correspondiente.


Primer Otrosí: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: JESÚS VALENTÍN LÓPEZ EROLITO, tiene como domicilio real en: Calle Amazonas N° 305 Urb. Jorge Chávez distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa. Y domicilio procesal en Cooperativa Guardia Civil O-12 Of. A, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa; siendo su abogada defensora Yurisam Milagros Parada Cochón con CASILLA ELECTRONICA: 35618.

Agraviado: Menor MILEYNNNE CONCEPCIÓN LÓPEZ QUISPE representada por su madre Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez, con domicilio real en Av. El Sol con Pasaje Melgar Mz. 52, Lote 9, Zona B, Comité 12-A, Pueblo Joven Miguel Grau, Paucarpata, Arequipa, Arequipa.

Segundo Otrosí: Solicito al juzgado, se tenga en cuenta, que se ha cumplido con adjuntar las documentales ofrecidas como medios probatorios con el requerimiento de incoación de proceso inmediato, y se anexa al presente dos ejemplares de la acusación a fin de que sean notificados al acusado y a la parte agraviada.
/bstg

Arequipa, 06 de noviembre del 2019.


 BLANCA SUSANA TERROBA GUTIÉRREZ
 Fiscal Adjunta Provincial
 Tna. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
 Distrito Fiscal de Arequipa

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
AREQUIPA - Sistema de
Notificaciones Electrónicas SINOE
PAUCARPATA-ESQUINA CALLE
A LAVERA CON CALLE
T. ALCANTARA S/N
Secretario HUAYTA CONDORI
ESTEFANY ALEXANDRA (Servicio
Digital - Poder Judicial del Perú)
Fecha: 12/11/2019 10:20:13, Razón
RESOLUCIÓN
JUDICIAL D. Judicial: AREQUIPA /

Expediente Nro.	:	10518-2019-0401-JR-PE-01
Fecha	:	Arequipa, 06 de noviembre del 2019
Juzgado	:	JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Magistrado	:	JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO
Imputado	:	JESÚS VALENTIN LOPEZ EROLITO
Delito	:	OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
Especialista de Audio	:	Estefany Alexandra Huayta Condori
Hora inicio	:	08:45 horas
Hora de término	:	08: 55 horas

Se deja constancia que la audiencia será registrada mediante audio, cuya grabación demostrará el modo como se desarrolla la presente audiencia conforme lo establece el inciso 2 del artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo las partes acceder a una copia de dicho registro al final de la audiencia; por tanto se solicita a las partes procedan a identificarse para efectos de registro.

VERIFICACION DE LA PRESENCIA DE LOS INTERVINIENTES:

1.- MINISTERIO PÚBLICO: BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ, FISCAL ADJUNTA DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA, CON DOMICILIO PROCESAL EN CALLE TENIENTE ALCANTARA S/N URB. GUARDIA CIVIL TERCERA ETAPA PAUCARPATA, CASILLA ELECTRONICA 96017.

2.- AGRAVIADA: PAULUSIA TRINIDAD QUISPE GUTIERREZ, DNI 43013485, DOMICILIO AV. EL SOL, CON PASAJE MELGAR, MANZANA 52, LOTE 9, ZONA B, PAUCARPATA.

3.- DEFENSA TECNICA: JULISSA AMPARADA COCHON, CASILLA ELECTRONICA 35618, DOMICILIO PROCESAL AV. GUARDIA CIVIL O-12, OFICINA A, PAUCARPATA.

01'27"	FISCAL: Oraliza su requerimiento, queda en audio.
04'24"	DEFENSOR: No observa, solamente señala que el imputado ha realizado un pago que hará valer en su oportunidad, queda en audio.
04'50"	<u>POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR JUEZ Y EN MÉRITO AL ACUERDO PLENARIO 06-2011/CJ-116 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN SU FUNDAMENTO 10 ESTABLECE QUE SÓLO SE TRANSCRIBIRÁ LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN.</u>
07'27"	RESOLUCION Nro. 02-2019 Arequipa, 06 de noviembre del 2019 Dos mil diecinueve.- <u>SE RESUELVE:</u> DECLARAR FUNDADO la incoación de PROCESO INMEDIATO, en la presente causa que se sigue en contra de JESÚS VALENTIN LOPEZ EROLITO, por delito de Omisión a la Asistencia Familiar, ilícito previsto en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal, en agravio de Milen Concepción López Quispe, representado por Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez, SE DISPONE: QUE MINISTERIO PUBLICO FORMULE ACUSACION EN EL PLAZO DE 24 HORAS Y LA REMISIÓN DE LOS

	ACTUADOS AL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL ENCARGADO DE LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS INMEDIATOS.
08'57"	FISCAL: Conforme
08'58"	DEFENSA: Conforme

CONCLUSION

Con lo que se da por concluida la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla el señor Juez y el Especialista Judicial de Audiencia encargado de la redacción del acta.- Dejándose expresa constancia que la presente acta ha sido debidamente asociada al SIJ, y que el audio de esta audiencia ha sido debidamente colgado en el SIJ, conforme a la directiva emitida por la Sala de Apelaciones. Doy fe.

"Autorícese a la tramitación del presente proceso al especialista judicial que da cuenta conforme a la R.A N° 387-2019-CE-PJ"



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

**ÍNDICE DE REGISTRO DE AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO
R.A. N° 347-2015-CE-PJ-GOOGLE MEET**

Expediente N°	: 10518-2019-77-0401-JR-PE-01
Fecha	: Arequipa, 22 de septiembre de 2020
Juzgado	: Segundo Juzgado Penal Unipersonal
Magistrado	: Dr. PERCY BELLIDO DAVILA
Investigado	: Jesús Valentín López Erolito
Delito	: Omisión a la asistencia Familiar
Agraviado	: Paulusia Trinidad Quispe Gutierrez
Especialista Audiencias	: Benigna Soledad Navarro Palco
Especialista Causas	: Yoni Maquera Cuayla
Hora de Inicio	: 09:46 horas
Hora de Término	: 10:00 horas

Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, tal como lo prevé el artículo 361° del Código Procesal Penal. *Se deja constancia de que la presente audiencia se realiza por Google Meet (se desarrolla audiencia sin tener expediente físico a la vista).*

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ASISTENTES

- **Ministerio Público:** BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ, fiscal Adjunta de Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en Teniente Alcántara sin número, Urb. Guardia Civil del distrito de Paucarpata, con casilla electrónica Nro. 96017, correo electrónico susanterroba@gmail.com, y número celular .959377071
- **Defensa Privada:** yulisan Milagros Parada Cochón, con inscripción en CAA Nro. 7715, casilla electrónica 35618, con domicilio procesal en la Cooperativa Guardia Civil O-12, oficina A, del distrito de Paucarpata, con correo electrónico yurisamilagros@gmail.com, y número celular 979713386
- **Imputado:** Jesús Valentín López Erolito identificado con DNI Nro. 41928957, correo electrónico jesusplus1234@gmail.com, con domicilio en calle amazonas 305, Jorge chavez del distrito de Paucarpata, nacido en la oroya, morococha de 12/06/1983, hijo de Gregorio y leonarda, grado de instrucción quinto de secundaria, de ocupación operador de calzado, con ingresos mensuales de s/. 800, de estatura 167 cm.

II. DE LOS HECHOS OBJETO DE ACUSACIÓN, LA CALIFICACIÓN JURÍDICA Y PRUEBAS OFRECIDAS

INSTALACIÓN DE AUDIENCIA

- 00:02:46 **Sr. Juez:** da por instalada la audiencia única, *corre en audio.*
 00:02:52 **Ministerio Público:** orzaliza su requerimiento, *corre en audio.*
 00:08:05 **Defensa Privada:** no formula observaciones, *corre en audio.*

RESOLUCIÓN N° 5- 2020 (00.08.09)

Arequipa, veintidós de septiembre

Del dos mil veinte. –

De conformidad con el Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116, se procede a transcribir la parte resolutive de la presente audiencia.

PORTE RESOLUTIVA: SE RESUELVE: (00.08.40)

- 1.- Declarar la validez formal de la acusación en los términos expresados por la señorita Fiscal.
- 2.- Admitir como medios de prueba los postulados por el Ministerio Público. Tómesese razón y hágase saber.-



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

AUTO DE ENJUICIAMIENTO Y DE CITACION A JUICIO

RESOLUCIÓN N° 06- 2020 (00.08.50)

Arequipa, veintidós de septiembre

del dos mil veinte.-

De conformidad con el Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116, se procede a transcribir la parte resolutive de la presente audiencia.

III.- PARTE RESOLUTIVA:

Por lo que **SE RESUELVE:** (00.09:24)

PRIMERO: dictar auto de enjuiciamiento en contra de **Jesús Valentín López Erolito**, acusado por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Paucarpata, , por la presunta comisión del delito. Omisión a la Asistencia Familiar, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149 de Código Penal en agravio de la menor Mileyne concepción López Quispe, **representada por Paulusla Trinidad Quispe Gutierrez**, solicitando al efecto se le imponga de un año de pena privativa de la libertad y asimismo, se le obligue al pago de un reparación civil por concepto de daño moral por la suma de S./500.00 (quinientos con 00/100 nuevos soles) sin perjuicio del pago de la pensiones devengadas téngase como pruebas admitidas.

SEGUNDO: CITAR A JUICIO a:

a) **Acusado:** Jesús Valentín López Erolito

b) **Agraviada:** representante de la Menor.

TERCERO.- señalar fecha para audiencia de juicio oral, el **DÍA DE 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 HORAS**, audiencia a llevarse a cabo en esta misma vía, por Google Meet para lo cual en caso de que no se conecten las partes se van hacer efectivo los apercibimientos, en caso de incomparecencia. Se añade que si no asiste la defensa del imputado se va subrogar y designar a un defensor público, al efecto se designa en todo caso al Dr. Ruben Hilazaca quien deberá asumir en caso de ser necesario.

CONCLUSIÓN

Con lo que se da por concluida la audiencia, procediendo a firmarla el Señor Juez y el Especialista Judicial de Audiencia encargado de la redacción del acta.- Dejándose expresa constancia que la presente acta ha sido debidamente asociada al SIJ, y que el audio de esta audiencia ha sido debidamente colgado en el SIJ, conforme a la directiva emitida por la Sala de Apelaciones. Doy fe.-

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

Resolución N°08

En la ciudad de Arequipa, siendo los catorce días de diciembre del año dos mil veinte, la señora magistrada **Judy Jenny Rodríguez García**, a cargo del Segundo Juzgado Unipersonal de Paucarpata, luego de realizar el juicio oral, público, contradictorio en audiencia única de proceso inmediato, ha emitido la siguiente:

SENTENCIA Nro. 381-2020

Primero.- Identificación de Proceso

Se trata de la causa signada como expediente número **10518-2019**, seguido a **JESÚS VALENTIN LOPEZ EROLITO**, por el delito Contra la Familia en la modalidad de **OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal, en agravio de Mileyni Concepción López Quispe, representado por **PAULUSIA TRINIDAD QUISPE GUTIERREZ**.

Segundo.- Identificación del Acusado

Se juzga a **Jesús Valentin López Erolito** identificado con DNI Nro. 41928957, domiciliado en calle Amazonas 305, Jorge Chávez del distrito de Paucarpata, teléfono 973501357.

Tercero.- Identificación de la parte Agraviada

Se ha considerado a Mileyni Concepción López Quispe, representado por **PAULUSIA TRINIDAD QUISPE GUTIERREZ**.

Cuarto.- Delimitación de la Imputación

El Ministerio Público, como titular de acción penal pública y por ende encargado de establecer la tesis fáctica materia de proceso, en el marco de la requisitoria escrita y oralizada en audiencia en su respectivo alegato oral, ha efectuado la siguiente imputación al acusado.

4.1. Hechos Imputados:

Se tiene que por ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado del MJB de Paucarpata se tramita el expediente de Ejecución de Acta de Conciliación N° 0196- 2010-0- 0412-JP-FC-03, seguido por Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez, en contra de Jesús Valentin López Erolito, en el que se dispuso llevar adelante la ejecución hasta que el ahora imputado Jesús Valentin López Erolito cumpla con pagar la pensión mensual de alimentos acordada en el Acta de Conciliación N° 33- 2009 celebrada ante el Centro de Conciliación Futuro de la Justicia de fecha 19 de noviembre del 2009.

Circunstancias concomitantes y posteriores: Ante el incumplimiento de tal compromiso por parte del imputado Jesús Valentin López Erolito, se aprobaron las siguientes liquidaciones: por el período comprendido desde el 01 de junio del 2013 al 30 de abril del 2016, adeuda la suma de S/. 7,212.22 soles (incluido el interés legal), cuyo pago fue requerido al procesado mediante Resolución N° 50, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público, la misma que le fue notificada en su domicilio real con fecha 19 de junio del 2018, mediante notificación N° 48517- 2018-JP-FC.

Que, ante el incumplimiento del procesado de cancelar la suma de S/. 7,212.22, se emite la Resolución N°51 de fecha 17 de octubre del 2018, que hizo efectivo el apercibimiento decretado, disponiéndose remitir copias al Ministerio Público, al haberse incurrido en el delito de omisión a la asistencia familiar.

4.2. Calificación Jurídica

Los hechos expuestos han sido tipificados por el representante del Ministerio Público como delito de **OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, previsto y sancionado en el primer párrafo de artículo 149° del Código Penal.

4.3. Pretensión Penal

El Ministerio Público solicita se imponga al acusado **un año** de pena privativa de la libertad.

4.4. Pretensión Civil

El Ministerio Público ha solicitado por reparación civil la suma de **S/.500.00 soles** por daño moral más el pago de la suma de las pensiones alimenticias devengadas ascendente a **S/.7,212.22 soles** a favor de la parte agraviada.

4.5. Defensa Técnica y Autodefensa del Acusado

Reconociendo la responsabilidad penal en los hechos materia de imputación, así como la pretensión civil, se acogió a la conclusión anticipada.

Quinto.- Del Acuerdo Propuesto

5.1. El Ministerio Público y la defensa del procesado hicieron conocer a este Despacho que habían llegado a un acuerdo sobre la pena, la misma que consiste en **ONCE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN POR EL PLAZO DE UN AÑO Y SEIS MESES** a condición de que el sentenciado cumpla con las siguientes reglas de conducta: **a)**La prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del Juzgado de Ejecución; **b)**Comparecerá de manera personal y obligatoria ante el juzgado de Ejecución el primer día hábil de cada dos meses a fin de informar y justificar sus actividades, pudiendo realizarlo también a través de la plataforma virtual de la página web del Poder Judicial para lo cual deberá de empadronarse; **c)**Deberá reparar el daño causado por el delito, es decir, cumplir con el pago de la reparación civil en la forma acordada con el Ministerio Público; **d)**La prohibición de cometer nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59° inciso 3 del Código Penal, es decir, de manera directa se revocará el periodo de prueba y se le impondrá once meses de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva.

5.2. Asimismo, las partes convinieron el monto de la reparación civil a favor de la parte agraviada en la suma de **SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 22/100 SOLES**, que comprende S/.7212.22 Soles a las pensiones devengada y S/. 500.00 Soles por daño moral ocasionado a la parte agraviada; en relación a este monto total que se fija por reparación civil se ha señalado que el acusado ha efectuado un pago de S/. 1,000.00 Soles en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata en el expediente Nro. 196-2010, correspondiente a esta liquidación de pensiones devengadas, quedando un saldo pendiente de cancelar por la suma de S/.6,712.22, suma que será cancelada por el sentenciado de la siguiente forma : a través de 17 cuotas mensuales, las primeras 16 cuotas de 400.00 soles y la cuota número 17, es de S/.312.22 soles, cuotas que serán abonadas por el sentenciado el último día hábil de cada mes, empezando en el mes de diciembre del dos mil veinte, y así sucesivamente de forma mensual hasta cumplir con el pago total de las 17 cuotas señaladas previamente; dichos pagos deberá efectuarlos mediante Depósitos Judiciales en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución, debiendo el sentenciado hacer llegar las constancias de pago respectivas al Juzgado de Ejecución para los fines de su endose y cobro respectivo.

Sexto.- Itinerario Procesal

En mérito al auto de citación a juicio se citó a los sujetos procesales a juicio oral. Se llevó el juzgamiento con la presencia del acusado Jesús Valentin López Erolito. Instalada la audiencia, se escuchó el alegato de apertura del Ministerio Público, y siendo que al tomar la palabra la defensa técnica del imputado, señaló abstenerse de tal exposición manifestando la intención de dicha parte procesal de acogerse a la conclusión anticipada. Así, al inicio del juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos, al preguntársele si admitía ser partícipe en calidad de autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; éste, previa consulta con su defensa técnica, aceptó los hechos objeto de acusación fiscal, así como su responsabilidad penal, también aceptó la responsabilidad civil. Ante ello, se declaró la conclusión anticipada del juicio, se procedió a consultar a las partes respecto de algún acuerdo sobre la pena y reparación civil, siendo que los mismos acordaron todos los extremos de la pena y la reparación civil. Siendo ello así, el estado de la causa es el de expedirse sentencia la cual, en efecto, se emite el día de la fecha.

II. PARTE CONSIDERATIVA

Primero.- De la Conclusión Anticipada

El artículo 427° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencia vinculantes, tales como: el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008/CJ116 y el Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116 que, si bien este último está referido a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de legalidad y proporcionalidad atañen a la conclusión anticipada. No obstante, la presencia del juzgador no es pasiva, para efectos de la homologación de la "conformidad" ya que, existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

Segundo.- Ley Penal Aplicable

2.1. Conforme a la acusación, es aplicable el tipo penal del delito de Omisión a la Asistencia Familiar previsto y penado en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal.

2.2. El texto normativo de tal numeral, prevé:

"Artículo 149.- Incumplimiento de Obligación Alimentaria.

El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.

2.3. Para la configuración del ilícito, conforme a los hechos materia de imputación en el presente caso, y que han sido oralizados por la titular de la acción penal, se requiere que el agente haya omitido cumplir con su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial.

Tercero.- Juicio de Subsunción

3.1. La conducta del acusado se adecua objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito antes referido tal como han sido expuestos los cargos por el Ministerio Público -los cuales son inmodificables- por cuanto se ha demostrado que acusado **JESÚS VALENTIN LÓPEZ EROLITO** no cumplió con su obligación alimenticia ordenado por mandato judicial, por lo que se aprobó la liquidación de pensiones devengadas por el periodo comprendido desde el 01 de junio del 2013 al 30 de abril del 2016, y adeuda la suma de S/. 7,212.22 soles (incluido el interés legal); procediéndose finalmente a emitir las Resoluciones N° 50 y la N°51 de fecha 17 de octubre del 2018, con la que requirió el pago bajo apercibimiento de remitir copias y la resolución con la que se hizo efectivo el apercibimiento. Ello así se tiene del reconocimiento efectuado de manera expresa, libre y voluntaria por el acusado, en audiencia y previa consulta con su defensa técnica, al aceptar la responsabilidad de los hechos materia de imputación, ello conforme a la naturaleza de la conformidad en juicio.

3.2. No se ha alegado ni probado causa que justifique el actuar típico del acusado o que excluya su culpabilidad.

3.3. Por ello concurren todos los elementos del tipo, los mismos que han sido realizados con conocimiento y voluntad conforme se desprende de los hechos acreditados en autos, concurriendo además el elemento subjetivo, conforme al reconocimiento efectuado por el acusado.

3.4. En consecuencia, la conducta del encausado deviene en típica, antijurídica y culpable.

Cuarto.- Individualización de la Pena

4.1. El principio de Proporcionalidad, es aquel principio que exige al juzgador verificar que la pena guarde una relación de correspondencia con el injusto cometido por el agente, se encuentra reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, el que debe ser entendido como la correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar, por tanto constituye un límite al *IUS PUNIENDI*, en tanto exige un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación legal. Esto significaría que el principio de proporcionalidad debe guardar relación conforme a la culpabilidad, pero no siempre de acuerdo al injusto la culpabilidad puede coincidir con la misma, por cuanto esta puede resultar mayor a la culpabilidad concreta; entiéndase que los criterios para establecer la proporcionalidad deben atender aquellos vinculados al injusto, importancia del rango del bien jurídico protegido, grado de lesión del mismo, impacto social y los diferentes medios de comisión del hecho, entre otros aspectos, así, el juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad. En el caso que nos ocupa, se evidencia que el actuar del acusado **JESÚS VALENTIN LÓPEZ EROLITO** es una conducta gravosa en relación al bien jurídico protegido a través de la Omisión a la Asistencia Familiar, referida a la parte agraviada, actividad ilícita que constituye un hecho reprochable.

4.2. La Fiscalía ha acordado con la defensa del acusado se disponga **ONCE MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN POR EL PLAZO UN AÑO Y SEIS MESES**, en caso de incumplimiento de reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal inciso 3, es decir, de manera directa se revocará el período de prueba y se le impondrá ONCE meses de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva. Para lo cual, se procede a realizar la determinación judicial de la pena, en base a los siguientes parámetros.

4.3. No presenta circunstancias agravantes genéricas, ni se advierte. Para el caso de autos, se toma en cuenta los criterios fundamentadores de la pena establecidos en el artículo 45°, 45°-A y 46 modificados e incorporados al Código Penal por la Ley N° 30076.

4.4. Se procede a verificar criterios previstos en el artículo 45°-A señalado: **a) Espacio punitivo de determinación de pena básica:** El delito de omisión a la asistencia familiar, prevé una pena no mayor a tres años de pena privativa de libertad o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, en tal sentido corresponde hacer el análisis de la pena. **b) Determinación de pena concreta:** **NO** existe circunstancias agravantes genéricas; se advierte la existencia de atenuante genérica (carencia de antecedentes penales), por lo que la pena se ubicará dentro del tercio inferior, es decir entre dos días a un año, por lo que se determina la pena en un año, quantum al que, conforme a lo sostenido por la titular de la acción penal, con el descuento del 1/7 por la premialidad correspondiente a la conclusión anticipada, quedando la pena en once meses, la cual se suspende por el plazo un año y seis meses, considerando la prognosis positiva del agente, quien informará y justificará sus actividades cada dos meses ante el Juzgado de Ejecución, no incurrirá en nuevo ilícito, la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia, además se ha comprometido a reparar el daño causado; entendiéndose que el incumplimiento de una de las reglas de conducta el Ministerio Público podrá requerir el apercibimiento que ha sido acordado en la presente sentencia de la revocatoria directa y consecuente imposición del cumplimiento de la pena señalada con el carácter de efectiva, por lo que del análisis de los antecedentes, además de tomarse en cuenta las condiciones personales del actor, así como las circunstancias del evento delictivo en el que ha participado, la naturaleza del mismo, y merituándose finalmente lo previsto en el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008-CJ/116 se concluye que debe ser aprobado este extremo del acuerdo.

Quinto.- Determinación de la Reparación Civil

5.1. El objeto civil se rige por los artículos 11° y 12° del Código Procesal Penal y 93° al 101° del Código Penal, precepto éste último que nos remite a las disposiciones correspondientes del Código Civil.

5.2. En el caso que nos ocupa se tiene que las partes han fijado la Reparación Civil a favor de la parte agraviada en el monto de **SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 22/100 SOLES**, que comprende S/.7212.22 Soles a las pensiones devengada y S/. 500.00 Soles por daño moral ocasionado a la parte agraviada; en relación a este monto total que se fija por reparación civil se ha señalado que el acusado ha efectuado un pago de S/. 1,000.00 Soles en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata en el expediente Nro. 196-2010, correspondiente a esta liquidación de pensiones devengadas, quedando un saldo pendiente de cancelar por la suma de S/.6,712.22, suma que será cancelada por el sentenciado de la siguiente forma : a través de 17 cuotas mensuales, las primeras 16 cuotas de 400.00 soles y la cuota número 17, es de S/.312.22 soles, cuotas que serán abonadas por el sentenciado el último día hábil de cada mes, empezando en el mes de diciembre del dos mil veinte, y así sucesivamente de forma mensual hasta cumplir con el pago total de las 17 cuotas señaladas previamente; dichos pagos deberá efectuarlos mediante Depósitos Judiciales en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución, debiendo el sentenciado hacer llegar las constancias de pago respectivas al Juzgado de Ejecución para los fines de su endoso y cobro respectivo. Siendo que el monto establecido por tal concepto resulta razonable, estando a los extremos anotados y que el mismo no ha sido materia de controversia, debe ser aprobado.

Sexto.- Pronunciamiento sobre las costas

El artículo 497.5° del Código Procesal Penal establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz, siendo que, en el presente caso, al haber concluido el proceso por "conformidad", no procede la imposición de costas.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones administrando justicia a nombre del pueblo de quien emana dicha facultad,

FALLO:

Primero.- APROBANDO mediante la presente sentencia de conformidad, los acuerdos arribados entre el acusado debidamente asesorado por la defensa de elección, y el Ministerio Público, durante el juicio oral quienes son los sujetos que están válidamente legitimados para poder intervenir en los acuerdos, considerando que no se tiene actor civil constituido, en consecuencia.

Segundo.- DECLARO a **Jesús Valentín López Erolito**, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, como **AUTOR** del delito de omisión a la asistencia familiar, previsto en el artículo 149 del Código Penal, en agravio de la menor Mileyni Concepción López Quispe, representada por **Paulusia Trinidad Quispe Gutiérrez**.

Tercero.- Como tal le impongo **ONCE MESES** de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución **POR EL PLAZO DE UN AÑO Y SEIS MESES**, que estará condicionado al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta que deberá observar el sentenciado: **a)** la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del juzgado de ejecución; **b)** Comparecerá de manera personal y obligatoria ante el juzgado de Ejecución cada dos meses a fin de informar y justificar sus actividades, pudiendo realizarlo también a través de la plataforma virtual de la página web del poder judicial para lo cual deberá de empadronarse; **c)** deberá reparar el daño causado por el delito, con el pago íntegro de la reparación civil en los términos que han sido acordados por su abogado defensor y fiscalía, **d)** la prohibición de cometer nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59° inciso 3° del Código Penal, es decir se revocará de manera directa la suspensión de la pena y se le aplicará el cumplimiento de la pena de once meses de pena privativa de la libertad con carácter de efectiva.

Cuarto.- FIJO el monto de la **REPARACIÓN CIVIL** en la suma de **SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 22/100 SOLES**, que comprende S/.7212.22 Soles a las pensiones devengada y S/. 500.00 Soles por daño moral ocasionado a la parte agraviada; en relación a este monto total que se fija por reparación civil se ha señalado que el acusado ha efectuado un pago de S/. 1,000.00 Soles en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata en el expediente Nro. 196-2010, correspondiente a esta liquidación de pensiones devengadas, quedando un saldo pendiente de cancelar por la suma de S/.6,712.22, suma que será cancelada por el sentenciado de la siguiente forma : a través de 17 cuotas mensuales, las primeras 16 cuotas de 400.00 soles y la cuota número 17, es de S/.312.22 soles, cuotas que serán abonadas por el sentenciado el último día hábil de cada mes, empezando en el mes de diciembre del dos mil veinte, y así sucesivamente de forma mensual hasta cumplir con el pago total de las 17 cuotas señaladas previamente; dichos pagos deberá efectuarlos mediante Depósitos Judiciales en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución, debiendo el sentenciado hacer llegar las constancias de pago respectivas al Juzgado de Ejecución para los fines de su endose y cobro.

Quinto.- DISPONGO que no corresponde fijar el pago de costas en el presente proceso.

Sexto.- MANDO que consentida o ejecutoriada la presente sentencia, se cursen las comunicaciones correspondientes para su inmediato y estricto cumplimiento, y por esta mi sentencia, así me pronuncio, mando y firmo en audiencia pública de la fecha. **Regístrese y Comuníquese. -**



CASO N°

DISPOSICIÓN N° 01 -2018- 1FPPCP

Arequipa, ocho de noviembre,

Del Dos mil dieciocho.-----

DANDO CUENTA EN LA FECHA: La denuncia interpuesta por el delito de PELIGRO COMUN en la modalidad **CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD** (art. 274 CP), en contra de **JORGE LUIS DÍAZ APAZA**, en agravio de **LA SOCIEDAD**.

ATENDIENDO QUE: Los fundamentos que sustentan la presente disposición son los siguientes:

Primero: Se tiene del acta de intervención policial, con fecha 07 de Noviembre del 2018, a horas 21:35, el mismo que da cuenta que en circunstancias que la móvil PL-21209, realizaba un operativo policial en la Av. El Sol con Av. Venezuela, se observó a un vehículo Cherry QQ, color rojo, con placa de rodaje A0A-447, que circulaba con las luces apagadas, haciéndole señas para que se estacione, haciendo caso omiso, procediendo a seguirlo logrando intervenir en el Pasaje Alfonso Ugarte Mz. 27, Lote 05, PP.JJ. Manuel Grau, Paucarpata, identificando al conductor como Jorge Luis Díaz Apaza, el cual presentaba visibles síntomas de ebriedad y aliento alcohólico, motivo por el cual se le trasladó para las diligencias de ley.

Siendo que se tiene el certificado de dosaje etílico N° 0030-0015531, de fecha 07 de Noviembre del 2018, practicado a **JORGE LUIS DÍAZ APAZA**, el cual arroja 2.17 gramos por litro de sangre, acotando que esta muestra fue extraída a horas 23:30 del día señalado

Segundo: Se advierte de los actuados que como consecuencia de los sucesos se ha formulado cargos según denuncia interpuesta por la presunta comisión del delito de PELIGRO COMUN en la modalidad CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD (art. 274 CP), el mismo que sanciona el ilícito con pena privativa de libertad no menor seis meses ni mayor de dos años y estando a lo preceptuado por el literal b), del inciso 1) del Art. 2 del Código Procesal Penal, de donde "El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos:... Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los dos años de pena privativa de la libertad, o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. (...) En los supuestos previstos en los incisos b) y c) del numeral anterior, será necesario que el agente hubiere reparado los daños y perjuicios ocasionados o exista acuerdo con el agraviado en ese sentido. El Fiscal citará al imputado y al agraviado con el fin de realizar la diligencia de acuerdo, dejándose constancia en acta (...)".



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DISTRITO FISCAL
3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

Tercero: Además, debe tomarse en cuenta conforme a la modificatoria introducida por la Ley No. 30076 (19/08/2013) para el referido Art. 2 del Código Procesal Penal, que para la procedencia del mencionado instituto, el procesado no se encuentra bajo el supuesto de reincidencia y habitualidad contemplado en el Art. 46-B y 46-C del Código Penal, respectivamente, así como el no haberse acogido en anterioridad oportunidad al mismo instituto o que no se encuentre en situación de incumplimiento del mismo, lo que ha sido verificado del extracto del sistema SGF y que corre en autos, por lo que es procedente promover la aplicación del mencionado instituto, además, es menester reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita decidir si se formula acusación, que el denunciado ejerza su derecho de defensa, así como determinar si la conducta es incriminada es antijurídica o no, las circunstancias y móviles de la perpetración y la existencia del daño causado, por lo que resulta necesario realizarse la apertura de la investigación preliminar. Por lo que esta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, de conformidad a lo establecido en los artículos 330° y 334° Numeral 2 del Código Procesal Penal.

SE DISPONE:

DENTRO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, promuévase la aplicación de un PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, para este fin se cita a las partes procesales a la realización de una audiencia especial de toma de acuerdos, diligencia que se programa para el día de la fecha, debiendo la parte imputada contar con la asistencia de abogado defensor, la misma que se llevará a cabo en este Despacho fiscal.

Fiscal Responsable Luis Guillermo Vera Oviedo.


DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa



Caso N°: 1506014504-2018-3493-O
Fiscal Responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – SEDE MBI PAUCARPATA:

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, ante Ud. respetuosamente digo:

Que, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los Artículos 446° literal 4) y 336° literal 2) del Código Procesal Penal, **FORMULO REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO** contra:

JORGE LUIS DIAZ APAZA, en la investigación preliminar seguida en su contra por delito Contra la Seguridad Publica – Peligro Común, en la modalidad de Conducción en estado de ebriedad, en agravio del Estado - Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en los siguientes términos:

1. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO

NOMBRE Y APELLIDOS	: JORGE LUIS DIAZ APAZA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	: 44762865
FECHA DE NACIMIENTO	: 13-09-1987
EDAD	: 31 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO	: Paucarpata, Arequipa, Arequipa
NOMBRE DEL PADRE	: Francisco
NOMBRE DE LA MADRE	: Avelina
ESTATURA	: 1.65 m
SEXO	: Masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN	: Secundaria Completa
ESTADO CIVIL	: Casado
OCUPACIÓN	: Taxista Independiente
DOMICILIO REAL	: Calle Juan Manuel Polar N°214, Urb. 15 de Agosto, distrito de Paucarpata, Provincia y Departamento de Arequipa.
TELEFONO	: 928446142
DOMICIO PROCESAL	: Av. Independencia N°927-933, cercado de Arequipa, Arequipa, Arequipa
ABOGADO DEFENSOR	: Martha Catacora Aramayo (Defensora Pública)

2. DE LOS PRESUPUESTOS DEL PROCESO INMEDIATO

2.1. Teniendo en cuenta que el proceso inmediato es un proceso especial, que busca la simplificación y celeridad en la sustanciación del procesos penales, por medio del cual de la fase de diligencias preliminares se pasa directamente al juicio oral, suprimiendo las etapas de investigación preparatoria y la etapa intermedia de un proceso común, el mismo que procede en los supuestos de flagrancia delictiva, confesión sincera del imputado; cuando los elementos de convicción recabados en el curso de las diligencias preliminares evidencien la materialización del ilícito penal y la participación del imputado, así como en la comisión de los Delitos de Omisión de Asistencia Familiar y del Delito de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, conforme lo establece el artículo 446⁽¹⁾ del Código Procesal Penal.

⁽¹⁾ Artículo modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 30 de agosto del 2015

2.2. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que en el presente caso, se viene investigando la comisión del Delito de Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, delito respecto del cual el inciso 4) del artículo 446° del Código Procesal Penal, establece "4. *Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de Omisión de Asistencia Familiar y los de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción*", y estando a la imperatividad de la norma, corresponde en el caso en autos incoar el presente proceso inmediato.

3. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN.

De lo actuado se han reunido elementos de juicio que determinan que con fecha 07 de noviembre del 2018, aproximadamente las 21:35 horas, personal policial a bordo de la unidad móvil PL-21209, en circunstancias que se realizaba un operativo policial en la Av. El Sol con Av. Venezuela – Miguel Grau, Paucarpata, observaron que el vehículo Cherry QQ, color rojo de placa de rodaje AOA-447, circulaba con las luces apagadas, al cual al realizar las señas para que se estacione hizo caso omiso, siendo por ello perseguido e intervenido en el Pasaje Alfonso Ugarte Mz. 27, lote 05, de dicho pueblo joven, donde se identificó a su conductor, el imputado Jorge Luis Díaz Apaza, quien presentaba visibles síntomas de ebriedad y aliento alcohólico, motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría para las diligencias de ley.

Que, al ser sometido al examen de dosaje etílico el imputado, este dio resultado positivo según Informe Pericial de Dosaje Etilico N°0030-0015531 (B-014654), presentando 2.17 g/l (dos gramos con diecisiete centigramos de alcohol por litro de sangre).

Estableciéndose así, que el imputado JORGE LUIS DIAZ APAZA, en forma dolosa y a sabiendas de su estado de ebriedad condujo vehículo motorizado, generando un peligro a la sociedad.

4. TIPO PENAL.

Conforme a las circunstancias en que se ha suscitado los hechos atribuido al imputado, se encuadra en el delito penal previsto contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en su modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad, tipificado en el primer párrafo del Artículo 274° del Código Penal, el mismo que prescribe:

"El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos – litro, o bajo efectos de drogas tóxicas, estupeficientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36° Inciso 7).

Quando el agente presta servicios de transporte público de pasajero, mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupeficientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de setenta a ciento cuarenta jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36° inciso 7)"

4.1. Grado de participación.

El imputado JORGE LUIS DIAZ APAZA, responderá en el presente caso conforme a los hechos ocurridos como Autor, conforme a lo previsto por el Art. 23° del C.P.

5. IDENTIFICACIÓN DEL AGRAVIADO.

EL ESTADO, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su Procurador Público Eugenio Rivera García, quien tiene fijado su domicilio real en el Jr. Zorritos N°1203 – Lima, casilla electrónica SINOE 891, con teléfonos de coordinación 6157800 #1606/ 988030969/963750764.

6. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción:

6.1. Acta de Intervención policial (folios 02), de fecha 07 de noviembre del 2018, en la que se describen los hechos imputados y se hace constar que el imputado Jorge Luis Díaz Apaza presentó síntomas de embriaguez y aliento alcohólico.

6.2. Informe Pericial de Dosaje Etílico N°0030-0015531 con registro B-014654, (folios 06), practicado al imputado Jorge Luis Díaz Apaza, que arrojó el resultado positivo de **2.17 g/l (dos gramos, con diecisiete centigramos de alcohol por litro de sangre)**.

6.3. Declaración del imputado Jorge Luis Díaz Apaza de fecha 08 de noviembre del 2018, donde reconoce los hechos imputados en su contra, solicitando acogerse a un principio de oportunidad para la reparación del daño, el cual sin embargo no ha cumplido con el pago acordado.

6.4. Acta de Audiencia de Aplicación de Principio de Oportunidad de fecha 08 de noviembre del 2019, donde el imputado Jorge Luis Díaz Apaza se acoge a un principio de oportunidad a nivel fiscal y no cumple con el pago total de la reparación civil en el plazo otorgado.

6.5. Comprobantes de Pago N°02913252-5-D por el monto de S/. 623.00 soles, **N°02913246-5-D**, por el monto de S/. 103.70 soles y **N°02906013-5-D**, por el monto de S/. 200.00 soles efectuados por el imputado con motivo del acuerdo arribado al haberse acogido a un principio de oportunidad, el cual no ha sido cumplido en su totalidad.

6.6. Oficio N°37576-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, donde se informa que el imputado Jorge Luis Díaz Apaza, NO registra antecedentes penales.

7. MEDIDA DE COERCION PROCESAL

Atendiendo al presente requerimiento, se requiere asimismo la **COMPARECENCIA SIMPLE** del imputado **JORGE LUIS DIAZ APAZA**, conforme a lo establecido en el numeral 2) del Artículo 286º del Código Procesal Penal.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señor Juez, proceder a emitir la resolución que corresponda de conformidad al Art. 447º del Código Procesal Penal.

PRIMER OTROSI: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: JORGE LUIS DIAZ APAZA tiene como **domicilio real** en calle Juan Manuel Polar N°214, Urbanización 15 de Agosto, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa, con domicilio procesal en Av. Independencia N°927-933, cercado de Arequipa, Arequipa (Sede de la Defensoría Pública), siendo su abogada defensora Marta Catacora Aramayo con casilla electrónica N°33727.

Agraviado: EL ESTADO, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su Procurador Público Eugenio Rivera Garcia, quien tiene fijado su **domicilio real** en el Jr. Zorritos N°1203 – Lima, **casilla electrónica SINOE 891**, con teléfonos de coordinación 6157800 #1606/ 988030969/963750764.

SEGUNDO OTROSI: Se adjunta al presente **los originales de los elementos de convicción** y ejemplares del presente requerimiento, para su notificación a todos los sujetos procesales distintos al Ministerio Público.
/bstg

Arequipa, 25 de marzo del 2019.

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Caso N° : 1506014504-2019-3493-0
Expediente N° : 04459-2019-0-0401-JR-PE-01
Imputado : Jorge Luis Diaz Apaza
Delito : Peligro Común -- CEED
Sumilia : ACUSACION FISCAL
Fiscal Responsable : Blanca Susana Terroba Gutiérrez

SEÑORA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL MBI PAUCARPATA:

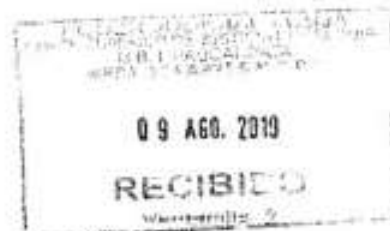
LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n, III Etapa – Guardia Civil, Paucarpata, en el proceso seguido contra Jorge Luis Diaz Apaza, por la comisión del delito contra la Seguridad Pública – Peligro Común en su modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad, en agravio del Estado, ante usted, me presento y expongo:

I. REQUERIMIENTO:

En mérito a lo dispuesto por su Juzgado en la Audiencia de Control de Aplicación de Incoación del Proceso Inmediato realizado con fecha 07 de agosto del 2019, y al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los arts. 60°, 447° literal 6 y 349° del Código Procesal Penal, formulo **REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL** contra **JORGE LUIS DIAZ APAZA**, por el delito Contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en la modalidad de Conducción en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad, representado por el Ministerio Público, en los términos siguientes:

DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:

NOMBRE Y APELLIDOS	: JORGE LUIS DIAZ APAZA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	: 44762865
FECHA DE NACIMIENTO	: 13-09-1987
EDAD	: 31 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO	: Paucarpata, Arequipa, Arequipa
NOMBRE DEL PADRE	: Francisco
NOMBRE DE LA MADRE	: Avelina
ESTATURA	: 1.65 m
SEXO	: Masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN	: Secundaria Completa
ESTADO CIVIL	: Casado
OCUPACIÓN	: Taxista Independiente
DOMICILIO REAL	: Calle Juan Manuel Polar N°214, Urb. 15 de Agosto, Paucarpata, Provincia y Departamento de Arequipa,
TELEFONO	: 928446142
DOMICIO PROCESAL	: Av. Independencia N°927-933, cercado Arequipa, Arequipa,
ABOGADO DEFENSOR	: Joey Ramirez Silva (Defensor Público)



III. DATOS DE LA PARTE AGRAVIADA:

EL ESTADO, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su Procurador Público Eugenio Rivera Garcia, quien tiene fijado su **domicilio real** en el Jr. Zorritos N°1203 – Lima, casilla electrónica SINOE 891, con teléfonos de coordinación 6157800 #1606/ 988030969/963750764.

IV.- DESCRIPCIÓN DEL HECHO ATRIBUIDO AL ACUSADO:

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distr. Fiscal de Arequipa

Hecho Punible	Imputación Necesaria
Delito contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en la modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad.	<p>Este Ministerio imputa al ciudadano JORGE LUIS DIAZ APAZA, la comisión del delito contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en la modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad; y en ese sentido los actos que efectuó el imputado para la comisión del ilícito, ocurrieron según el siguiente detalle:</p> <p>Circunstancias Precedentes: Con fecha 07 de noviembre del 2018, aproximadamente las 21:35 horas, personal policial a bordo de la unidad móvil PL-21209, realizaba un operativo policial por las inmediaciones de la Av. El Sol con Av. Venezuela – Miguel Grau, Paucarpata,</p> <p>Circunstancias Concomitantes Es en esas circunstancias, que observaron que el vehículo Cherry QQ, color rojo de placa de rodaje A0A-447, circulaba con las luces apagadas, donde al realizarle las señas para que se estacione hizo caso omiso, siendo por ello perseguido e intervenido en el Pasaje Alfonso Ugarte Mz. 27, lote 05, de dicho pueblo joven, donde se identificó a su conductor, el imputado Jorge Luis Diaz Apaza, quien presentaba visibles síntomas de ebriedad y aliento alcohólico, motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría de Miguel Grau para las diligencias de ley.</p> <p>Circunstancias Posteriores Luego de la intervención policial, al momento de practicarse la prueba de intoxicación en sangre al imputado, se obtuvo como resultado positivo, según Informe Pericial de Dosaje Etilico N°0030-0015531 (B-014654), presentando 2.17 g/l (dos gramos con diecisiete centigramos de alcohol por litro de sangre).</p> <p>Estableciéndose así, que el imputado en forma dolosa y a sabiendas de su estado de ebriedad condujo vehículo motorizado, generando un peligro a la sociedad.</p>

IV. ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito y vinculan al imputado como responsable del delito:

1. **Acta de Intervención policial** (folios 02), de fecha 07 de noviembre del 2018, en la que se describen los hechos imputados y se hace constar que el imputado Jorge Luis Diaz Apaza presentó síntomas de embriaguez y aliento alcohólico.
2. **Informe Pericial de Dosaje Etilico N°0030-0015531 con registro B-014654**, (folios 06), practicado al imputado Jorge Luis Diaz Apaza, que arrojó el resultado positivo de 2.17 g/l (dos gramos, con diecisiete centigramos de alcohol por litro de sangre).
3. **Declaración del imputado Jorge Luis Diaz Apaza** de fecha 08 de noviembre del 2018, donde reconoce los hechos imputados en su contra, solicitando acogerse a un principio de oportunidad para la reparación del daño, el cual sin embargo no ha cumplido con el pago acordado.
4. **Acta de Audiencia de Aplicación de Principio de Oportunidad** de fecha 08 de noviembre del 2019, donde el imputado Jorge Luis Diaz Apaza se acoge a un principio de oportunidad a nivel fiscal y no cumple con el pago total de la reparación civil en el plazo otorgado.
5. **Comprobantes de Pago N°02913252-5-D** por el monto de S/. 623.00 soles, **N°02913246-5-D**, por el monto de S/.103.70 soles y **N°02906013-5-D**, por el monto de S/.200.00 soles efectuados por el imputado con motivo del acuerdo arribado al haberse acogido a un principio de oportunidad, el cual no ha sido cumplido en su totalidad.

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Quinto Nivel de Atención

6. Oficio N°37576-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, donde se informa que el imputado Jorge Luis Diaz Apaza, NO registra antecedentes penales.

V. PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO:

Que, el artículo 23º del Código Penal señala: "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción."

De lo expuesto, queda claro que el acusado Jorge Luis Diaz Apaza, ha actuado en calidad de **AUTOR** del delito de Peligro Común en la modalidad de Conducción en estado de ebriedad, al haber sido intervenido conduciendo el vehículo de placa AOA-447, en estado de ebriedad conforme al examen de dosaje etílico practicado, el mismo que dio como resultado 2.17g/l (dos gramos, diecisiete centigramos de alcohol por litro de sangre).

VI. RELACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE CONCURRA:

Conforme al resultado de la investigación realizada y analizados los artículos 20º al 22º del Código Penal, se tiene que no existe circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal del acusado, es decir, que no existen causas eximentes, eximentes imperfectas o imputabilidad restringida del acusado.

VII. TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y CUANTÍA DE LA PENA:

a) Tipificación de los hechos

Conforme se ha detallado en la presente, se imputa al acusado ser el autor del delito de Conducción de vehículo en estado de ebriedad, en agravio de la Sociedad, ilícito penal previsto en el primer párrafo del Artículo 274º del Código Penal.

Conducción en estado de ebriedad

"Artículo 274º.- El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36 inciso 7). (...)".

Que, el delito de Conducción de Vehículos en Estado de Ebriedad es un delito de comisión instantánea, pues la acción se agota en todos sus efectos en el momento en que se concretan los elementos o las condiciones de su punibilidad; siendo así con el Informe Pericial de Dosaje Etilico y Acta de Intervención policial, se acredita la comisión del delito de Peligro Común, así como su responsabilidad penal, poniendo en peligro no solo su persona sino a toda la comunidad que hace uso de la vía pública.

b) Determinación de la Pena

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previstas en los artículos cuarto y octavo respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito, en tanto que la conducta del acusado al conducir un vehículo en estado de ebriedad pone en peligro no solo la integridad física de su persona sino a toda la comunidad que hace uso de la vía pública.

Que, a efectos de la determinación de la pena temporal, es decir, para aquella que tiene una duración mínima de dos días y una máxima de 35 años, corresponde desarrollarla en base a etapas o fases normadas en el Artículo 45-Aº del Código Penal; así, en la primera etapa se definen los límites de la **pena básica**, la cual se encuentra establecida en la ley para el delito; y en la segunda etapa se debe identificar la **pena concreta**, para ello se tiene en cuenta el espacio y límite prefijado por la pena básica, marco que se divide en tres tercios y luego en base a las circunstancias legales presentes es que se determina la pena concreta dentro de uno de los tercios establecidos.

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prox. Penal Corp. de Pucallpa
Distrito Fiscal de Arica

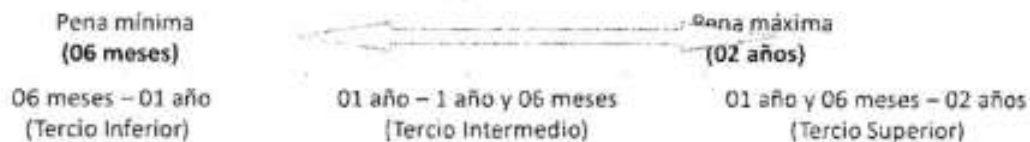
Que, conforme a lo señalado por el artículo 46º del Código Penal, se establece las **Circunstancias de atenuación y agravación**:

1.- Constituyen circunstancias de atenuación, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible las siguientes: "a) La carencia de antecedentes penales; b) ..."

2.- Constituyen **circunstancias agravantes**, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: "a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; ..."

Siendo así, y advirtiéndose en el presente caso que existe una circunstancia atenuante, ya que el imputado no registra antecedentes penales, corresponde efectuar la petición de la imposición de la pena, dentro del margen del **tercio inferior**, conforme a lo prescrito en el inciso a) del numeral 2 del artículo 45-A del Código Penal; y encontrándose la conducta del acusado dentro del primer párrafo del artículo 274º del Código Penal, se procede al desarrollo de la individualización de la pena de manera gráfica:

DELITO DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBriedAD
La pena es: "no menor de seis meses ni mayor de dos años"



De lo expuesto, la **PENA QUE SE PROPONE A IMPONERSE AL IMPUTADO JORGE LUIS DIAZ APAZA, ES DE UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, debiéndose indicar que la pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

De otro lado, tenemos con respecto a la pena de **INHABILITACION**:

"Artículo 36º.- La inhabilitación produce, según disponga la sentencia: 7. Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. (...)"

En consecuencia, en aplicación del citado tipo penal, solicito además se imponga al acusado la pena de **INHABILITACION** de suspensión de la licencia para conducir cualquier tipo de vehículo, **por el mismo tiempo solicitado para la pena privativa de libertad**, esto es de un año, conforme al artículo 36º numeral 7) del Código Penal.

VIII. MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Que, de conformidad con lo prescrito por el Artículo 92º del Código Penal, todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así, que en aquellos casos en los que la conducta del agente produce un daño, debe regir el principio del daño causado, es decir, tener en cuenta la repercusión de la conducta incriminada en la víctima, por cuya razón la reparación civil debe de alguna manera tender a compensar y resarcir dicho agravio, fijándose prudencialmente de acuerdo a la magnitud del mismo,

El Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de la República del 13 de octubre del 2006, en su fundamento 8º, define que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Asimismo, en su fundamento 9º, define; "Los **delitos de peligro** -especie de tipo legal según las características externas de la acción - pueden

definirse como aquellos en los que no se requiere que la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en *peligro* de sufrir la lesión que se quiere evitar [el *peligro* es un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su objeto de referencia es un bien jurídico, aunque su fundamento, además de normativo, también se basa en una regla de experiencia o de frecuente que es, a su vez, sintetizada en un tipo legal], sea cuando se requiere realmente la posibilidad de la lesión -*peligro concreto*- o cuando según la experiencia general representa en sí misma un peligro para el *objeto protegido* -*peligro abstracto*-. Los primeros son, siempre, delitos de resultado, y los otros son delitos de mera actividad."

A partir de lo expuesto, cabe establecer si los delitos de peligro pueden ocasionar daños civiles y, por tanto, si es menester fijar la correspondiente reparación civil, más allá de las especiales dificultades que en estos delitos genera la concreción de la responsabilidad civil. Como se ha dicho, el daño civil lesiona derechos de naturaleza económica y/o derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, de las personas. Por consiguiente, aun cuando es distinto el objeto sobre el que recae la lesión en la ofensa penal y en el daño civil, es claro que, pese a que no se haya producido un resultado delictivo concreto, es posible que existan daños civiles que deban ser reparados.

En el presente caso, el acusado se encuentra en el tercer periodo de alcoholemia – Ebriedad, por contar con 2.17 gramos de litro de alcohol por litro de sangre, por lo que de manera prudencial y proporcional **SE SOLICITA QUE SE IMPONGA AL ACUSADO JORGE LUIS DIAZ APAZA AL PAGO DE S/.1,500.00 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL**, la que se deberá pagar a favor del agraviado.

IX. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

a) Testigo:

TESTIGO
Domicilio Laboral
Extremos a declarar

PNP GIOVANI LOAYZA DEL CARPIO
Notificar por intermedio de la Región Policial Arequipa
El testimonio indicará la forma y circunstancias de cómo fue intervenido el hoy acusado Jorge Luis Díaz Apaza, conduciendo en estado de ebriedad el vehículo de placa AQA-447.
UTILIDAD: Probará la intervención realizada al acusado cuando éste se encontraba manejando vehículo motorizado en estado de ebriedad.
PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación.
CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.

TESTIGO
Domicilio Laboral
Extremos a declarar

CAPITAN PNP GIOVANNA GUADALUPE TORRES HITO
Policlínico PNP "Arequipa"
Explicará el contenido y las conclusiones que arribó en el Informe de Dosaje Etílico N°0030-0015531 (B-014654), efectuado en la muestra extraída al acusado Jorge Luis Díaz Apaza.
UTILIDAD: Acreditará la materialidad del delito de Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad y que el acusado el día de los hechos estuvo conduciendo el vehículo automotor bajo los efectos del alcohol.
PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación.
CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
Ofreciéndose asimismo el Informe Pericial de Dosaje Etílico a efecto que sea agregado al expediente judicial conforme al Art. 136° numeral d) del C.P.P., y se proceda en caso sea necesario conforme a lo previsto por el Art. 383 numeral 1) literal c) del C.P.P.

b) Prueba Documental:

DR. LUIS GUILLELMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Pto. Penal Corp. de Paucapari/
Distrito Fiscal de Arequipa

PRUEBA DOCUMENTAL	ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2018
Información que proporciona	En la cual se detalla la intervención policial efectuada al acusado Jorge Luis Díaz Apaza, en circunstancias que conducía el vehículo de placa de rodaje AOA-447, en estado de ebriedad. UTILIDAD: Acreditará la intervención del acusado por parte de personal policial. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	Comprobantes de Pago N°02913252-5-D, N°02913246-5-D, y N°02906013-5-D
Información que proporciona	Utilidad: Acreditan en parte el pago de la reparación civil efectuado por el acusado.
PRUEBA DOCUMENTAL	OFICIO N°37576-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, EMITIDO POR EL COORDINADOR REGISTRO JUDICIAL AREQUIPA.
Información que proporciona	Utilidad: Informa sobre el resultado negativo de los antecedentes penales que registra el acusado Jorge Luis Díaz Apaza, ello para efectos de la imposición de la pena.

X. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL:

Contra del imputado se ha dictado medida de comparecencia simple.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señor Juez, acceder al presente requerimiento y conferir el trámite correspondiente.

Primer Otrosí: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: JORGE LUIS DIAZ APAZA tiene como domicilio real en calle Juan Manuel Polar N°214, Urbanización 15 de Agosto, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa, con domicilio procesal en Av. Independencia N°927-933, cercado de Arequipa, Arequipa (Sede de la Defensoría Pública), siendo su abogado defensor Joey Ramirez Silva.

Agraviado: EL ESTADO, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su Procurador Público Eugenio Rivera García, quien tiene fijado su domicilio real en el Jr. Zorritos N°1203 - Lima, casilla electrónica SINOE 891, con teléfonos de coordinación 6157800 #1606/988030969/963750764.

Segundo Otrosí: Solicito al juzgado, se tenga en cuenta, que se cumple con adjuntar los originales de los elementos de convicción, así como dos ejemplares de la acusación, a fin de que sean notificados a las partes.

/bstg

Arequipa, 07 de Agosto del 2019.


DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA



Resolución N°08

En la ciudad de Arequipa, siendo los dos días de diciembre del año dos mil veinte, la señora magistrada **Judy Jenny Rodríguez García**, a cargo del Segundo Juzgado Unipersonal de Paucarpata, luego de realizar el juicio oral, público, contradictorio en audiencia única de proceso inmediato, ha emitido la siguiente:

SENTENCIA Nro. 353- 2020

I. PARTE EXPOSITIVA

VISTOS Y OÍDOS

Primero.- Identificación de Proceso

Se trata de la causa signada como expediente número **4459-2019**, seguido a **JORGE LUIS DÍAZ APAZA**, por el delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, en agravio del **ESTADO** representado por la procuraduría pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Segundo.- Identificación del Acusado

Se juzga a **JORGE LUIS DÍAZ APAZA** con DNI 44762865, con domicilio en Urb. Quince de agosto 214 del distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, nacido el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, natural de Arequipa, hijo de Francisco y Avelina, con grado de instrucción secundaria completa, actualmente no labora.

Tercero.- Identificación de la parte Agraviada

Se ha considerado al **ESTADO** representado por la procuraduría pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cuarto.- Delimitación de la Imputación

El Ministerio Público, como titular de acción penal pública y por ende encargado de establecer la tesis fáctica materia de proceso, en el marco de la requisitoria escrita y oralizada en audiencia en su respectivo alegato oral, ha efectuado la siguiente imputación al acusado.

4.1. Hechos Imputados:

Circunstancias Precedentes: Con fecha 07 de noviembre del 2018, aproximadamente las 21:35 horas, personal policial a bordo de la unidad móvil PL-21209, realizaba un operativo policial por las inmediaciones de la Av. El Sol con Av. Venezuela - Miguel Grau, Paucarpata,

Circunstancias Concomitantes: Es en esas circunstancias, que observaron que el vehículo Cherry QQ, color rojo de placa de rodaje AOA-447, circulaba con las luces apagadas, donde al realizarle las señas para que se estacione hizo caso omiso, siendo por ello perseguido e intervenido en el Pasaje Alfonso Ugarte Mz. 27, lote 05, de dicho pueblo joven, donde se identificó a su conductor, el imputado Jorge Luis Díaz Apaza, quien presentaba visibles síntomas de ebriedad y aliento alcohólico, motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría de Miguel Grau para las diligencias de ley.

Circunstancias Posteriores: Luego de la intervención policial, al momento de practicarse la prueba de intoxicación en sangre al imputado, se obtuvo como resultado positivo, según Informe Pericial de Dosaje Etílico N50030-0015531 (B-014654), presentando 2.17 g/l (dos gramos con diecisiete centigramos de alcohol por litro de sangre). Estableciéndose así, que el imputado en forma dolosa y a sabiendas de su estado de ebriedad condujo vehículo motorizado, generando un peligro a la sociedad.

4.2. Calificación Jurídica

Los hechos expuestos han sido tipificados por el representante del Ministerio Público como delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal.

4.3. Pretensión Penal

El Ministerio Público solicitó se imponga al acusado **un año** de pena privativa de la libertad e inhabilitación de la suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo.

4.4. Pretensión Civil

El Ministerio Público ha solicitado por concepto de reparación civil la suma de **S/. 1,500.00 soles** a favor de la parte agraviada.

4.5. Defensa Técnica y Autodefensa del Acusado

Reconociendo la responsabilidad penal en los hechos materia de imputación, así como la pretensión civil, se acogió a la conclusión anticipada.

Quinto.- Del Acuerdo Propuesto:

5.1. El Ministerio Público y la defensa del procesado hicieron conocer a este Despacho que habían llegado a un acuerdo sobre la pena, la misma que consiste en **LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO POR EL PLAZO DE UN AÑO**, que estará condicionado al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: **a)** Comparecerá de manera personal y obligatoria ante el juzgado de Ejecución cada dos meses a fin de informar y justificar sus actividades, pudiendo realizarlo también a través de la plataforma virtual de la página web del Poder Judicial para lo cual deberá de empadronarse; **b)** La prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del juzgado de ejecución; **c)** Deberá cumplir con el pago de la reparación civil en la forma, modo y plazo acordados con el Ministerio Público; **d)** la prohibición de cometer nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza; **e)** La prohibición de consumir bebidas alcohólicas y de concurrir a lugares de su expendio.

Asimismo, ante el incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65 del Código Penal de manera progresiva y en el extremo más grave se revocará el período de prueba y se le impondrá once meses de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva. Asimismo, se le impondrá la copenalidad de inhabilitación en la forma de suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo de once meses.

5.2. Asimismo, las partes convinieron el monto de la reparación civil a favor de la parte agraviada en **S/.500.00(QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)**, que deberá pagar el sentenciado de la siguiente forma: En cinco cuotas mensuales de S/.100.00 soles cada una de ellas que empezarán a ser canceladas el último día hábil del mes de diciembre del 2020 y así en forma sucesiva y mensual hasta culminar con las cinco cuotas que deberá efectuar mediante Depósitos Judiciales en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución debiendo hacer llegar las constancias de pago al Juzgado para los fines de su endoso y cobro respectivo.

Sexto.- Itinerario Procesal

En mérito al auto de citación a juicio se citó a los sujetos procesales a juicio oral. Se llevó el juzgamiento con la presencia del acusado **JORGE LUIS DÍAZ APAZA**. Instalada la audiencia, se escuchó el alegato de apertura del Ministerio Público y siendo que al tomar la palabra la defensa técnica del imputado, señaló abstenerse de tal exposición manifestando la intención de dicha parte procesal de acogerse a la conclusión anticipada. Así, al inicio del juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos, al preguntársele si admitía ser participe en calidad de autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; éste, previa consulta con su defensa técnica, aceptó los hechos objeto de acusación fiscal, así como su responsabilidad penal, también aceptó la responsabilidad civil. Ante ello, se declaró la conclusión anticipada del juicio, se procedió a consultar a las partes respecto de algún acuerdo sobre la pena y reparación civil, siendo que los mismos acordaron todos los extremos de la pena y la reparación civil. Siendo ello así, el estado de la causa es el de expedirse sentencia la cual, en efecto, se emite el día de la fecha.

II. PARTE CONSIDERATIVA

Primero.- De la Conclusión Anticipada

El artículo 427° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencia vinculantes, tales como: el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008/CJ116 y el Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116 que, si bien este último está referido a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de legalidad y proporcionalidad atañen a la conclusión anticipada. No obstante, la presencia del juzgador no es pasiva, para efectos de la homologación de la "conformidad" ya que, existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

Segundo.- Ley Penal Aplicable

2.1. Conforme a la acusación, es aplicable el tipo penal de **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBriedAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal.

2.2. El texto normativo de tal numeral, prevé:

"Artículo 274.- conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad.

El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en porción mayor de 0.5 gramos-litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupeficientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuenta y dos jornadas a ciento cuatro jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 7.

2.3. Para la configuración del ilícito, conforme a los hechos materia de imputación en el presente caso, y que han sido oralizados por la titular de la acción penal, se requiere que el agente haya conducido un

vehículo motorizado en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en porción mayor de 0.5 gramos-litro.

Tercero.- Juicio de Subsunción

3.1. La conducta del acusado se adecua objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito antes referido tal como han sido expuestos los cargos por el Ministerio Público -los cuales son inmodificables- por cuanto se ha demostrado que **JORGE LUIS DÍAZ APAZA** estuvo conduciendo en estado de ebriedad el vehículo Cherry QQ, color rojo de placa de rodaje AOA-447 siendo por ello perseguido e intervenido en el Pasaje Alfonso Ugarte Mz. 27, lote 05 luego de la intervención policial, al momento de practicarse la prueba de intoxicación en sangre al imputado, se obtuvo como resultado positivo, según Informe Pericial de Dosaje Etílico N50030-0015531 (B-014654), presentando 2.17 g/l (dos gramos con diecisiete centigramos de alcohol por litro de sangre). Ello así se tiene del reconocimiento efectuado de manera expresa, libre y voluntaria por el acusado, en audiencia y previa consulta con su defensa técnica, al aceptar la responsabilidad de los hechos materia de imputación, ello conforme a la naturaleza de la conformidad en juicio.

3.2. No se ha alegado ni probado causa que justifique el actuar típico del acusado o que excluya su culpabilidad.

3.3. Por ello concurren todos los elementos del tipo, los mismos que han sido realizados con conocimiento y voluntad conforme se desprende de los hechos acreditados en autos, concurriendo además el elemento subjetivo, conforme al reconocimiento efectuado por el acusado.

3.4. En consecuencia, la conducta del encausado deviene en típica, antijurídica y culpable.

Cuarto.- Individualización de la Pena

4.1. El principio de Proporcionalidad, es aquel principio que exige al juzgador verificar que la pena guarde una relación de correspondencia con el injusto cometido por el agente, se encuentra reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, el que debe ser entendido como la correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar; por tanto constituye un límite al *IUS PUNIENDI*, en tanto exige un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación legal. Esto significaría que el principio de proporcionalidad debe guardar relación conforme a la culpabilidad, pero no siempre de acuerdo al injusto la culpabilidad puede coincidir con la misma, por cuanto esta puede resultar mayor a la culpabilidad concreta; entiéndase que los criterios para establecer la proporcionalidad deben atender aquellos vinculados al injusto, importancia del rango del bien jurídico protegido, grado de lesión del mismo, impacto social y los diferentes medios de comisión del hecho, entre otros aspectos, así, el juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad. En el caso que nos ocupa, se evidencia que el actuar del acusado **JORGE LUIS DÍAZ APAZA** es una conducta gravosa en relación al bien jurídico protegido a través de la conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, referido a la parte agravada, actividad ilícita que constituye un hecho reprochable.

4.2. La Fiscalía ha acordado con la defensa del acusado la reserva de fallo condenatorio por el plazo de un año en caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65 del Código Penal de manera progresiva y en el extremo más grave se revocará el periodo de prueba y se le impondrá once meses de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva. Asimismo, se le impondrá la copenalidad de inhabilitación en la forma de suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo de once meses. Para lo cual, se procede a realizar la determinación judicial de la pena, en base a los siguientes parámetros.

4.3. Para el caso de autos, se toma en cuenta los criterios fundamentadores de la pena establecidos en el artículo 45º, 45º-A y 46 modificados e incorporados al Código Penal por la Ley N° 30076.

4.4. Se procede a verificar criterios previstos en el artículo 45º-A señalado: **a) Espacio punitivo de determinación de pena básica:** El delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, prevé una pena no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuenta y dos jornadas a ciento cuatro jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 7, en tal sentido corresponde hacer el análisis de la pena. **b) Determinación de pena concreta:** No presenta circunstancias agravantes genéricas, se advierte una circunstancia atenuante genérica (carencia de antecedentes penales); entonces la pena se ubicará dentro del tercio inferior, es decir entre seis meses a un año, por lo que se determina la pena en un año, quantum al que, conforme a lo sostenido por la titular de la acción penal, se le ha descontado 1/7 por la premialidad correspondiente a la conclusión anticipada, quedando la pena en once meses, la cual se reserva por el plazo de un año, considerando la prognosis positiva del agente, quien informará y justificará sus actividades cada dos meses ante el Juzgado de Ejecución, no incurrirá en nuevo ilícito penal, además se ha comprometido a cancelar la reparación civil; y, del análisis de los antecedentes, conforme se tiene anotado teniéndose en cuenta las condiciones personales del actor así como las circunstancias del evento delictivo en el que ha participado,

la naturaleza del mismo, y merituándose finalmente lo previsto en el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008-CJ/116 se concluye que debe ser aprobado.

Quinto.- Determinación de la Reparación Civil

5.1. El objeto civil se rige por los artículos 11° y 12° del Código Procesal Penal y 93° al 101° del Código Penal, precepto éste último que nos remite a las disposiciones correspondientes del Código Civil.

5.2. En el caso que nos ocupa se tiene que las partes han fijado la Reparación Civil a favor de la parte agraviada en el monto de **S/.500.00(QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)**, que deberá pagar el sentenciado de la siguiente forma: En cinco cuotas mensuales de S/.100.00 soles cada una de ellas que empezarán a ser canceladas el último día hábil del mes de diciembre del 2020 y así en forma sucesiva y mensual hasta culminar con las cinco cuotas que deberá efectuar mediante Depósitos Judiciales en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución debiendo hacer llegar las constancias de pago al Juzgado para los fines de su endose y cobro respectivo. Siendo que el monto establecido por tal concepto resulta razonable, estando a los extremos anotados y que el mismo no ha sido materia de controversia, debe ser aprobado.

Sexto.- Pronunciamiento sobre las costas

El artículo 497.5° del Código Procesal Penal establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz, siendo que, en el presente caso, al haber concluido el proceso por "conformidad", no procede la imposición de costas.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones administrando justicia a nombre del pueblo de quien emana dicha facultad,

FALLO:

Primero.- APROBANDO mediante la presente sentencia de conformidad, los acuerdos arribados entre el acusado debidamente asesorado por la defensa de elección y el Ministerio Público, durante el juicio oral; en consecuencia.

Segundo.- DECLARO a JORGE LUIS DÍAZ APAZA, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, como **AUTOR** del delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, en agravio del **ESTADO** representado por la procuraduría pública del Ministerio de **Transportes y Comunicaciones**.

Tercero.- Absteniéndome de dictar la parte condenatoria de la presente, **DISPONGO LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO POR EL PLAZO DE UN AÑO**, que estará condicionado al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: **a)** Comparecerá de manera personal y obligatoria ante el juzgado de Ejecución cada dos meses a fin de informar y justificar sus actividades, pudiendo realizarlo también a través de la plataforma virtual de la página web del Poder Judicial para lo cual deberá de empadronarse; **b)** La prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin autorización del juzgado de ejecución; **c)** Deberá cumplir con el pago de la reparación civil en la forma, modo y plazo acordados con el Ministerio Público; **d)** la prohibición de cometer nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza; **e)** La prohibición de consumir bebidas alcohólicas y de concurrir a lugares de su expendio.

Asimismo, ante el incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65 del Código Penal de manera progresiva y en el extremo más grave se revocará el periodo de prueba y se le impondrá once meses de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva. Asimismo, se le impondrá la copenalidad de inhabilitación en la forma de suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo de once meses.

Cuarto.- FIJO el monto de la **REPARACIÓN CIVIL** a favor de la parte agraviada en la suma de **S/.500.00(QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)**, que deberá pagar el sentenciado de la siguiente forma: En cinco cuotas mensuales de S/.100.00 soles cada una de ellas que empezarán a ser canceladas el último día hábil del mes de diciembre del 2020 y así en forma sucesiva y mensual hasta culminar con las cinco cuotas que deberá efectuar mediante Depósitos Judiciales en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución debiendo hacer llegar las constancias de pago al Juzgado para los fines de su endose y cobro respectivo.

Quinto.- DISPONGO que no corresponde fijar el pago de costas en el presente proceso.

Sexto.- MANDO que consentida o ejecutoriada la presente, se cursen las comunicaciones correspondientes para su inmediato y estricto cumplimiento, y por esta mi sentencia, así me pronuncio, mando y firmo en audiencia pública de la fecha. **Regístrese y Comuníquese. -**



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Caso N° : 1506014504-2019-3606-0

Fiscal Responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez
(Casilla Electrónica N°96017)

**SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – SEDE MBJ
PAUCARPATA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, ante Ud. respetuosamente digo:

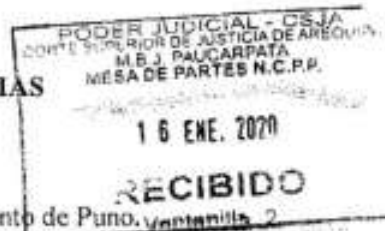
1. REQUERIMIENTO:

Al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los arts. 446° literal 4) y 336° literal 2 del Código Procesal Penal, **FORMULO REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO** contra:

EMERSON ORDOÑEZ ARIAS, en el caso seguido en su contra, por el delito **Contra la Familia - Omisión de la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria**, previsto en el primer párrafo del Art. 149° primer párrafo del C.P., en agravio de la menor **ZHARICK SELENA ORDOÑEZ GALLEGOS**, representada por su madre **MARIA YSABEL GALLEGOS VEGA**, en los siguientes términos:

2. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO

NOMBRE Y APELLIDOS : EMERSON ORDOÑEZ ARIAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 00792962
FECHA DE NACIMIENTO : 25/07/1974
EDAD : 45 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO : distrito, provincia y departamento de Puno, Ventanilla 2
NOMBRE DEL PADRE : Pedro Pablo
NOMBRE DE LA MADRE : Lourdes
ESTATURA : 1.67 m
SEXO : Masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN : Superior Completa
ESTADO CIVIL : soltero
OCUPACIÓN : se desconoce
DOMICILIO REAL : Calle Zela N° 864, Tacna, Tacna, Tacna
TELEFONO : se desconoce
DOMICILIO PROCESAL : Pasaje Santa Rosa N° 104, Cercado de Arequipa, Arequipa
ABOGADO DEFENSOR : Abraham Bravo Chacón
CASILLA ELECTRONICA : 41877



3. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE AGRAVIADA:

- La menor **ZHARICK SELENA ORDOÑEZ GALLEGOS**, representada por su madre **MARIA YSABEL GALLEGOS VEGA** identificada con DNI 40192721, han fijado domicilio real en la Urb. Tasahuayo F-12, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa; con domicilio

procesal en Av. Independencia Nro.927-933, cercado de Arequipa, Arequipa; siendo su abogada defensora Ana L. Flores Gutiérrez, con **casilla electrónica 33790**.

4. DE LOS PRESUPUESTOS DEL PROCESO INMEDIATO:

4.1. Teniendo en cuenta que el proceso inmediato es un proceso especial, que busca la simplificación y celeridad en la sustanciación del procesos penales, por medio del cual de la fase de diligencias preliminares se pasa directamente al juicio oral, suprimiendo las etapas de investigación preparatoria y la etapa intermedia de un proceso común, el mismo que procede en los supuestos de flagrancia delictiva, confesión sincera del imputado; cuando los elementos de convicción recabados en el curso de las diligencias preliminares evidencien la materialización del ilícito penal y la participación del imputado, así como en la comisión de los Delitos de Omisión de Asistencia Familiar y del Delito de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, conforme lo establece el artículo 446° del Código Procesal Penal.

4.2. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que, en el presente caso, se investiga la comisión del Delito de Omisión de Asistencia Familiar, delito respecto del cual el inciso 4) del artículo 446° del Código Procesal Penal, establece "4. *Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de Omisión de Asistencia Familiar y los de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción*", y estando a la imperatividad de la norma, corresponde en el caso en autos incoar el presente proceso inmediato.

5. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN.

- Se tiene de los actuados, que por ante el Primer Juzgado de Familia del MJB de Paucarpata, se tramita el expediente N°00145-2013-0-0412-JM-FC-02, seguido por María Ysabel Gallegos Vega, en contra de Emerson Ordoñez Arias.

Que, mediante Resolución N°017 de fecha 30 de junio del 2014, el Juzgado aprueba el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes en todos sus extremos, debiendo cumplir el ahora imputado con pagar la suma de trescientos veinticinco con 00/100 soles (S/.325.00) a favor de su menor hija Zharick Selenia Ordoñez Gallegos, en forma mensual.

Pero es el caso, que el imputado no ha cumplido con tal obligación, de tal forma que se practicó la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al período comprendido desde el 29 de mayo del 2013 al 31 de julio del 2016, adeudando la suma de S/.15,283.93 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes con la Resolución N°34 de fecha 05 de setiembre del 2017.

Hecho que conllevó, que posteriormente fuera APROBADA mediante Resolución N°35 de fecha 07 de diciembre del 2017 y REQUERIDO al imputado para su pago en el plazo de cinco días dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas a través de la misma resolución, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones, en caso de incumplimiento, la misma que le fue notificada al ahora imputado mediante notificación N°96927-2017-JR-FC con fecha 21 de diciembre del 2017.

Que, ante el incumplimiento del imputado, mediante Resolución N°40 de fecha 20 de marzo del 2018, el Juzgado hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas a este Ministerio Público.

Por lo que, el imputado **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de **S/. 15,283.93 soles**, por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de su menor hija.

6. TIPO PENAL.

Que, conforme a las circunstancias en que se ha suscitado los hechos atribuido al imputado, se encuadra en el tipo penal previsto contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en su modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, **tipificado en el primer párrafo Artículo 149° del Código Penal, el mismo que prescribe.**

"El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial."

6.1. Grado de participación.

El imputado **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, responderá en el presente caso conforme a los hechos ocurridos como Autor⁽¹⁾.

7. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito y vinculan al imputado como responsable del delito:

1. Actuados en copias certificadas del expediente judicial N°00145-2013-0-0412-JM-FC-02, sobre cobro de alimentos, seguido por María Ysabel Gallegos Vega, en contra de Emerson Ordoñez Arias, tramitado ante el Primer Juzgado de Familia del MJB de Paucarpata, entre ellos:

a) Acta de Audiencia Única y Resolución Homologatoria N°017 de fecha 30 de junio del 2014, que aprueba el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, debiendo cumplir el ahora imputado con pagar la suma de trescientos veinticinco con 00/100 soles (S/.325.00) a favor de su menor hija Zharick Selena Ordoñez Gallegos.

b) Liquidación de pensiones alimenticias devengadas, correspondiente al periodo comprendido del **29 de mayo del 2013 al 31 de julio del 2016, adeudando la suma de S/.15 283.93 soles (incluido el interés legal)**, el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N°34, de fecha 05 de septiembre del 2017.

c) Resolución N°35 de fecha siete de diciembre del 2017, donde el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, **APRUEBA la liquidación** de pensiones devengadas por el monto de **S/.15 283.93 soles**, que deberán ser pagadas por el ahora imputado y **REQUIERE** al ahora imputado cumpla con pagar el monto de **S/.15 283.93 soles** en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público a fin que proceda conforme a sus atribuciones.

d) Cédula de notificación N°96927-2017-JR-FC efectuada en el domicilio real del imputado con la Resolución N°35, con fecha 21 de diciembre del 2017.

e) Resolución Nro. 40 de fecha 20 de marzo del 2018, que ante el incumplimiento del imputado, resuelve hacer efectivo el apercibimiento, remitiendo copias certificadas a este Ministerio Público.

2. Oficio N°57164-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ emitido por el Coordinador del Registro Judicial Arequipa, donde se informa que el imputado **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, **NO** registra antecedentes penales.

8. MEDIDA DE COERCION PROCESAL

⁽¹⁾ Art. 23 del C.P. "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometen conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción"

Atendiendo al presente requerimiento, se requiere asimismo la **COMPARECENCIA SIMPLE** del imputado **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, conforme a lo establecido en el numeral 2) del Artículo 286º del Código Procesal Penal, por no concurrir uno los presupuestos materiales previstos en el Artículo 268º del acotado código adjetivo, que es la sanción a imponerse no es superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señor Juez, proceder a emitir la resolución que corresponda de conformidad al Art. 447º del Código Procesal Penal.

PRIMER OTROSI: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, tiene como **domicilio real en:** Calle Zela N° 864- Tacna, Tacna, Tacna y señalo **domicilio procesal** en Pasaje Santa Rosa N° 104, Cercado de Arequipa, siendo su abogado defensor Abraham Bravo Chacón con **casilla electrónica 41877**.

Agraviada: La menor **ZHARICK SELENA ORDOÑEZ GALLEGOS**, representada por su madre **MARIA YSABEL GALLEGOS VEGA**, ha fijado **domicilio real** en la Urb. Tasahuayo F-12, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa; con **domicilio procesal** en Av. Independencia Nro.927-933, cercado de Arequipa, Arequipa; siendo su abogada defensora Ana L. Flores Gutiérrez, con **casilla electrónica 33790**.

SEGUNDO OTROSI: Se adjunta **elementos de convicción**, así como ejemplares del presente requerimiento, para su notificación a todos los sujetos procesales distintos al Ministerio Público.
/bstg

Arequipa, 03 de enero del 2020.


Dra. LUIS GARCÍA
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Pro. Penal Corp. de Paucapata
Distrito Fiscal de Arequipa



Caso N° : 1506014504-2019-3606-0
Expediente N° : 00472-2020-0-0401-JR-PE-01
Imputado : Emerson Ordoñez Arias
Delito : Omisión a la Asistencia Familiar
Sumilla : ACUSACION FISCAL
Fiscal Responsable : Blanca Susana Terroba Gutiérrez

SEÑORITA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL MBJ
PAUCARPATA:

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, en el caso seguido contra Emerson Ordoñez Arias, por el delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de la menor Zharick Selena Ordoñez Gallegos, ante Ud. respetuosamente digo:

I. REQUERIMIENTO:

En mérito a lo dispuesto por su Juzgado en la Audiencia de Control de Incoación del Proceso Inmediato realizado de manera virtual con fecha 14 de octubre del 2020, y al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los arts. 60°, 447° literal 6 y 349° del Código Procesal Penal, formulo **REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL** contra **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, por el delito Contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de **INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA**, en agravio de la menor **Zharick Selena Ordoñez Gallegos (14)**, representado por su madre **María Isabel Gallegos Vega**, en los términos siguientes:

II. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:

NOMBRE Y APELLIDOS : EMERSON ORDOÑEZ ARIAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 00792962
FECHA DE NACIMIENTO : 25/07/1974
EDAD : 46 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO : distrito, provincia y departamento de Puno.
NOMBRE DEL PADRE : Pedro Pablo
NOMBRE DE LA MADRE : Lourdes
ESTATURA : 1.67 m
SEXO : Masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN : Superior Completa
ESTADO CIVIL : soltero
OCUPACIÓN : se desconoce
DOMICILIO REAL : Calle Zela N° 864, Tacna, Tacna, Tacna
TELÉFONO : se desconoce
DOMICILIO PROCESAL : Pasaje Santa Rosa N° 104, Cercado de Arequipa, Arequipa
ABOGADO DEFENSOR : Abraham Bravo Chacón
CASILLA ELECTRÓNICA : 41877

III. DATOS DE LA PARTE AGRAVIADA:

- Menor **ZHARICK SELENA ORDOÑEZ GALLEGOS**, representada por su madre **MARIA YSABEL GALLEGOS VEGA**, ha fijado domicilio real en la Urb. Tasahuayo F-12, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa; con domicilio procesal en Av. Independencia

Nro.927-933, cercado de Arequipa, Arequipa; siendo su abogada defensora Ana L. Flores Gutiérrez, con casilla electrónica 33790; quien se ha CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL.

IV.- DESCRIPCIÓN DEL HECHO ATRIBUIDO A LA ACUSADA:

Hecho Punible	Imputación Necesaria
Delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento De Obligación Alimentaria	<p>Este Ministerio imputa al ciudadano EMERSON ORDOÑEZ ARIAS, la comisión del delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria; y en ese sentido los actos que efectuó el imputado para la comisión del ilícito, ocurrieron según el siguiente detalle:</p> <p>Circunstancias Precedentes Que, ante el Primer Juzgado de Familia del MBI de Paucarpata, se tramita el expediente N°00145-2013-0-0412-JM-FC-02, seguido por María Ysabel Gallegos Vega, en contra de Emerson Ordoñez Arias.</p> <p>Que, mediante Resolución N°017 de fecha 30 de junio del 2014, el Juzgado aprueba el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes en todos sus extremos, debiendo cumplir el ahora imputado con pagar la suma de trescientos veinticinco con 00/100 soles (S/.325.00) a favor de su menor hija Zharick Selena Ordoñez Gallegos, en forma mensual.</p> <p>Circunstancias Concomitantes Pero es el caso, que el imputado no ha cumplido con tal obligación, de tal forma que se practicó la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al período comprendido desde el 29 de mayo del 2013 al 31 de julio del 2016, aduciendo la suma de S/.15,283.93 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes con la Resolución N°34 de fecha 05 de setiembre del 2017.</p> <p>Hecho que conllevó, que posteriormente fuera APROBADA mediante Resolución N°35 de fecha 07 de diciembre del 2017 y REQUERIDO al imputado para su pago en el plazo de cinco días dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas a través de la misma resolución, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones, en caso de incumplimiento, la misma que le fue notificada al ahora imputado mediante notificación N°96927-2017-JR-FC con fecha 21 de diciembre del 2017.</p> <p>Circunstancias Posteriores Que, ante el incumplimiento del imputado, mediante Resolución N°40 de fecha 20 de marzo del 2018, el Juzgado hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas a este Ministerio Público.</p> <p>En estos extremos se imputa, el acusado EMERSON ORDOÑEZ ARIAS, que en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de S/. 15,283.93 soles, por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de su menor hija.</p>

IV. ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito y vinculan al imputado como responsable del delito:

4.1. Actuados en copias certificadas del expediente judicial N°00145-2013-0-0412-JM-FC-02, sobre cobro de alimentos, seguido por María Ysabel Gallegos Vega, en contra de Emerson Ordoñez Arias, tramitado ante el Primer Juzgado de Familia del MBI de Paucarpata, entre ellos:

a) Acta de Audiencia Única y Resolución Homologatoria N°017 de fecha 30 de junio del 2014, que aprueba el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes, debiendo cumplir el ahora imputado con pagar la suma de trescientos veinticinco con 00/100 soles (S/.325.00) a favor de su menor hija Zharick Selena Ordoñez Gallegos,

b) Liquidación de pensiones alimenticias devengadas, correspondiente al periodo comprendido del 29 de mayo del 2013 al 31 de julio del 2016, adeudando la suma de S/.15 283.93 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N°34, de fecha 05 de septiembre del 2017.

c) Resolución N°35 de fecha siete de diciembre del 2017, donde el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Paucarpata, APRUEBA la liquidación de pensiones devengadas por el monto de S/.15 283.93 soles, que deberán ser pagadas por el ahora imputado y REQUIERE al ahora imputado cumpla con pagar el monto de S/.15 283.93 soles en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público a fin que proceda conforme a sus atribuciones.

d) Cédula de notificación N°96927-2017-JR-FC efectuada en el domicilio real del imputado con la Resolución N°35, con fecha 21 de diciembre del 2017.

e) Resolución N° 40 de fecha 20 de marzo del 2018, que, ante el incumplimiento del imputado, resuelve hacer efectivo el apercibimiento, remitiendo copias certificadas a este Ministerio Público.

2. Oficio N°57164-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ emitido por el Coordinador del Registro Judicial Arequipa, donde se informa que el imputado EMERSON ORDOÑEZ ARIAS, NO registra antecedentes penales.

V. PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO:

Señala el artículo 23° del Código Penal: "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción."

De lo expuesto, queda claro que el **acusado EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, ha incurrido en el delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en su condición de **AUTOR**, al haber omitido con su obligación de cancelar el monto de **S/.15,283.93 soles** por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de su menor hija.

VI. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD:

Conforme lo sostiene el autor Víctor Prado Saldarriaga, las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuricidad del hecho); o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente). Por tanto la función principal de las circunstancias no es otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido.

En el caso, no concurre ningún elemento negativo del tipo (error de tipo, consentimiento, adecuación social, causa de justificación, legítima defensa, error de prohibición, graves alteraciones en la conciencia, percepción, etc.), que excluya, justifique o evite el reproche de la acción perpetrado por el imputado.

VII. TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y CUANTÍA DE LA PENA:

a) Tipificación de los hechos

Conforme se ha detallado en la presente, se imputa al acusado **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, ser autor del delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en agravio de su menor hija **Zharick Selena Ordoñez Gallegos**.

Omisión de prestación de alimentos

Artículo 149°.- "El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuentidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. (...) "

Que, el comportamiento en el delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, previsto en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal, *consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida por una resolución judicial; es decir, basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el tipo, teniendo en consideración que el bien jurídico protegido es la familia y especialmente los deberes de tipo asistencial, como obligación de los padres con sus descendientes.*

b) Determinación de la Pena

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previsto en los artículos cuarto y octavo respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito.

b) Determinación de la Pena

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previstas en los artículos cuarto y octavo respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito, en tanto que la conducta del acusado al omitir asistir a su menor hijo, pone en peligro no solo la integridad física de su persona sino a toda la comunidad que hace uso de la vía pública.

Que, a efectos de la determinación de la pena temporal, es decir, para aquella que tiene una duración mínima de dos días y una máxima de 35 años, corresponde desarrollarla en base a etapas o fases normadas en el Artículo 45-A° del Código Penal; así, en la primera etapa se definen los límites de la **pena básica**, la cual se encuentra establecida en la ley para el delito; y en la segunda etapa se debe identificar la **pena concreta**, para ello se tiene en cuenta el espacio y límite prefijado por la pena básica, marco que se divide en tres tercios y luego en base a las circunstancias legales presentes es que se determina la pena concreta dentro de uno de los tercios establecidos.

Que, conforme a lo señalado por el artículo 46° del Código, se establece las **circunstancias de atenuación y agravación**:

Constituyen *circunstancias de atenuación*, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible las siguientes: "a) La **carencia de antecedentes penales**; ..."

Constituyen *circunstancias agravantes*, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: "a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad;..."

Siendo así, y advirtiéndose en el presente caso concurre una circunstancia atenuante y agravante, ya que el imputado no registra antecedentes penales, y la conducta punible se ha realizado por motivo abyecto y inútil, **corresponde efectuar la petición de la imposición de la pena y se ubica dentro del margen del tercio intermedio, conforme a lo prescrito en el inciso b) del numeral 2 del artículo 45-A del Código Penal**; encontrándose la conducta del acusado **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, dentro del primer párrafo del artículo 149° del Código Penal, se procede al desarrollo de la individualización de la pena de manera gráfica:

DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA	
La pena es: "no mayor de tres años"	
Pena mínima	Pena máxima
(02 días)	(03 años)

2 días – 01 año (Tercio Inferior)	01 año – 2 años (Tercio Intermedio)	02 años – 03 años (Tercio Superior)
--------------------------------------	--	--

De lo expuesto, la pena que se propone a imponerse al acusado EMERSON ORDOÑEZ ARIAS, es de **UN AÑO y 06 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.**

La pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

VIII. MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Teniendo en cuenta que la parte agraviada, menor ZHARICK SELENA ORDOÑEZ GALLEGOS, representada por su madre MARIA YSABEL GALLEGOS VEGA, a través de su abogada defensora se ha CONSTITUIDO EN ACTOR CIVIL, este Ministerio Público se abstienen de proponer monto indemnizatorio por el daño ocasionado.

IX. SOLICITUD ALTERNATIVA DE TIPIFICACIÓN:

Ninguna.

X. RELACION DE BIENES QUE GARANTIZAN LA REPARACION CIVIL

Conforme al Oficio N°4622-2019-Z.R. N°XII-UREG/PUBLICIDAD/GBS remitido por la Zona Registral XII Sede Arequipa, el imputado no registra bien inmueble o mueble alguno registrado a su nombre.

XI. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

a) Prueba Documental:

PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA DEL ACTA DE AUDIENCIA ÚNICA Y RESOLUCIÓN HOMOLOGATORIA N°017 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2014.
Información que proporciona	Por el cual se ordena a la ahora acusado, acuda con una pensión alimenticia mensual de S/325.00 soles a favor de su menor hija. UTILIDAD: Probará la existencia de una orden judicial. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADA Y RESOLUCIÓN N°34, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
Información que proporciona	Por el cual se acredita el periodo y monto total de la deuda por concepto de alimentos, ascendente a la suma de S/15.283.93 soles, y por el que se pone en conocimiento de las partes dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas. UTILIDAD: Demostrará el monto adeudado. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN N°35 DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL 2017

Lr. MAIS GUILLERMO VERA ORTEGA

Fiscal General de la Nación

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Fiscal de la Zona Registral XII

Información que proporciona	que	Por el cual se acredita la aprobación de la liquidación de pensiones de alimentos por la suma de S/. 15,283.93 soles, así como del REQUERIMIENTO efectuado al acusado para su pago en el plazo de 05 días, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público. UTILIDAD: Probará la aprobación de la liquidación de pensiones devengadas sobre el monto adeudado y el requerimiento efectuado al acusado para su pago. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL		CEDULA DE NOTIFICACIÓN N°96927-2017-JP-FC EFECTUADA CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.
Información que proporciona	que	Por el cual se acredita que el imputado tuvo conocimiento del requerimiento efectuado mediante Resolución N°35, al haber sido debidamente notificado. UTILIDAD: Acreditará que el imputado tenía conocimiento del requerimiento que se le hacía. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL		COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION N°40 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2018.
Información que proporciona	que	Por el cual se dispone la remisión de copias al Ministerio Público ante el incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias requeridas al imputado. UTILIDAD: Acreditará el actual doloso del imputado en el hecho que se le atribuye. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL		Oficio N°57164-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ REMITIDO POR EL COORDINADOR DEL REGISTRO JUDICIAL DE AREQUIPA
Información que proporciona	que	Por el cual se informa que el acusado Emerson Ordoñez Arias, NO registra antecedentes penales. UTILIDAD: Para efectos de la imposición de la pena. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.

XII. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL:

Contra el acusado **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, se ha dictado medida de Comparecencia Simple.

POR LO EXPUESTO:

Convento a usted señor Juez, acceder al presente requerimiento y conferir el trámite correspondiente.

Primer Otrosí: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: **EMERSON ORDOÑEZ ARIAS**, tiene como **domicilio real** en: Calle Zela N° 864-Tacna, Tacna, Tacna y señalo **domicilio procesal** en Pasaje Santa Rosa N°104, Cercado de Arequipa, siendo su abogado defensor Abraham Bravo Chacón con **casilla electrónica 41877**.

Agraviada: La menor **ZHARICK SELENA ORDOÑEZ GALLEGOS**, representada por su madre **MARIA YSABEL GALLEGOS VEGA**, ha fijado **domicilio real** en la Urb. Tasahuayo F-12, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Arequipa; con **domicilio procesal** en Av. Independencia Nro.927-933, cercado de Arequipa, Arequipa; siendo su abogada defensora Ana L. Flores Gutiérrez, con **casilla electrónica 33790**.

Segundo Otrosí: Se hace presente al Juzgado los datos de la Fiscal Encargada del caso para efectos de notificación: Blanca Susana Terroba Gutiérrez, Casilla electrónica: 96017, teléfono celular 959377071 y correo electrónico: susanterroba@gmail.com.

Tercer Otrosí: Solicito al juzgado, se tenga en cuenta, que se ha cumplido con adjuntar las documentales ofrecidas como medios probatorios.
/bstg

Arequipa, 14 de octubre del 2020.



Cte. MGS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
Ina. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucartambo
Distrito Criminal de Arequipa

ACUERDO SOBRE ACTOS PREPARATORIOS PARA AUDIENCIA VIRTUAL

Previo saludo a las partes, siendo las 09:00 horas del día 06 de octubre del 2021 se da inicio a la presente conferencia en merito a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ de fecha 25 de Junio del 2020 "PROTOCOLO TEMPORAL PARA AUDIENCIAS JUDICIALES VIRTUALES DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA SANITARIA"; la misma que se encuentra a cargo de Mónica Huaracha Soncco, Especialista Judicial de Audiencias del **Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná- Sub Especializado en Delitos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar**; estando presente la Señorita Magistrada **Dra. María del Pilar Palma Risco**, representante del Ministerio Público Dra. Mayumi Arenas Llactarimay y el Dr. Jaime Castro Cárdenas defensa técnica necesaria del investigado, se deja constancia que no se encuentra presente el investigado ni la parte agraviada; la finalidad de la presente reunión es informar sobre los actos preparatorios para la audiencia virtual de **CONTROL DE ACUSACION** programada en el Expediente N° 472-2020-0-0402-JR-PE-02, para el día 06 de octubre del 2021, a horas 09:00, lo cual se presenta de la siguiente forma:

1. La aplicación a utilizar para audiencia virtual, será a través del Aplicativo Google Meet y los participantes deberán ingresar a través del enlace web enviado.
2. Duración de la audiencia, una (01) hora aproximadamente.
3. Participación de las defensas, en caso de haber defensas conjuntas solo participará una de ellas y la comunicación se hará llegar con anticipación al Juzgado.
4. La grabación de las audiencias, solo estará a cargo del especialista de audio.
5. Forma de proceder en caso exista problema de conexión (corte), las partes volverán a conectarse en el mismo link enviado, de lo contrario se comunicará de manera urgente al teléfono del Especialista de Audio.
6. Activación de Micrófonos y cámara, las partes solo deberán activarlos cuando se requiera su participación.
7. Presentación de escritos hasta 24 horas antes de la audiencia.
8. Uso de Medallas, el representante del Ministerio Público y las defensas deberán usar sus medallas correspondientes de manera obligatoria, y un atuendo formal para la realización de la audiencia.
9. En caso de no participar una de las partes, en la conferencia de actos preparatorios o de no efectuarse ninguna observación, se entenderá que se tienen a disposición los recursos tecnológicos adecuados para la realización de la audiencia virtual, siendo de estricta responsabilidad su participación en la audiencia virtual y asumiendo responsabilidad por la falta de recursos tecnológicos.
10. Los correos electrónicos y número de celular proporcionados por el asistente jurisdiccional son únicamente para los fines de coordinación para la audiencia virtual señalada, de ninguna manera deben usarse para tocar temas de fondo del proceso o enviar escritos respecto al trámite del mismo.

Por lo que, los acuerdos tomados en esta conferencia serán registrados en audio o video y por escrito elaborado por el especialista a cargo, quien dará cuenta de forma oportuna a la Señorita Juez, y con su aprobación será notificada electrónicamente a las partes.

Asimismo, las partes manifiestan su compromiso y conformidad para el desarrollo de la audiencia virtual.

Camaná, 06 de setiembre del 2021.

Dra. María del Pilar Palma Risco
Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná
Sub Especializado en Delitos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

**SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**



PODER JUDICIAL DEL PERÚ

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

**INDICE DE REGISTRO DE AUDIENCIA ÚNICA DE JUICIO INMEDIATO R.A. N° 347-2015-
CE-PJ -CONEXIÓN GOOGLE MEET**

Expediente N°	: 472-2020-21
Fecha	: Arequipa, 19 de noviembre de 2021
Juzgado	: Segundo Juzgado Unipersonal Paucarpata
Magistrado	: Dra. JUDY JENNY RODRIGUEZ GARCÍA
Investigado	: Emerson Ordoñez Arias
Delito	: Omisión a la asistencia familiar
Sala de Audiencias	: Aplicativo Google Meet
Especialista de Audiencias	:
Especialista de Causas	: Daysi Luna Calcina
Hora de Inicio	: 15:15 horas
Hora de Término	: 16:20 horas

Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, tal como lo prevé el artículo 361° del Código Procesal Penal. Se realiza audiencia virtual mediante el aplicativo "Google Meet" interconectando por videoconferencia a las partes, debido al Estado de Emergencia por Covid-19.

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ASISTENTES (00:00:30)

- **Ministerio Público: Dr. LUIS GUILLERO VERA OVIEDO**, Fiscal Provincial tercer despacho Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, con domicilio en calle teniendo alcántara s/n urbanización guardia civil tercera etapa Paucarpata, con casilla electrónica 33477, con correo electrónico veraoviedoguillermo@gmail.com, con celular 987537030.
- **Defensa de la Agraviada: Dr. MIGUEL ANGEL PEREZ ALMEDO**, con número del colegio de abogados 7736, con domicilio procesal en el pasaje santa rosa 116 A OF. 04, con casilla electrónica 36606 en esta vez patrocinó a la señora María Gallegos.
- **Agraviada: María Isabel Gallegos Vega**, con DNI 40192721, con domicilio en la urbanización Tasahuayo F 12 del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con celular 989944685.
- **Defensa del Acusado: Dr. WALTER LOAYSA ARISTA**, con casilla electrónica 42553, con correo electrónico walterloaysaarista@gmail.com, con celular 959112527.
- **Acusado: Emerson Ordoñez Arias**, con DNI 00792762, con domicilio en la calle 14 de febrero 2357 de la ciudad de Antofagasta de Chile, con celular 944089731

II. ACTUACIONES REALIZADAS EN AUDIENCIA

- 00:03:20 **Magistrada:** Pregunta a la parte agraviada si se ha constituido en actor civil..
- 00:03:27 **Defensa de la Agraviada:** Estamos apersonados como parte civil.
- 00:03:44 **Defensa del Acusado:** Indica que hicieron un depósito de cinco mil soles, *corre audio*.
- 00:03:50 **Magistrada:** Solicita a especialista de audiencia si se puede visualizar el depósito.
- 00:03:58 **Especialista de Audiencia:** Todavía no se puede visualizar en el sistema.
- 00:04:05 **Magistrada:** la defensa del acusado remita ese depósito vía washap.
- 00:04:20 **Defensa del acusado:** Coordina con la especialista de audiencia para hacer llegar al washap de las partes, *corre audio*
- 00:05:28 **Magistrada:** No existiendo otro escrito pendiente que proveer, *corre audio*
- 00:07:02 **Magistrada:** Concede el uso de la palabra al Ministerio Público para que haga su requerimiento.



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

- 00:07:14 **Ministerio Público:** Oraliza su requerimiento acusatorio, solicita que se dé por leída los elementos de convicción, *corre audio*.
- 00:09:47 **Defensa del acusado:** Que se dé por leída.
- 00:09:55 **Ministerio Público:** Oraliza el tipo de imputación, título de autor la persona de Emerson Ordoñez y se está solicitando como pena UN AÑO Y SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD sujetándonos al tercio intermedio, *corre audio*. Se tiene como prueba documental ofrecida en nuestro requerimiento las siguientes:
- Copia del acta de audiencia, única resolución homologatoria 17 de fecha 30 de junio del 2014.
 - Copia certificada de liquidación de pensiones alimenticias devengadas.
 - Resolución 34 de fecha 5 de setiembre del 2017
 - Copia certificada de la resolución 35 de fecha 7 de diciembre del 2017.
 - Copia de la cedula de notificación 96927-2017 de fecha 21 de diciembre del 2017.
 - Copia certificada de la resolución 40 de fecha 20 de marzo del 2018.
 - Oficio N° 57164-2018 remitido por el coordinador del registro judicial de condenas donde indica que el imputado no tiene antecedentes.
- Damos cuenta que la parte agraviada se ha constituido como actor civil y durante el desarrollo de la audiencia se solicita comparecencia simple.
- 00:11:45 **Magistrada:** Las documentales que ha oralizado son solo documentales.
- 00:11:52 **Ministerio Público:** Solo se tiene ofrecido documentales.
- 00:12:08 **actor civil:** Oraliza su pretensión civil, solicitamos que la pretensión civil solicitada sea admitida por el delito que ha cometido el acusado *corre audio*
- 00:13:08 **Magistrada:** Pregunta si tiene prueba que ofrecer.
- 00:13:18 **actor civil:** No tiene, solo con las pruebas del Ministerio Público, *corre audio*.
- 00:13:36 **Magistrada:** La defensa alguna observación de la acusación o a la pretensión civil..
- 00:13:38 **Defensa del Acusado:** A la acusación no tenemos ninguna observación y por comunidad de pruebas solicitamos las mismas que ofrece el Ministerio Público, y referente a la pretensión civil tampoco aremos ninguna observación.
- 00:14:19 **Magistrada:** Dicta la siguiente resolución.

RESOLUCIÓN N° 12 -2021

Arequipa, diecinueve de noviembre

Del año dos mil veintiuno.-

VISTOS y CONSIDERANDO:

Que se ha llevado acabo la audiencia de conformidad con el artículo 448 del código procesal penal, la fiscalía en cumplimiento de lo establecido en el artículo 349 del código procesal penal a oralizado por requerimiento acusatorio, la defensa del actor civil a cumplido con oralizar su pretensión civil, se corrió traslado a la defensa del imputado el mismo que no ha formulado observaciones de carácter formal ni sustancial a la acusación tampoco en el extremo de la reparación civil que ha sido sustentada en audiencia, los mismos que cumplen los requisitos formales y sustanciales del requerimiento acusatorio como también del pedido del actor civil por lo que corresponde sanear la acusación y también sanear también el extremo vinculado a la pretensión civil, en relación a los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público los que también se han adherido a este pedido el actor civil y también la propia defensa del imputado siendo los mismos medios de prueba que el Ministerio Público por el principio de comunidad de pruebas, cumpliendo estos medios de prueba ofrecidos como lo establece el artículo 350 numeral 1 literal f del código procesal penal y concordados con el artículo 352 del código adjetivo, para adjuntar conclusiones utiles y pertinentes los medios de pruebas vamos a disponer su admisión para su actuación oportunamente tanto los de la fiscalía, actor civil y



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

defensa del imputado, para verificar en el caso que concurren presupuestos procesales y condiciones de la acción que van a permitir la información válida sobre el fondo del asunto corresponde a las partes convocar a juicio oral en la presente causa, haciendo precisión que el imputado va llevar un proceso con comparecencia simple por estas consideraciones el juzgado resuelve.

PARTE RESOLUTIVA: (00:16:26)

PRIMERO: DECLARAR LA VALIDEZ formal de la acusación en los años expresados por el Ministerio Público, declarar saneada el pedido de la reparación civil presentada por el actor civil en la presente audiencia.

SEGUNDO: ADMITIR los medios de prueba que han sido postulados por el Ministerio Público a favor de la fiscalía del actor civil y de la defensa del acusado por comunidad de pruebas.

TERCERO: DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO en contra del señor EMERSON ORDOÑEZ ARIAS como presunto del delito contra la familia omisión a la asistencia familiar en su forma de incumplimiento de obligación alimentaria prevista en el primer párrafo del artículo 149 del código penal en agravio de la menor Zharick Selena Ordoñez Gallegos representada por su madre Maria Ysabel Gallegos Vega quien se encuentra constituida en actor civil, se precisa que la fiscalía está pretendiendo que se le imponga en su momento al acusado un año y seis meses de pena privativa de libertad y el actor civil pretende se le exponga una reparación civil ascendente a la suma de mil soles, sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias devengadas que se tiene legalmente, debe de obligarse a pagar en caso reportarse responsabilidad de imputado por el delito que es materia de acusación, como se ha señalado en esta audiencia por parte del Ministerio Público el incumplimiento de esas pensiones alimenticias devengadas por el monto de 15,283.93 soles (quince mil doscientos ochenta y tres soles).

CUARTO: CITAR a las partes para el juicio oral el mismo que se llevara a cabo el día de la fecha, después de concluida la emisión de la presente resolución tiene el auto y citación a juicio, disponemos el emplazamiento a todas las partes que están siendo notificados en esta audiencia para la concurrencia de la segunda parte de la audiencia que es el juicio oral propiamente dicho con los mismos apercibimiento ya decretados por la fiscal.

- 00:20:53 **Magistrada:** Suspende unos minutos para que las partes lleguen a un acuerdo para la instalación de juicio oral.
- 00:41:13 **Magistrada:** Pregunta a las partes si llegaron a un acuerdo.
- 00:41:15 **Defensa del Acusado:** Si ya llegamos a un acuerdo con la fiscalía y el actor civil.

ALEGATOS DE APERTURA:

- 00:41:20 **Magistrada:** Declara instalada la presente audiencia y pregunta a las partes que ya están acreditadas si hay algún impedimento para oralizar los alegatos de apertura por el Ministerio público en el mismo sentido que han sido sustentados previamente.
- 00:41:41 **Ministerio Público:** Ninguna.
- 00:41:41 **Actor civil:** Ninguna.
- 00:41:42 **Defensa del Acusado:** Ninguna.
- 00:41:45 **Magistrada:** Vamos a tener por oralizados los alegatos de apertura por parte de la fiscalía en este juicio oral que vamos apertura en contra del procesado, *corre audio*
- 00:42:11 **Ministerio Público:** Conforme.
- 00:42:12 **Defensa del acusado:** Conforme.
- 00:42:13 **Actor civil:** Conforme.



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

00:42:17 **Magistrada:** Luego de tener por oralizado ambos extremos de los alegatos de apertura de la fiscalía y del actor civil, se corre traslado a la defensa.

00:42:26 **Defensa del acusado:** La defensa técnica ha conferenciado con el imputado quien ha manifestado allanarse tanto a la acusación fiscal como al requerimiento del actor civil, por eso ya habiendo acuerdos solicitamos una conclusión anticipada del proceso a su despacho.

INSTRUCCIÓN DE DERECHOS QUE LE ASISTEN A LA ACUSADA Y RECONOCIMIENTO O NEGACIÓN DE HECHOS:

00:42:44 **Magistrada:** Instruye al acusado sobre los derechos que le asisten durante el desarrollo del proceso; y, acto seguido pregunta al acusado si los hechos expuestos por el Ministerio Público son ciertos o son falsos, *corre en audio*.

00:43:36 **Acusado:** Responde que son ciertos.

00:43:37 **Magistrada:** Declaramos concluida anticipadamente este juzgamiento, Ministerio Público exponga los acuerdos arribados.

00:43:46 **Ministerio Público:** Expone los acuerdos arribados con la parte acusada, *corre en audio*.

00:45:38 **Magistrada:** Solicita precisiones respecto a los meses que firmara, *corre en audio*.

00:45:45 **Defensa del acusado:** Manifiesta que se está poniendo como regla de conducta no ausentarse de su domicilio el acusado vive en Chile no en Perú.

00:46:04 **Magistrada:** La regla de conducta es prohibición de variar de domicilio.

00:46:53 **Ministerio Público:** Manejamos la regla de conducta de no variar de domicilio que se entiende que es en el extranjero y dará cuenta al órgano jurisdiccional, la firma es cada tres meses, *corre audio*

00:47:23 **Magistrada:** Solicita propuesta sobre la propuesta de la regla de conducta, *corre audio*

00:48:50 **Ministerio Público:** La regla es que tendría que dar cuenta en caso de que varíe de domicilio, *corre audio*.

00:49:11 **Magistrada:** Actor civil exponga los acuerdos arribados.

00:49:50 **Actor civil:** Expone los acuerdos arribados con la parte acusada, *corre en audio*.

00:51:47 **Magistrada:** Concede el uso de la palabra a la defensa para que se pronuncie al respecto.

00:51:48 **Defensa del Acusado:** Con lo conversado con la fiscalía para que el saldo sea prorrateado en 8 meses, *corre audio*.

00:54:15 **Magistrada:** Se corre traslado al Ministerio Público, *corre audio*.

00:54:16 **Ministerio Público:** Conforme.

00:54:22 **Magistrada:** Señor acusado está conforme con lo expuesto por el Ministerio Público.

00:54:23 **Acusado:** Conforme.

00:54:32 **Actor Civil:** Conforme.

00:54:35 **Magistrada:** Dicta sentencia en conformidad, a las partes si hay algún inconveniente para dar a conocer la parte resolutive, *corre audio*



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

00:54:49 **Ministerio Público:** Conforme.

00:54:50 **Defensa de la Agraviada:** Conforme.

00:54:52 **Defensa del Acusado:** Conforme.

00:54:53 **Actor Civil:** Conforme

00:55:00 **Magistrada:** Dicta siguiente resolución.

SENTENCIA DE CONFORMIDAD

RESOLUCION - 2021

Arequipa, diecinueve de noviembre

Del año dos mil veintiuno.-

PARTE RESOLUTIVA: (00:55:14)

PRIMERO.- APRUEBO los acuerdos de pena y reparación civil atribuidos entre el acusado su defensa técnica el actor civil y el Ministerio Público.

SEGUNDO: DECLARO a EMERSON ORDOÑEZ ARIAS, como **AUTOR** del delito de contra la familia Omisión a la asistencia familiar en su forma de incumplimiento de obligación alimentaria previsto en el primer párrafo del artículo 149 del código penal, en agravio de la menor Zharick Selena Ordoñez Gallegos representada por su madre Maria Ysabel Gallegos Vega

SEGUNDO.- SE LE IMPONE la reserva de fallo condenatoria por el plazo de UN AÑO; a condición de que cumpla las siguientes **Reglas de Conducta:**

A.- Deberá de comparecer de manera obligatoria al juzgado de ejecución cada tres meses a fin de firmar y justificar sus actividades, pudiendo realizarlo también a través de la plataforma virtual de la web del poder judicial para lo cual deberá de empadronarse, precisar que corre a cargo de la defensa del propio sentenciado hacer las gestiones correspondientes a efecto de viabilizar el cumplimiento de esta regla de conducta a través del juzgado de investigación preparatoria de la ciudad de Tacna, gestión que deberá realizar una vez que baje el expediente a I juzgado de ejecución de esta sede judicial.

B.- No variar de domicilio sin previo aviso al Juez Penal.

C.- Deberá de reparar el daño causado con el pago íntegro de la reparación civil y las pensiones alimenticias devengadas en los términos que han sido acordados en esta audiencia

Se precisa que ante el incumplimiento de alguna de las reglas de conducta, se aplicara lo establecido en el artículo 65 inciso tercero del código penal, es decir se revocara de manera directa el periodo de prueba y se le impondrá un año y cuatro meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva.

CUARTO.- La REPARACIÓN CIVIL es la siguiente: A favor de de la parte agraviada la cantidad de **S/. 1,000.00 (mil con 00/100 soles);** sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias devengadas que hacen al monto total de 15,283.93 soles (quince mil doscientos ochenta y tres con 93 soles) precisando que estos van hacer cancelados de la siguiente forma dos mil soles que corresponden a la reparación civil propiamente dicha van hacer cancelados por el sentenciado el día lunes 22 de noviembre del dos mil veintiuno y teniendo en cuenta que se ha consignado por la defensa un depósito judicial efectuado el día de la fecha diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno que ha sido presentado al juzgado y respecto del cual tienen conocimiento las partes por el monto de cinco mil soles, es que se tiene un saldo a la fecha de diez mil doscientos ochenta y tres con noventa y tres soles correspondientes a las pensiones alimenticias devengadas que van hacer canceladas mediante el pago de ocho cuotas mensuales de 1,285.5 soles cada una de ellas que van hacer canceladas a partir del 20 de diciembre del año dos mil veintiuno la primera cuota y así sucesivamente las demás cuotas serán aunadas los días 20 de cada mes siguiente hasta completar el pago total de las ocho cuotas que se han pactado todo ello mediante depósitos judiciales que deberán de depositarse al banco de la nación a nombre del juzgado de ejecución debiendo el sentenciado hacer llegar los comprobantes de pago correspondientes al citado juzgado para efectos de proceder al endoso de dichos montos; en relación al depósito judicial por la suma de 5,000 soles que se ha presentado al despacho el día de la fecha vamos a disponer sea endosado a la parte agraviada para el cobro .

QUINTO.- SE DISPONE que no corresponde fijar costas.

SEXTO.- Mando que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se proceda a su inscripción en el registro de condenas y demás anotaciones que corresponde. Tómesese razón y hágase saber.-



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

- 01:01:07 **Ministerio Público:** Conforme.
01:01:12 **Actor civil:** Conforme.
01:01:16 **Defensa del Acusado:** Conforme.
01:01:20 **Acusado:** Conforme.
01:01:32 **Agraviada:** Conforme.
- 01:01:36 **Magistrada:** Estando a la conformidad de las partes se declara **CONSENTIDA** la presente sentencia para fines de su ejecución inmediata, concluye la sesión.
- 01:02:13 **Defensa del Acusado:** Solicitaría se levanta la medida impuesta a mi patrocinado, *corre audio*.
- 01:02:33 **Magistrada:** Estando a lo informado por las partes en relación a la situación jurídica del sentenciado, se ha petitionado por parte de la defensa que se levanten las ordenes de captura que han sido giradas en su oportunidad contra el mismo quien ha entrado al proceso en calidad de reo contumaz, habiéndose resuelto la situación jurídica habiéndose expedido sentencia condenatoria contra el mismo en la fecha sentencia de conformidad el juzgado va disponer levantar las ordenes de captura que se han girado en contra del mismo en el día y a la brevedad deberá de remitirse los oficios correspondientes y demás comunicaciones que tengan que realizarse para efectivizar lo dispuesto por el juzgado en relación a su situación jurídica del señor sentenciado Emerson Ordoñez Arias, alguna ultima petición a las partes.
- 01:03:30 **Ministerio Público:** Ninguna.
01:03:30 **Defensa de la Agraviada:** Ninguna.
01:03:39 **Defensa del Acusado:** Ninguna.
01:03:40 **Acusado:** Ninguna.
01:03:46 **Magistrada:** Cerramos audio, con lo que concluye la sesión.

III. CONCLUSIÓN

Con lo que se da por concluida la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla la Sra. Juez y la Especialista Judicial de Audiencia encargada de la redacción del acta. Dejándose expresa constancia que la presente acta y audio han sido debidamente asociados al SIJ, conforme a la directiva emitida por la Sala de Apelaciones. Doy fe.-

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA**

2º JUZ. PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA

EXPEDIENTE : 00472-2020-21-0401-JR-PE-01
JUEZ : CASTRO CHOQUE ALAN GERBER
ESPECIALISTA : LUNA CALCINA DAYSI JEANNETH
MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA DE PAUCARPATA DR GUILLERMO VERA CASO 20193606
IMPUTADO : ORDOÑEZ ARIAS, EMERSON
DELITO : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR
AGRAVIADA : GALLEGOS VEGA, MARIA YSABEL

Resolución N° 13

En la ciudad de Arequipa, siendo el décimo noveno día del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, la señora magistrada *Judy Jenny Rodríguez García*, a cargo del Segundo Juzgado Unipersonal de Paucarpata, luego de realizar el juicio oral, público y contradictorio en el presente proceso penal ha emitido la siguiente:

SENTENCIA Nro.599-A-2021

II. PARTE EXPOSITIVA

VISTO Y OIDOS:

Primero. - Identificación de Proceso

Se trata de la causa signada como expediente número 472-2020-21, seguido a **Emerson Ordoñez Arias**, como **AUTOR** del delito contra la familia - **OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, en la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria, previsto en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal, en agravio de la menor Zharick Selenia Ordoñez Gallegos representada por su madre María Ysabel Gallegos Vega.

Segundo. - Identificación del Acusado

Se juzga a **Emerson Ordoñez Arias**, identificado con DNI Nro.00792962, con fecha de nacimiento el 27 de julio de 1974, de 47 años de edad, grado de instrucción superior completa, lugar de nacimiento Puno – Puno - Puno, hijo de Pedro hablo y Lourdes, con domicilio en Calle 14 de Febrero N° 2357 ciudad de Antofagasta, país Chile.

Tercero. - Identificación de la parte agraviada:

Se ha considerado a la menor Zharick Selenia Ordoñez Gallegos representada por su madre María Ysabel Gallegos Vega.

Cuarto. - Delimitación de la Imputación

El Ministerio Público, como titular de acción penal pública y por ende encargado de establecer la tesis fáctica materia de proceso, en el marco de la requisitoria escrita y oralizada en audiencia en su respectivo alegato oral, ha efectuado la siguiente imputación al acusado.

4.1. Hechos Imputados por el Ministerio Público:

Circunstancias Precedentes:

Que ante el primer Juzgado de Familia del MBJ de Paucarpata, se tramita el expediente ro. 00145-2013-0-0412-JM-FC-02, seguido por María Ysabel Gallegos Vega en contra de Emerson Ordoñez Arias.

Que mediante Resolución 017 de fecha 30 de junio del 2014, el Juzgado aprueba el acuerdo oncolatorio celebrado por las partes en todos sus extremos, debiendo cumplir el ahora imputado con pagar la suma de trescientos veinticinco con 00/100 soles (S/. 325.00) a favor de su menor hija Zharick Selenia Ordoñez Gallegos, en forma mensual.

Circunstancias Concomitantes:

Pero es el caso, que el inculcado no ha cumplido con tal obligación, de tal forma que se practicó la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al periodo comprendido desde el 29 de mayo del 2013 al 31 de julio del 2016, adeudando la suma de S/. 15,283.93 soles (incluido el interés legal),

el cual se puso en conocimiento de las partes con la Resolución N° 34 de fecha 5 de septiembre del 2017.

Hecho que conllevó que posteriormente fuera aprobada mediante Resolución Nro. 35 de fecha 07 de diciembre del 2017 y requerido al imputado para su pago en el plazo de cinco días dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas a través de la misma resolución, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones, en caso de incumplimiento, la misma que le fue notificada al ahora imputado mediante notificación Nro. 96927-2017-JR-FC con fecha 21 de diciembre del 2017.

Circunstancias Posteriores:

Que, ante el incumplimiento del imputado, mediante Resolución Nro. 40 de fecha 20 de marzo del 2018, el Juzgado hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas al Ministerio Público.

Estos extremos se imputa, el acusado Emerson Ordoñez Arias, que en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de S/. 15,283.93 soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de su menor hija.

4.2. Calificación Jurídica

Los hechos expuestos han sido tipificados por el representante del Ministerio Público como delito de **Omisión a la Asistencia Familiar**, en la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria previsto en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal.

4.3. Pretensión Penal

El Ministerio Público solicita se imponga al acusado **UN AÑO Y SEIS MESES** de pena privativa de la libertad.

4.4. Pretensión Civil

La defensa del actor civil solicita en audiencia por reparación civil a favor de la parte agraviada la suma de S/. 1,000.00 soles, sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias devengadas por la suma de S/ 15,283.93.

4.5. Defensa Técnica y Autodefensa del Acusado

Reconociendo responsabilidad penal y civil por los hechos materia de imputación, se acogió a la conclusión anticipada.

Quinto. - Del Acuerdo Propuesto

5.1. El Ministerio Público y la defensa del procesado hicieron conocer a este Despacho los acuerdos arribados, en cuanto a la pena, acordaron la **RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO**, para esto a partir de la pena solicitada consideramos una rebaja de dos meses por la conclusión anticipada quedando la pena en **UN AÑO Y CUATRO MESES**, el periodo de reserva sería por el plazo de un año a condición de que cumpla reglas de conducta establecidas en el artículo 64 y estas son: **1)** la prohibición de variar de domicilio sin dar cuenta al órgano jurisdiccional, **2)** comparecer cada tres meses al Juzgado, a efecto de personal y obligatoriamente informar sobre sus actividades, para lo cual el abogado de la defensa deberá de hacer las gestiones correspondientes a efecto de viabilizar el cumplimiento de esta regla de conducta a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad de Tacna, gestión que deberá de realizar una vez que baje el expediente al Juzgado de Ejecución de esta sede judicial, **3)** Reparar el daño ocasionado con el delito a través del pago de la reparación civil; en caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta daría como efecto el inciso 3 del artículo 65 del Código Penal, es decir la revocatoria directa convirtiendo la pena en efectiva en **UN AÑO Y CUATRO MESES**.

5.2. La defensa del actor civil y la defensa del procesado hicieron conocer a este Despacho los acuerdos arribados respecto de la reparación civil, acordaron S/. 1,000.00 soles de la reparación civil por daño moral para lo cual harán un depósito el día lunes 22 de noviembre del 2021; respecto de las pensiones devengadas, se ha hecho el día de hoy un depósito de S/5,000.00 soles, quedando un saldo de S/. 10,283.93 soles que serán pagados en ocho pagos de S/. 1,285.50 soles cada uno a partir del 20 de diciembre del 2021 y así sucesivamente mediante depósito judicial.

Sexto. - Itinerario Procesal

En mérito al auto de citación a juicio se citó a los sujetos procesales a juicio oral. Se llevó el juzgamiento con la presencia del acusado. Instalada la audiencia, se escuchó el alegato de apertura del Ministerio Público, siendo que al tomar la palabra la defensa técnica del imputado, señaló abstenerse de tal exposición manifestando la intención de dicha parte procesal de acogerse a la conclusión anticipada. Así, al inicio del juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos,

al preguntársele si admitía ser partícipe en calidad de autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; éste, previa consulta con su defensa técnica, aceptó los hechos objeto de acusación fiscal, así como su responsabilidad penal, también aceptó la responsabilidad civil. Ante ello, se declaró la conclusión anticipada del juicio, se procedió a consultar a las partes respecto de algún acuerdo sobre la pena y reparación civil, siendo que los mismos acordaron todos los extremos de la pena y la reparación civil. Siendo ello así, el estado de la causa es el de expedirse sentencia la cual, en efecto, se emite el día de la fecha.

II. PARTE CONSIDERATIVA

Primero. - De la Conclusión Anticipada

El artículo 427° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencia vinculantes, tales como: el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008/CJ116 y el Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116 que, si bien este último está referido a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de legalidad y proporcionalidad atañen a la conclusión anticipada. No obstante, la presencia del juzgador no es pasiva, para efectos de la homologación de la "conformidad" ya que, existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

Segundo. - Ley Penal Aplicable

2.1. Conforme a la acusación, es aplicable el tipo penal del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, previsto y penado en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal.

2.2. El texto normativo de tal numeral, prevé:

"Artículo 149.- Incumplimiento de Obligación Alimentaria.

El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.

2.3. Para la configuración del ilícito, conforme a los hechos materia de imputación en el presente caso, y que han sido oralizados por la titular de la acción penal, se requiere que el agente haya omitido cumplir con su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial.

Tercero. - Juicio de Subsunción

3.1. La conducta del acusado se adecua objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito antes referido tal como han sido expuestos los cargos por el Ministerio Público -los cuales son inmodificables- por cuanto se ha demostrado que: ante el primer Juzgado de Familia del MBJ de Paucarpata, se tramita el expediente ro. 00145-2013-0-0412-JM-FC-02, seguido por María Ysabel Gallegos Vega en contra de Emerson Ordoñez Arias; que mediante Resolución 017 de fecha 30 de junio del 2014, el Juzgado aprueba el acuerdo onciatorio celebrado por las partes en todos sus extremos, debiendo cumplir el ahora imputado con pagar la suma de trescientos veinticinco con 00/100 soles (S/. 325.00) a favor de su menor hija Zharick Selenia Ordoñez Gallegos, en forma mensual. Pero es el caso, que el inculcado no ha cumplido con tal obligación, de tal forma que se practicó la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al periodo comprendido desde el 29 de mayo del 2013 al 31 de julio del 2016, adeudando la suma de S/. 15,283.93 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes con la Resolución N° 34 de fecha 5 de septiembre del 2017, hecho que conllevó que posteriormente fuera aprobada mediante Resolución Nro. 35 de fecha 07 de diciembre del 2017 y requerido al imputado para su pago en el plazo de cinco días dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas a través de la misma resolución, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones, en caso de incumplimiento, la misma que le fue notificada al ahora imputado mediante notificación Nro. 96927-2017-JR-FC con fecha 21 de diciembre del 2017; que, ante el incumplimiento del imputado, mediante Resolución Nro. 40 de fecha 20 de marzo del 2018, el Juzgado hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas al Ministerio Público. De lo expuesto se tiene acreditado que el acusado Emerson Ordoñez Arias, en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de S/. 15,283.93 soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de su menor hija. Ello así se tiene del reconocimiento efectuado de manera expresa, libre y voluntaria por el acusado, en audiencia y previa consulta con su defensa técnica, al aceptar la responsabilidad de los hechos materia de imputación, conforme a la naturaleza de la conformidad en juicio.

3.2. No se ha alegado ni probado causa que justifique el actuar típico del acusado o que excluya su culpabilidad.

3.3 Por lo que al concurrir todos los elementos del tipo penal materia de acusación, los mismos que han sido realizados con conocimiento y voluntad conforme se desprende de los hechos acreditados en autos, con el reconocimiento efectuado por el acusado; en consecuencia, la conducta del encausado deviene en típica, antijurídica y culpable.

Cuarto. - Individualización de la Pena

4.1. El principio de Proporcionalidad, es aquel principio que exige al juzgador verificar que la pena guarde una relación de correspondencia con el injusto cometido por el agente, se encuentra reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, el que debe ser entendido como la correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar; por tanto constituye un límite al *IUS PUNIENDI*, en tanto exige un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación legal. Esto significaría que el principio de proporcionalidad debe guardar relación conforme a la culpabilidad, pero no siempre de acuerdo al injusto la culpabilidad puede coincidir con la misma, por cuanto esta puede resultar mayor a la culpabilidad concreta; entiéndase que los criterios para establecer la proporcionalidad deben atender aquellos vinculados al injusto, importancia del rango del bien jurídico protegido, grado de lesión del mismo, impacto social y los diferentes medios de comisión del hecho, entre otros aspectos, así, el juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad. En el caso que nos ocupa, se evidencia que el actuar del acusado, es una conducta gravosa en relación al bien jurídico protegido a través del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en perjuicio de la parte agraviada, actividad ilícita que constituye un hecho reprochable.

4.2. La Fiscalía con la defensa del procesado han acordaron la RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO, por un año, reduciendo dos meses por la conclusión anticipada quedando la pena privativa de libertad en UN AÑO Y CUATRO MESES, el periodo de reserva sería por el plazo de un año a condición de que cumpla reglas de conducta establecidas en el artículo 64 y estas son: 1) la prohibición de variar de domicilio sin dar cuenta al órgano jurisdiccional, 2) comparecer cada tres meses al Juzgado, a efecto de personal y obligatoriamente informar sobre sus actividades, para lo cual el abogado de la defensa deberá de hacer las gestiones correspondientes a efecto de viabilizar el cumplimiento de esta regla de conducta a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad de Tacna, gestión que deberá de realizar una vez que baje el expediente al Juzgado de Ejecución de esta sede judicial 3) Reparar el daño ocasionado con el delito a través del pago de la reparación civil; en caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta daría como efecto el inciso 3 del artículo 65 del Código Penal, es decir la revocatoria directa convirtiendo la pena en efectiva en UN AÑO Y CUATRO MESES.

4.3. Para realizar la determinación judicial de la pena, el caso de autos, se toma en cuenta los criterios fundamentadores de la pena establecidos en el artículo 45°, 45°-A y 46 modificados e incorporados al Código Penal por la Ley N° 30076.

4.4. Se procede a verificar criterios previstos en el artículo 45°-A señalado: a) **Espacio punitivo de determinación de pena básica:** El delito de omisión a la asistencia familiar, prevé una pena no mayor a tres años de pena privativa de libertad o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, en tal sentido corresponde hacer el análisis de la pena. b) **Determinación de pena concreta:** Respecto de la pena privativa de libertad, no concurren circunstancias agravantes cualificadas ni atenuantes privilegiadas por lo que la división del marco punitivo es el siguiente:

PRIMER TRAMO	SEGUNDO TRAMO	TERCER TRAMO
Hasta 12 meses	12 meses + 1 día – 24 meses	24 meses + 1 día a 36 meses

Además teniendo en cuenta que en el procesado concurre una circunstancia agravante y atenuante, ya que carece de antecedentes penales y la conducta punible se ha realizado por motivo abyecto y fútil, por lo que la pena concreta se ubica en el segundo tramo extremo medio, el Ministerio Público solicitó un año y seis meses de pena privativa de libertad, *quantum* al que corresponde efectuar el descuento del 1/7 por la premialidad correspondiente a la conclusión anticipada, habiendo el Ministerio Público y la Defensa Técnica del acusado, convenido en la siguiente pena para su aprobación por el Juzgado: RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO, por el plazo de un año a condición de que cumpla reglas de conducta establecidas en el artículo 64 y estas son: 1) la

prohibición de variar de domicilio sin dar cuenta al órgano jurisdiccional, 2) comparecer cada tres meses al Juzgado, a efecto de personal y obligatoriamente informar sobre sus actividades, para lo cual el abogado de la defensa deberá de hacer las gestiones correspondientes a efecto de viabilizar el cumplimiento de esta regla de conducta a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad de Tacna, gestión que deberá de realizar una vez que baje el expediente al Juzgado de Ejecución de esta sede judicial, 3) Reparar el daño ocasionado con el delito a través del pago de la reparación civil; en caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta daría como efecto el inciso 3 del artículo 65 del Código Penal, es decir la revocatoria directa convirtiendo la pena en efectiva en UN AÑO Y CUATRO MESES. Por lo que considerando la prognosis positiva del agente, así como el análisis de los antecedentes, teniéndose en cuenta las condiciones personales del actor, además de las circunstancias del evento delictivo en el que ha participado, la naturaleza del mismo, verificándose el cumplimiento del artículo 62 del Código Penal y meritándose finalmente lo previsto en el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008-CJ/116 se concluye que este extremo debe ser aprobado.

Quinto. - Determinación de la Reparación Civil

5.1. El objeto civil se rige por los artículos 11° y 12° del Código Procesal Penal y 93° al 101° del Código Penal, precepto éste último que nos remite a las disposiciones correspondientes del Código Civil.

5.2. En el caso se tiene que la defensa del actor civil y la defensa del procesado han acordado que la reparación civil por daño moral asciende a la suma de S/. 1,000.00 soles para lo cual harán un depósito el día lunes 22 de noviembre del 2021; respecto de las pensiones devengadas, se ha hecho el día de hoy un depósito de S/5,000.00 soles, quedando un saldo de S/. 10,283.93 soles que será pagado en ocho cuotas de S/. 1,285.50 soles cada una a partir del 20 de diciembre del 2021 y así sucesivamente mediante depósito judicial. Siendo que el monto establecido por tal concepto resulta razonable, estando a los extremos anotados y que el mismo no ha sido materia de controversia, debe ser aprobado.

Sexto. - Pronunciamiento sobre las costas

El artículo 497.5° del Código Procesal Penal establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz, siendo que, en el presente caso, al haber concluido el proceso por “conformidad”, el juzgado estima que no procede la imposición de costas.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones administrando justicia a nombre del pueblo de quien emana dicha facultad;

FALLO:

Primero. - APROBANDO los acuerdos de pena y reparación civil arribados entre el acusado, su defensa técnica, el actor civil y el Ministerio Público.

Segundo. - DECLARO al señor **Emerson Ordoñez Arias**, como **AUTOR** del delito contra la familia - **OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, en la modalidad de incumplimiento de obligación alimentaria, previsto en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal, en agravio de la menor Zharick Selena Ordoñez Gallegos representada por María Ysabel Gallegos Vega.

Tercero. - ABSTENIENDOME de dictar la parte condenatoria de la presente sentencia, **DISPONGO** la **RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO** por el plazo de **UN AÑO**, a condición de que el sentenciado cumpla las siguientes reglas de conducta: 1) Deberá de comparecer de manera personal y obligatoria al Juzgado de Ejecución cada tres meses, a fin de informar y justificar sus actividades lo que podrá realizar también a través de la página web del Poder Judicial, para lo cual deberá de empadronarse, precisar que corre a cargo de la defensa del propio sentenciado hacer las gestiones correspondientes a efecto de viabilizar el cumplimiento de esta regla de conducta a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad de Tacna, gestión que deberá de realizar una vez que baje el expediente al Juzgado de Ejecución de esta sede judicial; 2) Prohibición de variar de domicilio sin dar cuenta al Juzgado de Ejecución, 3) Deberá reparar el daño causado con el delito con el pago íntegro de la reparación civil y las pensiones alimenticias devengadas en los términos que han sido acordados en esta audiencia.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas reglas de conducta, se aplicará lo establecido en el artículo 65° inciso 3 del Código Penal, es decir, se revocará de manera directa el periodo de

prueba y se le impondrá UN AÑO Y CUATRO MESES de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva.

Cuarto. - FIJO el monto de la **REPARACIÓN CIVIL** a favor de la parte agraviada en la suma de S/. 1,000.00 (MIL SOLES) sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias devengadas que ascienden al monto total de S/. 15,283.93 soles, precisando que respecto de estos montos van a ser cancelados de la siguiente forma, los S/.1,000.00 soles que corresponde a la reparación civil propiamente dicha van a ser cancelados por el sentenciado el día lunes 22 de noviembre del 2021, y teniéndose en cuenta que se ha consignado por la defensa el depósito judicial efectuado el día de la fecha 19 de noviembre del 2021 que ha sido presentado al Juzgado y respecto del cual tienen conocimiento las partes por el monto de S/. 5,000.00 soles, es que se tiene un saldo adeudado a la fecha de S/. 10,283.93 soles correspondientes a las pensiones alimenticias devengadas que van a ser canceladas mediante el pago de ocho cuotas mensuales de S/. 1,285.50 soles cada una de ellas que van a ser canceladas a partir del 20 de diciembre del 2021 la primera cuota y así sucesivamente las siguientes cuotas serán abonadas los días 20 de los meses subsiguientes hasta completar el pago total de las ocho cuotas que se han pactado, todo ello mediante depósitos judiciales que deberá efectuar en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución debiendo el sentenciado hacer llegar los comprobantes de pago correspondiente al citado Juzgado para efecto de proceder al endoso de dichos montos. En relación al depósito judicial por la suma de S/. 5,000.00 Soles que ha sido presentado al despacho el día de la fecha vamos a disponer sea endosado a la parte agraviada para el cobro respectivo.

Quinto. - DISPONGO que no corresponde fijar el pago de costas.

Sexto. - MANDO que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se inscriba en el Registro Especial de Condenas, y demás anotaciones que corresponda. **Regístrase y Comuníquese. -**



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL
3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

CASO TURNO PENAL N°

DISPOSICIÓN DE FORMALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DISPOSICIÓN N° 01 - 2019-1FPPC-5DI

Arequipa, veintiuno de julio

Del dos mil diecinueve.-

21/07/19
18:52
Jefferson Rodríguez Lavado
Fiscal de la Nación
Fiscalía Provincial Penal Corporativa - Paucarpata
Oficina de la Fiscalía de Arequipa

I.-DADO CUENTA: Los actuados en torno a la investigación, en contra de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, en torno a la investigación por la comisión del delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de **ROBO AGRAVADO**, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 3), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, en agravio de **DIEGO QQUENTA LIMA**; y,

II.-ATENDIENDO A:

Primero: La investigación preparatoria, conforme al artículo 321.1 del Código Procesal Penal, persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación, y, en su caso, al imputado preparar su defensa, y tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.

Segundo: HECHOS INVESTIGADOS.-

Hechos precedentes: Se tiene que con fecha 19 de julio del año 2019, siendo las 21:30 horas aproximadamente, las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA (20 años)** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO (21 años)**, además del menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS (16 años)**, se encontraban tomando licor, por inmediaciones de la Av. Miguel Grau, distrito de Paucarpata, donde se genera una gresca, de la que incluso la persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** resulto herido como consecuencia del impacto de una piedra en la cabeza, por lo que corren de este lugar, siendo que al no tener dinero, divisan al agraviado a quién deciden sustraer sus pertenencias. -

Hechos concomitantes: Es el caso, que el agraviado **DIEGO QQUENTA LIMA**, se encontraban caminando con rumbo a su domicilio, por la Av. Olímpica del PP JJ Miguel Grau, Paucarpata, siendo que al llegar a la altura de Estadio Miguel Grau, se percata de la presencia de estos tres sujetos desconocidos, quienes estaban en dirección opuesta, se le acercan y uno de ellos, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** lo sujeta por el cuello haciéndolo caer al suelo, y los otros dos sujetos, las personas de **ADRIAN**



ALEXANDER CACALLICA OSORIO y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, se fueron encima suyo, lo sujetan contra el suelo, aplastándole la cabeza, mientras que la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le rebuscaba los bolsillos, del bolsillo de su pantalón le sustrajo la suma de S/ 130.00 soles, dinero del trabajo del día, le arrancó el morral de color azul, donde tenía la suma de S/ 40.00 soles, además de un menú en su taper y comida para gatos; mientras seguía siendo sujetado por **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le decía "este es mi barrio y no te muevas, porque te vamos a matar", mientras que lo golpeaba con puño y patadas, llegando a patear su rostro, ocasionándole una herida en la ceja, lado izquierdo, y es cuando el agraviado reacciona y se escapa, mientras que los tres sujetos se quedaron en el lugar.

Hechos posteriores: Finalmente, el agraviado corrió un cuadra, donde ubicó a los serenos del Municipio del Paucarpata, haciéndolo subir a una camioneta, y emprenden la búsqueda de los tres sujetos, es allí donde logran ubicar a la persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, quien es intervenido, subiéndolo a la móvil, los otros dos sujetos, comenzaron a correr, mientras iban botando las cosas del agraviado; mochila y otros enseres, por lo que solicitan los serenos otras unidades de apoyo, quienes finalmente capturaron a las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y al menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, para posteriormente efectuar los serenos el recojo de las pertenencias del agraviado, logrando recuperar su bolso morral, una bolsa de plástico de color blanco conteniendo comida para gato y dos rollos de papel higiénico.

Siendo todos, conducidos a la comisaría del sector para las investigaciones del caso.

Tercero: Que la conducta del denunciado corresponde al delito de atribuido de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, se encuentra tipificada como delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de ROBO AGRAVADO, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, como: "El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido (...) La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: (...) Durante la noche o en lugar desolado (...) Con el concurso de dos o más personas."

Se ha evidenciado que el investigado **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** han actuado dolosamente, su conducta ha perjudicado patrimonialmente el patrimonio y la integridad física del agraviado **DIEGO QQUENTA LIMA**.



Cuarto: Que el artículo 336 del Código Procesal Penal, señala que si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares realizadas, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que si fuera el caso, se ha satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y continuación de la investigación preparatoria. En ese orden de ideas, en este caso se cumplen dichos presupuestos que exigen la investigación preparatoria puesto que el hecho delictivo es un delito de acción pública, cuyo ejercicio es objeto de persecución por el Ministerio Público, no encontrándose prescrita la acción penal; asimismo el denunciado **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, se encuentran individualizado e identificado, DNI No. 75782098, natural de Moquegua, 20 años, nacido el 11 de mayo de 1999, Secundaria Completa, hijo de Rogelio Victor y Eusebia, con domicilio real en lote 10, Manzana C, AA HH 26 de julio - Paucarpata, y domicilio procesal la Av. Independencia 927, Cercado, Defensoría Pública (Dr. Rogger Flores Chancayauri con Reg. CAA 3130, Casilla Electrónica 33737), igualmente el denunciado **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, se encuentran individualizado e identificado, DNI No. 77576003, natural de Arequipa, 21 años, nacido el 18 de febrero de 1998, Secundaria completa, hijo de Alejandro y Crisalida, con domicilio real en comité 24, manzana L, lote 15, Ciudad Blanca - Paucarpata, y domicilio procesal la Av. Independencia 927, Cercado, Defensoría Pública (Dr. Rogger Flores Chancayauri con Reg. CAA 3130, Casilla Electrónica 33737), no existiendo ningún requisito de procedibilidad para continuar con la investigación preparatoria respecto al tipo penal investigado.

PARTE AGRAVIADA DIEGO QQUENTA LIMA, DNI No. 47850828, cuenta con domicilio real ubicado en Av. El Sol No. 422, PP JJ Miguel Grau, Paucarpata.

Quinto: Resultan ser elementos de prueba vinculante a los imputados con los hechos investigados:

1.- **Acta de intervención policial**, "En la ciudad de Arequipa, siendo las 22:15 horas del día 19 de julio del 2019, hicieron presentes a esta comisaria PNP, los serenos de la Municipalidad de Paucarpata,... quienes realizaron un arresto ciudadano, a las persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO... BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y al menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS...** quienes manifiestan que dichos sujetos asaltaron y agredieron a la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA...** robándole su morral de color azul, un menú en taper, comida para gatos,...



2.- **Certificado Médico legal No. 20379-L, de fecha 20 de julio del 2019**, practicado por la División médico legal de Arequipa, a la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA**, quién presenta herida contusa suturada de 2 cm con hematoma subyacente en región supraciliar izquierda, hematoma de 6 x 4 cm en región occipital derecha,... lesiones ocasionadas con objeto contundente duro, atención facultativa 02, incapacidad médico legal 08.

3.- **Ocurrencia** "En la Ciudad de Arequipa, en la Comisaría de Miguel Grau, siendo las 22.20 horas del día 19jul2019, presentes ante el Instructor los Serenos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata: "EN ESTE ACTO LOS SERENOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS MANIFIESTAN QUE EL DIA DE LA FECHA A HORAS 22.00 APROX. EN CIRCUNSTANCIAS QUE REALIZABAN PATRULLAJE MOTORIZADO POR LA ZONA DE MIGUEL GRAU, FUERON ALERTADOS POR LA PERSONA DE DIEGO QQUENTA LIMA (28), QUIEN LES MANIFESTO QUE MOMENTOS ANTES HABIA SIDO ASALTADO POR TRES SUJETOS DESCONOCIDO PERO QUE LOS PODIA IDENTIFICAR, POR LO QUE DE INMEDIATO Y A BORDO DE UNA CAMIONETA DE SERANAZGO DE PAUCARPATA INICIARON LA BUSQUEDA DE LOS DELINCUENTES UBICANDOLOS A ESPALDAS DEL MERCADO DEL PL. MIGUEL GRAU, DONDE AL VERSE DESCUBIERTOS ESTOS HUYERON DEL LUGAR ARROJANDO EN SU HUIDA LOS ENSERES QUE LE FUERON SUSTRIDOS AL DENUNCIANTE, POR LO QUE LOS SERENOS RECOGIERON LOS MENCIONADO ENSERES Y LOS TRALADARON HASTA ESTA COMISARIA, PROCEDIENDO ESTE ACTO SE PROCEDE A RECEPCIONARLOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: UN MORRAL (BOLSO PEQUEÑO) SINTETICO DE COLOR AZUL CON TRES FRANJAS DE COLOR BLANCO MARCA ADIDAS, UNA MOCHILA DE COLOR AZUL/NEGRO DE LONA SIN MARCA, UNA BOLSA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO CONTENIENDO EN SU INTERIOR COMIDA PARA ANIMALES (GALLETAS) Y DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE COLOR BLANCO, MARCA HIGIENOL...".

4.- **Acta de reconocimiento de pertenencias:** En la ciudad de Arequipa, siendo las 14:15 del 20JUL2019, presentes en la Sección de investigación Criminal de la Comisaría PNP de Miguel Grau, El instructor, la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA**... "Que, si reconoce un morral (maletín pequeño), de material sintético de color azul, con tres franjas de color blanco, marca ADIDAS, una bolsa de polietileno de color blanco conteniendo comida para mascotas (galletas) dos rollos de papel higiénico de color blanco.

5.- **Declaración de ROGER JOSE CUTIPA CRISTOBAL**, "Que, a horas 21:45 estábamos haciendo estacionamiento táctico en la Av. El Sol parte posterior del Colegio Paola Fraissinet, en compañía de dos serenos... en donde un joven todo ensangrentado a pedir auxilio, lo subimos a la móvil, en el camino nos comentaba



que eran tres personas de sexo masculino que lo habían asaltado y agredido físicamente por la calle La Mar, Miguel Grau, procedimos a bajar por la calle La Mar, Morro de Arica, y subimos por la calle Angamos, dando alcance a tres personas, por la parte posterior del Mercado Miguel Grau, quién el agraviado indicó que ran los que lo habían asaltado, las tres personas se sintieron acorralados, y una de ellas se hizo el borracho quedándose en el lugar y los otros dos corrieron, a la parte posterior del mercado donde esta deshabitado y sin alumbrado público, al tratar de acorralarlos, el sujeto que yo intervine lanzo unos objetos, es donde llegó hacia él, pero antes me lanzó una piedra el cual me cubrí con la mano derecha causándome una lesión. lo reduje al sujeto y lo lance al suelo, esperé hasta que llegue el apoyo, pero mientras esta intervención el vehículo de serenazgo también daba vueltas a los dos para que no puedan huir, es donde llegaron tres móviles de Serenazgo de Paucarpata, es donde es posible traerlos a esta Comisaria, los otros serenos buscaron con las luces piratas los objetos que lanzaron, logrando ubicarlos y recogerlos y eran las cosas del señor que se identificó como DIEGO QQUENTA LIMA, al que habían asaltado."

6.- Declaración de JORGE ALBERTO MOSTAJO RIVERA, "que el día 19 de julio de 2019, a horas 22.15 me encontraba de servicio de sereno cuando fuimos alertados por el ciudadano DIEGO QQUENTA LIMA, quien nos manifestó que momentos antes había sido asaltado por 3 jóvenes desconocidos, pero indicó que no podía identificarlos, por lo que lo hicimos subir a la unidad móvil y procedimos a buscarlos a dichos sujetos por lo que retornamos por la avenida olímpica calle la Mar y retornamos nuevamente por la calle Angamos, llegando a la altura del mercado miguel Grau, a espaldas, donde nos percatamos de 3 sujetos que empezaron a correr, donde uno de ellos se quedó parado y nos indicó que también había sido asaltado y que se encontraba aparentemente en estado etílico, procediendo inmediatamente a ingresarlo al vehículo junto con el agraviado, el mismo que sangraba de la parte posterior de su cabeza como el mismo había manifestó que había sido asaltado luego se baja uno de mis compañeros intento perseguir a uno de los sujetos y el otro sereno lo persigue hasta a espaldas del mercado miguel Grau, donde comienza arrojar una mochila de color azul con negro inmediatamente se baja mi compañero para perseguirlo, nuevamente da la vuelta con la móvil me percate que ya los habían capturado, recogiendo los enseres q arrojaron los delincuentes cuando huían lo cual consiste en una mochila de color negro azul, un morral (bolso pequeño) de color azul con franjas blancas e marca "ADIDAS", una mochila de color negro azul, una bolsa de polietileno de color blanco, conteniendo comida para animales (galletas), 2 rollos de papel higiénico, al momento que mis compañeros intervinieron a estos s sujetos uno de ellos lanzo una piedra contra la móvil por lo que casi sufrí un accidente de tránsito

7.- Declaración del agraviad DIEGO QQUENTA LIMA: "que, el día 19 de julio del 2019 a horas 21,30 luego de comprar mmi cena fui a comprar comida para mi gato a una tienda, papel higiénico, una gaseosa personal, champú, y cuando me encontraba caminando con rumbo a mi domicilio por la Av. Olímpica, del PP JJ



Miguel Grau, al llegar a altura del estadio Miguel Grau, 21:30 aprox., me percate de la presencia de tres sujetos desconocidos, quienes se acercaron a mi persona, a quienes nos les pude ver el rostro en ese momento, porque el lugar era muy oscuro, u uno de ellos me sujetó por el cuello, haciéndome caer al suelo y los otros dos sujetos vinieron encima mío, me sujetaron contra el suelo, aplastándome la cabeza contra el suelo de costado, mientras que el sujeto de estatura alta me rebuscaba los bolsillos, del bolsillo del pantalón se sustrajo S/130.00 soles, dinero que tenía del trabajo del día, me arranco mi morral de color azul, donde tenía la suma de S/40.00 soles y las cosas que había comprado, mi cena y las otras cosas que compre en la tienda, y cuando me movía tratando de zafarme de los otros dos sujetos que me sujetaban contra el piso, el sujeto me decía "este es mi barrio, y no te muevas porque te vamos a matar", me golpeaba con golpes de puño y patadas, llegándome a patear el rostro, ocasionándome una herida en la ceja lado izquierdo, es cuando sentí que me salía bastante sangre reaccione y escape, mientras los tres sujetos se quedaron en el lugar...."

8.- Declaración de ALEXANDER CACALLICA OSORIO: "Que, el día 19JUL2019 estuve tomando licor con mis compañeros hasta las 6 de la tarde, luego salimos caminando por el mercado de miguel Grau, y encuéntranos un grupo de personas iniciándose una gresca y en la cual lanzaron una piedra que me cayó en la cabeza ya sali corriendo junto con mis amigos Cristian y Billy, como quisieron comer y no tenían dinero vimos a una persona y lo alcanzamos siendo que mi amigo Billy lo agorra del cuello haciéndolo caer al suelo mientras que yo les dije que nos retiráramos e intente rebuscar sus bolsillos no dándome cuenta si le había robado algo, pero por mi parte a mí no me han encontrado nada, para luego hacerse presentes los serenos de Paucarpata quienes me interviene y me hace ingresar a una camioneta donde se encontraba el agraviado quien tenía una herida en la frente para posteriormente llevarlo a la comisaria donde también habían sido intervenidos Billy y Cristian, no dándome cuenta si mis amigos le había robado algo."

9.- Declaración de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA, "Que, el día 19JUL2019 estuve tomando licor con mis compañeros hasta las 6 de la tarde, luego salimos caminando por el mercado de miguel Grau, y encontramos un grupo de personas iniciándose una gresca y en la cual lanzaron una piedra que le cayó en la cabeza a mi amigo Adrián luego sali corriendo junto con mis amigos Cristian y Adrián, luego de lo divisamos a una persona de sexo masculino a quien lo alcanzamos y como no teníamos dinero lo tome por el cuello y junto con mis amigos lo tumbamos al suelo y le quitamos la comisa que llevaba ya que teníamos hambre y yo me encontraba ebrio luego mis amigos le rebuscaron los bolsillos y de allí nos retiramos del lugar y es cuando fuimos intervenidos por los serenos de Paucarpata, quiero agregar que a mí no me han encontrado ninguna pertenencia del denunciante en mi poder, luego de ocurrido me trasladaron a la comisaria de Miguel Grau, donde también lo encontré a mi amigo Adrián quien se encontraba sangrando por la cabeza."



10.- Declaración del menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, "Que. si me encontraba en compañía de dos personas quienes eran **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, él es mi vecino y el otro es Adrián del cual no se su apellido, es amigo. con ellos me encuentro desde las 16:00 aprox., y estábamos en la calle no recuerdo el nombre por Miguel Grau, Paucarpata, compramos en una tienda que estaba en el lugar eran tres botellas de ron, terminamos más o menos a las seis de la tarde, subimos hasta el local denominado "Mary" ubicado en la Av. Miguel Grau, Paucarpata, ahí con mis amigos pedimos una botella de trago, hasta las 22:30, aprox., al salir caminamos con dirección a mi casa, y ya por el mercado de Miguel Grau, en la parte descampada, que no hay luz, unas personas estaban tomando, y uno de ellos me agarra por el cuello, mi amigo Adrián vino a defenderme, por atrás le lanzaron una piedra en la cabeza, escapamos corrimos por el mercado por la parte de atrás, queríamos comer y no teníamos dinero, es donde apareció un chico y para alcanzarlo corrimos, mi amigo Billy lo agarró por el cuello, pensé que solo pedían dinero, mientras Adrián le rebuscaba los bolsillos, lo lanzaron al suelo, me asusté y salí corriendo, y vino el serenazgo mis amigos me alcanzaron, Billy tenía el morral, la bolsa blanca con la comida de gato y Adrián tenía el papel higiénico, vimos la camioneta de serenazgo y empezamos a correr por separado, ahí boté la mochila de mi amigo Billy y pensé que eran las pertenencias del agraviado, ahí un sereno me cogió del cuello, yo quería hablar y no podía, me lanzó al suelo y me rebuscó, me metieron a la camioneta, me trajeron a esta Comisaría.

11.- Oficio No. 51845-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, de fecha 20 de julio del 2019, dando cuenta que las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, no registran antecedentes penales, ni judiciales.

Sexto. Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 321 del Código Procesal Penal, la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta inculpada es delictuosa, las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor y de la víctima, así como la existencia del daño causado.

Por lo expuesto, con las atribuciones conferidas por Ley y la Constitución Política del Estado

Este Despacho. **DISPONE:** LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, en contra de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, en torno a la investigación por la comisión del delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de ROBO AGRAVADO, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, en agravio de **DIEGO QQUENTA**



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL

3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

LIMA, en la vía del proceso común, sin perjuicio de emplearse cualquiera de los procesos especiales de ser el caso. Asimismo, al efecto de la investigación, es necesario se efectúen las siguientes diligencias:

1. Practíquese una pericia psicológica a la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, a efecto de determinar el grado de imputabilidad.
2. Obténgase resultado del examen de dosaje etílico y toxicológico practicado tanto a los imputados, como al agraviado.
3. Recíbese la declaración de las siguientes personas familiares de los denunciados.
4. Y las demás diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento del hecho denunciado, debiendo adjuntarse a los autos los cargos del diligenciamiento de las pruebas ordenadas.

En consecuencia **PÓNGASE EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA**, la presente disposición conforme al artículo 3° del Código Procesal Penal, notificándose a los imputados en la forma establecida.

Fiscal Responsable: Luis Guillermo Vera Oviedo.

Casilla Electrónica: 33477.


Luis Guillermo Vera Oviedo
Fiscal Responsable
1ra. Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata
Paucarpata, 20 de Mayo, 2017



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DISTRITO FISCAL
3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

Expediente	: 7602-2019-58-0401-JR-PE
Carpeta Fiscal	: 504-2019-3911
Imputado	: BILLY MAMANI PUMACOTA y Otros
Delito	: ROBO AGRAVADO
Agraviado	: DIEGO QQUENTA LIMA

DISPOSICIÓN N° 02-2019

Arequipa, Dos de Diciembre

Del año dos mil Diecinueve.-

DANDO CUENTA EN LA FECHA: La presente investigación, signada con el caso Nro. 504-2019-3911, en contra de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, por la presunta comisión del delito **CONTRA EL PATRIMONIO**, en la modalidad de **ROBO AGRAVADO**, previsto y penado en el artículo 189°, del Código Penal, en agravio del **DIEGO QQUENTA LIMA** y;

ATENDIENDO: Que, los fundamentos que sustentan la presente Disposición son los siguientes:

PRIMERO.- Se tiene que con fecha 19 de Julio del año 2019, siendo las 21:30 horas aproximadamente, las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** (20 años) y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** (21 años), además del menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS** (16 años), se encontraban tomando licor, por inmediaciones de la Av. Miguel Grau, distrito de Paucarpata, donde se genera una gresca, de la que incluso la persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** resulto herido como consecuencia del impacto de una piedra en la cabeza, por lo que corren de este lugar, siendo que al no tener dinero divisan al agraviado a quien deciden sustraer sus pertenencias.

En el caso, que el agraviado **DIEGO QQUENTA LIMA**, se encontraban caminando con rumbo a su domicilio, por la Av. Olímpica del PPJJ Miguel Grau, Paucarpata, siendo que al llegar a la altura del Estadio Miguel Grau, se percata de la presencia de estos tres sujetos desconocidos, a quienes estaban en dirección opuesta, se le acercan y uno de ellos la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** lo sujeta por el cuello haciéndolo caer al suelo, y los otros dos sujetos, las personas de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, se fueron encima suyo, lo sujetan en contra el suelo, aplastándole la cabeza, mientras que la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le rebuscaba los bolsillos, del bolsillo de su pantalón le sustrajo la suma de S/. 130.00 soles, dinero del trabajo del día, le arranco el morral de color azul, donde tenia la suma de S/40.00 soles, además de un meno en su táper y comida para gatos; mientras seguía siendo sujetado por **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le decía "este es mi barrio y no te muevas, porque te vamos a matar", mientras que lo golpeaba con puño y patadas, llegando a patear su rostro, ocasionándole una herida en la ceja, lado izquierdo y es cuando el agraviado reacciona y se escapa, mientras que los tres sujetos se quedaron en el lugar.

Urb. Guardia Civil, 3ra Etapa, Mz. "O" S/N - Paucarpata - Segundo Piso
www.fiscalia.gob.pe



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DISTRITO FISCAL
3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

Finalmente, el agraviado corrió una cuadra, donde ubico a los serenos del Municipio de Paucarpata, haciéndolo subir a una camioneta, y emprenden la búsqueda de los tres sujetos, es allí donde logran ubicar a la persona de ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO, quien es intervenido, subiéndolo a la móvil, los otros dos sujetos comenzaron a correr, mientras iban botando las cosas del agraviado; mochila y otros enseres, por lo que solicitan los serenos otras unidades de apoyo, quienes finalmente capturaron a las personas de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA y al menor CRISTIAN MERMA ZEBALLOS, para posteriormente efectuar los serenos el recojo de las pertenencias del agraviado, logrando recuperar su bolso morral, una bolsa de plástico de color blanco conteniendo comida para gato y dos rollos de papel higiénico, siendo todos conducidos a la comisaria del sector para las investigaciones del caso.

SEGUNDO.-En la presente investigación se tiene el cumplimiento de los plazos ordinarios, máximos, además, debe entenderse que se ha cumplido con el objeto de la investigación, habiéndose realizado dentro del plazo de investigación las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, por lo que conforme al estado del proceso resulta del caso que el Ministerio Público tiene que decidir conforme al artículo 344° del Código Procesal Penal.

TERCERO.- Por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 343° numeral 1 del Código Procesal Penal, este Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa,

SE DISPONE:

PRIMERO: LA CONCLUSION DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, y conforme a su estado **FORMÚLESE** el correspondiente Requerimiento Fiscal, déjese al efecto los actuados en el Despacho Fiscal para los fines de Ley.

Notificándose a las partes y ofíciase.

Fiscal responsable: Luis Guillermo Vera Oviedo.

02


.....
DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL

3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

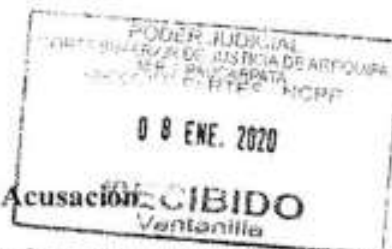
Expediente N°: 7602-2019

Especialista :

Delito : Robo Agravado

Carpeta Fiscal: 504-2019-3911

Sumilla : Requerimiento de Acusación



SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PAUCARPATA

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial Titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en la calle Teniente Alcántara s/n. Urb. Guardia Civil, III Etapa, Paucarpata, Casilla Electrónica: 33477, ante Usted me presento y Digo:

Este Ministerio Público, a tenor de lo establecido en el artículo 349° del Código Procesal Penal **FORMULA REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN** en contra de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, en torno a la investigación por la comisión del delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de **ROBO AGRAVADO**, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, en agravio de **DIEGO QQUENTA LIMA**.

I.- DATOS PERSONALES DE LA PARTE ACUSADA:

- A. **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, se encuentran individualizado e identificado, DNI No. 75782098, natural de Moquegua, 20 años, nacido el 11 de mayo de 1999, Secundaria Completa, hijo de Rogelio Victor y Eusebia, con domicilio real en lote 10, Manzana C, AA HH 26 de julio - Paucarpata, y domicilio procesal Av. Jorge Chávez 300, Paucarpata. (Dra Elizabeth Cari Gonza).
- B. **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, se encuentran individualizado e identificado, DNI No. 77576003, natural de Arequipa, 21 años, nacido el 18 de febrero de 1998, Secundaria completa, hijo de Alejandro y Crisalida, con domicilio real en comité 24, manzana L, lote 15, Ciudad Blanca - Paucarpata, y domicilio procesal la Av. Independencia 927, Cercado, Defensoría Pública (Dr. Rogger Flores Chancayauri con Reg. CAA 3130, Casilla Electrónica 33737).

II.- PARTE AGRAVIADA:

DIEGO QQUENTA LIMA, DNI No. 47850828, cuenta con domicilio real ubicado en Av. El Sol No. 422, PP JJ Miguel Grau, Paucarpata.



III.-DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS.-

Hechos precedentes: Se tiene que con fecha 19 de julio del año 2019, siendo las 21:30 horas aproximadamente, las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA (20 años)** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO (21 años)**, además del menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS (16 años)**, se encontraban tomando licor, por inmediaciones de la Av. Miguel Grau, distrito de Paucarpata, donde se genera una gresca, de la que incluso la persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** resulto herido como consecuencia del impacto de una piedra en la cabeza, por lo que corren de este lugar, siendo que al no tener dinero, divisan al agraviado a quién deciden sustraer sus pertenencias.

Hechos concomitantes: Es el caso, que el agraviado **DIEGO QQUENTA LIMA**, se encontraban caminando con rumbo a su domicilio, por la Av. Olímpica del PP JJ Miguel Grau, Paucarpata, siendo que al llegar a la altura de Estadio Miguel Grau, se percata de la presencia de estos tres sujetos desconocidos, quienes estaban en dirección opuesta, se le acercan y uno de ellos, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** lo sujeta por el cuello haciéndolo caer al suelo, y los otros dos sujetos, las personas de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, se fueron encima suyo, lo sujetan contra el suelo, aplastándole la cabeza, mientras que la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le rebuscaba los bolsillos, del bolsillo de su pantalón le sustrajo la suma de S/ 130.00 soles, dinero del trabajo del día, le arrancó el morral de color azul, donde tenía la suma de S/ 40.00 soles, además de un menú en su taper y comida para gatos; mientras seguía siendo sujetado por **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le decía "este es mi barrio y no te muevas, porque te vamos a matar", mientras que lo golpeaba con puño y patadas, llegando a patear su rostro, ocasionándole una herida en la ceja, lado izquierdo, y es cuando el agraviado reacciona y se escapa, mientras que los tres sujetos se quedaron en el lugar.

Hechos posteriores: Finalmente, el agraviado corrió un cuadra, donde ubicó a los serenos del Municipio del Paucarpata, haciéndolo subir a una camioneta, y emprenden la búsqueda de los tres sujetos, es allí donde logran ubicar a la persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, quien es intervenido, subiéndolo a la móvil, los otros dos sujetos, comenzaron a correr, mientras iban botando las cosas del agraviado; mochila y otros enseres, por lo que solicitan los serenos otras unidades de apoyo, quienes finalmente capturaron a las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y al menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, para posteriormente efectuar los serenos el recojo de las pertenencias del agraviado, logrando recuperar su bolso morral, una bolsa de plástico de color blanco conteniendo comida para gato y dos rollos de papel higiénico.

Siendo todos, conducidos a la comisaría del sector para las investigaciones del caso.



IMPUTACION CONCRETA:

En estos extremos, se atribuye a **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA (20 años)** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO (21 años)**, junto al menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS (16 años)**, han unido voluntades para sustraer sus pertenencias de la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, siendo el día 19 de julio del año 2019, siendo las 21:30 horas aproximadamente, por inmediaciones de la Av. Miguel Grau, distrito de Paucarpata, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** lo sujeta por el cuello haciéndolo caer al suelo, y los otros dos sujetos, las personas de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, se fueron encima suyo, lo sujetan contra el suelo, aplastándole la cabeza, mientras que la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le rebuscaba los bolsillos, del bolsillo de su pantalón le sustrajo la suma de S/ 130.00 soles, dinero del trabajo del día, le arrancó el morral de color azul, donde tenía la suma de S/ 40.00 soles, además de un menú en su taper y comida para gatos; mientras seguía siendo sujetado por **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le decía "este es mi barrio y no te muevas, porque te vamos a matar", mientras que lo golpeaba con puño y patadas, llegando a patear su rostro, ocasionándole una herida en la ceja, lado izquierdo.

IV.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

La responsabilidad penal de la acusada en los hechos materia de investigación preparatoria, resulta atribuible en la condición de **CO AUTORES**, lo que se encuentra sustentado en los siguientes elementos de convicción que se detallan:

1.- **Acta de intervención policial**, "En la ciudad de Arequipa, siendo las 22:15 horas del día 19 de julio del 2019, hicieron presentes a esta comisaría PNP, los serenos de la Municipalidad de Paucarpata,... quienes realizaron un arresto ciudadano, a las persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO...** **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y al menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS...** quienes manifiestan que dichos sujetos asaltaron y agredieron a la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA...** robándole su morral de color azul, un menú en taper, comida para gatos,...

2.- **Certificado Médico legal No. 20379-L, de fecha 20 de julio del 2019**, practicado por la División médico legal de Arequipa, a la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA**, quién presenta herida contusa suturada de 2 cm con hematoma subyacente en región supraciliar izquierda, hematoma de 6 x 4 cm en región occipital derecha,... lesiones ocasionadas con objeto contundente duro, atención facultativa 02, incapacidad médico legal 08.



3.- Ocurrencia "En la Ciudad de Arequipa, en la Comisaria de Miguel Grau, siendo las 22.20 horas del día 19jul2019, presentes ante el Instructor los Serenos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata: "EN ESTE ACTO LOS SERENOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS MANIFIESTAN QUE EL DIA DE LA FECHA A HORAS 22.00 APROX. EN CIRCUNSTANCIAS QUE REALIZABAN PATRULLAJE MOTORIZADO POR LA ZONA DE MIGUEL GRAU, FUERON ALERTADOS POR LA PERSONA DE DIEGO QUENTA LIMA (28), QUIEN LES MANIFESTO QUE MOMENTOS ANTES HABIA SIDO ASALTADO POR TRES SUJETOS DESCONOCIDO PERO QUE LOS PODIA IDENTIFICAR, POR LO QUE DE INMEDIATO Y A BORDO DE UNA CAMIONETA DE SERANAZGO DE PAUCARPATA INICIARON LA BUSQUEDA DE LOS DELINCUENTES UBICANDOLOS A ESPALDAS DEL MERCADO DEL PJ. MIGUEL GRAU, DONDE AL VERSE DESCUBIERTOS ESTOS HUYERON DEL LUGAR ARROJANDO EN SU HUIDA LOS ENSERES QUE LE FUERON SUSTRIDOS AL DENUNCIANTE, POR LO QUE LOS SERENOS RECOGIERON LOS MENCIONADO ENSERES Y LOS TRALADARON HASTA ESTA COMISARIA, PROCEDIENDO ESTE ACTO SE PROCEDE A RECEPCIONARLOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: UN MORRAL (BOLSO PEQUEÑO) SINTETICO DE COLOR AZUL CON TRES FRANJAS DE COLOR BLANCO MARCA ADIDAS, UNA MOCHILA DE COLOR AZUL/NEGRO DE LONA SIN MARCA; UNA BOLSA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO CONTENIENDO EN SU INTERIOR COMIDA PARA ANIMALES (GALLETAS) Y DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE COLOR BLANCO, MARCA HIGIENOL...".

4.- Acta de reconocimiento de pertenencias: En la ciudad de Arequipa, siendo las 14:15 del 20JUL2019, presentes en la Sección de investigación Criminal de la Comisaria PNP de Miguel Grau, El instructor, la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA...** "Que, si reconoce un morral (maletín pequeño), de material sintético de color azul, con tres franjas de color blanco, marca ADIDAS, una bolsa de polietileno de color blanco conteniendo comida para mascotas (galletas) dos rollos de papel higiénico de color blanco.

5.- Declaración de ROGER JOSE CUTIPA CRISTOBAL, "Que, a horas 21:45 estábamos haciendo estacionamiento táctico en la Av. El Sol parte posterior del Colegio Paola Fraissinet, en compañía de dos serenos... en donde un joven todo ensangrentado a pedir auxilio, lo subimos a la móvil, en el camino nos comentaba que eran tres personas de sexo masculino que lo habían asaltado y agredido físicamente por la calle La Mar, Miguel Grau, procedimos a bajar por la calle La Mar, Morro de Arica, y subimos por la calle Angamos, dando alcance a tres personas, por la parte posterior del Mercado Miguel Grau, quién el agraviado indicó que ran los que lo habían asaltado, las tres personas se sintieron acorralados, y una de ellas se hizo el borracho quedándose en el lugar y los otros dos corrieron, a la parte posterior del mercado donde esta deshabitado y sin alumbrado público, al tratar de acorralarlos,



el sujeto que yo intervine lanzo unos objetos, es donde llegó hacia él, pero antes me lanzó una piedra el cual me cubrí con la mano derecha causándome una lesión, lo reduje al sujeto y lo lance al suelo, esperé hasta que llegue el apoyo, pero mientras esta intervención el vehículo de serenazgo también daba vueltas a los dos para que no puedan huir, es donde llegaron tres móviles de Serenazgo de Paucarpata, es donde es posible traerlos a esta Comisaría, los otros serenos buscaron con las luces piratas los objetos que lanzaron, logrando ubicarlos y recogerlos y eran las cosas del señor que se identificó como DIEGO QQUENTA LIMA, al que habían asaltado."

6.- Declaración de JORGE ALBERTO MOSTAJO RIVERA, "que el día 19 de julio de 2019, a horas 22.15 me encontraba de servicio de sereno cuando fuimos alertados por el ciudadano DIEGO QQUENTA LIMA, quien nos manifestó que momentos antes había sido asaltado por 3 jóvenes desconocidos, pero indico que si podía identificarlo, por lo que lo hicimos subir a la unidad móvil y procedimos buscarlos a dichos sujetos por lo que retornamos por la avenida olímpica calle la mar y retornamos nuevamente por la calle Angamos, llegando a la altura del mercado miguel Grau, a espaldas, donde nos percatamos de 3 sujetos que empezaron a correr, donde uno de ellos se quedó parado y nos indicó que también había sido asaltado y que se encontraba aparentemente en estado etílico, procediendo inmediatamente a ingresarlo al vehículo junto con el agraviado, el mismo que sangraba de la parte posterior de su cabeza como el mismo había manifestó que había sido asaltado luego se baja uno de mis compañeros intento perseguir a uno de los sujetos y el otro sereno lo persigue hasta a espaldas del mercado miguel Grau, donde comienza arrojar una mochila de color azul con negro inmediatamente se baja mi compañero para perseguirlo, nuevamente da la vuelta con la móvil me percate que ya los habían capturado, recogiendo los enseres q arrojaron los delincuentes cuando huían lo cual consiste en una mochila de color negro azul, un morral (bolso pequeño) de color azul con franjas blancas e marca "ADIDAS", una mochila de color negro azul, una bolsa de polietileno de color blanco, conteniendo comida para animales (galletas), 2 rollos de papel higiénico, al momento que mis compañeros intervinieron a estos s sujetos uno de ellos lanzo una piedra contra la móvil por lo que casi sufrí un accidente de tránsito

7.- Declaración del agraviado DIEGO QQUENTA LIMA: "que, el día 19 de julio del 2019 a horas 21,30 luego de comprar mmi cena fui a comprar comida para mi gato a una tienda, papel higiénico, una gaseosa personal, champú, y cuando me encontraba caminando con rumbo a mi domicilio por la Av. Olímpica, del PP JJ Miguel Grau, al llegar a altura del estadio Miguel Grau, 21:30 aprox., me percate de la presencia de tres sujetos desconocidos, quienes se acercaron a mi persona, a quienes nos les pude ver el rostro en ese momento, porque el lugar era muy oscuro, u uno de ellos me sujetó por el cuello, haciéndome caer al suelo y los otros dos sujetos vinieron encima mío, me sujetaron contra el suelo, aplastándome la cabeza contra el suelo de costado, mientras que el sujeto de estatura alta me rebuscaba los bolsillos, del bolsillo del pantalón se sustrajo S/130.00 soles, dinero que tenía del trabajo del día, me arranco mi morral de color azul, donde tenía la suma de S/40.00 soles y las



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL

3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

cosas que había comprado, mi cena y las otras cosas que compre en la tienda, y cuando me movía tratando de zafarme de los otros dos sujetos que me sujetaban contra el piso, el sujeto me decía "este es mi barrio, y no te muevas porque te vamos a matar", me golpeaba con golpes de puño y patadas, llegándome a patear el rostro, ocasionándome una herida en la ceja lado izquierdo, es cuando sentí que me salía bastante sangre reaccione y escape, mientras los tres sujetos se quedaron en el lugar....."

8.- Declaración de ALEXANDER CACALLICA OSORIO: "Que, el día 19JUL2019 estuve tomando licor con mis compañeros hasta las 6 de la tarde, luego salimos caminando por el mercado de miguel Grau, y encuéntranos un grupo de personas iniciándose una gresca y en la cual lanzaron una piedra que me cayó en la cabeza ya salí corriendo junto con mis amigos Cristian y Billy, como quisieron comer y no tenían dinero vimos a una persona y lo alcanzamos siendo que mi amigo Billy lo agarra del cuello haciéndolo caer al suelo mientras que yo les dije que nos retiráramos e intenté rebuscar sus bolsillos no dándome cuenta si le había robado algo, pero por mi parte a mí no me han encontrado nada, para luego hacerse presentes los serenos de Paucarpata quienes me interviene y me hace ingresar a una camioneta donde se encontraba el agraviado quien tenía una herida en la frente para posteriormente llevarlo a la comisaria donde también habían sido intervenidos Billy y Cristian, no dándome cuenta si mis amigos le había robado algo."

9.- Declaración de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA, "Que, el día 19JUL2019 estuve tomando licor con mis compañeros hasta las 6 de la tarde, luego salimos caminando por el mercado de miguel Grau, y encontramos un grupo de personas iniciándose una gresca y en la cual lanzaron una piedra que le cayó en la cabeza a mi amigo Adrián luego salí corriendo junto con mis amigos Cristian y Adrián, luego de lo divisamos a una persona de sexo masculino a quien lo alcanzamos y como no teníamos dinero lo tome por el cuello y junto con mis amigos lo tumbamos al suelo y le quitamos la comisa que llevaba ya que teníamos hambre y yo me encontraba ebrio luego mis amigos le rebuscaron los bolsillos y de allí nos retiramos del lugar y es cuando fuimos intervenidos por los serenos de Paucarpata, quiero agregar que a mí no me han encontrado ninguna pertenencia del denunciante en mi poder, luego de ocurrido me trasladaron a la comisaria de Miguel Grau, donde también lo encontré a mi amigo Adrián quien se encontraba sangrando por la cabeza."

10.- Declaración del menor CRISTIAN MERMA ZEBALLOS, "Que, si me encontraba en compañía de dos personas quienes eran **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, él es mi vecino y el otro es Adrián del cual no se su apellido, es amigo, con ellos me encuentro desde las 16:00 aprox., y estábamos en la calle no recuerdo el nombre por Miguel Grau, Paucarpata, compramos en una tienda que estaba en el lugar eran tres botellas de ron, terminamos más o menos a las seis de la tarde, subimos hasta el local denominado "Mary" ubicado en la Av. Miguel Grau, Paucarpata, ahí con mis amigos pedimos una botella de trago, hasta las 22:30, aprox., al salir



caminamos con dirección a mi casa, y ya por el mercado de Miguel Grau, en la parte descampada, que no hay luz, unas personas estaban tomando, y uno de ellos me agarra por el cuello, mi amigo Adrián vino a defenderme, por atrás le lanzaron una piedra en la cabeza, escapamos corrimos por el mercado por la parte de atrás, queríamos comer y no teníamos dinero, es donde apareció un chico y para alcanzarlo corrimos, mi amigo Billy lo agarró por el cuello, pensé que solo pedían dinero, mientras Adrián le rebuscaba los bolsillos, lo lanzaron al suelo, me asusté y salí corriendo, y vino el serenazgo mis amigos me alcanzaron, Billy tenía el morral, la bolsa blanca con la comida de gato y Adrián tenía el papel higiénico, vimos la camioneta de serenazgo y empezamos a correr por separado, ahí boté la mochila de mi amigo Billy y pensé que eran las pertenencias del agraviado, ahí un sereno me cogió del cuello, yo quería hablar y no podía, me lanzó al suelo y me rebuscó, me metieron a la camioneta, me trajeron a esta Comisaría.

11.- Oficio No. 51845-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, de fecha 20 de julio del 2019, dando cuenta que las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, no registran antecedentes penales, ni judiciales.

12.- Dictamen Pericial No. 2019002011408, de fecha 13 de agosto del 2019, por parte del perito químico farmacéutico **MANUEL MANCILLA VENTURA**, practicado a la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, dando cuenta que registra resultado negativo.

13.- Dictamen Pericial No. 2019002016159, de fecha 26 de noviembre del 2019, por parte del perito químico farmacéutico **MANUEL MANCILLA VENTURA**, practicado a la persona de **ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, dando cuenta que registra 0.95 g 00/00 Alcohol Etílico

V.- GRADO DE PARTICIPACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.

5.1 GRADO DE PARTICIPACIÓN:

Los acusados **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, son **AUTORES** del delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de **ROBO AGRAVADO**, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, en agravio de **DIEGO QQUENTA LIMA**.

VI.- SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACIÓN, PENA, REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL

3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

6.1 TIPIFICACIÓN:

La conducta atribuida a los acusados, está subsumida dentro del supuesto del tipo penal establecido previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, que sanciona la conducta de: "El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido (...) **La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años** si el robo es cometido: (...) Durante la noche o en lugar desolado (...) Con el concurso de dos o más personas."

6.2 PENA Y REPARACIÓN CIVIL:

PENA

Esta Fiscalía, a efecto de determinar la pena aplicable al autor del delito tiene en cuenta los actuados contenidos en la presente carpeta fiscal y además lo siguiente:

1. Para la determinación Judicial de la pena, en primer término ha de tenerse presente la pena conminada para el delito materia de proceso, contemplado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, el mismo que señala una pena privativa de la libertad **no menor de doce ni mayor de veinte años**.
2. Lo establecido por el Título Preliminar del Código Penal, artículos I y IX que asignan una función preventiva a la sanción punitiva, asimismo los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, contenida en los artículos II, IV, V, VII y VIII.
3. Siendo ello así, cabe tenerse presente los criterios para la individualización de la pena, contemplados en el artículo 45-A° de dicha norma, debidamente concordados con el Artículo 46° del Código Penal, ello a fin de determinarse de acuerdo a la presencia de atenuantes y agravantes la pena de concreta y el tercio punitivo en el cual se encuentra, siendo que para el caso de autos se debe considerar:

3.1 Atenuantes:

ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO, según el Dictamen Pericial No. 2019002016159, de fecha 26 de noviembre del 2019, practicado por división Médico Legal de Arequipa, perito Manuel Mancilla Ventura, Dosaje Etílico a la persona de **ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, dando cuenta que registra 0.95 g 00/00 Alcohol Etílico, encontrándonos con una responsabilidad atenuada de conformidad con el artículo 21° del Código Penal, concordado con el inciso 1) del artículo 20 de mismo cuerpo legal.



Mientras que en el caso de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, es de considerar que al momento de los hechos (19/07/2019) contaba con 20 años edad, encontrándonos con una responsabilidad atenuada de conformidad con el artículo 22 del Código Penal

3.2 **Agravantes:**
Ninguno.

4. En atención a ello, corresponde situarnos en el primer tercio de la pena ya que la conducta de los imputados, de acuerdo al Art. 45-A del C.P, hacen que nos situemos en el Tercio Inferior de Punibilidad (Inc.2 Literal a); por lo que, estaríamos frente a una pena entre los dos años y tres años de pena privativa de libertad.

5. Se debe tener presente además los fines de la pena los mismos que se encuentran previstos en el artículo IX del Código Penal, el mismo que precisa que: *"La pena tiene función preventiva, protectora y re socializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación."*

PENA .TEORIA DE LOS TERCIOS.

PRIMER TERCIO	SEGUNDO TERCIO	TERCER TERCIO
	ATENUANTES Y	
SOLO ATENUANTES	AGRAVANTES	SOLO AGRAVANTES
12 años <u>a</u> 14 años 8 meses	14 años 8 meses <u>a</u> 17 años 4 meses	17 años 4 meses <u>a</u> 20 años

Por todo ello, consideramos que en condiciones normales y sin perder de vista de los márgenes de acción que nos presenta la pena conminada para el delito materia de imputación, la **PENA JUSTA** para el acusado **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO y BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, será de **09 AÑOS Y SEIS MESES** de pena privativa de la libertad efectiva.

REPARACIÓN CIVIL

Este Despacho Fiscal en mérito a lo estipulado en el inciso 1º del Art. 11º del nuevo Código Procesal Penal el cual a la letra establece que: "El ejercicio de la Acción Civil deriva del hecho punible, corresponde al Ministerio Público, y especialmente, al



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL

3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso".

En el presente caso no ha habido constitución de actor civil, conforme se aprecia de actuados, por tanto queda expedita la legitimación del Ministerio Público para solicitar la reparación civil y perjuicio irrogado.

En el caso en concreto, al tratarse de un delito pluriofensivo se solicita la siguiente reparación civil:

Daño moral; el cual tiene cuatro segmentos: daño psíquico, daño biológico, daño estético y daño espiritual. El daño biológico viene constituido por aquel que ha producido un menoscabo sensible a la esfera fisiológica u orgánica del individuo, es un daño a la integridad estructural-funcional física del ser humano.³ En el presente caso se ha producido daño a la persona u orgánico, es decir, dolores físicos, incuantificables producto de la lesión, además de un daño psíquico, por la impresión del suceso, por lo que se considera razonable solicitar la suma de S/. 800.00 Soles.

TOTAL: S/ 800.00 soles.

Fundamentos por los cuales este Despacho Fiscal **SOLICITA** se declare al acusado **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO y BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, como **CO AUTOR** del delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de **ROBO AGRAVADO**, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, y consecuentemente, se le imponga la sanción de **09 AÑOS Y SEIS MESES**; así como la suma de **S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles)** por concepto de reparación civil, a favor de **DIEGO QQUENTA LIMA**.

VII. RELACIÓN DE BIENES QUE GARANTIZAN EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL.

Ninguna

VIII. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS.

Testigos:

- 1. La declaración de ROGER JOSE CUTIPA CRISTOBAL**, a quien se notificará en su domicilio laboral ubicado en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, plaza

³ Alonso Raúl Peña Cabrera F. Derecho Penal Parte General-Teoría del delito y de la Pena y sus consecuencias Jurídicas-Editorial RODHAS S.A. p.1177.



principal de Paucarpata, quien depondrá respecto a los hechos denunciados y el perjuicio de **DIEGO QQUENTA LIMA**.

2. **La declaración de JORGE ALBERTO MOSTAJO RIVERA**, a quien se notificará en su domicilio laboral ubicado en la Municipalidad Distrital de Paucarpata, plaza principal de Paucarpata, quien depondrá respecto a los hechos denunciados y el perjuicio de **DIEGO QQUENTA LIMA**.
3. **La declaración de DIEGO QQUENTA LIMA**, a quien se notificará en Av. El Sol No. 422, PP JJ Miguel Grau, Paucarpata, quien depondrá respecto a los hechos denunciados y el perjuicio ocasionado en su agravio.
4. **La referencial del menor CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, en presencia de su señora madre María del Pilar Zeballos Andía, se le notificará en AA HH 26 de julio, Manz. A, Lote 07, Paucarpata, quien depondrá respecto a los hechos denunciados.
5. **Declaración del STI PNP WILBER ARENAS CHAVEZ**, sobre el Acta de reconocimiento de pertenencias del 20JUL2019, será notificado a través del área de personal de la IX Región Policial.

Peritos:

1. Examen al Médico Legista **PATRICIA PAZ CADEDO**, a quien se le notificará a través de la División Médico Legal de Arequipa y se le examinará respecto al **Certificado Médico legal No. 20379-L, de fecha 20 de julio del 2019**, practicado por la División médico legal de Arequipa, a la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA**, quien presenta herida contusa suturada de 2 cm con hematoma subyacente en región supraciliar izquierda, hematoma de 6 x 4 cm en región occipital derecha,... lesiones ocasionadas con objeto contundente duro, atención facultativa 02, incapacidad médico legal 08.
2. Examen al perito químico farmacéutico **MANUEL MANCILLA VENTURA**, a quien se le notificará a través de la División Médico Legal de Arequipa y se le examinará respecto al Dictamen Pericial No. 2019002011408, de fecha 13 de agosto del 2019, practicado a la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, dando cuenta que registra resultado negativo. Del mismo modo respecto al Dictamen Pericial No. 2019002016159, de fecha 26 de noviembre del 2019, practicado a la persona de **ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, dando cuenta que registra 0.95 g 00/00 Alcohol Etilico.

Otros medios de prueba ofrecidos:

Prueba Preconstituida: Ninguna.

Prueba Documental:

Oficio No. 51845-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, de fecha 20 de julio del 2019, dando cuenta que las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, no registran antecedentes penales, ni judiciales



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL
3ER DESPACHO - 1RA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA - PAUCARPATA

Prueba Material:

UN MORRAL (BOLSO PEQUEÑO) SINTETICO DE COLOR AZUL CON TRES FRANJAS DE COLOR BLANCO MARCA ADIDAS.

UNA MOCHILA DE COLOR AZUL/NEGRO DE LONA SIN MARCA.

UNA BOLSA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO CONTENIENDO EN SU INTERIOR COMIDA PARA ANIMALES (GALLETAS).

DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE COLOR BLANCO, MARCA HIGIENOL


Cuyos mencionados medios de prueba que serán oralizados y leídos en Juicio.

X.- MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL.

Se solicita se mantenga a los investigados la medida de coerción personal de comparecencia con restricciones, ello debido a que no existe presupuestos para solicitar prisión preventiva.

POR TANTO: A Usted Señor Juez, solicito se sirva dar trámite al presente Requerimiento de Acusación, conforme a Ley.

Arequipa, 12 de diciembre del 2019.


Luis Guillermo
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Provincial Penal Corporativa
Distrito de Paucarpata



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL

CARP. N°:

SUMILLA: REQUERIMOS MANDATO DE PRISION PREVENTIVA

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PAUCARPATA:

, ante Ud. me presento y expongo:

Fiscal responsable: Luis Guillermo Vera Oviedo.

I.- REQUERIMIENTO FISCAL:

A tenor de lo establecido en el artículo 268° del Código Procesal Penal, este Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, solicita **MANDATO DE PRISION PREVENTIVA** de las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, en torno a la investigación por la comisión del delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de **ROBO AGRAVADO**, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, en agravio de **DIEGO QQUENTA LIMA**.

II.- HECHOS INVESTIGADOS:

Hechos precedentes: Se tiene que con fecha 19 de julio del año 2019, siendo las 21:30 horas aproximadamente, las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA (20 años)** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO (21 años)**, además del menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS (16 años)**, se encontraban tomando licor, por inmediaciones de la Av. Miguel Grau, distrito de Paucarpata, donde se genera una gresca, de la que incluso la persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** resulto herido como consecuencia del impacto de una piedra en la cabeza, por lo que corren de este lugar, siendo que al no tener dinero, divisan al agraviado a quién deciden sustraer sus pertenencias.

Hechos concomitantes: Es el caso, que el agraviado **DIEGO QQUENTA LIMA**, se encontraban caminando con rumbo a su domicilio, por la Av. Olímpica del PP JJ Miguel Grau, Paucarpata, siendo que al llegar a la altura de Estadio Miguel Grau, se percata de la presencia de estos tres sujetos desconocidos, quienes estaban en dirección opuesta, se le acercan y uno de ellos, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** lo sujeta por el cuello haciéndolo caer al suelo, y los otros dos sujetos, las personas de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**,





se fueron encima suyo, lo sujetan contra el suelo, aplastándole la cabeza, mientras que la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le rebuscaba los bolsillos, del bolsillo de su pantalón le sustrajo la suma de S/ 130.00 soles, dinero del trabajo del día, le arrancó el morral de color azul, donde tenía la suma de S/ 40.00 soles, además de un menú en su taper y comida para gatos; mientras seguía siendo sujetado por **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** y el menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, la persona de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** le decía "este es mi barrio y no te muevas, porque te vamos a matar", mientras que lo golpeaba con puño y patadas, llegando a patear su rostro, ocasionándole una herida en la ceja, lado izquierdo, y es cuando el agraviado reacciona y se escapa, mientras que los tres sujetos se quedaron en el lugar.

Hechos posteriores: Finalmente, el agraviado corrió un cuadra, donde ubicó a los serenos del Municipio del Paucarpata, haciéndolo subir a una camioneta, y emprenden la búsqueda de los tres sujetos, es allí donde logran ubicar a la persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, quien es intervenido, subiéndolo a la móvil, los otros dos sujetos, comenzaron a correr, mientras iban botando las cosas del agraviado; mochila y otros enseres, por lo que solicitan los serenos otras unidades de apoyo, quienes finalmente capturaron a las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y al menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS**, para posteriormente efectuar los serenos el recojo de las pertenencias del agraviado, logrando recuperar su bolso morral, una bolsa de plástico de color blanco conteniendo comida para gato y dos rollos de papel higiénico.

Siendo todos, conducidos a la comisaría del sector para las investigaciones del caso.

III.- FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO DE MANDATO DE PRISION PREVENTIVA:

Se da en el presente caso los elementos concurrentes para que se dicte Mandato de Prisión Preventiva, conforme a lo establecido en el artículo 268° del Código Procesal Penal, ya que de acuerdo a los primeros recaudos es posible determinar lo siguiente:

a). **Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor del mismo.**

Para acreditar la existencia de este punto, señor Juez, ofrecemos como elemento de prueba las siguientes diligencias:

1.- Acta de intervención policial, "En la ciudad de Arequipa, siendo las 22:15 horas del día 19 de julio del 2019, hicieron presentes a esta comisaría PNP, los serenos de la Municipalidad de Paucarpata,... quienes realizaron un arresto ciudadano, a las persona de **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO... BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y al menor **CRISTIAN MERMA ZEBALLOS...** quienes





manifiestan que dichos sujetos asaltaron y agredieron a la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA...** robándole su morral de color azul, un menú en taper, comida para gatos,...

2.- Certificado Médico legal No. 20379-L, de fecha 20 de julio del 2019, practicado por la División médico legal de Arequipa, a la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA**, quién presenta herida contusa suturada de 2 cm con hematoma subyacente en región supraciliar izquierda, hematoma de 6 x 4 cm en región occipital derecha,... lesiones ocasionadas con objeto contundente duro, atención facultativa 02, incapacidad médico legal 08.

3.- Ocurrencia "En la Ciudad de Arequipa, en la Comisaria de Miguel Grau, siendo las 22.20 horas del día 19jul2019, presentes ante el Instructor los Serenos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata: "EN ESTE ACTO LOS SERENOS ANTERIORMENTE NOMBRADOS MANIFIESTAN QUE EL DIA DE LA FECHA A HORAS 22.00 APROX. EN CIRCUNSTANCIAS QUE REALIZABAN PATRULLAJE MOTORIZADO POR LA ZONA DE MIGUEL GRAU, FUERON ALERTADOS POR LA PERSONA DE DIEGO QQUENTA LIMA (28), QUIEN LES MANIFESTO QUE MOMENTOS ANTES HABIA SIDO ASALTADO POR TRES SUJETOS DESCONOCIDO PERO QUE LOS PODIA IDENTIFICAR, POR LO QUE DE INMEDIATO Y A BORDO DE UNA CAMIONETA DE SERANAZGO DE PAUCARPATA INICIARON LA BUSQUEDA DE LOS DELINCUENTES UBICANDOLOS A ESPALDAS DEL MERCADO DEL PJ. MIGUEL GRAU, DONDE AL VERSE DESCUBIERTOS ESTOS HUYERON DEL LUGAR ARROJANDO EN SU HUIDA LOS ENSERES QUE LE FUERON SUSTRIDOS AL DENUNCIANTE, POR LO QUE LOS SERENOS RECOGIERON LOS MENCIONADO ENSERES Y LOS TRALADARON HASTA ESTA COMISARIA, PROCEEDIENDO ESTE ACTO SE PROCEDE A RECEPCIONARLOS LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: UN MORRAL (BOLSO PEQUEÑO) SINTETICO DE COLOR AZUL CON TRES FRANJAS DE COLOR BLANCO MARCA ADIDAS, UNA MOCHILA DE COLOR AZUL/NEGRO DE LONA SIN MARCA; UNA BOLSA DE POLIETILENO DE COLOR BLANCO CONTENIENDO EN SU INTERIOR COMIDA PARA ANIMALES (GALLETAS) Y DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE COLOR BLANCO, MARCA HIGIENOL...".

4.- Acta de reconocimiento de pertenencias: En la ciudad de Arequipa, siendo las 14:15 del 20JUL2019, presentes en la Sección de investigación Criminal de la Comisaría PNP de Miguel Grau, El instructor, la persona de **DIEGO QQUENTA LIMA...** "Que, si reconoce un morral (maletín pequeño), de material sintético de color azul, con tres franjas de color blanco, marca ADIDAS, una bolsa de polietileno de color blanco conteniendo comida para mascotas (galletas) dos rollos de papel higiénico de color blanco.





5.- Declaración de ROGER JOSE CUTIPA CRISTOBAL, "Que, a horas 21:45 estábamos haciendo estacionamiento táctico en la Av. El Sol parte posterior del Colegio Paola Fraissinet, en compañía de dos serenos... en donde un joven todo ensangrentado a pedir auxilio, lo subimos a la móvil, en el camino nos comentaba que eran tres personas de sexo masculino que lo habían asaltado y agredido físicamente por la calle La Mar, Miguel Grau, procedimos a bajar por la calle La Mar, Morro de Arica, y subimos por la calle Angamos, dando alcance a tres personas, por la parte posterior del Mercado Miguel Grau, quién el agraviado indicó que eran los que lo habían asaltado, las tres personas se sintieron acorralados, y una de ellas se hizo el borracho quedándose en el lugar y los otros dos corrieron, a la parte posterior del mercado donde esta deshabitado y sin alumbrado público, al tratar de acorralarlos, el sujeto que yo intervine lanzo unos objetos, es donde llegó hacia él, pero antes me lanzó una piedra el cual me cubrí con la mano derecha causándome una lesión, lo reduje al sujeto y lo lance al suelo, esperé hasta que llegue el apoyo, pero mientras esta intervención el vehículo de serenazgo también daba vueltas a los dos para que no puedan huir, es donde llegaron tres móviles de Serenazgo de Paucarpata, es donde es posible traerlos a esta Comisaría, los otros serenos buscaron con las luces piratas los objetos que lanzaron, logrando ubicarlos y recogerlos y eran las cosas del señor que se identificó como DIEGO QQUENTA LIMA, al que habían asaltado."

6.- Declaración de JORGE ALBERTO MOSTAJO RIVERA, "que el día 19 de julio de 2019, a horas 22.15 me encontraba de servicio de sereno cuando fuimos alertados por el ciudadano DIEGO QQUENTA LIMA, quien nos manifestó que momentos antes había sido asaltado por 3 jóvenes desconocidos, pero indico que si podía identificarlo, por lo que lo hicimos subir a la unidad móvil y procedimos buscarlos a dichos sujetos por lo que retornamos por la avenida olímpica calle la mar y retornamos nuevamente por la calle Angamos, llegando a la altura del mercado miguel Grau, a espaldas, donde nos percatamos de 3 sujetos que empezaron a correr, donde uno de ellos se quedó parado y nos indicó que también había sido asaltado y que se encontraba aparentemente en estado etílico, procediendo inmediatamente a ingresarlo al vehículo junto con el agraviado, el mismo que sangraba de la parte posterior de su cabeza como el mismo había manifestado que había sido asaltado luego se baja uno de mis compañeros intento perseguir a uno de los sujetos y el otro sereno lo persigue hasta a espaldas del mercado miguel Grau, donde comienza arrojar una mochila de color azul con negro inmediatamente se baja mi compañero para perseguirlo, nuevamente da la vuelta con la móvil me percate que ya los habían capturado, recogiendo los enseres q arrojaron los delincuentes cuando huían lo cual consiste en una mochila de color negro azul, un morral (bolso pequeño) de color azul con franjas blancas e marca "ADIDAS", una mochila de color negro azul, una bolsa de polietileno de color blanco, conteniendo comida para animales (galletas), 2 rollos de papel higiénico, al momento que mis compañeros intervinieron a estos s sujetos uno de ellos lanzo una piedra contra la móvil por lo que casi sufrí un accidente de tránsito





7.- Declaración del agraviado DIEGO QQUENTA LIMA: "que, el día 19 de julio del 2019 a horas 21,30 luego de comprar mi cena fui a comprar comida para mi gato a una tienda, papel higiénico, una gaseosa personal, champú, y cuando me encontraba caminando con rumbo a mi domicilio por la Av. Olímpica, del PP JJ Miguel Grau, al llegar a altura del estadio Miguel Grau, 21:30 aprox., me percate de la presencia de tres sujetos desconocidos, quienes se acercaron a mi persona, a quienes nos les pude ver el rostro en ese momento, porque el lugar era muy oscuro, uno de ellos me sujetó por el cuello, haciéndome caer al suelo y los otros dos sujetos vinieron encima mío, me sujetaron contra el suelo, aplastándome la cabeza contra el suelo de costado, mientras que el sujeto de estatura alta me rebuscaba los bolsillos, del bolsillo del pantalón se sustrajo S/130.00 soles, dinero que tenía del trabajo del día, me arranco mi morral de color azul, donde tenía la suma de S/40.00 soles y las cosas que había comprado, mi cena y las otras cosas que compre en la tienda, y cuando me movía tratando de zafarme de los otros dos sujetos que me sujetaban contra el piso, el sujeto me decía "este es mi barrio, y no te muevas porque te vamos a matar", me golpeaba con golpes de puño y patadas, llegándome a patear el rostro, ocasionándome una herida en la ceja lado izquierdo, es cuando sentí que me salía bastante sangre reaccione y escape, mientras los tres sujetos se quedaron en el lugar....,"

8.- Declaración de ALEXANDER CACALLICA OSORIO: "Que, el día 19JUL2019 estuve tomando licor con mis compañeros hasta las 6 de la tarde, luego salimos caminando por el mercado de miguel Grau, y encuéntranos un grupo de personas iniciándose una gresca y en la cual lanzaron una piedra que me cayó en la cabeza ya salí corriendo junto con mis amigos Cristian y Billy, como quisieron comer y no tenían dinero vimos a una persona y lo alcanzamos siendo que mi amigo Billy lo agarra del cuello haciéndolo caer al suelo mientras que yo les dije que nos retiráramos e intente rebuscar sus bolsillos no dándome cuenta si le había robado algo, pero por mi parte a mi no me han encontrado nada, para luego hacerse presentes los serenos de Paucarpata quienes me interviene y me hace ingresar a una camioneta donde se encontraba el agraviado quien tenía una herida en la frente para posteriormente llevarlo a la comisaria donde también habían sido intervenidos Billy y Cristian, no dándome cuenta si mis amigos le había robado algo."

9.- Declaración de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA, "Que, el día 19JUL2019 estuve tomando licor con mis compañeros hasta las 6 de la tarde, luego salimos caminando por el mercado de miguel Grau, y encontramos un grupo de personas iniciándose una gresca y en la cual lanzaron una piedra que le cayó en la cabeza a mi amigo Adrián luego salí corriendo junto con mis amigos Cristian y Adrián, luego de lo divisamos a una persona de sexo masculino a quien lo alcanzamos y como no teníamos dinero lo tome por el cuello y junto con mis amigos lo tumbamos al suelo y le quitamos la comisa que llevaba ya que teníamos hambre y yo me encontraba ebrio luego mis amigos le rebuscaron los bolsillos y de allí nos retiramos del lugar y es cuando fuimos intervenidos por los serenos de Paucarpata, quiero





MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL

agregar que a mí no me han encontrado ninguna pertenencia del denunciante en mi poder, luego de ocurrido me trasladaron a la comisaría de Miguel Grau, donde también lo encontré a mi amigo Adrián quien se encontraba sangrando por la cabeza."

10.- Declaración del menor CRISTIAN MERMA ZEBALLOS, "Que, si me encontraba en compañía de dos personas quienes eran **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**, él es mi vecino y el otro es Adrián del cual no se su apellido, es amigo, con ellos me encuentro desde las 16:00 aprox., y estábamos en la calle no recuerdo el nombre por Miguel Grau, Paucarpata, compramos en una tienda que estaba en el lugar eran tres botellas de ron, terminamos más o menos a las seis de la tarde, subimos hasta el local denominado "Mary" ubicado en la Av. Miguel Grau, Paucarpata, ahí con mis amigos pedimos una botella de trago, hasta las 22:30, aprox., al salir caminamos con dirección a mi casa, y ya por el mercado de Miguel Grau, en la parte descampada, que no hay luz, unas personas estaban tomando, y uno de ellos me agarra por el cuello, mi amigo Adrián vino a defenderme, por atrás le lanzaron una piedra en la cabeza, escapamos corrimos por el mercado por la parte de atrás, queríamos comer y no teníamos dinero, es donde apareció un chico y para alcanzarlo corrimos, mi amigo Billy lo agarró por el cuello, pensé que solo pedían dinero, mientras Adrián le rebuscaba los bolsillos, lo lanzaron al suelo, me asusté y salí corriendo, y vino el serenazgo mis amigos me alcanzaron, Billy tenía el morral, la bolsa blanca con la comida de gato y Adrián tenía el papel higiénico, vimos la camioneta de serenazgo y empezamos a correr por separado, ahí boté la mochila de mi amigo Billy y pensé que eran las pertenencias del agraviado, ahí un sereno me cogió del cuello, yo quería hablar y no podía, me lanzó al suelo y me rebuscó, me metieron a la camioneta, me trajeron a esta Comisaría.

11.- Oficio No. 51845-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, de fecha 20 de julio del 2019, dando cuenta que las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, no registran antecedentes penales, ni judiciales.

b). La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

Se debe tener en cuenta que la conducta de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, se encuentra tipificada como delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de **ROBO AGRAVADO**, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, como: "El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido (...) La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años





si el robo es cometido: (...) Durante la noche o en lugar desolado (...) Con el concurso de dos o más personas."

Se ha evidenciado que el investigado **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** han actuado dolosamente, su conducta ha perjudicado patrimonialmente el patrimonio y la integridad física del agraviado **DIEGO QQUENTA LIMA**.

En el presente caso, si bien existen circunstancias privilegiadas la responsabilidad restringida, especialmente del investigado **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, la **PROGNOSIS DE PENA A IMPONERSE** en su oportunidad superaría los cuatro años de pena privativa de la libertad, a lo que se añade que dicho acto delictivo se realizó de manera **DOLOSA**.

c) Con relación al peligro de fuga y otras circunstancias del caso particular, permite colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga)¹ u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)².

Para acreditar el peligro de fuga, Respecto a su arraigo domiciliario debemos indicar que los investigados ha indicado contar según los actos de **verificación domiciliaria**, sin embargo a partir del cumplimiento de la diligencia y del resto de los actuados, no se ha acreditado documentariamente ningún arraigo de calidad con los referidos inmueble, pero además, a raíz de los sucesos, se puede constatar cómo dicho lugar sólo es un espacio de eventual estadía, por lo que, más allá de la verificado, **su arraigo domiciliario en el país, quedaría en cuestionamiento**, con respecto a su arraigo familiar es de tomar en cuenta que su entorno familiar lo constituye básicamente sus familiares cercanos, quién no han mostrado participación de compromiso hacia la conducta mostrada por los investigados, persona que como es de verse no se han apersonado a la causa, y por la poca presencia sobre su conducta de vida, se han visto comprometidos a cometer un acto ilícito, por lo que tampoco está acreditado vínculo u obligación de dependencia con su entorno más íntimo, por lo que también su **arraigo familiar no está acreditado** y quedaría en vilo; en el mismo sentido con respecto a su arraigo laboral ha manifestado ejercer actividades de poco compromiso,

¹ Art. 269 del CPP.- PELIGRO DE FUGA.- Para calificar el peligro de fuga, el Juez tendrá en cuenta: 1.- El arraigo en el País imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el País o permanecer oculto; 2.- La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 3.- La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta, voluntariamente, frente a él; el comportamiento de imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal.-

² Art. 269 del CPP.- PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN.- Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado: 1.- Destruirá, modificara, ocultara suprimirá o falsificara elemento de prueba. 2.- Influirá para que cómplices testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; 3 Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.-





sin ofrecer ningún elemento que dé cuenta de estar haciendo dichas actividades, siendo cuestionable que bajo estas condiciones evidenciadas, por estar comprometido en un delito de máxima gravedad y dedicarse al consumo desmedido de licor pueda alegar actividad responsable. Es por ello, y estando a los hechos descritos, por la forma y circunstancias en que sucedieron los hechos, y teniendo en cuenta que el imputado revela claramente un comportamiento delictivo, constituye peligro de fuga por la gravedad del ilícito y la penalidad prevista en la Ley, por lo que el imputado objetivamente intentarán huir.

Además debe considerarse lo establecido en el Artículo 269° inciso 2 del NCPP, que señala que denota la gravedad en los hechos, la pena a imponerse a las resultas del proceso, dado que por, materia de la presente, por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de ROBO AGRAVADO, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, como: "El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido (...) La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: (...) Durante la noche o en lugar desolado (...) Con el concurso de dos o más personas."

d) Proporcionalidad de la medida:

A mérito de determinar la legalidad de la medida, así como la afectación de la medida no supere el marco de constitucionalidad para la emisión, se procede a generar los parámetros requeridos en la Casación No. 636-3013 Moquegua, para el caso desarrollando el **Test de razonabilidad de la medida**, a este respecto se tiene los siguientes ítems conforme la STC emitida en el Exp. No. 579-2008-PA/TC:

1. **IDONEIDAD:** (Juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar). De los hechos que se investigan, se tiene que se cuenta con suficientes elementos de convicción, es posible determinar razonablemente la existencia de un delito de ROBO AGRAVADO, siendo por tanto necesario tutelar que las conductas desplegadas por los investigados sean sometidas a juzgamiento, siendo por tanto pertinente y adecuado restringir la libertad del procesado para asegurar su presencia en el juicio oral, debiendo considerarse que además es latente el peligro de fuga, conforme se sustancia líneas arriba.
2. **NECESIDAD:** (verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio – medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está intervenido en la esfera de un derecho fundamental y él o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin.). Que si bien existen otras medidas de restricción de derechos, estas conforme a la evaluación de los presupuestos materiales de la prisión preventiva detallados ut supra, no serían útiles para determinar la consecución de un proceso





MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

DISTRITO FISCAL

efectivo respecto del imputado, por cuanto, las circunstancias del delito y las condiciones personales del agente no generan poder aplicar una medida menos gravosa.

3. **PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO:** (Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual "cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro). Respecto a los derechos en debate como es la libertad del imputado, frente a la actividad de investigación y conclusión del proceso efectivo y Juzgamiento, no se afecta razonablemente los otros derechos del imputado, por cuanto, se actúa dentro de los marcos de un debido proceso.

e) DEL PLAZO:

Este despacho solicita **NUEVE MESES** de prisión preventiva en mérito a que se tiene que recabar las declaraciones de las personas vinculadas con el suceso (testigos y peritos), solicitar respuestas a las pericias practicadas, poder encontrar vínculos con la organización delictiva, debiendo además considerarse, que el plazo solicitado es necesario para la realización de la etapa intermedia y de juicio oral.

IV.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Señor Juez, amparamos nuestra pretensión en el artículo 268°, 269° y 270° del Código Procesal Penal.

POR TANTO:

A usted señor Juez, solicito se sirva dar el trámite que corresponde al presente requerimiento, dictándose mandato de **PRISIÓN PREVENTIVA** contra de las personas de **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, en torno a la investigación por la comisión del delito contra el Patrimonio, bajo la modalidad de **ROBO AGRAVADO**, previsto y penado en el artículo 188°, concordado con los incisos 2) y 4), primer párrafo, del artículo 189° del Código Penal, en agravio de **DIEGO QQUENTA LIMA**.

PRIMER OTROSI DIGO: Pongo a disposición de su Despacho a **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO**, para los fines correspondientes.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Se adjunta copias certificadas de los actuados correspondientes a fojas ().

Arequipa, 21 de julio del 2019.





PODER JUDICIAL DEL PE



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE**

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

EXPEDIENTE N°	: 7602-2019-86-0401-JR-PE-01
JUZGADO	: 1ER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL - SEDE
MAGISTRADOS	: DR. RONALD MEDINA TEJADA : DRA. GUIULIANA PASTOR CUBA : DR. JUAN CARLOS CHURATA QUISPE (D.D.)
ACUSADO	: ADRIAN ALEXANDER CACCALICA OSORIO Y OTRO
DELITOS	: ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO	: DIEGO QUENTA LIMA
SALA DE AUDIENCIAS	: NRO. 10 DE LA CSJA
FECHA	: AREQUIPA, 19 DE ENERO DEL 2021
HORA DE INICIO	: 09:30 HORAS
HORA DE TÉRMINO	: 10.15 HORAS
ESPECIALISTA	DE : JOSÉ RÍOS NÚÑEZ
AUDIENCIAS	

Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, conforme lo dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo las partes acceder a una copia de dicho registro.

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ASISTENTES

- **MINISTERIO PUBLICO:** LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO FISCAL PROVINCIAL DE LA PRIMERA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA. DOMICILIO PROCESAL EN CALLE TENIENTE ALCANTARA S/N URB. GUARDIA CIVIL III ETAPA PAUCARPATA, CASILLA ELECTRÓNICA 33477, CORREO ELECTRONICO veraoviedoguillermo@gmail.com Y CELULAR 987537030
- **DEFENSOR:** TITO LAURA MAQUERA, 11340, CASILLA 101066, CALLE COLON 313 OFICINA 505, 977196081, EN DEFENSA DE BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA
- **DEFENSA PÚBLICA:** JOE RAMIREZ SILVA, 4663, casilla 33760 en defensa de Adrián Cacallica Osorio.
- **ACUSADO:** BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA con DNI 75782098, Ah 26 De Julio Manzana C, Lote 10.-
- No se presentó el acusado Cacallaqui Osorio.

II. ACTUACIONES REALIZADAS.

- 00.04.36 **Especialista de audio:** Da cuenta de las notificaciones efectuadas.
- 00.05.25 **Defensa Ramírez:** Solicita precisiones.
- 00.05.35 **Ministerio Público** Realiza precisiones. Solicita se declare contumaz al acusado Cacallica Osorio.
- 00.06.20 **Defensa Ramírez:** Sin oposición.
- 00.06.41 **Director de Debates:** Expide resolución:

RESOLUCIÓN S/N

Arequipa, 19 de enero del 2021

OIDOS Y CONSIDERANDO (en audio)
SE RESUELVE

1. **DECLARAR CONTUMAZ AL ACUSADO ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO** con DNI 77576003.
2. **Se dispone** reservar el juzgamiento en su extremo disponiéndose además girar los oficios de captura para que sea puesto a disposición del juzgado.
3. **Se designa** como su abogado al defensor Joe Ramírez Silva.

LAS PARTES CONFORMES

00.10.52 **Defensa Ramírez:** Solicita permiso para poder retirarse.

00.11.06 **Director de Debates:** Se autoriza el retiro del defensor público.

00.12.37 **Defensa Laura:** Indica que habrá conformidad.

ALEGATOS INICIALES

00.13.00 **Ministerio Público** Oraliza alegatos iniciales

00.18.40 **Defensa:** Oraliza alegatos iniciales. Solicita una conclusión anticipada.

00.19.20 **Director de Debates:** Hace conocer derechos al acusado.

00.20.05 **Acusado:** reconoce los cargos.

SUSPENDE AUDIO

REANUDA AUDIO

00.25.01 **Ministerio Público** realiza precisiones sobre los acuerdos, realiza una recalificación.

00.29.21 **Defensa:** Conforme

00.29.32 **Acusado Mamani:** Conforme.

00.32.32 **Especialista:** da cuenta del depósito de cupón judicial

00.32.47 **Director de Debates:** Expide fallo:

FALLAMOS POR UNANIMIDAD:

1. APROBANDO los acuerdos celebrados entre el acusado Billi Paul Mamani Pumacota, con su defensa y el Ministerio Público
2. **DECLARAMOS a BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** con DNI 75782098 y como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado previsto en el artículo 188 del Código Penal concordado con los inc. 2 y 4 primer párrafo del artículo 189 del mismo cuerpo legal, y con el artículo 16 del Código Penal en agravio de Diego Quenta Lima.
3. Como tal, **LE IMPONEMOS** *04 años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, la misma que es convertimos a 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad equivalente a 208 jornadas*, para cuyo efecto se cursará el oficio al área del medio libre del INPE, en caso de incumplimiento injustificado o abandono de una sola de las jornadas, se procederá a revocar la conversión y disponer el internamiento del

sentenciado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE previo el descuento de las jornadas que hubiera cumplido.

4. **APROBAMOS** el monto de la reparación civil en la suma de 800 soles, monto que se encuentra cancelado.
5. **DISPONEMOS** que **no corresponde fijar Costas** por tratarse de un procedimiento de conformidad.
6. **MANDAMOS** que firme que sea esta decisión judicial se remitan copias pertinentes al Registro Distrital y Central de Condenas, RENIPROS y demás pertinentes para fines de registro y archivo. *Por esta sentencia que pronunciamos en acto público de la fecha. Regístrese y notifíquese.-*

LAS PARTES CONFORMES

III. CONCLUSIÓN

Con lo que se da por concluida la audiencia, y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla la señora Juez Directora de Debates y la Especialista Judicial de Audiencia encargada de la redacción del acta.- Dejándose expresa constancia que la presente acta ha sido debidamente asociada al SIJ, y que el audio de esta audiencia ha sido debidamente colgado en el SIJ, conforme a la directiva emitida por la Sala de Apelaciones. Doy fe.-



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

EXPEDIENTE N° : 07602-2019-86-0401-JR-PE-01
 IMPUTADO : BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA
 MIN. PUBLICO : IRA FISCALIA PROV.PENAL CORP.DE PAUCARPATA
 DELITO : ROBO AGRAVADO
 AGRAVIADO : DIEGO QQUENTA LIMA
 ESPECIALISTA : QUISPE SURCO, JENNY MARISOL
 RESOLUCIÓN : S/N

S E N T E N C I A N° 1 2 - 2 0 2 1 - 1 J P C S P

Arequipa, diecinueve de enero
 De dos mil veintiuno.-

I.- Parte Expositiva:

Primero.- Identificación del Proceso: La audiencia se ha desarrollado ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente, integrado por los señores Magistrados Ronald Manuel Medina Tejada (ponente) quien preside el Colegiado, Guiuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe, en el proceso número 7602-2019, seguido en contra de Billy Paul Mamani Pumacota en agravio de Diego Qquenta Lima, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.

Segundo.- Identificación del acusado:

Billy Paul Mamani Pumacota: Identificado con DNI 75782098, de sexo masculino, nacido el 11 de mayo de 1999, con 21 años de edad, estado civil soltero, hijo de Rogelio y Eusebia, natural de Moquegua, con domicilio real en Lote 10, Manzana C, Asentamiento Humano 26 de Julio, distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa.

Tercero.- Pretensión del Ministerio Público:**3.1 Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación:****Hechos precedentes:**

Se tiene que con fecha 19 de julio del año 2019, siendo las 21:30 horas aproximadamente, la persona de Billy Paul Mamani Pumacota (20 años) y dos sujetos más, se encontraban tomando licor, por inmediaciones de la Av. Miguel Grau, distrito de Paucarpata, donde se genera una gresca, de la que incluso uno de los sujetos que fueron partícipes del delito resultó herido como consecuencia del impacto de una piedra en la cabeza, por lo que corren de este lugar, siendo que al no tener dinero, divisan al agraviado a quién deciden sustraer sus pertenencias.

Hechos concomitantes:

Es el caso, que el agraviado DIEGO QQUENTA LIMA, se encontraban caminando con rumbo a su domicilio, por la Av. Olímpica del PP JJ Miguel Grau, Paucarpata, siendo que al llegar a la altura de Estadio Miguel Grau, se percata de la presencia de tres sujetos desconocidos, quienes estaban en dirección opuesta, se le acerca uno de ellos, la persona de Billy Paul Mamani Pumacota lo sujeta por el cuello haciéndolo caer al suelo, y los otros dos sujetos, se fueron encima suyo, lo sujetan contra el suelo, aplastándole la cabeza, mientras que la persona de Billy Paul Mamani Pumacota le rebuscaba los bolsillos, del bolsillo de su pantalón le sustrajo la suma de S/ 130.00 soles, dinero del trabajo del día, le arrancó el morral de color azul, donde tenía la suma de S/

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA****PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE**

40.00 soles, además de un menú en su taper y comida para gatos; mientras seguía siendo sujetado por los otros sujetos, la persona de Billy Paul Mamani Pumacota le decía "este es mi barrio y no te muevas, porque te vamos a matar", mientras que lo golpeaba con puño y patadas, llegando a patear su rostro, ocasionándole una herida en la ceja, lado izquierdo, y es cuando el agraviado reacciona y se escapa, mientras que los tres sujetos se quedaron en el lugar.

Hechos posteriores:

Finalmente, el agraviado corrió un cuadra, donde ubicó a los serenos del Municipio del Paucarpata, haciéndolo subir a una camioneta, y emprenden la búsqueda de los tres sujetos, es allí donde logran ubicar a uno de los sujetos que habían perpetrado el robo, los otros dos sujetos, comenzaron a correr, mientras iban botando las cosas del agraviado; mochila y otros enseres, por lo que solicitan los serenos otras unidades de apoyo, quienes finalmente capturaron a la persona de Billy Paul Mamani Pumacota, para posteriormente efectuar los serenos el recojo de las pertenencias del agraviado, logrando recuperar su bolso morral, una bolsa de plástico de color blanco conteniendo comida para gato y dos rollos de papel higiénico. Siendo todos, conducidos a la comisaría del sector para las investigaciones del caso.

3.2. Calificación Jurídica: La Fiscalía considera que los hechos materia de acusación se encuadran en el tipo penal del delito de robo agravado, previsto en el artículo 188° del Código Penal, en concordancia con el numeral 2 (*durante la noche o en lugar desolado*) y 4 (*con el concurso de dos personas*) del primer párrafo del artículo 189°.

3.3.- Pretensión Penal: La Fiscalía solicitó la imposición de 9 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, en su calidad de autor.

3.4.- Pretensión Civil: la Fiscalía ha solicitado el pago de S/. 800.00 (ochocientos con 00/100 nuevos soles), a favor de la parte agraviada.

Cuarto.- Pretensión de la defensa del acusado:

En la audiencia de ley, el procesado asesorado debidamente por su defensa técnica, ha señalado que acepta los cargos imputados en su contra.

Quinto.- Itinerario del Proceso:

Al inicio del Juicio el fiscal señaló que los hechos estarían subsumidos en el grado de tentativa, pues los bienes del agraviado fueron recuperados, siguiendo con el proceso se le instruyó al acusado de sus derechos y al preguntársele si admite ser autor del delito materia de acusación y responsable penal y civilmente, previa consulta con su abogado defensor, respondió en sentido positivo, y se declaró confeso en su totalidad de los cargos que le imputó el Ministerio Público, lo que el Juzgado Colegiado considera prueba válida de cargo de la responsabilidad penal del acusado con entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste. Suspendida la sesión por breves minutos, para que la defensa del acusado y el fiscal puedan llegar a un acuerdo, en cuanto a la pena y la reparación civil, se reanudó la misma y señalaron las partes que habían convenido el pago de S/. 800.00 soles, por concepto de reparación civil para el agraviado, y la imposición de 4 años de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, convertida a 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA****PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE****II.- PARTE CONSIDERATIVA:****Primero.- Respecto de la conclusión anticipada:**

1.1.- El artículo 372° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencias vinculantes, tales como: el *Acuerdo Plenario No. 05-2008/CJ-116* del dieciocho de julio del dos mil ocho; la *Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 1766-2004/Callao* del veintiuno de setiembre del dos mil cuatro y la *Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 2206-2005/Ayacucho*, del doce de julio del dos mil cinco; y, recientemente, por el *Acuerdo Plenario* del trece de Noviembre del dos mil nueve.

1.2.- La institución de la “conformidad” se sustenta en el reconocimiento del principio de adhesión del acusado en el proceso penal, en el momento del inicio del juicio oral, aunque con sus propias singularidades, para la inmediata culminación del juicio oral, a través de un acto unilateral del acusado y su defensas de reconocer los hechos objeto de la imputación fiscal, y en su caso, aceptar las consecuencias jurídico penales y civiles correspondientes.

1.3.- A mayor abundamiento, la “conformidad premiada”, se presenta cuando del acusado, por sí, o a través de su abogado, solicita previamente conferenciar con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena; lo que importa una doble garantía, que implica una renuncia a la actuación de pruebas en juicio público, constituyendo un acto de disposición del propio proceso, conviniendo en la expedición de una sentencia condenatoria en su contra.

Segundo.- Respecto al reconocimiento de cargos del acusado.

2.1.- El acusado, en audiencia, al expresar su “conformidad” antes referida aceptó los hechos objeto de acusación, previa consulta con su abogado defensor, actuando con plena libertad voluntad y racionalidad, sin limitaciones de su capacidad intelectual, y conocedor de sus derechos, deviniendo su reconocimiento en una declaración judicial de culpabilidad, con la consiguiente imposición de una sanción penal y reparación civil, por lo que, este Juzgado Colegiado no puede mencionar, interpretar y valorar actos de investigación o de prueba pre constituida alguna, desde que el acusado con su “conformidad”, renuncia expresamente a su derecho a la presunción de inocencia, como a la exigencia de prueba de cargo de la acusación y a un juicio contradictorio; por lo que, los fundamentos de hecho o juicio histórico de la sentencia, no se forman como resultado de valoración de la prueba, sino que le vienen impuestos al Juzgado Colegiado por la acusación y la defensa, a través de un acto de allanamiento de ésta última, que son vinculantes al Juzgado y a las partes; por lo que, en éste orden de ideas, el Juzgado Colegiado no puede agregar ni reducir los hechos y circunstancias que han sido imputados por el Fiscal, y aceptados por el acusado y su abogado defensor, en audiencia; ya que, ello implicaría revisar y valorar actos de aportación de hechos, que son excluidos por la propia naturaleza de la “conformidad procesal”.

Tercero.- Sobre la presencia del juzgador.

No obstante, la presencia del Juzgador no es pasiva, para efectos de la homologación de la “conformidad”; ya que, existe cierto margen de valoración que el Juez debe ejercer soberanamente, si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación -vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico-, por razones de legalidad y justicia puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

Cuarto.- Calificación jurídica.

El delito de robo agravado se encuentra previsto en el artículo 188° con las agravantes previstas en los incisos 2, y 4 del primer párrafo del artículo 189 ° del Código Penal. Este delito requiere como elementos tipificantes, que el agente, mediando dolo en su actuar, con el concurso de dos o más personas, y durante la noche se apodere ilegítimamente de un bien ajeno, en el grado de tentativa.

Quinto.- Juicio de tipicidad.

La conducta desplegada por el acusado se adecua, objetiva y subjetivamente al tipo penal antes referido, pues tal como han sido expuestos los hechos, con fecha 19 de julio de 2019, al promediar las 21:30 horas, por inmediaciones de la avenida Miguel Grau el acusado en compañía de dos sujetos, cogen del cuello al agraviado haciéndolo caer al suelo, para posteriormente sujetarlo contra el suelo y aplastarle la cabeza, para así facilitar que el acusado le rebuscara los bolsillos al agraviado, y poder sustraer la suma de S/. 130.00 soles, así también de su morral le sustrajo la suma de S/. 40.00 soles y su taper de comida, mientras el acusado sustraía los bienes del agraviado, este le decía *"este es mi barrio y no te muevas, porque te vamos a matar"* procediendo a golpearlo con puño y patadas, llegando a patear su rostro provocándole una herida. Una vez obtenido su cometido el acusado emprende la huida junto con los otros dos sujetos que lo acompañaban, en ello el agraviado se levanta y ve a unos serenos el cual pone de conocimiento de lo que le habían robado, finalmente los serenos en compañía del agraviado dan con el paradero del acusado y lo detienen. Descritos así los hechos, se adecuan al tipo penal antes referido.

Sexto.- Juicio de antijuridicidad y culpabilidad.

No se ha alegado ni se ha probado causa que justifique el actuar típico del acusado y tampoco se ha probado causa que excluya su culpabilidad.

Séptimo.- Individualización de la Pena.

7.1.- Para la determinación de la pena debe tomarse en cuenta los criterios fundamentadores de la pena establecidos en los artículos 45°, 45°-A, y 46° del Código Penal.

7.2.- El delito de robo agravado, previsto en el artículo 185° en concordancia con los numerales 2 y 4 del primer párrafo del artículo 189 ° del Código Penal, establece una pena privativa de libertad no menor de doce ni mayor de veinte años.

7.3.- La representante del Ministerio público con el acusado y su defensa han convenido en una pena de 4 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, convertida a jornadas de prestación de servicios.

El Ministerio Público justifica el acuerdo de pena ya que en el caso en concreto concurre una circunstancia privilegiada atenuante (tentativa). Afirman las partes que los bienes del agraviado fueron recuperados.

7.4.- Concurrencia de circunstancias atenuantes privilegiadas: Tentativa

7.4.1.- El representante del Ministerio Público tal como lo ha referido en juicio oral las pertenencias del agraviado habrían sido recuperadas.

7.4.2.- Al buscar una definición sobre tentativa, el Código Penal en el artículo 16° refiere: *"En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo"*. Carlos Fontán Balestra expresa que *"Tentativa es comienzo de ejecución de un delito determinado con dolo de consumación y medios idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la"*



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

voluntad del autor"[4]; sin embargo nos quedamos con una definición más simple dada por el tratadista Javier Villa Stein, "Cuando el autor pasa el límite máximo de los actos preparatorios e inicia los actos ejecutivos sin consumir el delito, estamos frente a la tentativa"

7.4.3.- Con relación a la existencia de circunstancias privilegiadas atenuantes en nuestro ordenamiento jurídico, debe tenerse presente que nuestro legislador ha hecho referencia normativa a la existencia de "*circunstancias privilegiadas atenuantes*", específicamente en el Código Penal y Procesal Penal, así como en leyes penales especiales. Lo que no ha determinado el legislador es cómo debe realizarse el procedimiento judicial para la determinación de la pena ante la presencia de estas circunstancias. Ante este vacío legislativo debe buscarse una solución para llenar esta laguna legal, teniendo como principio rector la "equidad", ello sin entrar a discutir si dichas "*circunstancias privilegiadas atenuantes*" están dentro o fuera del delito, sino más bien propender un trato igualitario en la determinación de la pena tomando como punto de partida los criterios establecidos por el legislador para la creación de nuevos marcos punitivos ante la presencia de circunstancias calificadas agravantes.

7.4.4.- En una interpretación sistemática, por integración y ubicación, se tiene que el artículo 45-A, numeral 3 del Código Penal establece que: "*Cuando concurren circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes calificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera: c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito.* De este dispositivo legal puede inferirse válidamente que nuestro legislador al momento de la dación de la referida norma sí consideró la presencia de circunstancias privilegiadas atenuantes en nuestro ordenamiento penal, si bien no con tal nomenclatura en todo el ordenamiento jurídico, pero sí reconociendo la existencia de "circunstancias" que atenúan o eximen de manera imperfecta la imposición de una pena; asimismo resulta válido inferir que ambas circunstancias (privilegiada atenuante y calificada agravante) tienen el mismo valor pues ante su concurrencia ambas se anulan o compensan.

7.4.5.- En efecto, resulta necesario resaltar que el legislador reconoce su existencia en distintas normas, además de la citada, por ejemplo, en el inciso c) artículo 2º del Código Procesal Penal, referido al Principio de Oportunidad, se establece que el representante del Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal, cuando conforme a las **circunstancias del hecho** y a las condiciones personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los supuestos atenuantes de los artículos 14º, 15º, 16º, 18º, 21º, 22º, 25º y 46º del Código Penal, justamente aquellos supuestos donde la norma sustantiva establece que puede reducirse o disminuirse prudencialmente la pena. Por otro lado, en la Ley N° 30424¹ del 20 de abril de 2016, el legislador nuevamente reconoce su existencia, pues en el segundo párrafo del numeral 6 del artículo 15º establece que **son circunstancias atenuantes privilegiadas aquellas previstas en la ley penal o procesal penal que prevean la reducción de la pena por debajo del mínimo legal**; es decir, establece los supuestos contemplados en la norma que deben ser considerados como tales. Si esto es así, bajo una interpretación a favor del reo debemos considerar como circunstancias atenuantes privilegiadas a aquellos supuestos donde la norma dispone que se atenúe la pena o que se reduzca o disminuya prudencialmente la misma, siendo los siguientes: Omisión impropia (artículo 13º), Error de prohibición vencible (artículo 14º), Error de comprensión culturalmente condicionado (artículo 15º), Tentativa (artículo 16º), **Eximentes**

¹ Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, Ley N° 30424.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

imperfectas de responsabilidad penal (artículo 21°), Responsabilidad restringida por la edad (artículo 22°), Complicidad secundaria (artículo 25°).

7.4.6.- Dicho esto, los jueces no pueden dejar de administrar justicia por deficiencia o vacío de la Ley². Debe subsanarse la deficiencia del legislador para propender un tratamiento igualitario y equitativo en la determinación judicial de la pena ante la presencia de “circunstancias” que atenúen, disminuyan o reduzcan prudencialmente la pena.

7.4.7.- Por lo tanto, en una interpretación analógica a favor del reo que habilita la Constitución³, si las circunstancias calificadas agravantes tienen el mismo valor que las privilegiadas atenuantes, entonces la conclusión lógica será que ante la presencia de una circunstancia privilegiada atenuante se permitirá reducir la pena por debajo del mínimo legal creando así un nuevo marco punitivo, al igual como sucede ante la presencia de una calificada agravante donde se crea un nuevo marco punitivo a partir de incrementar una proporción determinada sobre el máximo establecido para cada tipo penal específico, el mismo que se convertirá en el nuevo mínimo para la determinación de la pena en base al sistema de tercios, ello teniendo como principio rector que ambas circunstancias tienen el mismo valor.

7.4.8.- Ahora bien el legislador establece la creación de nuevos marcos punitivos diversos en los artículos 46- 46-A, 46-B, 46-C, 46-D, y 46-E del Código Penal, incrementándose la pena en las siguientes proporciones indistintamente: en una mitad, en un tercio, en dos tercios, y hasta el doble del máximo legal fijado. Entonces, el siguiente problema a dilucidar será determinar cuál será la proporción a tener en cuenta para la creación de un nuevo marco punitivo por debajo del mínimo legal en los casos donde se presente una circunstancia(s) privilegiada(s) atenuante(s).

7.4.9.- Para la solución del caso podemos recurrir a la previsión legal contenida en el artículo 392° del Código Procesal Penal: Deliberación. 4. *Las decisiones se adoptan por mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos de la pena y la reparación civil, se aplicará el término medio.* Dicha norma se condice con la aplicación del principio rector de “equidad” pues ante la incertidumbre generada por el legislador corresponde equiparar a un punto medio las distintas proporciones establecidas por el legislador para la creación del nuevo marco punitivo cuando concurra en el delito una circunstancia calificada agravante.

El punto de equilibrio (si fuera medido en una balanza), es decir, el punto medio referido se condice con reducir en una mitad el mínimo legal fijado para el delito, materializando así el principio de igualdad y fomentando un trato igualitario y equitativo para todo sujeto de derecho sometido a un proceso penal.

² Constitución Política. Art. 139.8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.

³ En una interpretación negativa o inversa del art. 139 de la Constitución Política, numeral 11: “La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”. Lo que debe correlacionarse con lo dispuesto por el Artículo VII. Vigencia e interpretación de la Ley procesal penal del Título Preliminar del NCPP. Inciso 3: *La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos*”



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

Marco Punitivo para el delito de robo: De 6 años a 12 años		
Tercio inferior	Tercio medio	Tercio superior
6 años - 8 años	8 años y 1 día - 10 años	10 años y 1 día - 12 años

En el caso en concreto, se ha ubicado la pena en el tercio inferior siendo que el acusado no cuenta con antecedentes penales; por tal la pena a imponerse es 6 años de pena privativa de la libertad.

7.5.- Aplicación del descuento legal por conclusión anticipada:

Las partes realizaron la reducción de 1/7 de la pena concreta parcial de 6 años por el beneficio premial de la conclusión anticipada dando como resultado 5 años 2 meses de pena privativa de la libertad.

7.6.- Aplicación del principio de proporcionalidad:

7.6.1.- Adicionalmente, las partes solicitaron la reducción de 1 año y 2 meses de pena, amparando su pedido en la aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad de las penas, indicando que el acusado habría realizado el pago íntegro de la reparación civil a favor del agraviado con lo cual demuestra su interés por reparar el daño ocasionado con su conducta, asimismo el grado de lesividad fue mínimo, y el bien fue recuperado.

7.6.2.- En tal sentido, resulta importante destacar la propuesta dogmática introducida por Claus Roxin quien propone una «Tercera Vía» dentro del Derecho Penal, que estaría referida a la reparación voluntaria del daño causado por el delincuente. Al respecto, precisa que con esta reparación: *“se sirve más a los intereses de las víctimas, que con una pena privativa de la libertad o de multa, que a menudo realmente frustran una reparación del daño por el autor.”* Continúa explicando que en aquellos casos que se castigan con una pequeña multa, el pago total del daño podría permitir prescindir de la pena, y en el caso de delitos más graves el pago íntegro de este monto puede originar una remisión condicional de la pena o una atenuación obligatoria de la pena.

7.6.3.- Esta postura, ha sido adoptada por autores peruanos, como García Caveró, Felipe Villavicencio Terreros, Julio Rodríguez, entre muchos otros. Este último autor, incluso señala que se deben buscar aplicar todas las otras posibilidades antes de pensar en la solución punitiva; este planteamiento es correcto, pues no debemos olvidar que el Derecho Penal debe ser considerado como *ultima ratio*; tampoco podemos ser indiferentes a la crisis actual que atraviesa la sanción punitiva por excelencia, es decir la pena privativa de libertad. Es por ello, que compartimos la postura que apuesta por la utilización de mecanismos alternos para la resolución de los conflictos penales. Al respecto, Von Hirsch, citado por Rodríguez, indica que: *“en el sistema anglosajón, se aprecia cada vez más una aplicación de penas no privativas de libertad (las llamadas sanciones intermedias), en donde se potencia el uso de las multas o los días-multa, trabajo en beneficio de la comunidad, entre otras sanciones semejantes”*. Así pues, la reparación civil podría configurarse como una de estas sanciones intermedias, pero no como una consecuencia accesoria de la privación de libertad, sino como una sanción penal autónoma.

* Rodríguez, J. *La reparación como tercera vía en el Derecho Penal*, Instituto de Ciencia Procesal Penal, p. 3. Recuperado del sitio web: <http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/j.rodriguez-3ravia.pdf>



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

7.6.4.- Para el Tribunal Constitucional Peruano la reparación discutida en la vía penal difiere en su naturaleza a la reparación discutida en la vía civil, aproximación que resulta interesante desde el punto de vista de un derecho Penal Reparador. El Tribunal Constitucional en Pleno Jurisdiccional, ha establecido: *"...cumplir con resarcir los daños ocasionados por el delito no constituye una obligación de orden civil, sino que es una verdadera condición de la ejecución de la sanción penal"* (Caso Jorge Eduardo Reátegui Navarrete, Exp. N.º 2982-2003-HC/TC) (...). Así, se puede advertir que el Tribunal Constitucional hace una distinción entre ambos conceptos de reparación (penal y civil). La reparación civil como instituto, tiene una naturaleza jurídica distinta cuando es requerido en la vía penal y en la civil. La única manera de entender el criterio del Tribunal Constitucional es que la reparación cumple en la vía penal, funciones preventivas generales de carácter positivas así como funciones de resocialización del delincuente, fines que vemos claramente reflejados en nuestro Código Penal.

7.6.5.- Este razonamiento, guarda correspondencia con lo expresado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia N.º 7730-2005-PHC/ TC en el sentido siguiente: *"Como se sabe, el pago de la reparación civil es un requisito indispensable para la concesión de beneficios penitenciarios en determinados delitos; por tanto, el incumplimiento de este requisito impide que el sentenciado pueda acceder a alguno de ellos"*. Sin embargo, esta condición, ha sido objeto de observación por algunos sectores, pues afirman que tal exigencia carece de legalidad ya que constituiría una limitación a la libertad por una obligación pecuaria (prisión por deuda). Ante esta circunstancia, el Tribunal Constitucional ha señalado que dicho pago tendría más bien el carácter de un deber impuesto por el Juez Penal y que además debe tomarse en cuenta la necesidad de reparar los daños que se derivan como consecuencia de la comisión de delito; y, que tal exigencia no sólo resulta razonable y proporcional, sino también constitucionalmente legítima. Por lo tanto, el criterio adoptado por este Colegiado, de requerir el pago íntegro de la reparación civil, como requisito previo para poder aprobar los acuerdos de conformidad, resulta legítimo, toda vez que también se está preponderando la necesidad de reparar el daño causado a la víctima.

7.6.6.- Como segundo punto, es importante destacar que: *"en el aspecto preventivo especial, la reparación civil obedece a criterios tendientes a que el individuo infractor de la norma penal tome consciencia de su actuar ilícito y repare los daños generados al sujeto pasivo. Desde un criterio preventivo general, la reparación permite que la colectividad verifique el buen funcionamiento del sistema penal, y se genere así el efecto de fidelidad a la norma"*³.

7.6.7.- Por su parte, la pena, desde un punto de vista preventivo general positivo, debe permitir reafirmar la expectativa de cumplimiento de la norma que ha sido vulnerada por el delito, pero no debe descuidar su mensaje preventivo general negativo; y para ello - tomando en cuenta la actual crisis del sistema penal, en especial de las penas privativas de la libertad- no es necesaria la imposición de penas desmesuradas o desproporcionadas, si es que se verifica - como ocurre en el presente caso- que la víctima ya ha visto resarcido en su totalidad el daño que se le ha causado y ya ha verificado que su agresor no solo voluntariamente ha decidido reparar el daño, sino que además ha recibido una sanción por su mal actuar.

7.6.8.- En el caso concreto, el acusado han cumplido con el pago íntegro de la reparación civil, en forma libre y voluntaria y ha revelado a través de este acto su propósito de corrección, enmienda y de respeto a la norma social vulnerada; es decir, nos ha demostrado que ha logrado internalizar la conducta prohibida cometida por voluntad propia. El Tribunal considera que en el caso concreto los propósitos de prevención general positiva y negativa se

³Rodríguez, J. Ídem, p. 12.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

han visto cumplidos, no sólo porque se ratifica el mensaje de aprendizaje a la sociedad para evitar se cometan delitos de similar naturaleza ante la amenaza de imposición de una pena privativa de la libertad efectiva, sino y sobre todo *-como una tercera vía del derecho penal-* se envía un nuevo mensaje de amenaza de condena de pago de una reparación económica a favor de la víctima del delito. En efecto, se ha verificado que hasta ahora los fines de la pena privativa de la libertad y del pago de la reparación civil, como sanción derivada de un derecho penal reparador, se vienen cumpliendo; sin embargo, encontrándonos frente a un delito tan común en nuestros días como lo es el que nos ocupa, la sanción civil reparatoria debe coexistir con una pena privativa de la libertad efectiva de corta duración.

7.6.9.- En base a todos los criterios fundamentadores que han sido desarrollados en el punto anterior, corresponde aprobar la pena acordada entre las partes pues respeta los principios de legalidad y proporcionalidad, será de **CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA**.

7.7.- De la conversión a prestación de servicios a favor de la comunidad.

7.7.1.- La Sala Penal Transitoria en el Recurso de Nulidad N° 607-2015 Lima Norte, fundamento sexto y séptimo ha precisado: *"...cuando se imponen penas de corta duración, como la que tenemos en el presente caso, el ordenamiento jurídico penal vigente establece como sanciones alternativas a la pena privativa de la libertad, la aplicación de penas limitativas de derechos, las mismas que contribuirán a la resocialización del imputado y, sobre todo, permitirán la prestación de servicios a favor del Estado como retribución por el daño causado con la comisión del delito. En ese sentido, este Supremo Tribunal considera viable la conversión de la pena efectiva impuesta por prestación de servicios a la comunidad; ello en virtud a que la sanción es de corta duración y el delito quedó en grado de tentativa; por ende, no hubo mayor afectación al bien jurídico protegido, las condiciones personales del agente; y, principalmente porque este tipo de penas tienen mayor utilidad resocializadora que una pena efectiva"* ⁶ (...) Séptimo: Al respecto, Valdir Sznick sostiene que a esta modalidad punitiva se le ha atribuido una alta potencialidad resocializadora y una escasa incidencia estigmatizadora.⁷

7.7.2.- Siguiendo esa línea, este Tribunal considera que, en el caso analizado, la imposición de esta sanción alternativa permitirá privilegiar la reinserción social del acusado y a través de los trabajos prestados no solo se cumplirán los fines de la pena, también les permitirá al acusado retribuir a favor del Estado el daño causado por el delito. Para ello debe verificarse que, en primer término, la pena impuesta no sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

7.7.3.- En segundo término, hay un requisito de carácter negativo que expresa la imposibilidad de poder aplicar la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio, concretamente para el órgano jurisdiccional; en ese entendido, lo primero que debe buscar aplicar el juez es la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio; si ninguna de las dos opciones calza en la posibilidad del caso concreto, entonces, si la pena no va a ser superior a cuatro años de reclusión, el Tribunal puede optar por la conversión de penas, lo que convierte a esta medida como decíamos anteriormente en una medida de carácter subsidiaria.

7.7.4.- En tercer término, debe considerarse que el acusado desde el inicio han reconocido los hechos y han reparado el daño causado de su conducta ilícita; en ese sentido, este Despacho, considera prudente la aplicación de pena privativa de libertad de corta o mediana duración

⁶ El subrayado es nuestro.

⁷ Recurso de Nulidad N° 607 205 Lima Norte, cuatro de mayo de 2016. P. 3-4



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

efectiva convertible, y de esta manera, mostrar a la sociedad que el condenado puede restituir a través de su esfuerzo y trabajo el daño que generó, y con ello mostrar voluntad de enmienda e inserción más directa a su entorno social; por lo que, corresponde aprobar la conversión de pena propuesta por la fiscalía y el abogado defensor del acusado, a razón de siete días de pena privativa de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad; por lo que al hacer un cálculo matemático, los 4 años de pena privativa de libertad efectiva, equivaldrían a **208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad**, las mismas que se ejecutarán en la institución que determine el Instituto Nacional Penitenciario. En caso de incumplimiento injustificado de una sola jornada de ocho horas de prestación de servicios a la comunidad o en caso de abandono de la jornada laboral, se revocará la conversión de la pena y se dispondrá el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad acordada entre las partes en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 53° del Código Penal⁸.

7.7.5.- En suma, dicha conversión de pena, a criterio del Tribunal, permitirá al sentenciado corregirse de la conducta prohibida, siendo que una pena efectiva -en atención al Principio de Realidad- no haría más que tornar más peligrosa la personalidad del agente, siendo que esta medida cumplirá con los fines preventivo y especial de la pena, no solo para el sentenciado, sino como un mensaje a los demás ciudadanos, que en el caso de cometer un delito sabrán a cabalidad que consecuencia jurídica les espera.

Octavo.- Fijación de la Reparación Civil.-

En cuanto a la reparación civil, para los efectos de la fijación de su monto debe estarse a lo dispuesto por el artículo 93° del Código Penal, se tiene en consideración que en autos se ha determinado en "*quantum*" de los daños y perjuicios irrogados, por lo que los mismos deben regularse con criterio de equidad y prudencia. Que para fijar la reparación civil se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 93° y 101° del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 1332 del Código Civil.

8.1.- La Responsabilidad Civil es una obligación de reponer al afectado en una situación igual o similar al que se encontraba antes de que se produzca el daño; es decir, es la obligación de reparar -indemnizar- un daño. La pretensión de indemnización de daños, es una pretensión de carácter civil en el que las partes son el obligado y el afectado y se encuentra regulado fundamentalmente por normas contenidas en el Código Civil y las pertinentes del Código Penal. Por otro lado, en cuanto a la reparación, ésta puede consistir en: a) reparación natural o *in natura*, en la que se reintegra el bien al patrimonio del agraviado, b) reparación por equivalente, en la que se compensa el daño con un valor que reequilibre el patrimonio afectado (ambas formas de reparar son para daños patrimoniales), y c) compensación, que opera frente a daños extra patrimoniales en las que no es posible reparar por equivalente -por la naturaleza del bien afectado-, sino el pago de un monto por la afección de bienes extra patrimoniales, cumple una función de "*satisfacción consolatoria*".

El representante del Ministerio Público, el acusado y su defensa han acordado la suma de S/800.00 (ocho cientos con 00/100 nuevos soles) por el concepto de reparación civil para la

⁸ Revocación de la conversión

Artículo 53.- Si el condenado no cumple, injustificadamente, con el pago de la multa o la prestación del servicio asignado a la jornada de limitación de días libres, la conversión será revocada, previo apercibimiento judicial, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en la sentencia.

Revocada la conversión, la pena cumplida con anterioridad será descontada de acuerdo con las equivalencias siguientes:

1. Un día de multa por cada día de privación de libertad; o 2. Una jornada de servicio a la comunidad o una de limitación de días libres por cada siete días de pena privativa de libertad.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

parte agraviada, por lo que se tiene por cumplido el pago de la reparación civil, a favor de la parte agraviada, demostrando así el interés de reparar el daño ocasionado con su conducta.

Noveno.- Fundamentación de las costas.- El artículo 497.5° del Código Procesal Penal, establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz. En el presente caso, al haber concluido el proceso por "conformidad"; no procede la imposición de costas.

III.- PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones, administrando justicia a nombre del Pueblo, de quien emana dicha facultad

FALLAMOS POR UNANIMIDAD:

Primero.- APROBANDO los acuerdos celebrados entre el acusado, debidamente asesorado por su defensa técnica y el Ministerio Público.

Segundo.- DECLARAMOS a BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA con DNI 75782098 y como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado previsto en el artículo 188° del Código Penal concordado con los incisos 2 y 4 primer párrafo del artículo 189° del mismo cuerpo legal, y con el artículo 16° del Código Penal en agravio de Diego Qquenta Lima.

Tercero.- Como tal, LE IMPONEMOS 4 AÑOS de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva, la misma que es convertimos a 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad equivalente a 208 jornadas, para cuyo efecto se cursará el oficio al área del medio libre del INPE, en caso de incumplimiento injustificado o abandono de una sola de las jornadas, se procederá a revocar la conversión y disponer el internamiento del sentenciado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE previo el descuento de las jornadas que hubiera cumplido.

Cuarto.- APROBAMOS el monto de la reparación civil en la suma de S/.800.00 (ochocientos con 00/100 nuevos soles), monto que se encuentra cancelado.

Quinto.- DISPONEMOS que no corresponde fijar Costas por tratarse de un procedimiento de conformidad.

Sexto.- MANDAMOS que firme que sea esta decisión judicial se remitan copias pertinentes al Registro Distrital y Central de Condenas, RENIPROS y demás pertinentes para fines de registro y archivo. Por esta sentencia que pronunciamos en acto público de la fecha. *Regístrese y notifíquese.*

Sres.

Medina Tejada (P)

Pastor Cuba

Churata Quispe

1° JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 07602-2019-86-0401-JR-PE-01
JUECES : <NO DEFINIDO>
ESPECIALISTA : QUISPE SURCO JENNY MARISOL
IMPUTADO : CACALICA OSORIO, ADRIAN ALEXANDER
DELITO : ROBO AGRAVADO
MAMANI PUMACOTA, BILLY PAUL
DELITO : ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO : QUENTA LIMA, DIEGO

RESOLUCIÓN NRO.01-2020

Arequipa, veintisiete de noviembre
De dos mil veinte.-

I.- PARTE EXPOSITIVA

VISTOS: Las actuaciones remitidas por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 355 y 359 del NCPP, debe citarse a juicio dentro del plazo legal, siendo obligación del órgano jurisdiccional, el emplazamiento a las partes procesales, y, sus defensores técnicos.

Mediante Decreto Supremo Nro. 44-2020-PCM, se declara el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, mediante Resolución Administrativa N° 120-2020-CE-PJ de fecha 17 de abril del año en curso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto, en los casos que se requiera realizar una audiencia, ésta se lleve a cabo virtualmente o mediante el uso de un medio tecnológico idóneo que permita garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Ahora bien, no existe normatividad procesal que regule la realización de juicios orales mediante "audiencias virtuales". Aisladamente el artículo 119-A del código procesal penal regula como excepción la utilización del método de videoconferencia en casos que el imputado se encuentre privado de su libertad y su traslado al lugar de la audiencia encuentre dificultades por la distancia o porque exista peligro de fuga, no existe ninguna otra disposición normativa sobre el particular; sin embargo, dichas carencias no deben constituir un obstáculo para que la justicia penal pueda cumplir su cometido, estas limitaciones y los problemas que se presenten en la realidad, a través de su aplicación práctica, deberán ser superadas con el esfuerzo conjunto de los jueces y la administración. Estamos de acuerdo que, de cara al futuro, las "audiencias virtuales" deben constituir la solución próxima al problema sanitario que atraviesa el país, pero esta solución debe reglamentarse para su óptimo y adecuado funcionamiento, mientras tanto será la praxis judicial quien nos oriente en la búsqueda de los medios que nos ofrece la tecnología para la solución de este problema. Teniendo en consideración todo ello, debe realizarse la convocatoria a las partes para el acto de juzgamiento mediante audiencia virtual, lo más pronto posible, según lo permita la agenda de la coordinación de audiencias en consonancia con la agenda del área informática. Asimismo, para la comparecencia de las partes deben agotarse todos los medios posibles (notificación a casilla electrónica, correo electrónico, teléfono celular, etc) para su emplazamiento y para asegurar su presencia "virtual" a la instalación de juicio oral. Debe cursarse la comunicación al INPE para el traslado del reo a la sala de videoconferencias del penal y además para que se le brinden todas las facilidades para que pueda comunicarse previamente con su defensa vía telefónica o por cualquier otro medio y que inclusive –si su reglamento lo permite- se le proporcione un teléfono celular durante la realización del juicio para que pueda conversar privadamente con su defensa.

Por otro lado la resolución Administrativa Nro. 000328-2020-P-CSJAR-PJ de fecha 31 de agosto del 2020, dispone el reinicio del cómputo de los plazos procesales a partir del primero de setiembre de 2020.

SEGUNDO.- El Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República establece que, por interpretación sistemática y teleológica de las normas del Código Procesal Penal, corresponde al Juzgado Penal Unipersonal o Colegiado, citar a los testigos y peritos para su comparecencia al Juicio Oral; es así, que el Juzgado Colegiado Supraprovincial Penal Permanente de Arequipa, ha venido citando a todos los referidos órganos de prueba, a la misma hora de inicio del Juicio Oral, ello al no contar con mayor información o criterio para establecer el orden de su participación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que corresponde a los sujetos procesales precisar el momento de la participación del órgano de prueba que ha ofrecido, en armonía a su estrategia de defensa o incriminación, según corresponda, conforme lo establece el artículo 375°, numeral 2, del Código Procesal Penal, que señala: "2. El Juez Penal, escuchando a las partes, decidirá el orden en que deben actuarse las declaraciones de los imputados, si fueran varios, y de los medios de prueba". Luego, la práctica Judicial (Principio de la Realidad), nos presenta, en la mayoría de casos concretos, que todos los órganos de prueba citados por el Poder Judicial a la hora de inicio programada para el juicio oral concurren a la misma hora, exigiendo su participación en dicho momento al Tribunal; la mayoría de ellos son servidores o funcionarios públicos (policías, peritos del Ministerio Público, peritos de la DIVINCRI, peritos institucionales, etc.) quienes dejan de lado las actividades propias de su función (funcionarios o servidores públicos) para cumplir con un deber legal (prestar testimonio), este deber justifica la pérdida de horas hombre de trabajo para alcanzar el valor justicia; empero, cuando las horas pasan y no son

llamados a declarar, cuando se frustran las audiencias por inasistencia de las partes (fiscal, abogados defensores, acusados) en más de una oportunidad, no solo se perjudica la administración pública, a los trabajadores y empleadores, sino sobre todo la imagen institucional de un Poder Judicial mostrándolo inoperante e ineficaz. Por otro lado, en estos casos concretos, la aplicación de los apremios a los órganos de prueba (conducción compulsiva) no logran en la mayoría de los casos su objetivo de hacerlos comparecer a prestar testimonio, lo que al final hacen fracasar la hipótesis de alguna de las partes. Asimismo, se tiene que en la mayoría de los casos, las partes procesales, en audiencia de juicio oral llegan a convenciones probatorias, prescindiendo la participación de órganos de prueba que ya fueron citados, deviniendo en innecesaria su asistencia, lo que igualmente genera malestar e incomodidad en éstos. La incertidumbre de conocer ex ante el orden y tiempo que debe merecer el examen de cada órgano de prueba personal (hecho de la realidad) no puede subsumirse con los supuestos de hecho de las normas interpretadas sistemática y teleológicamente por la Corte Suprema, no se puede hacer comparecer a una persona solo por el hecho de hacerlo comparecer. En efecto, las normas interpretadas se han realizado abstractamente sin verificar estos hechos objetivos de la realidad. Toda "regla" como conjunto de proposiciones fácticas-lingüísticas solo cobran sentido material si se condicen con la realidad, pues ellas no son un fin en sí mismo. La finalidad del juzgamiento de los hechos, que conforman el objeto del proceso penal, es verificar las afirmaciones (proposiciones fácticas) hechas por las partes a través de la actuación probatoria. El espíritu del nuevo proceso penal es dejar en la historia la dilación y demora del juicio oral en el proceso inquisitivo (la citación de los órganos de prueba por parte del órgano judicial generaba dilaciones innecesarias –sucesivas realizaciones de audiencias que llegaban a demorar inclusive años- atentando contra el plazo razonable). La finalidad buscada por el legislador, al adoptar un nuevo modelo procesal penal, es solucionar un conflicto de interés (Estado vs. Imputado, y otros) en el menor tiempo posible y con el menor desgaste de las instituciones comprometidas con la impartición de Justicia, el fin último es lograr una paz social oportuna y eficaz en justicia, ella solo podrá alcanzarse adoptando decisiones que se dirijan a lograr dicho cometido. Dicho esto, y de acuerdo al principio acusatorio –que determina los roles que han de cumplir cada uno de los sujetos del proceso- quien afirme un hecho deberá probarlo de acuerdo a su estrategia acusatoria o defensiva, de allí que sean las partes quienes deben preparar y hacer comparecer a sus órganos de prueba. El juzgamiento célere y eficaz, que solo se logra cuando se acrediten los hechos expuestos por las partes en la menor cantidad de actos procesales, es un reclamo a viva voz de la sociedad, dada la inseguridad ciudadana que vive el país. El Tribunal, debe velar por la eficiencia y eficacia de la etapa de juzgamiento, aplicando los principios del juicio (artículo 356° del Código Procesal Penal), que son el de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria, que solo se logra con la debida participación de los órganos de prueba aportados por las partes procesales; asimismo, se debe garantizar los principios de continuidad del juzgamiento y de concentración de los actos del juicio; los mismos que están por encima de la interpretación sistemática y teleológica efectuada en el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116, cuyo sustento finalmente es solo identificar a quien corresponde citar a testigos y peritos según la interpretación de normas, sustento que no es de recibo por este Tribunal, debiendo considerarse además que desde la vigencia del referido acuerdo plenario, la mayoría de los órganos de prueba vienen a juicio sin ninguna preparación, contestando a la mayoría de las preguntas que no recuerdan, siendo muchas veces inútil su declaración, lo cual refuerza la necesidad de que la citación a los órganos de prueba la hagan las partes, para que tengan la oportunidad de preparar a los mismos en forma adecuada; sólo éste juzgado de manera excepcional y por motivos justificados realizará la citación de la prueba personal a pedido de parte. Fundamentos por los que nos desvinculamos de los principios jurisprudenciales establecidos en éste Acuerdo Plenario, al amparo de lo previsto por el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de aplicación extensiva a los Acuerdos Plenarios; y, efectuando una interpretación teleológica, a los fines del juicio oral, del artículo 355°, numeral 5, del Código Procesal Penal. En ese sentido, debe requerirse al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales, citar a sus testigos y peritos ofrecidos como órganos de prueba, debiendo presentarlos en juicio oral, en el orden y momento que interese a sus estrategias y acorde a sus pretensiones.

TERCERO.- El acusado **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA** y **ADRIAN ALEXANDER CACALLICA PUMACOTA** ambos se encuentran con la medida de comparecencia con restricciones.

CUARTO.- Corresponde observar lo dispuesto en el artículo 136° del CPP, "el Juez ordenará formar el respectivo expediente judicial...". Este expediente judicial debe formarse exclusivamente con los actuados, actos procesales de incoación del proceso y resoluciones jurisdiccionales, señalados en dicho dispositivo normativo.

En ese sentido debe formarse el Expediente Judicial, que comprende: el Expediente Judicial para la Prueba, formado con los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, así como los medios de prueba admitidos en la audiencia de juicio, además, donde se incorporará las actas, informes y declaraciones previas, vinculados con el órgano de prueba previamente admitidos (incluyendo las notificaciones efectuadas, a nivel fiscal); y, el Expediente Judicial para el Debate, formado, además del requerimiento acusatorio, con el auto de enjuiciamiento, el auto de citación a juicio oral, las actas de registro de audiencias, las resoluciones escritas dictadas en el desarrollo del juicio y la sentencia, así como sus respectivas notificaciones, citaciones y comunicaciones. Todo ello, conforme a lo previsto por el Artículo 87°, numeral 2, literales a) y b) del Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, aprobado por R.A. 014-2017-CE-PJ.

QUINTO.- Por lo que, a efecto de formar el expediente judicial; se dispone, **requerir** al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, según corresponda, para que dentro del plazo de 5 días, remitan la prueba admitida en el auto de Enjuiciamiento así como todos los documentos a utilizarse en los debates orales, bajo apercibimiento para el Ministerio Público de informarse al órgano de control de su institución, sin perjuicio de la medida disciplinaria idónea a imponerse por el Juzgado Colegiado y para los demás sujetos procesales la imposición de la medida disciplinaria de multa equivalente a dos unidades de referencia procesal; y, una vez formado el mismo, póngase a disposición de las partes por el plazo de 5 días.

De otro lado, debe devolverse al Ministerio Público, todos los demás cuadernos que no sean útiles para la formación del expediente judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 137°, numeral 3 del Código Procesal Penal, debiendo quedar en custodia del Especialista de Causas solo el Expediente Judicial, según lo previsto por el artículo 23°, numeral 6, concordado con el artículo 87°, numeral 2, del indicado Reglamento del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes Superiores de Justicia de la República, aprobado por R.A. 014-2017-CE-PJ.

En mérito a todo ello, se hace necesario fijar como fecha de juicio un plazo razonable para no perjudicar el derecho de defensa de los sujetos procesales, y, en consideración a la existencia de otros juicios orales programados.

SEXTO: En mérito a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ de fecha 25 de junio del 2020 sobre el Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales durante el Período de Emergencia Sanitaria es necesario programar la realización de una audiencia de preparación previa a la audiencia virtual con la finalidad de verificar la factibilidad y compatibilidad técnica a fin de evitar fallas antes del inicio de la audiencia, la que se llevará a cabo a través de la Plataforma Virtual Google Meet, brindada por el Poder Judicial, en donde se verificará la disposición de los equipos tecnológicos a usar y/o los inconvenientes de conexión en caso de haberlos, así como la necesidad de salas privadas para conferenciar, entre otros aspectos destinados al desarrollo óptimo de la audiencia de Juicio Oral.

III.- PARTE RESOLUTIVA

Por lo que **RESOLVEMOS:**

PRIMERO.- CITAR A JUICIO a:

- a) Acusado: **BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA**
ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO
- b) Agraviado: Diego Quenta Lima
- c) Testigos: Declaración de Roger José Cutipa Cristóbal.
Declaración Jorge Alberto Mostajo Rivera.
Declaración de Diego Quenta Lima.
Referencial del menor Cristian Merma Zeballos.
Declaración de ST1 PNP Wilber Arenas Chávez.
- d) Peritos: Examen del Médico Legista Patricia Paz Canedo.
Examen pericial del químico farmacéutico Manuel Mancilla Ventura

SEGUNDO.- PROGRAMAR LA AUDIENCIA DE PREPARACIÓN PREVIA A LA AUDIENCIA VIRTUAL PARA EL 19 DE ENERO DE 2021 A LAS 09:30 HORAS HASTA LAS 09:40 HORAS, la que se llevará a cabo con el especialista de audiencias a cargo.

TERCERO.- SEÑALAR para la audiencia de juicio oral, el día **19 DE ENERO DE 2021 A LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 10:15 HORAS**, en la **SALA DE AUDIENCIAS NÚMERO 10 DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**, ubicada en Plaza España s/n en el segundo piso del nuevo edificio ecológico, debiendo el auxiliar de justicia cumplir con efectuar las notificaciones oportunamente y conforme a lo establecido en la normatividad procesal penal vigente, mediante el aplicativo de **GOOGLEMEET**, debiendo las partes para tal efecto **hacer conocer a este Juzgado sus respectivos correos electrónicos en la cuenta GMAIL así como sus NÚMEROS TELEFÓNICOS**; sin perjuicio de ello **SE REMITE EL ENLACE CORRESPONDIENTE**, el cual es: meet.google.com/qob-qunb-gus a través del cual las partes podrán ingresar a la Sala de Audiencia.

CUARTO.- ORDENAR el emplazamiento para concurrir a la audiencia de juicio, a todas las personas señaladas en el primer punto de la parte resolutive, bajo los siguientes apercibimientos: **i)** Para los acusados, ser declarado contumaz, disponerse el archivo provisional de la causa y girarse órdenes de captura en su contra; **ii)** para los testigos y peritos, de ser conducidos compulsivamente por la fuerza pública en caso de inasistencia; **iii)** para el actor civil, de tener por abandonada su condición, en caso de su inasistencia; **iv)** para el representante del Ministerio Público, de comunicarse al órgano de control de su institución su inasistencia.

QUINTO.- DISPONEMOS DESVINCULARNOS de los principios jurisprudenciales establecidos en el Acuerdo Plenario N° 5-2012/CJ-116 de la Corte Suprema de Justicia de la República, al amparo de lo previsto por el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de aplicación extensiva a los Acuerdos Plenarios. Por lo que **SE REQUIERE** al Ministerio Público y los demás sujetos procesales, citar a sus testigos y peritos admitidos como órganos de prueba, debiendo dar cuenta en audiencia del cumplimiento de las citaciones, para efectivizar los apercibimientos prevenidos, de ser el caso.

SEXTO.- CITAR al abogado **Samuel Laura Maquera** como defensor del acusado Billy Paul Mamani Pumacota, bajo apercibimiento de imponerle al citado profesional multa equivalente a dos unidades de referencia procesal, sin perjuicio de comunicarse la sanción a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa

y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su conocimiento, en atención a las facultades concedidas al órgano jurisdiccional, conforme a los artículos 08 y 09 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, en caso de inasistencia de los referidos abogados, al tratarse de una audiencia con carácter de inaplazable, será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por un defensor público, quienes asistirán debidamente preparados para llevarse adelante la audiencia de juicio oral, conforme a lo previsto por el artículo 85.1° del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo N° 1307.

SEPTIMO.- CITAR al abogado **Joey Ramírez Silva**, como defensor del acusado Adrián Cacallica Osorio; bajo apercibimiento de excluirse de la defensa y designarse en ese acto otro abogado defensor de oficio, además de informar al Ministerio de Justicia su inasistencia, al tratarse de una audiencia con carácter de inaplazable, conforme a lo previsto por el artículo 85.1° del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo N° 1307.

OCTAVO.- FORMAR el Expediente Judicial, conforme a lo desarrollado en el cuarto considerando.

NOVENO: PONER el citado Expediente Judicial, una vez formado, en secretaría, a disposición del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales por el plazo de cinco días, para los fines previstos en el artículo 137 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal. **REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE.-**

MEDINA TEJADA
PASTOR CUBA
CHURATA QUISPE



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
 AREQUIPA - Sistema de
 Notificaciones Electrónicas SINOE
 PALACIO DE JUSTICIA,
 Secretario MANCCO PONCE
 Manuel Anthony FAU 20456310259
 soft
 Fecha: 14/10/2021 09:44:47 Razon:
 RESOLUCION
 JUDICIAL D. Judicial: AREQUIPA
 AREQUIPA FIRMA DIGITAL

1 JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 07602-2019-86-0401-JR-PE-01
JUECES : RONALD MEDINA TEJADA
 GUIULIANA PASTOR CUBA
 JUAN CARLOS CHURATA QUISPE (*)
ESPECIALISTA : KARINA MAYTA AGUILAR
IMPUTADO : ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO
DELITO : ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO : DIEGO QQUENTA LIMA

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa integrado por los señores Magistrados Ronald Medina Tejada, quien preside el Colegiado, Guiuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe, quien actúa como Director de Debates y Ponente, luego de escuchar sobre los acuerdos entre el acusado, su defensa y el Ministerio Público, quienes han solicitado una conclusión anticipada del proceso, emiten la presente sentencia condenatoria en el expediente N° 07602-2019, seguido en contra de Adrian Alexander Cacallica Osorio por el delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, previsto en el artículo 188°, en concordancia con los numerales 02 y 04 del artículo 189° del Código Penal, en agravio de Diego Qquenta Lima.

S E N T E N C I A N° 107 - 2021 - 1JPCSP

Resolución N° 5

Arequipa, cinco de octubre
 De dos mil veintiuno.-

I.- Parte Expositiva:

Primero.- Identificación del Proceso: La audiencia se ha desarrollado ante el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente, integrado por los señores Magistrados Ronald Medina Tejada, quien preside el Colegiado, Guiuliana Pastor Cuba y Juan Carlos Churata Quispe, quien actúa como Director de Debates y Ponente, en el proceso número 07602-2019, seguido en contra de Adrian Alexander Cacallica Osorio por el delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, previsto en el artículo 188°, en concordancia con los numerales 02 y 04 del artículo 189° del Código Penal, en agravio de Diego Qquenta Lima.

Segundo.- Identificación del acusado:

ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO, identificado con DNI N° 77576003, de sexo masculino, nacido el 18 de febrero de 1998, de veintitrés años de edad, estado civil soltero, hijo de Alejandro y Crisálida, natural de Arequipa y con domicilio real en comité 24, manzana L, lote 15, Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa. Actualmente interno en el penal de varones de Socabaya.

Tercero.- Pretensión del Ministerio Público:

3.1 Enunciación de los Hechos y Circunstancias Objeto de la Acusación: El Ministerio Público, sustenta su acusación con los siguientes hechos:

"HECHOS PRECEDENTES: se tiene que con fecha 19 de julio del año 2019, siendo las 21.30 horas aproximadamente, las personas de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA (20 AÑOS) Y ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO (21 AÑOS), además del menor CRISTIAN MERMA

ZEBALLOS (16 AÑOS), se encontraban tomando licor, por inmediaciones de la avenida Miguel Grau, distrito de Paucarpata, donde se genera una gresca, de la que incluso la persona de ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO resulto herido como consecuencia del impacto de una piedra en la cabeza, por lo que corren de este lugar, siendo que al no tener dinero, divisan al agraviado a quien deciden sustraer sus pertenencias.

HECHOS CONCOMITANTES: es el caso, que el agraviado DIEGO QUENTA LIMA se encontraba caminando rumbo a su domicilio por la avenida Olímpica del PPJJ Miguel Grau, Paucarpata, siendo que al llegar a al altura del estado Miguel Grau, se percata de la presencia de estos tres sujetos desconocidos, quienes estaban en dirección opuesta, se le acercan y uno de ellos, la persona de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA lo sujeta por el cuello haciéndolo caer al suelo y los otros dos sujetos, las personas de ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO y el menor CRISTIAN MERMA ZEBALLOS se fueron encima suyo, lo sujetan contra el suelo, aplastándole la cabeza mientras que la persona de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA le rebuscaba los bolsillos, del bolsillo de su pantalón le sustrajo la suma de s/. 130.00 soles, dinero del trabajo del día, le arranco el morral de color azul, donde tenía la suma de s/ 40.00 soles, además de un menú en su táper y comida para gatos; mientras seguía siendo sujetado por ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO y el menor CRISTIAN MERMA ZEBALLOS, la persona de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA le decía "este es mi barrio y no te muevas porque te vamos a matar", mientras que lo golpeaba con puño y patadas, llegando a patear su rostro, ocasionándole una herida en la ceja, lado izquierdo y es cuando el agraviado reacciona y se escapa mientras que los tres sujetos se quedaron en el lugar

HECHOS POSTERIORES: Finalmente, el agraviado corrió una cuadra, donde ubico a los serenos del municipio de Paucarpata, haciéndolo subir a una camioneta y emprenden la búsqueda de los tres sujetos, es allí donde logran ubicar a la persona de ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO, quien es intervenido, subiéndolo a la móvil, los otros dos sujetos, comenzaron a correr, mientras iban botando las cosas del agraviado; mochila y otros enseres, por lo que solicitan los serenos otras unidades de apoyo, quienes finalmente capturaron a las personas de BILLY PAUL MAMANI PUMACOTA Y AL MENOR CRISTIAN MERMA ZEBALLOS, para posteriormente efectuar los serenos el recojo de las pertenencias del agraviado, logrando recuperar su bolso morral, una bolsa de plástico de color blanco conteniendo comida para gato y dos rollos de papel higiénico."

3.2. Pretensión Penal y Civil: La Fiscalía considera que los hechos materia de acusación se encuadran en el tipo penal del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado en grado de tentativa, previsto en el artículo 188°, en concordancia con los numerales 02 y 04 del artículo 189° del Código Penal, a su vez concordados con el artículo 16° del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, solicita la imposición de NUEVE AÑOS Y SEIS MESES DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. De otro lado, como reparación civil, el Ministerio Público solicitó el monto de s/. 800.00 (ochocientos soles con 00/100 soles) a favor de la parte agraviada.

Cuarto.- Pretensión de la defensa del acusado:

En la audiencia de ley, el acusado ha indicado que acepta los cargos que se le imputan, así como su responsabilidad civil.

Quinto.- Itinerario del Proceso:

Al inicio del Juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos y al preguntársele si admite ser autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil, este, previa consulta con su abogado defensor, respondió en sentido positivo y se declaró confeso en la totalidad de los cargos que le imputó el Ministerio Público, lo que el Juzgado Colegiado considera prueba válida de cargo de la responsabilidad penal con entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste. Suspendida la sesión por breves minutos para que la defensa del acusado y el fiscal puedan llegar a un acuerdo, en cuanto a la pena y la reparación civil, se reanudó la misma y señalaron las partes que habían convenido en lo siguiente: tomando en cuenta el relato fáctico

postulado por el Ministerio Público, se recalificó el delito aludiendo al grado de tentativa, lo que genera un nuevo marco punitivo de entre seis a doce años; siendo así se ubican en el extremo inferior, esto es, seis años de pena. Posteriormente, con el beneficio de la conclusión anticipada del proceso, se procedió a la reducción de diez meses, quedando la pena en cinco años y dos meses. Finalmente, haciendo alusión al principio de proporcionalidad, se solicitó la reducción de catorce meses adicionales dado que el acusado al momento de los hechos se encontraba en estado de ebriedad, conforme lo señala el Dictamen Pericial 2019-002016159 con 0.95 gramos de alcohol por litro de sangre. Siendo así la pena final se reduce a cuatro años de pena privativa de la libertad, la misma que se convierte en 208 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. En cuanto al monto de la reparación civil, este se encuentra cancelado en su totalidad, como ha sido señalado por las partes mediante cupón judicial N° 2020010901141.

II.- PARTE CONSIDERATIVA:

Primero. - El artículo 372° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencias vinculantes, tales como: el *Acuerdo Plenario No. 05-2008/CJ-116* del dieciocho de julio del dos mil ocho; la *Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 1766-2004/Callao* del veintiuno de setiembre del dos mil cuatro y la *Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 2206-2005/Ayacucho*, del doce de julio del dos mil cinco; y, recientemente, por el *Acuerdo Plenario* del trece de noviembre del dos mil nueve. La institución de la “conformidad” se sustenta en el reconocimiento del principio de adhesión del acusado en el proceso penal, en el momento del inicio del juicio oral, aunque con sus propias singularidades, para la inmediata culminación del juicio oral, a través de un acto unilateral del acusado y su defensa de reconocer los hechos objeto de la imputación fiscal, y en su caso, aceptar las consecuencias jurídico penales y civiles correspondientes. A mayor abundamiento, la “conformidad premiada”, se presenta cuando el acusado, por sí, o a través de su abogado, solicita previamente conferenciar con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena; lo que importa una doble garantía, que implica una renuncia a la actuación de pruebas en juicio público, constituyendo un acto de disposición del propio proceso, conviniendo en la expedición de una sentencia condenatoria en su contra.

Segundo.- El acusado, en audiencia, al expresar su “conformidad” aceptó los hechos objeto de acusación, previa consulta con su abogado defensor, actuando con plena libertad voluntad y racionalidad, sin limitaciones de sus capacidades intelectivas, y conocedor de sus derechos, deviniendo su reconocimiento en una declaración judicial de culpabilidad, con la consiguiente imposición de una sanción penal y reparación civil, por lo que, este Juzgado Colegiado no puede mencionar, interpretar y valorar actos de investigación o de prueba pre constituida alguna, desde que el acusado con su “conformidad”, renunció expresamente a su derecho a la presunción de inocencia, como a la exigencia de prueba de cargo de la acusación y a un juicio contradictorio; por lo que, los fundamentos de hecho o juicio histórico de la sentencia, no se forman como resultado de valoración de la prueba, sino que le vienen impuestos al Juzgado Colegiado por la acusación y la defensa, a través de un acto de allanamiento de ésta última, que son vinculantes al Juzgado y a las partes; por lo que, en éste orden de ideas, el Juzgado Colegiado no puede agregar ni reducir los hechos y circunstancias que han sido imputados por el Fiscal, y aceptados por el acusado y su abogado defensor en audiencia; ya que, ello implicaría revisar y valorar actos de aportación de hechos, que son excluidos por la propia naturaleza de la “conformidad procesal”.

Tercero.- No obstante, la presencia del Juzgador no es pasiva, para efectos de la homologación de la “conformidad”, ya que existe cierto margen de valoración que el Juez debe ejercer

soberanamente; pues, si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación -vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico-, por razones de legalidad y justicia puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

Cuarto. - El delito de robo agravado se encuentra previsto en el artículo 188°, con las agravantes previstas en los incisos 02 y 04 del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal. Este delito requiere como elementos tipificantes: que el agente, mediando dolo en su actuar, durante la noche y con el concurso de dos o más personas, se apodere ilegítimamente de un bien ajeno, utilizando para ello violencia o amenaza en contra de la víctima.

Quinto.- Juicio de tipicidad.- La conducta desplegada por el acusado se adecúa, objetiva y subjetivamente al tipo penal antes referido, pues tal como han sido expuestos los hechos –los cuales son inmodificables- el día 19 de julio del 2019, el agraviado DIEGO QQUENTA LIMA caminaba con dirección a su domicilio cuando la persona de BILLY MAMANI PUMACOTA lo sujeta por el cuello haciéndolo caer al suelo mientras que ADRIAN CACALLICA OSORIO y CRISTIAN MERMA ZEBALLOS se fueron encima suyo, lo sujetan contra el suelo, aplastándole la cabeza, y el BILLY MAMANI PUMACOTA le rebusca los bolsillos sustrayendo s/. 130.00 soles de sus bolsillos, le arrancó su morral de color azul, donde tenía la suma de s/. 400.00 soles, siendo agredido físicamente con golpes de puños y patadas. Descritos así los hechos, se adecuando plenamente al tipo penal antes referido.

Sexto. - Juicio de antijuridicidad y culpabilidad: No se ha alegado ni se ha probado causa que justifique el actuar típico del acusado y tampoco se ha probado causa que excluya su culpabilidad.

Séptimo. - Individualización de la Pena:

7.1.- Para la determinación de la pena debe tomarse en cuenta los criterios fundamentadores de la pena establecidos en los artículos 45, 45°-A, y 46 del Código Penal.

7.2.- El delito de robo agravado previsto en el artículo 188°, en concordancia con los incisos 02 y 04 del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal, vigente al momento de los hechos, prevé una pena no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de la libertad.

7.3.- Determinación de la pena concreta en el sistema de tercios:

7.3.1.- Del grado de comisión del delito:

7.3.1.1. En el presente caso, concurre una **circunstancia atenuante privilegiada** pues debido a la intervención policial, el delito no pudo ser consumado, es decir, quedó en grado de tentativa, por lo que deberá efectuarse una disminución prudencial de la pena. En ese sentido, corresponde establecerse un nuevo marco punitivo, por debajo del tercio inferior, tal como lo establece el artículo 45°-A del Código Penal, numeral 3: *“Cuando concurren circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera: a) **Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior.**”*

7.3.1.2.- Respecto a definir cuánto es una reducción “prudencial”, se reliva lo analizado por el profesor Víctor Prado Saldarriaga¹ quien dice: *“[...] cabe anotar que en derecho penal comparado la presencia de estas causales de disminución o incremento de punibilidad dan lugar a la confirmación nominal de escalas*

¹ Prado Saldarriaga, Víctor. “Determinación Judicial de la Pena”. Pacífico Editores SAC. 1era. Edición, Lima 2015. Pág. 61.

tasadas o porcentuales, pero siempre especiales, de punibilidad. Este es el caso ya mencionado de la tentativa en el derecho penal colombiano, o de las eximentes imperfectas del derecho penal español. En cambio, en la legislación peruana solo se alude a una disminución discrecional y razonables ("prudencialmente") de la penalidad conminada para el delito, pero que siempre deberá operar por debajo de su extremo inicial ("hasta límites inferiores al mínimo legal") y cuyo límite final, en principio, la pena concreta, que fije el órgano jurisdiccional de modo excepcional, pero observando la proporcionalidad adecuada al caso".

7.3.1.3.- Asumiendo la perspectiva anterior, y siendo temporal la pena, la tentativa implica necesariamente que la pena debe operar por debajo del mínimo legal, siendo que el Código Penal precisa reducción por debajo del mínimo legal antes atenuantes privilegiadas pero ella ni la norma procesal precisa cuanto y cuáles son estas, ante ello el Juzgado ha venido considerando -ratificado por la judicatura Nacional² y la Corte Suprema³-, que la tentativa, la eximente incompleta de alteración de la conciencia -por estado de ebriedad-, la responsabilidad restringida -según el delito- y la complicidad secundaria, entre otros, **tienen un valor equivalente a una atenuante privilegiada**; en tal sentido, al no existir previsión legal sobre el quantum de rebaja de pena ante circunstancias que modifican la punibilidad, corresponde efectuar una interpretación sistemática y normativa; entonces si ante una agravante cualificada el Código Penal precisa el incremento hasta en una mitad por encima de la pena conminada, ergo, ante una atenuante privilegiada, es posible efectuar una reducción de hasta por una mitad por debajo de la pena conminada, la misma que no resulta desproporcional ni irrazonable, por cuanto se atiende al menor injusto penal o culpabilidad.

7.3.1.4.- Es así que, con el objeto de aplicar una pena merecida ante la presencia de circunstancias privilegiadas atenuantes, debe construirse un nuevo marco punitivo. Ello se posibilita reduciendo prudencialmente el plazo fijado por la ley para el delito (doce años); así las cosas, se procede a fijar un nuevo margen punitivo que va entre los seis a los doce años; dado que el acusado no cuenta con antecedentes penales ni concurre ninguna otra circunstancia agravante, la pena concreta a imponerse en el presente caso será seis años de pena privativa de la libertad.

7.3.2.- De la reducción por el Proceso de Conformidad: posteriormente, partiendo de los siete años de pena privativa de la libertad, corresponde realizar la reducción del sétimo por el beneficio premial de la conclusión anticipada, equivalente a diez meses; por lo que queda como resultado cinco años y dos meses de pena privativa de la libertad.

7.3.3.- De la aplicación del Principio de Proporcionalidad: Finalmente, en base al principio de proporcionalidad el Ministerio Público solicitó una reducción adicional de un año y dos meses en virtud de los siguientes puntos: a) que se cumplió con el pago integral del monto solicitado por concepto de Reparación civil; y, b) el acusado al momento de los hechos se encontraba en estado de ebriedad, conforme se tiene de los elementos de convicción detallados por el Ministerio Público, en particular el Dictamen Pericial N° 2019-002016159 en el que se indica que el acusado contaba con 0.95 gramos de alcohol por litro de sangre. Teniendo en cuenta los argumentos esbozados por las partes, el Juzgado considera también pertinente mencionar que el sistema penal debe ofrecer al

² El Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal - Moquegua 2017 precisa que: "si existen atenuantes privilegiadas en nuestra legislación y efectivamente, las mismas facultan a los jueces la posibilidad de imponer pena por debajo del mínimo legal o abstracto previsto por el legislador. No obstante, pese a no existir límites previstos por el legislador, es viable establecerlos (por una interpretación sistemática y teleológica) a nivel jurisprudencial.

³ La Casación 336-2016 Cajamarca (f. 6.6 y 6.12) y el Recurso de Nulidad N° 3283-2015 Junín (f. QUINTO y NOVENO), reconocen existencia de atenuantes privilegiadas, como la responsabilidad restringida por edad y la tentativa.

procesado la posibilidad de reparar el daño ocasionado por propia voluntad, para que pueda obtener de esa forma ciertos beneficios materiales y formales.

7.3.3.1.- Para sustentar nuestra posición, resulta importante destacar la propuesta dogmática introducida por Claus Roxin quien propone una «Tercera Vía» dentro del derecho penal, que estaría referida a la reparación voluntaria del daño causado por el delincuente. Al respecto, precisa que con esta reparación: “se sirve más a los intereses de las víctimas, que con una pena privativa de la libertad o de multa, que a menudo realmente frustran una reparación del daño por el autor”. Continúa explicando que en aquellos casos que se castigan con una pequeña multa, el pago total del daño podría permitir prescindir de la pena, y en el caso de delitos más graves el pago íntegro de este monto puede originar una remisión condicional de la pena o una atenuación obligatoria de la pena. Esta postura, ha sido adoptada por autores peruanos; como García Caveró, Felipe Villavicencio Terreros, Julio Rodríguez, entre muchos otros. Este último autor, incluso señala que se deben buscar aplicar todas las otras posibilidades antes de pensar en la solución punitiva; este planteamiento, es a todas luces correcto, pues no debemos olvidar que el derecho penal debe ser considerado como ultima ratio; tampoco podemos ser indiferentes a la crisis actual que atraviesa la sanción punitiva por excelencia, la pena privativa de libertad; es por ello, que compartimos la postura que apuesta por la utilización de mecanismos alternos para la resolución de los conflictos penales. Al respecto, Von Hirsch, citado por Rodríguez, indica que: “en el sistema anglosajón, se aprecia cada vez más una aplicación de penas no privativas de libertad (las llamadas sanciones intermedias), en donde se potencia el uso de las multas o los días-multa, trabajo en beneficio de la comunidad, entre otras sanciones semejantes”. Así pues, la reparación civil podría configurarse como una de estas sanciones intermedias, pero no como una consecuencia accesoria de la privación de libertad, sino como una sanción penal autónoma.

7.3.3.2.- Para el Tribunal Constitucional Peruano la reparación discutida en la vía penal difiere en su naturaleza a la reparación discutida en la vía civil, por lo que es interesante esta aproximación dentro de una posición de un **derecho penal reparador**. El Tribunal Constitucional ha establecido que: “(...) *cumplir con resarcir los daños ocasionados por el delito no constituye una obligación de orden civil, sino que es una verdadera condición de la ejecución de la sanción penal*” (Caso Jorge Eduardo Reátegui Navarrete, Exp. N.º 2982-2003-HC/TC). (...). Así, se puede advertir que el Tribunal Constitucional hace una distinción entre ambos conceptos de reparación (penal y civil). La reparación civil como instituto, tiene una naturaleza jurídica distinta cuando es requerida en la vía penal y en la civil. La única manera de entender el criterio del Tribunal Constitucional es que la reparación cumple en la vía penal, **funciones preventivas generales de carácter positivo**, así como funciones de resocialización del delincuente, fines que vemos claramente reflejados en nuestro Código Penal.

7.3.3.3.- Este razonamiento, guarda correspondencia con lo expresado también por el Tribunal Constitucional en la sentencia N.º 7730-2005-PHC/ TC en el sentido siguiente: Como se sabe, el pago de la reparación civil es un requisito indispensable para la concesión de beneficios penitenciarios en determinados delitos; por tanto, el incumplimiento de este requisito impide que el sentenciado pueda acceder a alguno de ellos. Sin embargo, esta condición, ha sido objeto de observación por algunos sectores, pues afirman que tal exigencia carece de legalidad ya que constituiría una limitación a la libertad por una obligación pecuaria (prisión por deuda) Ante esta circunstancia, el Tribunal Constitucional ha señalado que dicho pago tendría más bien el carácter de un deber impuesto por el Juez Penal y que además debe tomarse en cuenta la necesidad de reparar

⁴ Roxin, C., (2010) *Derecho penal Parte General*, Tomo I, 5ª Ed, Madrid: Editorial Civitas

⁵ Rodríguez, J. *La reparación como tercera vía en el derecho penal*, Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal

los daños que se derivan como consecuencia de la comisión de delito; y, que tal exigencia no sólo resulta razonable y proporcional, sino también constitucionalmente legítima. Por lo tanto, el criterio adoptado por este Colegiado, de requerir el pago íntegro de la reparación civil, como requisito previo para poder aprobar los acuerdos de conformidad, resulta legítimo, toda vez que también se está preponderando la necesidad de reparar el daño causado a la víctima.

7.3.3.4- Como segundo punto, es importante destacar que: “en el aspecto preventivo especial, la reparación civil obedece a criterios tendientes a que el individuo infractor de la norma penal tome consciencia de su actuar ilícito y repare los daños generados al sujeto pasivo. Desde un criterio preventivo general, la reparación permite que la colectividad verifique el buen funcionamiento del sistema penal, y se genere así el efecto de fidelidad a la norma”⁶.

7.3.3.5.- Por su parte, la pena, desde un punto de vista preventivo general positivo, debe permitir reafirmar la expectativa de cumplimiento de la norma que ha sido vulnerada por el delito, pero no debe descuidar su mensaje preventivo general negativo; y para ello - tomando en cuenta la actual crisis del sistema penal, en especial de las penas privativas de la libertad- no es necesaria la imposición de penas desmesuradas o desproporcionadas, si es que se verifica, como ocurre en el presente caso, el resarcimiento de la víctima en su totalidad el daño causado, pues el agresor no solo voluntariamente ha decidido reparar el daño, sino que además ha recibido una sanción por su mal actuar.

7.3.3.6.- En el caso concreto, se ha cumplido con el pago íntegro de la reparación civil; todo ello en forma libre y voluntaria, revelado a través de este acto su propósito de corrección, enmienda y de respeto a la norma social vulnerada, es decir, de haber internalizado su conducta prohibida por voluntad propia. El Tribunal considera que en el caso concreto los propósitos de prevención general positiva y negativa se han visto cumplidos, no sólo porque se ratifica el mensaje de aprendizaje a la sociedad para evitar se cometan delitos de similar naturaleza ante la amenaza de imposición de una pena privativa de la libertad efectiva, sino y sobre todo -como una tercera vía del derecho penal- se envía un nuevo mensaje de amenaza de condena de pago de una reparación económica a favor de la víctima del delito. En efecto, se ha verificado que hasta ahora los fines de la pena privativa de la libertad y del pago de la reparación civil, como sanción derivada de un derecho penal reparador, se vienen cumpliendo; sin embargo, encontrándonos frente a un delito tan común en nuestros días como lo es el que nos ocupa, la sanción civil reparatoria debe coexistir con una pena privativa de la libertad efectiva.

7.4.- En base a todos los criterios fundamentadores que han sido desarrollados en el punto anterior, este Juzgado considera que la pena merecida que le corresponde al acusado será de **CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD con el carácter de efectiva.**

7.5. De la conversión a prestación de servicios a favor de la comunidad

7.5.1.- La Sala Penal Transitoria en el Recurso de Nulidad N° 607-2015 Lima Norte, fundamento sexto y séptimo ha precisado: “...cuando se imponen penas de corta duración, como la que tenemos en el presente caso, el ordenamiento jurídico penal vigente establece como sanciones alternativas a la pena privativa de la libertad, la aplicación de penas limitativas de derechos, las mismas que contribuirán a la resocialización del imputado y, sobre todo, permitirán la prestación de servicios a favor del Estado como retribución por el daño causado con la comisión del delito. En ese sentido, este Supremo Tribunal considera viable la conversión de la pena efectiva impuesta

⁶GALAIN PALERMO, P. (2005) ¿La reparación del daño como «tercera vía» punitiva? Especial consideración a la posición de Claus Roxin, Redur 3, Disponible en el sitio web: <http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/galain.pdf>

*por prestación de servicios a la comunidad; ello en virtud a que la sanción es de corta duración y el delito quedo en grado de tentativa; por ende, no hubo mayor afectación al bien jurídico protegido, las condiciones personales del agente; y, principalmente porque **este tipo de penas tienen mayor utilidad resocializadora que una pena efectiva** ⁷ (...) Séptimo: Al respecto, Valdir Szynick sostiene que a esta modalidad punitiva se le ha atribuido una alta potencialidad resocializadora y una escasa incidencia estigmatizadora.⁸*

7.5.2.- Siguiendo esa línea, este Tribunal considera que, en el caso analizado, la imposición de esta sanción alternativa permitirá privilegiar la reinserción social del acusado y a través de los trabajos prestados no solo se cumplirán los fines de la pena, también permitirá al acusado retribuir a favor del Estado el daño causado por el delito. Para ello debe verificarse que, en primer término, la pena impuesta no sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

7.5.3.- En segundo término, hay un requisito de carácter negativo que expresa la imposibilidad de poder aplicar la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio, concretamente para el órgano jurisdiccional; en ese entendido, lo primero que debe buscar aplicar el juez es la suspensión de la ejecución de la pena o la reserva del fallo condenatorio; si ninguna de las dos opciones calza en la posibilidad del caso concreto, entonces, si la pena no va a ser superior a cuatro años de reclusión, el Tribunal puede optar por la conversión de penas, lo que convierte a esta medida -como decíamos anteriormente- en una medida de carácter subsidiaria.

7.5.4.- En tercer término, debe considerarse que el acusado ha reconocido los hechos y ha reparado el daño causado de su conducta ilícita haciendo pago de la Reparación Civil; en ese sentido, este Despacho, considera prudente la aplicación de penas privativas de libertad de corta o mediana duración efectivas convertibles, y de esta manera, mostrar a la sociedad que el condenado puede restituir a través de su esfuerzo y trabajo el daño que generó, y con ello mostrar voluntad de enmienda e inserción más directa a su entorno social; por lo que, corresponde aprobar la conversión de pena propuesta por la fiscalía y el abogado defensor del acusado, a razón de siete días de pena privativa de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad. Por lo que, al hacer un cálculo matemático, los cuatro años de pena privativa de libertad efectiva equivalen a **208 jornadas de prestación de servicios**; las mismas que se ejecutarán en la institución que determine el Instituto Nacional Penitenciario. En caso de incumplimiento injustificado, de una sola jornada de ocho horas de prestación de servicios a la comunidad o en caso de abandono de la jornada laboral, se revocará la conversión de la pena y se dispondrá el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad acordada entre las partes en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Código Penal⁹.

7.5.5.- En suma, dicha conversión de pena, a criterio del Tribunal, permitirá al sentenciado corregirse de la conducta prohibida, siendo que una pena efectiva -en atención al Principio de Realidad- no haría más que tornar más peligrosa la personalidad del agente, siendo que esta medida cumplirá con los fines preventivo y especial de la pena, no solo para la sentenciada, sino como un mensaje a los demás ciudadanos, que en el caso de cometer un delito sabrán a cabalidad que consecuencia jurídica les espera.

⁷ El subrayado es nuestro.

⁸ Recurso de Nulidad N° 607 205 Lima Norte, cuatro de mayo de 2016. P. 3-4

⁹ Revocación de la conversión: "Artículo 53.- Si el condenado no cumple, injustificadamente, con el pago de la multa o la prestación del servicio asignado a la jornada de limitación de días libres, la conversión será revocada, previo apercibimiento judicial, debiendo ejecutarse la pena privativa de libertad fijada en la sentencia. Revocada la conversión, la pena cumplida con anterioridad será descontada de acuerdo con las equivalencias siguientes: 1. Un día de multa por cada día de privación de libertad; o 2. Una jornada de servicio a la comunidad o una de limitación de días libres por cada siete días de pena privativa de libertad".

Octavo. - Fijación de la Reparación Civil:

8.1.- En cuanto a la reparación civil, para los efectos de la fijación de su monto debe estarse a lo dispuesto por el artículo 93° del Código Penal, se tiene en consideración que en autos se ha determinado en “*quantum*” de los daños y perjuicios irrogados, por lo que los mismos deben regularse con criterio de equidad y prudencia. Que para fijar la reparación civil se tiene en cuenta lo establecido en el artículo 93° y 101° del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 1332 del Código Civil.

8.2.- La Responsabilidad Civil es una obligación de reponer al afectado en una situación igual o similar al que se encontraba antes de que se produzca el daño; es decir, es la obligación de reparar –*indemnizar*– un daño. La pretensión de indemnización de daños, es una pretensión de carácter civil en el que las partes son el obligado y el afectado y se encuentra regulado fundamentalmente por normas contenidas en el Código Civil y las pertinentes del Código Penal. Por otro lado, en cuanto a la reparación, ésta puede consistir en: **a)** reparación natural o *in natura*, en la que se reintegra el bien al patrimonio del agraviado, **b)** reparación por equivalente, en la que se compensa el daño con un valor que reequilibre el patrimonio afectado (ambas formas de reparar son para daños patrimoniales), y **c)** compensación, que opera frente a daños extra patrimoniales en las que no es posible reparar por equivalente –por la naturaleza del bien afectado–, sino el pago de un monto por la afección de bienes extra patrimoniales, cumple una función de “*satisfacción consolatoria*”.

8.3.- En el caso de autos, la Fiscalía solicitó el pago de s/. 800.00 (ochocientos con 00/100 soles) a favor de la parte agraviada, monto que conforme informaron las partes fue previamente cancelado. Esta circunstancia alegada se tiene del proceso de conformidad arribado por su coimputado Billy Paul Mamani Pumacota, en el se ingresó el cupón judicial N° 2020010901141 por el monto total solicitado. Sin perjuicio de ello y en vista de que no consta así en la sentencia previamente emitida, se ordena que el sentenciado Cacallica Osorio cumpla con presentar físicamente el cupón judicial respecto al depósito realizado por otra incidencia dentro de este proceso, ello en protección del monto acordado como reparación civil y para su cumplimiento a favor de la parte agraviada. Con ello, disponemos el endoso del monto correspondiente.

Noveno. - Fundamentación de las costas: El artículo 497.5° del Código Procesal Penal, establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz. En el presente caso, al haber concluido el proceso por “conformidad”; no procede la imposición de costas.

III.- PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones, administrando justicia a nombre del Pueblo, de quien emana dicha facultad

RESOLVEMOS POR UNANIMIDAD:

Primero: APROBANDO: Mediante la presente sentencia de conformidad, los acuerdos celebrados entre el acusado, debidamente asesorado por su defensa técnica y el Ministerio Público.

Segundo: DECLARAMOS a ADRIAN ALEXANDER CACALLICA OSORIO, cuyas calidades personales se encuentran descritas en la parte expositiva de la presente sentencia, **COAUTOR** del delito contra el patrimonio en la modalidad de **Robo Agravado**, previsto y



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL PERMANENTE

penado en el artículo 188, en concordancia con el artículo 189, primer párrafo, incisos 02 y 04 del Código Penal, a su vez concordado con el artículo 16° del mismo cuerpo normativo, en agravio de **Diego Quenta Lima**.

Tercero: LE IMPONEMOS, la pena de **CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA**, la que convertimos a 208 jornadas de prestación de servicios comunitarios, para lo cual deberá comunicarse al área de medio libre del INPE, con expreso apremio que, ante el incumplimiento de las jornadas o abandono injustificado de una sola de las jornadas, se procederá a revocar la conversión de la pena y se dispondrá el internamiento del sentenciado en el establecimiento penitenciario que determine el INPE.

Cuarto: APROBAMOS como monto de la reparación civil en la suma de s/. 800.00 (ochocientos con 00/100 soles), la misma que se encuentra cancelada mediante cupón judicial N° 2020010901141. Disponemos su endoso a favor de la parte agraviada.

Quinto: DISPONEMOS que no corresponde fijar costas en mérito a que es un proceso de conformidad.

Sexto: MANDAMOS: Que firme que sea la presente resolución judicial, se cursen las comunicaciones al Registro Judicial y Central de Condenas, RENIPROS y demás pertinentes para fines de registro y archivo. Y, por esta sentencia, así la pronunciamos, mandamos y firmamos en audiencia pública. **TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.-**

Sres.

Medina Tejada

Pastor Cuba

Churata Quispe



Caso SGF : 1506014504-2019-560-0
Fiscal Adjunta responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez

DISPOSICIÓN DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE FISCAL N°01

Arequipa, veintidós de marzo del año dos mil diecinueve.-

I. DADO CUENTA.- En la fecha, puesto a Despacho para calificar la presente denuncia signada con el Caso N°504-2019-560-0, instaurada en torno a la presunta comisión del delito Contra la Familia en su modalidad de OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR, en contra de Alan Elvis Paxi Quispe, en agravio de los menores Giovanni Elvis Paxi Huarahuara y Camila Nicole Paxi Huarahuara, representados por su madre Hilda Huarahuara Mamani, y

II. ATENDIENDO:

Primero.- Normatividad procesal penal aplicable:

El Nuevo Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 957, establece en su artículo VII del Título Preliminar, que: “La Ley Procesal Penal es de **aplicación inmediata**, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal”. De modo que la presente ley procesal al encontrarse vigente y que regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e investigación preparatoria, resulta aplicable para efectos de la calificación de la presente investigación, conforme a lo normado en el artículo 334° y 335° del Código acotado.

Asimismo, el Art. 446° numeral 4) del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo N°1194 de fecha 30 de agosto del 2015 y puesta en vigencia a los noventa días, señala: “1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 1... 2... 3... y 4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión a la asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente código.” Que, la referida ley procesal al encontrarse vigente, resulta también aplicable para efectos de la presente investigación.

Segundo.- Hechos investigados:

Conforme a los actuados remitidos por el Segundo Juzgado de Familia – Sede Paucarpata, se advierte que, en el proceso de Tenencia N°01914-2014-0-0412-JM-FC-01, seguido por Hilda Huarahuara Mamani, en contra de Alan Elvis Mejía Cáceres, mediante Sentencia N°466-2016 de fecha 21 de noviembre del 2016, se dispone además de otorgar la tenencia de los menores Giovanni Elvis Paxi Huarahuara y Camila Nicole Paxi Huarahuara, a favor de su madre, que el ahora investigado acuda con una pensión de alimentos de seiscientos soles (S/.600.00) a favor de sus menores hijos, a razón de trescientos soles (S/.300.00) para cada uno.

Que, mediante Resolución N°33 de fecha 23 de noviembre del 2018, se ha resuelto remitir copias certificadas a este Ministerio Público, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en la Resolución N°32-2018 de fecha tres de octubre del 2018, por el cual se resuelve REQUERIR al ahora investigado, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público, para que dentro del tercer día cumpla con pagar la suma de S/.6,004.60 soles, que corresponde a la liquidación efectuada del periodo del 01 de agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018 y que fuera APROBADA por Resolución N°31-2018 de fecha 11 de setiembre del 2018, al verificarse que no se ha cumplido con pagar dicho monto requerido.

En estos extremos, se evidenciaría la comisión del delito de Omisión a la Asistencia Familiar, toda vez que la persona de Alan Elvis Mejía Cáceres, está omitiendo con su obligación de cancelar la suma de S/.6,004.60 soles, por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de sus menores hijos.

63

Tercero.- Calificación Jurídica:

Que, teniendo en cuenta los hechos denunciados se verifica que estos se circunscribirán al delito Contra la Familia en su modalidad de **OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, previsto en el artículo 149º Primer Párrafo del Código Penal, que señala: *"El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial..."*

Artículo 23º del Código Penal (autoría y participación), prescribe: *"El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción"*.

Cuarto.- Del presupuesto de imputación para el Ministerio Público

Que, al Ministerio Público le corresponde conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función; ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, de conformidad al artículo 159º numerales 4) y 5) de la Constitución Política del Estado de 1993, en concordancia con lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, *"El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio". "El Ministerio Público está obligado de actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, lo que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional"*; lo que establecería que el Ministerio Público conduce la investigación preparatoria, persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso al imputado preparar su defensa. Así mismo, tiene por finalidad *"determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado"*; por lo que su ejercicio está condicionado al cumplimiento previo de requisitos mínimos, tal como lo preceptúa el numeral 1) del artículo 321º del Código Procesal Penal.

Quinto.- Diligencias y plazo de la investigación preliminar:

En este orden de ideas, el Art. 330º numeral 2) del Código Procesal Penal establece *"Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente"*; así mismo el artículo 334º inciso 2 del Nuevo Código Procesal Penal preceptúa que: *"El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3º, es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de una persona. Que en tal extremo, se debe precisar que el plazo a utilizar en el caso será de 60 días, porque se tiene que recabar declaraciones de las partes, así como obtenerse informe de la SUNAT a fin que indique si el investigado registra algún tipo de actividad económica y el informe respectivo de la SUNARP para establecer si el investigado registra bienes inscritos a su nombre, así como de obtenerse los antecedentes penales y judiciales que pueda registrar el investigado; lo cual permitirá obtener un pronunciamiento acertado por parte de este Ministerio Público y*

Por estas consideraciones de conformidad a lo establecido en el artículo 330º numeral 1) y 2) del Código Procesal Penal y conforme a lo prescrito por los artículos 1, 5 y 94 inciso 2) de la Ley Orgánica del Ministerio Público:

III. SE DISPONE:

Primero: DAR INICIO A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES en contra de ALAN ELVIS PAXI QUISPE, por la presunta comisión del delito Contra la Familia en su modalidad de **OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, previsto en el artículo 149º Primer Párrafo del Código Penal, en agravio de los menores Giovanni Elvis Paxi

63

Huarahuara y Camila Nicole Paxi Huarahuara, representados por su madre Hilda Huarahuara Mamani; por el plazo de **SESENTA DÍAS**, computados desde la fecha de la presente Disposición, las mismas que se realizarán en **SEDE FISCAL**, y al término de la Investigación deberá ponerse los actuados para emitir el pronunciamiento correspondiente, señalándose que resulta necesario actuarse las siguientes diligencias preliminares:

1) Se reciba la declaración de **HILDA HUARAHUARA MAMANI**, el día **08 de Abril del 2019 a las 10:00 horas**, quien deberá presentarse a este Despacho Fiscal sito en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata ubicada en calle Teniente Alcantará s/n, Urb. Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, Arequipa, a fin que declare respecto a los hechos materia de la presente investigación y si a la fecha el investigado ha cumplido con pagar las pensiones devengadas, debiendo ser notificada en su domicilio real que aparece consignado en autos.

2) Que se obtenga la declaración del investigado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, respecto a los hechos investigados el día **08 de Abril del 2019 a las 15:00 horas**, en este Despacho Fiscal sito en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata ubicada en calle Teniente Alcantará s/n, Urb. Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, Arequipa, **oportunidad en la que deberá concurrir en forma obligatoria con su Abogado Defensor. Para tal fin cúmplase con notificar en su domicilio real fijado en autos y el que aparece en su ficha RENIEC.**


3) Que, se oficie a la SUNAT Arequipa a efecto que remita informe respecto si el investigado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, registra actividad económica alguna a su nombre.

4) Se oficie a la SUNARP Arequipa, a fin que remita informe respecto si el investigado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, registra bienes muebles o inmuebles inscritos a su nombre.

5) Se recabe los antecedentes penales y judiciales que pudieran registrar el investigado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**.

6) Que, se ACTUEN demás diligencias que resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Segundo: OFICIESE con la debida nota de atención a las entidades respectivas, y NOTIFIQUESE la presente a la representante legal de las menores agraviadas y al investigado conforme a ley.-
/bstg


DR. LUIS GUILLERMO VENA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Cor. de Paucarpata
Diciembre 2018



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Caso N° : 1506014504-2019-560-0
Fiscal Responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez
(Casilla Electrónica N°96017)

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – SEDE MBI PAUCARPATA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, ante Ud. respetuosamente digo:

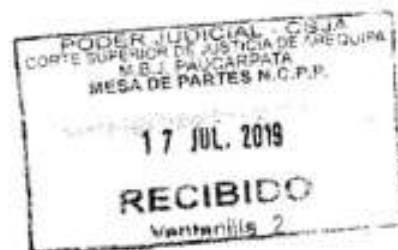
1. REQUERIMIENTO:

Al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los arts. 446° literal 4) y 336° literal 2 del Código Procesal Penal, **FORMULO REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO** contra:

ALAN ELVIS PAXI QUISPE, en el caso seguido en su contra, por el delito **Contra la Familia - Omisión de la Asistencia Familiar**, en la modalidad de **Incumplimiento de Obligación Alimentaria**, previsto en el Art. 149° primer párrafo del C.P., en agravio de los menores **Giovanny Elvis Paxi Huarahuara (16) y Camila Nicole Paxi Huarahuara (14)**, representados por su madre **Hilda Huarahuara Mamani**, en los siguientes términos:

DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO

NOMBRE Y APELLIDOS	: ALAN ELVIS PAXI QUISPE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	: 44406767
FECHA DE NACIMIENTO	: 14/10/1983
EDAD	: 35 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO	: Paucarpata, Arequipa, Arequipa
NOMBRE DEL PADRE	: Félix Fidel
NOMBRE DE LA MADRE	: Leoncia
ESTATURA	: 1.70 m
SEXO	: masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN	: Secundaria Completa
ESTADO CIVIL	: soltero
OCCUPACIÓN	: se desconoce
DOMICILIO REAL	: Calle Micaela Bastidas N°112, Urbanización Pedro P. Díaz, Paucarpata, Arequipa, Arequipa.
TELEFONO	: se desconoce
DOMICILIO PROCESAL	: No ha señalado
ABOGADO DEFENSOR	: No ha designado



3. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE AGRAVIADA:

- Los menores **Giovanny Elvis Paxi Huarahuara (16) y Camila Nicole Paxi Huarahuara (14)**, representados por su madre **HILDA HUARAHUARA MAMANI** identificada con DNI 42697373, domicilian en Asentamiento Humano Taller Buena Vista Mz. M prima, lote 1, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa; con teléfono contacto 987747171; con domicilio procesal en calle Colón N°313, Oficina 41, Edificio San Francisco, cercado

de Arequipa; siendo su abogado defensor el letrado GILBERT MARROQUIN PANTIGOSO, con casilla electrónica N°12369.

4. DE LOS PRESUPUESTOS DEL PROCESO INMEDIATO:

4.1. Teniendo en cuenta que el proceso inmediato es un proceso especial, que busca la simplificación y celeridad en la sustanciación del procesos penales, por medio del cual de la fase de diligencias preliminares se pasa directamente al juicio oral, suprimiendo las etapas de investigación preparatoria y la etapa intermedia de un proceso común, el mismo que procede en los supuestos de flagrancia delictiva, confesión sincera del imputado; cuando los elementos de convicción recabados en el curso de las diligencias preliminares evidencien la materialización del ilícito penal y la participación del imputado, así como en la comisión de los Delitos de Omisión de Asistencia Familiar y del Delito de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, conforme lo establece el artículo 446° del Código Procesal Penal.

4.2. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que, en el presente caso, se investiga la comisión del Delito de Omisión de Asistencia Familiar, delito respecto del cual el inciso 4) del artículo 446° del Código Procesal Penal, establece "4. *Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de Omisión de Asistencia Familiar y los de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción*", y estando a la imperatividad de la norma, corresponde en el caso en autos incoar el presente proceso inmediato.

5. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN.

- Se tiene de los actuados, que por ante el Segundo Juzgado de Familia del MBI de Paucarpata se tramita el caso de Tenencia N°01914-2014-0-0412-JM—FC-01, seguido por Hilda Huarahuara Mamani, en contra de Alan Elvis Paxi Quispe.

Que mediante Sentencia N°466-2016 de fecha 21 de noviembre del 2016, se declaró fundada la demanda planteada en contra del ahora imputado, donde además de otorgarse la tenencia de los menores Giovanni Elias Paxi Huarahuara y Camila Nicole Paxi Huarahuara, se dispone que el demandado acuda con una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos de seiscientos soles (S/.600.00) a razón de trescientos soles (S/.300.00) para cada uno.

Pero es el caso, que el imputado no ha cumplido con tal obligación, de tal forma que se practicó la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al período comprendido desde el 01 de agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018, adeudando la suma de S/.6,004.60 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N°30-2018, de fecha 30 de julio del 2018.

Hecho que conllevó, que posteriormente fuera APROBADA mediante Resolución N°31-2018 de fecha 11 de setiembre del 2018 y REQUERIDO al imputado para su pago en el plazo de tres días dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas a través de la Resolución N°32-2018 de fecha 03 de octubre del 2018, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público y ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en caso de incumplimiento, la misma que le fue notificada al ahora imputado en su domicilio procesal y real el 17 y 19 de octubre 2018, conforme a las cédulas de notificación N°57985 y 57984-2018-PJ-FC.

Que, ante el incumplimiento del imputado, mediante Resolución N°33-2018 de fecha 23 de noviembre del 2018, el Juzgado hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas a este Ministerio Público.

Por lo que, el imputado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de S/.6,004.60 soles, por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de sus menores hijos.

6. TIPO PENAL.

Que, conforme a las circunstancias en que se ha suscitado los hechos atribuido al imputado, se encuadra en el tipo penal previsto contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en su modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, tipificado en el primer párrafo Artículo 149° del Código Penal, el mismo que prescribe.

"El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial."

6.1. Grado de participación.

El imputado Alan Elvis Paxi Quispe, responderá en el presente caso conforme a los hechos ocurridos como Autor⁽¹⁾.

7. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito y vinculan al imputado como responsable del delito:

1. Actuados en copias certificadas del expediente judicial N°01914-2014-0-0412-JM-FC-01, sobre Tenencia, seguido por Hilda Huarahua Mamani, en contra de Alan Elvis Paxi Huarahua, tramitado ante el Segundo Juzgado de Familia de MBI de Paucarpata, entre ellos:

a) Sentencia N°466-2016-FC-2JFP de fecha 21 de noviembre del 2016, que declara fundada la demanda, y además de otorgarse la tenencia de los menores Giovanni Elvis Paxi Huarahua y Camila Nicole Huarahua, se dispone que el demandado acuda con una pensión alimenticia a favor de sus menores de seiscientos soles (S/.600.00) a razón de trescientos soles (S/.300.00) para cada uno.

b) Liquidación de pensiones alimenticias devengadas, correspondiente al periodo comprendido del **01 de agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018**, por la suma de **S/.6,004.61 soles** (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N°30-2018, de fecha 30 de julio del 2018.

d) Resolución N°31-2018 de fecha 11 de setiembre del 2018, donde el Juzgado APRUEBA la liquidación de pensiones devengadas por el monto de **S/.6,004.61 soles**, que deberán ser pagadas por el ahora imputado.

e) Resolución N°32-2018 de fecha 03 de octubre del 2018, que REQUIERE al ahora imputado cumpla con pagar el monto de S/.6,004.61 soles en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público a fin que sea denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

f) Cédulas de notificación N°57985 y 57984-2018-JP-FC y aviso de notificación efectuada en el domicilio procesal y real del imputado con la Resolución N°32-2018, con fecha 17 y 19 de octubre del 2018.

g) Resolución N°33-2018 de fecha 23 de noviembre del 2018, que resuelve hacer efectivo el apercibimiento, remitiendo copias certificadas a este Ministerio Público.

2. Oficio N°50797-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ emitido por el Coordinador del Registro Judicial Arequipa, donde se informa que el imputado, no registra antecedentes penales vigentes.

8. MEDIDA DE COERCION PROCESAL

⁽¹⁾ Art. 23 del C.P. "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometen conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción"

43/

Atendiendo al presente requerimiento, se requiere asimismo la **COMPARECENCIA SIMPLE** del imputado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, conforme a lo establecido en el numeral 2) del Artículo 286º del Código Procesal Penal, por no concurrir uno los presupuestos materiales previstos en el Artículo 268º del acotado código adjetivo, que es la sanción a imponerse no es superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señor Juez, proceder a emitir la resolución que corresponda de conformidad al Art. 447º del Código Procesal Penal.

PRIMER OTROSÍ: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, tiene como domicilio real en: Calle Micaela Bastidas N°112, Urbanización Pedro P. Díaz, Paucarpata, Arequipa, Arequipa. No habiendo señalado domicilio procesal, ni designado abogado defensor.

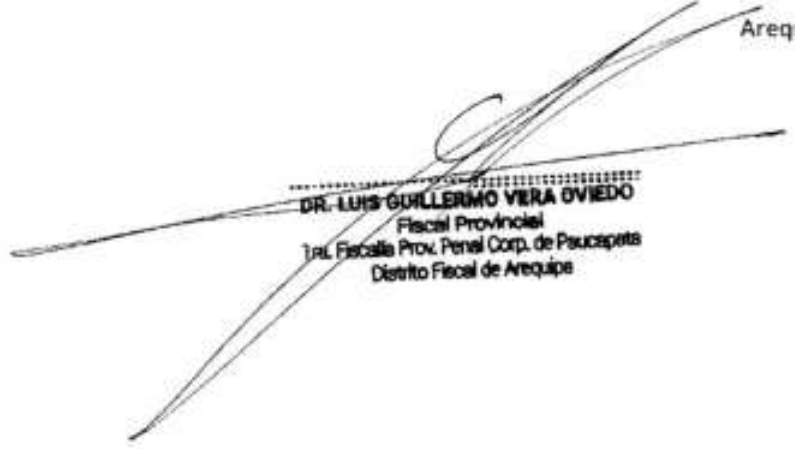
Debiendo en este extremo el Juzgado proceder conforme a lo previsto por el Art. 80º del C.P.P., nombrar y designar un Abogado Defensor Público para la defensa del imputado.

Agraviados: Los menores **Giovanny Elvis Paxi Huarahuara (16)** y **Camila Nicole Paxi Huarahuara (14)**, representados por su madre **HILDA HUARAHUARA MAMANI** identificada con DNI 42697373, domicilian en Asentamiento Humano Taller Buena Vista Mz. M prima, lote 1, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa; con teléfono contacto 987747171; con domicilio procesal en calle Colón N°313, Oficina 41, Edificio San Francisco, cercado de Arequipa; siendo su abogado defensor el letrado **GILBERT MARROQUIN PANTIGOSO**, con casilla electrónica N°12369.

SEGUNDO OTROSÍ: Se adjunta el original de los elementos de convicción, así como ejemplares del presente requerimiento, para su notificación a todos los sujetos procesales distintos al Ministerio Público.

/bstg

Arequipa, 03 de julio del 2019.


DR. LUIS GUILLERMO VIERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1.º Fiscal Prox. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa



Caso N° : 1506014504-2019-560-0
Expediente N° : 07479-2019-0-0401-JR-PE-01
Imputado : Alan Elvis Paxi Quispe
Delito : Omisión a la Asistencia Familiar
Sumilla : ACUSACION FISCAL
Fiscal Responsable : Blanca Susana Terroba Gutiérrez
(casilla electrónica N°96017)

SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL MBJ PAUCARPATA:

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, en el caso seguido contra Alan Elvis Paxi Quispe, por el delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de Giovanni Elvis Paxi Huarahuara y otra, ante Ud. respetuosamente digo:

I. REQUERIMIENTO:

En mérito a lo dispuesto por su Juzgado en la Audiencia de Control de Aplicación de Incoación del Proceso Inmediato realizado con fecha 10 de setiembre del 2019, y al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los arts. 60°, 447° literal 6 y 349° del Código Procesal Penal, formulo **REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL** contra **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, por el delito Contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de **INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA**, en agravio de los menores **Giovanni Elvis Paxi Huarahuara (16)** y **Camila Nicole Paxi Huarahuara (14)**, representados por su madre **Hilda Huarahuara Mamani**, en los términos siguientes:

II. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:

NOMBRE Y APELLIDOS : ALAN ELVIS PAXI QUISPE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 44406767
FECHA DE NACIMIENTO : 14/10/1983
EDAD : 35 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO : Paucarpata, Arequipa, Arequipa
NOMBRE DEL PADRE : Félix Fidel
NOMBRE DE LA MADRE : Leoncia
ESTATURA : 1.70 m
SEXO : masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN : Secundaria Completa
ESTADO CIVIL : soltero
OCUPACIÓN : se desconoce
DOMICILIO REAL : Calle Micaela Bastidas N°112, Urbanización Pedro P. Díaz, Paucarpata, Arequipa, Arequipa.
TELÉFONO : se desconoce
DOMICILIO PROCESAL : Av. Independencia N°927, cercado de Arequipa (Defensoría Pública de Arequipa)
ABOGADO DEFENSOR : Joey Ramirez Silva (Defensor Público)
CASILLA ELECTRONICA : 33760

III. DATOS DE LA PARTE AGRAVIADA:



- Los menores Giovanni Elvis Paxi Huarahuara (16) y Camila Nicole Paxi Huarahuara (14), representados por su madre HILDA HUARAHUARA MAMANI identificada con DNI 42697373, domicilian en Asentamiento Humano Taller Buena Vista Mz. M prima, lote 1, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa; con teléfono contacto 987747171; con domicilio procesal en calle Colón N°313, Oficina 41, Edificio San Francisco, cercado de Arequipa; siendo su abogado defensor el letrado GILBERT MARROQUIN PANTIGOSO, con casilla electrónica N°12369.

IV.- DESCRIPCIÓN DEL HECHO ATRIBUIDO AL ACUSADO:

Hecho Punible	Imputación Necesaria
Delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento De Obligación Alimentaria	<p>Este Ministerio imputa al ciudadano ALAN ELVIS PAXI QUISPE, la comisión del delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria; y en ese sentido los actos que efectuó el imputado para la comisión del ilícito, ocurrieron según el siguiente detalle:</p> <p>Circunstancias Precedentes Que, por ante el Segundo Juzgado de Familia del MBI de Paucarpata se tramita el proceso de Tenencia N°01914-2014-0-0412-JM-FC-01, seguido por Hilda Huarahuara Mamani, en contra de Alan Elvis Paxi Quispe.</p> <p>Mediante Sentencia N°466-2016 de fecha 21 de noviembre del 2016, se declaró fundada la demanda incoada en contra del ahora imputado, donde además de otorgarse la tenencia de los menores Giovanni Elvis Paxi Huararahuara y Camila Nicole Paxi Huarahuara a favor de su progenitora, se dispone que el imputado acuda con una pensión alimenticia de seiscientos soles (S/.600.00) a razón de trescientos soles (S/.300.00) para cada uno de sus hijos.</p> <p>Circunstancias Concomitantes Pero es el caso, que el imputado no ha cumplido con tal obligación, practicándose la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018, donde adeuda la suma de S/.6,004.61 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N°30-2018, de fecha 30 de julio del 2018.</p> <p>Hecho que posteriormente fuera APROBADA mediante Resolución N°31-2018 de fecha 11 de setiembre del 2018 y REQUERIDO al ahora imputado, para su pago en el plazo de tres días dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas a través de la Resolución N°32-2018 de fecha 03 de octubre del 2018, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público y ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en caso de incumplimiento, la misma que le fue notificada al ahora imputado en su domicilio procesal y real el 17 y 19 de octubre 2018, conforme a las cédulas de notificación N°57985 y 57984-2018-PJ-FC.</p> <p>Circunstancias Posteriores Que, ante el incumplimiento del imputado, el Juzgado mediante Resolución N°33-2018 de fecha 23 de noviembre del 2018, hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas a este Ministerio Público.</p> <p>Por lo que, el imputado ALAN ELVIS PAXI QUISPE, en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de S/.6,004.61 soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de sus hijos.</p>

IV. ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito y vinculan al imputado como responsable del delito:

4.1. Actuados en copias certificadas del expediente judicial N°01914-2014-0-0412-JM-FC-01, sobre Tenencia, seguido por Hilda Huarahua Mamani, en contra de Alan Elvis Paxi Huarahua, tramitado ante el Segundo Juzgado de Familia de MBI de Paucarpata, entre ellos:

a) Sentencia N°466-2016-FC-2JFP de fecha 21 de noviembre del 2016, que declara fundada la demanda, donde además de otorgarse la tenencia de los menores Giovanni Elvis Paxi Huarahua y Camila Nicole Paxi Huarahua, se dispone que el demandado acuda con una pensión alimenticia a favor de sus menores hijos de seiscientos soles (S/.600.00) a razón de trescientos soles (S/.300.00) para cada uno.

b) Liquidación de pensiones alimenticias devengadas, correspondiente al período comprendido del 01 de agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018, por la suma de S/.6,004.61 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N°30-2018, de fecha 30 de julio del 2018.

d) Resolución N°31-2018 de fecha 11 de setiembre del 2018, donde el Juzgado APRUEBA la liquidación de pensiones devengadas por el monto de S/.6,004.61 soles, que deberán ser pagadas por el ahora imputado.

e) Resolución N°32-2018 de fecha 03 de octubre del 2018, que REQUIERE al ahora imputado cumpla con pagar el monto de S/.6,004.61 soles en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público a fin que sea denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar.

f) Cédulas de notificación N°57985 y 57984-2018-JP-FC y aviso de notificación efectuada en el domicilio procesal y real del imputado con la Resolución N°32-2018, con fecha 17 y 19 de octubre del 2018.

g) Resolución N°33-2018 de fecha 23 de noviembre del 2018, que resuelve hacer efectivo el apercibimiento, remitiendo copias certificadas a este Ministerio Público.

4.2. Oficio N°50797-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ emitido por el Coordinador del Registro Judicial Arequipa, donde se informa que el imputado, no registra antecedentes penales vigentes.

V. PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO:

Señala el artículo 23º del Código Penal: "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción."

De lo expuesto, queda claro que el **acusado ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, ha incurrido en el delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en su condición de **AUTOR**, al haber omitido con su obligación de cancelar el monto de S/.6,004.61 soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de sus hijos.

VI. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD:

Conforme lo sostiene el autor Víctor Prado Saldarriaga, las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuricidad del hecho); o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente). Por tanto la función principal de las circunstancias no es otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido.

En el caso, no concurre ningún elemento negativo del tipo (error de tipo, consentimiento, adecuación

714

social, causa de justificación, legítima defensa, error de prohibición, graves alteraciones en la conciencia, percepción, etc.), que excluya, justifique o evite el reproche de la acción perpetrado por el imputado.

VII. TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y CUANTÍA DE LA PENA:

a) Tipificación de los hechos

Conforme se ha detallado en la presente, se imputa al acusado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, ser el autor del delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en agravio de sus hijos.

Omisión de prestación de alimentos

Artículo 149º.- "El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta días jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. (...)"

Que, el comportamiento en el delito de Incumplimiento de Obligación Alimentaria, previsto en el primer párrafo del artículo 149º del Código Penal, **consiste en omitir el cumplimiento de la prestación de alimentos establecida por una resolución judicial; es decir, basta con dejar de cumplir con la obligación para realizar el tipo, teniendo en consideración que el bien jurídico protegido es la familia y especialmente los deberes de tipo asistencial, como obligación de los padres con sus descendientes.**

b) Determinación de la Pena

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previsto en los artículos cuarto y octavo respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito.

b) Determinación de la Pena

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previstas en los artículos cuarto y octavo respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito, en tanto que la conducta del acusado al omitir asistir a su menor hijo, pone en peligro no solo la integridad física de su persona sino a toda la comunidad que hace uso de la vía pública.

Que, a efectos de la determinación de la pena temporal, es decir, para aquella que tiene una duración mínima de dos días y una máxima de 35 años, corresponde desarrollarla en base a etapas o fases normadas en el Artículo 45-Aº del Código Penal; así, en la primera etapa se definen los límites de la **pena básica**, la cual se encuentra establecida en la ley para el delito; y en la segunda etapa se debe identificar la **pena concreta**, para ello se tiene en cuenta el espacio y límite prefijado por la pena básica, marco que se divide en tres tercios y luego en base a las circunstancias legales presentes es que se determina la pena concreta dentro de uno de los tercios establecidos.

Que, conforme a lo señalado por el artículo 46º del Código, se establece las **circunstancias de atenuación y agravación**:

- 1.- Constituyen *circunstancias de atenuación*, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible las siguientes: "a) **La carencia de antecedentes penales**; ..."
- 2.- Constituyen *circunstancias agravantes*, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: "a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad;..."

Siendo así, y advirtiéndose en el presente caso que concurre una circunstancia atenuante, ya que el imputado no registra antecedentes penales, **corresponde efectuar la petición de la imposición de la pena y se ubica dentro del margen del tercio inferior, conforme a lo prescrito en el inciso a) del numeral 2 del**

artículo 45-A del Código Penal; encontrándose la conducta del acusado ALAN ELVIS PAXI QUISPE, dentro del primer párrafo del artículo 149º del Código Penal, se procede al desarrollo de la individualización de la pena de manera gráfica:

DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA		
La pena es: "no mayor de tres años"		
Pena mínima Pena máxima (02 días) (03 años)		
2 días - 01 año (Tercio Inferior)	01 año - 2 años (Tercio Intermedio)	02 años - 03 años (Tercio Superior)

De lo expuesto, la pena que se propone a imponerse al imputado ALAN ELVIS PAXI QUISPE, es de UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

La pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

VIII. MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Que, de conformidad con lo prescrito por el Artículo 92º del Código Penal, todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así, que en aquellos casos en los que la conducta del agente produce un daño, debe regir el principio del daño causado, es decir, tener en cuenta la repercusión de la conducta incriminada en la víctima, por cuya razón la reparación civil debe de alguna manera tender a compensar y resarcir dicho agravio, fijándose prudencialmente de acuerdo a la magnitud del mismo,

Que, conforme lo señala el Artículo 11 del Código Procesal Penal: "El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso."

En tal sentido, y conforme se verifica de los antecedentes, la parte agraviada no se ha constituido en ACTOR CIVIL, motivo por el cual esta Fiscalía se encuentra legitimada para solicitar la reparación del daño; y teniendo en cuenta el estado del presente proceso, para determinar la reparación civil, el Ministerio Público considera: 1) Monto adeudado en el caso de la parte agraviada: S/. 6,004.41 soles; 2) Periodo adeudado: desde el 01 de agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018; 3) Número de víctimas: 02; 4) Bien jurídico protegido: deberes alimentarios; 5) Grado de ejecución del delito: consumado; 6) Reparación del daño causado: el imputado no ha cumplido con abonar suma alguna del monto de la liquidación de alimentos devengados, no habiendo efectuado por ello la reparación del daño causado, que resultaría ser más, el daño moral.

En consecuencia, este Ministerio Público solicita una reparación civil de S/.600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), que el acusado ALAN ELVIS PAXI QUISPE deberá abonar a favor de sus hijos Giovanni ELVIS Paxi Huarahuara y Camila Nicole Paxi Huarahuara a razón de S/.300.00 soles, para cada uno; sin perjuicio del pago total de la liquidación de pensiones devengadas que ascienden a la suma de S/.6,004.61 soles, ASCENDIENDO en total el pago de reparación civil de S/.6,604.61 soles.

La pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

IX. SOLICITUD ALTERNATIVA DE TIPIFICACIÓN:

Ninguna.

LUIS GUILLERMO JENIA-OLIVERO
Fiscal Provincial
1ra Fiscalía Penal Corps de Pícarapata
Distrito Fiscal de Arequipa

X. RELACION DE BIENES QUE GARANTIZAN LA REPARACION CIVIL

En autos obra el oficio N°1699-2019-Z.R.-N°XII-UREG/PUBLICIDAD/GBS remitido por la Zona Registral N°XII Sede Arequipa, donde se informa del resultado negativo de bienes muebles o inmuebles que registra el imputado Alan Elvis Paxi Quispe.

XI. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

a) Prueba Documental:

PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA N°466-2016-FC-2JFP RESOLUCION N°24 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
Información que proporciona	Por el cual se ordena al ahora acusado, acuda con una pensión alimenticia mensual de S/.600.00 soles, a razón de S/.300.00 soles para cada uno de los agraviados. UTILIDAD: Probará la existencia de una orden judicial. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEVENGADA Y RESOLUCION N°30 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2018.
Información que proporciona	Por el cual se acredita el periodo y monto total de la deuda por concepto de alimentos, ascendente a la suma de S/.6,004.61soles, y por el que se pone en conocimiento de las partes dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas. UTILIDAD: Demostrará el monto adeudado. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN N°31 DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DEL 2018.
Información que proporciona	Por el cual se acredita la aprobación de la liquidación de pensiones de alimentos por la suma de S/.6,004.61 soles. UTILIDAD: Probará la aprobación de la liquidación de pensiones devengadas sobre el monto adeudado. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN N°32-2018 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2018.
Información que proporciona	Con el cual se acredita el requerimiento al imputado a fin de que en plazo de tres días cumpla con pagar por concepto de alimentos la suma adeudada de S/.6,004.61 soles; bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas a la Fiscalía Provincial Penal de Turno y se proceda conforme a sus atribuciones. UTILIDAD: Probará la aprobación de la liquidación de pensiones devengadas sobre el monto adeudado. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	CEDULA DE NOTIFICACIÓN N°57984-2018-JP-FC DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2018.
Información que	Por el cual se acredita que el imputado tuvo conocimiento del requerimiento efectuado

proporciona	mediante Resolución N°32, al haber sido debidamente notificado. UTILIDAD: Acreditará que el imputado tenía conocimiento del requerimiento que se le hacía. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION N°33-2018 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
Información que proporciona	Por el cual se dispone la remisión de copias al Ministerio Público ante el incumplimiento de pago de las pensiones alimenticias requeridas al imputado. UTILIDAD: Acreditará el actual doloso del imputado en el hecho que se le atribuye. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	Oficio N°50797-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ REMITIDO POR EL COORDINADOR DEL REGISTRO JUDICIAL DE AREQUIPA
Información que proporciona	Por el cual se informa que el acusado Alan Elvis Paxi Quispe, NO registra antecedentes penales. UTILIDAD: Para efectos de la imposición de la pena. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.

XII. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL:

Contra del imputado ALAN ELVIS PAXI QUISPE, se ha dictado medida de Comparecencia Simple.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señor Juez, acceder al presente requerimiento y conferir el trámite correspondiente.

Primer Otrosí: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: ALAN ELVIS PAXI QUISPE, tiene como domicilio real: Calle Micaela Bastidas N°112, Urbanización Pedro P. Díaz, Paucarpata, Arequipa, Arequipa; con domicilio procesal en Av. Independencia N°927, cercado de Arequipa (Defensoría Pública de Arequipa); siendo su Abogado Defensor Joey Ramirez Silva (Defensor Público), con CASILLA ELECTRONICA N°33760.

Agraviado: Los menores Giovanny Elvis Paxi Huarahuara (16) y Camila Nicole Paxi Huarahuara (14), representados por su madre HILDA HUARAHUARA MAMANI identificada con DNI 42697373, domicilian en Asentamiento Humano Taller Buena Vista Mz. M prima, lote 1, distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa; con teléfono contacto 987747171; con domicilio procesal en calle Colón N°313, Oficina 41, Edificio San Francisco, cercado de Arequipa; siendo su abogado defensor el letrado GILBERT MARROQUIN PANTIGOSO, con casilla electrónica N°12369.

Segundo Otrosí: Solicito al juzgado, se tenga en cuenta, que se ha cumplido con adjuntar las documentales ofrecidas como medios probatorios, así como dos ejemplares de la acusación, a fin de que sean notificados al acusado y a la parte agraviada.

/bstg

Arequipa, 10 de setiembre del 2019.

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Provincial Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa

2° JUZ. PENAL UNIPERSONAL - Sede MBJ Paucarpata

EXPEDIENTE : 07479-2019-65-0401-JR-PE-01

JUEZ : BELLIDO DAVILA PERCY

ESPECIALISTA : RICHARD TALAVERA SALAS

MINISTERIO PUBLICO : PRIMERA FISCALIA PPCP SUSANA TERROBA

CARP FISCAL 2019560 ,

IMPUTADO : PAXI QUISPE, ALAN ELVIS

DELITO : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR

AGRAVIADO : HUARAHUARA MAMANI, HILDA

Resolución Nro. 02 -2019

Arequipa, dos mil diecinueve

Octubre dieciséis.-

AL ESCRITO N° 127899-2019: -----

VISTOS: El recurso de reposición presentado por el abogado de la parte agraviada Hilda Huarahuara Mamani; y, -----

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Antecedentes:

- 1.1. Mediante resolución N° 01-2019, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve, se programa fecha para audiencia de juzgamiento de proceso inmediato el día seis de julio de dos mil veinte a las Diez y treinta horas, en la sala de audiencias N° 02 del Segundo Juzgado Penal Unipersonal del M.B.J. de Paucarpata. -----
- 1.2. Mediante escrito N° 127899-2019, presentado en fecha 03 de octubre de 2019, la recurrente interpone recurso de reposición en contra de la resolución antes señalada, a efecto que sea revocada, solicitando que se fije una nueva fecha la más próxima posible, teniendo en cuenta el interés superior del niño y se causa grave perjuicio a los alimentistas, en cuanto a su salud y su subsistencia. -----

SEGUNDO.- Marco Normativo:

- 2.1. El artículo 414° del Código Procesal Penal, señala que el plazo para interponer el recurso de reposición es de dos días. -----
- 2.2. El artículo 415° del Código Procesal Penal, señala "*el recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda...*" -----

TERCERO.- Análisis Jurídico Fáctico:

- 3.1. Del recurso interpuesto, se advierte que se ha interpuesto dentro del plazo establecido por ley, teniendo en cuenta que el plazo desde la notificación electrónica corre a partir del segundo día. -----
- 3.2. En cuanto a la solicitud de adelanto de fecha de audiencia, debe tener presente la parte recurrente la sobre carga procesal que soporta el Juzgado, que tramita tanto procesos comunes como procesos inmediatos y la asignación de fecha de audiencia se realiza según el turno de ingreso de cada proceso conforme al rol de audiencias; asimismo, debe tenerse presente que el 80% de procesos que ingresa para trámite de este Juzgado son inmediatos y por delito de Omisión a

al a Asistencia Familiar, estando todos los procesos en igual situación de urgencia. -----

- 3.3.** Sin embargo, a efecto de no causar afectación a los menores alimentistas, teniendo en cuenta el interés superior de niño y que el periodo de pensiones devengadas que ha dejado de percibir por parte del obligado en el presente proceso es de nueve meses, existe justificación para amparar su pedido de reposición, por tanto, debe estimarse lo solicitado de manera excepcional. **Por tales consideraciones:**

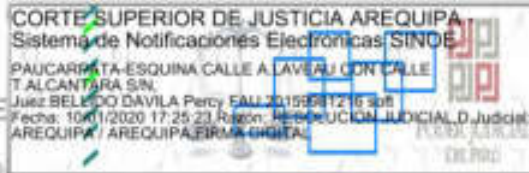
SE RESUELVE: DECLARAR FUNDADO el recurso de reposición interpuesto por el abogado de la parte agraviada Hilda Huarahuara Mamani, en contra de la resolución N° 01-2019, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve y revocando la misma; -----

SE DISPONE: REPROGRAMAR la audiencia de juzgamiento de proceso inmediato para el día **04 de diciembre de 2019, a las 10:45 horas.** debiendo de notificarse a las partes procesales conforme a ley. **Tómese razón y hágase saber.-**

DE OFICIO.- Estando a la devolución de notificación dirigida a la agraviada Hilda Huarahuara Mamani (Asentamiento Humano Taller Buena Vista Mz. M prima, Lote 1, Paucarpata), por el que se consigna **"En el AA:HH. Taller Buena Vista la Manzana M prima no existe"**; póngasele en conocimiento notificándosele en su domicilio procesal y/o casilla electrónica, teniendo presente que en adelante se le notificará en su domicilio procesal y/o casilla electrónica.-



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
MODULO BÁSICO DE JUSTICIA DE
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL



DEL PERÚ

2° JUZ. PENAL UNIPERSONAL - Sede MBJ Paucarpata

EXPEDIENTE : 07479-2019-65-0401-JR-PE-01
JUEZ : BELLIDO DAVILA PERCY
ESPECIALISTA : RICHARD TALAVERA SALAS
MINISTERIO PÚBLICO : PRIMERA FISCALIA PPCP SUSANA TERROBA CARP FISCAL 2019560
IMPUTADO : PAXI QUISPE, ALAN ELVIS
DELITO : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR
AGRAVIADO : HUARAHUARA MAMANI, HILDA

Resolución N° 07

En Arequipa, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, el señor Juez Percy Bellido Dávila, que despacha el Segundo Juzgado Unipersonal de Paucarpata, luego de realizar el juicio oral, público, contradictorio en audiencia única de proceso inmediato, ha emitido la siguiente:

SENTENCIA Nro. 876- 2019

I. PARTE EXPOSITIVA

VISTOS Y OÍDOS

Primero.- Identificación de Proceso

Se trata de la causa signada como expediente **número 7479-2019**, seguido a **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, por el delito Contra La Familia en la modalidad de **OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal, en agravio de los menores **GIOVANI ELVIS PAXI HUARAHUARA** y **CAMILA NICOL PAXI HUARAHUARA** representados por **Hilda Huarahuara Mamani**.

Segundo.- Identificación del Acusado

Se juzga a **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, con DNI 44406767, con domicilio en Calle Micaela Bastidas 112, Urbanización Pedro P. Díaz, del distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa, nacido el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y tres, natural de Arequipa, hijo de Felix y Leoncia, con grado de instrucción quinto de secundaria, ocupación carpintero, percibe entre S/. 30.00 a S/. 35.00 diario, estatura 1.70 mts., tiene lunar en la cara, según refiere.

Tercero.- Identificación de los Agravados

Se ha considerado a los menores **GIOVANI ELVIS PAXI HUARAHUARA** y **CAMILA NICOL PAXI HUARAHUARA** representados por **Hilda Huarahuara Mamani**.

Cuarto.- Delimitación de la Imputación

El Ministerio Público, como titular de acción penal pública y por ende encargado de establecer la tesis fáctica materia de proceso, en el marco de la requisitoria escrita y oralizada en audiencia en su respectivo alegato oral, ha efectuado la siguiente imputación al acusado.

4.1. Hechos Imputados:

Este Ministerio imputa al ciudadano ALAN ELVIS PAXI QUISPE, la comisión del delito contra la Familia - Omisión a la Asistencia Familiar, en la modalidad de Incumplimiento de Obligación Alimentaria; y en ese sentido los actos que efectuó el imputado para la comisión del ilícito, ocurrieron según el siguiente detalle:

Circunstancias Precedentes

Que, por ante el Segundo Juzgado de Familia del MBJ de Paucarpata se tramita el proceso de Tenencia N201914-2014-0-0412-JM-FC-01, seguido por Hilda Huarahuara Mamani, en contra de Alan Elvis Paxi Quispe.

Mediante Sentencia N° 466-2016 de fecha 21 de noviembre del 2016, se declaró fundada la demanda incoada en contra del ahora imputado, donde además de otorgarse la tenencia de los menores Giovanni Elvis Paxi Huarahuara y Camila Nicole Paxi Huarahuara a favor de su progenitora, se dispone que el imputado acuda con una pensión alimenticia de seiscientos soles (S/.600.00) a razón de trescientos soles (S/.300.00) para cada uno de sus hijos.

Circunstancias Concomitantes

Pero es el caso, que el imputado no ha cumplido con tal obligación, practicándose la liquidación de pensiones devengadas correspondiente al período comprendido desde el 01 de

agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018, donde adeuda la suma de S/. 6,004.61 soles (incluido el interés legal), el cual se puso en conocimiento de las partes a través de la Resolución N° 30-2018, de fecha 30 de julio del 2018.

Hecho que posteriormente fuera APROBADA mediante Resolución N° 31-2018 de fecha 11 de setiembre del 2018 y REQUERIDO al ahora imputado, para su pago en el plazo de tres días dicha liquidación de pensiones alimenticias devengadas a través de la Resolución N° 32-2018 de fecha 03 de octubre del 2018, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público y ser denunciado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en caso de incumplimiento, la misma que le fue notificada al ahora imputado en su domicilio procesal y real el 17 y 19 de octubre 2018, conforme a las cédulas de notificación N° 57985 y 57984-2018-PJ-FC.

Circunstancias Posteriores

Que, ante el incumplimiento del imputado, el Juzgado mediante Resolución N° 33-2018 de fecha 23 de noviembre del 2018, hizo efectivo el apercibimiento, disponiendo remitir copias certificadas a este Ministerio Público.

Por lo que, el imputado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, en forma dolosa omitió con su obligación de cancelar el monto de **S/. 6,004.61 soles** por concepto de pensiones alimenticias devengadas que han sido fijadas mediante resolución judicial a favor de sus hijos.

4.2. Calificación Jurídica

Los hechos expuestos han sido tipificados por el representante del Ministerio Público como delito de **OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, previsto y sancionado en el primer párrafo de artículo 149° del Código Penal.

4.3. Pretensión Penal

El Ministerio Público solicitó se imponga al acusado **un año** de pena privativa de la libertad.

4.4. Pretensión Civil

El Ministerio Público ha solicitado por concepto de reparación civil la suma de **S/. 600.00 (seiscientos con 00/100 soles)**, sin perjuicio del pago de las pensiones alimenticias devengadas a favor de los agraviados.

4.5. Defensa Técnica y Autodefensa del Acusado

Reconociendo la responsabilidad penal en los hechos materia de imputación así como la pretensión civil, se acogió a la conclusión anticipada.

Quinto.- Del Acuerdo Propuesto

5.1. El Ministerio Público y la defensa del procesado hicieron conocer a este Despacho que habían llegado a un acuerdo sobre la pena, la misma que consiste en **DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN POR UN AÑO**, que estará condicionado al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: **a)** La prohibición de ausentarse de lugar de su residencia, sin autorización del Juzgado de Ejecución. **b)** Comparecerá de manera personal y obligatoria cada mes ante el Juzgado de Ejecución a fin de informar y justificar sus actividades. **c)** Deberá pagar el íntegro de la reparación civil en la forma, modo y plazo acordados con el Ministerio Público. **d)** La prohibición de cometer nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza.

Asimismo, ante el incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal, de manera progresiva y en el extremo más grave se revocará el periodo de prueba y la pena impuesta será efectiva.

5.2. Asimismo las partes convinieron el monto de la reparación civil a favor de los agraviados en **S/. 6,604.61 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 61/100 SOLES)**, que correspondiendo S/. 6,004.61 (seis mil cuatro con 61/100 soles) a las pensiones devengadas y S/. 600.00 (seiscientos con 00/100 soles) al daño moral irrogado; dicha suma será pagada en (10) diez cuotas mensuales consecutivas de la (01) primera a la (09) novena de S/. 660.00 (seiscientos sesenta con 00/100 soles) y la (10) decima cuota de S/. 604.61 (seiscientos cuatro con 61/100 soles), la primera cuota vencerá su pago hasta el día 20 de enero del 2020 y las siguientes cuotas vencerán su pago cada mes siguiente hasta el (20) vigésimo día calendario de cada uno de ellos, hasta completar la suma total acordada, las cuales serán mediante Depósito Judicial en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución; asimismo, en caso que el día de pago sea día inhábil el plazo será el día hábil siguiente más próximo.

Sexto.- Itinerario Procesal

En mérito al auto de citación a juicio se citó a los sujetos procesales a juicio oral. Se llevó el juzgamiento con la presencia del acusado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**. Instalada la audiencia, se escuchó el alegato de apertura del Ministerio Público, siendo que al tomar la palabra la defensa técnica del imputado, señaló abstenerse de tal exposición manifestando la intención de dicha parte procesal de acogerse a la conclusión anticipada. Así, al inicio del juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos, al preguntársele si admitía ser partícipe en calidad de autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; éste, previa consulta con su defensa técnica, aceptó los hechos objeto de acusación fiscal así como su responsabilidad penal, también aceptó la responsabilidad civil. Ante ello, se declaró la conclusión anticipada del juicio, se procedió a consultar a las partes respecto de algún acuerdo sobre la pena y reparación civil, siendo que los mismos acordaron todos los extremos de la pena y la reparación civil. Siendo ello así, el estado de la causa es el de expedirse sentencia la cual, en efecto, se emite el día de la fecha.

II. PARTE CONSIDERATIVA

Primero.- De la Conclusión Anticipada

El artículo 427° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencia vinculantes, tales como: el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008/CJ116 y el Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116 que si bien este último está referido a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de legalidad y proporcionalidad atañen a la conclusión anticipada. No obstante, la presencia del juzgador no es pasiva, para efectos de la homologación de la "conformidad" ya que, existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

Segundo.- Ley Penal Aplicable

2.1. Conforme a la acusación, es aplicable el tipo penal del delito de Omisión a la Asistencia Familiar previsto y penado en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal.

2.2. El texto normativo de tal numeral, prevé:

"Artículo 149.- Incumplimiento de Obligación Alimentaria.

El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres, o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.

2.3. Para la configuración del ilícito, conforme a los hechos materia de imputación en el presente caso, y que han sido oralizados por la titular de la acción penal, se requiere que el agente haya omitido cumplir con su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial.

Tercero.- Juicio de Subsunción

3.1. La conducta del acusado se adecua objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito antes referido tal como han sido expuestos los cargos por el Ministerio Público -los cuales son inmodificables- por cuanto se ha demostrado que **ALAN ELVIS PAXI QUISPE** no cumplió con su obligación alimenticia, es decir el pago de las pensiones alimenticias por la suma de **S/. 6,004.61** correspondientes al periodo comprendido desde 01 de agosto del 2017 al 31 de mayo del 2018, ordenado por el Segundo Juzgado de Familia del MBI de Paucarpata. Ello así se tiene del reconocimiento efectuado de manera expresa, libre y voluntaria por el acusado, en audiencia y previa consulta con su defensa técnica, al aceptar la responsabilidad de los hechos materia de imputación, ello conforme a la naturaleza de la conformidad en juicio.

3.2. No se ha alegado ni probado causa que justifique el actuar típico del acusado o que excluya su culpabilidad.

3.3. Por ello concurren todos los elementos del tipo, los mismos que han sido realizados con conocimiento y voluntad conforme se desprende de los hechos acreditados en autos, concurriendo además el elemento subjetivo, conforme al reconocimiento efectuado por el acusado.

3.4. En consecuencia, la conducta del encausado deviene en típica, antijurídica y culpable.

Cuarto.- Individualización de la Pena

4.1. El principio de Proporcionalidad, es aquel principio que exige al juzgador verificar que la pena guarde una relación de correspondencia con el injusto cometido por el agente, se encuentra reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, el que debe ser entendido como la correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar; por tanto constituye un límite al *IUS PUNIENDI*, en tanto exige un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación legal. Esto significaría que el principio de proporcionalidad debe guardar relación conforme a la culpabilidad, pero no siempre de acuerdo al injusto la culpabilidad puede coincidir con la misma, por cuanto esta puede resultar mayor a la culpabilidad concreta; entiéndase que los criterios para establecer la proporcionalidad deben atender aquellos vinculados al injusto, importancia del rango del bien jurídico protegido, grado de lesión del mismo, impacto social y los diferentes medios de comisión del hecho, entre otros aspectos, así, el juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad. En el caso que nos ocupa, se evidencia el actuar del acusado **ALAN ELVIS PAXI QUISPE**, es una conducta gravosa en relación al bien jurídico protegido a través de la Omisión a la asistencia Familiar, referido a la parte agravada, actividad ilícita que constituye un hecho reprochable.

4.2. La Fiscalía ha acordado con la defensa del acusado se imponga diez meses y quince días de pena privativa de libertad suspendida por un año, en caso de incumplimiento de reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal, de manera progresiva y en el extremo más grave se revocará el periodo de prueba y la pena impuesta será efectiva. Para lo cual, se procede a realizar la determinación judicial de la pena, en base a los siguientes parámetros.

4.3. Para el caso de autos, se toma en cuenta los criterios fundamentadores de la pena establecidos en el artículo 45º, 45º-A y 46 modificados e incorporados al Código Penal por la Ley Nº 30076.

4.4. Se procede a verificar criterios previstos en el artículo 45º-A señalado: **a) Espacio punitivo de determinación de pena básica:** El delito de omisión a la asistencia familiar, prevé una pena no mayor a tres años de pena privativa de libertad o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, en tal sentido corresponde hacer el análisis de la pena. **b) Determinación de pena concreta:** No presenta circunstancias agravantes genérica, se advierte la existencia de una circunstancia atenuante (carencia de antecedentes penales); entonces la pena se ubicará dentro del tercio inferior, es decir entre dos días a un año, por lo que se determina la pena en un año, quantum al que, conforme a lo sostenido por la titular de la acción penal, se le ha descontado 1/7 por la premialidad correspondiente a la conclusión anticipada, quedando la pena en diez meses y quince días, la cual se suspenderá por el plazo de un año, conforme al artículo 59 del Código Penal, considerando la prognosis positiva del agente, quien no se ausentará del lugar de su residencia, informará y justificará sus actividades cada mes ante el Juzgado de Ejecución, se ha comprometido a cancelar el íntegro del año causado, además no incurrirá en nuevo ilícito penal; y, del análisis de los antecedentes, conforme se tiene anotado teniéndose en cuenta las condiciones personales del actor así como las circunstancias del evento delictivo en el que ha participado, la naturaleza del mismo, y merituándose finalmente lo previsto en el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008-CJ/116 se concluye que debe ser aprobado.

Quinto.- Determinación de la Reparación Civil

5.1. El objeto civil se rige por los artículos 11º y 12º del Código Procesal Penal y 93º al 101º del Código Penal, precepto éste último que nos remite a las disposiciones correspondientes del Código Civil.

5.2. En el caso que nos ocupa se tiene que las partes han fijado la Reparación Civil a favor de los agraviados en el monto de **S/. 6,604.61 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 61/100 SOLES)**, que correspondiendo S/. 6,004.61 (seis mil cuatro con 61/100 soles) a las pensiones devengadas y S/. 600.00 (seiscientos con 00/100 soles) al daño moral irrogado; dicha suma será pagada en (10) diez cuotas mensuales consecutivas de la (01) primera a la (09) novena de S/. 660.00 (seiscientos sesenta con 00/100 soles) y la (10) decima cuota de S/. 604.61 (seiscientos cuatro con 61/100 soles), la primera cuota vencerá su pago hasta el

día 20 de enero del 2020 y las siguientes cuotas vencerán su pago cada mes siguiente hasta el (20) vigésimo día calendario de cada uno de ellos, hasta completar la suma total acordada, las cuales serán mediante Depósito Judicial en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución; asimismo, en caso que el día de pago sea día inhábil el plazo será el día hábil siguiente más próximo. Siendo que el monto establecido por tal concepto resulta razonable, estando a los extremos anotados y que el mismo no ha sido materia de controversia, debe ser aprobado.

Sexto.- Pronunciamiento sobre las costas

El artículo 497.5° del Código Procesal Penal establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz, siendo que, en el presente caso, al haber concluido el proceso por "conformidad", no procede la imposición de costas.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones administrando justicia a nombre del pueblo de quien emana dicha facultad,

FALLO:

Primero.- APROBANDO mediante la presente sentencia de conformidad, los acuerdos arribados entre el acusado debidamente asesorado por la defensa de elección, el Actor Civil y el Ministerio Público, durante el juicio oral; en consecuencia.

Segundo.- DECLARO a ALAN ELVIS PAXI QUISPE, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, como **AUTOR** del delito Contra La Familia en la modalidad de **OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR**, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 149° del Código Penal, en agravio de los menores **GIOVANI ELVIS PAXI HUARAHUARA** y **CAMILA NICOL PAXI HUARAHUARA** representados por **Hilda Huarahuara Mamani**. Como tal;

Tercero.- LE IMPONGO DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN POR UN AÑO, que estará condicionado al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: **a)** La prohibición de ausentarse de lugar de su residencia, sin autorización del Juzgado de Ejecución. **b)** Comparecerá de manera personal y obligatoria cada mes ante el Juzgado de Ejecución a fin de informar y justificar sus actividades. **c)** Deberá pagar el íntegro de la reparación civil en la forma, modo y plazo acordados con el Ministerio Público. **d)** La prohibición de cometer nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza.

Asimismo, ante el incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta, se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal, de manera progresiva y en el extremo más grave se revocará el periodo de prueba y la pena impuesta se hará efectiva.

Cuarto.- FIJO el monto de la **REPARACIÓN CIVIL** a favor de los agraviados en **S/. 6,604.61 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 61/100 SOLES)**, que correspondiendo S/. 6,004.61 (seis mil cuatro con 61/100 soles) a las pensiones devengadas y S/. 600.00 (seiscientos con 00/100 soles) al daño moral irrogado; dicha suma será pagada en (10) diez cuotas mensuales, consecutivas, de la (01) primera a la (09) novena de S/. 660.00 (seiscientos sesenta con 00/100 soles) y la (10) decima cuota de S/. 604.61 (seiscientos cuatro con 61/100 soles), la primera cuota vencerá su pago hasta el día 20 de enero del 2020 y las siguientes cuotas vencerán su pago cada mes siguiente, hasta el (20) vigésimo día calendario de cada uno de ellos, hasta completar la suma total acordada, las cuales se harán mediante Depósito Judicial en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado de Ejecución; asimismo, en caso que el día de pago sea día inhábil el plazo será el día hábil siguiente más próximo.

Quinto.- DISPONGO que no corresponde fijar el pago de costas en el presente proceso.

Sexto.- MANDO que consentida o ejecutoriada la presente, se cursen las comunicaciones correspondientes para su inmediato y estricto cumplimiento, y por esta mi sentencia, así me pronuncio, mando y firmo en audiencia pública de la fecha. **Regístrese y Comuníquese.-**



26
veintiseis

Caso SGF : 1506014504-2018-2612-0

Fiscal Adjunta responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez

DISPOSICIÓN DE INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE FISCAL N°01

Arequipa, siete de enero del año dos mil diecinueve.-

DADO CUENTA: En la fecha, los actuados de la carpeta fiscal N°1506014504-2018-2612-0, formada a mérito del Oficio N°9569-2018-0-FT-2JFP/MBJP, cursado por el Juez del Segundo Juzgado de Familia del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, mediante el cual remite los actuados del expediente N°9569-2018-2018-0-0412-JR-FT-02, seguido contra JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ, sobre Actos de Violencia Familiar, en agravio de BRIGIDA CUNO INOFUERTE; y

ATENDIENDO:

PRIMERO: NORMATIVIDAD PROCESAL PENAL APLICABLE VIGENTE:

El Nuevo Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 957, establece en su artículo VII del Título Preliminar, que: "La Ley Procesal Penal es de **aplicación inmediata**, incluso al proceso en trámite, y es la que rige al tiempo de la actuación procesal". De modo que la presente ley procesal al encontrarse vigente y que regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e investigación preparatoria, resulta aplicable para efectos de la calificación de la presente denuncia, conforme a lo normado en el artículo 334° y 335° del Código acotado.

SEGUNDO: HECHOS INVESTIGADOS:

Que, de los actuados remitidos se aprecia del Informe Policial N°195-18-NOVMACREPOL/REGPOLAQ/DOVPOS-CCB-SVF, formulado por la S2PNP Tula Quito Herrera, que con fecha 17 de agosto del 2018 a las 15:51 horas, la persona de Brigida Cuno Inofuerte se presentó a la Comisaría PNP de Ciudad Blanca denunciando que el día 14 de agosto 2018, en horas de la mañana fue víctima de violencia familiar (maltrato físico y psicológico) por parte de su conviviente Jorge Luis Cruz Enriquez, en circunstancias que se encontraba en su domicilio sito en AA.HH Posada de Cristo Comité 24, Mz. A Prima, lote 3, PP.JJ Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata, Arequipa, quien sin mediar palabra alguna le propino golpes de puño en el rostro, cabeza y en diferentes partes del cuerpo en presencia de sus tres menores hijos.

TERCERO: ADECUACIÓN DEL TIPO PENAL

Conforme a los hechos denunciados, estos se adecuarían a lo previsto por el **Artículo 122°-B del Código Penal**, que sanciona el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de **AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, modificado por la Ley N°30819, publicada el 13 julio 2018, que señala:

"El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda.

La pena será no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes:

1. Se utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.

2. El hecho se comete con ensañamiento o alevosía.
3. La víctima se encuentra en estado de gestación.
4. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad o si padeciera de enfermedad en estado terminal y el agente se aprovecha de dicha condición.
5. Si en la agresión participan dos o más personas.
6. Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente.
7. Si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o adolescente.

Asimismo, el Artículo 124-B del Código Penal, señala con relación al **DAÑO PSÍQUICO Y LA AFECTACIÓN PSICOLÓGICA, COGNITIVA O CONDUCTUAL**:

"El nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo, con la siguiente equivalencia:

- a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.
- b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.
- c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico.

La afectación psicológica, cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico."

En éste orden de ideas, estando a la forma y circunstancia como se suscitaron los hechos materia de denuncia, éstos serán investigados por el delito contra la **Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de Agresiones en contra de los Integrantes del Grupo Familiar y Afectación Psicológica**, previsto en el Artículo 122º-B y Art. 124-B del Código Penal; sin embargo, para poder emitir pronunciamiento sobre la tipificación final y así verificar la procedencia o no de la formalización o continuación de la investigación preparatoria, resulta imperativo realizar actos de investigación a fin de incorporar ciertos elementos de convicción a la presente investigación, para un mejor esclarecimiento de los hechos, consecuentemente es necesario fijar el plazo establecido por ley para realizar las diligencias pertinentes.

CUARTO: DEL PRESUPUESTO DE IMPUTACIÓN PARA EL MINISTERIO PÚBLICO

Le corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función; ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte, de conformidad al artículo 159º numerales 4) y 5) de la Constitución Política del Estado de 1993, en concordancia con lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, "El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio". "El Ministerio Público está obligado de actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, lo que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional"; lo que se establecería que el Ministerio Público conduce la investigación preparatoria, persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso al imputado preparar su defensa. Así mismo, tiene por finalidad "determinar si la conducta inculpada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado"; por lo que su ejercicio está condicionado al cumplimiento previo de requisitos mínimos, tal como lo preceptúa el numeral 1) del artículo 321º del Código Procesal Penal.

QUINTO: PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

El artículo 330º numeral 2) del Código Procesal Penal establece: "Las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la ley, asegurarlas debidamente", asimismo el artículo 334 numeral 2) del mismo cuerpo normativo preceptúa que: "**El plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3º, es de setenta días**, salvo que se produzca la detención de

una persona. No obstante, ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto, según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación (...). En el presente caso deberá obtenerse la declaración ampliatoria de la denunciante y obtenerse la declaración del investigado con la asistencia de su abogado defensor, así como de obtenerse los resultados de la evaluación psicológica practicada a la parte afectada, recabarse los antecedentes penales y judiciales que pudiera registrar el investigado y demás diligencias que resulten necesarias; motivo por el cual el plazo a utilizar en la presente investigación será de 60 días.

En consecuencia, estando a los fundamentos antes esgrimidos y de conformidad con lo prescrito en el artículo 159º numeral 4) y 5) de la Constitución Política del Perú; artículo 23º del Código Penal; los artículos IV del Título Preliminar, 60º, 61º, 64º, 65º, 321º numeral 1), 330º y 334º numeral 2) del Código Procesal Penal; y los artículos 1º y 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, este Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata,

III. DISPONE:

PRIMERO: DAR INICIO A LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE FISCAL, por el plazo de **SESENTA (60) DÍAS**, en la investigación seguida contra **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, por la comisión del delito **contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de Agresiones en contra de los Integrantes del Grupo Familiar (VIOLENCIA FISICA Y PSICOLOGICA)**, previsto en el primer párrafo del Artículo 122º-B y Art. 124-B del Código Penal, en agravio de **BRIGIDA CUNO INOFUENTE**, debiendo actuarse las siguientes diligencias:

1) Se CITE a la denunciante **BRIGIDA CUNO INOFUENTE**, a efecto que rinda su ampliación de declaración ante este Despacho Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, sito en la calle Teniente Alcántara s/n, Urb. Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, Arequipa, el día **30 DE ENERO DEL 2019 a las 14:00 horas (tarde)**; a efecto que narre en forma detallada los hechos, precise los datos de identidad de sus menores hijos que presenciaron la agresión inferida a su persona, así como proporcione documentación idónea que determine los daños y perjuicios ocasionados en su agravio con motivo de las lesiones que presentó, debiendo asimismo indicar de qué manera fue maltratada psicológicamente por el investigado.

2) Se oficie al **CEM - CENTRO DE EMERGENCIA MUJER DE CAMPO MARTE** a fin que remitan con el carácter de muy urgente los resultados de la evaluación psicológica practicada a Brigida Cuno Inofuente, conforme fuera requerido con el oficio N°434-2018-NOVMACREGPOL-REGPOLAQP/DIVPOS-CCB "B" -SVF, por la Comisaría PNP de Ciudad Blanco con fecha 17 de agosto del 2018.

3) **RECABESE** la declaración del investigado **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ** el día **30 DE ENERO DEL 2019 a las 15:00 horas (tarde)**, a fin de que presente su descargo respecto a la imputación formulada en su contra, oportunidad en la que **deberá concurrir de manera obligatoria con su abogado defensor**, debiendo apersonarse a este despacho fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, sito en la calle Teniente Alcántara s/n, Urb. Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, Arequipa, con dicho fin.

4) **SE RECABE** los posibles antecedentes judiciales y penales que pudiera registrar el investigado **Jorge Luis Cruz Enriquez**.

5) **SE ACTÚE** cuanta diligencia sea necesaria para el pleno esclarecimiento del hecho denunciado y concluida las diligencias proceder conforme corresponda.

SEGUNDO: Notifíquese conforme corresponda a las partes. Y Oficiese.-
/bstg



Caso SGF : 1506014504-2018-2612-0

Fiscal Adjunta responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez

DISPOSICIÓN FISCAL N°02

Arequipa, doce de abril del dos mil diecinueve.-

I. DADO CUENTA: En la fecha, y puesto a Despacho los actuados de la investigación preliminar seguida contra Jorge Luis Cruz Enriquez, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de Agresiones contra los Integrantes del Grupo Familiar, en agravio de Brigida Cuno Inofuente; y

II. ATENDIENDO:

Primero: Hechos investigados:

Que, de los actuados remitidos se aprecia del Informe Policial N°195-18-NOVMACREPOL/REGPOLAQ/DOVPOS-CCB-SVF, formulado por la S2PNP Tula Quito Herrera, que el día 17 de agosto del 2018 a las 15:51 horas, la persona de Brigida Cuno Inofuente se presentó a la Comisaría PNP de Ciudad Blanca, denunciando que el día 14 de agosto 2018, en horas de la mañana fue víctima de violencia familiar (maltrato físico y psicológico) por parte de su conviviente Jorge Luis Cruz Enriquez, en circunstancias que se encontraba en su domicilio sito en AA.HH Posada de Cristo Comité 24, Mz. A Prima, lote 3, PP.JJ Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata, Arequipa, quien sin mediar palabra alguna le propinó golpes de puño en el rostro, cabeza y en diferentes partes del cuerpo en presencia de sus tres menores hijos.

De los actos de investigación preliminar recabados se tiene:

1. Informe Policial N°195-2018-NOVMACREGPOL-REGPOLAQ/DIVOPUS-CCB-SIVF de fs. 04/05, elaborado por el personal de la Sección Familia de la Comisaría PNP de Ciudad Blanca con fecha 21 de agosto 2018, donde se describen los hechos materia de la presente investigación y se hace constar las diligencias practicadas con relación a la denuncia formulada por Brigida Cuno Inofuente.

2. Acta de Denuncia Policial de fecha 17 de agosto del 2018 de fs. 06, donde constan los hechos que son materia de investigación y que fueron denunciados por Brigida Cuno Inofuente.

3. Declaración de Brigida Cuno Inofuente de fs. 07/08, donde señala que el denunciado es su conviviente y padre de sus dos menores hijos; con relación a los hechos indica "() ... a las 10:30 horas, mientras se encontraba en su casa, le llame la atención a mi menor hija porque se quito la ropa (calata), siendo el caso que le di un palmaso en su manito y en sutrasero (poto), indicandole que no se quitara la ropa, fue en ese momento que al ponerse a llorar le salio sangre de la nariz y al parecer esto vio mi conviviente y vino por la parte de mi espalda y medio golpes de puño en la cabeza, en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, no dandome oportunidad de defenderme..."

4. Certificado Médico Legal N°003390-VFL practicado a Brigida Cuno Inofuente de fs. 11, donde en el examen médico presentó "Equimosis verdosa de 1x3cm en parpado inferior del ojo derecho. Equimosis morado verdosa de 2x2cm en parpado inferior de ojo izquierdo. Tumefacción con equimosis morado verdosa de 1x1cm en dorso nasal. Tumefacción con equimosis morado verdosa de 3x4cm en mitad de la frente. Equimosis morada de 1x1cm en mitad del labio superior. Tumefacción de 2x2cm en región parietal derecha. Lesiones compatibles con objeto contundente." requiriendo de 01 día de atención facultativa por 03 día de incapacidad médico legal.

5. Auto Final Resolución N°01 de fecha 23 de agosto del 2018, emitida por el Segundo Juzgado de Familia de Paucarpata en el expediente judicial N°09569-2018-0-0412-JR-FT-02, donde se resuelve dictar medidas de protección a favor de la agraviada.

6. Oficio N°41139-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ cursado por el Coordinador del Registro Judicial Arequipa con el cual se informa que Jorge Luis Cruz Enriquez, NO registra antecedentes penales y judiciales.

7. Informe Psicológico N°478-2018/MIMP/PNPCVFS/CEM-CCM/PS-AAA practicado a la denunciante Brigida Cuno Inofuente, por el personal psicólogo del Centro de Emergencia Mujer, en donde se concluye que "la examinada presenta afectación emocional, relacionado a evento de tipo violento..."

Tercero: Adecuación del Tipo Penal:

Conforme a los hechos denunciados, estos se adecuarían a lo previsto por el **Artículo 122°-B del Código Penal**, que sanciona el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de **AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, modificado por la Ley N°30819, publicada el 13 julio 2018, que señala:

"El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda..."

Asimismo, el **Artículo 124-B del Código Penal**, señala con relación al **DAÑO PSÍQUICO Y LA AFECTACIÓN PSICOLÓGICA, COGNITIVA O CONDUCTUAL**:

"El nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo, con la siguiente equivalencia:

- Lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.
- Lesiones moderadas: nivel moderado de daño psíquico.
- Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico.

La afectación psicológica, cognitiva o conductual, puede ser determinada a través de un examen pericial o cualquier otro elemento probatorio objetivo similar al que sea emitido por entidades públicas o privadas especializadas en la materia, sin someterse a la equivalencia del daño psíquico."

Cuarto: Valoración de los hechos: Juicio de subsunción final y atribución de responsabilidad penal.-

En este punto corresponde determinar si los hechos denunciados se adecuan al tipo penal materia de análisis y si existen elementos de juicio suficientes y razonables, que determinen la materialidad del delito y la probable vinculación de la investigada en su comisión.

Así, el Artículo 8° de la Ley N°30364, señala que: **a) Violencia física.** Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye al maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. **b) Violencia psicológica.** Es la acción u omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que requiera para su recuperación.

En cuanto a la **violencia psicológica**, es necesario hacer presente, como bien refiere GARRIDO/STANGELAND/REDONDO, esta suele iniciarse a través de bromas y acosos para luego trasladarse a los insultos y humillaciones. Por su naturaleza, puede ser un medio capaz de ser utilizado tanto por hombres como por mujeres.⁽¹⁾ Asimismo, la norma materia de análisis ha considerado la violencia psicológica, como la conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Es así, que la violencia psíquica, se caracteriza por la

⁽¹⁾ REYNA ALFARO, Luis Miguel. Delitos Contra la Familia y de Violencia Doméstica. Tercera Edición. Marzo 2016. Juristas Editores E.I.R.L. Pág. 250.

presencia continuada de intimidación o de amenazas, por el recurso a humillaciones graves y reiteradas, que contribuyan a socavar la autoestima de la víctima, por la imposición del aislamiento social, por el sometimiento a restricciones económicas graves (cuando ella carece de recursos propios) por la desvalorización total como persona (calificándola, por ejemplo, de loca) o por un acoso continuado.⁽²⁾ MONTALBAN HUERTAS, define a la **violencia psicológica** como "la que se exterioriza en forma de amenazas, intimidaciones, insultos en público, desprecios, espionaje, control permanente, comentarios despectivos"... "son actos que persiguen minar la autoestima y la dignidad de la víctima"... Este tipo de conductas van minando progresivamente la autoestima de la víctima, generando en ella un sentimiento de inseguridad y de escasa valía personal.

4.1. En el presente caso, respecto a los hechos de **violencia psicológica** denunciados, teniendo en cuenta las diligencias practicadas, se advertiría que no existen elementos que evidencien y/o determinen la materialidad del delito investigado, toda vez que, si bien la persona de Brigida Cuno Inofuente al momento de presentar su denuncia y brindar su declaración, señala "que fue víctima de maltrato psicológico por parte de su conviviente, quien además de agredirla físicamente, la insultó de "perro, puta, porque no te mueres...", presentando por ello "afectación emocional..." conforme se verifica del Informe Psicológico N°478-2018/MIMP/PNCV FS/CEM CCM/PS-AAA practicado por parte del personal psicólogo del Centro de Emergencia Mujer de Campo Marte (fs. 34/35); también es cierto, que en dicho pronunciamiento no se ha precisado en forma objetiva que dicha persona haya presentado *afectación psicológica*, cognitiva o conductual pues si bien solo se hace referencia a una "afectación emocional", ello no implica que los actos que habría realizado el investigado (insultos, amenazas en forma genérica) le hayan tendido a controlar o impedir a su persona contra su voluntad, mucho menos a minar su autoestima por el cual se le haya ocasionado un daño emocional a su persona o salud; por lo que, siendo ello así, debe disponerse el archivo del caso, ello teniendo en cuenta asimismo que la sindicación efectuada por la parte agraviada no cumpliría los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario N°02-2005/CJ-116, que precisa "para que la declaración de la parte agraviada pueda ser considerada prueba válida de cargo y por ende virtualidad procesal para la presunción de inocencia del imputado, debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria", lo que en el caso de autos no se da.

Por otro lado, en cuanto al extremo de la **Violencia Física**, estando a los actos de investigación practicados se ha logrado establecer que el día 14 de agosto del 2018, aproximadamente a las 10:30 horas, la agraviada Brigida Cuno Inofuente, fue víctima de agresión física en el interior de su inmueble ubicado en el AA.HH. La Posada de Cristi comité 24, Mz. A prima, Lote 3, PP.JJ. Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata, donde el imputado al ver que a su menor hijo se ponía a llorar y le salió sangre de la nariz, procedió darle de golpes de puño en la cabeza, rostro y diferentes partes del cuerpo y por el cual dicha persona ha presentado lesiones físicas conforme se tiene de lo descrito en el Certificado Médico Legal N°003390-VFL, donde se ha concluido que ha requerido de 01 día de atención facultativa por 03 días de incapacidad médica legal; siendo ello así, se evidencia la existencia de la comisión del delito materia de análisis en cuanto a este extremo, debiendo procederse a formular el correspondiente requerimiento de Acusación Directa al Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, a tenor de lo establecido por el Art. 336º numeral 4) del Código Procesal Penal.

Por lo que, este Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica del Ministerio Público y las normas procesales del Código Procesal Penal citado,

III. DISPONE:

Primero: Declarar que **NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACION PREPARATORIA** contra **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de **AGRESIONES EN CONTRA LOS INTERGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (VIOLENCIA**

⁽²⁾ CASTILLO APARICIO, Johnny E. Comentarios a la Nueva Ley de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes Del Grupo Familiar. Primera Parte. UBI LEX ASESORES S.A.C. Primera Edición Mayo 2016. Definición y Tipos de Violencia contra las Mujeres. Pág. 67.

45

PSICOLOGICA), previsto en el Art. 122-B del C.P., en agravio de BRIGIDA CUNO INOFUENTE. En consecuencia se ordena el ARCHIVO de lo actuado en este extremo.

Segundo: FORMULAR REQUERIMIENTO DE ACUSACION DIRECTA, en contra de JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (VIOLENCIA FISICA), previsto en el Art. 122-B primer párrafo del Código Penal, en agravio de BRIGIDA CUNO INOFUENTE; por ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, conforme al fundamento 4.4) expuesto en la presente disposición fiscal.

Tercero: Notifíquese conforme corresponda a las partes.-
/bstg



DR. LUIS GUILLERMO VERA ~~aviso~~
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prov. Penal Corp. de Paucarpata
Distrito Fiscal de Arequipa



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**



Caso SGF : 1506014504-2018-2612
Imputado : Jorge Luis Cruz Enriquez
Delito : Agresiones contra los Integrantes de Grupo Familiar
Agravada : Brigida Cuno Infuente

EXPEDIENTE :

SUMILLA : ACUSACION FISCAL DIRECTA

Fiscal Adjunta responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - SEDE MBJ PAUCARPATA

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, ante usted me presento y expongo;

I. REQUERIMIENTO:

Que, al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los Arts. 60°, 336° numeral 4) y 349° del Código Procesal Penal, formulo **REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL DIRECTA** en contra de **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, como presunto autora del delito Contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad **AGRESIONES CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (VIOLENCIA FISICA)**, previsto en el artículo 122°-B primer párrafo del Código Penal, en agravio de **BRIGIDA CUNO INFUENTE**; en los términos siguientes:

DATOS PERSONALES DE LA IMPUTADO:

NOMBRE Y APELLIDOS : JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD : 45463565
FECHA DE NACIMIENTO : 13/12/1988
EDAD : 31 años de Edad.
LUGAR DE NACIMIENTO : distrito, provincia y departamento de Arequipa.
NOMBRE DEL PADRE : Jorge Raul
NOMBRE DE LA MADRE : Rosalia
SEXO : Masculino
GRADO DE INSTRUCCIÓN : secundaria completa
ESTADO CIVIL : soltero
OCUPACIÓN : se desconoce
TELEFONO : se desconoce
DOMICILIO REAL : Av. Revolucion Nro. 1007. PP.JJ. Ciudad Blanca, Paucarpata.
DOMICILIO PROCESAL : no proporciono
ABOGADO DEFENSOR : no proporciono

III. DATOS DE LA PARTE AGRAVIADA:

- **BRIGIDA CUNO INOFUENTE** con DNI 47515432, quien tiene fijado su domicilio real en AA.HH. La Posada de Cristo Comite 24, Mz, A Prima, Lt. 3, PP.JJ. Ciudad Blanca del distrito de paucarpata, Arequipa, Arequipa, con teléfono de contacto 967440223.

IV.- DESCRIPCIÓN DEL HECHO ATRIBUIDO A LA ACUSADA:

CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:

1. La agravada Brigida Cuno Inofuente y el imputado Jorge Luis Cruz Enriquez, forman parte de un mismo

grupo familiar, al resultar ser su convivientes, teniendo tres hijos en común, fijando su domicilio en el AA.HH. La Posada de Cristo Comite -24, Mz-a Prima Lt-3, PP.JJ. Ciudad Blanca del distrito de paucarpata, Arequipa, Arequipa.

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES:

2. El día 14 de agosto del 2018, aproximadamente a las 10:30 horas, la agraviada en circunstancias que le llamó la atención a su menor hija, porque se quito la ropa, dándole un palmaso en su manito y en su trasero, indicándole que no se quitará la ropa, momentos en que se puso a llorar dicha menor y le salio sangre de la nariz, acto que al parecer fue visto por su conviviente, quien vino por la espalda y le dio golpes de puño en la cabeza, en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, no dándole oportunidad a la agraviada en defenderse, posteriormente esta cogio la ropa de sus hijos y se retiro de la casa.

CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:

3. Que, ante tales hechos el agraviado se constituyó a la Comisaría a realizar la denuncia correspondiente, donde al pasar el reconocimiento médico legal presentó al examen médico "equimosis verdosa de 1x3cm en parpado inferior del ojo derecho. Equimosis morado verdosa de 2x2cm en parpado inferior de ojo izquierdo. Tumefacción con equimosis morado verdosa de 1x1cm en dorso nasal. Tumefacción con equimosis morado verdosa de 3x4cm en mitad de la frente. Equimosis morada de 1x1cm en mitad del labio superior. Tumefacción de 2x2cm en región parietal derecha", lesiones compatibles con objeto contundente, requiriendo de **01 día atención facultativa por 03 de incapacidad médico legal**, según el Certificado Médico Legal N°003390-VFL; procediendo por tal motivo el Segundo Juzgado de Familia de Paucarpata, mediante Acta de Audiencia Oral, Auto Final Resolución N°01 de fecha 23 de agosto del 2018, emitido en el expediente judicial N°09569-2018-0-0412-JR-FT-02 a dictar las medidas de protección a favor de la agraviada por la violencia física ejercida hacia su persona por el imputado.

SITUACION CONCRETA:

En los hechos extremos, se atribuye al imputado **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, haber ocasionado lesiones físicas, por actos de violencia familiar de manera dolosa, en el cuerpo y salud de la agraviada **BRIGIDA CUNO INOFUENTE** quien es su CONVIVIENTE, el día 14 de agosto del 2018, en circunstancias que se la agraviada se encontraba en su domicilio, donde el imputado procedió a agredirla físicamente, luego que está llamara la atención a su menor hija por haberse quitado la ropa y darle palmaso en el trasero, donde el acusado, ver ese hecho se aproximó por la espalda, procediendo a propinarle a la agraviada golpes de puño en el rostro, en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo; ocasionándole así, lesiones físicas que han requerido de 01 día de atención facultativa por 03 día de Incapacidad médico legal, conforme al Certificado Médico Legal N°003390-VLF.

V. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Este Despacho cuenta con los siguientes elementos de convicción que revelan la comisión del delito imputado y vinculan a la imputada con los hechos:

5.1. Informe Policial N°195-2018-NOVMACREGPOL-REGPOLAQP/DIVOPUS-CCB-SIVF de fs. 04/05, elaborado por el personal de la Sección Familia de la Comisaría PNP de Ciudad Blanca con fecha 21 de agosto 2018, donde se describen los hechos materia de la presente investigación y se hace constar las diligencias practicadas con relación a la denuncia formulada por Brigida Cuno Inofuente.

5.2. Acta de Denuncia Policial de fecha 17 de agosto del 2018 de fs. 06, donde constan los hechos que son materia de investigación y que fueron denunciados por Brigida Cuno Inofuente.

5.3. Declaración de Brigida Cuno Inofuente de fs. 07/08, donde señala que el denunciado es su conviviente y padre de sus dos menores hijos; con relación a los hechos indica "() ... a las 10:30 horas, mientras se encontraba en su casa, le llame la atención a mi menor hija porque se quito la ropa (calota), siendo el caso que le di un palmaso en su manito y en su trasero (poto), indicándole que no se quitara la ropa, fue en ese momento que al ponerse a llorar le salio sangre de la nariz y al parecer esto vio mi conviviente y vino por la

parte de mi espalda y medio golpes de puño en la cabeza, en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, no dándome oportunidad de defenderme..."

5.4. Certificado Médico Legal N°003390-VFL practicado a Brigida Cuno Inofuente de fs. 11, donde en el examen médico presentó "Equimosis verdosa de 1x3cm en párpado inferior del ojo derecho. Equimosis morada verdosa de 2x2cm en párpado inferior de ojo izquierdo. Tumefacción con equimosis morada verdosa de 1x1cm en dorso nasal. Tumefacción con equimosis morada verdosa de 3x4cm en mitad de la frente. Equimosis morada de 1x1cm en mitad del labio superior. Tumefacción de 2x2cm en región parietal derecha. Lesiones compatibles con objeto contundente," requiriendo **de 01 día de atención facultativa por 03 días de incapacidad médico legal.**

5.5. Auto Final Resolución N°01 de fecha 23 de agosto del 2018, emitida por el Segundo Juzgado de Familia de Paucarpata en el expediente judicial N°09569-2018-0-0412-JR-FT-02, donde se resuelve dictar medidas de protección a favor de la agraviada.

5.6. Oficio N°41139-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ cursado por el Coordinador del Registro Judicial Arequipa con el cual se informa que Jorge Luis Cruz Enriquez, NO registra antecedentes penales y judiciales.

VI.- GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO:

El artículo 23° del Código Penal, califica como **autor** al que realiza por sí (autoría directa) o por medio de otro (autoría mediata) el hecho punible, mientras que el título de coautor, quienes lo cometan conjuntamente.

En el presente caso, se incrimina al Acusado **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, el hecho de haber ocasionado lesiones físicas, por actos de violencia familiar de manera dolosa, en el cuerpo y salud a la agraviada **BRIGIDA CUNO INOFUENTE**, quien es su conviviente, el día 14 de agosto del 2018 a las 10:30 horas propinándole golpes de puño en el rostro, en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo, y por el cual ha requerido de **01 día de atención facultativa por 03 días de incapacidad médico legal**, conforme al resultado del Certificado Médico Legal N°003390-VFL.

Al sentido corresponde al mismo el título de **AUTOR** del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de **AGRESIONES CONTRA LAS MUJERES O LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, por cuanto la imputación revela un dominio del curso de los acontecimientos para lograr su finalidad.

VII.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD:

Conforme lo sostiene el autor Víctor Prado Saldarriaga, las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito. Es decir, posibilitan valorar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita (antijuricidad del hecho); o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta (culpabilidad del agente). Por tanto la función principal de las circunstancias no es otra que coadyuvar a la graduación o determinación del quantum o extensión de la pena concreta aplicable al hecho punible cometido.

En el caso, no concurre ningún elemento negativo del tipo (error de tipo, consentimiento, adecuación social, causa de justificación, legítima defensa, error de prohibición, graves alteraciones en la conciencia, percepción, etc.), que excluya, justifique o evite el reproche de la acción perpetrado por el imputado.

VIII.- SOLICITUD PRINCIPAL DE: TIPIFICACIÓN, PENA, REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS, ACCESORIAS.

8.1.- TIPIFICACION

El hecho que se le atribuye al acusado **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, es el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad de **AGRESIONES EN CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, previsto en el Art.122-B primer párrafo del Código Penal (modificado por la Ley N°30819 de fecha 13 de julio del 2018), que señala:

"El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no

califique daño psíquico a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda."

Artículo 108*-B: "Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia Familiar..."

8.2. CUANTIA DE LA PENA

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los Principios de Lesividad y Proporcionalidad previstas en los artículos IV y VIII respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito; esto es, la naturaleza dolosa del hecho y el daño que ocasionó la conducta delictuosa del acusado a la parte agraviada; además que la sanción penal debe estar acorde no sólo con la culpabilidad del agente, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito que es materia de acusación fiscal.

Asimismo, el Acuerdo Plenario N°1-2008/CJ-116 de las Salas Permanentes de la Corte Suprema de la República, en su fundamento número 7) se precisa "que el Juez tiene un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar la pena, en coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (Art. II, IV, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal), bajo estricta observancia del deber de motivación, y teniendo en cuenta las circunstancias contenidas en los artículos 46, 46-A, 46-B y 46-C del Código Penal".

Conforme lo sostiene la doctrina nacional y lo ha establecido la Corte Suprema en diversas sentencias, debe identificarse primero la pena básica, que en el presente caso está determinado por el mínimo y el máximo de la pena conminada para el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en su modalidad Lesiones en su forma de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, previsto en el Art.122-B primer párrafo del Código Penal y que es materia de la acusación, lo cual es NO MENOR DE UNO NI MAYOR DE TRES AÑOS.

Luego se debe identificar la pena concreta que deberá hacerse dentro de los límites prefijados en la pena básica, y el máximo considerándose según su naturaleza: las circunstancias comunes o genéricas reguladas principalmente en el Artículo 46° del Código Penal y circunstancias especiales reguladas en la parte especial y en conexión funcional con determinados delitos; y según su efectividad: circunstancias atenuantes, que señalan un menor desvalor de la conducta ilícita o un menor reproche de culpabilidad; y circunstancias agravantes, que contienen un mayor reproche de culpabilidad sobre su autor.

Para valorar las circunstancias genéricas prescritas en el Artículo 45° del Código Penal, se debe tener en cuenta:

- a) Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente: De los antecedentes no se ha determinado que el investigado haya sufrido o sufra de alguna presunta carencia social.
- b) Su cultura y sus costumbres: Conforme a los datos registrados en su declaración el imputado cuenta con grado de estudios secundaria completa, lo que no le implica el desconocimiento de las normas sociales, ni mucho menos un desconocimiento mínimo de las reglas sociales y jurídicas en el desarrollo de sus actividades.
- c) Los intereses de la víctima de su familia o de las personas que de ella dependen: El comportamiento del acusado, dado su grado de cultura y consecuentemente el conocimiento de lo injusto, ha causado un daño y perjuicio a la parte agraviada, sin siquiera advertirse de parte del mismo la intención de reparar de manera espontánea el daño ocasionado.

La Ley N° 30076, ha incorporado el artículo 45-A, donde se detalla sobre la individualización de la pena, y en

el numeral 2º establece: **"toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena."**

Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad.

El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas:

1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes.

2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas:

a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurren únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior.

b) Cuando concurren circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio.

c) Cuando concurren únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio superior.

3. Cuando concurren circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera:

a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior;

b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior; y

c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito.

Artículo 46. Circunstancias de atenuación y agravación

Constituyen **circunstancias de atenuación**, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible las siguientes: "a) La carencia de antecedentes penales; b)..."

Constituyen **circunstancias agravantes**, siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible, las siguientes: "a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad; b)..."

Siendo ello así, y advirtiéndose en el presente caso que concurre una circunstancia atenuante, al no tener antecedentes penales la imputada, corresponde efectuar la petición de la imposición de la pena, dentro del margen del tercio inferior, conforme a lo prescrito en el inciso a) del numeral 2 del artículo 45-A del Código Penal; y encontrándose la conducta de la acusada Jennifer Flores Sarco, dentro del primer párrafo del artículo 122º-B del Código Penal, se procede al desarrollo de la individualización de la pena de manera gráfica:

DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD – AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR		
La pena es: "no menor de un año ni mayor de tres años"		
Pena mínima (un año)	↔	Pena máxima (tres años)
01 año – 01 año 08 meses (Tercio Inferior)	01 año 08 meses – 02 años 04 meses (Tercio Intermedio)	02 años 04 meses – 03 años (Tercio Superior)

De lo expuesto, la pena que se propone a imponer al ACUSADO JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ, es de 01 AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter de EFECTIVA, conforme a lo previsto por el último

párrafo del Art. 57° del C.P.; así como la pena de **Inhabilitación** de aproximarse a la víctima conforme a lo previsto por el Art. 36 numeral 11) del Código Penal, por el plazo de **06 MESES**; debiéndose indicar que la pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

IX. EL MONTO DE LA REPARACION CIVIL, LOS BIENES EMBARGADOS O INCAUTADOS AL ACUSADO, O TERCERO CIVIL, QUE GARANTIZAN SU PAGO Y LA PERSONA A QUIEN CORRESPONDA PERCIBIRLO

Que, de conformidad con lo prescrito por el Art. 92° del Código Penal, todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así, que en aquellos casos en los que la conducta del agente produce un daño, debe regir el principio del daño causado, es decir, tener en cuenta la repercusión de la conducta incriminada en la víctima, por cuya razón la reparación civil debe de alguna manera tender a compensar y resarcir dicho agravio, fijándose prudencialmente de acuerdo a la magnitud del mismo.

Que, conforme lo señala el Artículo 11° del Código Procesal Penal: *"El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso."*

En mérito a lo expuesto y considerando lo previsto por el Art. 93° del C.P., donde se señala que la reparación civil comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. **La indemnización de los daños y perjuicios**. En este extremo se debe considerar que en el presente caso no resulta factible o viable la restitución de algún objeto o cosa, pues la afectación al bien jurídico protegido no consistió en un despojo o en la destrucción física de algún bien o cosa, sino en la afectación a la salud, integridad corporal del agraviado por la violencia física⁽¹⁾ ejercida hacia su persona y que resulta de uso de carácter irreversible por las secuelas ocasionadas, por lo cual corresponde fijar en el caso la indemnización de daños y perjuicios.

En todo caso, respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que el mismo puede ser de dos categorías: a) **Daño patrimonial**: i) Daño emergente.- Pérdida patrimonial efectivamente sufrida; ii) Lucro cesante.- Ganancia frustrada o dejada de percibir. b) **Daño extrapatrimonial**: i) **Daño moral**; Daño a la persona.- Existe en la doctrina moderna una tendencia cada vez más fuerte a hablar únicamente del daño a la persona, dado lo gaseoso y relativo del concepto del daño moral. Evidentemente, ambas categorías del daño patrimonial y extrapatrimonial están referidas tanto a la responsabilidad civil contractual como extracontractual.

En el caso concreto se aprecia **se aprecia que el daño causado a la agraviada son imputables al acusado, toda vez que con su conducta se ha afectado el bien jurídico tutelado del ilícito que se le atribuye**; de otro lado, se tiene que dicha conducta no se encuentra amparada en modo alguno por el derecho por lo cual es antijurídica, subsistiendo como un factor de atribución uno de tipo doloso, pues la conducta se ha realizado con conciencia y voluntad de agraviar el bien jurídico protegido, siendo el resultado lesivo una consecuencia directa del accionar del acusado, **debiendo tenerse que el daño que se aprecia en el presente caso viene constituido por el daño extrapatrimonial correspondiente al "daño moral"**, inferido en derechos de las personas o en valores que pertenecen más al campo de la afección que de la realidad económica.

Por tales consideraciones, este Despacho Fiscal solicita que EL ACUSADO JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ, abone por concepto de **REPARACION CIVIL** la suma de **S/500.00 (QUINIENTOS SOLES)** a favor de la agraviada **BRIGIDA CUNO INOFUENTE**, quien es su conviviente.

Factor de atribución: En el caso de autos, se tiene el dolo como factor de atribución de la responsabilidad civil.

⁽¹⁾ Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar ocasional, sin importar el tiempo que requiera para su recuperación. (CASTILLO APARICIO, JOHNNY E., Comentarios a la Nueva Ley de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes el Grupo Familiar) pág. 61

Relación de causalidad: El haber ocasionado lesiones físicas genera un daño a la salud de la persona, más aún si se comete el acto por parte de un integrante del grupo familiar.

X.- SOLICITUD ALTERNATIVA DE TIPIFICACIÓN:

Ninguna.

XI. RELACION DE BIENES QUE GARANTIZAN LA REPARACION CIVIL

En autos no obra oficio alguno que informe que la imputado JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ cuente con bienes muebles y/o inmuebles inscritos a su favor.

XII. LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS PARA SU ACTUACION EN AUDIENCIA

a) Prueba Testimonial y Examen de Peritos:

Nº	Condición	Nombre y Apellido	Domicilio	Extremos de la declaración – utilidad y pertinencia
1	Agraviada	BRIGIDA CUNO INOFUENTE	Domicilio real: AA.HH. La Posada de Cristo Comite 24, Mz, A Prima, Lt. 3, PP.JJ. Ciudad Blanca del distrito de paucarpata, Arequipa, Arequipa	FINALIDAD: Testificar sobre la forma y circunstancias en que se han dado los hechos que se atribuyen al acusado, de la denuncia verbal presentada a nivel policial; narrará en forma detallada la forma en que se le ocasionaron las lesiones que presentó, así como del daño y perjuicio ocasionado a su persona. UTILIDAD: probará la agresión física inferida en su agravio y producto de las cuales se le ocasiono lesiones a su integridad corporal, así como del perjuicio causado en su agravio. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
2	Perito Médico Legista	ANGEL BUENO OCHOA	Domicilio Laboral: Instituto de Medicina Legal de Paucarpata	FINALIDAD: Quien explicará sobre el procedimiento y las conclusiones plasmadas en el Certificado Médico Legal N°003390-VFL, perteneciente al agraviado, y donde se describen lesiones ocasionadas en su agravio. UTILIDAD: Porque su declaración al ser un Profesional de la medicina establecerá los actos de violencia física inferidas al agraviado y por los cuales se le ocasionó lesiones. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley. Ofreciéndose asimismo el certificado médico legal a efecto que sea agregados al expediente judicial conforme al Art. 136° numeral d) del C.P.P., y se proceda en caso sea necesario conforme a lo previsto por el Art. 383 numeral 1) literal c) del C.P.P.

b) Prueba Documental:

Se ofrece para su actuación y su oralización durante la Audiencia de Juzgamiento, las siguientes documentales:

Número	Descripción	Utilidad, Pertinencia
	Resolución N°01 Auto Final de fecha 23 de agosto del 2018,	Utilidad: Documento en el cual el Segundo Juzgado de Familia sede Paucarpata a consecuencia de la agresión física inferida por la

1	emitido en el expediente judicial N°09569-2018-0-0412-JR-FT-02.	acusada resuelve otorgar Medidas de Protección a favor del agraviado. Es pertinente en tanto que tiene relación con los hechos investigados. Es conducente porque no está prohibida por ley.
2	Oficio N°41139-2018-RDJ-WEB-CSJAR-PJ remitido por el Coordinador del Registro Judicial de Arequipa.	Utilidad: Informa sobre el resultado negativo de los antecedentes penales del acusado JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ, para efectos de la imposición de la pena.

c) Prueba material:

No se cuenta.

XII. MEDIDAS DE COERCION SUBSISTENTES DICTADAS DURANTE LA INVESTIGACION PREPARATORIA.-

Que, teniendo en cuenta lo previsto por el Art. 286° del C.P.P. y lo hechos materia de la presente acusación, al no darse los presupuestos que exige el Art. 268° del C.P.P., este Despacho Fiscal solicita se dicte mandato de COMPARECENCIA SIMPLE al acusado JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ.

POR LO EXPUESTO:

A usted señor Juez, solicito tener por formulado el presente requerimiento de Acusación Directa con arreglo a ley, debiendo darle el trámite que corresponda.

Primer Otrosí: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:
Imputado: JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ con domicilio real: en Av. Revolucion Nro.1007. PP.JJ. Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa.


Debiendo en este extremo el Juzgado proceder conforme a lo previsto por el Art. 80° del C.P.P., nombrar y designar un Abogado Defensor Público para la defensa del imputado.

Agraviada: BRIGIDA CUNO INOFUENTE, con domicilio real en AA.HH. La Posada de Cristo Comite 24, Mz. A prima, Lote 3, PP.JJ. Ciudad blanca del distrito de Paucarpata, Arequipa, Arequipa.

Segundo Otrosí: Solicito al Juzgado, se tenga en cuenta, que se cumple con anexar los elementos de convicción, así como adjuntar dos ejemplares de la acusación, a fin de que sean notificados al acusado y a la parte agraviada.

/bstg

Arequipa, 12 de abril del 2019.


C.R. LUIS GUILLERMO VENA OVIEDO
Fiscal Provincial
Trib. Fiscal Pro. Penal Culp. de Paucarpata
Distrito de Paucarpata

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE ACUSACION

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
AREQUIPA - Sistema de
Notificaciones Electrónicas SINOE
PAUCARPATA-ESQUINA CALLE
A LAVERAN CON CALLE
T. ALCANTARA S/N
Secretario RODRIGUEZ LAVADO
Jefferson Dalhi FAU 20159081216
soft
Fecha: 11/11/2019 15:29:10 / Resolución
JUDICIAL D. Judicial: AREQUIPA /

Expediente Nro.	:	4338-2019-0-0401-JR-PE-01
Fecha	:	Arequipa, 08 de noviembre de 2019
Juzgado	:	JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
Magistrado	:	JUAN CARLOS BENAVIDES DEL CARPIO
Imputado	:	JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ
Delito	:	LESIONES POR VIOLENCIA FAMILIAR
Especialista de Audio	:	JEFFERSON RODRIGUEZ LAVADO
Hora inicio	:	09: 00 horas
Hora de término	:	09: 11 horas

Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, conforme lo dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo las partes acceder a una copia de dicho registro.

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ASISTENTES

- 1.- MINISTERIO PÚBLICO: BLANCA SUSANA TERROBA GUTIERREZ FISCAL ADJUNTA DE LA PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA. DOMICILIO PROCESAL EN CALLE TENIENTE ALCANTARA S/N URB. GUARDIA CIVIL III ETAPA PAUCARPATA. CASILLA ELECTRÓNICA 96017**
- 2.- DEFENSA PÚBLICA: RUBEN HILAZACA MORGAS CASILLA ELECTRÓNICA 34319**

Especialista de audio: da cuenta de la notificación al acusado, queda en audio

FISCAL: Realiza un relato de los hechos, indica como calificación jurídica el delito de lesiones leves por violencia familiar, los elementos de convicción, pena conforme corre en audio, queda en audio.	01' 57"
DEFENSA: No observa, por el principio de comunidad de pruebas ofrece los mismos del Ministerio Público, queda en audio	07' 24"
<u>POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR JUEZ Y EN MÉRITO AL ACUERDO PLENARIO 06-2011/CJ-116 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN SU FUNDAMENTO 10 ESTABLECE QUE SÓLO SE TRANSCRIBIRÁ LA PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN.</u> Resolución 04-2019 Arequipa ocho de noviembre del Dos mil diecinueve.- Como obra en audio: SE RESUELVE: A) DECLARAR LA VALIDEZ FORMAL Y SUSTANCIAL DE LA ACUSACION. B) DECLARAR LA EXISTENCIA DE UNA RELACION JURIDICA PROCESAL VÁLIDA C) SE DICTA MANDATO DE COMPARECENCIA SIMPLE EN CONTRA DE JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ D) SE DICTA AUTO DE ENJUICIAMIENTO EN CONTRA DEL MISMO identificado con DNI 45463565, nacido el 13 de diciembre de 1988 en distrito Provincia y Departamento de Arequipa, padres Jorge Raul y Rosalia, sexo masculino, secundaria completa, soltero domicilio en avenida Revolución 1007 Pueblo Joven Ciudad Blanca Paucarpata; quien es acusado como presunto autor del delito de agresiones en contra de integrante de grupo familiar ilícito previsto y penado en el artículo 122-B primer párrafo del Código penal en agravio de Brigida Cuno Inofuente. habiendo solicitado el Ministerio Público se le imponga al acusado 1 año de pena privativa de la libertad; inhabilitación conforme el artículo 36.11 de acercarse en forma violenta a la agraviada por espacio de seis meses; reparación civil de 500	07' 28"

soles a favor de la agraviada D) ADMITIR COMO MEDIOS DE PRUEBA: DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA DEFENSA POR COMUNIDAD DE PRUEBAS 1.- Examen de Brigida Cuno Inofuente 2'- Examen del médico legista Angel Bueno Ochoa DOCUMENTALES 3.- Resolución 01 auto final de fecha 23 de agosto de 2018 expediente 9569-2018 4.- Oficio 41139-2018 del Registro Judicial de condenas En consecuencia téngase como partes constituidas en el presente proceso a la señora fiscal representante de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Paucarpata y al acusado Jorge Luis Cruz Enriquez, SE DISPONE: LA REMISION DE LOS ACTUADOS AL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TURNO A EFECTO LLEVE A CABO EL JUICIO ORAL CORRESPONDIENTE. Comunicándose que tiene dictada comparecencia simple el acusado-.-.-.-.-	
FISCAL: Conforme, queda en audio	10' 53"
DEFENSA: Conforme, queda en audio	10' 56"

II.- CONCLUSIÓN

Con lo que se da por concluida la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla el señor Juez y el Especialista Judicial de Audiencia encargado de la redacción del acta.- Dejándose expresa constancia que la presente acta ha sido debidamente asociada al SIJ, y que el audio de esta audiencia ha sido debidamente colgado en el SIJ, conforme a la directiva emitida por la Sala de Apelaciones. Doy fe.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL MODULO DE PAUCARPATA SUB-ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

EXPEDIENTE:	4338-2019-29-0401-JR-PE-01
JUZGADO:	QUINTO JUZGADO UNIPERSONAL SUB ESP. EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - PAUCARPATA
JUEZA:	DRA. ISABEL HUANCUI TEJADA
ACUSADOS:	JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ
DELITO:	LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR. ARTÍCULO 122-B, PRIMER PARRAFO
AGRAVIADOS:	BRIGIDA CUNO INOFUENTE
LUGAR:	SALA DE AUDIENCIAS PLATAFORMA GOOGLE MEET
FECHA:	04 DE MAYO DEL 2021
HORA INICIO:	14.13 HORAS
HORA FIN:	14:20 HORAS
ESP. AUDIENCIA:	ESTEFANY ALEXANDRA HUAYTA CONDORI

*Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, conforme lo establece el **Inciso 2° del artículo 361° del Código Procesal Penal**, y el **artículo 26° del Reglamento General de Audiencias**, quedando las partes autorizadas para recabar una copia del mismo.*

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ASISTENTES

- **MINISTERIO PÚBLICO: DRA. ELIZABETH VICTORIA SEJJE SUAREZ**, Fiscal Adjunta Del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa De Paucarpata, domicilio procesal en Calle Teniente Alcantara s/n urb. Guardia Civil III Etapa paucarpata, casilla electrónica N°94129.
- **DEFENSOR PUBLICO: DR. RUBEN HILAZACA MORG**A, casilla electrónica N°34319, correo electronico hilazamorga25111981@gmail.com, celular 945120521, en defensa necesaria de Jorge Luis Cruz Enriquez, **con** quien no se ha conferenciado.

II. ACTUACIONES REALIZADAS EN AUDIENCIA

- 00.01.52** **DESPACHO:** Da cuenta de la inasistencia del acusado, *corre en audio.*
- 00.01.53** **DESPACHO:** Pide a la especialista de audiencia dar cuenta de las notificaciones efectuadas al acusado, *corre en audio.*
- 00.02.06** **ESPECIALISTA DE AUDIO:** Da cuenta de las notificaciones, *corre en audio.*
- 00.03.13** **MINISTERIO PÚBLICO:** En vista del informe de la especialista de audiencia, señala que la acusado ha sido validamente notificada según la dirección proporcionada en el requerimiento de acusación y solicita se le declare AUSENTE y se giren las ordenes de captura, *corre en audio.*
- 00.03.31** **DEFENSA:** Sin observaciones, *corre en audio.*
- 00.03.46** **DESPACHO:** Emite resolución, *corre en audio.*

RESOLUCIÓN 03-2021

Arequipa, 04 de Mayo del 2021

VISTOS Y OÍDOS EN AUDIENCIA PÚBLICA Y CONSIDERANDO, *corre en audio.* -

DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO PLENARIO N° 06-2011/CJ-116, SE PROCEDE A TRANSCRIBIR LA PARTE RESOLUTIVA DE LA PRESENTE AUDIENCIA.

(00.05.57) SE RESUELVE:

1. Declarar fundada la solicitud oralizada por la representante del Ministerio Público, en consecuencia, **SE DECLARA REO AUSENTE, A JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, cuyos datos de identidad personal los reproducimos literalmente del escrito de la acusación fiscal y ficha RENIEC.
2. Dispongo el archivo provisional de la presente causa, hasta que el citado acusado sea puesto a disposición del juzgado.
3. Se dicta orden de captura en contra del acusado como **Reo Ausente**, entendida esta como la orden de captura a nivel local y nacional, para cuyo efecto deberán cursarse los oficios respectivos por ante la autoridad nacional de requisitorias y demás órganos que por ley corresponden, debiendo precisarse en los oficios respectivos los datos de identidad personal tal como lo exige el reglamento de requisitorias y debiendo mantenerse la vigencia de esta medida en forma semestral, bajo responsabilidad funcional de la especialista legal de la causa.
4. Se ratifica el nombramiento del abogado defensor público, **Ruben Hilazaca Morga**, como abogado defensor del acusado **Jorge Luis Cruz Enriquez**, para todo los efectos de la presente causa, mientras dure sus situación jurídica. **Regístrese y Notifíquese**

00.07.10 LAS PARTES: Conformes, *corre en audio.*

III.- CONCLUSIÓN

Con lo que se da por concluida la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmarla el señor Juez y el Especialista Judicial de Audiencia encargado de la redacción del acta.- Dejándose expresa constancia que la presente acta ha sido debidamente asociada al SIJ, y que el audio de esta audiencia ha sido debidamente colgado en el SIJ, conforme a la directiva emitida por la Sala de Apelaciones. Doy fe.



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL MODULO DE PA
ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
AREQUIPA - Sistema de
Notificaciones Electrónicas SINOE
MODULO PENAL - VIOL.
FAMILIAR DE AREQUIPA
Secretaría TELLEZ GUILLER
KAREN ALEJANDRA Servicio
Digital - Poder Judicial del Perú
Fecha: 13/07/2021 11:53:25 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D. Judicial: AREQUIPA /
PAUCARPATA FIRMA DIGITAL

PEDIENTE N°:	4338-2019-29-0401-JR-PE-01
ZGADO:	Quinto Juzgado Unipersonal Sub-Especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar
EZ:	Dra. Isabel Huanqui Tejada
ACUSADO:	Jorge Luis Cruz Enríquez
DELITO:	Lesiones leves por Violencia Familiar, Artículo 122-B, Primer Párrafo
AGRAVIADO:	Brígida Cuno Inofuente
FECHA:	04 de junio del 2021
LUGAR:	Sala de Audiencia Virtual Google Meet
HORA DE INICIO:	15:40 Horas
HORA FIN:	16:00 Horas
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA:	Karen Alejandra Tellez Guillen

Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, conforme lo establece el Inciso 2° del artículo 361° del Código Procesal Penal, y el artículo 26° del Reglamento General de Audiencias, quedando las partes autorizadas para recabar una copia del mismo.

I. IDENTIFICACION DE LAS PARTES ASISTENTES:

- ❖ **MINISTERIO PÚBLICO: DRA. GUILLERMA VERA OVIEDO**, Fiscal Adjunta Del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa De Paucarpata, con casilla electrónica N° 33477, veraoviedoguillermo@gmail.com.
- ❖ **DEFENSOR PUBLICO: DR. RUBEN HILAZACA MORG**A, casilla electrónica N°34319, correo electrónico hilazamorga25111981@gmail.com, celular 945120521.
- ❖ **DEFENSOR PRIVADA: DR. JOSUE COLQUE SALCEDO**, casilla electrónica N°11000, celular 973244266.
- ❖ **ACUSADO: JORGE LUIS CRUZ ENRÍQUEZ**; nacido en Arequipa el 13 de diciembre de 1988; estado civil soltero; con cuatro hijos; de ocupación constructor; con remuneración promedio mensual de s/ 900.00; no recuerda su número de celular.

II. ACTUACIONES REALIZADAS EN AUDIENCIA PUBLICA:

00.05.12: Magistrada: Pregunta a las partes si hay posibilidad de arribar acuerdos, *como corre en audio*.

00.05.20: Defensa: Señala que ya tienen acuerdos, *corre en audio*.

00.05.42: Magistrada: Concede el uso de la palabra a las partes para que oralicen sus alegatos iniciales, *corre en audio*.

00.05.44: Ministerio Público: Procede a oralizar sus alegatos de apertura, la pena y la reparación civil, *como corre en audio*.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
**QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL MODULO DE PAUCARPATA SUB-
ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**

00.08.30: Defensa: Indica que como se llegaron a acuerdos se desiste de sus alegatos iniciales y solicita acogerse a una conclusión anticipada, *corre en audio*.

00.08.40: Magistrada: Procede a informar al acusado sobre los derechos que le asisten en el proceso y le pregunta si reconoce los cargos formulados en su contra, *corre en audio*.

00.09.10: Acusado: Señala que sí acepta los cargos, *corre en audio*.

00.09.15: Magistrada: Estando a la aceptación de cargos, da inicio al juicio de conformidad y le concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público para que oralice los acuerdos con respecto a pena y reparación civil; *como corre en audio*.

00.09.18: Ministerio Público: Procede a oralizar los acuerdos arribados con la defensa, consistentes en reserva de fallo condenatorio por el periodo de prueba de un año sujeto a reglas de conducta, *corre en audio*.

00.12.00: Defensa: Conforme, *como corre en audio*.

00.12.09: Acusado: Conforme, *como corre en audio*.

00.12.20: Magistrada: Procede a emitir la sentencia respectiva desde la parte resolutive; *corre en audio*.

SENTENCIA N° 300-2021

Arequipa, 04 de junio del 2021

VISTOS Y OIDOS

PARTE RESOLUTIVA: *corre en audio (00.12.30)*

SE RESUELVE:

Aprobando mediante la presente sentencia de conformidad los acuerdos celebrados entre el acusado debidamente asesorado por su defensa de elección y el Ministerio Público, durante el juicio oral.

En consecuencia:

DECLARO a **JORGE LUIS CRUZ ENRÍQUEZ**, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, como **AUTOR DEL DELITO DE LESIONES FÍSICAS EN CONTRA DE INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR** previsto en el artículo 122-B del Código Penal, en agravio de **Brígida Cuno Inofuente**.

En consecuencia, se aprueba la **RESERVA DE FALLO CONDENATORIO** a favor del sentenciado por el plazo de **UN AÑO**, en cuya virtud el juzgado se abstiene a dictar la pena completa en dicho plazo, sujeto a la observancia de las siguientes reglas de conducta:

- a) Prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez.
- b) Comparecerá al local del juzgado de ejecución en forma personal y obligatoria el primer día hábil de cada dos meses, para informar y justificar sus actividades sin perjuicio de



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
**QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL MODULO DE PAUCARPATA SUB-
ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**

poder realizarse a través del registro virtual de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Inicia su registro en agosto del 2021.

- c) No cometerá nuevo delito doloso de la misma naturaleza.
- d) Rapará los daños ocasionados por el delito con el pago de la reparación civil.
- e) La obligación de someterse a terapia psicológica, previa evaluación, a fin de lograr un cambio conductual a nivel individual, familiar y social, debiendo informarse la fecha de inicio, fecha de término; así como su posible incumplimiento; la última se llevará a cabo por el equipo multidisciplinario del Sistema Nacional Especializado en Justicia para la protección y sanción de la violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar de sede de corte. Para lo cual deberá el procesado comunicarse al celular 966004403, sin perjuicio del oficio que se enviará por secretaria.

Precisar que, en caso de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta descritas, previo requerimiento se procederá a revocar la reserva de fallo dispuesta, caso en el que se le impondrá a la procesada **11 MESES** de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva en la forma prevista en el inciso 3 del artículo 65 del Código Penal, disponiendo su internamiento en el centro penitenciario que determine el INPE, sede Arequipa. En cuyo caso además se le impondría la co-penalidad de inhabilitación conforme al artículo 36 numeral 11 del Código Penal.

FIJO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL la suma s/.400.00 soles a favor de la agraviada, monto que será cancelado en 3 cuotas, la primera cuota será pagada a fines del mes de junio el por el monto de s/. 200.00, la segunda cuota será pagada a fines del mes de julio el por el monto de s/.100.00 y la tercera cuota será pagada a fines del mes de agosto el por el monto de s/. 100.00. Todo ello será pagado mediante depósito judicial por ante el Banco de la Nación debiendo presentarse los vouchers correspondientes al Juzgado de Ejecución para su respectiva verificación y endose.

DISPONGO QUE NO CORRESPONDE FIJAR EL PAGO DE COSTAS, mando la suspensión de su inscripción en el registro judicial, ordeno se curse la nota de atención al registro especial a cargo del Poder Judicial para la anotación respectiva, como lo establece el artículo 63 segundo párrafo del Código Penal.

Conforme lo establece la ley de Violencia Familiar, ley 30364, se dispone la remisión de la presente sentencia al Expediente 9560-2018 al Segundo Juzgado de Familia de Paucarpata.

Remítase el oficio con copia de la sentencia a la presidencia de la Junta de Fiscales de Arequipa a efecto de inscribir la presente en el registro único de víctimas, personas agresoras.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
**QUINTO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL MODULO DE PAUCARPATA SUB-
ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**

DISPONGO DEJAR SIN EFECTO LA DECLARACIÓN DE CONTUMACIA y se dispone el levantamiento de las órdenes de captura; para ello deben remitirse los oficios correspondientes bajo responsabilidad funcional del especialista legal de audiencia.

Y por esta sentencia, así lo pronuncio, mando y firmo la audiencia pública. **TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.**

00.16.25: Las partes: Conformes, *como corre en audio.*

00.16.41: Magistrada: Declara consentida la presente y dispone la remisión del expediente al Juzgado de Ejecución, *como corre en audio.*

III. CONCLUSION:

Con lo que se da por concluida la audiencia virtual y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmar el acta la Jueza y el Especialista Judicial de Audiencia encargado de la redacción del acta. Dejándose expresa constancia que la presente acta ha sido debidamente asociada al SIJ y que el audio de esta audiencia ha sido debidamente colgado en el SIJ, conforme a la Directiva emitida por la Sala de Apelaciones. Doy fe.

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

EXPEDIENTE : 04338-2019-29-0401-JR-PE-01
JUEZ : ISABEL HUANQUI TEJADA
IMPUTADO : JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ
DELITO : LESIONES LEVES
AGRAVIADA : BRIGIDA CUNO INOFUENTE

En la ciudad de Arequipa, a los cuatro días del mes de junio de dos mil veintiuno, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal – M.B.J. de Paucarpata Sub especializado en delitos asociados a violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a cargo de la Señora Juez **ISABEL HUANQUI TEJADA**, quien asume competencia conforme a la Resolución Administrativa N°000139-2021-P-CSJAR-PJ; y, luego de haber valorado el juicio oral y privado seguido en contra de **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ** por la comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de **AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122°-B del Código Penal(vigente al momento de los hechos)¹, en agravio de BRIGIDA CUNO INOFUENTE, ejerciendo la potestad de administrar justicia, en nombre del pueblo, emite la presente resolución:

SENTENCIA N° 300 - 2021

RESOLUCIÓN NRO.05 – 2021

I. PARTE EXPOSITIVA.

PRIMERO.- INFORMACIÓN DEL ACUSADO Y DEL PROCESO.

1. IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO:

a) **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, de nacionalidad peruano, identificado con D.N.I. número 45463565, nacido en el distrito, provincia y departamento de Arequipa, el trece de diciembre del mil novecientos ochentaiocho, treintaidos años, hijo de Jorge y Rosalía, con grado de instrucción secundaria

¹ *Bajo los alcances del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1323.*

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

completa, de ocupación obrero construcción, percibe ingresos de S/ 800.00 (ochocientos 00/100 soles) mensuales, de estado civil conviviente, con cuatro hijos, con domicilio en Av. Revolución 1007, Urb. Ciudad Blanca, distrito de Paucarpata, provincia y departamento de Arequipa.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO:

2.1. El proceso penal signado como expediente N° 4338-2019-29, seguido en contra de **Jorge Luis Cruz Enriquez**, por el delito **CONTRA LA VIDA, EL CUERPO y LA SALUD** en la modalidad de **AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, previsto en el primer párrafo del artículo 122°-B del Código Penal (vigente al momento de los hechos), en agravio de **Brigida Cuno Inofuente**.

3. ITINERARIO PROCESAL.-

3.1) Por el mérito del auto de citación a juicio, se citó a los sujetos procesales a juicio oral, ante la incomparecencia del acusado, se le declaró contumaz, puesto a la fecha a disposición por la oficina de requisitorias, se realiza el juicio en el día y en una sesión.

3.2) Se escuchó los alegatos de apertura del Ministerio Público, y el abogado del procesado.

3.3) Al inicio de la audiencia de juicio oral y luego que se instruyera al acusado en sus derechos, y al preguntársele si admitía ser autor del delito materia y responsable de la pena y reparación civil; éste, previa consulta con su abogado, **aceptó los hechos** objeto de la presente, así como su **responsabilidad penal y civil**. No formuló cuestionamiento sobre la pena y la reparación civil.

3.4) Por lo que, en la presente, se declaró la conclusión anticipada del proceso, iniciando procedimiento de conformidad.

SEGUNDO.-DELIMITACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL.-

2.4 El representante del Ministerio Público y la parte imputada, arribaron a un acuerdo sobre la pena y reparación civil; y el estado del proceso es de dictarse sentencia.

TERCERO: Pretensión del representante del Ministerio Público.-

3.1 Enunciación de los hechos y circunstancias expuestas en la acusación fiscal.

La representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, así como, durante sus alegatos en juicio oral sostuvo la siguiente imputación fáctica:

“Circunstancias Precedentes:

La agraviada Brigida Cuno Inofuente y el imputado Jorge Luis Enriquez, forman parte de un mismo grupo familiar, al resultar ser su conviviente, teniendo tres hijos en común, fijando su domicilio en el AA.HH la posada de Cristo Comité- 24, M^{ca} Prima L^a 3, PP.JJ. Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata.

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

Circunstancias Concomitantes:

El día 14 de agosto del 2018, aproximadamente a las 10:30 horas, la agraviada en circunstancias que le llamo la atención a su menor hija, porque se quitó la ropa, dándole un palmazo en su manito y en su trasero, indicándole que no se quitara la opa, momentos en que se puso a llorar dicha menor y le salió sangre de la nariz, acto que al parecer fue visto por su convivite, quien vino por la espalda y le dio golpes de puño en la cabeza, en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, no dándole oportunidad a la agraviada de defenderse, posteriormente esta cogió la ropa de sus hijos y se retiró de la casa.

Circunstancias Posteriores:

Que, ante tales hechos el agraviado se constituyó a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente, donde al pasar el reconocimiento médico legal presento al examen médico "equimosis verdosa de 1x3cm en párpado inferior del ojo derecho, equimosis morado verdosa de 2x2cm en párpado inferior de ojo izquierdo, tumefacción con equimosis morado verdosa de 1x1cm en dorso nasal, tumefacción con equimosis morado verdosa de 3x4cm en mitad de la frente, equimosis morada de 1x1cm e mitad del labio superior, tumefacción de 2x2 cm en región parietal derecha, lesiones compatibles con objeto contundente, requiriendo de 01 día de atención facultativa por 03 de incapacidad médico legal, según el Certificado Médico Legal N° 003390-VFL, procediendo por tal motivo el segundo Juzgado de Familia de Paucarpata, mediante Acta de Audiencia Oral, Auto final resolución N° 01 de fecha 23 de agosto del 2018, emitido en el expediente judicial N° 09569-2018-0-0412-JR-FT-02 a dictar las medidas de protección a favor de la agraviada por la violencia física ejercida hacia su persona por el imputado..

3.2 Título de la Imputación y Calificación jurídica.

La representante del Ministerio Público calificó la imputación fáctica descrita en contra del imputado **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ** como **autor** del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de **Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar**, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122°-B del Código Penal.

3.3 Pretensión punitiva.

Estando a la postulación penal por parte de la representante del Ministerio Público solicitó se imponga al imputado **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, por el delito de **Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar**, la sanción de un año de pena privativa de la libertad.

3.4 Pretensión Civil.

Se requirió el pago de una reparación civil ascendiente a la suma de **S/ 500.00** (quinientos con 00/100 soles) a favor de la agraviada.

CUARTO: De la postura defensiva del imputado:

4.1 Tesis de la Defensa Técnica.

La defensa técnica del imputado señaló como estrategia defensiva, aceptar los cargos, y acogerse a la conclusión anticipada del proceso

4.2 Autodefensa del Imputado.

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

El imputado en juicio oral, aceptó y reconoció los hechos imputados en su contra, además la pena y reparación civil del acuerdo.

QUINTO.- DEL ACUERDO PROPUESTO.- El Ministerio Público y la defensa del procesado, hicieron conocer a este Despacho que habían llegado a un acuerdo, respecto del procesado Jorge Luis Cruz Enriquez:

5.1 Sobre la pena: El Ministerio Público sustentó que:

- ✓ En cuanto al delito de Agresiones en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, tiene una pena establecida *no menor de un año ni mayor de tres años*.
- ✓ Entonces, el marco normativo para el caso de autos sería *de un año como extremo mínimo; y, tres como el extremo máximo de la pena privativa de libertad*.
- ✓ Corresponde, entonces dividir la pena en tercios, conforme lo establece el artículo 45º-A, inciso 2º apartado a), del Código Penal, en el caso en concreto la pena debe establecerse en el **tercio inferior de la pena**, *que se establece entre un año y un año ocho meses*, pues el acusado carece de antecedentes penales conforme ha referido el Ministerio Público; es decir, es agente primario. Por lo que se establece *en un año de pena privativa de libertad*, la pena solicitada por el Ministerio Público.
- ✓ Luego se aplicó el *descuento de un séptimo por conformidad* que se estableció en un mes, llegando a once meses de pena privativa de libertad.

Por lo que la pena concreta para el acusado es de **once meses** de pena privativa de libertad. Que en aplicación a lo establecido en el artículo 62º del Código Penal, solicitan disponer la reserva de fallo condenatorio, que tal y como lo dispone la norma, no puede ser menor al plazo de un año, manifestando la defensa y el acusado conformidad en el extremo que la reserva de fallo sea por un año. Así mismo se estableció como reglas de conducta, acordada por las partes y conforme a lo dispuesto en el artículo 64º, las siguientes: **A.-** No variar su domicilio real sin poner previamente en conocimiento al Juzgado de Ejecución **B.-** Comparecerá al local del Juzgado de Ejecución en forma personal y obligatoria el primer día hábil de cada **dos meses** para informar y justificar sus actividades. **C.-** Reparar los daños ocasionados por el delito, con el pago de la reparación civil. **D.-** Prohibición de cometer nuevo delito doloso sobre todo de la misma naturaleza **E.-** Cumplir con efectuar una terapia de control de impulsos, la misma que la va a realizar ante el equipo multidisciplinario del poder judicial, debiendo comunicar al inicio del proceso y al finalizar el mismo.

Referente a la **reparación civil**, asciende a la suma de **S/ 400.00 (cuatrocientos con 00/100 soles)**, a favor de la agraviada, monto que se va a cancelar en tres cuotas, la primera cuota de S/ 200.00 (doscientos con 00/100 soles) a ser cancelada a fine del mes de junio, la segunda cuota por S/ 100.00

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

(cien con 00/100 soles) a ser cancelada a fines el mes de julio y la última cuota de S/ 100.00 (cien con 00/100 soles) de igual forma a fines del mes de agosto, Todo ello será pagado mediante depósito judicial por ante el Banco de la Nación debiendo presentar los voucher al juzgado de ejecución para su respectiva verificación y endose.

En caso de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta descritas, **previo requerimiento**, se procederá a revocar la reserva de fallo dispuesta, caso en el cual se le impondrá al procesado, ***once meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva***.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

SEXTO.- NORMATIVIDAD APLICABLE.

6.1. El artículo 372º del Código Procesal Penal, regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencias vinculantes, tales como: el ***Acuerdo Plenario No. 05-2008/CJ-116*** del dieciocho de julio del dos mil ocho; la ***Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 1766-2004/Callao*** del veintiuno de septiembre del dos mil cuatro; y, la ***Ejecutoria Suprema Vinculante derivada del recurso de nulidad N° 2206-2005/Ayacucho***, del doce de julio del dos mil cinco; y, por último el ***Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116***, que si bien está referido a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de legalidad y proporcionalidad atañen a la conclusión anticipada.

6.2. La “conformidad premiada”, se presenta cuando el acusado, por sí, o a través de su abogado solicita previamente conferenciar con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena; lo que importa una doble garantía, que implica una renuncia a la actuación de pruebas en juicio público, constituyendo un acto de disposición del propio proceso, conviniendo en la expedición de una sentencia condenatoria en su contra.

6.3. El acusado, en audiencia, al expresar su “conformidad”, consultó con su abogado defensor, habiendo actuado con plena libertad voluntad y racionalidad, sin limitaciones de sus capacidades intelectivas, e informado de sus derechos por el Juzgado y su defensa, de la acusación que acepta, deviniendo con su reconocimiento en una declaración judicial de culpabilidad, con la consiguiente imposición de sanción penal y reparación civil; **por lo que, este Juzgado no puede mencionar, interpretar y valorar actos de investigación** de prueba preconstituída alguna, desde que el acusado con su “conformidad”, renunció expresamente a su derecho a la presunción de inocencia, como a la exigencia de prueba de cargo de la acusación y a un juicio contradictorio; por lo que, los fundamentos de hecho o juicio histórico de la sentencia, no se forman como resultado de valoración de la prueba, sino que le vienen impuestos al Juzgado por la acusación y la defensa, a través de un acto de reconocimiento

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

de ésta última, que son vinculantes al Juzgado y a las partes; por lo que, en éste orden de ideas, el Juzgado no puede agregar ni reducir los hechos o circunstancias que han sido imputados por el Fiscal, y aceptados por el acusado y su abogado defensor, en audiencia; ya que, ello implicaría revisar y valorar actos de aportación de hechos, que son excluidos por la propia naturaleza de la “conformidad procesal”.

6.4. No obstante, la presencia del Juzgador, no es pasiva, para efectos de la homologación de la “conformidad”; ya que, existe cierto margen de valoración que el Juez debe ejercer; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación-vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato fáctico (*vinculatio facti*), por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

6.5. Asimismo, pondera este Despacho que los criterios de control de legalidad del acuerdo, se expresa en tres planos diferentes, el ámbito de la *tipicidad o calificación jurídico penal*, suficiente *actividad indiciaria*, y el ámbito de la *legalidad de la pena*. Sobre la razonabilidad de la pena, ésta debe centrarse en el quantum de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo, así, el Juez ha de realizar una valoración que evite se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena, o se afecte indebidamente los derechos e intereses de la víctima. Por consiguiente, el Juez **sólo podrá rechazar** el acuerdo, si de modo *palmario y evidente* se estipule una pena o una reparación civil *evidentemente desproporcionada* o que en el caso de la pena se *lesione ostensiblemente* el principio preventivo.

6.6. Respecto del *principio preventivo*, el Tribunal Constitucional, en el Expediente No. 0019-2005-PI/TC, ha señalado que “(...) Sólo será constitucionalmente válido el prever la privación de libertad como consecuencia jurídica para determinada conducta antijurídica, si se tiene como propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, toda vez que la defensa de un valor o un interés constitucionalmente relevante podrá justificar la restricción en el ejercicio de un derecho fundamental”.²

6.7 Respecto a las Medidas Alternativas a la Privación de Libertad: 1. Prado Saldarriaga postula el análisis en cada caso la imposición de penas privativas de libertad y la necesidad de acudir a alternativas a ellas a fin de impedir la carcerería innecesaria, teniendo como antecedente la llamada *crisis de la prisión*, esto es el fracaso de la cárcel como medida resocializadora, así sostiene³ que en la actualidad “*no existen distintos instrumentos formales cuya función común es impedir la ejecución material de penas privativas de libertad de corta e incluso mediana duración. Efectivamente, hoy en día es posible identificar en el derecho penal comparado un número considerable de penas o medidas alternativas. Todas ellas contienen imaginativas opciones para sustituir o conmutar penas*

²Exp. No. 0019-2005-PI/TC. Caso Arresto Domiciliario. FJ. 35 y 36

³ Prado Saldarriaga, Víctor Roberto. (2010). *Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos Plenarios*. Lima: IDEMSA. Pág. 221.

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

*privativas de libertad no superiores a cuatro o cinco años (...). No obstante, el proceso de validación social y político criminal de las penas y medidas alternativas no parece haber concluido. Por el contrario la presencia cada vez más difundida de corrientes del denominado **populismo punitivo** tienden a relativizar o desacreditar su utilidad. Sigue, pues haciendo falta ese compromiso político real con el objetivo histórico de aquellas, lo cual explica el por qué todavía "demasiada gente sigue sufriendo innecesariamente la pena de prisión".*

6.8. Es precisamente, siguiendo esta línea, que la legislación penal ha considerado que es necesario agotar en cada caso las posibilidades alternativas a la imposición de la pena privativa de libertad, sea con la aplicación de la exención de pena, o reserva del fallo condenatorio cuando ello fuere posible, y sólo en caso que no procediera estas alternativas, acudir a la privación de libertad, suspendiendo su ejecución siempre que se presenten los supuestos para su aplicación, y si ello no fuera posible, aplicar la pena privativa de libertad efectiva con las conversiones que la norma prevé en los supuestos de penas menores, y sólo, si no es posible las alternativas a la pena privativa de libertad, la suspensión de ejecución o las conversiones a otras penas, como última ratio corresponderá el internamiento del penado en un centro de reclusión. Se tiene en consideración entonces, que la privación de libertad de un ciudadano debe ser la última ratio, o el último recurso al que debe acudir un Juez, correspondiendo por ende analizar en el caso concreto la posibilidad o imposibilidad de aplicar otro tipo de medidas.

SÉPTIMO: Análisis de la pena, consecuencias accesorias.-

7.1 Pena consensuada.

7.1.1 La orientación político criminal de nuestro Código Penal no es retributiva, sino preventiva y de intervención mínima, así lo señala el artículo I del Título Preliminar, que dice "Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad" y en el artículo IX que precisa "La pena tiene por función ser preventiva, protectora y resocializadora". Así, la pena privativa de la libertad se aplica orientada por los principios de necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad.

7.1.2 Así, el marco punitivo del delito de Agresiones en contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar tipificado en el primer párrafo del artículo 122°-B del Código Penal *-según la ley vigente al momento de ocurridos los hechos-* fue de **no menor de uno ni mayor de tres años**, luego conforme al artículo 45°, 45°-A y 46° del mismo cuerpo normativo corresponde fijar los tercios de la siguiente manera:

Marco punitivo: 01 año a 03 años de pena privativa de libertad		
Tercio inferior	Tercio intermedio	Tercio superior
01 año a 01 año y 8 meses	01 año y 8 meses a 02 años y 4 meses	02 años y 4 meses a 03 años

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

7.1.3 Siendo que, se ha verificado la carencia de antecedentes penales como circunstancia atenuante genérica; por tanto, corresponde ubicarnos en el tercio inferior; así la pena peticionada por la representante del Ministerio Público, un año de pena privativa de la libertad, en razón del delito en agravio de BRIGIDA CUNO INOFUENTE, resultando legal y razonable.

7.1.4 Téngase presente que, se arribó a una conclusión anticipada del juicio, estando al reconocimiento de los hechos, aceptación de pena y reparación civil, bajo el principio de legalidad, es de aplicación el descuento de un séptimo por conformidad que se estableció en un mes, llegando a once meses de pena privativa de libertad.

OCTAVO: EVALUACIÓN DEL ACUERDO PROPUESTO.-

Concierne ahora la evaluación legal del acuerdo propuesto, conforme a la normatividad aplicable a la figura procesal de la conclusión anticipada del juicio. Debiendo tener en cuenta que la conclusión anticipada del juicio, las partes tienen cierta disposición sobre el objeto del proceso, pues esta clase de procedimiento parte del principio del consenso, basado en el Derecho Penal de Transacción, que busca evitar juzgamientos innecesarios para conseguir una sentencia anticipada.

8.1. En cuanto *al primer control de legalidad (tipicidad o calificación jurídico penal)*, se tiene que los hechos descritos por el Ministerio Público, son **inmodificables**, ciertamente se enmarcan dentro del tipo penal postulado por la fiscalía, desde la exposición del *factum* realizado por ésta y que fue materia de acusación; dado que, no existe actividad probatoria, que permita verificar otras circunstancias más. Establecidos así los hechos como la normatividad jurídico penal pertinente, corresponde realizar el juicio de subsunción o adecuación de los hechos a la norma, que abarca el juicio de tipicidad, de antijuricidad y el juicio de imputación personal o verificación de culpabilidad.

Sobre el delito de lesiones por violencia familiar:

a.- Juicio de tipicidad. El tipo del delito de contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122º-B primer párrafo, requiere de la concurrencia de los siguientes elementos:

a) Bien Jurídico.- El bien jurídico protegido es la integridad física, psicológica o la salud de la persona individual, en contextos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Sino también otros bienes como la dignidad humana y la familia esta última como instituto natural y fundamental de la sociedad (Art. 4º de la Constitución Política.). Entonces estamos frente a un bien jurídico pluriofensivo.

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

b) Sujetos Activo.- Que puede serlo cualquier persona incluso otra mujer⁴, con condición de familiaridad derivado de vínculos consanguíneos, legales o de afectividad (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.

c) Sujeto Pasivo.- Puede ser cualquier persona con condición de familiaridad derivado de vínculos consanguíneos, legales o de afectividad (cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales.

d) Tipo objetivo: El delito atribuido al imputado, se configura cuando el sujeto activo ha impulsado su acción a la producción de unas lesiones leves, causando un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.

c) Las lesiones leves resultan incriminadas a título de dolo; ya que, el imputado ha impulsado su acción a la producción de unas lesiones leves, ha sido consciente de que su conducta ha inferido un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima (dolo eventual).

Por lo que concurren todos los elementos objetivos del tipo. Respecto al aspecto subjetivo, se tiene que el inculpaado ha actuado con dolo, al realizar una acción consiente de los resultados; puesto que, como se verifica con su actuar ha causado lesiones a la agraviada.

b. Juicio de Antijuridicidad y de Culpabilidad o de Imputación Personal.- La conducta del acusado no encuentra causa de justificación, ni exculpación previsto en el artículo 20º del Código Penal. El acusado, estaba consciente de lo que hacía, y sabía que lesionar a una persona constituye delito; en consecuencia, podía esperarse del acusado una conducta diferente a la realizada, que no realizó. *Más aún que el acusado reconoce que ha causado lesiones a la agraviada.*

8.2. El segundo control de legalidad (suficiente actividad indiciaria), del recaudo probatorio también expuesto en juicio oral, se verifica que tal exposición llena la exigencia de este control; dado que, de los medios probatorios anunciados por la fiscal del caso, se evidencia suficiente respaldo probatorio, para sostener la incriminación postulada contra el acusado; además de ello, cuenta con

⁴ Ramiro Salinas Siccha, Derecho Penal Parte especial(Vol 1)Editorial Intitua, Octava edición Agosto 2019, pág. 340.

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

Certificado Médico Legal N° 003390-VFL, que prescribe un día de atención facultativa por tres días de incapacidad médico legal.

8.3. Por último, sobre *el ámbito de la legalidad de la pena, que corresponde al tercer control*; es de considerarse en relación a la pena privativa de la libertad la fiscalía y la defensa privada llegaron a un acuerdo sobre la pena, en este caso, han propuesto *un año de pena privativa de la libertad* por el delito de Agresiones en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar; por lo que, se realiza el control de legalidad y razonabilidad del acuerdo punitivo, así se tiene:

Respecto del procesado, la pena propuesta no reviste criterio de irrazonabilidad tampoco de ilegalidad; dado que, se ha aplicado apropiadamente la secuencia establecida en el artículo 45°-A del Código Penal, primero la pena básica para el delito, luego ha sido dividida en tercios, de lo que resulta que la pena fluctúa entre *un año a un año con ocho meses (tercio inferior)*.

1. Después, se ha desarrollado adecuadamente los criterios genéricos del artículo 46° del Código Penal, consistentes en este caso en la *carencia de antecedentes penales del acusado*, lo que permite ubicarse en el tercio inferior conforme al artículo 45°-A del Código Penal; conforme lo afirmó la representante del Ministerio Público. Por lo que se establece *en un año de pena privativa de libertad*, pena solicitada por el Ministerio Público, se realiza el descuento de un séptimo por conformidad, un mes, llegando así a la pena de once meses.

En el presente caso las partes han adoptado un acuerdo sobre la aplicación de una medida alternativa, esto es la reserva del fallo condenatorio, previsto en el artículo 62° del Código Penal, por el plazo de *un año*, por cuanto la norma no permite que ésta sea inferior a un año, contando con el asentimiento de la defensa y el acusado para su aplicación, siendo pertinente entonces verificar si dicho acuerdo está dentro del marco legal pertinente. Para ello tenemos que la medida de Reserva del Fallo condenatorio, es una medida alternativa a la aplicación de la pena efectiva, que ha sido acogido por nuestro sistema penal, para aquellos delitos de escasa lesividad la pena a imponerse no supera los dos años de inhabilitación; teniendo además la fecha de comisión, siendo que en el presente caso el delito de lesiones en contra de integrantes del grupo familiar agravado reviste dicho carácter, prueba de ello es que la norma penal conmina con una pena que oscila entre un año y máxima de tres años; asimismo dicho precepto legal exige además que “la naturaleza, modalidad del hecho punible y personalidad del agente hagan prever que esta medida le impedirá cometer un nuevo delito”, supuesto que también se cumple y estando a que no se supera la inhabilitación en dos años, es que se considera su aplicación.

Siendo que en el presente caso el Ministerio Público ha solicitado *once meses de pena privativa de libertad*, sino únicamente las partes proponen la reserva temporal del fallo en su aplicación y no pudiendo ser la reserva de fallo condenatorio a un año, se establece sea por el plazo de un año, sujeto a la observancia

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

de ciertas reglas de conducta; para lo cual se ha tomado en cuenta que el acusado no tiene antecedentes penales, y además, no concurre circunstancia agravante genérica; en consecuencia, dicha propuesta resulta razonablemente proporcional.

La aplicación de dicha medida alternativa no significa el perdón, ni el olvido del delito cometido, tampoco significa una eximente de la pena a imponerse, sino únicamente se trata de una medida temporal que la ley otorga al sentenciado a fin de poder readaptarse a la sociedad observando el cumplimiento de ciertas reglas de conducta por un tiempo determinado (periodo de prueba), en lugar de sufrir las consecuencias directas de la pena merecida; siendo que, tales reglas serán establecidas por el juez en base a los acuerdos propuestos por las partes. En cuanto a las **reglas de conducta** a imponer, el artículo 64º del Código Penal establece las reglas de conducta a imponer en caso disponerse la reserva de fallo condenatorio, siendo pertinente imponer en el presente caso, las siguientes: **A.-** No variar su domicilio real sin poner previamente en conocimiento al Juzgado de Ejecución **B.-** Comparecerá al local del Juzgado de Ejecución en forma personal y obligatoria el primer día hábil de cada **dos meses** para informar y justificar sus actividades. **C.-** Reparar los daños ocasionados por el delito, con el pago de la reparación civil. **D.-** Prohibición de cometer nuevo delito doloso sobre todo de la misma naturaleza **E.-** Cumplir con efectuar una terapia de control de impulsos, la misma que la va a realizar ante el equipo multidisciplinario del poder judicial, debiendo comunicar al inicio del proceso y al finalizar el mismo.

8.4. Pena aplicable en caso de levantarse la medida alternativa: En caso de que el sentenciado incumpla alguna de las reglas de conducta descritas, previo requerimiento, se procederá a revocar la reserva de fallo dispuesta, caso en el cual se le impondrá al procesado **ONCE MESES de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva.**

8.5. En relación a lo expuesto en el acápite precedente, resulta importante señalar que el principio de proporcionalidad, llamado también *prohibición de exceso de la pena justa*, demanda que la pena debe guardar relación con el *grado de responsabilidad del agente, con la magnitud del daño causado y con la trascendencia del bien jurídico lesionado*; por consiguiente, la definición y aplicación de *sanciones penales deben guardar una equivalencia razonable, en sus dimensiones cualitativas o cuantitativas*, con el tipo de delito cometido, *con las circunstancias de su realización y con la intensidad del reproche que cabe formular a su autor*⁶. En consecuencia, pues del *Principio de Proporcionalidad*, se desprende como contenido esencial, que toda imposición desmedida o innecesaria de sanciones, sean penas, medidas de seguridad o consecuencias accesorias, representará siempre una restricción o privación abusiva y arbitraria de derechos. Además de él también se deriva como regla para

⁶ “*Determinación Judicial de la Pena y Acuerdos Plenarios*”. PRADO SALDARRIAGA, Roberto Victor. Editorial Moreno S.A. primera edición, agosto 2010. Pág. 128.

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

el legislador la necesidad de establecer límites claros y tolerables para cada pena. Esto es, en la praxis legislativa o judicial debe afianzarse la materialidad de una *pena justa*.

En segundo lugar, para su procedencia, el artículo 62° del Código Penal exige además que “la naturaleza, modalidad del hecho punible y personalidad del agente hagan prever que esta medida le impedirá cometer un nuevo delito”. Respecto de ello este despacho valora que el procesado tiene la mayor disponibilidad de acogerse a reglas de conducta y el compromiso de no volver a cometer los mismos hechos; es decir, una no reiteración delictiva.

8.6. Adicionalmente, conforme el artículo 42 de la misma Ley, se establece inscribir la presente en “El Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras”, a efecto de ello, remítase el Oficio con copia de la sentencia a la Presidencia de la Junta de Fiscales de Arequipa y sea inscrita conforme corresponda.

NOVENO.- CONSIDERACIONES FIJACIÓN REPARACIÓN CIVIL.

9.1 Para fijar la reparación civil se tiene en cuenta lo prescrito por el artículo 92° del Código Penal, en el sentido que todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino, también puede dar lugar al surgimiento de responsabilidad civil por parte del autor; es así, que en aquellos casos en los que la conducta del agente produce un daño, por cuya razón la reparación civil debe de alguna manera tender a compensar dicho agravio, fijándose prudencialmente de acuerdo a la magnitud del mismo.

9.2 Verificando la concurrencia de los elementos que conforman la responsabilidad civil extracontractual, tenemos: **a) Daño causado**,⁷ que es la lesión a un interés jurídicamente protegido, en el caso, es “*la integridad física*”, así la regulación del monto indemnizatorio depende de la relación de causalidad, sin importar si estos son previsibles o imprevisibles, configurándose un daño injusto; en el presente caso, estando al reconocimiento, por parte el imputado, de las agresiones físicas a la agraviada, éste le causó daño a la integridad física de la misma, ocasionándole un daño físico y moral; **b) Antijuridicidad**,⁸ que implica comprobar la violación de una norma jurídica, analizada a la luz de la responsabilidad extracontractual, así el imputado objetivamente contrarió la norma prohibitiva del artículo 122°-B del Código Penal, por tanto, su conducta es antijurídica; **c) Relación de causalidad**, que se

⁶ Ib. Cit. 1

⁷ Entendida como la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación.

⁸ Esta se define como cualquier conducta ilícita que cause un daño, que no sólo contraviene una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad. Taboada señala que “[...] sólo nace la obligación legal de indemnizar cuando se causa daño a otro u otros mediante un comportamiento o conducta que no es amparada por el derecho, por contravenir una norma imperativa, los principios que conforman el orden público o las reglas de convivencia social que constituyen las buenas costumbres [...]” (Taboada Córdova, Lizardo. “Elementos de la Responsabilidad Civil”. Tercera Edición 2013. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., 2013. Página 46).

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

puede definir como el nexo o relación existente entre el hecho determinante del daño y el propio daño,⁹ en el caso, la actuación del imputado fue idónea para afectar el *interés protegido* de la menor agraviada que es su “*integridad física*” y, no existe un caso de fractura causal (caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o hecho de la víctima) ni concausa; y, **d) Factor de atribución**, que es de carácter subjetivo, esto es dolo o culpa, en el caso, se produce el dolo civil, pues el imputado conocía que con sus acciones causaba un daño a la agraviada, pero pese a ello, lo realizó.

9.3 Para fijar el monto de la reparación civil debe atenderse a la prueba del daño y la magnitud del perjuicio con parámetros equitativos como lo faculta el artículo 1332º del Código Civil.

En el caso, los sujetos procesales acordaron el monto total de S/.400.00 (cuatrocientos con 00/100 soles), monto que resulta siendo razonable al daño causado.

En el caso se pagará **S/ 400.00 (cuatrocientos con 00/100 soles)**, a favor de la agraviada, monto que se va a cancelar en tres cuotas, la primera cuota de S/ 200.00 (doscientos con 00/100 soles) a ser cancelada a fine del mes de junio, la segunda cuota por S/ 100.00 (cien con 00/100 soles) a ser cancelada a fines el mes de julio y la última cuota de S/ 100.00 (cien con 00/100 soles) de igual forma a fines del mes de agosto, Todo ello será pagado mediante depósito judicial por ante el Banco de la Nación debiendo presentar los voucher al juzgado de ejecución para su respectiva verificación y endose.

EN CONCLUSIÓN, estando a la verificación legal del acuerdo propuesto, no existiendo desproporcionalidad o falta de razonabilidad, se tiene el imperativo legal de **aprobar el acuerdo evaluado**.

DECIMO.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS COSTAS:

1. El artículo 497.5º del Código Procesal Penal, establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz.
2. En el presente caso, al haber concluido el proceso por “conformidad”; no procede la imposición de costas.

POR LO QUE: Administrando justicia a nombre de la Nación.

III. PARTE RESOLUTIVA:

FALLO:

⁹ Debe ser consecuencia de la conducta (factor in concreto) y debe verificarse si de acuerdo con la experiencia normal cotidiana la conducta es capaz de producir el daño causado (factor in abstracto), si la respuesta es negativa, no existirá una relación causal.

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

1. APROBANDO: Mediante la presente sentencia de Conformidad, los acuerdos celebrados entre el acusado debidamente asesorado por la defensa de elección y el Ministerio Público durante el juicio oral; en consecuencia;

2. DECLARO: A **JORGE LUIS CRUZ ENRIQUEZ**, *cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente*, como **AUTOR** del delito **CONTRA LA VIDA, EL CUERPO y LA SALUD** en la modalidad de **AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR**, previsto en el primer párrafo del artículo 122º-B del Código Penal, en agravio de **BRIGIDA CUNO INOFUENTE**. En consecuencia **SE APRUEBA** la **RESERVA DE FALLO CONDENATORIO** a favor del **SENTENCIADO POR EL PLAZO DE UN AÑO**, en cuya virtud el Juzgado se abstiene a dictar pena concreta en dicho plazo, sujeto a la observancia de las siguientes reglas de conducta: **A.-** Prohibición de ausentarse del lugar en donde reside sin previa autorización del juez. **B.-** Comparecerá al local del Juzgado de Ejecución en forma personal y obligatoria el primer día hábil de cada **dos meses** para informar y justificar sus actividades sin perjuicio de poder realizarse a través del registro virtual de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; inicia su registro en agosto del dos mil veintiuno. **C.-** No cometerá nuevo delito doloso especialmente de la misma naturaleza. **D.-** Reparará los daños ocasionados por el delito, con el pago de la reparación civil. **E.-** La obligación de someterse a terapia psicológica previa evaluación a fin de lograr un cambio conductual a nivel individual, familiar y social, debiendo informarse su fecha de inicio y término así como su posible incumplimiento. **Esta última** se llevará a cabo por el Equipo Multidisciplinario del Sistema Nacional Especializado en Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia Contra Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Sede Corte, para lo cual el procesado deberá comunicarse al celular 966004403, sin perjuicio del oficio que se enviará por secretaría.

Precisar que **en caso de incumplimiento de alguna de la reglas de conducta descritas, previo requerimiento**, se procederá conforme lo dispone el artículo 65º del Código Penal y de llegar el caso se procederá a revocar la reserva de fallo dispuesta, caso en el cual se le impondrá al procesado **once meses de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva**, en la forma prevista en el inciso 3 del artículo 65º del Código Penal, disponiendo su internamiento en el Centro Penitenciario que determine el INPE - Sede Arequipa, también en cuyo caso además se le impondría la co penalidad de inhabilitación conforme al artículo 36º numeral 11 del Código Penal.

3.- FIJO: Por concepto de Reparación Civil la suma de **S/ 400.00 (cuatrocientos con 00/100 soles)**, a favor de la agraviada, monto que se va a cancelar en tres cuotas, la primera cuota de S/ 200.00 (doscientos con 00/100 soles) a ser cancelada a fine del mes de junio, la segunda cuota por S/ 100.00 (cien con 00/100 soles) a ser cancelada a fines el mes de julio y la última cuota de S/ 100.00 (cien con

**5TO JUZ. PENAL UNIPERSONAL-M.B.J. PAUCARPATA
SUB ESPECIALIZADO EN DELITOS ASOCIADOS A VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS
MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA**

00/100 soles) de igual forma a fines del mes de agosto. Todo ello será pagado mediante depósito judicial por ante el Banco de la Nación debiendo presentarse los voucher al juzgado de ejecución para su respectiva verificación y endose.

4.- DISPONGO: Que no corresponde fijar el pago de costas.

5.- MANDO La suspensión de su inscripción en el Registro Judicial.

6.- ORDENO: Se curse la nota de atención al registro especial a cargo del Poder Judicial para la anotación respectiva, como lo establece el artículo 63, segundo párrafo del Código Penal.

7.- Conforme lo establece la Ley de Violencia Familiar 30364, se dispone la remisión de copias de la presente sentencia al expediente Nro. 9569-2018, del Segundo Juzgado de familia de Paucarpata.

8.- Remítase el Oficio con copia de la sentencia a la Presidencia de la Junta de Fiscales de Arequipa, a efecto de inscribir la presente en "El Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras".

9.- Dispongo dejar sin efecto la declaración de contumacia y se dispone el levantamiento de las órdenes de captura; para ello deben remitirse los oficios correspondientes bajo responsabilidad funcional del especialista legal de audiencia. Y por esta mi sentencia, así lo pronuncio, mando y firmo la audiencia pública. **TÓMESE RAZON Y HAGASE SABER.**

Estando a la conformidad manifestada por las partes, se declara consentida la presente y se dispone la remisión del expediente al Juzgado de Ejecución.

SRA.

HUANQUI TEJADA



MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Caso N°: 1506014504-2019-3100
Fiscal Responsable: Blanca Susana Terroba Gutiérrez

10/06/19: (A) 60

06:00 pm.

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Corte Superior de Justicia de Arequipa

Patricia Cerna Collegos Pinto
Fiscal Provincial
Juzgado de Investigación Preparatoria
Módulo Básico de Justicia de Paucarpata

“CON DETENIDO”

Sumilla: Requerimiento de Incoación de Proceso Inmediato.

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – SEDE MBJ PAUCARPATA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n Urbanización Guardia Civil III Etapa, Paucarpata, con **casilla electrónica N°96017**, ante Ud. respetuosamente digo:

Que, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los Artículos 446° literal 4) y 336° literal 2) del Código Procesal Penal, **FORMULO REQUERIMIENTO DE PROCESO INMEDIATO** contra:

JAIME QUISPE CALLACHI, en la investigación preliminar seguida en su contra por delito Contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en la modalidad de Conducción en estado de ebriedad, en agravio del Estado - Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en los siguientes términos:

1. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO

NOMBRE Y APELLIDOS	: JAIME QUISPE CALLACHI
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	: 44930453
FECHA DE NACIMIENTO	: 27-01-1987
EDAD	: 32 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO	: Chiguata, Arequipa, Arequipa
NOMBRE DEL PADRE	: Alejandro
NOMBRE DE LA MADRE	: Juana
GRADO DE INSTRUCCIÓN	: secundaria completa
ESTADO CIVIL	: conviviente
OCUPACIÓN	: taxista
DOMICILIO REAL	: Av. Colonial N°701, Paucarpata, Arequipa, Arequipa.
TELEFONO	: 986941324
DOMICIO PROCESAL	: Av. Berlin N°301, Hunter, Arequipa, Arequipa
ABOGADO DEFENSOR	: Julio Cesar Aro Madariaga
CASILLA ELECTRONICA	: 34937

2. DE LOS PRESUPUESTOS DEL PROCESO INMEDIATO

2.1. Teniendo en cuenta que el proceso inmediato es un proceso especial, que busca la simplificación y celeridad en la sustanciación del procesos penales, por medio del cual de la fase de diligencias

preliminares se pasa directamente al juicio oral, suprimiendo las etapas de investigación preparatoria y la etapa intermedia de un proceso común, el mismo que procede en los supuestos de flagrancia delictiva, confesión sincera del imputado; cuando los elementos de convicción recabados en el curso de las diligencias preliminares evidencien la materialización del ilícito penal y la participación del imputado, así como en la comisión de los Delitos de Omisión de Asistencia Familiar y del Delito de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción, conforme lo establece el artículo 446⁽¹⁾ del Código Procesal Penal.

2.2. Siendo ello así, y teniendo en cuenta que en el presente caso, se viene investigando la comisión del Delito de Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad, delito respecto del cual el inciso 4) del artículo 446° del Código Procesal Penal, establece *"4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de Omisión de Asistencia Familiar y los de Conducción en Estado de Ebriedad o Drogadicción"*, y estando a la imperatividad de la norma, corresponde en el caso en autos incoar el presente proceso inmediato.

3. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN.

De lo actuado se han reunido elementos de juicio que determinan que, con fecha 09 de junio del 2019, aproximadamente las 18:30 horas, en circunstancias que Personal Policial realizaba un Operativo Policial por la Av. Socabaya cuadra 7 (altura de la Quebrada Coscollo), distrito de Socabaya, intervino un vehículo automóvil de placa de rodaje V6V-278, marca Hyundai, color azul, donde al solicitar la documentación a su conductor, imputado Jaime Quispe Callachi, se percataron que el mismo presentaba visibles síntomas de ebriedad (aliento alcohólico), motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría PNP de Ciudad mi Trabajo.

Que, al ser sometido al examen de dosaje etílico el imputado, este dio resultado positivo según Certificado de Dosaje Etilico N°0030-0005867 (B-004925), presentando 1.50 g/l (un gramo con cincuenta centigramos de alcohol por litro de sangre).

Estableciéndose así, que el imputado JAIME QUISPE CALLACHO, en forma dolosa y a sabiendas de su estado de ebriedad condujo vehículo motorizado, generando un peligro a la sociedad.

4. TIPO PENAL.

Que conforme a las circunstancias en que se ha suscitado los hechos atribuido al imputado, se encuadra en el tipo penal previsto contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en su modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad, tipificado en el primer párrafo del Artículo 274° del Código Penal, el mismo que prescribe:

"El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos – litro, o bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36° Inc. 07).

"Cuando el agente presta servicios de transporte público de pasajero, mercancías o carga en general, encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción superior de 0.25

⁽¹⁾ Artículo modificado por el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 30 de agosto del 2015

gramos-litro, o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefactivas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de setenta a ciento cuarenta jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36° inciso 7°)

4.1. Grado de participación.

El imputado **JAIME QUISPE CALLACHO**, responderá en el presente caso conforme a los hechos ocurridos como Autor, conforme a lo previsto por el Art. 23° del C.P.

5. IDENTIFICACIÓN DEL AGRAVIADO.

EL ESTADO, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su Procurador Público Eugenio Rivera Garcia, quien tiene fijado su **domicilio real** en el Jr. Zorritos N°1203 – Lima, **casilla electrónica SINOE 891**, con teléfonos de coordinación 6157800 #1606/ 988030969/963750764.

6. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción:

6.1. Acta de Intervención policial (folios 05), de fecha 09 de junio del 2019, en la que se describen los hechos imputados y se hace constar que el imputado presentó visibles síntomas de ebriedad y aliento alcohólico.

6.2. Certificado de Dosaje Etilico N°0030-0005867 con registro B-004925, (folios 16), practicado al imputado **Jaime Quispe Callachi**, que arrojó el resultado positivo de **1.50 g/l (un gramo, con cincuenta centigramos de alcohol por litro de sangre)**.

6.3. Declaración del imputado Jaime Quispe Callachi de fecha 10 de junio del 2019, donde narra la forma en que se dieron los hechos imputados en su contra.

6.4. Consulta del Administrado de las papeletas que registra el imputado, así como del número de licencia de conducir categoría AIIa.

6.5. Oficio N°49567-2019-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, donde se informa que el imputado Jaime Quispe Callachi, NO registra antecedentes penales; registrando una condena cancelada con fecha 20-04-2015 en el expediente judicial N°422-2012 en el cual ha sido sentenciado el 21-01-2011 a 01 año de PPL.

6.6. Consulta de casos Fiscales a nivel nacional, donde se verifica los casos registrados por el imputado, por el mismo delito que es materia del presente requerimiento, y en el cual han sido judiciales y se ha emitido sentencia judicial y resolución de sobreseimiento.

7. MEDIDA DE COERCION PROCESAL

Atendiendo al presente requerimiento, se requiere asimismo la **COMPARECENCIA SIMPLE** del imputado **JAIME QUISPE CALLACHI**, conforme a lo establecido en el numeral 2) del Artículo 286° del Código Procesal Penal, por no concurrir uno los presupuestos materiales previstos en el Artículo 268° del acotado código adjetivo, que es la sanción a imponerse no es superior a cuatro años de pena privativa de libertad.

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
Penal
del Poder Judicial
de la Nación

Solicito a usted señor Juez, proceder a emitir la resolución que corresponda de conformidad al Art. 447º del Código Procesal Penal.

PRIMER OTROSI: SE PONE A DISPOSICION DE SU DESPACHO EN CALIDAD DE DETENIDOS AL IMPUTADO JAIME QUISPE CALLACHI.

SEGUNDO OTROSI: Se hace presente al Juzgado que en el caso no procede aplicar el Principio de Oportunidad, teniendo en cuenta lo previsto por el Art. 2 numeral 9) literal a) del Código Procesal Penal.

TERCERO OTROSI: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

Imputado: JAIME QUISPE CALLAQCHI tiene como **domicilio real** en Av. Colonial N°701, Paucarpata, Arequipa, Arequipa; con **domicilio procesal** en Av. Berlin N°301, Hunter, siendo su abogado defensor Julio Cesar Aro Madariaga con teléfono de contacto 959335465 y casilla electrónica N°34937.

Agraviado: EL ESTADO, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su Procurador Público Eugenio Rivera García, quien tiene fijado su **domicilio real** en el Jr. Zorritos N°1203 – Lima, **casilla electrónica SINOE 891**, con teléfonos de coordinación 6157800 #1606/ 988030969/963750764.

CUARTO OTROSI: Se adjunta al presente los originales de los elementos de convicción y ejemplares del presente requerimiento, para su notificación a todos los sujetos procesales distintos al Ministerio Público.

/bstg

Arequipa, 10 de junio del 2019.

DR. LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO
Fiscal Provincial
1ra. Fiscalía Prox. Penal C.J. de Paucarpata

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
AREQUIPA
Paucaupata-Esquina Calle A.Laveau con Calle T.Alca...

CEDULA ELECTRONICA

11/06/2019 08:59:02

Pag 1 de 1

Número de Digitalización
0000392477-2019-ANX-JR-PE



420191745772019062020401337000IP1

NOTIFICACION N° 174577-2019-JR-PE

EXPEDIENTE	06202-2019-0-0401-JR-PE-01	JUZGADO	1° JUZ. INVESTIGACION PREP. - Sede MBI Paucaupata
JUEZ	LILIANA MORALES CUTIMBO	ESPECIALISTA LEGAL	GALLEGOS PINTO PATRICIA BERTHY NU

IMPUTADO : QUISPE CALLACHI, JAIME

AGRAVIADO : EL ESTADO ,

DESTINATARIO PRIMERA FISCALIA PPCP LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO CARP FISCAL TURNO

DIRECCION : **Dirección Electrónica - N°96017**

Se adjunta Resolución UNO de fecha 11/06/2019 a Fjs : 1

ANEXANDO LO SIGUIENTE:

RESOLUCION NRO. 01

11 DE JUNIO DE 2019

7/

1º JUZ. INVESTIGACION PREP. - Sede MBI Paucarpata
EXPEDIENTE : 06202-2019-0-0401-JR-PE-01
JUEZ : LILIANA MORALES CUTIMBO
ESPECIALISTA : GALLEGOS PINTO PATRICIA BERTHY NU
MINISTERIO PUBLICO : PRIMERA FISCALIA PPCP LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO CARP
FISCAL TURNO ,
IMPUTADO : QUISPE CALLACHI, JAIME
DELITO : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADICCIÓN.
AGRAVIADO : EL ESTADO ,

RESOLUCION NRO. 01-2019

Arequipa, diez de junio
Del dos mil diecinueve.-

Estando al requerimiento de Proceso Inmediato en contra de **JAIME QUISPE CALLACHI** realizado por la representante del Ministerio Público y en observancia de lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nro. 1194, se corre traslado a las partes y se fija fecha para la **AUDIENCIA DE PROCESO INMEDIATO**, la misma que se llevará a cabo el día **DOCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS CATORCE HORAS** en la Sala de Audiencias del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, fecha en la que deberán estar presentes todas las partes procesales, **bajo apercibimiento** en caso de inasistencia del Ministerio Público de hacerse de conocimiento de su Órgano de Control Interno y del abogado defensor del imputado de ser reemplazado por un abogado defensor público, recayendo dicho nombramiento en la Defensora Pública **MARTHA CATAORA ARAMAYO** quien deberá encontrarse presente en dicho acto, **bajo apercibimiento** en caso de inasistencia de hacerse de conocimiento del Ministerio de Justicia. Disponiéndose la custodia temporal de **JAIME QUISPE CALLACHI en la carceleta de la Policía de Diligencias Judiciales**, ubicada en la Sede de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ubicada en la plaza España s/n. Autorizando la especialista Legal que suscribe por disposición del Magistrado que conoce el presente proceso y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122º del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos.-.



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**

DISTRITO FISCAL DE AREQUIPA
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PAUCARPATA
TERCER DESPACHO

Caso N° : 2006014504-2019-3100-0
Expediente N° : 06202-2019-0-0401-JR-PE-01
Imputado : Jaime Quispe Callachi
Delito : Peligro Común – CEE
Sumilla : ACUSACION FISCAL
Fiscal Responsable : Blanca Susana Terroba Gutiérrez

SEÑORA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DEL MBJ PAUCARPATA:

LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO, Fiscal Provincial (T) del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, con casilla electrónica N°96017, domicilio procesal en calle Teniente Alcántara s/n, III Etapa – Guardia Civil, Paucarpata, en el proceso seguido contra Jaime Quispe Callachi, por la comisión del delito de Peligro Común – Conducción en Estado de Ebriedad, en agravio del Estado – Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante usted, me presento y expongo;

I. REQUERIMIENTO:

En mérito a lo dispuesto por su Juzgado en la Audiencia de Control de Aplicación de Incoación del Proceso Inmediato realizado con fecha 12 de junio del 2019, y al amparo de lo dispuesto por el Art. 159° de la Constitución Política y de conformidad con lo establecido en los arts. 60°, 447° literal 6 y 349° del Código Procesal Penal, formulo **REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL** contra **JAIME QUISPE CALLACHI**, por el delito Contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en la modalidad de Conducción en estado de ebriedad, en agravio de la Sociedad, representado por el Ministerio Público, en los términos siguientes:

II. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO:

NOMBRE Y APELLIDOS	: JAIME QUISPE CALLACHI
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	: 44930453
FECHA DE NACIMIENTO	: 27-01-1987
EDAD	: 32 años de edad
LUGAR DE NACIMIENTO	: Chiguata, Arequipa, Arequipa
NOMBRE DEL PADRE	: Alejandro
NOMBRE DE LA MADRE	: Juana
GRADO DE INSTRUCCIÓN	: secundaria completa
ESTADO CIVIL	: conviviente
OCUPACIÓN	: taxista
DOMICILIO REAL	: Av. Colonial N°701, Paucarpata, Arequipa, Arequipa.
TELEFONO	: 986941324
DOMICIO PROCESAL	: Av. Berlin N°301, Hunter, Arequipa, Arequipa
ABOGADO DEFENSOR	: Julio Cesar Aro Madariaga
CASILLA ELECTRONICA	: 34937



III. DATOS DE LA PARTE AGRAVIADA:

- **EL ESTADO**, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su Procurador Público Eugenio Rivera García, quien tiene fijado su domicilio real en el Jr. Zorritos N°1203 – Lima, casilla electrónica SINOE 891.

IV.- DESCRIPCIÓN DEL HECHO ATRIBUIDO AL ACUSADO:

Hecho Punible	Imputación Necesaria
Delito contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en la modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad.	<p>Este Ministerio imputa al ciudadano JAIME QUISPE CALLACHI, la comisión del delito contra la Seguridad Pública – Peligro Común, en la modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad; y en ese sentido los actos que efectuó el imputado para la comisión del ilícito, ocurrieron según el siguiente detalle:</p> <p>Circunstancias Precedentes: Con fecha 09 de junio del 2019, aproximadamente a las 18:30 horas, Personal Policial al mando del Alférez PNP Luis Carranza Matos, venía realizando un Operativo Policial por la Av. Socabaya cuadra 7 (altura de la Quebrada Coscollo), distrito de Socabaya, Arequipa.</p> <p>Circunstancias Concomitantes Es en esas circunstancias, se interviene el vehículo automóvil de placa de rodaje V6V-278, marca Hyundai, color azul, conducido por el imputado Jaime Quispe Callachi, a quien al solicitarle la documentación correspondiente, el mismo presentaba visibles síntomas de ebriedad (aliento alcohólico), motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría PNP de Ciudad mi Trabajo.</p> <p>Circunstancias Posteriores Luego de la intervención policial, al momento de practicarse la prueba de intoxicación en sangre al imputado, se obtuvo como resultado 1.50 g/l (un gramo con cincuenta centigramos de alcohol por litro de sangre), conforme al Certificado de Dosaje Etílico N°0030-0005867 (B-004925).</p> <p>Estableciéndose así, que el imputado en forma dolosa y a sabiendas de su estado de ebriedad condujo vehículo motorizado, generando un peligro a la sociedad.</p>

IV. ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

Se cuenta con los siguientes elementos de convicción que determinan la comisión del delito y vinculan al imputado como responsable del delito:

- 4.1. Acta de Intervención policial (folios 05), de fecha 09 de junio del 2019, en la que se describen los hechos imputados y se hace constar que el imputado presentó visibles síntomas de ebriedad y aliento alcohólico.
- 4.2. Certificado de Dosaje Etílico N°0030-0005867 con registro B-004925, (folios 16), practicado al imputado Jaime Quispe Callachi, que arrojó el resultado positivo de **1.50 g/l (un gramo, con cincuenta centigramos de alcohol por litro de sangre)**.
- 4.3. Declaración del imputado Jaime Quispe Callachi de fecha 10 de junio del 2019, donde narra la forma en que se dieron los hechos imputados en su contra.
- 4.4. Consulta del Administrado de las papeletas que registra el imputado, así como del número de licencia de conducir categoría AIIa.

4.5. Oficio N°49567-2019-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, donde se informa que el imputado Jaime Quispe Callachi, NO registra antecedentes penales; registrando sin embargo una condena cancelada con fecha 20-04-2015 en el expediente judicial N°422-2012 en el cual ha sido sentenciado el 21-01-2014 a 01 año de PPL, por el delito de Peligro Común – Conducción en Estado de Ebriedad.

4.6. Consulta de casos Fiscales a nivel nacional, donde se verifica los casos registrados N°1506014507-2011-1216-0 y N°1506014509-2013-86-0, por el imputado Jaime Quispe Callachi por el mismo delito Contra la Seguridad Pública – Peligro Común en su modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad; los cuales han sido judicializados y se ha emitido sentencia judicial y resolución de sobreseimiento.

4.7. Reporte de casos según Personal Natural, donde se tiene el registro de casos del imputado por el mismo delito que es materia de acusación fiscal.

V. PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO:

Que, el artículo 23° del Código Penal señala: "El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción."

De lo expuesto, queda claro que el acusado Jaime Quispe Callachi, ha actuado en calidad de **AUTOR** del delito de Peligro Común en la modalidad de Conducción en estado de ebriedad, al haber sido intervenido conduciendo el vehículo de placa V6V-278, en estado de ebriedad conforme al examen de dosaje etílico practicado, el mismo que dio como resultado 1.50 g/l (un gramo con cincuenta centigramos de alcohol por litro de sangre).

VI. RELACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE CONCURRA:

Conforme al resultado de la investigación realizada y analizados los artículos 20° al 22° del Código Penal, se tiene que no existe circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal del acusado, es decir, que no existen causas eximentes, eximentes imperfectas o imputabilidad restringida del acusado.

VII. TIPIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y CUANTÍA DE LA PENA:

a) Tipificación de los hechos

Conforme se ha detallado en la presente, se imputa al acusado Jaime Quispe Callachi, ser el autor del delito de Conducción de vehículo en estado de ebriedad, en agravio de la Sociedad, ilícito penal previsto en el primer párrafo del Artículo 274° del Código Penal.

"El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 gramos – litro, o bajo efectos de drogas tóxicas, estupeficientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas e inhabilitación, conforme al artículo 36° Inc. 07)."

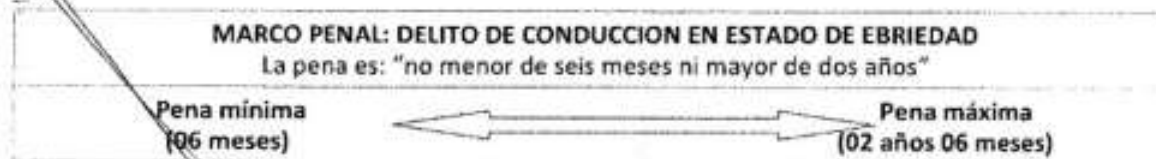
Que, el delito de **Conducción de Vehículos en Estado de Ebriedad**, es un delito de comisión instantánea, pues la acción se agota en todos sus efectos en el momento en que se concretan los elementos o las condiciones de su punibilidad; siendo así, con el Certificado de Dosaje Etílico, Acta de Intervención policial, declaración del procesado, se acredita la comisión del delito de Peligro Común, así como su responsabilidad penal, poniendo en peligro no solo su persona sino a toda la comunidad que hace uso de la vía pública.

b) Determinación de la Pena

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previstas en los artículos cuarto y octavo respectivamente del Título preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal esté acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, sino también con la trascendencia social que ocasiona el delito, en tanto que la conducta del acusado Denis Daniel Durand Vilca, al conducir un vehículo en estado de ebriedad pone en peligro no solo la integridad física de su persona, sino a toda la comunidad que hace uso de la vía pública.

Que, a efectos de la determinación de la pena temporal, es decir, para aquella que tiene una duración mínima de dos días y una máxima de 35 años, corresponde desarrollarla en base a etapas o fases normadas en el Artículo 45-Aº del Código Penal; así, en la primera etapa se definen los límites de la **pena básica**, la cual se encuentra establecida en la ley para el delito; y en la segunda etapa se debe identificar la **pena concreta**, para ello se tiene en cuenta el espacio y límite prefijado por la pena básica, marco que se divide en tres tercios y luego en base a las circunstancias legales presentes es que se determina la pena concreta dentro de uno de los tercios establecidos; sin embargo para el presente caso se advierte una circunstancia referida a la habitualidad.

Siendo así, conforme a los elementos de convicción señalados, se establece que el acusado resulta ser ya un **AGENTE HABITUAL**, tal como lo señala el Artículo 46-C del C.P., en tanto que dentro del plazo de cinco años ha cometido dicho acusado ya hasta en tres oportunidades el mismo delito, conforme se puede verificar del contenido del Oficio N°49567-2019-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, así como del reporte de casos del Ministerio Público donde se registra los casos N°1506014509-2013-86-0 con sobreseimiento y N°1506014507-2011-1216-0 con sentencia; por lo tanto **la habitualidad** constituye una circunstancia cualificada agravante, disponiendo que el Juez aumenta la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito; por lo que de manera gráfica se procede a establecer el espacio punitivo aplicable al presente caso:



Consecuentemente a efectos de graduar la pena que se debe imponerse al acusado **JAIME QUISPE CALLACHI**, se toma en cuenta que el delito es de carácter doloso, por ello éste Ministerio Público solicita se imponga al acusado **02 AÑOS Y 04 MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, con el carácter de **EFFECTIVA**.

La pena propuesta se ha individualizado teniendo en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de la pena, resultando por ello la sanción penal solicitada, justa y equilibrada.

De otro lado, tenemos con respecto a la pena de **INHABILITACION**:

"Artículo 36º.- La inhabilitación produce, según disponga la sentencia: 7. **Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. (...)**"

En consecuencia, en aplicación del citado tipo penal, solicito además se imponga al acusado la pena de **INHABILITACION** de suspensión por el mismo tiempo solicitado para la pena privativa de libertad, esto es **de 02 años y 04 meses, para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo**, conforme al artículo 36º numeral 7) del Código Penal.

VIII. MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL:

Que, de conformidad con lo prescrito por el Artículo 92º del Código Penal, todo delito acarrea como consecuencia no sólo la imposición de una pena, sino también puede dar lugar al surgimiento de

responsabilidad civil por parte del autor; es así, que en aquellos casos en los que la conducta del agente produce un daño, debe regir el principio del daño causado, es decir, tener en cuenta la repercusión de la conducta incriminada en la víctima, por cuya razón la reparación civil debe de alguna manera tender a compensar y resarcir dicho agravio, fijándose prudencialmente de acuerdo a la magnitud del mismo,

El Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116 de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de la República del 13 de octubre del 2006, en su fundamento 8°, define que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Asimismo, en su fundamento 9°, define; "**Los delitos de peligro** -especie de tipo legal según las características externas de la acción - pueden definirse como aquellos en los que no se requiere que la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en *peligro* de sufrir la lesión que se quiere evitar [el *peligro* es un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su objeto de referencia es un bien jurídico, aunque su fundamento, además de normativo, también se basa en una regla de experiencia o de frecuente que es, a su vez, sintetizada en un tipo legal], sea cuando se requiere realmente la posibilidad de la lesión -*peligro concreto*- o cuando según la experiencia general representa en sí misma un peligro para el *objeto protegido* -*peligro abstracto*-. Los primeros son, siempre, delitos de resultado, y los otros son delitos de mera actividad."

A partir de lo expuesto, cabe establecer si los delitos de peligro pueden ocasionar daños civiles y, por tanto, si es menester fijar la correspondiente reparación civil, más allá de las especiales dificultades que en estos delitos genera la concreción de la responsabilidad civil. Como se ha dicho, el daño civil lesiona derechos de naturaleza económica y/o derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, de las personas. Por consiguiente, aún cuando es distinto el objeto sobre el que recae la lesión en la ofensa penal y en el daño civil, es claro que, pese a que no se haya producido un resultado delictivo concreto, es posible que existan daños civiles que deban ser reparados.

En el presente caso, el acusado Jaime Quispe Callachi se encuentra en el tercer periodo de alcoholemia - Ebriedad, por contar con 1.50 gramos de litro de alcohol por litro de sangre, por lo que de manera prudencial y proporcional **SE SOLICITA QUE SE IMPONGA AL ACUSADO AL PAGO DE S/1,500.00 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) POR CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL**, la que se deberá pagar a favor del agraviado, representado por el Estado - Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

IX. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN:

a) Testigo:

TESTIGO	S3 PNP ARMANDO RIVAS SAMATELO
Domicilio Laboral	Notificar por intermedio de la Región Policial Arequipa
Extremos a declarar	El testimonio indicará la forma y circunstancias de cómo fue intervenido el hoy acusado Jaime Quispe Callachi, conduciendo en estado de ebriedad el vehículo automóvil de placa de rodaje V6V-278. UTILIDAD: Probará la intervención realizada al acusado cuando éste se encontraba conduciendo vehículo motorizado en estado de ebriedad. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
TESTIGO	CAPITAN SPNO MABEL DALIA HINOSTROZA APAZA
Domicilio Laboral	Policlinico PNP "Arequipa"

Extremos a declarar

Explicará el contenido y las conclusiones que arribó en el Certificado de Dosaje Etílico N°0030-0005867 (B-004925), efectuado en la muestra extraída al acusado Jaime Quispe Callachi.

UTILIDAD: Acreditará la materialidad del delito de Conducción de Vehículo en Estado de Ebriedad y que el acusado el día de los hechos estuvo conduciendo el vehículo automotor bajo los efectos del alcohol.

PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación.

CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.

Ofreciéndose asimismo el Informe Pericial de Dosaje Etílico a efecto que sea agregado al expediente judicial conforme al Art. 136° numeral d) del C.P.P., y se proceda en caso sea necesario conforme a lo previsto por el Art. 383 numeral 1) literal c) del C.P.P.

b) Prueba Documental:

PRUEBA DOCUMENTAL	ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2018
Información que proporciona	En la cual se detalla la intervención policial efectuada al acusado Jaime Quispe Callachi, en circunstancias que conducía el vehículo de placa de rodaje V6V-278, en estado de ebriedad. UTILIDAD: Acreditará la intervención del acusado por parte de personal policial. PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	OFICIO N°49567-2019-RDJ-WEB-CSJAR-PJ, EMITIDO POR EL COORDINADOR REGISTRO JUDICIAL AREQUIPA.
Información que proporciona	Utilidad: Informa sobre el resultado negativo de antecedentes penales del acusado; sin embargo se verifica que el mismo registra en el expediente judicial N°422-2012 2do Juzgado Unipersonal – Paucarpata, una Sentencia Condenatoria de fecha 21-01-2014 con 01 de pena privativa de libertad condicional, cancelada el 20-04-2015. UTILIDAD: Determinará que el imputado dentro del plazo de cinco años ha cometido el mismo delito hasta en tres oportunidades PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.
PRUEBA DOCUMENTAL	REPORTE DE CASOS DEL MINISTERIO PUBLICO
Información que proporciona	Que, acredita que el imputado registra los casos N°1506014509-2013-86-0 y N°1506014507-2011-1216-0 por el mismo delito Contra la Seguridad Pública – Peligro Común en su modalidad de Conducción en Estado de Ebriedad, y donde aparece que ha sido sentenciado y se ha dictado un auto de sobreseimiento del caso. UTILIDAD: Determinará que el imputado dentro del plazo de cinco años ha cometido el mismo delito hasta en dos oportunidades PERTINENCIA: Tiene relación directa con el hecho materia de acusación. CONDUCENCIA: Es idónea y no se encuentra prohibida por ley.

X. MEDIDAS DE COERCIÓN P

Contra del imputado se ha dictado medida de comparecencia simple.

POR LO EXPUESTO:

Solicito a usted señorita Juez, acceder al presente requerimiento y conferir el trámite correspondiente.

Primer Otrosí: Se hace de conocimiento que para efectos de notificaciones a las partes sus domicilios son:

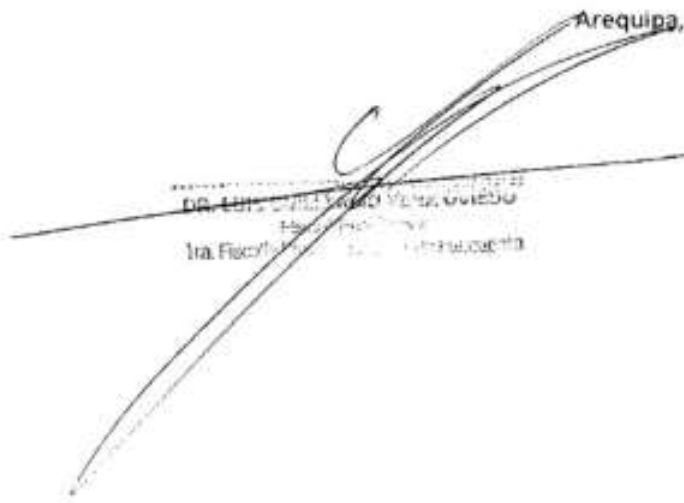
- **Imputado:** JAIME QUISPE CALLAQCHI tiene como **domicilio real** en Av. Colonial N°701, Paucarpata, Arequipa, Arequipa; con **domicilio procesal** en Av. Berlin N°301, Hunter, siendo su abogado defensor Julio Cesar Aro Madariaga con teléfono de contacto 959335465 y casilla electrónica N°34937.

- **Agraviado:** EL ESTADO, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por su Procurador Público Eugenio Rivera Garcia, quien tiene fijado su **domicilio real** en el Jr. Zorritos N°1203 - Lima, **casilla electrónica SINOE 891**, con teléfonos de coordinación 6157800 #1606/988030969/963750764.

Segundo Otrosí: Solicito al juzgado, se tenga en cuenta, que se cumple con adjuntar ejemplares de la acusación, a fin de que sean notificados a las partes.

/bstg

Arequipa, 13 de junio del 2019.


Juzgado de la Familia de Arequipa
Ira. Fiscal
Ira. Fiscal

2° JUZ. PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA

EXPEDIENTE : 06202-2019-33-0401-JR-PE-01
JUEZ : RODRIGUEZ GARCIA JUDY JENNY
ESPECIALISTA : ARCE CARPIO ROSARIO
MINISTERIO PUBLICO : PRIMERA FISCALIA PPCP LUIS GUILLERMO VERA OVIEDO CARP FISCAL
TURNO ,
IMPUTADO : QUISPE CALLACHI, JAIME
DELITO : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O DROGADICCIÓN.
AGRAVIADO : EL ESTADO ,

Resolución Nro. 06

Arequipa, dos mil veintiuno,
veintitrés de marzo.-

DE OFICIO: A fin de poder generar el boletín electrónico e inscripción en el Registro Judicial, se emite la presente resolución. -----

VISTOS: Los autos en el presente proceso penal, y; -----

PRIMERO.- Que, mediante sentencia, de fecha tres de diciembre del dos mil veinte, se declara a **JAIME QUISPE CALLACHI**, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, como **AUTOR** del delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, delito previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, en agravio de la **Sociedad representada por el Estado** a través de la procuraduría pública del **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**; y como tal: **Le IMPONGO DOS AÑOS de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la cual conforme al artículo 52° del Código Penal se convierte a(104) ciento cuatro jornadas de prestación de servicio comunitario**, la cual será cumplida conforme lo establezca la oficina del medio libre del Instituto Nacional Penitenciario para cuyo efecto se emitirá el oficio correspondiente, asimismo, ante el incumplimiento de una sola de las jornadas de prestación de servicios que se le ha impuesto se le revocará la conversión de pena y deberá de cumplir el sentenciado la pena privativa de libertad efectiva que corresponda con el descuento respectivo de realizarse el mismo; así mismo se le impone la copenalidad de inhabilitación en forma de suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años en relación a la conducción de cualquier tipo de vehículo motorizado; fijándose el monto de reparación civil.
SEGUNDO: Que, el artículo cuatrocientos uno del Código Procesal Penal, establece que "Al concluir la lectura de sentencia, el Juzgador preguntará a quien corresponda si interpone recurso de apelación...". Siendo que en el presente proceso se ha emitido sentencia de conformidad aprobando los acuerdos arribados entre las partes declarándose consentida en la misma audiencia, debe procederse a declarar consentida la sentencia indicada en el considerando precedente. Por lo que estando a lo expuesto; **SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA** la sentencia de fecha tres de diciembre del dos mil veinte. **REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.** -----

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA
SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE PAUCARPATA



Resolución N°05

En la ciudad de Arequipa, siendo los tres días de diciembre del año dos mil veinte, la señora magistrada **Judy Jenny Rodríguez García**, a cargo del Segundo Juzgado Unipersonal de Paucarpata, luego de realizar el juicio oral, público, contradictorio en audiencia única de proceso inmediato, ha emitido la siguiente:

SENTENCIA Nro. 356- 2020

I. PARTE EXPOSITIVA

VISTOS Y OÍDOS

Primero.- Identificación de Proceso

Se trata de la causa signada como expediente número **6202-2019**, seguido a **JAIME QUISPE CALLACHI**, por el delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, en agravio de la **Sociedad representada por el Estado** a través de la procuraduría pública del **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**.

Segundo.- Identificación del Acusado

Se juzga a **JAIME QUISPE CALLACHI** con DNI 44930453, con domicilio en Calle Melgar S/N a una cuadra del colegio Señor del Espíritu Santo del distrito de Chiguata, provincia y departamento de Arequipa, nacido el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete, hijo de Alejandro y Juana, natural de Arequipa, con grado de instrucción secundaria completa.

Tercero.- Identificación de la Agravada

Se ha considerado a la **Sociedad representada por el Estado** a través de la procuraduría pública del **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**.

Cuarto.- Delimitación de la Imputación

El Ministerio Público, como titular de acción penal pública y por ende encargado de establecer la tesis fáctica materia de proceso, en el marco de la requisitoria escrita y oralizada en audiencia en su respectivo alegato oral, ha efectuado la siguiente imputación al acusado.

4.1. Hechos Imputados:

Circunstancias Precedentes: Con fecha 09 de junio del 2019, aproximadamente a las 18:30 horas, Personal Policial al mando del Alférez PNP Luis Carranza Matos, venía realizando un Operativo Policial por la Av. Socabaya cuadra 7 (altura de la Quebrada Coscollo), distrito de Socabaya, Arequipa.

Circunstancias Concomitantes: Es en esas circunstancias, se interviene el vehículo automóvil de placa de rodaje V6V278, marca Hyundai, color azul, conducido por el imputado Jaime Quispe Callachi, a quien, al solicitarle la documentación correspondiente, el mismo presentaba visibles síntomas de ebriedad (aliento alcohólico), motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría PNP de Ciudad mi Trabajo.

Circunstancias Posteriores: Luego de la intervención policial, al momento de practicarse la prueba de intoxicación en sangre al imputado, se obtuvo como resultado 1.50 g/l (un gramo con cincuenta centigramos de alcohol por litro de sangre), conforme al Certificado de Dosaje Etílico N90030-0005867 (B-004925).

Estableciéndose así, que el imputado en forma dolosa y a sabiendas de su estado de ebriedad condujo vehículo motorizado, generando un peligro a la sociedad.

4.2. Calificación Jurídica

Los hechos expuestos han sido tipificados por el representante del Ministerio Público como delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal.

4.3. Pretensión Penal

El Ministerio Público solicitó se imponga al acusado **02 años y 04 meses** de pena privativa de la libertad e inhabilitación de suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo.

4.4. Pretensión Civil

El Ministerio Público ha solicitado por concepto de reparación civil la suma de S/ 1,500.00 soles a favor de la parte agraviada.

4.5. Defensa Técnica y Autodefensa del Acusado

Reconociendo la responsabilidad penal en los hechos materia de imputación, así como la pretensión civil, se acogió a la conclusión anticipada.

Quinto.- Del Acuerdo Propuesto:

5.1. El Ministerio Público y la defensa del procesado hicieron conocer a este Despacho que habían llegado a un acuerdo sobre la pena, la misma que consiste en **DOS AÑOS de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la cual conforme al artículo 52° del Código Penal se convierte a (104) ciento cuatro jornadas de prestación de servicio comunitario**, la cual será cumplida conforme lo establezca la oficina del medio libre del Instituto Nacional Penitenciario para cuyo efecto se emitirá el oficio correspondiente, asimismo, ante el incumplimiento de una sola de las jornadas de prestación de servicios que se le ha impuesto se le revocará la conversión de pena y deberá de cumplir el sentenciado la pena privativa de libertad efectiva que corresponda con el descuento respectivo de realizarse el mismo. Asimismo, se le impondrá la copenalidad de inhabilitación en forma de suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años en relación a la conducción de cualquier tipo de vehículo motorizado.

5.2. Asimismo, las partes convinieron el monto de la reparación civil a favor de la parte agraviada en **S/.1,500.00(MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)** la cual será cancelada de la siguiente forma: En el término de veinticuatro horas a partir de la fecha deberá cancelar la suma de S/.500.00 soles, el último día hábil del mes de diciembre de 2020 la suma de S/.500.00 soles y el último día hábil de enero del 2021 la suma de S/.500.00 soles, todo ello mediante depósitos judiciales a nombre del Banco de la Nación debiendo el sentenciado hacer llegar las constancias de pago al Juzgado para su endose y cobro respectivo.

Sexto.- Itinerario Procesal

En mérito al auto de citación a juicio se citó a los sujetos procesales a juicio oral. Se llevó el juzgamiento con la presencia del acusado **JAIME QUISPE CALLACHI**. Instalada la audiencia, se escuchó el alegato de apertura del Ministerio Público y siendo que al tomar la palabra la defensa técnica del imputado, señaló abstenerse de tal exposición manifestando la intención de dicha parte procesal de acogerse a la conclusión anticipada. Así, al inicio del juicio y luego que se instruyera al acusado de sus derechos, al preguntársele si admitía ser partícipe en calidad de autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; éste, previa consulta con su defensa técnica, aceptó los hechos objeto de acusación fiscal, así como su responsabilidad penal, también aceptó la responsabilidad civil. Ante ello, se declaró la conclusión anticipada del juicio, se procedió a consultar a las partes respecto de algún acuerdo sobre la pena y reparación civil, siendo que los mismos acordaron todos los extremos de la pena y la reparación civil. Siendo ello así, el estado de la causa es el de expedirse sentencia la cual, en efecto, se emite el día de la fecha.

II. PARTE CONSIDERATIVA

Primero.- De la Conclusión Anticipada

El artículo 427° del Código Procesal Penal regula la conclusión anticipada del juicio; institución que ha sido objeto anteriormente de sentencia vinculantes, tales como: el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008/CJ116 y el Acuerdo Plenario 05-2009-CJ-116 que, si bien este último está referido a la terminación anticipada, los fundamentos sobre el control de legalidad y proporcionalidad atañen a la conclusión anticipada. No obstante, la presencia del juzgador no es pasiva, para efectos de la homologación de la "conformidad" ya que, existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer soberanamente; si bien, está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos del título de la imputación, los cuales se relativizan.

Segundo.- Ley Penal Aplicable

2.1. Conforme a la acusación, es aplicable el tipo penal de **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBriedAD**, previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal.

2.2. El texto normativo de tal numeral, prevé:

"Artículo 274.- conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad.

El que encontrándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en porción mayor de 0.5 gramos-litro o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce, opera o maniobra vehículo motorizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuenta y dos jornadas a ciento cuatro jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 7.

2.3. Para la configuración del ilícito, conforme a los hechos materia de imputación en el presente caso, y que han sido oralizados por la titular de la acción penal, se requiere que el agente haya conducido un vehículo motorizado en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en porción mayor de 0.5 gramos-litro.

Tercero.- Juicio de Subsunción

3.1. La conducta del acusado se adecua objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito antes referido tal como han sido expuestos los cargos por el Ministerio Público -los cuales son inmodificables- por cuanto

se ha demostrado que **JAIME QUISPE CALLACHI** estuvo conduciendo en estado de ebriedad vehículo automóvil de placa de rodaje V6V278, marca Hyundai, color azul por el cual fue trasladado a la Comisaría PNP de Ciudad mi Trabajo, al momento de practicarse la prueba de intoxicación en sangre al imputado, se obtuvo como resultado 1.50 g/l (un gramo con cincuenta centigramos de alcohol por litro de sangre), conforme al Certificado de Dosaje Etílico N90030-0005867 (B-004925). Ello así se tiene del reconocimiento efectuado de manera expresa, libre y voluntaria por el acusado, en audiencia y previa consulta con su defensa técnica, al aceptar la responsabilidad de los hechos materia de imputación, ello conforme a la naturaleza de la conformidad en juicio.

3.2. No se ha alegado ni probado causa que justifique el actuar típico del acusado o que excluya su culpabilidad.

3.3. Por ello concurren todos los elementos del tipo, los mismos que han sido realizados con conocimiento y voluntad conforme se desprende de los hechos acreditados en autos, concurriendo además el elemento subjetivo, conforme al reconocimiento efectuado por el acusado.

3.4. En consecuencia, la conducta del encausado deviene en típica, antijurídica y culpable.

Cuarto.- Individualización de la Pena

4.1. El principio de Proporcionalidad, es aquel principio que exige al juzgador verificar que la pena guarde una relación de correspondencia con el injusto cometido por el agente, se encuentra reconocido en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, el que debe ser entendido como la correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho y la pena que corresponde aplicar; por tanto constituye un límite al *IUS PUNIENDI*, en tanto exige un juicio de ponderación entre la carga coactiva de la pena y el fin perseguido por la conminación legal. Esto significaría que el principio de proporcionalidad debe guardar relación conforme a la culpabilidad, pero no siempre de acuerdo al injusto la culpabilidad puede coincidir con la misma, por cuanto esta puede resultar mayor a la culpabilidad concreta; entiéndase que los criterios para establecer la proporcionalidad deben atender aquellos vinculados al injusto, importancia del rango del bien jurídico protegido, grado de lesión del mismo, impacto social y los diferentes medios de comisión del hecho, entre otros aspectos, así, el juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad. En el caso que nos ocupa, se evidencia que el actuar del acusado **JAIME QUISPE CALLACHI**, es una conducta gravosa en relación al bien jurídico protegido a través de la conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, referido a la parte agravada, actividad ilícita que constituye un hecho reprochable.

4.2. La Fiscalía ha acordado con la defensa del acusado **DOS AÑOS de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la cual conforme al artículo 52° del Código Penal se convierte a (104) ciento cuatro jornadas de prestación de servicio comunitario**, la cual será cumplida conforme lo establezca la oficina del medio libre del Instituto Nacional Penitenciario para cuyo efecto se emitirá el oficio correspondiente; asimismo, ante el incumplimiento de una sola de las jornadas de prestación de servicios que se le ha impuesto se le revocará la conversión de pena y deberá de cumplir el sentenciado la pena privativa de libertad efectiva que corresponda con el descuento respectivo de realizarse el mismo y la copenalidad de inhabilitación en forma de suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años en relación a la conducción de cualquier tipo de vehículo motorizado. Para lo cual, se procede a realizar la determinación judicial de la pena, en base a los siguientes parámetros.

4.3. Para el caso de autos, se toma en cuenta los criterios fundadores de la pena establecidos en el artículo 45°, 45°-A y 46 modificados e incorporados al Código Penal por la Ley N° 30076.

4.4. Se procede a verificar criterios previstos en el artículo 45°-A señalado: **a) Espacio punitivo de determinación de pena básica:** El delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, prevé una pena no menor de seis meses ni mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cincuenta y dos jornadas a ciento cuatro jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36 inciso 7, en la modalidad de suspensión de su licencia de conducir por el plazo de dos años, en tal sentido corresponde hacer el análisis de la pena. **b) Determinación de pena concreta:** presenta circunstancias agravante cualificada (habitual), no se advierte la existencia de circunstancias atenuantes genéricas por lo que la pena se ubicará por encima del tercio superior es decir mayor de dos años, por lo que la fiscalía solicitó dos años y cuatro meses, quantum al que, conforme a lo sostenido por la titular de la acción penal, se le ha descontado 1/7 por la premialidad correspondiente a la conclusión anticipada, quedando la pena en dos años la cual conforme al artículo 52 del Código Penal se convierte a ciento cuatro jornadas de servicios comunitarios, considerando la prognosis positiva del agente, además se ha comprometido a cancelar de la reparación civil; y, del análisis de los antecedentes, conforme se tiene anotado teniéndose en cuenta las condiciones personales del actor así como las circunstancias del evento delictivo en el que ha participado, la naturaleza del mismo, y merituándose finalmente lo previsto en el Acuerdo Plenario Nro. 05-2008-CJ/116 se concluye que debe ser aprobado.

Quinto.- Determinación de la Reparación Civil

5.1. El objeto civil se rige por los artículos 11° y 12° del Código Procesal Penal y 93° al 101° del Código Penal, precepto éste último que nos remite a las disposiciones correspondientes del Código Civil.

5.2. En el caso que nos ocupa se tiene que las partes han fijado la Reparación Civil a favor de la parte agraviada en el monto de **S/.1,500.00(MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)** la cual será cancelada de la siguiente forma: en el término de veinticuatro horas a partir de la fecha deberá cancelar la suma de S/.500.00 soles, el último día hábil del mes de diciembre de 2020 la suma de S/.500.00 soles y el último día hábil de enero del 2021 la suma de S/.500.00 soles, todo ello mediante depósitos judiciales a nombre del Banco de la Nación debiendo el sentenciado hacer llegar las constancias de pago al Juzgado para su endose y cobro respectivo. Siendo que el monto establecido por tal concepto resulta razonable, estando a los extremos anotados y que el mismo no ha sido materia de controversia, debe ser aprobado.

Sexto.- Pronunciamiento sobre las costas

El artículo 497.5° del Código Procesal Penal establece que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz, siendo que, en el presente caso, al haber concluido el proceso por "conformidad", no procede la imposición de costas.

III. PARTE RESOLUTIVA

Por estas consideraciones administrando justicia a nombre del pueblo de quien emana dicha facultad,

FALLO:

Primero.- APROBANDO mediante la presente sentencia de conformidad, los acuerdos arribados entre el acusado debidamente asesorado por la defensa de elección y el Ministerio Público, durante el juicio oral; en consecuencia.

Segundo.- DECLARO a JAIME QUISPE CALLACHI, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, como **AUTOR** del delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común por **CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD**, delito previsto en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal, en agravio de **la Sociedad representada por el Estado** a través de la procuraduría pública del **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**.

Tercero.- LE IMPONGO DOS AÑOS de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva la cual conforme al artículo 52° del Código Penal se convierte a(104) ciento cuatro jornadas de prestación de servicio comunitario, la cual será cumplida conforme lo establezca la oficina del medio libre del Instituto Nacional Penitenciario para cuyo efecto se emitirá el oficio correspondiente, asimismo, ante el incumplimiento de una sola de las jornadas de prestación de servicios que se le ha impuesto se le revocará la conversión de pena y deberá de cumplir el sentenciado la pena privativa de libertad efectiva que corresponda con el descuento respectivo de realizarse el mismo

Cuarto.- Se le impone la copenalidad de inhabilitación en forma de suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años en relación a la conducción de cualquier tipo de vehículo motorizado .

Quinto.-FIJO el monto de la **REPARACIÓN CIVIL** a favor de la parte agraviada en **S/.1,500.00(MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)** la cual será cancelada de la siguiente forma: En el término de veinticuatro horas a partir de la fecha deberá cancelar la suma de S/.500.00 soles, el último día hábil del mes de diciembre de 2020 la suma de S/.500.00 soles y el último día hábil de enero del 2021 la suma de S/.500.00 soles, todo ello mediante depósitos judiciales a nombre del Banco de la Nación debiendo el sentenciado hacer llegar las constancias de pago al Juzgado para su endose y cobro respectivo.

Sexto.- DISPONGO que no corresponde fijar el pago de costas en el presente proceso.

Séptimo.- MANDO que consentida o ejecutoriada la presente, se cursen las comunicaciones correspondientes para su inmediato y estricto cumplimiento, y por esta mi sentencia, así me pronuncio, mando y firmo en audiencia pública de la fecha. **Regístrese y Comuníquese. -**